21

Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa

diciembre
2010

www.ciriec-revistajuridica.es

CIRIEC españa

ISSN.: 1577-4430

ISSN (ed. electr.)
1989-7332

CIRIEC
españa

Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa

nº 21 diciembre 2010

http://www.ciriec-revistajuridica.es

Patrocina:

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Colabora:

CIDEC Centro de Información y Documentación Europea de la Economía Pública, Social y Cooperativa.

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa

CIRIEC-España
Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa

DIRECTOR
D. Francisco Vicent Chuliá *(Universitat de València)*

DIRECTORES ADJUNTOS
D. Jesús Olavarría Iglesia *(Universitat de València)*
Dña. Gemma Fajardo García *(Universitat de València)*

CONSEJO ASESOR

D. Justino Duque Domínguez *(Universidad de Valladolid)*
D. Juan Ignacio Font Galán *(Universidad de Córdoba)*
D. Jose Antonio Gómez Segade *(Universidad de Vigo)*
D. José María Suso Vidal *(Universidad de San Sebastián)*
D. José Miguel Embid Irujo *(Universitat de València)*
D. Vicente Cuñat Edo *(Universitat de València)*
Dña. Maria Luisa Llobregat Hurtado *(Univ. de Alicante)*
D. Anxo Tato Plaza *(Universidad de Vigo)*
D. Manuel Paniagua Zurera *(Universidad de Córdoba)*
D. Pedro Portellano *(Univ. Autónoma de Madrid)*
D. José Ramón Salelles Climent *(Univ. Pompeu Fabra)*
D. Carmelo Lozano *(Universitat de València)*
D. Marco Antonio Rodrigo Ruiz *(Univ. del País Vasco)*
D. Federico López Mora *(Universitat de València)*
D. Juan Lopez Gandía *(Universitat de València)*
D. Santiago González Ortega *(Universidad Carlos III)*
D. Salvador del Rey Guanter *(Universitat Pompeu Fabra)*
D. Narciso Paz Canalejo *(Abogado)*
D. Alfonso Vázquez Fraile *(Confederación de Cooperativas de Viviendas de España - CONCOVI)*
D. Santiago Merino Hernández *(Asesor Jurídico del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi)*
D. Jordi Agustí i Juliá *(Magistrado del TSJ de Cataluña)*
D. José Enrique Martín Moya *(Caja Rural de Valencia)*
D. Manuel Areán Lalín *(Grupo Coop. Lechero LEYMA)*
D. Ignasi Faura Ventosa *(Abogado, HISPACOOP)*

SECRETARÍA DE REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Ana Martínez Benlliure
CIDEC - Universitat de València

REDACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CIRIEC-España
Campus Els Tarongers. Facultad de Economía. Despacho 2p21. 46022 VALENCIA
Tel.: 96 356 22 48 / 96 382 84 89-91 - Fax: 96 382 84 92

MAQUETACIÓN
Sergio Rubio

IMPRESIÓN
GRÁFICAS PAPALLONA Sdad. Coop. V., C/ Pio XI, 40-bajo 46014 - VALENCIA Tel. 96 357 57 00

PORTADA
ESTUDIO GRÁFICO DE PUBLICIDAD, SL. C/ Xátiva, 14-60ª 46002 - VALENCIA - Tel. 96 394 32 25

©: CIRIEC-ESPAÑA

I.S.S.N.: 1577-4430
I.S.S.N. (edición electrónica): 1989-7332
Depósito Legal: V-1886-1995
http://www.ciriec-revistajuridica.es/

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa es una **revista anual**, arbitrada e indexada en las siguientes bases de datos: LATINDEX, IN-RECJ, DIALNET, ISOC, COMPLUDOC, CIRIEC-Internacional y CIDEC

SUMARIO

ARTÍCULOS

- Principales aspectos jurídicos del derecho de información del socio en la cooperativa. Por **María del Pino Domínguez Cabrera** 9
- El derecho de reembolso del socio en caso de baja y el concurso de las sociedades cooperativas. Por **Carlos Vargas Vasserot** 37
- Aplicación del régimen de operaciones vinculadas a las operaciones cooperativas-socio. Las operaciones cooperativizadas. Por **Miguel Ángel Sánchez Huete** 59
- Empresas de inserción: razones para una fiscalidad específica. Por **Mª Pilar Bonet Sánchez** 87
- Luces y sombras de la reforma de la Ley de Sociedades Laborales. Por **Mª del Mar Andreu Martí** 119
- Las aportaciones no dinerarias en las sociedades agrarias de transformación. Un caso singular: valoración por remisión a los criterios contenidos en las leyes fiscales sobre comprobación de valores. Por **Miguel Ángel Luque Mateo** 145
- Respuesta del ordenamiento jurídico español ante la realidad de la Sociedad Cooperativa Europea. Por **Rosalía Alfonso Sánchez** 169

RESEÑA DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL. JULIO 2008 - JUNIO 2009. Por **Gemma Fajardo García, Jesús Olavarría Iglesia, Rocío Martí Lacalle** y **Consuelo Alcover**

Índice sistemático 201
I. Cooperativas 206
II. Sociedades Laborales 224
III. Mutualidades 227
IV. Cajas de Ahorro 231
Índice cronológico 234

RESEÑA DE LEGISLACIÓN SOBRE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL. Por **Gemma Fajardo García**

I. Relación sistemática de disposiciones: Julio 2009 - Julio 2010 241

II. Disposiciones de mayor interés
   - Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas 263
   - Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón 337
   - Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (Capítulo IV) 363
   - Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre 367

- Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración 375

DOCUMENTACIÓN

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Distintos tipos de empresa». 1 de octubre de 2009 379

Índice acumulado 389
Instrucciones para los autores 407
Evaluadores 408
CIDEC 409
Observatorio Español de la Economía Social 410

ARTÍCULOS

DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino
Principales aspectos jurídicos del derecho de información del socio en la cooperativa

VARGAS VASSEROT, Carlos
El derecho de reembolso del socio en caso de baja y el concurso de las sociedades cooperativas

SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel
Aplicación del régimen de operaciones vinculadas a las operaciones cooperativas-socio. Las operaciones cooperativizadas

BONET SÁNCHEZ, Mª Pilar
Empresas de inserción: razones para una fiscalidad específica

ANDREU MARTÍ, Mª del Mar
Luces y sombras de la reforma de la Ley de Sociedades Laborales

LUQUE MATEO, Miguel Ángel
Las aportaciones no dinerarias en las SAT. Un caso singular: valoración por remisión a los criterios contenidos a las leyes fiscales sobre comprobación de valores

ALFONSO SÁNCHEZ, Rosalía
Respuesta del ordenamiento jurídico español ante la realidad de la Sociedad Cooperativa Europea

PRINCIPALES ASPECTOS JURÍDICOS DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL SOCIO EN LA COOPERATIVA

María del Pino Domínguez Cabrera
Doctora en Derecho
Profesora del área de Derecho Mercantil
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN

Es objeto de estudio en el presente análisis de los aspectos jurídicos del ejercicio del derecho de información del socio en la cooperativa. El tratamiento intrasocietario del derecho de información del socio de una cooperativa queda concebido como presupuesto necesario para la toma de decisiones de manera responsable a la vez que de instrumento de control por parte del socio, conjugado con los intereses de la cooperativa, tanto desde el punto de vista de la adecuada reserva de determinadas informaciones como por razones de funcionalidad. Así, este derecho de información se manifiesta en su doble vertiente; a) de derecho a obtener determinadas informaciones documentales preparatorias de la Asamblea General, a partir de la convocatoria de la misma, obteneniendo, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y b) de derecho a solicitar cuanta información de naturaleza netamente económica y social precise. Ahora bien, este derecho de información establece también las cautelas a favor del socio, articulando fórmulas de control garantista, al reconocerse la obligación por parte del órgano de admnistración de suministrarla.

PALABRAS CLAVE: Economía social, cooperativa y socios, derecho del socio en la cooperativa, derecho de información del socio en la cooperativa

CLAVES-DESCRIPTORES: K000, K100, K300, K390

MAIN LEGAL ASPECTS OF THE COOPERATIVE MEMBER'S RIGHT TO INFORMATION

ABSTRACT

It is being studied in this analysis of the legal aspects of the right information in the cooperative partner. Treatment Information law partner of a cooperative is conceived as a necessary precondition for making decisions in a responsible manner while monitoring tool by the partner, combined with the interests of the cooperative, both in of view of adequate confidentiality of certain information and for reasons of functionality. Thus, this right to information is evident in its dual, a) the right to obtain certain factual information in preparation for the General Assembly from convening the same, obtaining, the documents must be submitted for approval the same, and b) the right to request any information of a purely economic and social needs. However, this right to information also sets out safeguards for the partner, articulating control formulas guarantees, in recognition of the obligation by the Administrative expenditure authority to provide it.

KEY WORDS: Social economy, cooperative partners, right partner in the cooperative, right to information in the cooperative partner

KEY-WORDS: K000, K100, K300, K390

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. EL DERECHO DE INFORMACIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27/1999, DE 16 DE JULIO, DE COOPERATIVAS. 3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE INFORMACIÓN 4. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

La regulación de las sociedades cooperativas, a través de la Ley 27/1999, de 16 de julio (en adelante LCo), ha pretendido adaptar los postulados y principios cooperativistas (Divar, 1987, Borjabad, 1993, Buendía Martínez, 2000, Miranda, 2006, Cubedo, 2007)[1] a las reglas del mercado, *potenciando la integración económica y laboral de los españoles en el mercado con los requisitos de rentabilidad y competitividad*[2]. Es cierto, que dicho objetivo ha exigido la flexibilización de su régimen económico, pero también de su régimen societario[3], que en definitiva se plantea como una necesaria reforma que ya desde el año 1989 se había realizado en el Derecho de sociedades con el fin de adaptarlo a las directivas europeas.

Al abordar el estudio de uno de los aspectos de la LCo cual es, el derecho del socio cooperativista a recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de su obligaciones[4], no se debe perder de vista el carácter

1. Sobre esta cuestión mencionamos los estudios realizados por: DIVAR, J (1987): *Régimen jurídico de las sociedades cooperativas*, Bilbao; BORJABAD, P.J (1993); *Manual de Derecho Cooperativo*, Barcelona, ; BUENDÍA, I. (2000): La participación democrática: ¿un valor en extinción en las sociedades cooperativas?", *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 34, abril, pp. 7-21, dirección URL: http://www.ciriec-revistaeconomia.es/; GÓMEZ, P., y MIRANDA, M. (2006); Sobre el régimen económico y financiero particular de las sociedades cooperativas, *Revista de Estudios Cooperativos,* nº 90, tercer cuatrimestre, pp. 28-56, dirección URL: http://www.ucm.es/info/revesco/; CUBEDO, M. (2007): "El régimen económico de las sociedades cooperativas: situación actual y apuntes para una reforma", *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 58, agosto, pp. 161-187, dirección URL: http://www.ciriec-revistaeconomia.es/ .

2. Vid. Exposición de Motivos de la LCo.

3. Vid. Exposición de Motivos de la LCo, que señala que la flexibilidad se manifiesta en el reconocimiento a las mismas de la posibilidad de autorregularse, renunciando al exceso de reglamentación que produce como consecuencia la dificultad en el desarrollo de la actividad societaria.

4. La condición de socio de toda sociedad conlleva una serie de derechos y de obligaciones para sus miembros, que conforman el estatus jurídico del socio, ciertamente, el estatus difiere de un tipo social a otro, en las cooperativas ese estatus legal, viene delimitado por contener un catálogo de derechos y obligaciones para los socios más amplio que en otros tipos de sociedades, que tiene su origen en los llamados principios cooperativos, entendidos como el conjunto de directrices extraídas de la propia experiencia cooperativa, que informan la vida de estas entidades, y que tienen una clara repercusión en la legislación coopera-

estatal de la misma[5], además, de advertir la abundancia de normas de carácter autonómico (Borjabad, 1993: 21-22)[6] y de excluir premeditadamente, del objeto de nuestro estudio, las referencias a la sociedad cooperativa europea, figura jurídica de más reciente creación que ha dejado en evidencia con las crecientes referencias que se hacen a las leyes nacionales, una falta absoluta de unidad en su régimen jurídico, variando de un estado miembro a otro, siendo revelador del acuciante problema de una necesaria y no conseguida armonización en la Unión europea de la legislación cooperativa (Alfonso, 2006:11-52, Paniagua, 2007)[7].

2. EL DERECHO DE INFORMACIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27/1999, DE 16 DE JULIO, DE COOPERATIVAS

El *derecho de información*, establecido de modo general como inherente a la condición legítima de socio encuentra su concreción jurídica cuando el artículo 16.2 g) LCo señala:

---

tiva, lo que ha llevado a discutir su valor normativo como fuente del Derecho cooperativo vid. TRUJILLO, I.J. (2000): "El valor jurídico de los principios cooperativos: a propósito de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas", *Revista crítica de derecho inmobiliario,* año nº 76, nº 658, pp. 1329 y ss., los cuales son reelaborados periodicamente por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organismo no gubernamental que acoge a las Federaciones de Cooperativas de todo el mundo, su XXXI Congreso celebrado en Manchester en 1995, la ACI adoptó una Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que recoge una definición de cooperativa, una lista de valores del movimiento cooperativo (autoayuda, autorresponsabilidad, igualdad, honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social) y un conjunto revisado de los *principios cooperativos*: principio de adhesión voluntaria y abierta; principio de gestión democrática por parte de los socios; principio de participación económica de los socios; principio de autonomía e independencia; principio de educación, formación e información; principio de cooperación entre cooperativas; y principio del interés por la comunidad.

5. Vid. art. 2 LCo:" *La presente Ley será de aplicación:*

A) A las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal.

B) A las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla".

6. Vid. BORJABAD, P.J (1993); *Manual de Derecho Cooperativo*, cit., pp. 21-22.

7. Vid. El estudio realizado por ALFONSO, R.(2006); "El desarrollo normativo de la Sociedad Cooperativa Europea: propuestas de implantación", *Boletín de la Academia Vasca de Derecho,* Año 4, nº. 2, pp. 11-52, dirección URL: http://www.avd-zea.com/; PANIAGUA, M. (2007): "El estatuto de la sociedad cooperativa europea: el problema de su aplicación en España", *Revista de Economía Social*, nº 34, enero, dirección URL: http://www.economia-social.es.

«2. En especial tienen derecho a:
g. Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones«

Este *derecho de información* como consustancial a la condición de socio reviste carácter imperativo y debe ser entendido además, como un corolario necesario del ejercicio del derecho de voto, cuyo trasgresión comporta causa de nulidad[8]. Por lo tanto, este *derecho de información del socio*, hace referencia; (a) a la *información* a la que pueden acceder los socios con ocasión de la celebración de una Asamblea en la que se vaya a resolver tanto acerca del destino de las cuentas anuales y sus resultados, como en relación a otros asuntos no estrictamente económicos y (b) a la *información* sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. El legislador persigue garantizarle al socio, que ante la necesaria toma de una decisión, pueda contar adecuadamente, con el correspondiente conocimiento de todas aquellas circunstancias que le permitan formar razonablemente y con una antelación suficiente, un criterio, manifestándose este derecho entre otros, con el beneficio a obtener de forma rápida la información que legalmente viene estipulada. Por lo tanto, este derecho esencial *de información* de los socios[9] aparece articulado en función del derecho de voto, cuyo ejercicio por parte del socio exige disponer de toda la información que le permita participar activamente en la vida social mediante la emisión de su voto. Debe tenerse en cuenta que el *derecho a la información*, contenido en la LCo, es de *carácter material*, esto es, no basta con cumplir una serie de formalidades, sino que debe permitir al socio el tener conocimiento los más exacto posible de la situación de la sociedad, que es lo que justifica la nulidad de los

8. Vid. el art. 31 LCo.

9. A este respecto señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 en su Fundamento de Derecho cuarto: *"A lo que cabe añadir que el derecho esencial de información los socios y cooperativistas presenta un neto carácter instrumental, y en tal sentido puede calificarse de prestacional, en la medida en que se articula en función de otro derecho si cabe aun más esencial, cual es el de voto, cuyo adecuado ejercicio ha de garantizarse facilitando al socio o cooperativista toda la información necesaria que le permita formar su criterio y tomar parte activa en la vida social mediante la emisión de su voto con el debido fundamento. De ahí que no pueda acogerse la pretensión impugnatoria de los acuerdos a que se contrae la demanda en este proceso entre los que, se insiste no se encuentra el que se alude en el motivo de casación que ahora se estudia-, si no es con base en la vulneración del derecho de información del socio, y del correlativo deber de facilitarla del Consejo Rector de la entidad, en la medida en que le ha impedido tomar con criterio su decisión sobre las cuestiones objeto de tales acuerdos y emitir fundadamente su voto; y de ahí que no pueda atenderse, al margen de su carácter novedoso, a la alegación del recurrente, que se refiere al futuro ejercicio del derecho de información respecto de las cuestiones sobre las que versen unos también futuros e hipotéticos asuntos sometidos a la consideración y votación de la Asamblea, sin poderse conocer, por lo tanto, el verdadero alcance y trascendencia de la privación de la documentación de la entidad de cara al adecuado ejercicio del voto sobre tales asuntos, tanto más cuanto, como se ha dicho, la corrección jurídica del repetido Acuerdo no formaba parte del objeto de esta litis, y cuando, en fin, el socio cooperativista aquí recurrente había solicitado su baja en la cooperativa, lo que trasluce su intención de no seguir vinculado a la misma y de no participar, por tanto, en los asuntos propios de la vida social"(negrita nuestra).*

acuerdos tomados en Asamblea en los que la información dada hubiese sido *inexacta, o incompleta* como aquellos acuerdos en los que, de forma *torticera y desleal*, se hubiese incumplido; (i) el *derecho a la información* -por medio de la entrega de documentación insuficiente o inexacta- o (ii) impidiendo el acceso a tal *información*.

Este *derecho de información* del socio atendiendo a *los principios que inspiran el nacimiento de las cooperativas*; (i) base asociativa o societaria y de empresa mutualística (Vicent, 1995:185) (ii) funcionamiento democrático, (iii) y el tratamiento diferenciado de aquellos beneficios obtenidos por medio de su actuación económica en el tráfico mercantil, han permitido concluir que los derechos del socio de la cooperativa no deben diferir, en lo sustancial, de los del resto de las sociedades (Manrique Romero y Rodríguez Poyo, 1980), por ello, el reconocimiento de este *derecho de información*[10] es consecuencia del reconocimiento del mismo al accionista y socio en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada[11], así, su

10. Para una aproximación al estudio jurídico del derecho de información de los accionistas vid. ESTEBAN, G. (1994): "Derecho de información del accionista", en Alonso Ureba (coord.), Duque Domínguez (coord.), García Villaverde (coord.) y Sánchez Calero (coord.): *Derecho de sociedades anónimas* (en homenaje al profesor José Girón Tena), vol. 2, tomo 1, Madríd, pp. 175-254, CALBACHO, F. (1988): "El Derecho de información del accionista en la sociedad anónima", *Revista de Derecho mercantil,* nº 189-190, pp. 541-564, GARCÍA, R. (1991): "Derecho a la información del socio y del administrador (sobre la existencia de un derecho a la información de los miembros del Consejo de Administración)", *Cuadernos de Derecho y de Comercio,* diciembre, pp. 7-30, ROMERO, J. A. (2000): *El derecho de información documental del accionista*, Madrid, p. 49,

11. Señala el art. 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante LSA), que se ha visto afectado por la Ley 26/2003, de 17 de julio, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, lo siguiente:

> *"1. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas de una sociedad anónima cotizada podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general.*
>
> *Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.*
>
> *2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.*
>
> *3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales.*
>
> *4. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social".*

Por su parte, el art. 86 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante LSL), se concreta respecto del *derecho de información* sobre la contabilidad la formulación gené-

contenido básico es aplicable *mutatis mutandis* a las sociedades cooperativas (Vicent, 1995:181)[12].

Pero además, habrá de tenerse en cuenta que por mandato constitucional[13] las *Comunidades Autónomas* (en adelante CCAA), tras las competencias transferidas por el Estado, han quedado legitimadas para la creación normativa en materia de cooperativas, por lo que esto, se refleja en la configuración de un sistema legal cooperativo *especial*, que en atención al tratamiento dado al *derecho de información*, las CCAA abordan, con carácter general, incidiendo en aspectos que favorecen un mayor compromiso del socio con la actividad de la sociedad (Millán, 2003:30).

Por su parte, este *derecho de información*, ha quedado concretado jurisprudencialmente[14] afirmándose que el *"derecho de información social" es la facultad que, el mismo tiene atribuida por Ley, para obtener un correcto y debido conocimiento, lo más exacto posible, de la situación económica, patrimonial y financiera de la sociedad, así como los datos necesarios para calibrar y calificar la gestión social, y es este un derecho esencial no solo inderogable, sino, asimismo, irrenunciable, y, que desde luego su desconocimiento acarrea ineludiblemente la nulidad de los acuerdos de la junta, en que previo a su desarrollo, se ha negado a cualquier socio la información solicitada*.

---

rica del art. 51 LSL, distingue dos supuestos distintos de examen de la contabilidad, como manifestación específica del *derecho de información*: a) En su apartado primero se regula la obtención, en cualquier momento entre la convocatoria de la junta general y su celebración, de los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación, incluyendo además el informe de gestión y el de auditoria, si lo hubiere; b) En el apartado segundo se establece que, salvo disposición estatutaria en contra, en el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social, tienen derecho a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales. Por lo tanto, se trata de un doble derecho: (i) por un lado obtener copia de los documentos contables que se someten a aprobación, y (ii) por otro, examinar los soportes documentales de tal contabilidad, presentando un contenido de gran intensidad, puesto que aumenta el volumen de información de la minoría social al permitir el examen de los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, lo que supone la configuración de un derecho de información, o mejor aún, de examen y fiscalización, de mayor alcance que el previsto en el art. 112 de la LSA, en la que no existe una previsión semejante en la específica regulación de las cuentas anuales del capítulo VII de la LRL, eso sí sin perjuicio de las facultades que al accionista confiere el art. 205.2 LSA y la del art. 40 del Código de Comercio (en adelante CC).

12. En este sentido señala el profesor Vicent Chuliá que "el *derecho de información* pertenece a la *materia del Derecho de sociedades en sentido amplio*, es decir, el Derecho que regula no sólo todas las sociedades, civiles y mercantiles, sino todas las formas jurídicas de agrupaciones voluntarias de personas e incluso todas las formas jurídicas de organización de empresas, siempre que en dicha organización se produzca la *relación jurídico-privada* que genera el derecho de información, que nace entre quien posee dicha información –generalmente, el ógano de administración- y quienes tienen necesidad de ella para la *tutela de sus interes* y, en espeical, para ontribuir a *formar la voluntad social* (u *orgánica*) de la entidad". VICENT, F. (1995): "El derecho de información del socio en la cooperativa", *Cuadernos de derecho judicial*, n 22, p. 181.

13. Vid. los arts. 129.2 y 149.1 Constitución (en adelante CE).

14. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1996.

Ciertamente, la regulación del *derecho de información* proporcionando a los socios los elementos de exploración sobre la situación patrimonial[15] de la cooperativa, pretende la modulación y encaje de intereses, a priori, contrapuestos en atención a (i) los socios, (ii) a la propia sociedad y (iii) a los administradores de la cooperativa. Por su parte (i) los socios poseen un interés particular de acceder al conocimiento de la evolución económica obtenida a raíz de la actividad desarrollada por la sociedad de la que forman parte, (ii) la sociedad persigue en su beneficio evitar que el acceso a toda información por parte de los socios, pueda producir perjuicios a la misma, ante una posible revelación de datos y (iii) los administradores los cuales en el desarrollo de sus funciones de gestión precisan, razonablemente, que su ejercicio se desarrolle sin que sea cuestionado todo los trámites de administración (Narváez e Iranzo, 1994: 1) o *la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes*[16]. En todo caso, el reconocimiento específico al socio de su *derecho de información*, normativamente más modulado que en el resto de las sociedades (Paz, 1995: 16-34), es fiel reflejo de los principios y valores que dan sustento e inspiran el *ser* de las cooperativas[17], que en definitiva suponen el soporte de las prácticas societarias de cooperación (Paz, 1999: 183-198).

---

15. Nuestro Tribunal Supremo tiene establecido entre otras sentencias la 22 de marzo de 2000, la 15 de diciembre de 1998, y la 13 de noviembre de 1998 que con el derecho de información, uno de los más importantes con los que cuenta el socio, se trata de facilitar al socio un conocimiento directo sobre la situación y gestión de la sociedad, esta falta de información que permite el ejercicio de acciones dirigidas a impugnar los acuerdos, en cuya toma de decisión se haya obstaculizado o impedido el referido derecho, por nulidad, pues es de cumplimiento inexcusable para el órgano ejecutivo de la sociedad.

16. Establece el art. 16.4 LCo, lo siguiente:

> *"4. En los supuestos de los apartados e), f) y g) del punto 3, el Consejo Rector podrá negar la información solicitada, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes. No obstante, estas excepciones no procederán cuando la información haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea y ésta apoyase la solicitud de información por más de la mitad de los votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el Comité de Recursos, o, en su defecto, la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información.*
>
> *En todo caso, la negativa del Consejo Rector a proporcionar la información solicitada podrá ser impugnada por los solicitantes de la misma por el procedimiento a que se refiere el artículo 31 de esta Ley, además, respecto a los supuestos de las letras a, b y c del apartado 3 de este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 2.166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".*

17. En el Congreso de París de 1937, la Alianza Cooperativa Internacional (en adelante ACI) adoptó básicamente los principios rochdalianos ((Rochdale Society of Equitables Pioneers, fundada el 24 de agosto de 1844) y en el Congreso de Viena de 1966 fueron modificados para fijarlos en su configuración actual, y la redacción más moderna de los principios de la ACI, tienen su origen de la Declaración sobre la identidad cooperativa adoptada por la ACI en su Congreso de Manchester de 1995. Esta es la actual formulación por los Principios cooperativos de la ACI: Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. (1) Adhesión voluntaria y abierta;

3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE INFORMACIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27/1999, DE 16 DE JULIO, DE COOPERATIVAS

El contenido del artículo 16 LCo permite la delimitación del *derecho de información* del socio en la cooperativa, que tal y como se ha señalado tiene sus orígenes y principios en las sociedades de capital, por lo que, toda configuración que se haga del mismo, partiendo de la máxima de una información societaria, queda enmarcada en las sociedades cooperativas. Esta circunstancia justifica las remisiones que se deben hacer a la normativa de las sociedades de capital, para explicar los elementos integrantes del derecho de información cooperativo, además de la realización de una interpretación integradora de todo el cuerpo legal de pertinente aplicación.

Es por ello, que la modulación del *derecho de información* permite acometer su análisis a través del desglose de cada uno de su elementos configuradores, los cuales de forma individualizada, aproximan y explican el sentido y alcance conjunto

---

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociado, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa. (2) Control democrático de los asociados;

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos como representantes son responsables ante los asociados. En las cooperativas de base los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto) y las cooperativas de otros niveles también están organizadas de manera democrática. (3) Participación económica de los asociados;

Los asociados contribuyen equitativamente al capital de su cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de ese capital es normalmente propiedad común de la cooperativa. Por lo general los asociados reciben una compensación limitada, si la hay, sobre el capital suscripto como condición para asociarse. Los asociados asignan los excedentes para uno o más de los siguientes propósitos: desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, una parte de las cuales por lo menos debe ser irrepartible; beneficio a los asociados en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y apoyo a otras actividades aprobadas por los asociados. (4) Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, controladas por sus asociados. Si entran en acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático de sus asociados y mantengan su autonomía cooperativa. (5) Educación, formación e *información*

Las cooperativas proporcionan educación y formación a sus asociados, representantes elegidos, gerentes y empleados, para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al público en general, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación. (6) Cooperación entre cooperativas;

Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. (7) Preocupación por la comunidad;

Las cooperativas trabajan por el desarrollo sustentable de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus asociados.

de este *derecho,* sujeto en su variedad de aspectos, a reflexiones doctrinales e interpretaciones jurisprudenciales.

Dicho esto, del estudio del citado precepto extraemos las siguientes características definitorias de esta facultad concedida por Ley[18];

1.- el *derecho de información* es de carácter *subjetivo-general*, en tanto en cuanto, se atribuye su legitimación activa a *todos* los socios de la cooperativa, sin olvidar que este corolario es consecuencia directa e inmediata del llamado principio de *puertas abiertas* que supone el reconocimiento a toda persona que necesite los servicios de la cooperativa y cumpla los requisitos objetivos exigidos, del derecho a entrar en ella, principio que permite sostener el derecho a formar parte de una cooperativa a pesar de oponerse a ello la mayor parte de sus socios, en cuanto las cooperativas se han concebido social y legislativamente como instituciones socioeconómicas tendentes a facilitar la integración económica y laboral de los ciudadanos en el mercado, aunque finalmente no se trate de una libre adhesión unilateralmente decidida, en tanto en cuanto, queda sometida a través de un procedimiento de admisión, a la voluntad de los órganos societarios (Borjabad 1993:60-61)[19]. Esto exige la previa obtención de la condición de socio que la LCo[20] señala atendiendo a la actividad cooperativizada que se desarrolle, afectando tanto a (i) las personas físicas como a (ii) las personas jurídicas, públicas y privadas y a (iii) las comunidades de bienes (Borjabad 1993:56-57)[21].

Ciertamente, la afirmación que delimita el *derecho de información* de carácter *subjetivo general* permite sostenerlo con base en los siguentes supuestos;

(i) socio, tanto en los casos en los que lleve a cabo el ejercicio del derecho de forma directa o de forma indirecta, haciendo uso de la correspondiente institución de la representación.

(ii) socio de trabajo de las sociedades cooperativas de primer grado, con exclusión de las de trabajo asociado o de explotación comunitaria de la tierra

18. Para un conocimiento jurídico riguroso del derecho de información del socio anterior a la reforma operada en las cooperativas con la Ley 27/1999, de 16 de julio, se hace necesario la aproximación al estudio realizado por vid PAZ, N. (1990): "Artículo 36", en Paz, N., y Vicent, F: *La Ley General de Cooperativas. Comentarios*, vol. 2, pp. 163-196.

19. Hablaba Borjabad Gonzalo de que "el llamado principio de "puerta abierta" suele ser más de "entreabierta", pues, además de que la Ley ya imponga unos requisitos objetivos y subjetivos, en ocasiones los textos estatutarios contienen verdaderas restricciones, de hecho y de derecho, producidas bien por la exigencia de cuantiosas aportaciones que permiten sólo el acceso a los económicamente fuertes, o bien por otras condiciones, entre las que podemos destacar las cualificaciones y categorías profesionales en las Cooperativas de Trabajo Asociado, que impiden alcanzar la condición de socio a los que no las poseen". BORJABAD, P.J (1993); *Manual de Derecho Cooperativo*, cit., pp. 60-61.

20. Artículo 12 LCo.

21. Señala Borjabad Gonzalo, que frente a la ausencia de personalidad jurídica de la comunidad de bienes su consideración de socio de la cooperativa no es obstáculo, para considerala como un único socio –persona jurídica- vinculando a todos los comuneros a través de la obtención por un partícipe de la condición de representante de todos. Vid. BORJABAD, P.J (1993); *Manual de Derecho Cooperativo*, cit., pp. 56-57.

y en las de segundo grado, los estatutos pueden prever la admisión de éstos, siempre y cuando sean personas físicas, cuya actividad cooperativizada debe consistir en la prestación de su trabajo personal en la cooperativa[22]. Su régimen legal queda sujeto a las normas que regulan a lo socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, eso sí con la particulariedad de que sus estatutos deben fijar los criterios que garanticen una equitativa y ponderada participación de estos socios en las obligaciones y *derechos de naturaleza social y económica*. Luego, los estatutos sociales pueden modular el ejercicio del *derecho información* que es de naturaleza social, pero nunca negar el acceso al mismo a dichos socios, pues aunque la LCo establece que todo socio de la cooperativa podrá ejercitar el *derecho de información* en los términos previstos en esta Ley, en los estatutos o en los acuerdos de la Asamblea General, también es cierto que el socio tendrá derecho como mínimo; a) a recibir copia de los estatutos sociales, b) a libre acceso a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, al Libro de Actas de la Asamblea General y, a los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales, c) recibir copia certificada de los acuerdos del Consejo que afecten al socio, así como que se le muestre y aclare el estado de su situación económica en relación con la cooperativa, d) examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los estatutos los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación en las Asambleas Generales y con carácter particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los interventores o el informe de la auditoría, e) solicitar por escrito o verbalmente, con anterioridad o en el transcurso de la celebración de la Asamblea, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación a los puntos contenidos en el orden del día, f) solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales.

Es de señalar que no existe ningún impedimento legal, excepto el posible estatutario, que imposibilite la situación específica a favor del socio de quedar sujeto a una *doble condición social*, al tener a la vez, la consideración de socio, con carácter general, y socio de trabajo, lo que dicha simulltaneidad no afecta a su reconocido *derecho de información*.

(iii) socio trabajador de las cooperativas de trabajo asociado, las cuales tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, por medio de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros[23], entendién-

22. Vid. artículo 13.4 LCo.

23. Vid. artículo 80.1 LCo.

dose que la pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese definitivo del ejercicio al *derecho de información*[24].

(iv) socio que está a prueba en las cooperativas de trabajo asociado, si sus estatutos lo hubieran previsto, comporta su reconocimiento, durante el período en que se encuentren en situación de prueba, de los mismos derechos y obligaciones que los socios trabajadores[25]. Ciertamente, la LCo establece una serie de limitaciones al ejercicio de sus derechos y obligaciones de (i) naturaleza económica - no estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de ingreso, no les alcanzará la imputación de pérdidas que se produzcan en la cooperativa durante el período de prueba, ni tendrán derecho al retorno cooperativo- y de (ii) naturaleza político social -no podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad y no podrán votar, en la Asamblea General, punto alguno que les afecte personal y directamente-. Ahora bien, una vez se les reconoce expresamente los mismos derechos y obligaciones que a los demás socios integrantes de la cooperativa y dentro del cuadro de limitaciones al ejercicio sus derechos y obligaciones no se encuentra el *derecho de información*, parece quedar configurado que su ejercicio por parte de los socios a prueba queda reconocido.

(v) socio colaborador de aquellas cooperativas cuyos estatutos sociales lo hayan previsto, pueden ser tanto personas físicas o jurídicas, las cuales no pueden desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de la cooperativa, pero pueden contribuir a su consecución[26], desembolsando la aportación económica que determine la Asamblea General, la cual además es la encargada de fijar **los criterios** de ponderada participación de los mismos en **los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa**. La LCo establece expresamente unas prohibiciones afectantes al socio colaborador en relación a la fijación de dichos criterios, diferenciando los de (i) naturaleza económica -no se le podrá exigir nuevas aportaciones al capital social, las cuales en ningún caso pueden exceder del 45% del total de las aportaciones, - de los de (ii) naturaleza político social -no podrá desarrollar actividades cooperativizadas en el seno de dicha sociedad, ni el conjunto de los votos de todos los socios colaboradores, sumados entre sí, pueden superar el 30 % de los votos en los órganos sociales de la cooperativa.

Ahora bien, una interpretación integradora de las normas permite sostener que el socio colaborador conserva el *derecho de información*, en tanto en

24. Por interpretación, entre otros, del artículo 80.3 LCo.

25. Vid. artículo 81 LCo.

26. Vid. artículo 14 LCo.

cuento, la Asamblea queda legitimada para establecer los criterios que modulan el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en razón a la participación de éstos en la cooperativa. No se debe perder de vista, que la propia LCo le otorga la condición de socio por lo que, queda sujeto, con carácter general, al conjunto de derechos y obligaciones del resto de los socios, entendidos en sentido estricto, integrantes de la cooperativa. En ningún caso, parece que la Asamblea pueda prohibir el ejercicio del *derecho de información* por parte del socio colaborador.

(vi) socio administrador en el ejercicio de sus facultades como miembro del Consejo Rector, cuando las mismas no estén reservadas por Ley o por los estatutos a otros órganos sociales, o en los casos en los que la cooperativa tenga un número de socios inferior a diez, y su estatutos han previsto el establecimiento de un administrador único[27] -persona física que ostente la condición de socio-, el *derecho de información* aparece doblemente reforzado (García, 1991:26 y ss), luego el supuesto de información solicitada por el socio administrador que cabe suponer que tienen un mayor conocimiento que el resto de socios de la situación económica y social de la cooperativa pero que se trata de una presunción que es posible destruir por prueba en contrario[28].

En conclusión, el carácter *subjetivo general* del *derecho de información* permite su ejercicio por; el (i) socio, el (ii) socio de trabajo, el (iii) socio trabajador, el (iv) socio que está a prueba en las cooperativas de trabajo asociado, el (v) socio colaborador y el (vi) socio administrador.

2.- el *derecho de información* es de carácter *subjetivo restringido*, en tanto en cuanto, se atribuye su legitimación pasiva de forma limitada a (i) el Consejo Rector, a (ii) otro órgano social de la cooperativa[29] y a (ii) cualquier persona expresamente apoderada.

En relación a (i) el Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa, con sujeción a la Ley, a los estatutos y a la política general fijada por la Asamblea General. Eso sí, cabe la

27. Vdi. artículo 32 LCo.

28. Vid. la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992.

29. Señala el artículo 19 LCo *:*

"Son órganos de a sociedad cooperativa, los siguientes:

La Asamblea General.

El Consejo Rector.

La Intervención.

Igualmente a sociedad cooperativa podrá prever la existencia de un Comité de Recursos y de otras instancias de carácter consultivo o asesor, cuyas funciones se determinen en los Estatutos, que, en ningún caso, puedan confundirse con las propias de los órganos sociales".

posibilidad de que en atención al número de socios de la cooperativa, los estatutos pueden haber previsto la existencia de un administrador único.

Por su parte, la LCo reconoce expresamente la posiblidad de que sean asignados estatutariamente a otros (ii) órganos de la cooperativa las facultades del Consejo Rector.

Y, finalmente, en tanto en cuento, el Consejo Rector está facultado para conferir apoderamientos a (iii) cualquier persona, que asumirá las facultades representativas de gestión o dirección -gerente, director general o cargo equivalente-

3.- el *derecho de información* es de carácter *múltiple* puesto que la LCo reconoce su ejercicio de forma (i) individual al socio[30] y de forma (ii) colectiva, en aquellos supuestos en los que la solicitud parta del 10 % de los socios de la cooperativa, o cien socios, cuando ésta tenga más de mil[31].

4.- el *derecho de información* es de carácter *homogeneo* al permitir su ejercicio a todos los socios, independientemente de la cuantía de su participación en el capital social cooperativos.

5.- el *derecho de información* es de carácter *público*, en tanto en cuanto, va ligado a la condición de socio y a la garantía que a éste proporciona.

6.- el *derecho de información* es de carácter *consustancial* a la titularidad que corresponde a los componentes de la sociedad[32].

7.- el *derecho de información* es de carácter *imperativo*, puesto que, su ejercicio únicamente está condicionado a los criterios de delimitación que aparezcan previstos en la LCo, en los estatutos sociales o en los acuerdos adoptados por la Asamblea General[33].

8.- el *derecho de información* tiene carácter *de mínimo inderogable* puesto que LCo establece su contenido objetivo, con la posibilidad de ampliación.

9.- el *derecho de información* es de carácter *político funcional*, ya que representa la esfera jurídica de intervención y participación del socio en la sociedad cooperativa.

10.- el *derecho de información* es de carácter *autónomo* por cuanto tutela un interés específico que es que el socio necesita tener conocimiento de aquello que le afecta, atendiendo a que la cooperativa, como persona jurídica, por lo tanto, con base en un contrato asociativo, así lo demanda.

11.- el *derecho de información* es de carácter *necesario* lo que comporta que su vulneración genera la correspondiente nulidad de actuación, por acción u omisión del órgano encargado en facilitarlo.[34]

---

30. Vid. artículo 16.3 LCo.

31. Vid. artículo 16.3 g) LCo.

32. Vid. entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1962, 15 de octubre y 4 de noviembre de 1971 y 17 de febrero de 1984.

33. Vid. artículo 16.3 LCo.

34. Vid. sobre este carácter y en relación al derecho de información en las personas jurídicas de naturaleza asociativa, el Tribunal Supremo tiene declarado, fundamentalmente en el ámbito de las sociedades mercantiles, la sentencia de 3 de marzo de 1977.

12.- el *derecho de información* tiene carácter *intrasocietario-garantista* puesto que se concibe históricamente como presupuesto para una decisión responsable además de ser instrumento de control por parte del socio, eso sí, todo esto armonizado con los intereses de la sociedad tanto desde el punto de vista de la adecuada reserva de determinadas informaciones sociales, además de por razones de funcionalidad[35].

13.- el *derecho de información* es de naturaleza *extrasocietaria-garantista* puesto que su ejercicio efectivo por los socios, se convierte, en última instancia, en un medio eficaz de control en la actuación de los órganos sociales de la cooperativa, lo que sin lugar a dudas revierte positivamente en la actuación y relación de la misma con terceros extraños a ella.

14.- el *derecho de información* tiene carácter *instrumental* ya que, funciona como un presupuesto para la mejor efectividad del conjunto de los derechos del socio, fundamentalmente, eso sí, aunque no de manera exclusiva, para el mejor ejercicio del derecho de voto. Con carácter general, opera como mecanismo que permite el ejercicio de otros derechos, permitiendo al socio un conocimiento directo sobre la situación y gestión de la sociedad.

15.- el *derecho de información* tiene carácter *limitado* en lo que respecta a su ejercicio por parte del socio instante[36], en atención a que su desarrollo con la facultad de examen exhaustivo de la domumentación o aclaraciones solicitadas o debidas, no debe suponer un ejercicio malicioso o abusivo ni poner en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa, pues este derecho no puede servir como medio para obstruir o paralizar la actividad social, sobreponiendo, por lo tanto, a los intereses sociales el particular del socio que requiere la información[37].

---

35. En este sentido, señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 20 de marzo de 1999, en su Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente: "El tratamiento intrasocietario del derecho de información del accionista se concibe históricamente como presupuesto de una decisión responsable e instrumento de control por parte del socio, conjugado con los intereses de la sociedad tanto desde el punto de vista de la conveniente reserva de determinadas informaciones como por razones de funcionalidad. Así, en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, el derecho de información del accionista se manifiesta en una doble modalidad: a).-Como derecho a obtener determinadas informaciones documentales preparatorias de la Junta General, por ello, a partir de la convocatoria de la misma, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y, en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, debiendo hacerse mención de este derecho en la convocatoria (art. 212 LSA); b).-Como derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (art. 112 LSA). Y, al lado de este derecho de información se establecen también las cautelas a favor de la sociedad, y, así el artículo 112 continúa en su redacción: «Los administradores estarán obligados a proporcionárselos (informes y aclaraciones), salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital»".

36. Vid. artículo 16.4 LCo.

37. La doctrina jurisprudencial aplicable *mutatis mutandis* a el precepto 16.4 LCo; sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1969, 7 de octubre de 1985 y de 26 de diciembre de 1969.

16.- el *derecho de información* es de naturaleza *colaborativa* pues se espera por parte, tanto del (i) órgano social encargado de suministrala como del (ii) socio instante. Las partes tienen, por ello, la obligación de colaboración de buena fe, puesto que esto redunda en la marcha social, al facilitarse una gestión normal y el cumplimiento de los fines sociales.

Ciertamente, en lo que afecta a la actuación del (i) órgano social su aplicación es exigida implícitamente por la LCo al reconocer a los socios el ejercicio de sus derechos, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador, o de medidas cautelares estatutarias[38], además, de que la negativa de proporcionar la información solicitada podrá ser impugnada por los instantes[39].

En lo que respecta a la exigida actuación basada en la buena fe del (ii) socio el cual requiere la información, por reconocimiento expreso e implícito de la LCo[40].

17.- el *derecho de información* es de naturaleza *condicional* en relación al tipo de información solicitada teniendo en cuenta que la misma no será suministrada cuando *"el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes"*. Ningún derecho tiene el carácter de exclusivo, excluyente y absoluto, por ello, el *derecho de información* se encuentra limitado, entre otros por las actitudes abusivas del socio, por lo que, la reconocida facultad discrecional del órgano de administración no equivale a arbitrariedad, así que, denegar la información solicitada, comporta su justificación, pues ha de concurrir realmente una causa o motivo que ampare dicha negativa, ya que en otro caso estaríamos ante un mero capricho.

Al principio general, la excepción a la regla, y por lo tanto, obligatoriedad en la entrega de la información, en el acto específico de celebración de la Asamblea General, que se manifiesta en los siguientes supuestos;

a.- cuando la información, en los supuestos expresamente regulados en la LCo[41] haya sido apoyada por más de la mitad de los votos presentes y representados, lo que por reconocimiento implícito, permite que dicha solicitud de información sea instada por un único socio.

b.- en los demás supuestos, es decir, para el resto de los comprendidos en el artículo 16.3 LCo, se debe acordar por;

(1) el Comité de Recursos, o, en su defecto, por (2) la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información.

---

38. Vid. artículo 16.1 LCo.

39. Vid. artículo 14.4 LCo.

40. Vid. artículos 16.4 y 15 LCo.

41. Artículo 16.3 e), f) y g) LCO.

18.- el *derecho de información* es de naturaleza *discrecional* puesto que el órgano encargado de facilitar la información puede negarse a suministrarla en base un amplio abanico de causas, las cuales, en todo caso, se entienden deben encajar en los límites de carácter general y no exahustivos regulados en la LCo[42], por lo que, comporta, sin lugar a dudas, otorgar la facultad interpretativa de los intereses sociales al mismo, correspondiendo en última instancia el control de la legalidad de la decisión de la actuación del órgano encargado de facilitar la información, a los tribunales, que deben decidir sobre la pertinencia o no de su decisión.

19.- el *derecho de información* es de naturaleza *dimensional* en relación a los elementos que condicionan la entrega o no de la información requerida por el socio o socios. Por ello, se puede diferenciar lo supuestos en los que;

a.- el Consejo Rector queda facultado para poder negar la información solicitada, cuando en los supuestos expresamente configurados por la LCo, su distribución ponga en (i) grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa o (ii) cuando la petición constituya obstrucción reiterada o (iii) abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes.

(i) la negativa fundamentada en el grave peligro que pueda ocasionar a los legítimos intereses de la cooperativa permite la realización de las siguientes matizaciones;

1.- la LCo menciona la necesaria presencia de una situación de peligro pero con carácter de grave, por lo que podría entenderse, a *sensu contrario*, que queda excluido el que tenga carácter leve o incluso muy grave, y eso en atención a la circunstancia de que el legislador se ha preocupado en delimitarlo. Ciertamente, si en relación al carácter leve parece haber más razones de interpretación excluyentes, la naturaleza de muy grave, permite entenderlo incluido en el peligro grave exigido, pues si éste es causa de negativa, máxime debe entenderse la situación de peligro muy grave.

2.- la situación de peligro debe afectar a los intereses sociales, configurándose como requisito de máxima, frente a los intereses particulares de los socios, que verán prevalecer siempre el interés cooperativo al suyo propio. Luego, ante la falta de referencia expresa legal, esa situación grave de peligro debe perjudicar, ya sea de forma significativa o no, los intereses sociales.

(ii) por su parte, la negativa fundamentada en que la solicitud de información deba constituir obstrucción reiterada por parte de los socios, supone el establecimiento de la Ley de un criterio de conexión extraordinariamente amplio, lo que hace necesario determinar en cada caso cuando una petición sobrepasa los límites en el ejercicio del *derecho de información* con la correspondiente obstaculización o paralización de la actividad social que comportaría sobre-

42. Vid. artículo 16.4 LCo.

poner los intereses particulares a los intereses sociales. Ante esto, se puede efectuar las siguientes consideraciones:

1.- la LCo no especifica qué debe entenderse por obstrucción y por lo tanto, en que supuestos deben ser valorados como tal por el Consejo Rector

2.- se exige que la actuación obstructiva por parte del socio instante de la información sea reiterada sin más distingos ni precisiones lo que en atención a lo expuesto -la información no se trata de un derecho absoluto, y la exigencia de colaboración, desde luego, de quien reclama dicha información- ponen de relieve la necesidad de que la valoración de esa solicitud obstructiva reiterada suponga un ánimo entorpecedor del funcionamiento correcto y normal de la cooperativa, más que un verdadero interés en conocer el estado de la sociedad

Del tenor literal del artículo 16.4 LCo parece desprenderse que el Consejo Rector no puede negarse a facilitar al socio o socios la información requerida, puesto que delimita la facultad de *poder negar la información solicitada* en los supuestos establecidos legalmente como excepción.

(iii) abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes ya que junto a los legítimos intereses de la cooperativa, se manifiestan otros límites generales en el ejercicio de los derechos que se condensan en la doctrina del abuso del derecho[43] (Millán, 2003:137), es por ello que, el *derecho de información* reconocido a los socios, que constituye, un derecho fundamental societario, no se puede llevar a un extremo tal que produzca un imposible funcionamiento correcto y normal de la sociedad, pues no se puede desvincular el derecho de los socios a obtener información de su propia finalidad cual es el ejercicio responsable de su derecho[44], debe usarse atendiendo a la buena fe contractual, ya que su ejercicio de una forma indiscriminada perturba gravemente el desarrollo de la actividad societaria[45].

b.- el Consejo Rector queda obligado a la entrega de información en el acto de celebración de la Asamblea y para los supuestos establecidos en la LCo cuando (i) la solicitud de información es apoyada por más de la mitad de los votantes presentes o representados y (ii) cuando sea acordado por el Comité de Recursos, o en su defecto, por la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información. Esto queda sujeto a las siguientes salvedades;

(i) la solicitud de información apoyada por más de la mitad de los votantes presentes o representados, en los supuestos en los que un socio o socios han

43. Vid. artículo 7 Código Civil.

44. A este respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre otras sentencias las de 8 de mayo de 2003 y 14 de febrero de 2007.

45. Vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 17 mayo 1995, de 30 mayo de 2000 y 2 de diciembre de 2003.

instado la solicitud de información, enerva el reconocimiento legal de la oposición del Consejo Rector a facilitar dicha información. Pero siendo ello así, indudable y protegible el derecho de los socios en orden informativo, debe ser respetado a fin de que éstos no queden, por falta de información, a merced de la valoración exclusiva y discrecional del Consejo Rector.

(ii) cuando sea acordado por el Comité de Recursos, o en su defecto, por la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información, en aquellos supuestos, comprendidos en el artículo 16.3 LCo –excepto los apartados e), f) y g)-. Ante la contención en la regulación se ha señalado que deben ser los estatutos sociales los que esablezcan los plazos para que opere dichos recursos de naturaleza intrasocietaria (Paz, 1990:192).

20.- el *derecho de información* tiene naturaleza *recepticia*, esto comporta que debe hacerse valer debidamente, ya que si no se peticiona no se genera el correspondiente derecho a obtener respuesta informativa[46].

La LCo distingue expresamente, los supuestos en los que se hace necesario la petición previa de información, escrita o verbal, frenta a otros en los que el *derecho de información* se origina*, per se*, desde la adquisión de la condición de socio.

(i) es necesario la solicitud previa cuando; a) se insta del Consejo Rector la copia certificada de los acuerdos del Consejo que afecten al socio, individual o particularmente y el estado de la situación económica del socio peticionario en relación con la cooperativa, b) si se insta del Consejo Rector copia certificada de los acuerdos adoptados en Asambleas Generales, c) cuando, antes o durante la celebración de la Asamblea General, se pide ampliación de toda la información que se considere necesaria y relacionada con los puntos a tratar en el orden del día, d) si se insta información sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a los derechos económicos o sociales del socio y e) cuando el 10 % de los socios de la cooperativa, o cien socios, si ésta tiene más de mil, precisen de cualquier tipo de información que consideren necesaria.

(ii) no es necesario la solicitud previa de información, por lo tanto, hay obligación de remisión; a) de la copia de los Estatutos sociales y, si existiese, del Reglamento de régimen interno y de sus modificaciones, de la cooperativa, b) libre acceso a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, así como al Libro de Actas de la Asamblea General, c) el examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los Estatutos, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los Interventores o el informe de la auditoría.

46. En este sentido y en relación a la jurisprudencia relativa a las sociedades anónimas vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2000, de 6 de mayo de 1988 y de 17 de mayo de 1995.

Por lo tanto, sino se peticiona por el socio la información no se genera el derecho a obtener respuesta o información; así, si el *derecho de información* no se hace valer debidamente en los momentos que la Ley establece[47], no puede entenderse infringido por el órgano de administración su no facilitación.

Luego, la LCo configura de forma implícita las vías existentes para efectuar la petición de información, diferenciando; (i) la petición individual, (ii) la petición colectiva y (iii) la que se haya establecido en los estatutos sociales.

21.- el *derecho de información* es de naturaleza *modal*, atendiendo a las siguientes circunstancias:

(i) en su solicitud como en su suministro, se utiliza la escritura o la oralidad, pero con predominio de la escritura sobre la oralidad[48], sin perder de vista que la obligación de conceder dicha información es del órgano de administración –el Consejo Rector–, sin perjuicio de que pueda delegar en empleados y de la posibilidad de creación estatutaria de Comités o Comisiones especializadas.

(ii) su solicitud puede ser instada (1) individualmente, (2) colectivamente y (3) la que se haya establecido estatutariamente;

(1) el socio de la cooperativa, de forma individual está facultado a instar la correspondiente solicitud de información tal y como se recoge expresamente en la LCo.

(2) el colectivo de socios figura igualmente reconocido por la LCo para solicitar la información, eso sí en supuestos más limitados; a.- cuando el 10 % de los socios de la cooperativa, o cien socios, si ésta tiene más de mil, soliciten por escrito al Consejo Rector la información que considere necesaria, b.- cuando la información haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea y se apoyase la solicitud de información por más de la mitad de los votos presentes y representados, c.- en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el Comité de Recursos, o, en su defecto, la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información.

(3) el modo establecido en los estatutos sociales debe ser entendido como complementario al delimitado como mínimo en la LCo.

---

47. Vid. las sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1993 y de 30 de mayo de 2000.

48. La LCo establece la posibilidad de solicitud informativa de forma verbal cuando si artículo 16.3 e) señala lo siguiente: *"Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación a los puntos contenidos en el orden del día"*. Por su parte el apartado 4 del citado precepto sigue regulando la modalidad de información verbal tanto desde el que la insta como el que está obligado a facilitarla, al decir: *"...No obstante, estas excepciones no procederán cuando la información haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea y ésta apoyase la solicitud de información por más de la mitad de los votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el Comité de Recursos, o, en su defecto, la Asamblea General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información"*.

(iii) la solicitud de la *información* queda delimitada por la LCo en las siguientes franjas temporales, y en atención al contenido de la instada para su suministro;

(1) en cualquier momento la solicitud puede ser instada cuando se quiera tener copia de los estatutos sociales, del Reglamento de régimen interno y sus modificaciones, cuando se desee tener acceso a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, así como al Libro de Actas de la Asamblea General, a la obtención de certificado de los acuerdos del Consejo que afecten al socio, individual o particularmente y en todo caso a que se le muestre y aclare, el estado de su situación económica en relación con la cooperativa. Cuando se solicite información sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. Además, cuando el 10 % de los socios de la cooperativa, o cien socios, si ésta tiene más de mil, soliciten al Consejo Rector la información que considere necesaria. También, por reconocimiento expreso e implícito de la LCo, y en consideración de elementos integrantes del *derecho de información,* a pedir cuantas ampliciones y aclaraciones que sobre cualquier asunto económico y social de la cooperativa sean necesarias.

(2) con anterioridad a la celebración de la Asamblea General y entre su convocatoria y la fecha señalada para su desarrollo, la de examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los Estatutos, los documentos que vayan a ser sometidos a la misma y en concreto las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los Interventores o el informe de la auditoría. Por su parte también, cuando se desee recibir la ampliación de información.

(3) constante la celebración de la Asamblea General cuando se solicite verbalmente, en el transcurso de la misma, la aplicación de toda la información que se considere necesaria y esté relacionada por una parte; con los puntos (i) contenidos en el orden del día como (ii) por otros asuntos no incluidos en la convocatoria, siempre que en este caso, la solicitud de información sea apoyada por más de la mitad de los votos presentes o representados.

(4) celebrada la Asamblea General en los supuestos en los que se desee obtener copia certificada de los acuerdos adoptados en la misma.

22.- el *derecho de información* tiene naturaleza *clara y accesible* y ello permite sostener que toda información suministrada por el órgano de administración de la cooperativa habrá de ser ampliada y aclarada a petición del socio[49]. La LCo reconoce expresamente el derecho del socio a solicitar por escrito, antes de la celebración de la Asamblea y en el transcurso de ella, la ampliación de toda información que considere necesaria en relación a los puntos contenidos en el orden del día,

49. En este sentido vid. la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba de 1 de marzo de 2005.

además y en atención a los principio que informan el *derecho de información* autoriza mantener y considerar que también en el resto de supuestos, el órgano de administración de la cooperativa habrá de realizar las ampliaciones y aclaraciones precisas con el fin de garantizarle al socio el ejercicio de su derecho, "hoy como ayer, los socios de una Cooperativa son acreedores a una información clara y accesible" (Paz, 1990:187). Por ello, se sostiene lo siguiente;

(i) en los supuestos de datos predeterminados legalmente, como el contenido de los estatutos sociales, o el reglamento de régimen interno, o los actos de la Asamblea General, se presume que el socio está en condiciones de comprenderlos, a no ser que solicite expresamente que se le aclaren o expliquen.

(ii) en los supuestos de datos relativos a la situación patrimonial, financiera y de resultados de la cooperativa, o de su marcha como empresa, o los relativos a las concretas relaciones económicas del socio con la cooperativa, se rigen por el principio contrario, de que la iniciativa para su aclaración corresponde al órgano que suministra los datos, ya que se entiende que no pueden ser comunicados sin explicación.

23.- el *derecho de información* tiene naturaleza *temporal* desde el punto de vista del órgano encargado de proporcionarla. El legislador cooperativo se ha preocupado por delimitar en determinados supuestos, el plazo necesario para ejecutar la respuesta, como fórmula garantista, una vez el socio o socios han ejercido su *derecho de información*. Esto permite diferenciar (i) los casos en los que no aparece regulado el plazo para responder a la información instada de (ii) los casos en los que expresamente se establece por LCo;

(i) los supuestos en los que no aparece regulado el plazo hacen referencia (1) al derecho del socio por recibir copia de los Estatutos sociales y, si existiese, del Reglamento de régimen interno y de sus modificaciones, (2) cuando solicita copia certificada de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales, (3) cuando se accede a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, así como al Libro de Actas de la Asamblea General (4) cuando se solicita copia certificada de los acuerdos del Consejo que afecten al socio, individual o particularmente.

(ii) los supuestos en los que aparece regulado el plazo hacen alusión a (1) al derecho a que se muestre y aclare el estado de la situación económica del socio en relación con la cooperativa –en un plazo no superior a un mes- entendiendo que funciona como plazo máximo que puede ser reducido en los estatutos sociales, (2) al derecho a examinar los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los Interventores o el informe de la auditoría –entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración-, (3) al derecho a recibir información complementaria de los puntos contenidos en el orden del día relativos a la Asamblea a celebrar –con anterioridad a la celebración de la Asamblea, en

el transcurso de la misma o después de su celebración donde los estatutos sociales deben regular el plazo máximo en el que el Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, atendiendo a la complejidad de la petición formulada-, (4) al derecho a recibir información sobre la marcha de la cooperativa, en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales - plazo de 30 días o, si es considerado de interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día-, (5) al derecho a recibir todo tipo de información que se considere necesaria en los casos en los que es instada por el 10 % de los socios de la cooperativa, o cien socios, si ésta tiene más de mil -en un plazo no superior a un mes-.

24.- el *derecho de información* tiene naturaleza *impugnatoria-garantista* en su doble manifestación de inspección de la contabilidad y aspectos económicos y de obtener explicaciones sobre la marcha de las operaciones sociales, tiene como principal beneficiario al socio, ya que éste en aquellos supuestos en los que conozca con exactitud las actividades desarrolladas por los órganos administrativos de la sociedad y sus resultados podrá fundadamente participar en la aprobación de las cuentas anuales, decidir sobre el reparto de las ganancias o exigir responsabilidad a los administradores, elegir a otros, impugnar acuerdos, y, en general, fiscalizar y participar en la marcha de la entidad. Todo ello comporta, que ante la actitud del órgano encargado de facilitar la *información* se articulen fórmulas de control que tienen manifestación en la declaración de su nulidad. Ciertamente, la LCo imponen la obligación inexcusable de dar cumplimiento al ejercicio del *derecho de información*, destacando que su trasgresión es causa de nulidad[50]. Ahora bien, la normativa, ante la negativa del órgano de admnistración a suministrar la información solicitada, otorga consecuencias jurídicas diversas; por una parte (i) si la negativa tiene como fundamento la puesta en grave peligro de los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes y por otra (ii) si la negativa no tiene ningún fundamento expresamente reconocido como causa de excepción a la obligación de facilitar *información*, lo que permite realizar las siguientes matizaciones;

(i) si la negativa tiene como fundamento la puesta en grave peligro de los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes, comporta el posible ejercicio del socio de la acción de impugnación debiendo acreditarse por el órgano de administración la existencia del motivo o motivos que justifican dicha negativa, pero entendiéndose, en principio que no se ha infringido el ejercicio del *derecho de información*.

(ii) si la negativa no tiene ningún fundamento expresamente reconocido como causa de excepción a la obligación de facilitar *información* y atendiendo al

50. Vid. los artículos 16.4 y 31 LCo.

reconocimiento expreso de la LCo, es causa que justifica la acción de impugnación del socio. Por su parte, aunque no se dice nada de aquellos casos en los que se ha facilitado información pero esta es incompleta, incorrecta o incluso falsa, una intepretación integradora permite entender su inclusión como causa de impugnación.

Ahora bien, no todo supuesto acarrea la nulidad, pues pueden darse casos en los que no se entiende vulnerado el *derecho de información* por el hecho de que alguno de los documentos no estuviese disponible para el socio, sin constar que éste hubiera solicitado el examen de los mismos, pues para que la vulneración del *derecho de información* determine la nulidad, es necesario que se trate de una conculcación real del mismo, a través del impedimiento de su ejercicio, sin que baste para ello con una mera vulneración potencial, por el hecho de los documentos e informes sobre los que debe de ejercerse tal derecho no estuviesen disponibles, cuando no consta que ningún socio hubiera solicitado su examen o entrega[51].

Por todo lo anterior se puede decir que el *derecho de información* ejercido por el socio en una cooperativa es la facultad que el mismo tiene atribuida por Ley, para obtener un correcto y debido conocimiento, lo más exacto posible, tanto de la situación económica, patrimonial y financiera de la sociedad, así como del resto de datos sociales necesarios para evaluar y examinar la gestión cooperativa, y es éste un derecho esencial no sólo inderogable, sino, además irrenunciable.

4. CONCLUSIONES

El tratamiento intrasocietario del *derecho de información* del socio de una cooperativa queda concebido como presupuesto necesario para la toma de decisiones responsables e instrumento de control por parte del socio, conjugado con los intereses de la sociedad tanto desde el punto de vista de la adecuada reserva de determinadas informaciones como por razones de funcionalidad. Así, este *derecho de información* del se manifiesta en su doble modalidad; a) de derecho a obtener determinadas informaciones documentales preparatorias de la Asamblea General, a partir de la convocatoria de la misma, obteneniendo, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y b) de derecho a solicitar cuanta información de naturaleza netamente económica y social precise. Pero este *derecho de información* establece también las cautelas a favor del socio, articulando fórmulas de control

51. Vid. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 23 de octubre de 2003.

garantista, al reconocerse la obligación por parte del órgano de admnistración de suministrarla.

En cuanto al contenido y límites del *derecho de información*, la ley de forma expresa e implícita, formula las exigencias a la hora de delimitarlo; 1.- es de carácter *subjetivo-general*, en cuanto su atribución de legitimación activa 2.- es de carácter *subjetivo restringido*, en relación a su atribución de legitimación pasiva, 3.- es de carácter *múltiple*, 4.- es de carácter *homogeneo* al permitir su ejercicio a todos los socios, 5.- es de carácter *público*, 6.- es de carácter *consustancial* a la titularidad que corresponde a los componentes de la sociedad, 7.- es de carácter *imperativo*, 8.- tiene carácter *de mínimo inderogable*, 9.- es de carácter *político funcional*, 10.- es de carácter *autónomo,* 11.- es de carácter *necesario*, 12.- tiene carácter *intrasocietario-garantista* puesto que se concibe históricamente como presupuesto para una decisión responsable además de ser instrumento de control por parte del socio, 13.- es de naturaleza *extrasocietaria-garantista* puesto que su ejercicio efectivo por los socios, se convierte, en última instancia, en un medio eficaz de control en la actuación de los órganos sociales de la cooperativa, lo que sin lugar a dudas revierte positivamente en la actuación y relación de la misma con terceros extraños a ella, 14.- tiene carácter *instrumental*, 15.- tiene carácter *limitado* en lo que respecta a su ejercicio por parte del socio instante, 16.- es de naturaleza *colaborativa*, 17.- es de naturaleza *condicional* en relación al tipo de información solicitada, 18.- es de naturaleza *discrecional* puesto que el órgano encargado de facilitar la información puede negarse a suministrarla, 19.- es de naturaleza *dimensional* en relación a los elementos que condicionan la entrega o no de la información requerida por el socio o socios, 20.- tiene naturaleza *recepticia*, 21.- es de naturaleza *modal*, 22.- tiene naturaleza *clara y accesible*, 23.- tiene naturaleza *temporal,* y 24.- tiene naturaleza *impugnatoria-garantista.*

Además, no siempre la información solicitada puede ser objeto de concesión, por lo que la ley establece unos motivos de denegación de la información cuando a juicio del órgano de administración la publicidad de los datos solicitados perjudique en definitiva y desde el punto de vista objetivo, los intereses sociales o tal solicitud, desde el punto de vista subjetivo, constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte del socio instante.

La ley establece por reconocimiento implícito y expreso que en relación a la resolución del conflicto sobre obtención de la información, su revisión que va dirigida a la impugnación del acuerdo social por infracción del derecho de información y consiguiente declaración judicial de nulidad del mismo si ha sido incorrecta, incompleta, y no fundada la negativa.

BIBLIOGRAFÍA

ALFONSO, R. (2006); "El desarrollo normativo de la Sociedad Cooperativa Europea: propuestas de implantación", *Boletín de la Academia Vasca de Derecho,* Año 4, nº. 2.

BORJABAD P.J (1993); *Manual de Derecho Cooperativo*, Barcelona.

BUENDÍA, I. (2000): "La participación democrática: ¿un valor en extinción en las sociedades cooperativas?", *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 34, abril.

CALBACHO, F. (1988): "El Derecho de información del accionista en la sociedad anónima", *Revista de Derecho mercantil*, nº 189-190.

CUBEDO, M. (2007): "El régimen económico de las sociedades cooperativas: situación actual y apuntes para una reforma", *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 58, agosto.

DIVAR, J. (1987): *Régimen jurídico de las sociedades cooperativas*, Bilbao.

ESTEBAN, G. (1994): "Derecho de información del accionista", en Alonso Ureba, A. (coord.), Duque Domínguez, J. (coord.), García Villaverde, R. (coord.) y Sánchez Calero, F.J. (coord.): *Derecho de sociedades anónimas* (en homenaje al profesor José Girón Tena), vol. 2, tomo 1, Madrid.

GARCÍA, R. (1991): "Derecho a la información del socio y del administrador (sobre la existencia de un derecho a la información de los miembros del Consejo de Administración)", *Cuadernos de Derecho y de Comercio*, diciembre.

GÓMEZ, P. y MIRANDA, M. (2006); "Sobre el régimen económico y financiero particular de las sociedades cooperativas", *Revista de Estudios Cooperativos,* nº 90, tercer cuatrimestre.

MANRIQUE, F. y RODRÍGUEZ, J.M. (1980): "La Cooperativa: garantías formales para su eficacia en el tráfico"*, Revista de Derecho Notarial,* nº 109 y 110.

MILLÁN, R.Á. (2003): *El derecho de información en la Ley de Cooperativas de Galicia*, Santiago de Compostela.

NARVÁEZ, M.Á. e IRANZO, M.D. (1994): "El derecho de información del socio frente al secreto de contabilidad del comerciante: aspectos procesales y sustantivos", *Derecho de los negocios*, año 5, nº 40.

PANIAGUA, M. (2007): "El estatuto de la sociedad cooperativa europea: el problema de su aplicación en España", *Revista de Economía Social*, nº 34, enero.

PAZ, N. (1990): "Artículo 36", en Paz Canalejo, N., y Vicent Chuliá, F.: *La Ley General de Cooperativas. Comentarios*, vol. 2, Madrid.

__(1995): "El derecho de información del socio en la cooperativa", *Cuadernos de derecho judicial*, n 22.

__ (1995): "Principios cooperativos y prácticas societarias de la cooperación", *Revesco estudios cooperativos,* nº 61, diciembre.

__(1999) "Perspectivas y problemas jurídicos de la nueva Ley Estatal de Cooperativas", *Revesco estudios cooperativos,* nº 69, 3er cuatrimestre.

ROMERO, J.A. (2000): *El derecho de información documental del accionista*, Madrid.

TRUJILLO, I.J. (2000): "El valor jurídico de los principios cooperativos: a propósito de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas", *Revista crítica de derecho inmobiliario,* año nº 76, nº 658.

VICENT, F. (1995): "El derecho de información del socio en la cooperativa", *Cuadernos de derecho judicial*, n 22.

EL DERECHO DE REEMBOLSO DEL SOCIO EN CASO DE BAJA Y EL CONCURSO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

Carlos Vargas Vasserot
Prof. Titular Derecho Mercantil
Universidad de Almería

RESUMEN

La comunicación trata algunos aspectos del régimen económico-financiero de las cooperativas y su incidencia en el riesgo de insolvencia y, por tanto, en el riesgo del concurso de este tipo de sociedades. En concreto se analiza si las medidas legales correctoras de la variabilidad del capital social cooperativo convierten a estas sociedades, financieramente hablando, en estables. También se estudian los efectos que sobre la solvencia de las cooperativas va a tener el cambio de la calificación contable de las aportaciones de los socios al capital social cooperativo provocado por la nueva normativa contable internacional (NIC 32) y la aprobada reforma del régimen del capital social y del derecho de reembolso de las aportaciones hechas por el socio en caso de baja contenido en la Ley 27/1999 y en varias normas autonómicas de cooperativas. Finalmente se abordará el discutido tema de la titularidad de la masa de gestión económica y su posible separación de la masa activa del concurso, con la finalidad de aclarar si estas sociedades ofrecen menores o mayores garantías financieras a sus acreedores que otras sociedades mercantiles en supuestos de crisis económicas.

PALABRAS CLAVES: Concurso – cooperativas – derecho de reembolso – derecho de baja – NIC 32 – capital social – masa de gestión – solvencia – masa activa – acreedores

Carlos Vargas Vasserot
(pp. 37-58)

THE MEMBER'S RIGHT TO REIMBURSEMENT ON RESIGNATION AND COOPERATIVE SOCIETY INSOLVENCY PROCEEDINGS

ABSTRACT

The present work deals with some aspects of the economic and financial system of cooperatives and their impact on the risk of insolvency and therefore, the risk of insolvency of this type of corporations. Specifically, it discusses if the legal action corrective of the variability of capital turns these cooperatives into financially stable societies. It also explores the effects of the accounting qualification change of the partner's contributions on the solvency of cooperatives made by the new International Accounting Standards (IAS 32) and the recently approved reform of the system of social stock and the right of reimbursement of the contributions of the expel partner content in Law 27/1999 and in several regional laws of cooperatives. Finally, it will be approached, albeit briefly, the issue of ownership of the mass of economic management and its possible separation of the insolvency estate, in order to clarify whether these Corporations offer lower or higher financial guarantees to its creditors than others in case of economic crises.

KEY WORDS: Insolvency – cooperatives – right to reimbursement – right to resign - IAS 32 - share capital – members' assets – solvency – assets of a bankruptcy - creditors

El derecho de reembolso del socio en caso de baja...
(pp. 37-58)

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. EL PRINCIPIO DE CAPITAL VARIABLE EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SU TEÓRICA DEBILIDAD ESTRUCTURAL. 2. EL DERECHO DE REEMBOLSO DEL CAPITAL SOCIAL Y EL CONCURSO DE LA COOPERATIVA. 3 LA MASA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y EL CONCURSO DE LA COOPERATIVA. 4. LA REPERCUSIÓN DE LA NIC 32 EN EL RIESGO DE INSOLVENCIA Y CONCURSO DE LAS COOPERATIVAS. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN. EL PRINCIPIO DE CAPITAL VARIABLE EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SU TEÓRICA DEBILIDAD ESTRUCTURAL

La variabilidad del capital social de las cooperativas es, sin duda, una de las notas características de este tipo social y es el elemento técnico-jurídico utilizado por el legislador para dar efectividad al principio de puertas abiertas que las caracteriza. La posibilidad de flujo de entrada y salida de socios de la cooperativa se encuentra en el origen mismo del movimiento cooperativo, constituyéndose en un principio cooperativo básico, que financieramente hablando se traduce en que su capital social es susceptible de aumento por la admisión de nuevos socios a la sociedad y de disminución por la devolución o reembolso de las aportaciones por el abandono de la misma.

Este carácter variable del capital social de las cooperativas suele ser percibido por los operadores económicos como un signo de debilidad financiera de estas sociedades debido a la posibilidad de que el capital social y, en definitiva, el patrimonio social se vea reducido notablemente por la salida de socios (art. 17 LCoop). Y esta sensación de riesgo financiero se incrementa en épocas de crisis económicas por la posibilidad de que la salida de unos socios incite al resto a abandonar el *barco cooperativo* ante el peligro de que se hunda. Es el temido efecto *dominó* de salida de socios por el miedo a quedarse en una sociedad descapitalizada e insolvente. Para evitar esto, las leyes cooperativas disponen de una serie de medidas que, de un lado, convierten al capital social en parcialmente variable, y de otro, posibilitan que las propias sociedades a través de sus estatutos se doten de las suficientes garantías financieras. En nuestra opinión, a veces esas medidas legales son excesivas en comparación con las exigidas a las sociedades capitalistas (que no tienen porque ser más solventes), y otras veces no llegan (por ejemplo, cuando se opera a beneficio cero, no hay excedentes ni dotación de fondos).

A. DERECHO DE REEMBOLSO VERSUS DERECHO DE LIQUIDACIÓN

En realidad el socio no tiene un derecho al reembolso, sino a la liquidación de sus aportaciones en el momento que se produce la baja según el balance de cierre del ejercicio (art. 51.1 LCOOP), que puede significar un importe mayor o menor al que el socio realizó para ingresar en la sociedad. Pero es que además esta liquidación va a depender de la existencia de pérdidas imputadas o imputables al socio (art. 51.2 LCOOP) y del tipo de baja de que se trate, ya que en ambos casos se puede reducir el valor del importe del reembolso (según el art. 51.3 LCOOP se puede deducir hasta un 30 por cien del porcentaje de la liquidación de las aportaciones si el socio es expulsado o se da de baja no justificada). Otro aspecto importante para valorar las garantías que las cooperativas ofrecen a sus acreedores. Aquí, hay que distinguir claramente, aunque en la práctica no siempre sea fácil, entre la responsabilidad de los socios frente a terceros por las deudas derivadas de la actividad desarrollada por la cooperativa en el mercado (responsabilidad externa/deudas) y la responsabilidad de los socios frente a la sociedad por las deudas generadas sobre la base de la gestión mutualística (responsabilidad interna/pérdidas).

En su vertiente externa, la responsabilidad de los socios por deudas sociales es normalmente la misma que el resto de sociedades mercantiles de responsabilidad limitada, limitada, y valga la redundancia, a las aportaciones al capital social que hubiera suscrito (art. 15.3 LCOOP). Además, aunque la aportación se haya reembolsado, el socio sigue siendo responsable de las deudas sociales durante un largo plazo (5 años) si no existe patrimonio social suficiente (art. 15.4 LCOOP), con lo que a pesar de no existir un vínculo societario del titular de las aportaciones con la sociedad, esas aportaciones siguen desarrollándose una función de garantía.

Diferente es la responsabilidad de los socios de las pérdidas a ellos imputables. En concreto, la cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputa a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa o comprometidos a realizar (art. 59.1 LCOOP). Para el pago de estas deudas el socio puede entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social u otra inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubiera producido o con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes, si así lo acuerda la AG. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el CR.

B. EXISTENCIA DE UN CAPITAL SOCIAL MÍNIMO

Por otra parte, los legisladores cooperativos establecen un capital social estatutario o legal mínimo que también compensa la variabilidad del capital social. La LCOOP sólo impone la necesidad de fijar en los estatutos un capital social mínimo (art. 45.2) sin señalar una cifra exacta, dejando que sean los socios quienes lo deter-

minen. En cambio, la casi totalidad de leyes autonómicas (excepto la LCAR) fijan un capital social mínimo (suele ser de 3.005 euros) con lo que en teoría se intenta evitar la constitución de cooperativas con cifras simbólicas de capital estatutario y fortalecer así la solvencia financiera e imagen de las cooperativas en el tráfico. Al exigirse un capital estatutario como hace la LCOOP, o legal mínimo como hacen las normas autonómicas, se está configurando la estructura del capital de las sociedades cooperativas con una parte variable y una parte fija puesto que para su reducción se deben cumplir una serie de garantías formales de publicidad e información análogas a los procedimientos de reducción del capital en las sociedades capitalistas. Además, como tendremos oportunidad de demostrar, tras la reforma operada con la Ley 16/2007 que entró en vigor el 1 de enero de 2008, las cooperativas *estatales* van a poder configurar todo o parte de su capital social como *no exigible*, con lo que ese porcentaje de capital social tendrá también mayores caracteres de permanencia.

C. EXISTENCIA DE FONDOS DE CARÁCTER PERMANENTE

La teórica debilidad estructural de las cooperativas, derivada del carácter variable de su capital, es fundamentalmente compensada con la existencia de unos recursos de carácter permanente e irrepartible: los fondos obligatorios. Todas las leyes cooperativas imponen a éstas la obligación de contar y dotar periódicamente un Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) que está destinado específicamente a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa (art. 55 LCOOP), siendo éste, en teoría, el mayor contrapeso a la variabilidad del capital social de estas sociedades.

La finalidad de este fondo, es similar a la que justifica la existencia de una reserva legal en las sociedades de capital, que, como establece el artículo 214 LSA, se tiene que dotar con una cifra igual al 10 por cien del beneficio del ejercicio hasta que alcance, al menos, el 20 por cien del capital social y cuyo destino, mientras no supere ese límite, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas. Pero en las cooperativas la dotación de este fondo es cuantitativamente muy superior (según los artículos 55.1 y 58.1 y 2. LCOOP con un mínimo del 20 por cien de los resultados cooperativos y del 50 por cien de los extracooperativos y extraordinarios, aparte de por las cuotas de ingreso y las deducciones sobre aportaciones por bajas no justificada) y, salvo algunas excepciones legales, se tiene que dotar durante toda la vida de la sociedad y forma parte del patrimonio social irrepartible incluso en caso de fusión, transformación, escisión o liquidación de la cooperativa.

En todo caso, el FRO y, en su caso, los fondos de reservas voluntarios si los hubiera, suelen contribuir de una manera importante a estabilizar financieramente a la cooperativa y en caso de concurso de la cooperativa suelen conformar una parte fundamental de la masa activa con la que los acreedores de la sociedad pueden ver satisfechas sus deudas.

Supuesto diferente es el del Fondo de Educación y Promoción (FEP), que tiene como finalidad la formación y educación de sus socios y trabajadores, la difusión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local

o de la comunidad en general. Este fondo, que según la ley estatal se dota de un mínimo del 5 por cien de los resultados cooperativos y un 50 por cien de los extracooperativos (art. 58 LCoop), «es inembargable e irrepartible entre los socios, incluso en el caso de liquidación de la cooperativa» (art. 56.5 LCoop). Aunque no hay dudas de que este fondo garantiza las deudas contraídas para el cumplimiento de sus fines se plantean dudas acerca de su destino en caso de concurso de la cooperativa. De acuerdo con el tenor del artículo 76.2 LC del principio de universalidad en la constitución de la masa activa del concurso se exceptúa aquellos bienes y derechos, «que teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables», que trasladado al concurso de una cooperativa significa que el FEP debe quedar fuera del conjunto patrimonial con el que se va a pagar la masa pasiva del concurso (Fajardo, 2005, 5248 y 5274). Pero esto no tiene mucho sentido. La Administración Pública va a recibir una parte del patrimonio de la cooperativa tras la liquidación de la misma aún existiendo deudas pendientes con acreedores, lo que en definitiva significa la existencia de un injustificado privilegio a su favor por el derecho que las leyes cooperativas les otorga para separar el importe de estos fondos del patrimonio concursado. Aunque acertadamente se ha defendido que los bienes en los que se hayan materializado la inversión de estos fondos deben formar parte de la masa activa del concurso, puesto que los fines de política jurídica a lo que responde su constitución no justifican su sustracción a la satisfacción de los derechos de los acreedores cuando ello sea preciso, como pasa en supuestos de insolvencia (Morillas, 2004, 214; Pulgar, 2006, 811), dada la finalidad formativa y educativa de estos fondos es difícil que los mismos se hayan invertido en bienes tangibles de gran valor económico. Por ello, debería derogarse el carácter inembargable del FEP en los supuestos del concurso de cooperativas en pro de la satisfacción de los créditos de los acreedores sociales, que ostentan intereses privados en estos casos más necesitados de protección que el interés genérico de promoción del cooperativismo que subyace en el destino de este fondo (como defiende para el similar supuesto de liquidación de la cooperativa Manrique Romero/Rodríguez Poyo-Guerrero, 1980, 103). En nuestra opinión, el pago preferente de las deudas sociales con el importe de este fondo en caso de concurso o de liquidación y el incremento de las expectativas de cobro de los acreedores de las cooperativas sí que es una buena forma de promover el cooperativismo.

De otro lado, si se analizan y se comparan las diversas leyes cooperativas españolas, se percibe importantes diferencias en la dotación de estos fondos, tanto en los porcentajes de resultados que se destinan los mismos, como en la duración de la obligación de dotación. Por tanto, la contribución de los fondos obligatorios a garantizar la solvencia de la cooperativa dependerá, de un lado, de dónde realice la cooperativa su actividad cooperativizada con carácter principal (ya que de ello deriva la ley cooperativa aplicable –art. 2.º LCoop—y, en particular su régimen de dotación de fondos), y de otro, de la política contable y financiera que adopte la sociedad puesto que si sistemáticamente no hay excedentes porque se opera con ideal de beneficio cero de poco servirá la imposición legal de dotar estos fondos de manera proporcionalmente importante (Vargas Vasserot, 2008, 284 y s.).

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el capital social de las cooperativas no es tan variable como en un principio pudiera pensarse o, dicho de otra manera, que la variabilidad del capital social no repercute tan negativamente en la estabilidad financiera de estas sociedades. No obstante, dadas las diferencias existentes entre las distintas leyes cooperativas al regular el régimen económico y financiero de estas sociedades (sobre todo en la obligación de dotar fondos) y el gran margen dispositivo para que las propias sociedades configuren el modelo económico que desean tener, habrá que ir caso por caso a lo que disponga la correspondiente normativa cooperativa, la configuración estatutaria y la gestión llevada a cabo por la sociedad para saber qué garantía ofrece la cooperativa en el tráfico.

2. EL DERECHO DE REEMBOLSO DEL CAPITAL SOCIAL Y EL CONCURSO DE LA COOPERATIVA

Otra cuestión íntimamente relacionada con la solvencia de las cooperativas en momento de crisis es la posible naturaleza acreedora de los socios por este derecho de reembolso (VARGAS VASSEROT, 2007, 115-117). Si los socios son acreedores de la sociedad por las aportaciones realizadas al fondo común social, en caso de concurso los socios podrían quedar incluidos en la masa pasiva del concurso lo que reduciría notablemente la posibilidad de cobro del resto de acreedores. Cuatro son las notas que permiten calificar a un sujeto como acreedor de una sociedad: la titularidad de un derecho de crédito oponible y exigible frente a la misma; la posibilidad de poder solicitar la declaración del concurso necesario de la sociedad; y, abierto el procedimiento de liquidación de la sociedad, el derecho a cobrar del haber social de manera preferente a los socios.

En rigor, hasta que el acuerdo del Consejo Rector sobre la liquidación de las aportaciones el socio cesante es firme y transcurre el tiempo previsto para su pago su crédito no es exigible frente a la sociedad. En ese momento, y no antes, es cuando se convierte en verdadero acreedor de la sociedad, su crédito es oponible frente a la sociedad e integra la masa pasiva en el concurso de acreedores.

En cuanto a la posibilidad del socio de solicitar la declaración del concurso de la cooperativa, cuestión íntimamente ligada a la posible naturaleza acreedora de los socios de la cooperativa, hay que distinguir entre el concurso voluntario y el necesario. El concurso voluntario sólo puede ser solicitado por el deudor, por lo que el socio cesante no puede pedirlo (PULGAR, 2006, 798).

Aunque quién está legitimada para solicitar el concurso es el órgano de administración de la cooperativas (Consejo Rector o administrador único), algunas leyes cooperativas han instrumentados procedimientos para que una minoría de socios puedan iniciar el procedimiento de la solicitud del concurso voluntario. En concreto,

la Ley 8/2006 de Cooperativas de la Comunidad de Murcia dispone en su artículo 97 que cualquier socio podrá requerir del Consejo Rector para que efectúe la convocatoria de la Asamblea General para la adopción del acuerdo de declaración de concurso, si, a su juicio, existe causa legítima de solicitud de declaración de concurso. Si la Asamblea General no se celebrara con esta finalidad, el Consejo Rector o los socios que representen la el 10 por cien del total de la cooperativa podrán instar la declaración de concurso ante el órgano jurisdiccional competente. El incumplimiento de la obligación de convocar la Asamblea General o de solicitar la declaración de concurso es sancionada de una forma muy severa con la responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo Rector por todas las deudas sociales generadas un mes después de que se constatara la causa que justifica la misma.

Respecto al concurso necesario se plantea la controversia sobre si puede o no solicitarlo el socio por ser «personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas» de la sociedad (art. 3.3 LC). En nuestra opinión la legitimación de ciertos socios para la solicitar la declaración del concurso deriva, no de su consideración de acreedores sociales, sino porque por su tipo de responsabilidad pueden verse perjudicados por la insolvencia de la sociedad (VARGAS VASSEROT, 2008, 286). Por eso, en principio, los socios de la cooperativa no pueden pedir el concurso por no concurrir en ellos la responsabilidad personal *ex lege* por las deudas sociales (art. 15.3 LCOOP; en cambio, algunas legislaciones autonómicas permiten optar por la responsabilidad personal ilimitada de sus socios por las deudas sociales: art. 3.1 LCCAT; art. 4 LCCV, art. 8.1 LFCN) en la que se encuentra su fundamento la legitimación contemplada en la LC (PULGAR, 2006, 801 y s.).

Las dudas surgen respecto si el socio cesante en la sociedad puede solicitar el concurso por ser, durante un tiempo, personalmente responsable de las deudas sociales, aunque con una responsabilidad limitada a la cuantía de su aportación (15.4 LCOOP). Pero si el socio se ha dado de baja ya no es socio, y aunque ostente un crédito contra la sociedad por el importe de su reembolso ya no existe el vínculo societario y, por ello, desde que el acuerdo de baja o expulsión es firme no puede ejercer los derechos, ni se le pueden exigir las obligaciones inherentes a la posición de socio y, por eso mismo, no puede como socio solicitar el concurso de la sociedad, pero sí como acreedor de la misma (ROJO, 2004, 216), una vez que su crédito esté vencido y sea exigible (de la necesidad del carácter vencido del crédito del acreedor instante: PULGAR, 2005, 480). Y en el supuesto de que el concurso de la cooperativa lo solicite otro acreedor o la propia entidad, entonces el crédito que ostenta el antiguo socio, esté o no vencido, forma parte de la masa pasiva del concurso, sea como acreedor ordinario sea como acreedor subordinado (art. 92 y 93 LC).

La LC incluye dentro de la categoría de créditos subordinados, esto es, que sus titulares cobran en último lugar en caso de liquidación y con una limitación importante en su participación en el proceso concursal, a los créditos de las «personas especialmente relacionadas con le deudor» (art. 92.5. LC), entre las que se incluyen «los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las

deudas sociales y aquellos titulares de, al menos, un 5 por cien del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por cien si no lo tuviera» (art. 93.2.1 LC). Pero antes de la baja, el socio de la cooperativa no tiene ningún crédito contra la sociedad para exigir el importe de sus aportaciones, por lo que en caso de concurso no puede formar parte la masa pasiva del mismo, al menos con base en ese derecho (FAJARDO, 2005, 5.278; en contra GARCÍA-GUTIÉRREZ, 2006, 48). Y una vez fuera de la sociedad, convertido ya en acreedor social, si ostenta ese porcentaje mínimo de capital social, se le aplicará la presunción *iuris tantum* de persona especialmente relacionada con el deudor por ser «cesionarios o adjudicatarios de créditos» siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso» (art. 93.3 LC), sin contar el posible ejercicio de las acciones rescisorias y de impugnación (arts. 71 y 72 LC).

En todo caso, y esto nos parece importante, de declarase el concurso de la cooperativa la administración concursal puede ejercer las acciones de reintegración para intentar traer a la masa activa el importe de las aportaciones liquidadas a los socios por darse de baja de la sociedad. En concreto, el artículo 71.1 LC establece que declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no haya habido intención fraudulenta. Y sin perjuicio de que si ha salido ese dinero del patrimonio de la cooperativa es evidente el perjuicio patrimonial, en concreto se presume el mismo de los actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado (art. 71.3.1.º LC), categoría en la que encajan los socio titulares de más de un 10 por ciento del capital social de la cooperativa (art. 93.2 LC) (aunque sin referirse al caso de la baja de los socios de la cooperativa, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 2007, 229-264). Cabe añadir que en caso de que la cooperativas siga funcionando una vez declarado el concurso, que es lo absolutamente normal, el crédito que los socioes tengan contra la sociedad derivados de la actividad cooperativizada que realizan con ella, deben considerarse créditos contra la masa como si fuesen contratos con tercersos necesarios para continuar la explotación de la empresa.

3. LA MASA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y EL CONCURSO DE LA COOPERATIVA

Después de analizar el régimen legal del capital social cooperativo y demostrar que financieramente hablando estas sociedades no son, en principio, más débiles que el resto de sociedades mercantiles hemos de hacer referencia a una cuestión que nos parece esencial en situaciones de crisis de la cooperativa: la titularidad de la masa de gestión económica.

Con este término, masa de gestión económica, la doctrina especializada se refiere al conjunto de productos, fondos o bienes de cualquier tipo, que entregan los socios para su gestión por la cooperativa en interés de sus socios (VICENT CHULIÁ, 1975-1976, 162; FAJARDO, 1997, 84-103; VARGAS VASSEROT, 2006, 120 y ss.). Como se sabe, para el desarrollo de la actividad cooperativizada los socios cooperativistas vienen obligados a entregar bienes o productos a la cooperativas (pensemos en una cooperativas de comercialización), a producir o fabricar bienes o servicios en el seno de la cooperativa (cooperativas de trabajo asociado) o a pagar a la cooperativa por los bienes o servicios que reciben de ella (pensemos ahora en una cooperativa de consumidores y usuarios o en una cooperativa de viviendas). Pues bien, la titularidad de esos bienes, o de ese dinero, es determinante para concretar si entrar a formar parte de la masa activa del concurso por ser bienes y derechos integrados e el patrimonio del deudor (art. 76.1 LC) o bien tienen que ser entregados a sus legítimos titulares por ser de propiedad ajena (art. 80.1 LC).

Es obvio que si se entiende que los bienes entregados —o los pagos realizados— por los socios a la cooperativa en el marco de la cooperación no se transmiten a la sociedad, no se va a poder considerar que esas entregas –o pagos— forman parte de la masa patrimonial con la que se va a pagar a los acreedores del concursado. La cuestión es de vital importancia ya que dada las bajas cifras de capital social con las que operan la mayoría de cooperativas de nuestro país en muchas ocasiones gran parte del patrimonio afecto a la actividad empresarial esa masa de gestión económica.

En el análisis de dicha cuestión debemos partir del artículo 52.3 de la LCOOP, que bajo el epígrafe de *aportaciones que no forman parte del capital social*, dispone que «los bienes de cualquier tipo entregados por los socios para la gestión cooperativa y, en general, los pagos para la obtención de los servicios cooperativizados, no integran el capital social y estén sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la sociedad cooperativa», precepto que con ciertos matices es ratificado por la mayoría de normas autonómicas de cooperativas (art. 86.2 LCAND, art. 61.3 LCCAT). Y esto, integrado con el contenido de la disposición adicional tercera de la LCOOP por la que los acreedores personales de los socios «no tienen derecho alguno sobre los bienes de la cooperativa ni sobre las aportaciones de los socios al capital social, que son inembargables» (art. 85.5 LCAND, art. 70 LCG, art. 55 LCEX), se suele interpretar a favor de la inembargabilidad de la masa de gestión económica por parte de los acreedores sociales y de la titularidad jurídica de la masa de gestión económica corresponde a los socios de la cooperativa. Esta interpretación es la más acorde con algunos antecedentes legales.

El artículo 52.3 LCOOP tiene su antecedente más remoto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de 1943, que disponía que «la imposición de fondos, las entregas de productos o materias primas para la gestión cooperativa y, en general las aportaciones para la obtención de servicios sociales, *constituyen siempre una propiedad del socio* y es una forma de utilización por éste de dichos servicios, sujetos sin embargo, a las condiciones fijadas o contratadas con la

sociedad», con lo que quedaba claro que la titularidad de esos bienes seguía siendo de los socios y no de la cooperativa. La norma pasó, sin apenas variación, al artículo 16 del Reglamento cooperativo de 1971, pero la Ley de Cooperativas de 1974 en su artículo 13.3 dispuso, en cambio, que «en ningún caso integraran en el capital social las entrega y pagos para la obtención de los servicios cooperativos», con lo que ya no se hacía referencia expresa al mantenimiento de esos bienes y fondos en el patrimonio del socio. El Reglamento de 1978, que desarrollaba la Ley de Cooperativas de 1974, facilitó considerablemente la interpretación a favor de la no transmisión de la propiedad de los bienes entregados para su gestión por la cooperativa, al prescribir, en su artículo 38, que los bienes entregados por los socios a la cooperativa «podían transmitirse» y «eran embargables por los acreedores personales de los socios», que eran significativas muestras de la titularidad de dichos bienes por parte de los socios. Pero esto no se mantuvo en la LGC de 1987, que, en la línea de la actual LCoop, sólo establecía la inembargabilidad por parte de los acreedores personales de los bienes de la cooperativa y de las aportaciones de los socios al capital social (art. 79) y que los bienes entregados por los socios para la gestión de la cooperativa y pagos para la obtención de los servicios cooperativizados no integran el capital social (art. 81.2).

Esto lo confirma la *ratio* de la norma, que no era otra que la de proteger al máximo el patrimonio individual de los cooperativistas (Vicent Chuliá, 1994, 307 y s.), pone en evidente riesgo la posibilidad del cobro de las deudas sociales por los acreedores de la cooperativa en caso de concurso ya que justificaría la separación de la misma de la masa activa.

Como se ha apuntado, ¿significa esto que los pagos realizados por los socios para la financiación de sus viviendas en régimen cooperativo, no pueden ser embargados por los acreedores sociales que contrataron con la cooperativa la construcción de las viviendas o el suministro de materiales? (Fajardo, 1999 II, 117-120).

Las leyes autonómicas de cooperativas han seguido con carácter general el mismo criterio que la LCoop al declarar exclusivamente que dichos bienes y fondos no integran el capital social de la cooperativa (art. 86.2 LCAnd, art. 61.3 LCCat, art. 45.8 LCFN, art. 72.3 LCRur, etc.) y, otras, señalando expresamente que esos bienes o fondos no integran el patrimonio cooperativo (art. 86.2 LCAND; art. 61.3 LCCAT, art. 45.8 LCFN, art. 72.3 LCRM, etc.).

En nuestra opinión no hay que ser muy cautos en la interpretación integradora de estos preceptos. El artículo 52.3 LCoop sólo dice que la masa de gestión económica no constituye capital social y cuál es el régimen de fuentes aplicables a esos bienes y fondos aportados por los socios a la cooperativa en el marco de la cooperación. En ningún momento dice que sean inembargables y que pertenezcan a los socios (aunque eso lo dijesen algunos lejanos antecedentes legales de la norma) y, por tanto, formarán o no parte de la masa activa del concurso según lo que se deduzca de las condiciones fijadas y contratadas con la cooperativa.

El inciso final del artículo 52.3 LCoop, que declara que los bienes entregados por los socios para la gestión de la cooperativa y los pagos realizados para la obten-

ción de los servicios cooperativizados «están sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la sociedad cooperativa», se deja a voluntad de las partes la articulación concreta de la relación cooperativa, en el sentido de que la sociedad puede decidir si fija o no pactos especiales con los socios. Pero si los hay, y esto nos parece fundamental, tienen carácter preferente respecto al contrato social, que tendrá una aplicación subsidiaria. El contenido de este precepto se reitera en la mayor parte de las leyes cooperativas autonómicas (art. 65.3 LCPV, art. 65.3 LCG, art. 69.2 LCLR, art. 62.3 LCCLM, etc.), aunque hay que reconocer una cierta diferencia en la redacción de los preceptos autonómicos concordantes. Alguna ley habla de que las entregas que realicen los socios «están sujetas a las condiciones establecidas por la sociedad» (art. 55.5 LCAR), en otros caso, simplemente se dice que la aportaciones para la gestión cooperativa se hará «en las condiciones acordadas» (art. 45.8 LCFN), en otras no se dice nada al respecto (LCCV y LCCM), o lo que es más común, «en las condiciones fijadas o contratadas por la sociedad cooperativa» (art. 86.2 LCAND, art. 58.2 LCEX, art. 69.3 LCCL, art. 61.3 LCCAT). Sobre la interpretación de estos preceptos: PANIAGUA 1997, 420; 2005, 106-108; MARTÍNEZ SEGOVIA, 2005, 225; y VARGAS VASSEROT, 2006, 155 y ss.).

Esto obligará en caso de concurso a indagar cómo se ha articulado la relación cooperativa o mutualista, esto es, la relación jurídica que subyace en la actividad cooperativizada que realiza el socio con la sociedad, ya que dependiendo de cómo se haya articulado esta relación se podrá deducir si esos bienes o fondos son patrimonio de la cooperativa o son de los socios.

En este sentido nos parece muy interesante la previsión de algunas normas autonómicas de que convencionalmente, a través de los estatutos, se pueda alterar el régimen general de la titularidad de la masa de gestión económica en el sentido de que dichas aportaciones sí integren el patrimonio cooperativo (art. 57.2 LCCM y art. 64.4 LCCV), lo que, en nuestra opinión, más que establecer un régimen diferente al general, vienen a confirmar y apoya la tesis de que el legislador no establece un destino fijo a esos bienes o fondos, sino que depende de cuál haya sido la configuración concreta adoptada por la cooperativa para articular la relación sociedad-socio pero exigiendo que esa configuración se hagan de manera expresa en los estatutos (en contra, FAJARDO, 2005, 5.254). Distinto es el caso de las leyes que categóricamente afirman, como la LCPV (art. 65.3 *in fine*) y la LCG (art. 65.3 *in fine*), que las entregas de los socios (que no los fondos) de bienes a la cooperativa para su gestión no integran el patrimonio de la cooperativa y no pueden ser objeto de embargo por los acreedores sociales. Aquí no caben interpretaciones *contra legem* y hay que admitir el derecho de separación que tiene los socios sobre esos bienes entregados a la cooperativa.

Pero salvo estas excepciones, consideramos que acudir al régimen concreto articulado en cada cooperativa, aunque genere cierta inseguridad al no saber con certeza *prima facie* quién es el titular en de esos bienes o fondos entregados a la cooperativas, es la solución más equilibrada para satisfacer todos los intereses en juego. Considerar *per se* que la masa de gestión económica es siempre de los socios

constituye un gran riesgo para el tráfico, y aceptar que esos bienes pertenecen a la cooperativa sería un incentivo para el abandono de socios del tipo cooperativo, buscando modelos societario que les permitiese conservar la titularidad de esos bienes (*v.gr.* sociedades anónimas con prestaciones accesorias).

Otra cuestión distinta, pero evidentemente relacionada, es si los acreedores de los socios tienen algún derecho sobre la masa de gestión económica. Sobre las aportaciones al capital social y sobre los bienes de la cooperativa está claro que no (disp. adic. 3.ª LCoop). De nuevo habrá que estar caso por caso para ver si se ha transmitido la propiedad de esos bienes o no, ya que lo único que dice el precepto es que las aportaciones de los socios al capital social son inembargables por los acreedores de éstos y, por tanto, en caso de concurso del socio de la cooperativa habrá que excluir de la masa activa esas aportaciones. Esto puede dar lugar a abusos, ya que el socio puede ir incrementado el importe de sus aportaciones con cargo a los excedentes de cada ejercicio a sabiendas de quedar a salvo de sus acreedores personales (PANIAGUA, 2005, 241).

4. LA REPERCUSIÓN DE LA NIC 32 EN EL RIESGO DE INSOLVENCIA Y CONCURSO DE LAS COOPERATIVAS

La Norma Internacional de Contabilidad número 32 (*Instrumentos financieros: presentación e información a revelar*) tiene como objetivo establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio neto. Según las normas de presentación que contiene la susodicha NIC, el emisor de un instrumento financiero lo clasificará en el momento de su reconocimiento inicial «de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio» (párrafo GA15), siendo el elemento clave para diferenciar a un pasivo financiero de un instrumento de patrimonio la existencia de «una obligación contractual, que recae sobre una de las partes implicadas en el instrumento financiero (el emisor), consistente en entregar efectivo u otro activo financiero a la otra parte (el tenedor) o intercambiar activos financiero o pasivos financieros con el tenedor en condiciones que sean potencialmente desfavorables para el emisor» (párrafo GA17). Trasladado a la contabilidad de una cooperativa significa que las aportaciones de los socios al capital social cooperativo deben ser calificadas como pasivo (deuda), ya que existe una obligación contractual (contrato de sociedad, desarrollado en los estatutos sociales y reglamentos de régimen interno) que recae sobre la sociedad cooperativa (emisor), consistente en entregar efectivo al socio (tenedor) y que, aunque tenga la forma legal de patrimonio (capital social), en el fondo son pasivos, esto es, deuda, porque existe un derecho del socio a reclamar su importe en caso de baja de la cooperativa (derecho de reembolso).

Ante la enorme repercusión que el contenido de la NIC 32 tuvo en el movimiento cooperativo en cuanto que el capital social de las cooperativas debería ser considerado no un fondo propio de la empresa sino un instrumento de deuda, se hizo necesaria la consulta por el IASB a expertos técnicos en la materia que confirmaran la idoneidad de su contenido y se invitó a su Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC) a que elaborase una interpretación con el fin de facilitar la aplicación de esta NIC a la contabilidad de las sociedades cooperativas. Finalmente la NIC 32 fue adoptada por el Reglamento núm. 2237/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento núm. 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad y la interpretación del IFRIC fue incorporada en el anexo de esta última norma por el Reglamento núm. 1073/2005 de la Comisión, de 7 de julio de 2005. Por último, hay que anotar que el Reglamento 108/2006 de la Comisión ha modificado el Reglamento 1725/2003 en lo relativo a varias NIC y, en particular, se ha modificado el propio título de la NIC 32 que ahora se denomina *Instrumentos financieros: Presentación*.

Aunque el contenido de la interpretación no contentó al sector cooperativo, que demandaba una excepción general de la NIC 32 a las cooperativas por sus peculiaridades societarias y por los efectos negativos que podía conllevar la calificación de las aportaciones al capital social de los socios como recursos ajenos, aclaró que la existencia de un derecho de rescate a favor del tenedor no significa automáticamente que el instrumento financiero sea clasificado como pasivo financiero, sino que esto dependerá de las características de dichas aportaciones, especialmente de las del rescate o del reembolso en terminología más cooperativa. Así, aunque al revisar el contenido de la NIC 32 el IASB no reconsideró los planteamientos fundamentales que contenía, sí se reconoció que, a la hora de determinar si un instrumento debe calificarse como pasivo financiero o como instrumento de patrimonio, se debían tener en cuenta las condiciones del contrato (*considerando* 2.º Reglamento 2237/2004) y, en concreto, si existía un derecho incondicional por parte de la entidad a evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero con el objeto de liquidar una obligación contractual ese instrumento podría calificarse como patrimonio neto (párrafo GA19 y más claramente párrafo 7 Interpretación IFRIC 2). Por tanto, las aportaciones de los socios al capital cooperativo tendrán naturaleza contable de fondos propios cuando exista, legal o contractualmente, un derecho incondicional de la sociedad a rechazar su pago.

Lo que ocurre es que tal como estaba en nuestra legislación cooperativa reconocido el derecho al reembolso, que aunque se puede limitar cuantitativa y temporalmente, no se puede impedir su ejercicio, las aportaciones que los socios hagan al capital social deben ser calificadas contablemente como pasivo, eso sí, a largo plazo por superar siempre su vencimiento el límite de un año. Solamente cuando el importe del reembolso sea exigible por el socio a la sociedad en menos de un año, se contabilizará su importe en la partida de pasivo exigible a corto plazo. El derecho de reembolso es una manifestación del principio cooperativo de puertas abiertas que rige

en las sociedades cooperativas, pero su reconocimiento no es connatural al cooperativismo ya que se puede garantizar la libre entrada y salida de socios sin tener que reconocer este derecho de reembolso en términos tan absolutos como lo hacen las leyes de cooperativas españolas.

Para evitar que las aportaciones de los socios al capital social de las sociedades cooperativas sean siempre calificadas de recursos ajenos, se hizo necesario realizar una serie de ajustes legales en la articulación de los derechos de reembolso en caso de baja del socio en la LCoop, lo que debería haber sido aprovechado por el legislador para abordar una reforma más amplia y global de la estructura económica-financiera de las sociedades cooperativas y en concreto de su capital social.

El contenido de la NIC 32 plantea un cambio en la forma tradicional de contabilización del capital social en las sociedades cooperativas que ha provocado una gran alarma en el movimiento cooperativo, llegando a augurarse consecuencias gravísimas para la solvencia de las cooperativas y para el futuro del sector. Se llegó a decir que esta nueva forma de contabilizar el capital social significaría la insolvencia de todas las cooperativas y que sería generalizada la disolución de sociedades y la conversión en otros tipos sociales. No creemos que el cambio en la calificación contable de las aportaciones de los socios al capital cooperativo tenga unos efectos tan desastrosos como los vaticinados desde algunos sectores del cooperativismo, sino que eso dependerá del tipo de cooperativa de que se trate. No obstante, hay que reconocer que el contenido de la NIC 32 perjudica a las cooperativas porque parte de sus tradicionales fondos propios pasarán a ser recursos ajenos, lo que conllevará una pérdida del valor contable del capital y financieramente estas sociedades van a parecer menos estables de lo que son en realidad. Por ello las cooperativas se van a encontrar en una situación de desventaja frente a otros tipos sociales que desde su constitución cuentan con una determinada cifra de recursos propios.

Las cooperativas ya tienen una serie de importantes cargas parafiscales (dotación de fondos obligatorios, limitación en el reparto de excedentes, etc.) que ahora se agravan con esta calificación contable, por lo que se deben reclamar medidas legales y fiscales que compensen la situación de agravio en la que se encuentra en comparación con otros tipos de sociedades mercantiles y evitar una huida a otras formas sociales menos exigentes. Y hay que recordar también el mandato constitucional a los poderes públicos de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas (art. 129.2 CE). Por eso, además de ser necesario armonizar el derecho de reembolso de los socios con los nuevos criterios contables, y otros ajustes legales, consideramos que se puede aprovechar la coyuntura para exigir una reforma en su régimen económico, financiero y fiscal que compense la pérdida de competitividad que pueden sufrir con la nueva normativa contable.

El incremento de los niveles de endeudamiento y de insolvencia, y la reducción de la rentabilidad financiera de la misma, puede afectar negativamente su crédito en el mercado y las posibilidades de obtener financiación o inversión externa. Los analistas financieros y de riesgos suelen acudir al estudio de los estados financieros contables para diagnosticar la situación financiera actual y futura de las empresas,

y poder así aconsejar correctamente a los sujetos interesados (inversores, acreedores, directivos, etc.) sobre la toma de decisiones a realizar. Para ello se suelen utilizar una serie de ratios financieros (ratio de solvencia, ratio de tesorería, ratio de endeudamiento, ratio de endeudamiento, ratio de liquidez, ratio de rentabilidad financiera, fondo de maniobra, apalancamiento financiero, etc.), que indudablemente se verá afectados con la contabilización de las aportaciones al capital como un exigible, alterándose de una forma determinante la imagen fiel de la empresa que parecerá, financieramente hablando, más débil e inestable que lo que en realidad es, ya que entre ese pasivo se contabilizará una importante partida con vocación de permanencia y garantía de terceros (AMAT SALAS, 2002, 94 y ss.).

Como se ha demostrado empíricamente, los resultados de estos ratios en el análisis financiero de las cooperativas varían negativamente si en vez de considerar todo el capital social patrimonio neto (Orden ECO 3614/2003), sólo calificamos como tal a parte del mismo, considerando el resto como pasivo exigible (NIC 32), aunque dichos efectos negativos varían mucho en función del nivel de capitalización de la cooperativa (MARÍ VIDAL, 2006, 102 y ss.). De otro lado, este nuevo tratamiento contable de las aportaciones de los socios a las cooperativas como deudas en vez de como neto puede tener efectos negativos en las calificaciones de riesgos de las agencias de *rating,* aspecto que puede ser especialmente relevante para grandes cooperativas, como ocurre, por ejemplo, con las cooperativas de crédito.

Al aumentar el endeudamiento, por el incremento del pasivo y reducción del activo, se puede incrementar el riesgo de insolvencia de la cooperativa, pero más desde un punto de vista financiero que jurídico. Como hemos hecho referencia con anterioridad, los ratios de endeudamiento, de liquidez y de solvencia de las cooperativas se verán afectados negativamente por el cambio de criterio a la hora de contabilizar las aportaciones de los socios al capital social derivado de la aplicación de la NIC 32, y ello puede afectar a la imagen de solvencia que los acreedores y los propios socios tienen de la empresa. No obstante, tal como declara la LC, el presupuesto básico para la declaración del concurso es la insolvencia del deudor (art. 2.1), esto es, cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2), con lo que el presupuesto objetivo del concurso se sitúa en una situación económica de fondo y no de meros hechos externos (PULGAR, 2005, 318).

La LC huye de la tradicional concepción patrimonial de la insolvencia como mero desbalance contable (pasivo superior al activo). En este sentido, a los efectos de la declaración del concurso de acreedores, en todo caso la valoración del desbalance no debe hacerse con arreglo a criterios meramente estáticos de confrontación numérica entre activo y pasivo, sino que hay tomar un criterio dinámico de desbalance constitutivo de insolvencia, si analizando la rentabilidad de la empresa, financiación y expectativas de evolución futura de la misma, el deudor no puede recuperarse de la situación de crisis económica (PULGAR, 2005, 319; DUQUE, 2005, 1.012 y s.). De este modo, aunque la recalificación de las aportaciones cooperativas como pasivo exigible incremente el riesgo de insolvencia, por incremento de esas obligaciones exigibles y empeoramiento de los resultados de los ratios financieros indicados, esto

no tiene porque significar en términos jurídicos que la sociedad es insolvente, sino que habrá que comprobar si la sociedad puede hacer frente a dichas obligaciones, ya que aún teniendo un balance de situación con un pasivo mayor que el activo, la cooperativa puede tener mecanismos suficientes para seguir cumpliendo su obligaciones, por ejemplo, por la existencia de reservas ocultas, activos minusvalorados, o acudiendo al crédito externo.

La NIC 32 también puede incidir en el incremento de la obligación de reducir capital y de las posibilidades de incurrir en causa de disolución. Las leyes cooperativas obligan a reducir el «capital social» de la cooperativa cuando por el reembolso de las aportaciones se reduzca éste por debajo del capital mínimo previsto en los estatutos o fijado legalmente, teniendo que disolverse la cooperativa a menos que en el plazo de un año se reintegre o se reduzca el importe de su capital social en cuantía suficiente.

Pero esté donde esté situado el capital social en el balance de la cooperativa, seguirá siendo capital social, por lo que el cambio contable no afecta de una manera directa a la necesidad de reducción de capital ni a la consecuente obligación de disolución de la sociedad. Incluso, se llegó a decir que todas las cooperativas españolas estarían inmersas en una causa genérica de disolución desde su constitución ya que una de las menciones obligatorias de la escritura de constitución es la manifestación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones a capital desembolsadas o suscritas no es inferior al capital mínimo fijado en los estatutos sociales [art. 10.1, letra f) LCoop; art. 13.2, letra f) LCAnd; art. 12.2, letra e) LCCM]. Pero como decimos, aunque el capital social esté situado en el balance sigue siendo capital social, por lo que habría lugar a disolución por reducción del mismo por debajo del mínimo legal o estatutario.

De otro lado, según la LCoop, la reducción del capital social será obligada cuando por consecuencia de pérdidas el «patrimonio contable» de la cooperativa haya disminuido por debajo de la cifra de capital social mínimo que se establezca en sus estatutos y hubiera transcurrido un año sin haber recuperado el equilibrio (art. 45.8.3º). De manera excepcional, la LCCM, aproximándose al régimen de disolución de las sociedades de capital, toma como referencia la relación entre el «haber social» y el capital social para la reducción obligatoria por pérdidas (art. 56.2) («La reducción del capital será obligatoria para la cooperativa cuando las pérdidas hayan disminuido su haber social por debajo de las dos terceras partes del capital y hubiera transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado su patrimonio») establece como causa de disolución que, como consecuencia de pérdidas quede reducido «el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social mínimo estatutario, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente» [art. 93.1, letra g)].

El capital social en la SA determina la obligatoriedad de la reducción del mismo por pérdidas cuando éstas hayan disminuido su haber por debajo de un determinado porcentajes (2/3 partes de la cifra del capital social estatutario) y hubiera transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio (art. 163.1, 2ª LSA). Pero en las cooperativas la obligación de reducción del capital social por pérdidas

no utiliza como referente en capital social real, sino el capital social mínimo, que actúa limitando la reducción del capital y del patrimonio de la cooperativa (art. 45.8, 3º LCoop), pudiendo llevar incluso a la disolución de la cooperativa. Por lo tanto el capital, eso sí mínimo estatutario o mínimo legal, influyen en la obligación de reducir el capital social de la cooperativa.

Vemos como en este punto no ha habido gran uniformidad terminológica y funcional entre las distintas leyes cooperativas y se plantea la duda de si para el cálculo del haber social o del patrimonio social de la sociedad se debe reducir el importe del capital social que, de acuerdo con lo que establece la NIC 32, aparezca en el pasivo del balance. Lo que parece evidente es que si por «patrimonio» y «haber social» sólo consideramos a los recursos propios de la cooperativa, las posibilidades de que las cooperativas incurran en la obligación de reducir capital e incluso disolverse aumentan con el cambio de calificación de las aportaciones de los socios al capital social.

En la interpretación de estos conceptos nos debe servir de guía la Resolución de 20 de diciembre de 1996 del ICAC, que fijaba criterios generales para determinar el concepto de «patrimonio contable» a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades mercantiles. Según esta Resolución dichos términos eran contablemente coincidentes y precisaba que, para la determinación de sus magnitudes se debían tener en cuenta con signo positivo además de los fondos propios, subvenciones al capital e ingresos fiscales, los «préstamos participativos». Centrándonos en estos últimos, que son los que ahora nos interesan, como se sabe, los préstamos participativos son híbridos financieros que caracterizan por estipular una retribución o interés variable en función de la evolución de la empresa, por lo que tiene una naturaleza diferente a los préstamos tradicionales y sus titulares cobran los créditos si la empresa marcha bien pero, en casos de crisis económica, se sitúan en una posición próxima a la de los socios. Si los préstamos participativos se consideran patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades prevista en la legislación mercantil (art. 20 Real Decreto-Ley 7/1996), por su naturaleza híbrida entre recursos propios y ajenos, lo mismo se debe hacer por analogía con las aportaciones de los socios al capital cooperativo que aparezcan en el pasivo de la empresa. No obstante, sería deseable un pronto pronunciamiento de la ICAC que aclarase las dudas que esta cuestión ha planteado.

Sin duda, son los efectos que el aumento de los recursos ajenos tendrá sobre la solvencia y endeudamiento de la cooperativa los que más preocupan al sector. Pero de un lado, solvencia, como decimos, no es sólo tener más o menos recursos propios, sino capacidad de pagar las deudas con regularidad. Esto nos debe hacer recapacitar sobre si son o no correctas las formas de analizar la solvencia y riesgo de las sociedades en general y de las cooperativas en particular. Los analistas financieros deben tener en cuenta estas peculiaridades de la contabilidad de las cooperativas para no fijarse exclusivamente en el nivel de recursos ajenos, ni en la clásica proporción de recursos ajenos y recursos propios para determinar el nivel de endeudamiento de la cooperativa, sino que deberían valorar que esa partida del capital social

en el pasivo exigible de la sociedad tiene los caracteres de un recurso propio por su permanencia y por las funciones que cumple y, si se considera que las aportaciones al capital social son exigibles, hay que reconocer que lo son a muy largo plazo, con un gran carácter de permanencia, de disponibilidad por parte de la sociedad y afectos al riesgo de la empresa.

Vale la pena de nuevo recordar que es posible estipular estatutariamente medidas para evitar la descapitalización de la cooperativa por la salida de socios y, así, se pueden articular compromisos de permanencia para los socios de la cooperativa (hasta un límite de cinco años [art. 17.3 LCOOP, art. 26. 3 LCPV, art. 25 LCEx, art. 17.1 LCCV, art. 22.2 LCR; etc.], que en algunas leyes autonómicas se amplía hasta diez años [art. 42.2 LCAND, art. 23.2 LFCN, art. 20.2 LCG, etc.], plazos de preaviso de la baja y, lo que es fundamental, que hasta que no se produzca la liquidación definitiva de las aportaciones al socio por el CR y no transcurra el plazo para su pago (que puede llegar hasta cinco años según la LCOOP —art. 51.4— y los preceptos autonómicos concordantes) no se puede exigir a la sociedad el importe del reembolso.

Pero, por lo que parece, todo esto no ha sido suficiente para la NIC 32 ni para el IFRIC, ya que, a pesar de este carácter de permanencia (si en los estatutos se estiran al límite los plazos de permanencia y los plazos para efectuar al reembolso que puede significar, por ejemplo, en una cooperativa andaluza, quince años), estas aportaciones son consideradas recursos ajenos de la cooperativa salvo que la sociedad tenga un derecho incondicional a rehusar su pago, algo que va en contra de la legislación cooperativa de la mayoría de CCAA.

No conviene caer en la trampa del peso del neto o de los recursos propios (capital social + reservas) en el pasivo como criterio de solvencia, de capacidad de conseguir recursos financieros, sino que se debe tener en cuenta el volumen de negocio, el éxito empresarial de la cooperativa y las perspectivas de crecimiento de la empresa (GARCÍA-GUTIÉRREZ, 2006, 43 y s.). Para una entidad financiera, a la hora de conceder un crédito a una cooperativa, lo que le debe interesar es su capacidad de generar dinero, su productividad y liquidez, y no si tiene más o menos capital social en la cuenta de neto. Se hace, por tanto, necesario tener en cuenta las particularidades de las cooperativas en la conformación del balance y, en concreto, que una parte del pasivo exigible proviene de las aportaciones de los socios al capital social y que cumplen con las características típicas de los fondos propios (vocación de permanencia, función de garantía, propiedad de la sociedad, etc.) y, por ello, se deberían aplicar por parte de los analistas financieros protocolos de actuación diferentes a los habituales cuando se tratase de analizar financieramente una cooperativa (MERINO HERNÁNDEZ, 2004, 76 y s.).

De otro lado, con las cifras del capital social con las que suelen constituirse la mayoría de cooperativas de nuestro país, con cifras irrisorias en relación al volumen de negocios y que muchas veces se limitan a cubrir el mínimo legal prescrito por la ley cooperativa correspondiente, las consecuencias de la calificación de esas aportaciones al capital social como recursos propios o pasivos exigibles no son tan

evidentes. Para un gran número de cooperativas españolas, especialmente las de pequeño tamaño, su situación financiera no va a cambiar con esta nueva forma de calificar contablemente el capital social, ya que la partida de recursos propios por aportaciones de los socios suele ser de tan poca cuantía que la necesaria financiación externa tiene que garantizarse por otros medios. Mayores problemas se plantean para las cooperativas de mayor tamaño y con un alto nivel de capitalización y para ellas sí que se hace necesaria una reforma legal que les permita contabilizar esas partidas dentro de los recursos propios de la entidad.

A nivel estatal contamos con la reciente reforma de los artículos 45.1, 48.4, 51, 75.3 y 85.3 de la LCoop contenida en la disposición adicional cuarta de de la Ley 16/2007 «de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional», que intenta armonizar el derecho de reembolso con los nuevos criterios contables de modo que las aportaciones al capital social puedan contabilizarse como recursos propios (Vargas Vasserot, 2007, 114 y ss.). Fue el legislador cooperativo vasco el que tomó la delantera en la adaptación de su normativa al contenido de la NIC, y así, el 1 de diciembre de 2006 se promulgó la Ley 8/2006, de segunda modificación de la LCPV, que reforman varios preceptos de dicha norma. Posteriormente la Navarra aprovechó la promulgación de su nueva Ley Foral 14/2006 de Cooperativas para adaptarse al contenido de la NIC 32 (Divar/Gadea, 2006, 7 y ss.). Como se observa los preceptos reformados de la ley vasca, de la navarra y los de la reforma de la LCoop prácticamente son los mismos, como seguramente sean muy parecidas las iniciativas legislativas que en breve emprendan en resto de autonomías para adaptarse a los nuevos criterios contables.

BIBLIOGRAFÍA

DIVAR, J. y GADEA, E. (2006): «Adaptación de la Ley de Cooperativas del País Vasco a las Normas Internacionales de Contabilidad (Apuntes para una nueva configuración del régimen del capital en las Sociedades Cooperativas)», *REVESCO*, núm. 89, pp. 7-26.

DUQUE DOMINGUEZ J. F. (1986): «Libre adhesión y el principio de puerta abierta en las sociedades cooperativas», en *Primeros encuentros Cooperativos de la Universidad del País Vasco,* Vitoria, pp. 33 y ss.

———— (1988): «Principios cooperativos y experiencia cooperativa», en *Congreso de cooperativismo*, Bilbao, Universidad de Deusto, pp. 93 y ss.

———— (1988-1989): «La baja obligatoria del socio», *REVESCO*, núms. 56-57, pp. 13-48.

EMBID IRUJO, A. (1991): *Concentración de empresas y Derecho de cooperativas*, Murcia, Universidad de Murcia.

FAJARDO GARCIA, G. (1997): *La gestión económica de la cooperativa: responsabilidad de los socios*, Madrid, Tecnos.

————- (2005): «La masa activa y pasiva del concurso de cooperativas», en *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia,* T. V, Madrid, Marcial Pons, pp. 5248-5274.

GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ, C. (2006): «La reafirmación de las aportaciones de (propiedad de) los socios de la sociedad cooperativa. Propuesta de regulación de las sociedades de responsabilidad limitada cooperativa», *REVESCO,* núm. 90, 2006, pp. 45 y ss

LEON SANZ, F. (1997): «Fusión, transformación y otras modificaciones estructurales de sociedades cooperativas. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas», *RdS,* núm. 9, pp. 25-59.

PANIAGUA ZURERA, M. (1997): *Mutualidad y lucro en la sociedad cooperativa,* Madrid, MacGraw-Hill.

——— (2005): *La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social*, Vol. 1, Tomo XXII del Tratado de Derecho mercantil, Coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Madrid, Marcial Pons

PASTOR SEMPERE, C. (2002): *Los recursos propios en las sociedades cooperativas,* Madrid, Ed. ER.

PULGAR EZQUERRA, J. (2005): *La declaración del concurso de acreedores,* Madrid, La Ley.

————- (2006): «El concurso de la cooperativa agraria y de la sociedad agrarias de transformación», en *Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación*, PULGAR EZQUERRA/VARGAS VASSEROT, Madrid, Dykinson, pp. 781-820.

ROJO FERNANDEZ-RIO, A. (2004): «Art. 3», en *Comentario de la Ley Concursal,* Dir. ROJO/BELTRÁN, vol. I, Madrid, Civitas, pp. 216 y ss.

SEQUEIRA MARTIN, A., SACRISTAN BERGIA, F. y MUÑOZ GARCIA, A. (2006): «La relación entre el concurso y la situación de pérdidas patrimoniales graves como causa disolutoria en la sociedad anónima», *Diario La Ley,* núm. 6610*,* 16 de diciembre de 2006, pp. 1-13.

VARGAS VASSEROT, C. (2006): *La actividad cooperativizada y las relaciones de la cooperativa con sus socios y con terceros*, Monografía asociada a la *RdS* (núm. 27), Premio Arco Iris del Cooperativismo a la Mejor Investigación Cooperativa (XVI edición), Pamplona, Thomson-Aranzadi.

————- (2007): «La NIC 32 y el capital social cooperativo», *RdS,* núm. 28, pp. 101-131.

———— (2007 II): «Los previsibles efectos de la NIC 32 en el sector cooperativo», *REVESCO,* núm. 91, pp. 120-159.

———- (2008): «La solvencia y garantías de las cooperativas en el tráfico: algunas peculiaridades de su concurso», *RDCP,* núm. 8, pp. 281-294.

———— (2008 II): «Limitaciones del modelo cooperativo y necesidad de reforma de su régimen legal», *Economía Social,* núm. 46, pp. 10-18.

VARGAS VASSEROT, C. y AGUILAR RUBIO, M. (2006): «Régimen económico y fiscal de las cooperativas agrarias y de las SAT. El capital social, determinación de resultados, distribución de excedentes y obligación de auditoría», en *Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación*, PULGAR EZQUERRA/VARGAS VASSEROT, Madrid, Dykinson, pp. 159-239.

VICENT CHULIA, F. (1972): «Análisis crítico del nuevo Reglamento de Cooperación (Decreto 2396/1971 de 13 de agosto, B.O.E. de 9 de octubre)», *RDM,* núm. 20, pp. 429 - 537.

————————- (1989): *Ley General de cooperativas*, T. XX, Vol. 1.º (artículos 1 a 28), con PAZ CANALEJO en *Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial*, Dir. SÁNCHEZ CALERO/ALBALADEJO, Madrid, EDERSA.

———————— (1990): *Ley General de cooperativas*, T. XX, Vol. 2.º (artículos 29 a 66), con PAZ CANALEJO en Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial, Dir. SÁNCHEZ CALERO/ALBALADEJO, Madrid, EDERSA.

———————— (1994): *Ley General de cooperativas»*, T. XX, Vol. 3.º (artículos 67 al final), con PAZ CANALEJO en Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial, Dir. SÁNCHEZ CALERO/ALBALADEJO, Madrid, EDERSA.

———— (1994 II), «La disolución y la liquidación de la SRL en el Proyecto de Ley de 22 de diciembre de 1993», *RGD*, pp. 5603 y ss.

———— (2002): «El futuro de la legislación cooperativa», *CIRIEC-Jurídica,* núm. 13, 2002, pp. 9 - 48.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE OPERACIONES VINCULADAS A LAS OPERACIONES COOPERATIVAS-SOCIO. LAS OPERACIONES COOPERATIVIZADAS[1]

Miguel Ángel Sánchez Huete
Profesor de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN

Las operaciones vinculadas y las operaciones cooperativizadas aparecen como realidades jurídicas con regimenes diferenciados, unas reguladas principalmente en el art. 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) y, otra, en el art. 15 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas (en adelante LRFC). Regimenes que responden a concepciones diversas y que comportan una posición jurídica y unas consecuencias diferenciales. No obstante surgen cuestiones relativas a su delimitación y a la aplicación supletoria en las operaciones cooperativizadas del régimen de operaciones vinculadas. La resolución de tales cuestiones tiene que ver con la filosofía y peculiar concepción que anima la cooperativa.

PALABRAS CLAVE: Operaciones vinculadas, operaciones cooperativizadas, valoración tributaria, sociedades profesionales

1. Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación DER2009-08766 (Subprograma JURI, Tipo proyecto B) Ministerio de Ciencia e Innovación “La gestión socialmente responsable de la crisis”.

Miguel Ángel Sánchez Huete
(pp. 59-86)

APPLICATION OF THE RELATED PARTY TRANSACTIONS RULES TO TRANSACTIONS BETWEEN COOPERATIVES AND THEIR MEMBERS. COOPERATIVISED TRANSACTIONS

ABSTRACT

Related party transactions and cooperativised transactions are treated quite differently in the Spanish legal system. The former are mainly regulated by Section 16 of Royal Legislative Decree 4/2004 of 5 March 2004 approving the revised text of the Company Tax Act (Ley del Impuesto sobre Sociedades or LIS) and the latter by Section 15 of the Tax System for Cooperatives Act 20/1990 of 19 December 1990 (Ley sobre el regimen fiscal de las cooperativas or LRFC). These two systems respond to different concepts and entail different legal situations and consequences. Nonetheless, questions arise concerning their demarcation and the extension of related party transaction rules to cooperativised transactions. The answer to these questions has to do with the particular concept and philosophy that inspire cooperatives.

KEY WORDS: Related party transactions, cooperativised transactions, tax valuation, professional companies

SUMARIO

1. LAS OPERACIONES VINCULADAS ALGO MÁS QUE UN AJUSTE VALORATIVO. 1.1. El régimen de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 1.2. La prevención contra el fraude.1.3. Los nuevos roles del obligado y de la administración. 2. LA PECULIARIDAD DEL REGIMEN DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES. 2.1. Características. 2.2. Requisitos. 3. EL REGIMEN TRIBUTARIO DIFERENCIAL DE LA COOPERATIVA. 3.1. Las operaciones cooperativizadas. 3.2. Sobre la aplicación del régimen de las operaciones vinculadas a las cooperativas.

La economía social nace históricamente en momentos de crisis para introducir una nueva perspectiva. Este entronque con la crisis la configura como un ámbito de gran vigencia para estos tiempos de incertidumbre, que huyen de visiones ancoradas en beneficios efímeros y pretenden un desarrollo más sostenible. En tales parámetros la sociedad cooperativa ocupa un lugar preeminente al acoger buena parte estas sensibilidades. Ahora bien, la consideración y fomento de dicha forma jurídica precisa de un tratamiento tributario acorde. En tal contexto genérico se desarrolla el objeto de estas páginas pero centrado en la especificidad del régimen tributario y, de manera más preciso, en el marco de la valoración tributaria de las operaciones que se dan entre el socio y la sociedad.

En el mundo de la cooperativa existe una especial relación entre la entidad y el socio, dado que éste último puede ser cliente, trabajador, suministrador, etc. Tal vinculación puede dar lugar a operaciones que interesadamente distorsionen la base imponible para tributar menor o diferir la tributación. Así, desde la perspectiva tributaria, el legislador establece cautelas en la valoración y calificación jurídica de dichas operaciones; una de las más relevantes es el establecimiento del régimen de operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades. En el seno de la cooperativa existen las denominadas operaciones cooperativizadas, aquellas establecidas entre la cooperativa y en socio en el desarrollo de sus funciones sociales. Por ello se plantea si resulta de aplicación al ámbito cooperativo el régimen de tales operaciones vinculadas y todas sus consecuencias anejas -ajustes y régimen de sanciones- previstas en el Impuesto sobre Sociedades. Tal posibilidad comporta la introducción de fuertes cargas de gestión y un gran recelo para formas sociales que pretendidamente se han de fomentar.

Las operaciones vinculadas y las operaciones cooperativizadas aparecen como realidades jurídicas con regimenes diferenciados, unas reguladas principalmente en el art. 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) y, otras, en el art. 15 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas (en adelante LRFC). Regímenes que responden a concepciones diversas

y que comportan una posición jurídica y unas consecuencias diferenciales. Si bien existen dudas sobre su delimitación y respecto de la aplicación supletoria, en las operaciones cooperativizadas, del régimen de operaciones vinculadas. La resolución de tales cuestiones tiene que ver con la filosofía y peculiar concepción que anima la cooperativa. Para ello procede, en primer lugar, analizar las grandes líneas de las operaciones vinculadas, sus consecuencias y su aplicación a una relación de prestación de servicios socio-sociedad. A continuación y, en segundo lugar, procede delimitar las operaciones cooperativizadas, su singular operatividad que contrasta con la expuesta en una sociedad capitalista, y su régimen y forma de completar las eventuales lagunas de normación.

1. LAS OPERACIONES VINCULADAS ALGO MÁS QUE UN AJUSTE VALORATIVO

1.1. EL RÉGIMEN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Las operaciones vinculadas son aquellas acordadas entre sujetos y/o entidades que poseen una especial relación personal o patrimonial que puede conllevar una valoración diversa al mercado por lo que conviene establecer determinadas cautelas valorativas. La diversa valoración de las operaciones afecta a la determinación de la base imponible de los impuestos, de manera específica del Impuesto sobre Sociedades, en donde posee una regulación expresa y con una cierta vocación expansiva a otras leyes impositivas.

La divergencia valorativa establecida posibilita el minorar o diferir la tributación sobre la base de acordar precios inferiores al mercado. De ahí que la finalidad de la regulación tributaria es reestablecer la valoración que habría correspondido en caso de que el precio se hubiera fijado por un mercado en condiciones objetivas. Si bien, los efectos pueden ser otros a través de las consecuencias que poseen los ajustes, en particular, aquellos que suponen una recalificación de rentas y la facilidad con que se imponen la sanciones. Tales prácticas tienen un gran impacto internacional entre Estados con diversa tributación recibiendo el nombre de precios de transferencia

El legislador español pretende tratar los males asociados a los precios de transferencia con una acción interna, en el seno de las operaciones vinculadas, y como uno de los ajustes extracontables en el art. 16 de la LIS. La Ley 26/2006 de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal estableció una nueva regulación de las operaciones vinculadas justificada en base a la equiparación que efectuaba con dichos precios de transferencia. Se efectúa así un trasvase de soluciones normativas pensadas para precios de transferencia a las operaciones vinculadas, como se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la Ley 26/2006. En

esta línea se reserva un cierto papel exegético a las directrices de la OCDE sobre la normación nacional[2]. Ahora bien el ámbito de aplicación de las operaciones vinculadas no se circunscribe a personas o entidades no residentes, sino que también se aplica a operaciones internas. Y este desenfoque originara distorsiones en las obligaciones y medidas a imponer[3].

Los precios de transferencia acotan una concreta realidad, son un fenómeno que se origina por la deslocalización de rentas en un contexto internacional. La diversidad de tributación de los Estados y la libre circulación del capital lleva a que las empresas escojan el lugar de su ubicación, también, en base a criterios fiscales. Asimismo, en muchas ocasiones, su actividad se ejerce a través de un conglomerado de sociedades. Son grupos que forman una unidad empresarial constituida por personas jurídicas, independientes y autónomas, pero vinculadas en base a un conjunto de relaciones personales y/o patrimoniales. La situación de vinculación de entidades, y su diversa ubicación espacial, posibilita la derivación de resultados de un Estado a otro, orientando la carga impositiva mediante una política de precios intragrupo o precios de transferencia. Son precios que resultan pactados o convenidos por sociedades sometidas a un mismo poder de decisión sobre la base de los vínculos económicos y/o personales que permiten transferir beneficios o pérdidas de unas a otras. Así, la vinculación entre las sociedades puede originar la generación ficticia de gastos o beneficios que afectan a la conformación de la deuda tributaria.

En contextos de movilidad económica, y de multiplicidad y diversidad de ordenamientos, los Estados necesitan medidas para garantizar la recaudación de sus tributos. Así, para impedir la utilización elusiva de los precios de transferencia se efectúan ajustes que pretenden aplicar el principio de "arm's length" o de partes independientes, que conlleva -a efectos tributarios- aplicar los precios que habrían correspondido a entidades independientes en operaciones similares. En definitiva se pretende efectuar una adecuada imputación de las bases imponibles. La regulación de los precios de transferencia aparece fuertemente influida por disposiciones

2. La Exposición de Motivos alude a que "El segundo objetivo es adaptar la legislación española en materia de precios de transferencia al contexto internacional, en particular a las directrices de la OCDE sobre la materia y al Foro europeo sobre precios de transferencia, a cuya luz debe interpretarse la normativa modificada. De esta manera, se homogeneiza la actuación de la Administración tributaria española con los países de nuestro entorno, al tiempo que además se dota a las actuaciones de comprobación de una mayor seguridad al regularse la obligación de documentar por el sujeto pasivo la determinación del valor de mercado que se ha acordado en las operaciones vinculadas en las que interviene.".

3. En tal orientación GARCÍA NOVOA reitera dicho desenfoque y la desproporción que origina las exigencias materiales y formales en el ámbito interno. (GARCÍA NOVOA, C.: "La necesaria modificación de la regulación de las operaciones vinculadas" *Qf.* nº 1, 2010). CALDERÓN CARRERO apuesta por unos precios de transferencia más centrados en problemas internacionales, criterio que habilita la doctrina de la resolución que analiza. (CALDERÓN CARRERO, J.M.: "Comentario a la STJCE de 21 de enero de 2010, C-311/08, *SGI/Etat belge*: Nueva luz sobre las condiciones de compatibilidad comunitaria de la normativa de precios de transferencia y una oportunidad para la reflexión sobre la actual regulación." *Revista Interactiva de Actualidad*, AEDAF nº 8, 2010, pág. 13).

que pretenden atajar problemáticas propias de contextos internacionales en relación a grupos de empresas trasnacionales, de ahí las referencias recurrentes a medidas de ajustes primario y bilateral[4].

1.2. LA PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE

La ubicación de su regulación en la prevención y lucha contra el fraude, además de la recepción de los planteamientos internaciones sobre los precios de transferencia, preordena el tratamiento de las operaciones vinculadas. Los ajustes tributarios, derivados de la recalificación de rentas y las sanciones establecidas, configuran más una suerte de cláusula antielusiva que una norma que regula la distribución de la base imponible entre diversos Estados -la finalidad prístina de los precios de transferencia-. Las negociaciones entre personas vinculadas se asocian por el legislador a actividades evasivas o elusivas, de ahí su regulación en una normativa que se ocupa de la prevención del fraude. Así se deduce:

1º. Al incluir formalmente el régimen de las operaciones vinculadas en una norma destinada a prevenir el fraude tributario. La Ley 26/2006 incorpora un conjunto heterogéneo de medidas con la finalidad común de prevenir el fraude, pero también de su represión pues se establecen medidas de carácter sancionador[5]. Dicha regulación resulta especialmente evidente al introducir mecanismos que suponen privatizar las tareas de control y coacción a manos de particulares, como el cierre regis-

4. A este respecto se ha de tener presente que el art. 9 del modelo de convenio de la OCDE recoge los dos principios que han de inspirar la tributación de las empresas asociadas o vinculadas: El primero, la asignación correcta de las bases imponibles a cada una de las jurisdicciones donde estén dichas empresas sobre la base del principio de la libre competencia. El segundo, el compromiso para procurar evitar la doble imposición. A tal efecto define empresa asociada sobre la base de su participación en el capital, la dirección o el control común o de una empresa respecto de la otra. Se reconoce la facultad de los Estados contratantes a modificar la base imponible de una empresa asociada cuando ha sido alterada por razones diferentes a las que regirían entre empresas independientes. También se recoge en el apartado 2 del art. 9 el ajuste correlativo o bilateral que es el que debería practicar el otro Estado para contrarrestar el ajuste del primer Estado para así evitar la doble imposición. Este ajuste bilateral resulta problemático y requiere una labor de coordinación que se está llevando a cabo por diversa normativa no cogente –directrices, códigos de conducta-. En el seno del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE se han adoptado las Directrices de 1995 aplicables a empresas multinacionales y a Administraciones tributarias, también cabe resaltar las tareas del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencia.

5. Existe un contenido heterogéneo de medias que con ALONSO GONZÁLEZ cabe diferenciar entre: a)Medidas anti-paraíso –las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes-. b)Medidas contra el fraude en el marco de la Estimación Objetiva en el IRPF. c)Medidas anti-tramas fraudulentas en el marco del IVA y de los Impuestos Especiales. d)Medidas dirigidas a contrarrestar el fraude inmobiliario. e)Modificaciones operadas en la Ley General Tributaria para evitar el fraude en la fase de recaudación. f)Modificación del procedimiento administrativo previo al proceso penal por delito fiscal. (ALONSO GONZÁLEZ, L.M.:"Comentarios al Proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal", *Temas Tributarios de Actualidad* nº 7, 2006).

tral ante determinados incumplimientos que son calificados por un tercero, o la ineficacia de operaciones mercantiles por carecer de NIF que también han de ser apreciadas por un particular[6].

2º. La regulación concreta que se contiene es de carácter preventivo y de recelo, por cuanto exige preconstituir la prueba a través de concretos medios: los documentales. Se traslada así un coste de gestión y se exige la constatación de una realidad a través de una prueba tasada –documental- y con un contenido predeterminado formalmente –a nivel reglamentario-.

3º. Se establece una pluralidad de medidas que corrigen valoraciones, desincentivan la realización de operaciones vinculadas, y reprimen un número no determinado de conductas. En tal sentido, y sobre la base de corregir los defectos que plantean los precios de transferencia, se establecen los denominados ajustes que ya postulan las directrices de la OCDE. El ajuste primario supone constatar el flujo económico producido y aplicarlo a los sujetos intervinientes en la operación, bilateralizando sus efectos. En el ajuste denominado secundario se propone una calificación jurídico tributaria de la operación realmente efectuada. A estos ajustes el legislador español añade un tercer efecto a las operaciones vinculadas: la sanción. Su presupuesto es la mera inexactitud documental –exista o no corrección valorativa- y posee un gran dependencia de su conformación reglamentaria. Cabe explicitar brevemente la eficacia de dichos ajustes.

La Administración corrige las valoraciones y efectúa un ajuste bilateral, ya que se aplica a ambos lados de la operación. Resulta así que la valoración de las operaciones vinculadas se efectúa con una cierta vigencia temporal pues aparecen sujetas a la verificación administrativa. Se mantiene un clima de incertidumbre únicamente superado a partir de una posterior actividad administrativa. No ayuda a eliminar tal inseguridad el hecho de que el silencio de las solicitudes-propuestas de valoración sea negativo –art. 16.7 de la LIS-

El ajuste secundario, derivado de la anterior actividad, supone una recalificación jurídica. Desde esta perspectiva dicha tarea no es más que una concreción de la genérica cláusula del art. 13 de la LGT[7]. Ahora bien el art. 16.8 de la LIS posee una naturaleza más compleja y heterogénea, por un lado resulta cláusula de calificación jurídica y, por otro, constituye una ficción. El segundo párrafo de dicho precepto

6. Aludimos a dicha problemática en la monografía sobre *Las Infracciones tributarias. Perspectiva punitiva y garantista*. Marcial Pons, 2007, pág. 20-21.

7. GARCÍA NOVOA afirma que se trata de una aplicación automática de dicha calificación si bien "debería ser aplicada por la Administración en vía de comprobación cuando correspondiese, con audiencia al obligado tributario y siempre que la verdadera naturaleza de la operación fuese la de una aportación de fondos o la distribución encubierta de dividendos". (GARCÍA NOVOA, C.:"El ajuste secundario en las operaciones vinculadas" *Qf* nº 12/2008).

introduce una ficción jurídica[8]. En las relaciones socios-sociedad, la norma establece una ficción inatacable. Ficción en tanto que construye una realidad jurídica de manera imperativa, sin admitir prueba o verificación de la realidad material. Todo ello con la única finalidad de prevenir determinadas conductas, de evitarlas, dado los efectos de desincentivo que originan. Al señalar la existencia de una liberalidad evidencia una capacidad contributiva que no se da, por lo que puede afectar a dicho principio[9].

También a través de medidas netamente represivas establece un tercer ajuste. Señala determinadas sanciones que operan sobre obligaciones formales delimitadas reglamentariamente, y que llegan a sancionar la corrección efectuada. Su calificación como tercer ajuste deriva de la extremada facilidad con la que se configura la imposición de la sanción: basta la inexactitud. Tal idea nace por su operatividad mecánica, ante cualquier irregularidad en la prueba tasada de carácter documental, encargada de velar por la corrección de la valoración. Dicha inexactitud abarca una multiplicidad de defectos meramente formales, pues no es ni incompletitud ni falsedad. Redunda en este despropósito tipificador el hecho de que el legislador sancione veladamente la corrección valorativa vinculándola al incumplimiento formal. Así, sanciona dicha incorrección valorativa (apartado 2 del art. 16.10), si bien no la tipifica como infracción (art. 16.10 LIS). En el plano sancionador se dan tres infracciones, y no las dos tipificadas –son dos infracciones formales y se establecen tres sanciones-: a)La infracción formal relativa a la obligación de aportar documentación, b)La infracción material, de peligro o perjuicio de la deuda, relacionada con la obligación de aportar documentación y c)La infracción formal relativa a la obligación de declarar del valor normal del mercado.

En definitiva, la regulación establecida no se limita a conformar una mera cláusula que evita la elusión, ya que se arbitran una pluralidad de medidas de contenido heterogéneo –corrector, preventivo y represivo-. Todas ellas aparecen vertebradas por el recelo y por facilitar la comprobación administrativa, dado su rigor formalista.

---

8. Afirma que “En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad”.

9. Ver en una orientación análoga la STC 194/2000, de 19 de julio respecto de la DA 4 de la Ley de Tasas. De manera temprana analiza de manera crítica la recalificación de rentas que supone el ajuste secundario ALONSO GONZÁLEZ, L.M.:“Operaciones vinculadas, elusión y fraude fiscal” *RC y T*, nº 60/2007. GARCÍA NOVOA sostiene la no aplicación del ajuste secundario en operaciones interiores y si las cláusulas antisimulación o antielusión del art. 16 y art. 15. (GARCÍA NOVOA, C.: “La necesaria modificación de la regulación de las operaciones vinculadas” *Qf*. nº 1, 2010). Al margen también de las discordancias que se originan entre reglamento, art. 21 bis 2 b) y la ley. Mientras la ley afirma que la transferencia sociedad-socio la renta se califica como dividendo en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, el reglamento se extralimita al señalar que la renta que no se corresponda al porcentaje de participación se considera liberalidad para el socio y renta para la entidad.

Se parte de que las negociaciones entre sujetos vinculados son licitas, si bien se tratan con desconfianza y sospecha; de ahí que se establezcan medidas correctoras, pero también de desincentivación e incluso de represión. Con éstas se previene no solo la existencia de una elusión, sino reprime la evasión, o sea, castiga al infractor. Así las normas que regulan las operaciones vinculadas no son meras normas de valoración, sino un conjunto heterogéneo de medidas de valoración, corrección, recalificación y represión. Se diseña una pluralidad de normas con finalidades imbricadas, tanto antielusivas como antievasivas. Las medidas disuasorias se aprecian en la recalificación tributaria del denominado ajuste secundario. Pero también se reprime, considerando infractor a quien incumple de manera inexacta obligaciones administrativas, ignorando con tal tipificación lata la distinción entre el incumplimiento de una obligación y la infracción. En esta línea resulta preocupante como la mera inexactitud documental, si concurre con una corrección valorativa, es el presupuesto que hace presumir la existencia de un peligro para la deuda tributaria como desarrollaremos más adelante.

Apuntadas las anteriores reflexiones se evidencia así la existencia de un desenfoque por cuanto se trasladan perspectivas propias de los precios de transferencia, de ámbito internacional basada en el reequilibrio de bases imponibles, a problemáticas netamente internas de valoración, pero también de control y recelo que generan las operaciones entre sujetos vinculados. Así, se pasa de normas y directrices internacionales de distribución de las bases tributarias entre Estados –precios de transferencia- a medidas contra la elusión o evasión –operaciones vinculadas-.

La perspectiva de precios de transferencia sirve para legitimar medidas consensuadas intencionalmente, pero ni el ámbito de aplicación, ni los efectos de las operaciones vinculadas reguladas, se adecuan a los mismos. Se exigen obligaciones formales propias de precios de trasferencia aplicados con una perspectiva diversa, no de distribución de base imponible, sino para adoptar medidas contra la elusión o evasión. Se acoge en parte las obligaciones y la legitimidad que arropa los precios de transferencia, pero se conforman unas medidas *ad hoc* en clave preventiva y represiva. Esta perspectiva de prevención del fraude se aúna en las operaciones vinculadas conformando una realidad bajo sospecha.

1.3. LOS NUEVOS ROLES DEL OBLIGADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

La nueva regulación de las operaciones vinculadas otorga un nuevo rol de actuación al ciudadano-obligado tributario y a la Administración. El ciudadano que efectúa dichas operaciones ve incrementado el número de sus obligaciones, y la Administración tributaria se ubica de manera más acusada en una posición de control y comprobación.

A) El sujeto que realiza operaciones vinculadas ve incrementado su estatuto jurídico pasivo con nuevas obligaciones jurídicas. Dichas obligaciones suponen, de manera correlativa, estar sometido a un mayor control, a admoniciones y/o conse-

cuencias indeseadas o netamente lesivas para el caso de un mero incumplimiento formal –inexacto- de difícil concreción.

Conforman una nueva situación de vinculación una serie de obligaciones conexas; una obligación de valoración, que posee carácter principal, y una pluralidad de obligaciones formales, de carácter documental. La obligación de valoración establece que el criterio rector no es el precio, sino el valor normal de mercado –art. 16.1- cuya determinación se vincula a la llevanza de una documentación. Las obligaciones formales se establecen para preservar la anterior, y buscan el justificar dicha valoración, tutelar la conservación de dicha prueba documental y su aportación ante la Administración. Son obligaciones instrumentales en el ámbito tributario respecto de la valoración cuya complejidad y diversidad lleva a considerarlas de llevanza, por cuanto que implican: elaborar, conservar, declarar, aportar. En el plano sancionador dichas obligaciones formales son sustantivadas al devenir una objetivación del peligro para la deuda tributaria.

Las anteriores obligaciones introducen unos mandatos directos a los sujetos vinculados –de valorar y justificar documentalmente- que conllevan una serie de implicaciones procedimentales:

1º.La carga de la prueba de la valoración efectuada corresponde al sujeto vinculado. La obligación, positiva y activa de hacer, que conlleva la valoración implica que será el obligado a quien le corresponda probar que el valor asignado es el de mercado. Así se deriva de la regla general del art. 105 de la LGT "quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos" y del tradición al aforismo procesal *ei incumbit qui affirmat no qui negat*. La situación ha cambiado pues anteriormente era la Administración quien tenía que probar la valoración, ahora su papel queda relegado a un momento de control y comprobación. Tal conformación, en relación a la regulación anterior, origina una inversión de la carga probatoria. Si bien ello no quiere decir que la Administración quede eximida de probar las eventuales correcciones valorativas que efectúe. Una cosa es que el obligado pruebe el valor de la operación, y otra muy distinta es, si no se consigue dicha prueba, tener por acreditado el valor dado por la Administración.

2º.La necesidad de alegación y aportación documental para dicha valoración. Tal exigencia supone la conformación normativa de una prueba tasada que quiebra la regla general, derivada de la vigencia de los principios probatorios en materia de utilización de medios de prueba y de libre valoración que se deducen del art. 106 de la LGT, en su remisión al Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por consiguiente –obsérvese el matiz pues no es vano- la cuestión ya no es probar el valor normal de mercado, sino el efectuarlo a través de unos determinados medios probatorios. De la regulación establecida se deduce la pretensión de constituir un medio de prueba tasado poseyendo, además, un carácter preconstituido, por cuanto el obligado ha de poseerlos y confeccionarlos antes de las actuaciones de comprobación administrativas. Es esta la pretensión que se deduce del sistema configurado, si bien hemos de admitir el uso de otros medios probatorios, sobre todo, cuando derivado de tal incumplimiento se impute una sanción.

Junto a las anteriores consecuencias también se originan otras de no menor calado. La primera, la relativa inseguridad que supone la determinación del valor de mercado y, la segunda, el incremento de costes indirectos que supone dicha tarea documental. La valoración según el precio de mercado es una operación de resultado controvertido por ser plural y mutable (en tal sentido la STC 184/2000, de 19 de julio). La inseguridad se pretende paliar, de alguna manera, con el carácter tasado aparentemente objetivo del medio probatorio documental, pero que repercute con un efecto colateral, pues genera una serie de costes adicionales.

En tal sentido se quiere facilitar la tarea de comprobación del valor imponiendo cargas desproporcionadas, y que conllevan un cierto traslado a los particulares de las tareas de comprobación administrativa. De alguna manera, parece exigir una valoración y comprobación objetivada de la misma, a través de la presconstitución de una prueba documental por el propio sujeto. Tal tarea da lugar, no tan sólo a incrementar el numero de las obligaciones, sino a un proceso que comporta privatizar parte de la comprobación de dicha valoración, dada la facilidad administrativa que supone su verificación meramente formal. A través de la documentación, no tan solo se prueba sino también se comprueba la veracidad del valor, dado el carácter privilegiado que se dota a dicho medio documental.

B) En tal contexto la Administración cambia de rol respecto del régimen anterior, pues pasa de ejercer una potestad de valoración a la de controlar y corregir el valor declarado[10]. Se incrementa las facultades de control sobre la base de las nuevas obligaciones establecidas.

En el marco de las operaciones vinculadas el legislador pretende configurar una potestad de colaboración, paralela y diversa en su naturaleza a la ya existente. En tal sentido admite, contra toda lógica, la sanción cumulativa de la falta de colaboración con las tareas de administrativas en la aportación documental derivada de las operaciones vinculadas, con la desatención de requerimientos de colaboración –vide art. 16.10 ab initio y 16.10. 5º LIS-. La potestad de comprobación, relacionada o no con las operaciones vinculadas, y el deber de colaboración obedecen a una misma naturaleza, poseen una diferenciación únicamente por razón del contenido específico de éste ámbito, por lo que no procede sancionar reiteradamente ya que vulnera el principio *non bis in idem*.

Se ha de tener presente que la facultad de comprobar señalada a la Administración en el art. 16.2 de la LIS no es más que la concreción de la facultad genérica prevista en el art. 115 de la LGT. A tal efecto la corrección administrativa debe ser motivada, para ello justificará la valoración según algunos de los métodos del art. 16.4 de la LIS y los motivos que determinen la corrección de la valoración del obligado –art.

10. CORDERO GARCÍA habla de que la labor administrativa se simplifica al quedar reducida a comprobar y, en su caso, a corregir. (CORDERO GARCÍA, J.A.: "Notas al desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de medidas de prevención del fraude fiscal". *Qf*, num. 17/2009, pág. 8).

21 RIS en relación con el art. 103.3 de la LGT- La motivación constituye el elemento basilar de la corrección pues sin ella, al margen de incumplir lo señalado por la ley, se originaría indefensión al no poder argüir en contra del acto administrativo, al desconocerse su lógica.

La eventual corrección valorativa de la Administración exige evidenciar los métodos de valoración del art. 16.4 de la LIS y la prueba suficiente. No obstante, y a diferencia del obligado, no le exige una prueba tasada, y se le permite la elección discrecional entre los diferentes medios de valoración. Dicha situación vuelve a manifestar un diverso trato en el plano probatorio. Esta consideración redunda en lo anteriormente apuntado: la exigencia de prueba documental al obligado suponen el anticipo de una cierta comprobación del valor de mercado. La prueba documental facilita la tarea administrativa de verificación y comprobación sobre la base de constatar una regularidad formal. Ahora bien, la corrección valorativa, que supone discrepar de la realidad constatada documentalmente, habrá de poseer la necesaria motivación y justificación que avale tales afirmaciones.

Con tal regulación se produce un incremento cuantitativo y cualitativo de las obligaciones que incumben a los sujetos que realizan operaciones vinculadas y se confiere un nuevo rol a la Administración. Por un lado, se incrementa el estatuto jurídico pasivo del ciudadano que realiza tales operaciones, sujetándose su actuar a mayores posibilidades de fiscalización y control. Por otro lado, la Administración ubica su papel en actuaciones posteriores de verificación y control, tareas que se ven facilitada por la exigencia probatoria documental que supone anticipar parte de dichas tareas de control; bastando en muchos supuestos constatar la regularidad formal de la misma para establecer toda una panoplia de medidas de corrección y represión.

2. LA PECULIARIDAD DEL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES

La problemática de las sociedades profesionales y las operaciones vinculadas se plantea principalmente en dos relaciones tipo: la de los socios que prestan sus servicios en el seno de dicha entidad y la relación entre varias sociedades profesionales. Entre varias sociedades profesionales se ha de tener presente dos situaciones de diversa consideración. En primer lugar, si la entidad tiene una consistencia real, en cuyo caso se aplicará el régimen general previsto para las operaciones vinculadas como mecanismo de corrección de las valoraciones. Se ha de tener presente que el ejercicio de actividades profesionales a través de la participación en otras sociedades profesionales es una actividad lícita, y no sujeta a sospechas por el ordenamiento jurídico. Así el art. 2 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades

profesionales reconoce y admite que las actividades profesionales podrán desarrollarse "[…] bien directamente, bien a través de la participación en otras sociedades profesionales.[…]". En segundo lugar, si la entidad es ficticia y actúa como pantalla o refugio procede aplicar la responsabilidad subsidiaria por levantamiento del velo (art. 43.1, g) y h) de la LGT) al tipificar de manera específica la simulación subjetiva originada. No obstante se ha de tener presente que la aplicación de este régimen de responsabilidad supone un tratamiento más atenuado al que correspondería por la simulación absoluta originada[11]. En tal sentido basta constatar que el responsable no asumirá los intereses de demora ni de los recargos del obligado principal[12].

El régimen jurídico de los servicios prestados por personas físicas a través de una sociedad profesional es el que será objeto de tratamiento más detallado[13]. A tal fin se ha de contextualizar la explicación en dos modificaciones normativas que conforman su tratamiento actual:

La primera modificación parte de la supresión del régimen de transparencia fiscal. La Ley 46/2002, de 18 de diciembre**,** de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en la búsqueda de un tratamiento homogéneo de las rentas procedentes de actividades económicas suprime dicho régimen. Simultáneamente se intentaba corregir las eventuales disfunciones que podían originarse a través de las operaciones vinculadas, estableciendo un régimen de valoración que partía de estimar como valor normal de mercado el señalado por entidades que efectivamente se dedicaran a la actividad profesionales, y no a la mera gestión patrimonial[14]. Así se exigían unos requisitos de ingresos cuantitativos

11. La Agencia tributaria a través de diversas Notas (Nota 10/09 de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia jurídica y la Nota de 26 de marzo de 2009 Departamento de Inspección Financiera) ha puesto de relieve su inquietud sobre los contribuyentes que presten servicios a través de sociedades profesionales. En particular en el supuesto en que se interponga una sociedad, entre la sociedad profesional y el profesional, con el fin de realizar –en palabras de la Administración- una disminución ilícita de la tributación sobre la base del remansamiento de rentas, el splitting y la deducción de gastos. La desmesura y falta de precisión de las calificaciones dan buena cuenta la presunción y sospecha que genera el fenómeno de las sociedades profesionales. En todo caso, la interposición ficticia de sociedades, sean estás una o más, se resuelve aplicado el remedio específico de simulación subjetiva que supone la responsabilidad subsidiaria basada en el levantamiento del velo. Medida que consideramos privilegiada respecto de la aplicación de la institución de la simulación en sentido estricto. Y que evidencia como el legislar al caso y oyendo únicamente los dictados administrativos lleva, las más de las veces, a graves contradicciones e incoherencias.

12. Ver a este respecto las consideraciones que efectuamos en *El levantamiento del velo*. Marcial Pons, 2008, pág.174-176.

13. Ver también MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: Las sociedades profesionales y su Régimen tributario". *Qf,* nº 1/2008.

14. El art. 16. 7. de la LIS señala: "En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor normal de mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o a la prestación de trabajo personal por personas físicas a sociedades en las que más del 50 % de sus ingresos procedan del ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para el desarrollo de sus actividades".

(50% de ingresos) y cualitativos (procedan del ejercicio de actividades profesionales) y el disponer los medios (personales y materiales) necesarios para ejercer dichas actividades. Se configuraba una presunción *iuris et de iure* de que la valoración de los servicios socio-sociedad era el valor de mercado sobre la base de que la sociedad reuniera determinadas condiciones objetivas. De alguna manera tales requisitos objetivos dotaban de seguridad la determinación siempre incierta del valor de mercado. De la regulación efectuada se derivan dos consideraciones; la primera, al suprimir la especialidad en el trato de la renta de tales sociedades en relación a la transparencia fiscal y, la segunda, se establece una singularidad en la valoración de sus operaciones vinculadas. Se observa como se relaciona el régimen de transparencia fiscal con la regulación de las operaciones vinculadas para esa realidad determinada. Así, se suprime la especialidad del régimen de transparencia para actividades profesionales y se introduce otra singularidad en el seno de las operaciones vinculadas.

En un segundo momento, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre de represión del fraude, introduce una importante novedad al quedar derogada la anterior previsión, con lo que se equipara su tratamiento al de cualquier otra operación vinculada. Con ello las exigencias de documentación genéricas serán de aplicación, no obstante, la concreta realidad de tales entidades -de escaso volumen de negocio y características singulares- precisará de una consideración específica que aumente la seguridad y alivie los costes indirectos que se generan.

Será en sede reglamentaria, a través del R.D. 1793/2008[15], en donde el art. 16.6 configura una regla específica para la determinación del valor de dichas operaciones. Con tal régimen se pretende establecer una cierta objetivación en la determinación del valor de mercado -si bien no consigue la seguridad del régimen anterior- a la vez que elimina algunos costos de gestión indirecta originados en las tareas de documentación. Ahora bien los anteriores argumentos, aparecen vertebrados por otras consideraciones explicitadas en la Exposición de Motivos, y que evidencian la filosofía que anima la regulación. Así se establecen una serie de criterios que vertebran la documentación exigida, unos de configuración de las obligaciones formales -el principio de minoración del coste para los obligados tributarios y la garantía de la actividad de comprobación por parte Administración tributaria-, otros de aplicación o exigencia en función de las características de los grupos empresa-

15. Se trata del Real Decreto 1793/2008, de 3 noviembre, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y tiene como objetivo principal, como indica su exposición de motivos, la modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades al objeto de adaptarlo a las previsiones de la Ley 36/2006 en materia de operaciones vinculadas.

riales y el potencial riesgo de perjuicio económico para la Hacienda Pública[16]. De las menciones anteriores destaca el énfasis en garantizar la actividad de comprobación, como indicativo de la privatización de la misma que supone la prueba tasada, y el riesgo de perjuicio, como elemento que denota sospecha. Tales aspectos ratifican los ya comentados recelos que generan dichas operaciones, si bien se omite uno de los efectos que también se persigue: el establecer un criterio de imputación mínima a los socios profesionales.

Antes de analizar cada uno de los requisitos que conforman dicho régimen procede establecer las características que lo conforman

2.1. CARACTERÍSTICAS

El régimen establecido por el art. 16.6 del RIS se caracteriza por los siguientes aspectos:

1º. Es un régimen específico que aparece determinado -al margen de la relación de vinculación- por la prestación de servicios de una persona física, que es socio profesional, a una entidad que posee determinadas características económicas. La sociedad profesional de referencia, no es la que recibe tal calificación con arreglo a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, sino que aparece definido por consideraciones fiscales, en base a criterios principalmente económicos. Así, desde la perspectiva de su ámbito de aplicación, lo determinante es la prestación de servicios profesionales por un socio, persona física, y no la condición de profesional de la sociedad. Se trata de una realidad acotada por un presupuesto de aplicación: la condición subjetiva del prestador. A tal presupuesto concurren una serie de requisitos -sobre todo de la entidad y de su resultado económico-, tanto genéricos como particulares que han de cumplirse.

2º. Es un régimen adocumental y objetivador cuya virtud, en principio, reside en disminuir costos indirectos. No obstante, ni se suprimen todas las obligaciones documentales, ni únicamente se busca evitar costes indirectos. Así, con el fin de justificar la retribución de los socios profesionales, se exige la constancia documental de los criterios que determinan la contribución a la actividad de la sociedad. La obje-

16. Señala su Exposición de Motivos al aludir al régimen de obligaciones de documentación establecido que "En la configuración de estas nuevas obligaciones se ha ponderado la necesidad de garantizar la actividad de comprobación de las operaciones vinculadas por parte Administración tributaria y el principio de minoración del coste de cumplimiento para los obligados tributarios. Así, la exigencia de las obligaciones de documentación se ha modulado en función de dos criterios: las características de los grupos empresariales y el riesgo de perjuicio económico para la Hacienda Pública, de tal forma que para las empresas de reducida dimensión y para las personas físicas se simplifican al máximo estas obligaciones salvo que se refieran a operaciones de especial riesgo, en cuyo caso se exige la documentación correspondiente a la naturaleza de las operaciones de que se trate. Finalmente, no se exige documentación alguna en relación con operaciones en las que el riesgo fiscal es reducido."

tivación a que nos referimos deriva de que, sobre la base principalmente de la composición y asignación de los rendimientos de la entidad, se determina la valoración. Resulta un mecanismo indirecto de valoración que ya da idea de que lo pretendido no solamente es valorar, sino asignar unos rendimientos a los socios.

3º. Es un régimen alternativo al general, únicamente aplicable a concretas prestaciones. Se plantea como una solución *ad hoc* a una realidad específica, muy acotada, que precisa un tratamiento propio y singular. Ahora bien, es un régimen que no elimina la vigencia del general y cuya aplicación, o no, tiene capacidad de decidir el obligado. Se le dota así de un poder de configuración jurídica, para el caso de cumplir los requisitos normativos que analizaremos.

4º. Es un régimen opcional para el obligado, que no para la Administración. Del mismo resulta una prueba plena del valor de mercado, cuyas pautas normativas aseguran una eficacia respecto a terceros –la Administración- y que veda la posibilidad de ulteriores correcciones. Para ello han de cumplirse toda una serie de requisitos de forma cumulativa, pues en caso de no hacerlo no podrá esgrimirse eficazmente ante la Administración dicho valor, pudiendo ésta efectuar la corrección. Ahora bien, no todo incumplimiento posee una misma eficacia. E incluso, es posible que el obligado pruebe el valor de mercado de acuerdo con el régimen general de documentación.

5º. Es un régimen de valoración *ex post*, una vez finalizado el ejercicio, por los cálculos que se demandan. No puede saberse de manera previa la correlación que se exige entre retribuciones y gastos, pues ¿como saber que los gastos no serán superiores a los ingresos?. Dicho carácter le dota de una cierta subsidiariedad en su aplicación, a no ser que parta de alguna de las siguientes premisas. La primera, que se traten de unas estructuras económicas muy consolidadas cuyos resultados se reiteran, en donde los momentos de crisis no se dan. Se apreciaría tal orientación cuando se exige unos resultados positivos, antes de deducir las retribuciones de los socios. Dicho planteamiento puede resultar un grave desincentivo a las formas colegiales de actuación para momentos críticos, para actividades iniciales o ante la situación de inseguridad propia de muchos mercados. La segunda, que se parta de la base de que en caso de pérdidas la sociedad renuncie a deducirse los gastos para poder aplicar este régimen pues, de otra manera, la espada de Damocles que son las sanciones pende de un delgado hilo.

Tales soluciones no pueden razonablemente esgrimirse. Resulta, entonces, que dicho régimen genera inseguridad en su aplicación pues posee el inconveniente de hacer un pronóstico, a futuro, de la proporcionalidad que ha de existir entre las retribuciones y los gastos. Por que, en definitiva, lo evaluado no es el valor de mercado sino otros criterios que tienen que ver con la imputación de las rentas de la actividad profesional a los socios, y que el análisis de sus requisitos nos permite acabar de desentrañar.

2.2. REQUISITOS

En el art. 16.6 del RIS se establecen una serie de requisitos concretos que han de cumplirse cumulativamente para considerar que el valor convenido en la prestación del servicio coincide con el valor de mercado. En su redacción cabe diferenciar dos grandes tipos con eficacia diversa; los requisitos genéricos, que aluden a caracteres de la entidad, y los requisitos particulares, que tienen que ver con la concreta retribución del socio profesional. Los genéricos suponen evaluar de manera conjunta la entidad y la retribución global por la prestación de servicios efectuadas a los socios. Incumplir cualquiera de éstos conlleva que ninguno de los socios pueda acreditar que el valor convenido coincide con el valor de mercado. Mientras que incumplir los requisitos particulares, que hacen referencia a la concreta retribución de cada socio, supone únicamente la no determinación de dicho valor de mercado respecto de alguno o algunos de ellos.

Dentro de los criterios genéricos hay que diferenciar, a su vez, entre los exigidos a la entidad y los propios del conjunto de las retribuciones.

a) De la entidad.

Se pide que la entidad sea real, y que no exceda de un determinado volumen de negocio. La realidad de la entidad se verifica por la existencia de medios materiales y humanos[17]. Con tal medida, ciertamente reiterativa, se afirma que no existe una apariencia ficticia, una simulación. En definitiva, que no corresponda aplicar las medidas correctivas propias de la responsabilidad basada en el levantamiento del velo, en vez del régimen de las operaciones vinculadas. Relacionado al anterior requisito, se exige que la sociedad no supere un determinado volumen económico. Así, existe la remisión al régimen especial del Impuesto sobre Sociedades que regula los incentivos fiscales para la empresa de reducida dimensión, que se concreta en poseer una cifra de negocios inferior a 8 millones de euros.

Junto a los anteriores requisitos se exige que sea una entidad profesional, y tal calificación se determina en función de una concreta estructura de ingresos. Se exige que sus ingresos tengan una determinada composición: que más del 75% de los mismos procedan del ejercicio de actividades profesionales. La aplicación de dicho régimen no se realiza por el carácter profesional de la sociedad, sino por la composición de su renta. Así, la mención a dicha entidad no se circunscribe a las sociedades profesionales de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Se trata de una calificación estrictamente tributaria de carácter omnicomprensivo, donde lo determinante para la aplicación de dicho régimen es la prestación de servicios profesionales por un socio persona física, y no la condición de profesional de la sociedad.

17. Si bien los medios personales y materiales que las sociedades profesionales necesitan para ser consideradas como tal son prácticamente ninguno, basta la capacidad intelectiva del profesional pues los otros pueden subcontratarse. (FALCON Y TELLA, R.: "Las sociedades profesionales (I): la existencia de medios en la sociedad y la naturaleza de los servicios prestados por el socio" *Qf,* num. 19/2009).

Es más, la reiterada dicción legal a entidad –art. 6.6. del RIS, pero también el art. 16 de la LIS…-, hace extensivo dicho régimen a organizaciones que no constituyan personas jurídicas.

Resulta así que bien pueden existir profesionales que presten servicios en sociedades calificadas como tales por la Ley 2/2007, o en otro tipo de entidades que no lo sean, aplicándose en ambos casos el mismo régimen. Ni están todas las que son, ni todas las que son están. Es una consideración propia que bascula en el carácter del socio prestador y en el volumen de ingresos. Todo ello con los riesgos e inconvenientes que supone fragmentar, si no resulta estrictamente necesario, las calificaciones jurídicas del ordenamiento, por mucha autonomía normativa que se posea para ello.

b) De las retribuciones de los socios en su conjunto

El art. 16.6 RIS también requiere una estructura de resultados de la actividad económica de la sociedad. Tal aspecto resulta de difícil evaluación previa, pues únicamente finalizado el ejercicio podrá operar. Así se señalan dos exigencias:

En primer lugar, una determinada composición de los resultados, pues las retribuciones de todos los socios han de tener una determinada correlación con los gastos. Los resultados del ejercicio de la actividad de la entidad han de ser positivos, antes de deducir dichas retribuciones. En definitiva, se precisa que los ingresos menos los gastos –excluyendo el importe de las retribuciones de los socios profesionales- sean positivos. Por gastos se ha de entender los deducidos de la mención del art. 14 de la LIS, o sea, los necesarios relacionados con la actividad económica. Una de las cuestiones que genera duda es si dentro de los gastos se incluyen o no las amortizaciones. Entendemos que no, por cuanto que en su deducción se siguen reglas específicas y poseen una denominación y tratamiento separado v.gr. art. 11 en relación al art. 14 de la LIS. Dentro de los gastos se habrá de incluir la retribución de los trabajadores de la entidad que, aunque realicen funciones análogas, no son socios profesionales vinculados. En tal ámbito, y con el fin de evitar las molestias e intranquilidades de las comprobaciones administrativas, pueden darse algunas distorsiones como la renuncia a la deducción de gastos para poder aplicar dicho régimen. Tal criterio se nos señala que los principales gastos han de ser las retribuciones de los socios y, únicamente después de su aplicación se admiten los resultados negativos de la entidad.

En segundo lugar, una determinada distribución de los resultados: las retribuciones de los socios no pueden ser inferiores al 85% del resultado positivo del ejercicio antes de restar dichas retribuciones. Se excluye de tal mención de retribución la consideración de los eventuales dividendos. Tal aspecto delimita dicho régimen eliminando la posibilidad de sociedad de mera tenencia de bienes, pues como máximo el 15% del resultado positivo provendrá de una actividad no profesional. Comporta la necesidad de que la sociedad pague de manera efectiva en forma de retribución más del 85% de su resultado positivo. Al establecer la necesidad de repartir la mayor parte de los beneficio se está exigiendo imputar las rentas, de

manera análoga a lo pretendido con el régimen de transparencia fiscal[18], si bien con algunas peculiaridades. Dicho requisito resulta ajeno a la determinación del valor de mercado, pues entronca directamente en el establecimiento de un régimen de imputación directa de los beneficios de la sociedad a los socios. Ahora bien, se trata de una imputación "decidida" por la entidad, teniendo en cuenta la cuantía de las retribuciones que ha de asignar. Si no lo efectuara de tal manera, existe el riesgo de que la Administración proceda a ajustar el resultado. Constituye un remedo de transparencia fiscal con la peculiaridad de que es la propia entidad quien, para evitar los riesgos de los ajustes y los males de las sanciones, distribuye los beneficios.

El régimen de transparencia fiscal, nunca sustituido del todo, pervive con el régimen de operaciones vinculadas, y sino basta con responder la pregunta de ¿dónde está el valor de mercado del concreto servicio en todo este entramado?

De los anteriores requisitos, heterogéneos y complejos se derivan algunas consideraciones a puntualizar:

La primera, que la delimitación que efectúa de la sociedad profesional no coincide con la efectuada por la Ley 2/2007. Se utiliza un concepto expansivo y abierto que permite acoger a entidades que pueden no tener la consideración de sociedad profesional según tal normativa. Se califica la sociedad profesional por el resultado económico, no por la composición del capital, o por el objeto de la misma. La afirmación de la autonomía del legislador tributario para redefinir conceptos jurídicos configurados por otras ramas del Derecho no ha de originar interferencias ni excesivas inseguridades, y ha de guardar una cierta coherencia exigible al ordenamiento jurídico cuya aplicación se afirma unitaria.

La segunda, deriva de constatar las importantes consecuencias tributarias y responsabilidades sancionadoras, además de las inseguridades que generan tales valoraciones. En tal contexto al valorar las prestaciones del profesional existe una variable de difícil resolución: la estimación de tareas donde la cualidad personal posee gran importancia. La actividad profesional es una especie del genero actividad económica, formalmente delimitada por una serie de actividades listadas en las Tarifas del IAE y, materialmente, caracterizada por una actividad eminentemente intelectual sometida normalmente a una reglamentación profesional, de ahí que el factor personal sea especialmente importante[19]. La carencia de parámetros comparativos de servicios en donde tienen gran relevancia las cualidades personales –la

18. En tal sentido también GARCÍA NOVOA, C.: "La necesaria modificación de la regulación de las operaciones vinculadas" *Qf.* nº 1, 2010.

19. En tal línea la STJCE de 11 de octubre de 2001 (Asunto 267/1999) al referirse a las actividades profesionales señala que "tienen un marcado carácter intelectual, que requieren una calificación de nivel alto y que están sometidas habitualmente a una reglamentación profesional precisa y estricta. Debe añadirse que, en ejercicio de tal actividad, el factor personal es especialmente importante y que dicho ejercicio presupone, de cualquier modo, una gran autonomía en el cumplimiento de los actos profesionales".

consideración en muchas ocasiones *intuitu personae* del servicio- dota de mayor inseguridad y dificultad su valoración. Tales inseguridades, se adecuan poco a los mercados dinámicos y versátiles actuales. Es más, el carácter diferencial de nuestra regulación en relación a países de nuestro entorno afectará a nuestra competitividad. A este respecto se ha de tener presente que la tan denostada deslocalización no solo se combate con criterios económicos de abaratar costos o mayor eficiencia también con los actos del legislador que aparentemente resultan gratuitos.

La tercera, la exigencia de que las retribuciones de los socios profesionales no sean inferiores al 85% del resultado positivo de la entidad conlleva una imputación directa al IRPF como renta. Supone que exista una imputación mínima y que ésta sea en todo caso positiva. Dicho tratamiento en las operaciones vinculadas supone el resurgir de una cierta transparencia fiscal para las sociedades profesionales, pues se pretende que en el impuesto propio del socio sea donde la renta acabe siendo gravada. Si bien, y a diferencia del régimen de transparencia fiscal, que se imputaban los beneficios estuvieran o no distribuidos, aquí se obliga a su imputación como retribución so pena de no considerar acorde al mercado la valoración de las prestaciones.

Con el régimen de transparencia fiscal se pretendía evitar el uso exclusivamente fiscal de la persona jurídica, ya sea por que posee un tipo menor para determinadas rentas, por permitir un régimen mayor de gasto deducible, o por posibilitar prácticas para diferir rentas o alterar su imputación. Para ello se originaba un levantamiento del velo a efectos fiscales con el fin de contemplar y tratar directamente la realidad del sustrato societario[20]. Con tal orientación se prescindía de cualquier decisión autónoma de la entidad para determinar la estructura de sus resultados y su distribución. En el mecanismo ahora establecido la sociedad ha de decidir la retribución de los socios profesionales, pero ésta aparece condicionada al ser positiva y exigírsele unos mínimos cuantitativos. No es una decisión libre pues, en caso contrario, operarán los ajustes tributarios y se genera los riesgos de imponer una sanción, pues basta la mera inexactitud documental[21].

Tales requisitos y características enmarcan las relaciones propias de las sociedades de capital, mientras que en los contextos cooperativos se impone un tratamiento diferencial acorde a la naturaleza de la relación.

---

20. Si bien cabe diferenciar –entre otras consideraciones- el levantamiento de velo derivado de la responsabilidad establecida en el LGT en tanto que en ésta se parte de una evasión mientras que dicho régimen combate practicas elusivas.

21. La severidad del régimen de documentación previsto en el art. 16 de la LIS se ha modificado para empresas de cifra de negocios inferior a 8 millones de euros por el RDL 6/2010**,** de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

3. EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DIFERENCIAL DE LA COOPERATIVA

La sociedad cooperativa tiene principios diferentes a la sociedad de capital por su naturaleza diferencial. Tal peculiaridad se basa en una estructura de funcionamiento diverso al modelo capitalista, evidenciada en el reconocimiento constitucional de dicha singularidad en el art. 129 CE. Se ha de tener presente que la existencia de la cooperativa se enmarca en la economía social, que parte de supeditar el capital al trabajo, de integrar el hecho económico al social, y de poseer una gestión democrática.

En tal línea se hace preciso un régimen tributario acorde dadas las características singulares de su actividad, las especiales reglas de funcionamiento y el protagonismo de la personas de los socios. Así la Exposición de Motivos de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas (en adelante LRFC), afirma que "[…] se continúa una tradición de nuestro ordenamiento jurídico tributario, según la cual las sociedades cooperativas han sido siempre objeto de especial atención por el legislador, quien, consciente de sus características especiales como entes asociativos y de su función social, les ha reconocido, desde antiguo, determinados beneficios fiscales, tradición que, en definitiva, es armónica como el mandato a los poderes públicos, contenido en el apartado 2 del artículo 129 de la Constitución, de fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas".

El régimen tributario de las cooperativas no es beneficio ni privilegio fiscal, sino trato singular de una realidad diferencial y específica. Tal especificidad aparece refrendada por el reconocimiento constitucional en el art. 129.2 de la CE "2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas […]." También, desde la perspectiva tributaria, aparece formalmente reconocida su singularidad en la Ley 20/1990. Ahora bien tal reconocimiento jurídico-formal tiene por base la estructura y el carácter social de tales entes asociativos. Por ello existen también argumentos de carácter sustancial o material que justifican y exigen un trato adecuado a su diferencia.

Por un lado, la estructura de la entidad cooperativa es diversa a la de las sociedades capitalistas. Así, el capital posee una función diferente, pues parte del mismo tiene un carácter irrepartible –fondos cooperativos-[22], y resulta más un medio de trabajo de sus asociados que un instrumento para obtener un beneficio remunerado. Dicha ordenación aparece en concordancia con los principios cooperativos[23].

22. Es esta carácter de irrepartibilidad de buena parte de los fondos cooperativos el que merece dicho trato bonificado según RODRIGO RUIZ, M.A.:"Mandato constitucional de fomento y fiscalidad de las cooperativas" nº extraordinario 47, noviembre 2003, pág. 205.

23. Principios cooperativos evidenciados por la Alianza Cooperativa Internacional (aprobados en Manchester, 23 de septiembre de 1995): Adhesión voluntaria y abierta, Control democrático de los asociados, Participación económica de los asociados, Autonomía e independencia, Educación, formación e información, Cooperación entre cooperativas y Compromiso con la comunidad.

Por otro lado, a través de la cooperativa se instrumentan multitud de políticas públicas reconocidas o ubicables en el Capitulo III del Titulo I de la CE: promoción social y formación de sus miembros, acceso a la propiedad y participación en la empresa, combatir el desempleo…[24]. En tal sentido se ha considerado al sector cooperativo como un ámbito idóneo para atender parte de las demandas del Estado social[25]. Tales criterios justifican la adopción de medidas extrafiscales a través de la norma tributaria.

Por consiguiente, el régimen fiscal pretendidamente más favorable que se establece supone un trato igualitario, dado los diferentes presupuestos de los que se parte en relación a la sociedad capitalista. La cooperativa contribuye a unas necesidades sociales, refrendadas constitucionalmente, que no tendrán que ser efectuadas por el Estado, con lo que se deja de gastar en las mismas. Tal regulación no es privilegio ni beneficio, sino un tratamiento acorde de una situación diferencial. Así señala RODRIGUEZ RUIZ que "no cabe hablar, en puridad, de autentica exención fiscal, sino de una simple norma técnica de ajuste para adaptar el régimen tributario común a las características propias de estas sociedades y a la auténtica capacidad contributiva que, por razón de las mismas, pone de manifiesto"[26]. El régimen fiscal peculiar otorga un trato proporcional al valor social que aporta. Es un régimen que ha de compensar la aportación que ésta efectúa a la sociedad.

Ahora bien dicho tratamiento diferencial no es genérico, de todas las relaciones en que actúen las cooperativas, sino ha de obedecer a los principios y caracteres sociales que le son propios. Así no se ha de perjudicar a la competencia cuando las cooperativas actúen el mercado sin aportar el plus social que las singulariza. En tales supuestos, si se otorga una ventaja en la competencia, puede resultar un beneficio desproprocional entrañando riesgos para la competencia y pudiendo, el régimen fiscal establecido, constituir una ayuda de Estado que contraríe los dictados comunitarios[27].

---

24. VICENT CHULIA, F.: "Situación actual de las cooperativas en el marco constitucional español: legalidad autonómica, estatal y fiscal". *Revista CIRIEC*, nº extraordinario octubre 1987, pág. 38.

25. Ver en tal sentido las reflexiones y citas de RODRIGO RUIZ, M.A.:"Mandato constitucional de fomento y fiscalidad de las cooperativas".*Revista CIRIEC.* nº extraordinario 47, noviembre 2003, pág. 207 y ss.

26. RODRIGO RUIZ, M.A.:"Mandato constitucional de fomento y fiscalidad de las cooperativas". *Revista CIRIEC.* nº extraordinario 47, noviembre 2003, pág. 205.

27. Ver en tal sentido MERINO JARA, I.:"El vigente régimen fiscal de las cooperativas a la luz de las ayudas de Estado", nº 66/2009. La peculiar relación entre la cooperativa y el socio resulta el objeto básico que justifica el establecimiento de dicha entidad así el Reglamento (CE) nº 1435/2003, de 22 de julio de 2003, del Consejo relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE). El art. 1.3 afirma que la SCE tendrá por objeto principal la satisfacción de las necesidades y el fomento de las actividades económicas y sociales de sus socios, en particular mediante la conclusión de acuerdos con ellos para el suministro de bienes o servicios o la ejecución de obras en el desempeño de la actividad que ejerza o haga ejercer la SCE. La SCE podrá asimismo tener por objeto la satisfacción de las necesidades de sus socios mediante el fomento de su participación en actividades económicas, en el modo mencionado, en una o más SCE o sociedades cooperativas nacionales. La SCE podrá llevar a cabo sus actividades a través de una filial.

Hay que diferenciar las relaciones específicas que se dan en el seno de la cooperativa: a) de la cooperativa con sus socios, en la medida que su relación vaya más allá a la meramente comercial, b) de la cooperativa con terceros ajenos, aunque sean familiares de los socios. En esta línea no se aplicará el régimen general de operaciones vinculadas a la relación socio-sociedad cuando tiene por base el fundamento cooperativo.

3.1. LAS OPERACIONES COOPERATIVIZADAS

El art. 15 de la LRFC establece un régimen específico próximo a las operaciones vinculadas. Se trata de una realidad diversa delimitada por el hecho de que se trate de relaciones de las cooperativas con sus socios en el desarrollo de sus fines sociales. Así lo señala expresamente en su apartado 1: "Las operaciones realizadas por las cooperativas con sus socios, en el desarrollo de sus fines sociales, se computarán por su valor de mercado".

3.1.1. Ámbito de aplicación

Se acota dicho régimen de operaciones cooperativizadas –según reza la designación de dicho artículo- por la concurrencia cumulativa de dos requisitos, uno subjetivo y otro teleológico. Se trata de un régimen menos riguroso al que se prevé en el contexto de sociedades capitalistas para la relación con sus socios que precisa:

1º. Desde la perspectiva subjetiva, son las relaciones cooperativas-socio. Se excluye las relaciones que puedan tener con familiares o terceros que no tengan dicha consideración, aunque sean trabajadores de la entidad. Cabe plantear si se incluyen las relaciones entre entidades, o sea, una persona jurídica, sea cooperativa o no que sea socia de una cooperativa. A este respecto señala expresamente el art. 16.3 l) de la LIS como operaciones vinculadas las establecidas entre "Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas". La diversa mención entre operaciones cooperativizadas y las propias de las operaciones vinculadas parecería entrañar una lógica dispar. Pero pensamos que el art. 15 de la LRFC no diferencia entre personas físicas o jurídicas al mencionar la condición de socios, y la filosofía y peculiar sentir del movimiento cooperativo no se limita a las relaciones entre la sociedad y sus socios personas físicas sino que se extiende a las establecidas en el plano de las cooperativas de segundo grado.

Las operaciones cooperativizadas no son más que una especie singular de relación en la que el los sujetos poseen una vinculación antes de su realización. Con ello no queremos decir que las operaciones vinculadas de la LIS sean el género de éstas, también son especie; régimen concreto de supuestos en los que la relación personal o familiar entre los sujetos puede alterar el precio de los negocios. La relación cooperativa-socio constituye un supuesto concreto de operaciones en los que las relaciones personales y/o patrimoniales de los sujetos intervinientes pueden ser utilizadas para alterar los precios. Sin que en tal relación se exija –por razón de su

peculiaridad- una determinada participación porcentual en el capital social, a diferencia de lo que ocurre en las operaciones vinculadas de la LIS -el 5% o el 1% en función de si se trata o no de valores admitidos a negociación en mercado regulado-

Con la designación específica de operaciones cooperativizadas se remarca la singularidad de su tratamiento en relación al previsto para las sociedades capitalistas para tales operaciones, contempladas en tal contexto como anómalas o sospechosas. Pues, en el ámbito cooperativo las operaciones cooperativizadas son relaciones normales, buscadas de forma originaria por formar parte intrínseca de la filosofía que anima a tales entes.

2º. Desde una perspectiva teleológica. Las operaciones a las que se aplica dicho régimen específico han de ser realizadas con motivo, o teniendo presente los fines sociales que animan a la cooperativa. Esta nota acoge un elemento esencial que justifica el régimen diferencial a las operaciones vinculadas previstas en el impuesto sobre Sociedades. Los especiales fines de la relación cooperativa hacen necesario un trato singular de dicha realidad. Se ha de tener presente que la relación cooperativa socio es peculiar, dada la conformación de la entidad y sus características. Así la cooperativa es una organización inclusiva en donde la relación con sus socios es la razón de existencia, de ahí que exista normas que aseguran su participación en las decisiones comunes, y que establecen una adecuada distribución de resultados. También la existencia de principios cooperativos que canalizan valores propios que constituyen el eje fundamental de su origen y funcionamiento[28]. La especificidad de tal realidad conlleva un reconocimiento normativo de su singularidad y la necesidad de su fomento en el art. 129 de la CE.

La relación socio-cooperativa no se limita a la derivada de detentar un capital pues, en numerosas ocasiones, los socios son proveedores –agricultores respecto de las cooperativas agrarias-, clientes –consumidores respecto de cooperativas de consumo- o trabajadores –respecto de las cooperativas de trabajo asociado-. La razón de ser de muchas cooperativas es llevar a cabo transacciones con los socios, y que éstos se vean beneficiados respecto de su situación en el mercado. Se da una relación entre los socios y la sociedad más plural, diversa y continuada, que resulta intrínseca a su definición como tal y que, consecuentemente, precisa de un trato acorde. En tal contexto, la aplicación del régimen previsto para las operaciones vinculadas -de las sociedades capitalistas-, en donde el socio y la sociedad se relacionan solamente por la condición de ser poseedor de parte de su capital, resulta discordante.

3.1.2. La obligatoriedad y los métodos de valoración.

Se establece la obligatoriedad de computar las operaciones cooperativizadas según el valor de mercado, como se deduce de la dicción del art. 15 de la LRFC. El

28. Ver a este respecto los principios cooperativos conformados por la Alianza Cooperativa Internacional.

incumplimiento de dicha valoración no comporta las consecuencias y efectos previstos para las operaciones vinculadas pues, como hemos señalado, son realidades diversas.

Ahora bien, cuando se alude a la determinación del valor de mercado caben diversos métodos, y aquí es donde se establece expresamente un método de valoración aplicable a concretas realidades, sin que sea posible la opción. El art. 15 de la LRFC parece partir de diferenciar en función de quien realice la prestación, si el socio o la sociedad, pero tal criterio se halla contextualizado por las características propias de la actividad cooperativa.

A tal efecto se establece una regla general de valoración -art. 15.1- que sufre diversa concreción en función del sujeto que realiza la prestación o por las características de las entidades, y de las consiguientes relaciones establecidas entre el socio y sociedad –art 15.2 y 3-.

Como regla general se alude al valor de mercado, entendiendo por éste el precio normal de los bienes, servicios y prestaciones que sea concertado entre partes independientes. En tal contexto se omite la exigencia de libre competencia, que sí se menciona en caso de operaciones vinculadas –art. 16.1.1LIS-. Tal omisión no resulta baladí, pues resulta significativa del contexto singular en el que nos encontramos, y tiende ha acentuar la separación conceptual de ambos supuestos de vinculación –el de las sociedades capitalistas y el de las sociedades cooperativas-.

Los criterios del art. 15.2 de la LRFC que concretan dicho valor atienden, sobre todo, a si el sujeto prestatario es el socio o la sociedad. Si es el socio se diferencia según:

-Si es entrega de bienes, se establece como criterio subsidiario -en defecto de que no se realicen operaciones similares entre partes independientes en las zonas de actuación de la cooperativa-, el determinado por el margen bruto habitual del precio de venta. Así se afirma que “Cuando no se produzcan operaciones significativas entre partes independientes dentro de la zona que, conforme a las normas estatutarias, actúe la cooperativa, el valor de mercado de las entregas efectuadas por los socios se determinará rebajando del precio de venta obtenido por esta el margen bruto habitual para las actividades de comercialización o transformación realizadas.” Es el margen habitual contextualizado e individualizado según la zona de actuación. En caso de que no exista tal referencia se ha de aplicar la regla general, y no necesariamente el margen habitual de zonas limítrofes.

-Si se trata de anticipo de bienes “El importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores y de trabajo se calculará conforme a las retribuciones normales en el mismo sector de actividad que hubieran debido percibir si su situación hubiera sido la de trabajadores por cuenta ajena.

-Si se trata de la cesión de derechos. “La cesión de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra se valorará por la renta usual de la zona para dichas cesiones.”

Junto a los anteriores criterios se establecen unas reglas específicas de valoración en donde el criterio rector resulta, el carácter de la cooperativa, y que sea ésta

la entidad la prestataria. No obstante en las cooperativas agrarias se aplica el criterio de coste incrementado, tanto para los servicios y suministros que la cooperativa realice a sus socios, como para el que los socios realicen o entreguen a la cooperativa. Se tratan de reglas específicas, no meras concreciones del valor de mercado –como denota también su ubicación en un número aparte- ya que establece un criterio de determinación del valor que puede no tener presente el valor de mercado. Es un criterio de determinación imperativa y de aplicación directa, no subsidiaria para el caso de no poder concretar dicho valor de mercado. En tal contexto, se establece la regla de valoración en donde el precio no puede ser inferior al coste de producción y de los gastos generales que se devenguen por el funcionamiento propio de la entidad. Para el cálculo de tales gastos generales se alude a los de funcionamiento, propios de la gestión societaria, los cuales han de prorratearse en función de su producción para acotar el concreto valor. Así el art. 15. 3. señala que "No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se traten de cooperativas de consumidores y usuarios, vivienda, agrarias o de aquellas que, conforme a sus estatutos, realicen servicios o suministros a sus socios, se computará como precio de las correspondientes operaciones aquél por el que efectivamente se hubiera realizado, siempre que no resulte inferior al coste de tales servicios y suministros, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la entidad. En caso contrario se aplicará este último. En las cooperativas agrarias se aplicará este sistema tanto para los servicios y suministros que la cooperativa realice a sus socios como para que los socios realicen o entreguen a la cooperativa". De lo expresado se observa como el valor así determinado ha de ser superior al parámetro de referencia, pero puede ser inferior al de mercado en caso de que éste exista y sea superior.

3.1.3. Efectos y ajustes.

Las anteriores exigencias configuran a las operaciones cooperativizadas con un régimen tributario específico y diferente al propio de las operaciones vinculadas previsto en la LIS. Todo ello sobre la base de dos grupos de argumentos, los propios de la especificidad de la normativa tributaria, y los derivados de la concreta potestad tributaria que se ejerce.

Por un lado, la finalidad de la Ley 20/1990, según señala en su articulo 1.1, es la de regular de manera plena "el régimen fiscal de las sociedades cooperativas en consideración a su función social, actividades y características". No se establece un régimen tributario especial del Impuesto sobre Sociedades, pues su consideración sistemática no es esta ya que no se ubica en el Titulo VII de la LIS encargado de regular dichos regimenes. Es un régimen pleno y completo en materia de fiscalidad de la sociedad cooperativa. Así, de manera concordante, las lagunas que eventualmente pudieran concurrir se suplen acudiendo a las normas tributarias generales, o sea a la Ley General Tributaria principalmente. Por ello el art. 1. 3. afirma que "En lo no previsto expresamente por esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales".

Por otro lado, se ha de tener presente que las operaciones vinculadas instituyen un régimen de valoración, unas consecuencias, y cautelas para su salvaguarda, pero no cuestionan las potestades de comprobación de la Administración a ejercer. Teniendo en cuenta que en el seno de la potestad de comprobación e inspección se incluye la de comprobación de valores, si bien con una cierta singularidad y autonomía, como denota el art. 57 de la LGT. Cuando se ejerce tal potestad de comprobación, si se trata de una operación vinculada se aplica un régimen más severo y peculiar de los ajustes a realizar, mientras que las operaciones cooperativizadas -al existir una menor regulación- se originan algunos interrogantes sobre los efectos de las correcciones valorativas. Tales interrogantes y lagunas, atendiendo a tal planteamiento, no se cubren con el régimen de la LIS para las operaciones vinculadas, sino con el más que genérico en el que ambas se insertan: el de la LGT.

Con arreglo a lo anterior resulta que las discrepancias valorativas derivadas del ejercicio de la potestad de comprobación se han de regular por lo dispuesto en el art. 57 de la LGT con las singularidades en la aplicación de los medios de comprobación que prevé el art. 15, según reconoce el 57.3 de la LGT. El art. 15 de la LRFC acota la discrecionalidad de los medios a utilizar por la Administración según remite el art. 57.1 de la LGT. El procedimiento a través del que se lleva a cabo la comprobación de valores es el que se prevé en el art. 134 y 135 de la LGT. Tal tratamiento comporta que no se podrán aplicar los ajustes normativos previstos por la LIS para las operaciones vinculadas, en particular, el ajuste secundario y la recalificación jurídica que supone, ni tampoco las consecuencias punitivas previstas para dichas operaciones vinculadas, aplicándose el régimen general de la LGT. Ahora bien, el ajuste primario y su eficacia bilateral parece connatural al proceso de comprobación de valores en que se detecta una incorrección en la misma.

3.2. SOBRE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS A LA COOPERATIVA

En el seno de la cooperativa pueden darse distintas operaciones entre sujetos que poseen una relación personal y/o patrimonial previa. Las relaciones cooperativa-socio, en la medida que resulten operaciones cooperativizadas, constituyen una realidad singular y, consecuentemente, poseen diverso tratamiento, designación y régimen. Si bien, fuera de tal realidad y en el contexto de la cooperativa, no se excluye la aplicación del régimen de operaciones vinculadas previstas en la LIS.

Las operaciones vinculadas rigen en el ámbito cooperativo, pero no respecto de las operaciones cooperativizadas, por resultar una lógica y fundamento dispar que explicita su ámbito de aplicación. Con ello se afirma implícitamente la aplicabilidad de las normas previstas para las operaciones vinculadas al ámbito de las sociedades cooperativas delimitadas, en las operaciones socio-sociedad, por la finalidad de las mismas, poseyendo, en las demás relaciones vinculadas, una aplicabilidad plena. El carácter de los sujetos intervinientes y la peculiar finalidad de su relación, ya sea de entrega de bienes, o ya sea de prestación de servicios resultan los crite-

rios de separación. Para ello procede, en primer lugar, afirmar la vinculación entre los sujetos intervinientes por la condición de socio y sociedad y, en segundo lugar, acotar si dicha vinculación es propia de operaciones cooperativizadas o no, en cuyo contexto cobra especial importancia los fines sociales que animan dicha entidad. Así, si la operación realizada entre socio y sociedad no vehicula una finalidad propia del sector cooperativo se le aplicará dicho régimen. La reiteración de esta idea resulta necesaria para explicitar precisamente la especificidad que resultan las operaciones cooperativizadas. La diversa designación no es una mera cuestión terminológica en donde resulte intercambiable el sentido y el régimen, sino que denota una distancia y alejamiento de concepciones y, consiguientemente, también en su tratamiento.

De la contraposición efectuada, entre operaciones vinculadas y operaciones cooperativizadas, resulta que en el seno de la cooperativa pueden coexistir ambas; si bien poseen un régimen y consecuencias divergentes. En las operaciones cooperativizadas, se despliega un régimen diferenciado que se haya determinado por su regulación en la LGT. El mismo no resulta tan gravoso como el previsto para las operaciones reguladas en la LIS, en plena concordancia por constituir operaciones ordinarias e intrínsecas en el funcionamiento de la sociedad cooperativa. Para completar el régimen de las operaciones cooperativizadas se ha de tener presente:

En primer lugar, no se establece un concreto régimen de ajustes. Si bien se ha de entender aplicable el ajuste primario y su carácter bilateral, como un efecto más propio de la comprobación de valores que de la aplicación del régimen de operaciones vinculadas de la LIS. Respecto de los ajustes secundarios, que implican un recalificación de las operaciones, no son de aplicación los previstos para las operaciones vinculadas, por constituir una consecuencia propia de su régimen específico en relación a la comprobación de valores.

En segundo lugar, no existen obligaciones formales propias de las operaciones vinculadas en el contexto de la LIS, únicamente las genéricamente exigibles y deducibles de la carga probatoria.

En tercer lugar, existe la obligación de valoración de acuerdo al mercado estableciendo la normativa métodos propios con una prelación y concreción propia.

En cuarto lugar, no existen infracciones tributarias específicas de la LIS.

EMPRESAS DE INSERCIÓN: RAZONES PARA UNA FISCALIDAD ESPECÍFICA

Mª Pilar Bonet Sánchez
Profesora Titular Interina
Facultat de Dret
Universitat de València

RESUMEN

Las empresas de inserción social o sociolaboral tienen por objeto reinsertar en el mercado a colectivos en situación o riesgo de exclusión social, con un sobrecoste o baja rentabilidad para la empresa por la escasa capacitación profesional de los colectivos en inserción. El trabajo se centra en el estudio del régimen tributario actual aplicable tanto a las empresas de inserción en función de su forma jurídica, como a las entidades promotoras sin ánimo de lucro, con el fin o determinar su suficiencia como elemento incentivador de las empresas de inserción, así como en la existencia de fundamentos constitucionales y comunitarios que justifiquen la presencia de un régimen específico para estas empresas en virtud de la función social que cumplen.

PALABRAS CLAVE: Empresas de inserción, exclusión social, incentivos fiscales, economía social.

Descriptores Econlit: H250, H530, I380, J640, K340, L310

Mª Pilar Bonet Sánchez
(pp. 87-118)

INTEGRATION ENTERPRISES: ARGUMENTS FOR A SPECIFIC TAX REGIME

ABSTRACT

The purpose of social integration or social and work integration enterprises is to reintegrate groups which are socially excluded or at risk of social exclusion into the labour market. These groups entail extra cost to the company or low profitability because of their limited work skills. This study focuses on the current tax regime that applies both to integration enterprises depending on their legal form and to non-profit initiating organizations, with a view to determining its aptitude for stimulating insertion enterprises, and on the existence in the Spanish constitution and EU law of grounds for justifying a specific tax regime for these enterprises on the basis of the social function they perform.

KEY WORDS: Integration enterprises, social exclusion, tax incentives, the social economy.

Empresas de inserción: razones para una fiscalidad específica
(pp. 87-118)

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA. 3. RÉGIMEN TRIBUTARIO. 3.1. Formas jurídicas. Las cooperativas de iniciativa social. 3.2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 3.3. Impuesto sobre Sociedades. 3.4. Impuesto sobre el Valor Añadido. 3.5. Impuestos locales. 4. JUSTIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. 4.1. En el ámbito del Derecho interno. 4.2. En el ámbito del Derecho comunitario. 5. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Todos sabemos lo que es una empresa, aunque para definirla utilicemos criterios diferentes en función de la óptica que adoptemos, o de la disciplina que la tenga como objeto de estudio. También sabemos que la inserción es una acción de inclusión, de integración, y la inserción social es la acción de incorporación o participación de alguien en la sociedad.

Pues bien, las empresas de inserción (en adelante, EI) son organizaciones en las que confluyen ambos elementos. Las EI son estructuras económicas que aúnan un doble objetivo: producir bienes o servicios para el mercado y servir de instrumento para la integración social de personas excluidas o en riesgo de serlo. Se trata, por tanto, de estructuras híbridas en las que converge el *objetivo económico* de realización de una actividad en el mercado (de producción, comercialización, servicios), dando empleo a trabajadores, con el *objetivo social* de insertar en dicho mercado -y aún en la misma sociedad- a colectivos de difícil empleabilidad, o que se encuentran en riesgo o situación real de exclusión social[1]. Y como punto de inserción de ambas circunstancias o condiciones, estas empresas tienen la particularidad de que los beneficios obtenidos los reinvierten en fines sociales, normalmente en la propia empresa (mejorando instalaciones, itinerarios, etc.). Se ha puesto de relieve la dificultad que entraña la necesaria armonización entre ambos objetivos, cuyo equilibrio debe vigilar y garantizar la entidad promotora de la EI (LÓPEZ ARANGUREN)[2].

1. Para Carlota Quintão "estas empresas tienden a asumir un carácter híbrido entre el cooperativismo y el asociacionismo no lucrativo. QUINTÃO, C.: "Empresas de inserción y empresas sociales en Europa", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, p. 46.

2. LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L. M.: *Las Empresas de Inserción en España: un marco de aprendizaje para la inserción laboral*, CES, 2002, p. 160.

Suelen destacarse como principales rasgos característicos de las EI el ser estructuras productivas (por la forma, en la medida en que realizan una actividad económica dirigida al mercado, aunque por el objeto social se les puede calificar de entidades sin ánimo de lucro); son básicamente estructuras de aprendizaje y, como consecuencia de ello, son instrumentales y transitorias; por último, intervienen dos tipos de elementos personales: los trabajadores que son personas en riesgo de exclusión social, objeto de la actividad de inserción, y los agentes sociales que actúan como acompañantes en el proceso de inserción sociolaboral y dirigen el itinerario de inserción[3].

Parece claro que el vehículo más adecuado para insertar a alguien en la sociedad en la que vive es el trabajo: la realización de una actividad que tiene su repercusión en la sociedad y que le proporciona medios económicos para su mantenimiento y el de su familia. Si a los colectivos económicamente más desfavorecidos y a las personas en riesgo de exclusión social les cuesta encontrar empleo habitualmente, en tiempos de crisis como la que estamos padeciendo la dificultad se incrementa de forma exponencial, no sólo por su falta de capacitación o adaptación, sino por el factor añadido que supone el hecho de que las empresas eliminen puestos de trabajo, lo que redunda en una selección natural de los trabajadores más cualificados. En esta situación cobra mayor relevancia la función que cumplen las empresas de inserción, al procurar la integración de personas inadaptadas y con pocas posibilidades de formación que de otro modo no podrían acceder al mercado laboral, sobre todo si se tiene en cuenta que esta labor social se desenvuelve en un entorno competitivo[4].

Las EI nacen en el último cuarto del siglo pasado como respuesta al incremento de la pobreza y la marginación social, y van proliferando -aunque de forma diferente en cada país- a medida que aumenta la conciencia social de determinados colectivos de ciudadanos, preocupados por poner fin o al menos aliviar la situación de los más desfavorecidos. El surgimiento de este tipo de empresas de carácter social se produce en el seno de las empresas sociales, como un subtipo de éstas, dentro

3. FUNDACIÓ UN SOL MÓN (ed.): *Las Empresas de Inserción en España*, Obra Social Caixa Cataluña, 2007, p. 21. LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L. M.: *Las Empresas de Inserción...,* cit., pp. 157 y ss. Domínguez Gascón y Ballesteros Ordóñez definen las empresas de inserción como "estructuras de aprendizaje, dirigidas a la producción de bienes o prestación de servicios que tienen como fin primordial la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión y llevan a cabo un proyecto personal de inserción mediante un proceso de aprendizaje adecuado" (DOMÍNGUEZ GASCÓN, M. y BALLESTEROS ORDÓÑEZ, M. (2003): *Las empresas de inserción: su acceso a la contratación pública*, Amábar, SL, Burgos, p. 89).

4. *Vid.* MARCUELLO SERVÓS, C.: "Presentación del monográfico «Empresas de inserción: puentes de inclusión en el mercado laboral»", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 5-6.

de lo que se ha dado en llamar la nueva economía social, o economía solidaria[5], como componentes del más amplio Tercer Sector (o Tercer Sistema, en EU).

En torno a las empresas sociales se han desarrollado varios proyectos europeos enmarcados en la Red de investigación EMES: Proyecto EMES (1996-1999), "Emergencia de la empresa social en Europa", que da título a la red[6]; Proyecto Tercer Sector y Empleo (1997-1999), "Empresas y organizaciones del tercer sistema: un desafío estratégico para el empleo", en colaboración con CIRIEC Internacional; Proyecto ELEXIES (2002-2003), "La empresa social: lucha contra la exclusión a través de la inserción económica y social"; Proyecto PERSE (2001-2004) sobre los resultados socieoeconómicos de las empresas sociales de inserción laboral[7].

En algunos países como Francia los procesos e iniciativas de inserción son objeto de regulación legal ya desde los años setenta, pasando por distintas figuras de menor a mayor complejidad e implicación: desde los Centros de Ayuda y Talleres Protegidos, con sus contratos de empleo-formación para jóvenes, a los Centros de Adaptación para la Vida Activa (CAVA); de las Asociaciones Intermediarias a las Administraciones de Barrios y las Empresas de Inserción (1991-1992). Aunque hay empresas de inserción en otros países europeos (Bélgica, Alemania e Italia), en ninguno de ellos tienen el arraigo y la ordenación jurídica que tienen en Francia[8].

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA

En España las primeras medidas de carácter general aparecen en el año 2000, con la aprobación de un programa de inserción laboral para trabajadores desempleados de larga duración (12 meses o más), en situación de necesidad por haberse extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el correspondiente subsidio asistencial y con familiares a su cargo, que sean mayores de 45 años (Real Decreto 236/2000).

---

5. *Vid.* LAVILLE, J. L. (1994): *L'Économie solidaire. Une perspective internationale*, Desclée de Brouwer, Paris; DEFOURNY, J., FAVREAU, L. Y LAVILLE, J.L. (dir) (1997): *Inserción y nueva economía social. Un balance internacional*, CIRIEC-España, Valencia; DEMOUSTIER, D. (2001): *L'économie sociale et solidaire*, Syros, Paris.

6. Pueden verse en http://www.emes.net.

7. Puede verse un análisis de los resultados de algunos de los proyectos citados en QUINTÃO, C.: "Empresas de inserción y empresas sociales en Europa", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 33-59.

8. *Vid.* LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L.M.: *Las Empresas de Inserción en España…* , op. cit. p. 166-185.

Un año después se crea un nuevo contrato temporal de inserción y se establecen incentivos[9] para las empresas y las entidades sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados en situación de exclusión social, pertenecientes a colectivos de especial riesgo[10] (Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad). En esta norma se define por vez primera a las EI: "Se considerarán *empresas de promoción e inserción laboral* de personas en situación de exclusión social, cualquiera que sea su forma jurídica y actividad económica, aquéllas que dediquen habitualmente no menos del 30 por 100 de sus puestos de trabajo al empleo de personas que estén en alguno de los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, para formarles y adiestrarles en el ejercicio normalizado de una actividad laboral; tendrán como fin primordial de su objeto social la plena integración laboral y el acceso al empleo ordinario de las indicadas personas" (Disp. Adic. 9ª).

Las EI han sido objeto de una regulación específica de ámbito nacional en 2007, por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. Aunque no puede decirse que se haya instituido un régimen completo con una regulación suficiente, al menos supone un primer intento de establecer un marco general de actuación. Con anterioridad algunas Comunidades Autónomas (CCAA) ya se venían ocupando de esta materia desde mitad de la década de los 90[11]. Y tras la Ley estatal, son ya varias las CCAA que han adaptado su legislación a la normativa estatal dictando normas dirigidas a la calificación y registro de las empresas de inserción: Galicia, por Orden de 6 de mayo de 2008; Asturias, por Resolución de 22 de diciembre de 2008; Comunidad Valenciana, por Decreto 81/2009, de 12 de junio; Aragón, por Decreto 128/2009, de 21 de julio; Extremadura, por Decreto 78/2010, de 18 de marzo; Castilla-La Mancha, mediante el Decreto 22/2010, de 20 de abril; y Andalucía, por Decreto 193/2010, de 20 de abril[12].

9. El incentivo consiste en la bonificación del 65% en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante el tiempo que dure el contrato con un máximo de 24 meses.

10. Básicamente son los mismos que los incluidos en el ámbito subjetivo de la vigente ley de empresas de inserción que veremos a continuación, aunque ésta amplía dicho ámbito a inmigrantes que proceden de centro de alojamiento alternativo.

11. Así, en la Comunidad Valenciana (1995, aunque la normativa vigente es la Ley 1/2007, de 5 de febrero), Castilla-La Mancha (Ley 5/1995), Navarra (DF 130/1999), País Vasco (Decreto 305/2000). Actualmente disponen de normativa autonómica en relación con la inserción sociolaboral, además de las Comunidades citadas, las siguientes: Cataluña (Ley 27/2002), Baleares (Decreto 60/2003), Canarias (Decreto 32/2003), La Rioja (Ley 7/2003 y Decreto 2/2006), Madrid (Decreto 32/2003), Aragón (Decreto 37/2006), Galicia (Decreto 156/2007), Castilla y León (Decreto 34/2007), Murcia (Orden de 20 de junio de 2007).

12. En realidad las CCAA sólo tienen que desarrollar los artículos 7 a 9 de la Ley 44/2007, relativos a la calificación y registro de las empresas de inserción, ya que los demás aspectos se regulan en la ley estatal: básicamente, concepto y requisitos que han de cumplir estas empresas, quiénes pueden ser trabajadores de una empresa de inserción, el itinerario de inserción sociolaboral, los servicios de intervención y acompañamiento, quiénes pueden ser entidades promotoras y condiciones de la pérdida de calificación de una empresa como de inserción.

La citada Ley de las Empresas de Inserción (en adelante, LEI, o Ley 44/2007) se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7ª CE). Las CCAA pueden regular también la inserción social, pero desde su competencia en relación a la asistencia social (art. 148.1.20ª CE), y como instrumento para conseguir la igualdad de sus ciudadanos y de sus derechos sociales, plasmadas en los distintos Estatutos de Autonomía.

Concepto y requisitos: la empresa de inserción se define a los efectos de la LEI como *"aquella sociedad mercantil o cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario"* (art. 4 Ley 44/2007).

La sociedad debe estar inscrita en el registro correspondiente a su forma jurídica (Mercantil o de Cooperativas), así como en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma en que radique el centro de trabajo. Además debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar promovidas por una o varias **entidades promotoras** (sin ánimo de lucro, públicas o privadas, Asociaciones sin fines lucrativos y Fundaciones), cuyo objeto social sea la inserción social de personas especialmente desfavorecidas. La participación mínima debe ser del 51% en las mercantiles, y la máxima permitida a los socios colaboradores y asociados en el caso de cooperativas y laborales, según la normativa que les sea de aplicación.

b) Mantener un 30% anual de trabajadores en proceso de inserción durante los tres primeros años desde su calificación, y del 50% de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser su número inferior a dos.

c) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social.

d) Aplicar al menos el 80% de sus resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción.

e) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la memoria económica y social, el grado de inserción de los trabajadores en el mercado ordinario, la composición de la plantilla y la información relativa a las actividades de inserción realizadas y las previsiones para el ejercicio siguiente.

f) Contar con los medios necesarios para llevar a cabo los itinerarios de inserción comprometidos, que se habrán diseñado en colaboración con los Servicios Sociales Públicos y los Servicios Públicos de Empleo.

En cuanto al **ámbito subjetivo**, los trabajadores que pueden ser contratados por una EI han de ser *personas en riesgo de exclusión social* que se encuentren *desempleadas e inscritas* en los Servicios Públicos de Empleo, que tengan especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo y que pertenezcan a alguno de los *colectivos* siguientes:

- perceptores de Rentas Mínimas de Inserción o similares;

- quienes no puedan acceder a ellas por incumplir los requisitos exigidos o haber superado el tiempo máximo de percepción; jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de Instituciones de Protección de Menores;

- personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos en proceso de rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios que puedan acceder a un empleo, liberados condicionales y ex reclusos;

- menores internos por responsabilidades penales, los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos;

- personas procedentes de centros de alojamiento alternativo y de servicios de prevención e inserción social autorizados por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Algunas normas autonómicas posteriores a la Ley 44/2007 han ampliado el ámbito subjetivo, como la andaluza, que incorpora como personas en situación de exclusión social a aquellas que se encuentren incluidas en alguno de los colectivos siguientes[13]:

- mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección;

- personas emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares;

- personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares;

- personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante, al menos, doce meses;

- personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%.

- personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas en los párrafos anteriores, a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo.

La EI mantiene con los trabajadores una **relación contractual** de carácter laboral que se rige por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral. Se pueden celebrar dos tipos de contrato: uno, que se ajusta a las modalidades previstas en la normativa laboral, aunque por duración determinada; y otro, denominado *contrato temporal de fomento del empleo*[14], que tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como *parte esencial de un itinerario de inserción persona-*

13. Artículo 5.2 del Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.

14. Este contrato se creó un año antes para el colectivo de trabajadores minusválidos por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

lizado[15]. La duración será como mínimo de doce meses sin que pueda exceder de tres años, aunque se podría celebrar por una duración inferior si así lo aconsejan los Servicios Sociales Públicos competentes en el proceso de inserción (mínimo seis meses). A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica de doce días de salario por año de servicio.

Por lo que se refiere a los **incentivos previstos para las EI** por la Ley estatal, son los siguientes:

1. Bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años si éste es de duración indefinida[16].

2. Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo para inserción, en concepto de compensación por los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción.

3. Ayudas a la inversión fija afecta a la realización del objeto social de la empresa de inserción.

La normativa autonómica de la Comunidad Valenciana va un poco más allá: no sólo establece ayudas a las empresas de inserción, sino que también subvenciona a las empresas que contraten personas en situación o riesgo de exclusión social que hayan realizado su itinerario de inserción en una Empresa de Inserción registrada en la Comunidad Valenciana, siempre que la duración del contrato sea de seis meses como mínimo; estas empresas están obligadas a facilitar la labor de apoyo y seguimiento que la Empresa de Inserción debe llevar a cabo durante seis meses tras la **contratación del trabajador de inserción en un puesto de trabajo ordinario**. Las subvenciones son de tres tipos: para gastos corrientes de puesta en marcha, durante los tres primeros años; para el mantenimiento de los puestos de trabajo en inserción, y ayudas a la contratación del personal de apoyo sociolaboral[17].

Sin embargo se aprecia una falta de concreción de las subvenciones y ayudas, sobre todo si comparamos con la normativa autonómica existente al tiempo de promulgarse la LEI, en la que se cuantifican a porcentaje o a tanto alzado subvenciones diversas: a la creación de empresas, a la contratación de trabajadores en exclusión, a la formación, para la contratación de técnicos de asistencia técnica, para la inserción posterior en el mercado laboral y para inversiones[18].

---

15. *Vid*. SALVÁ MUT, F.: "Itinerarios de inserción sociolaboral", *Formación XXI, Revsita de Formación y Empleo,* nº 11, julio 2008, edición electrónica: http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineSection/2008/06/text/xml/Orientacion_e_insercion_laboral__Nuevas_estrategias__nuevos_sectores_.xml.html#/porqualMagazine/do/get/magazine/2008/06/text/xml/11.xml.html.

16. Concretamente, 70,83 euros/mes, 850 euros /año (art. 16 de la Ley 44/2007).

17. Ley 1/2007, de 5 de febrero, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunidad Valenciana.

18. *Vid*. el interesante estudio comparativo por CCAA y con la propia LEI (entonces Proyecto de Ley) de GARCÍA MAYNAR, A. y ESTEVE ARNAL, M.: "Las empresas de inserción en España: normativa y características", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 166-170 y 172-174.

En cuanto a la valoración de ley, en general es positiva, sobre todo por las asociaciones y federaciones de empresas de inserción. Así, se han señalado como puntos fuertes: el reconocimiento de las empresas de inserción en todo el Estado, que redunda en una unidad de tratamiento; la obligada relación de las EI con los Servicios Sociales Públicos y los Servicios Públicos de Empleo para proceder a la contratación de puestos de inserción. Y como puntos débiles: la dificultad que supone alcanzar el 50% de los puestos de inserción a partir del 4º año para las pequeñas iniciativas empresariales que arrancan con pocos puestos de trabajo; la limitada relación de personas en riesgo de exclusión social con respecto a la práctica real, excluyéndose a colectivos con los que se suele trabajar habitualmente (lo cual implicará que no les alcance la subvención); y las dificultades de ajuste formal de la contratación al modelo de contrato temporal de fomento del empleo[19].

3. RÉGIMEN TRIBUTARIO

Lo primero que hay que señalar es la inexistencia de un régimen tributario específico para las empresas de inserción, diferenciado del de las demás, por lo que a las EI les serán de aplicación los mismos impuestos que a las restantes empresas en las distintas etapas de su vida societaria o institucional: esto es, a la constitución, al funcionamiento y a la extinción de la sociedad o la entidad sin fines lucrativos.

3.1. FORMAS JURÍDICAS. LAS COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL

Con la regulación sustantiva de las EI la Ley 44/2007 ha introducido una diferencia importante a efectos de la determinación del régimen tributario con respecto a la situación anterior a la LEI: y es que antes los procesos de inserción solían llevarse a cabo a través de entidades sin ánimo de lucro, a las que se permitía realizar actividades económicas, hasta que las normas autonómicas fueron introduciendo la sociedad mercantil junto a las cooperativas y las sociedades laborales como formas posibles para las EI, reservando a las entidades sin fines lucrativos (fundaciones, asociaciones, ONGs, etc.) la función o condición de promotoras de las EI, como hace la Ley estatal.

19. ALVES BAYER, M.: "Valoración de la nueva Ley de Empresas de Inserción (Ley 44/2007) y cómo afectará al desarrollo futuro del Tercer Sector en este ámbito", *Revista Española del Tercer Sector,* nº 8/2008, Fundación Luis Vives, versión digital (http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/index.html).

Esto significa que el análisis de la tributación en cada uno de los impuestos relevantes debe hacerse de modo separado para las EI, en función de su forma jurídica, y para las entidades sin fines lucrativos (asociaciones, fundaciones, ONGs), como *entidades promotoras* de las EI. Entre las formas societarias mercantiles posibles de las *empresas de inserción* (anónima, limitada, colectiva y comanditaria) vamos a restringir el examen a las dos primeras: la limitada, por ser la forma mercantil que con mayor frecuencia se utiliza por las empresas de inserción; y la anónima, porque su régimen tributario es idéntico, aunque su uso sea realmente escaso[20]. Las otras dos formas societarias que vamos a contemplar como empresas de inserción son las cooperativas y las sociedades laborales, ambas entidades de la economía social.

Mención aparte merecen las *cooperativas de iniciativa social* previstas por la Ley de Cooperativas (LC, Ley 27/1999, art. 106), que son aquellas cooperativas que, cualquiera que sea su clase, cumplan los siguientes requisitos:

1. Sean calificadas de entidades sin ánimo de lucro

2. Tengan por objeto social cualquiera de los siguientes:

- la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social;

- el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social;

- o en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado.

A estas cooperativas se les aplicará la normativa que corresponda a su clase, e incluirán en su denominación la indicación *Iniciativa Social*. Parece que hay consenso en que los tipos más adecuados para la inserción social son la cooperativa de trabajo asociado y la de consumo[21]; de hecho, alguna normativa autonómica como la aragonesa remite expresamente a esta clase de cooperativa como forma jurídica de las

20. La Fundació Un Sol Món (2007) señala en un estudio efectuado sobre 189 empresas de inserción social, a partir de datos obtenidos de FEEDEI, AIRES, ACEI, FECLEI, EiDA, AMEY y otros, que el 60,85% adopta la forma de sociedad limitada, el 12,17% son cooperativas, asociaciones y fundaciones son respectivamente el 11,11 y el 9,52%, sociedades limitadas laborales el 4,23%, y sólo el 1,06% son sociedades anónimas (dos en total: una en Barcelona y otra en Badajoz). FUNDACIÓ UN SOL MÓN (ed.): *Las Empresas de Inserción...*, op. cit., pp. 25-26.

21. PRIETO JUÁREZ, J.A.: "La configuración de las cooperativas de iniciativa social como cauce de integración laboral", *REVESCO,* nº 73, p. 150; en el mismo sentido, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, A.: "Algunas consideraciones sobre las cooperativas de iniciativa social en el marco del fomento del empleo y la inserción laboral. Una perspectiva jurídico-económica", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 19, 2008.

empresas de inserción, junto a las sociedades mercantiles[22]. Las cooperativas de servicios serían también adecuadas por el tipo, pero presentan el inconveniente de su falta de protección fiscal, como veremos en seguida.

Para ser calificadas como **entidades sin ánimo de lucro** estas cooperativas de iniciativa social deben hacer constar expresamente en sus estatutos las condiciones siguientes (Disposición Adicional 1ª LC):

a) que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán ser distribuidos entre sus socios;

b) que las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización;

c) que los cargos del Consejo Rector serán gratuitos, sin perjuicio de que se pueda compensar a los consejeros por los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones; y

d) que las retribuciones de los socios trabajadores o, en su caso, de los socios de trabajo y de los trabajadores por cuenta ajena, no podrán superar el 150 % de las retribuciones que establezca el convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector en función de la actividad y categoría profesional.

Sin embargo, el régimen tributario aplicable a las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro es el contenido en la Ley 20/1990, de régimen fiscal de cooperativas (según la DA 9ª de la Ley de Cooperativas). Esto significa que prima el tratamiento dado en función de la clase de cooperativa sobre el que corresponde a las entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002); o, dicho de otro modo, que la función social que cumplen estas cooperativas no tiene recompensa alguna si se compara con cualquier otra cooperativa del mismo tipo que no realice labores de inserción.

Esta diferencia de trato entre entidades sin ánimo de lucro (entre una fundación o una asociación de utilidad pública y una cooperativa de iniciativa social) se va a traducir por ejemplo en un mayor tipo de gravamen aplicable en el impuesto sobre Sociedades, como veremos seguidamente, y no tiene justificación alguna.

22. Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, art. 3.2. En otras CCAA, como Castilla y León, simplemente se prevé que en caso de que la empresa de inserción laboral tenga forma jurídica de cooperativa deberá estar calificada previamente como de iniciativa social (art. 4.2 Decreto 34/2007, de 12 de abril). Y aunque por vía indirecta, en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Ley 8/2003, de 24 de marzo) se establece que las cooperativas no lucrativas podrán adoptar la forma de cooperativa de trabajo asociado, de servicios o de integración social (art. 114.3).

3.1. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

a) Empresas de inserción

Este impuesto (ITPyAJD) cuyo Texto Refundido vigente viene regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 (en adelante, TRLITP), se exige en la modalidad de operaciones societarias (OS) a la constitución de una sociedad, así como a la disolución, aumento y disminución del capital; también están sujetas las aportaciones de los socios efectuadas para reponer pérdidas y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o el domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuvieran previamente en un Estado Miembro de la UE[23]. El tipo de gravamen es el 1% y se aplicará al importe nominal del capital social en los casos de constitución y aumento de capital. Por la escritura pública en que se documenten tales operaciones deberá abonarse la llamada cuota fija del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), en la modalidad de documentos notariales: 0,15 euros por folio o 0,30 por pliego (art. 31.1 TRLITP).

Esta será la situación en la que se encontrarán en este impuesto las empresas de inserción que adopten la forma societaria de **anónima o limitada**.

Pero si la EI se constituye en **cooperativa**, su régimen tributario es el previsto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (en adelante, LRFC), que distingue entre cooperativas protegidas –aquéllas entidades que se ajusten a los principios de la Ley de Cooperativas estatal o de las Comunidades Autónomas competentes, siempre que no incurran en las causas del art. 13 de la Ley 20/1990–; y cooperativas especialmente protegidas, que son las cooperativas protegidas de primer grado de las clases siguientes: trabajo asociado, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, del mar y de consumidores y usuarios.

Los incentivos previstos por los arts. 33 y 34 para las cooperativas protegidas de primer grado, en síntesis, son los siguientes:

- Las *cooperativas protegidas* (viviendas, servicios, transportistas, seguros, sanitarias, crédito y enseñanza) gozan de exención en cualquier concepto del ITPyAJD por el que pudieran gravarse (salvo la cuota fija en AJD de las escrituras, actas notariales y testimonios) por los actos y contratos siguientes: 1) constitución y ampliación de capital, 2) constitución y cancelación de préstamos, incluso los represen-

23. Art. 19.1 TRLITP. En cambio no están sujetas (19.2) las operaciones de reestructuración empresarial, la modificación de la escritura de constitución o de los estatutos sociales, la transformación o la prórroga del plazo de duración de una sociedad, los traslados de sede de dirección efectiva o de domicilio social entre países de la UE y la ampliación de capital con cargo a la reserva constituida exclusivamente por la prima de emisión de acciones.

tados por obligaciones, y 3) adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el fondo de educación y promoción (FEP) para el cumplimiento de sus fines[24].

Las dos primeras operaciones, constitución y ampliación de capital, conforman el hecho imponible en la modalidad de operaciones societarias. Y aunque la Ley 20/1990 añade las operaciones de fusión y escisión, éstas y en general las de reestructuración empresarial dejaron de estar sujetas al impuesto desde la Ley 4/2008, en aplicación de la Directiva 2008/7/CE, de 12 de febrero. Las referentes a los préstamos lógicamente exigen la previa sujeción de aquéllos al impuesto (por el concepto TPO y por la formación documental en escritura pública, por AJD, cuota gradual de los documentos notariales), porque si el prestador efectúa la operación en el marco de su actividad económica (entidades financieras) la constitución estaría sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aunque exenta por el artículo 20.1.18º de la Ley 37/1992, del IVA (en adelante, LIVA). Y en cuanto a la cancelación, no está gravada, el art. 45.I.B.18 TRLITP declara exentas las primeras copias de escrituras notariales de documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de AJD que grava los documentos notariales. Sólo tributará por la mencionada cuota fija.

- Las cooperativas *especialmente protegidas* (trabajo asociado, agrarias, explotación comunitaria de la tierra, cooperativas del mar y de consumidores y usuarios), además de los beneficios anteriores, tienen una exención en el ITPyAJD para las operaciones de adquisición de bienes y derechos que destinen directamente al cumplimiento de los fines sociales y estatutarios.

Finalmente, si la EI adopta la forma de **sociedad laboral**, la Ley de Sociedades Laborales (Ley 4/1997, en adelante, LSL) establece ciertos incentivos en el ITPyAJD, siempre que haya obtenido la calificación administrativa de *Sociedad Laboral* y que destine al Fondo Especial de Reserva el 25% de los beneficios líquidos en el ejercicio en que se produzca el hecho imponible[25]:

a) Exención de las cuotas devengadas por las operaciones societarias (OS) de constitución y aumento de capital, así como de las que se pudieran originar en los supuestos de transformación de sociedades anónimas laborales (SAL) ya existentes

24. Para ALGUACIL MARÍ (2001) estas medidas pretenden el fomento y la financiación de las cooperativas en línea con otros ordenamientos, como el italiano o el portugués. ALGUACIL MARÍ, M.P. (2001): "Tratamiento fiscal de las cooperativas de crédito", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 12/2001, p. 62. (pp. 51-83).

25. Artículos 19 y 20 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. Sobre la insuficiencia del régimen tributario de las sociedades laborales, *vid*. CALVO ORTEGA (2005), LOZANO SERRANO, C.: "¿Existen beneficios fiscales para las sociedades laborales?", *Quincena Fiscal Aranzadi*, nº 22/2006, Pamplona, pp. 13 y ss.; versión electrónica en Westlaw.es: BIB 2006\1745; ALGUACIL MARÍ, M.P. (2008): Tributación de sociedades laborales, Aranzadi Monografías, 2008; y ALGUACIL MARÍ, M.P. (2010): "La tributación de las empresas de participación de los trabajadores: cooperativas de trabajo y sociedades laborales. Apuntes para una reforma", *REVESCO*, nº 102/2010, pp. 40-41.

en sociedades laborales de responsabilidad limitada (SLL) o por la adaptación de las SAL ya existentes a los preceptos de la Ley 4/1997.

La transformación de sociedades de capital dejó de estar sujeta al impuesto sobre operaciones societarias (IOS) por disposición de la Ley 29/1991, en aplicación de la Directiva 69/335/CEE, relativa a los impuestos que gravan la concentración de capitales, pues ya ha habido una inicial tributación por las aportaciones de capital. Por ello la doctrina que se ha ocupado de este tema debate el contenido del segundo inciso del precepto, en la medida en que puede ser superfluo o bien quedar muy limitado: concretamente se circunscribiría a los supuestos de aportaciones para reponer pérdidas y al traslado de sede de dirección o domicilio social a España desde un país tercero (Lozano Serrano, 2006), que son los otros dos casos del 19.1 del TRLITP (núm. 2 y 3) distintos de la constitución y ampliación de capital, siempre que tales operaciones se deriven de la transformación o adaptación mencionada[26].

b) Bonificación del 99 % de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO), por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.

En principio la transmisión del patrimonio empresarial es una operación sujeta al IVA, incompatible con el ITPO por lo que este impuesto (y por tanto el incentivo) será aplicable únicamente a la transmisión de inmuebles en dos supuestos, según el artículo 7.5 TRLITP[27]: cuando la entrega esté exenta del IVA por ser segunda o posterior entrega (artículo 20.1.22º Ley 37/1992, del IVA) y si no ha habido renuncia a la exención (20.2 LIVA); o bien, en caso de transmisión del patrimonio empresarial en bloque o de bienes que constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, respecto de los inmuebles que estén incluidos en dicha transmisión, cuando la operación no esté sujeta al IVA (artículo 7.1 LIVA).

c) Aunque la normativa prevé la "bonificación del 99 % de la cuota que se devengue por la modalidad gradual de actos jurídicos documentados, por la escritura notarial que documente la transformación bien de otra sociedad en sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral o entre éstas", este incentivo es inexis-

26. Véase el interesante análisis de estos "incentivos" y su futilidad en LOZANO SERRANO, op. cit.

27. Según el artículo 7.5 TRLITP: "No estarán sujetas al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido." "No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido."

tente en la práctica, ya que como antes apuntábamos la transformación dejó de ser una operación sujeta a los impuestos que gravan la concentración de capitales[28].

d) Bonificación del 99 % de las cuotas que se devenguen por la modalidad gradual de AJD, por las escrituras notariales que documenten la constitución de préstamos, incluidos los representados por obligaciones o bonos, siempre que el importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo del objeto social.

Para que sea aplicable esta exención debe existir una previa sujeción de los préstamos al gravamen gradual en AJD de los documentos notariales, cumpliéndose las condiciones del artículo 31.2 TRLITP: no estar sujetos a TPO, OS o ISD, tener por objeto cantidad o cosa valuable económicamente y que el acto o contrato sea inscribible e inscribible en el Registro Mercantil o el de la Propiedad. Es decir, deberá tratarse de préstamos sujetos al IVA (por la condición empresarial del prestador), pero exentos por virtud del artículo 20.1.18º LIVA, y que sean inscribibles en los registros mencionados, para lo cual deberán ir acompañados de una garantía real hipotecaria o semejante. Y además, se deberá destinar el importe del préstamo a la realización de alguna inversión en activos fijos que sean necesarios para el desarrollo del objeto social[29].

b) Entidades promotoras

Las entidades sin ánimo de lucro (o sin fines lucrativos, ESFL, también llamadas organizaciones no lucrativas, ONL) tienen un régimen especial reservado básicamente a fundaciones, asociaciones de utilidad pública y ONGs de desarrollo que adopten alguna de estas dos formas jurídicas. El régimen alcanza al Impuesto sobre Sociedades, al ITPyAJD y a ciertos tributos locales, y viene regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. Así, las fundaciones y asociaciones mencionadas que opten expresamente por el régimen fiscal especial previsto por la Ley 49/2002, estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según el artículo 45.I.A.b) del TRLITP (en la redacción dada por la Ley 49/2002).

Esta exención abarca a las tres modalidades del impuesto: TPO, OS y AJD, y a la autoliquidación en que se aplique la exención deberá acompañarse la documentación que acredite el derecho a la misma.

La opción por el régimen especial de las ONL o ESFL deberá efectuarse mediante la declaración censal (modelos 036 y 037), y se aplicará a los hechos imponibles (TPO, OS, AJD) que se produzcan con posterioridad a la presentación de la decla-

28. El TS en sentencia de 3-11-1997 (RJ 1997, 8251) declaró nulos los preceptos reglamentarios que mantenían este gravamen.

29. *Vid.* LOZANO SERRANO, *op. cit.*

ración, manteniéndose mientras no se produzca su renuncia expresa o se incumplan los requisitos previstos por el artículo 3 de la Ley 49/2002. La carga de la prueba del cumplimiento recae sobre la entidad, y el incumplimiento de los mismos acarreará el ingreso de las cuotas dejadas de ingresar, junto con los intereses de demora que fueren exigibles[30].

3.2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

a) Empresas de inserción

La forma jurídica exigida a las EI (sociedad anónima, limitada, laboral o cooperativa) no permite establecer a priori ninguna diferenciación en su tributación respecto de las restantes entidades del mismo tipo que tributan en el Impuesto sobre Sociedades.

1) Las Empresas de inserción que adopten la forma de **sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada** (SA o SL) tributarán en el régimen especial de las empresas de reducida dimensión (ERD o PYMEs), limitado a una cifra neta de negocios de hasta 8 millones de euros anuales[31], y cuyo régimen consiste básicamente en incentivos a la amortización: libertad de amortización de elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, siempre y en la medida en que se cree empleo (120.000 euros x Δ)[32]; amortización acelerada de los mismos elementos (al doble del coeficiente máximo) y del inmovilizado intangible (al 150%); amortización libre de activos de escaso valor, con un límite anual de 12.020,24 euros; amortización "superacelerada" de elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión del importe obtenido en la transmisión onerosa de elementos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectas a la explotación (Cmax x 3). También se pueden deducir una dotación global por pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores (1% del saldo de clientes al cierre del ejercicio); finalmente, las ERD tienen un tipo de gravamen inferior al general en 5 puntos porcentuales para una parte de su base imponible (120.000 euros).[33]

30. Artículos 14 Ley 49/2002 y 1 del Reglamento (aprobado por RD 1270/2003, de 10 de octubre).

31. En el caso improbable de que la empresa de inserción tuviera una cifra neta de negocios igual o superior a los 8 millones de euros tributaría en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades.

32. En la actualidad es más ventajoso el incentivo de la libertad de amortización previsto coyunturalmente para inversiones efectuadas en 2009 y 2010 en activos fijos nuevos e inversiones inmobiliarias afectos ambos a la actividad, con el solo requisito del mantenimiento del empleo. Este beneficio es aplicable con carácter general a todas las empresas.

33. Artículos 108 a 114 de la LIS. Puede verse un estudio detallado del régimen especial en BONET SÁNCHEZ, M.P. (1999): *Incentivos fiscales para las PYME en los impuestos sobre la renta (IRPF e IS)*, ed. Diálogo, Valencia, 1999.

2) Si la EI adopta la forma de **cooperativa** su régimen tributario en el IS es el previsto en la Ley 20/1990, en el que se pueden distinguir dos tipos de normas: las *normas de ajuste técnico* (arts. 15 a 29 –capítulo IV del Título II–), aplicables a todas las cooperativas regularmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, aun cuando incurran en alguna de las causas que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida; y las *normas de incentivo* propiamente dichas (arts. 33 a 38). A estas últimas nos vamos a ceñir aquí, por exceder ampliamente el análisis de las primeras del objeto del presente trabajo[34].

Los arts. 33 y 34 establecen los incentivos aplicables a las cooperativas fiscalmente protegidas de primer grado, de modo que podemos distinguir entre:

- Cooperativas *no protegidas*: tributan en el IS al tipo general del impuesto (30%) por la totalidad de sus resultados (art. 6.2 LRFC). Es decir, no tienen ningún incentivo especial.

- Cooperativas *protegidas* (viviendas, servicios, transportistas, seguros, sanitarias, crédito y enseñanza):

a) Tienen libertad de amortización de activos fijos nuevos que sean amortizables, adquiridos en el plazo de tres años desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente.

La cantidad fiscalmente deducible en concepto de libertad de amortización, una vez practicada la amortización normal de cada ejercicio en cuantía no inferior a la mínima, no podrá exceder del importe del saldo de la cuenta de resultados cooperativos disminuido en las aplicaciones obligatorias al fondo de reserva obligatorio y participaciones del personal asalariado.

b) La base imponible positiva o negativa correspondiente a los resultados cooperativos tributa al 20%, y la que corresponde a los extracooperativos se grava al tipo general del IS (30%).

- Cooperativas *especialmente protegidas* (trabajo asociado, agrarias, explotación comunitaria de la tierra, cooperativas del mar y de consumidores y usuarios), además de los beneficios anteriores, tienen una bonificación del 50% de la cuota íntegra, constituida por el resultado positivo de aplicar a las bases imponibles positivas y negativas el tipo de gravamen correspondiente.

En ambos casos, las bases imponibles se minoran en el 50% de la parte de los resultados cooperativos o extracooperativos que se destine obligatoriamente al fondo de reserva obligatorio (20% del excedente disponible de cada ejercicio); y si el resultado de aplicar los tipos de gravamen a las bases imponibles, positivas y negativas, es negativo, su importe se puede compensar con las cuotas íntegras que se pongan

34. *Vid.* el análisis realizado por ALGUACIL MARÍ, M.P. (2003): "Tratamiento fiscal de las cooperativas a la luz del régimen europeo de ayudas de Estado", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 14, 2003, pp. 131-181.

de manifiesto en los quince años siguientes[35]. Aunque estas son normas de ajuste técnico y no incentivos propiamente[36].

Además, se establecen bonificaciones adicionales de la cuota íntegra del IS para dos tipos concretos de cooperativas: para las *cooperativas de trabajo asociado fiscalmente protegidas* que integren, al menos, un 50 % de socios *minusválidos* y que acrediten que en el momento de constituirse la cooperativa dichos socios se hallaban en situación de desempleo, la bonificación será del 90% durante los cinco primeros años de actividad social, en tanto se mantenga el referido porcentaje de socios (DA 3ª LRFC). Y para las explotaciones asociativas prioritarias que sean *cooperativas agrarias especialmente protegidas* según la Ley 20/1990, la bonificación de cuota íntegra será del 80 % (art. 14 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias).

3) En el caso de las **sociedades laborales** (anónimas o de responsabilidad limitada) su ley reguladora sólo establece incentivos fiscales en relación con la tributación indirecta en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, artículo 19). Esto significa que el único beneficio fiscal aplicable en el Impuesto sobre Sociedades es la *libertad de amortización* de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como sociedad laboral (art. 11.2 de la LIS).

Por tanto, no hay un tratamiento tributario determinado y diferenciado para la renta que obtienen las EI en atención a su finalidad social específica, sino que se les aplica el régimen que corresponda a cualquier otra empresa en función de la forma jurídica adoptada. Con lo cual nos encontramos con una primera discriminación entre las propias EI, ya que cumpliendo la misma función social su renta estará gravada de forma diferente según el tipo de empresa[37].

b) Entidades promotoras

Las entidades sin ánimo de lucro a las que hemos hecho referencia anteriormente, **asociaciones de utilidad pública y fundaciones que cumplan los requisitos previstos por la Ley 49/2002** tienen previsto un régimen espe-

35. Arts. 26 y 24 LRFC, respectivamente.

36. Otras normas de ajuste que merecen destacarse son: la necesidad de contabilizar de modo separado los resultados cooperativos y extracooperativos (art. 16 LRFC), el cómputo de las operaciones cooperativizadas por su valor de mercado, salvo en el caso de cooperativas de viviendas, consumidores y usuarios, agrarias y las de suministro de bienes o servicios a los socios, que se computarán por su precio efectivo (art. 15); y las diferencias de calificación en cuanto a partidas deducibles y no deducibles (arts. 18 a 20).

37. Sobre este punto, *vid.* BONET SÁNCHEZ, P. (2006): *La empresa ante el sistema tributario*, Thomson-Aranzadi, 2006.

cial en el Impuesto sobre Sociedades (arts. 5 a 14): se declaran exentas las rentas que procedan de actividades económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, asistencia e inclusión social de determinados personas o colectivos vulnerables o que se encuentren en riesgo de exclusión social, siempre que dicha actividad se desarrolle en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Puede verse claramente la desigualdad de trato que antes comentábamos entre una ONL o ESFL y una cooperativa de iniciativa social, a pesar de que ambas tengan la calificación de entes no lucrativos. Parece que el legislador únicamente se ha fijado en el carácter mercantil de la cooperativa para distinguirla de fundaciones y asociaciones.

En todo caso se exige el cumplimiento de los requisitos que definen a una entidad sin fines lucrativos[38] y la opción expresa por este régimen especial. Por las rentas no exentas tributarán, en su caso, aplicando el tipo de gravamen del 10% (artículo 28.4 de la LIS).

En cuanto a la opción, y como vimos anteriormente, se realizará mediante la declaración censal (modelos 036 y 037) y la entidad quedará vinculada al régimen especial hasta que renuncie expresamente al mismo o incumpla alguno de los requisitos anteriormente referenciados. Los efectos de la opción se producirán a partir del período impositivo que finalice tras la presentación de la declaración, y la renuncia tendrá efecto a partir del período impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación con una antelación mínima de un mes.

En caso de incumplimiento de la obligación de aplicar al menos el 70% de los resultados o ingresos al fin social, la devolución de cuotas se referirá al ejercicio en que se obtuvieron los ingresos o resultados no aplicados correctamente. Y si lo que se incumple es la prohibición de reversión del patrimonio a sus aportantes en caso de disolución, la obligación de abonar las cuotas dejadas de ingresar alcanzará al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y los cuatro anteriores, sin perjuicio de las posibles sanciones.

Y si las ESFL no cumplen los requisitos exigidos para la aplicación del régimen de la Ley 49/2002, podrán tributar por el IS en el **régimen especial de las enti-**

38. Tales requisitos son: 1) que persigan fines de interés general; 2) que destinen a su consecución al menos el 70% de las rentas que obtengan; 3) que la actividad realizad no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria; 4) que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno o los parientes de cualquiera de ellos hasta el cuarto grado inclusive no sean los destinatarios principales de las actividades que realicen, ni se beneficien de condiciones especiales para la utilización de sus servicios; 5) que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sea gratuito; 6) que en caso de disolución no revierta el patrimonio a sus aportantes, sino que se destine en su totalidad a alguna entidad considerada como beneficiaria del mecenazgo o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general; 7) que estén inscritas en el registro correspondiente; 8) que cumplan las obligaciones contables y las de rendición de cuentas previstas por la normativa por las que se rigen; 9) que elaboren una memoria económica anual (art. 3º de la Ley 49/2002).

dades parcialmente exentas (arts. 120 a 122 de la LIS), que consiste básicamente en la exención de las rentas obtenidas en relación con su objeto o finalidad específica, bien por la realización de su actividad social, bien por la adquisición o transmisión lucrativa de bienes o por la transmisión onerosa de bienes afectos a la misma, siempre que se reinvierta en otros activos afectos al cumplimiento del fin social. El resto de rentas que obtenga una ESFL distintas de las mencionadas estarán sujetas a tributación, siendo gravadas al 25% [art. 28.2.e) de la LIS].

3.3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO

En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se reconoce una exención para las prestaciones de **servicios de asistencia social** que se relacionan en la Ley del IVA (LIVA, Ley 37/1992) efectuadas por entidades de Derecho Público o *establecimientos privados de carácter social* (art. 20.1.8ª LIVA). La exención se condiciona en el ámbito interno al reconocimiento del carácter social de la entidad por la Administración tributaria, exigiéndose como requisitos: 1) carecer de finalidad lucrativa y reinvertir los eventuales beneficios en la actividad; 2) gratuidad de los cargos directivos; y 3) que las prestaciones tengan por destinatarios principales a terceros no socios.

La actividad de inserción social estaría claramente incluida en el concepto de asistencia social al que se aplicaría la exención[39], y las prestaciones concretas tienen como destinatarios a la práctica totalidad de colectivos en riesgo de exclusión social: minorías étnicas, refugiados y asilados, transeúntes, personas con cargas familiares no compartidas, ex reclusos, alcohólicos y toxicómanos. Ahora bien, la entidad debe contar con el reconocimiento administrativo del carácter social, lo que en principio parece más accesible a una EI que tenga la condición de cooperativa sin ánimo de lucro, pero pude plantear problemas a otras formas sociales de EI (como anónimas o limitadas).

A este respecto debemos hacer algunas precisiones:

1º) Hay una divergencia entre la Directiva IVA (Directiva 2006/112/CE) y la LIVA, ya que no están incluidas las entregas de bienes en la exención de la LIVA -que sólo contempla las prestaciones de asistencia social- y sí en la norma comunitaria.

2º) Si realmente interesara a las EI el régimen de exención previsto para la entidades de carácter social que realizan actividades de asistencia social, habría que reconducir la interpretación del requisito de ausencia de lucro hacia un concepto

39. El Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Sociales de 23 de junio de 1995 define la asistencia social como "el conjunto de acciones y actividades desarrolladas por el Sector Público o por Entidades o personas privadas fuera del marco de la Seguridad Social, destinando medios económicos, personales u organizatorios a atender, fundamentalmente, estados de necesidad y otras carencias de determinados colectivos (ancianos, menores y jóvenes, minorías étnicas, drogadictos, refugiados y asilados, etc.) u otras personas en estado de necesidad, marginación o riesgo social".

subjetivo del mismo (Blázquez Lidoy, 2000)[40], que permite la existencia de beneficios, incluso sistemática, siempre que se reinviertan en la actividad o no se repartan entre los socios, sin que por ello se pierda la condición de entidad no lucrativa (*not-for profit*, en lugar de *non profit*) o de entidad de carácter social. En este sentido se manifestó el tribunal de Justicia en la Sentencia *Kennemer Golf* (STJCE de 21 de marzo de 2002, Asunto C-174/00), que asimila el concepto de "beneficio" a la obtención de "ventajas pecuniarias a favor de los socios". Por otra parte, el TJUE también ha afirmado que una entidad mercantil con ánimo de lucro puede ser considerada organismo de carácter social a efectos de la exención citada en el IVA, en atención al interés general de tales actividades y a los principios de neutralidad e igualdad de trato (STJCE *Kingscrest*, As. C-498/03, de 26 de mayo de 2005), aunque esta cuestión debe resolverse por cada Estado Miembro.

3º) En realidad, la exención que comentamos no constituye un beneficio fiscal para la empresa que la aplica, ya que impide deducir el IVA soportado por las compras de bienes o servicios, sino sólo para los destinatarios de las operaciones (que no son los trabajadores en proceso de inserción, sino los adquirentes de los bienes y servicios que constituyen la actividad de la empresa).

Sin embargo, no podemos perder de vista que *las empresas de inserción son entidades que realizan una actividad económica para el mercado (o dentro de él) y que no necesariamente tienen que realizar actividades de asistencia social*, por más que la inserción social considerada en sí misma sí sea una actividad que la normativa del IVA declara exenta bajo ciertas condiciones. Es decir, que aunque la EI tenga por objeto social la inserción de personas excluidas socialmente o en riesgo de serlo, lo que cuenta para la aplicación del impuesto son las operaciones que realiza la entidad, objetivamente consideradas.

Los sectores de actividad mayoritarios de las EI son: el reciclaje, la recogida y la recuperación de materiales (ropa y calzado, principalmente, pero también juguetes, residuos, etc.; así empezó Traperos de Emaús), la construcción y los servicios a personas y a empresas, seguidos del comercio, la jardinería y la hostelería[41]. Pues bien, a efectos del IVA es la actividad económica y las operaciones que se llevan a cabo las que determinan el tratamiento tributario aplicable, de forma que el objeto social o los fines de interés general que persiguen las empresas de inserción sólo tienen relevancia en casos como la exención que hemos comentado. De nuevo vemos que no hay diferencias con el resto de empresas que realicen la misma actividad económica en el mercado.

40. BLÁZQUEZ LIDOY, A.: "El IVA y las entidades sin ánimo de lucro: algunas cuestiones controvertidas (I y II)", Quincena Fiscal, núms. 13 y 14/2000.

41. Fundació Un Sol Món, op. cit., pp. 31 a 33.

3.4. IMPUESTOS LOCALES

a) Empresas de inserción

Las empresas de inserción como tales no tienen ningún tratamiento específico en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto refundido aprobado por RD 2/2004, de 5 de marzo, o TRLHL), pero gozarán de exención si en el período impositivo inmediato anterior han tenido un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros, cualquiera que sea su forma jurídica (art. 82.1.c TRLHL).

Únicamente las cooperativas gozarán de una bonificación del 95% de la cuota y, en su caso, de los recargos pertinentes, de los siguientes impuestos locales (art. 33.4 Ley 20/1990):

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en la parte correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra (art. 73.3 TRLHL). Esta bonificación será aplicable también al recargo que las áreas metropolitanas pueden establecer sobre los bienes situados en su territorio, según el art. 153 TRLHL.

- Impuesto sobre Actividades económicas [art. 88.1.a) TRLHL]: este incentivo es aplicable también a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.

b) Entidades promotoras

Las entidades sin fines lucrativos promotoras de EI (fundaciones y asociaciones) tienen previstas ciertas exenciones en los términos que siguen y para los tributos locales que se citan:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): están exentos los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, con excepción de los que estén afectos a explotaciones económicas no exentas del IS (art. 15.1 Ley 49/2002).

- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): la exención alcanza, por un lado, a las explotaciones económicas exentas que se desarrollen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica y cuyas rentas declara exentas del IS el art. 7 de la Ley 49/2002 (art. 15.2); no obstante, en estos casos la entidad debe presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, y de baja en caso de cesar en la actividad. Y por otro, están exentas del IAE las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento [art. 82.1.f) TR LHL].

- Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): están exentos los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer el impuesto recaiga sobre una entidad sin fines de lucro. En caso de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una

entidad sin fines lucrativos, la exención se condiciona al cumplimiento de los requisitos establecidos para aplicar la exención en el IBI (art. 15.3 Ley 49/2002).

En todo caso, la aplicación de las exenciones mencionadas se condiciona a que la entidad comunique al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción por el régimen especial de las ESFL (art. 15.4).

4. JUSTIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

4.1. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNO

El principio constitucional de igualdad tributaria establecido en el artículo 31.1 de nuestra Constitución implica que cualquier desigualdad de trato para que sea admisible debe estar justificada, fundamentada en otro principio constitucional merecedor por tanto de protección; el trato desigual debe superar un doble juicio de razonabilidad y proporcionalidad para que la desigualdad no sea arbitraria (STC 76/1990).

En nuestro derecho interno es fácil encontrar apoyatura constitucional al deber de los poderes públicos españoles de fomentar la acción social de inserción, de la que constituye un instrumento esencial la empresa de inserción.

Por un lado, el artículo primero de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) proclama en su primer apartado que *"España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".* Por otro, la igualdad de los ciudadanos no sólo ha de ser teórica sino también real; de ahí que el artículo 9.2 CE asigne a los poderes públicos la función de *"promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social."*

Además, la CE reconoce el derecho al trabajo dentro de la categoría de los derechos-deber, con la protección que les brinda el artículo 53 CE: vinculan a todos los poderes públicos, su ejercicio sólo puede ser regulado por ley que, en todo caso, deberá respetar el *contenido esencial* del derecho, y podrán ser defendidos mediante un recurso de inconstitucionalidad (aunque no de amparo) ante el Tribunal Constitucional. Concretamente dispone el art. 35.1 CE que *"Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo."*

Finalmente, dentro de los principios rectores de la política social y económica se impone a los poderes públicos la obligación de promover *"las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo"* (art. 40.1 CE).

Con independencia del distinto alcance o fuerza ejecutiva que pueda tener cada uno de estos principios y reglas constitucionales, en sentido dworkiniano, es claro que suponen un mandato al legislador y a los poderes públicos que deberá cumplirse en la mayor medida posible, en línea con la reinterpretación que Atienza y Ruiz Manero hacen de la teoría de Alexy de los principios como mandatos de optimización, que ellos circunscriben a las directrices o normas programáticas[42]. De este modo constituyen una base suficiente para justificar el establecimiento de ayudas públicas o de un tratamiento tributario diferenciado con el que compensar y fomentar la realización de actividades de inserción por entidades privadas (entramado jurídico-promocional de la Constitución), aunque no fuera más que por la evitación del gasto al ente público competente, ya que en definitiva están cumpliendo fines de interés general y llevando a cabo acciones que caen plenamente dentro de la competencia de los poderes públicos[43].

4.2. EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 3 del TUE establece que "…la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros". Además, el Tratado reconoce que la lucha contra la exclusión social constituye un eje importante de las políticas comunitarias de empleo y cohesión social, siendo uno de los ámbitos en los que la Unión apoyará y complementará la acción de los Estados Miembros, junto con la integración de personas excluidas del mercado laboral (arts. 9 y 153 –antiguo 137 TCE– del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)[44].

---

42. *Vid.* ALEXY, R.: *Derecho y razón práctica*, Biblioteca de Ética, Filosofía del derecho y Política, Distribuciones Fontamara, SA, 2ª ed., México, 1998; ATIENZA, M.: *El sentido del Derecho*, Ariel Derecho, 2ª ed., Barcelona, 2003; y ATIENZA, M. y RUIZ, J.: *Las piezas del Derecho*, Ariel Derecho, 2ª ed. Barcelona, 2004.

43. *Vid.* CALVO ORTEGA, R.: "Entidades de economía social: razones de una fiscalidad específica", en *Fiscalidad de las entidades de economía social: cooperativas, mutuas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo, empresas de inserción social*, Civitas, 2005, pp. 33-64.

44. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la UE, DO C 115, de 9/5/2008, p. 1.

Las acciones dirigidas a la inclusión social son, por tanto, un claro instrumento para lograr la cohesión social en Europa.

En el Consejo Europeo de Lisboa (2000) se consideró inaceptable el número de personas que viven en la UE bajo el umbral de la pobreza y en situación de exclusión social, por lo que se propuso reforzar la promoción del empleo y la inclusión social como parte de la estrategia global para lograr hacer de la Unión en el horizonte de 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. De ahí surgieron programas diversos para luchar contra la discriminación, la desigualdad entre hombres y mujeres o la exclusión social, así como para estimular el empleo y promocionar a las organizaciones que trabajan en este campo en el ámbito comunitario[45].

De las últimas actuaciones comunitarias al respecto debemos destacar:

1) El Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social – Progress (2007-2013), establecido por la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006[46]; este programa, abierto a todos los organismos públicos o privados, agentes e instituciones en general, está destinado a apoyar financieramente la ejecución de los objetivos de la UE en materia de empleo y asuntos sociales, en línea con los objetivos estratégicos de Lisboa y comprende cinco secciones: empleo, protección e inclusión social, condiciones de trabajo, no discriminación y diversidad, e igualdad de género. En el ámbito de la protección e inclusión social se establece la aplicación del método abierto de coordinación (MAC) proponiendo acciones diversas[47].

2) La designación de 2010 como "Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)" por la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008[48]. Entre sus considerandos se recuerda que

45. Entre ellos hemos de destacar la Decisión nº 50/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, por la que se aprueba un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra la exclusión social (DO L 10, de 12/1/2002, p. 1).

46. DO L 315, de 15/11/2006, p. 1.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:es:PDF

47. Concretamente (artículo 5): a) la mejora de la comprensión de las cuestiones relativas a la exclusión social y la pobreza y las políticas de protección e inclusión social, especialmente mediante análisis, estudios y el desarrollo de estadísticas e indicadores comunes; b) el control y la evaluación de la aplicación del MAC en el ámbito de la protección e inclusión social y sus efectos a escala nacional y comunitaria, y el análisis de la interacción entre el MAC y otros ámbitos políticos; c) la organización de intercambios sobre políticas, buenas prácticas y enfoques innovadores, y el fomento del aprendizaje mutuo en el contexto de la estrategia de protección e inclusión social; d) el refuerzo de la sensibilización, la difusión de información y el fomento del debate sobre los principales desafíos y aspectos políticos en el contexto del proceso de coordinación de la Comunidad en el ámbito de la protección e inclusión social, en particular entre los interlocutores sociales, los agentes regionales y locales, las ONG y otras partes interesadas; e) el desarrollo de la capacidad de las principales redes a escala europea para apoyar y desarrollar las estrategias y los objetivos políticos de la Comunidad en el ámbito de la protección e inclusión social.

48. DO L 298, de 7/11/2008, p. 20.

la lucha contra la pobreza y la exclusión social es uno de los compromisos más firmes adquiridos por la UE y por los Estados Miembros, y se propone continuar con el MAC que ya en Lisboa se decidió adoptar en este ámbito y que ha supuesto algunos logros en la concienciación política y ciudadana[49].

Entre los objetivos y principios directores del Año Europeo se encuentra el reconocimiento del *derecho fundamental de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad*, por lo que el Año Europeo *ayudará a promover su acceso efectivo a los derechos sociales, económicos y culturales, así como a recursos suficientes y servicios de calidad* (artículo 2.1.a). Y entre las actividades prioritarias (parte IV del anexo) podemos destacar la de *promover mercados laborales que propicien la inclusión, abordando el problema de la pobreza en el empleo y la necesidad de hacer que trabajar resulte rentable*, así como la de *promover enfoques integrados de inclusión activa*, junto a la más genérica de *promover estrategias integradas pluridimensionales para prevenir y reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y enfoques que se integrarán en todas las políticas relevantes*[50].

En consonancia con los objetivos comunes propuestos, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2008-2010 diseña nuevas actuaciones manteniendo los cinco objetivos prioritarios ya planteados en el período 2006-2008[51], pero los enmarca en una doble dirección estratégica de política social: *fomentar la inclusión social activa*, impulsando la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y con el acceso a unos servicios de calidad, especialmente a los servicios educativos; y *abordar el impacto producido por el crecimiento de la inmigración y el envejecimiento de la población en la exclusión social,* reduciendo los niveles de pobreza derivados de los cambios sociodemográficos producidos en nuestro país[52].

En el acto de presentación del Año Europeo celebrado en Madrid el 21 de enero de 2010 el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de

49. A pesar de lo cual, el Informe Conjunto sobre Protección e Inclusión Social 2008 revela que hay en la EU 78 millones de personas que están expuestas al riesgo de caer en la pobreza (16% de la población), de los cuales 19 millones son niños (un 19%).

50. Puede verse la información relativa al Año Europeo junto con la documentación pertinente en la web europea http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=es; así como en la web de la sede española, que incluye el plan y programa nacionales, conclusiones, calendario, etc. http://www.2010contralapobreza.msps.es/.

51. 1) Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social. 2) Garantizar recursos económicos mínimos. 3) Alcanzar una educación de calidad con equidad. 4) Apoyar la integración social de los inmigrantes. 5) Garantizar la equidad en la atención a las personas en situación de dependencia.

52. http://www.msc.es/politicaSocial/inclusionSocial/docs/2009_0_plan_nac_accion_inclusion_social_2008_2010.pdf

Oportunidades recordó las cuatro prioridades del año: reconocimiento de derechos, responsabilidad compartida y participación, cohesión y compromiso y acciones concretas[53]. Y en el debate sobre los retos y compromisos de futuro queremos destacar dos comentarios: 1) que el objetivo de empoderar a las personas en sociedades inclusivas implica por un lado, que el crecimiento debe ir acompañado de otras políticas para lograr la inclusión, ya que por sí solo no es suficiente; y por otro, que no podemos permitirnos sociedades no inclusivas que dejen atrás a tanta gente. 2) Que la globalización no ha resuelto el problema del desempleo y sin embargo sí que ha incrementado sustancialmente los beneficios del capital, por lo que las instituciones europeas y los Estados Miembros deberían hacer más hincapié en los impuestos y las tasas para favorecer la inclusión social que, básicamente significa cohesión social[54].

5. CONCLUSIÓN

La importancia de la función social que desempeñan las empresas de inserción queda avalada suficientemente por lo expuesto, tanto a nivel nacional como europeo. Parece claro que los fines de interés general que cumplen al crear empleo sostenible para sectores marginales de la sociedad, fomentando el acceso y la estabilidad laboral, merecen una atención especial por parte de los poderes públicos y del legislador, dirigida a minimizar el coste de cumplimiento de ese objetivo, lo que justifica ampliamente la existencia de un régimen tributario específico o, cuando menos la aplicación de ciertos incentivos fiscales que sirvan para tratar de compensar la desproporción coste/beneficio.

A la vista del tratamiento tributario que reciben las empresas de inserción -al menos en España- no se puede decir que la fiscalidad constituya un elemento primordial para combatir el desempleo y la discriminación social de determinados colectivos excluidos socialmente o en riesgo de serlo. Cualquiera que sea el enfoque metodológico que se adopte para definir a las empresas de la Economía Social (ONL o NPO, Economía Solidaria, Empresas Sociales, Tercer Sector), y con independencia de

53. Puede verse el Informe de la Conferencia Inaugural del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social –celebrada en Madrid el 21 de Enero de 2010- en:
http://www.2010contralapobreza.msps.es/actoPresentacion/PDF/Conclusiones2.pdf.
Y las actividades previstas en desarrollo de cada una de estas prioridades, en: http://www.2010contralapobreza.msps.es/infoGeneral/prioridades.htm.

54. Los comentarios son, respectivamente, de Antonia Carparelli, Jefa de la Unidad de Inclusión (DG Empleo) de la Comisión Europea y John Monks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos.

que las empresas de inserción puedan no cumplir todos los requisitos establecidos para cada uno de estos enfoques[55], es evidente que a efectos fiscales deberían ser objeto de un tratamiento diferenciado, de una discriminación positiva.

Las opciones posibles serían las siguientes:

1) Abundar en la calificación de la inserción social como *servicios sociales de interés general (SSIG)*, dentro de los servicios de interés general (SIG), para conseguir un reconocimiento por el Estado que permita un régimen más amplio de ayudas a las EI, compatible con las normas comunitarias sobre competencia.

La categoría de los SIG a su vez comprende dos grandes bloques: los servicios de interés económico general (SIEG) y los de carácter no económico (SNEIG). Los primeros están sometidos al Derecho de la competencia y a las normas sobre el mercado interior, y las compensaciones económicas que los prestadores perciban de los EEMM pueden quedar enmarcadas en el régimen de ayudas de Estado bajo ciertas condiciones (arts. 106 y 107 TFUE).

El papel de los SIEG como promotores de la cohesión social y territorial de la Unión aparece recogido en el art. 14 del Tratado de Funcionamiento de la UE (antiguo art. 16 TCE), que los incluye entre los valores comunes de la Unión[56]; y su función en la lucha contra la exclusión social ya fue puesta de relieve en el Libro Verde sobre los servicios de interés general[57]. Sin embargo, los SSIG no tienen una regulación específica, por lo que se les aplica el régimen de los SIG y, en función de su carácter económico, el de los SIEG. Es importante destacar el cambio normativo posterior a la Sentencia Altmark (el llamado "paquete Altmark"), que ha permitido establecer las condiciones para que las compensaciones económicas por la prestación de servicios públicos no sea calificada de ayuda de Estado[58].

Sería deseable avanzar en la línea definida por la Comunicación de la Comisión COM(2007) 725 final, de 20.11.2007, "Servicios de interés general, incluidos los servicios sociales de interés general: un nuevo compromiso europeo", en la que se

55. MONZÓN, J.L.: "Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y ambigüedades conceptuales del Tercer Sector", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 56, 2006, pp. 9-24; CHAVES, R. y MONZÓN, J.L.: *La Economía Social en la Unión europea*, CIRIEC, 2007 (nº CESE/COMM/05/2005); CHAVES, R.: "La Economía Social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina científica", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 33, 1999, pp. 115-139.

56. Versión consolidada, DO nº C 115/47, de 9.5.2008.

57. COM(2003) 270 final, Bruselas, 21.5.2003, p. 3.

58. Sentencia del TJ de 24-7-2003, asunto C-280/00, que establece las cuatro condiciones necesarias para que las compensaciones económicas por servicio público no sean calificadas de ayudas de Estado. Por no extendernos demasiado, nos remitimos al profundo análisis efectuado por ALGUACIL MARÍ, M.P.: "El régimen de ayudas de Estado en las Entidades sin ánimo de lucro prestadoras de servicios sociales", Noticias de la Unión Europea, nº 297/2009, pp. 71-81.

propone seguir trabajando con el método abierto de coordinación para lograr una directiva sectorial más adaptada, ya que en la actualidad se sigue trabajando básicamente con uno de los dos grandes bloques de servicios sociales, el de la protección social, al que se aplica la doctrina vertida en el ámbito de los servicios en red. De ahí que sea importante destacar la aplicación por vez primera de la doctrina de los SIEG a un servicio social asistencial por el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia *BUPA*, de 12 de febrero de 2008[59].

2) Extender el concepto de *entidad no lucrativa*, ampliando las formas jurídicas que puede adoptar una entidad sin ánimo de lucro, o asumiendo el criterio del beneficio subjetivo. De este modo la empresa de inserción podría aplicar en el Impuesto sobre Sociedades el régimen de la Ley 49/2002 o, en su caso, el régimen especial de las entidades parcialmente exentas. E igualmente podría aplicar las exenciones previstas en el ITPyAJD y en los impuestos municipales (IBI e IAE).

3) Sin embargo, la exención del IVA no supondría ningún beneficio fiscal sino un sobrecoste, por lo que la única posibilidad sería actuar en materia de *tipos de gravamen*, reduciéndolo o posibilitando la devolución de las cuotas soportadas.

59. Asunto T-289/03.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: *Las Empresas de Inserción a debate*, número monográfico de la revista *Documentación Social,* nº 117-118, 1999-2000.

ALGUACIL MARÍ, M.P. (2001): "Tratamiento fiscal de las cooperativas de crédito", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 12, 2001, pp. 51-83.

ALGUACIL MARÍ, M.P. (2003): "Tratamiento fiscal de las cooperativas a la luz del régimen europeo de ayudas de Estado", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 14, 2003, pp. 131-181.

ALGUACIL MARÍ, M.P. (2008): Tributación de sociedades laborales, Aranzadi Monografías, 2008.

ALGUACIL MARÍ, M.P. (2010): "La tributación de las empresas de participación de los trabajadores: cooperativas de trabajo y sociedades laborales. Apuntes para una reforma", *REVESCO*, nº 102/2010, pp. 24-53.

ALGUACIL, P.; MONZÓN, J.L.; MURGUI, S. y BONET, P.: *El IVA y las entidades del tercer sector de acción social en la Comunidad Valenciana*, CIRIEC-España, 2007.

ALEXY, R.: *Derecho y razón práctica*, Biblioteca de Ética, Filosofía del derecho y Política, Distribuciones Fontamara, SA, México, 1998.

ATIENZA, M.: *El sentido del Derecho*, Ariel Derecho, 2ª ed., Barcelona, 2003.

ATIENZA, M. y RUIZ, J.: *Las piezas del Derecho*, Ariel Derecho, 2ª ed. Barcelona, 2004.

BLÁZQUEZ LIDOY, A.: "El IVA y las entidades sin ánimo de lucro: algunas cuestiones controvertidas (I y II)", Quincena Fiscal, núms. 13 y 14/2000.

BONET SÁNCHEZ, P. (1999): *Incentivos fiscales para las PYME en los impuestos sobre la renta (IRPF e IS)*, Ed. Diálogo, Valencia, 1999.

BONET SÁNCHEZ, P. (2006): *La empresa ante el sistema tributario*, Thomson-Aranzadi, 2006.

CALVO ORTEGA, R.: "Entidades de economía social: razones de una fiscalidad específica", en la obra colectiva dirigida por él *Fiscalidad de las entidades de economía social: cooperativas, mutuas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo, empresas de inserción social*, Thompson-Civitas, 2005, pp. 33-64.

CALVO VÉRGEZ, J. (2005): "Empresas de inserción social: delimitación jurídica y aspectos tributarios", en AAVV (dir. CALVO ORTEGA): *Fiscalidad de las Entidades de Economía social*, Thompson-Civitas, 2005, pp. 553 y ss.

CALVO VÉRGEZ, J. (2006): "La tributación de las sociedades laborales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: principales cuestiones", *Revista de Información Fiscal*, nº 76, 2006.

CHAVES, R.: "La Economía Social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina científica", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 33, 1999, pp. 115-139.

CIRIEC (CHAVES, R. y MONZÓN, J.L.): *La Economía Social en la Unión Europea*, CIRIEC, 2007 (nº CESE/COMM/05/2005).

DEFOURNY, J., FAVREAU, L. Y LAVILLE, J.L. (dir): *Inserción y nueva economía social. Un balance internacional*, Ciriec-España, Valencia, 1997.

DEMOUSTIER, D.: *L'économie sociale et solidaire*, Syros, Paris, 2001.

DOMÍNGUEZ GASCÓN, M. y BALLESTEROS ORDÓÑEZ, M.: *Las empresas de inserción: su acceso a la contratación pública*, Amábar, SL, Burgos, 2003.

FUNDACIÓN UN SOL MON (ed.): *Las Empresas de Inserción en España*, Obra Social Caixa Cataluña, 2007.

GARCÍA ALONSO, J.V.: "Las sociedades cooperativas de iniciativa social como potenciales agentes de desarrollo en el ámbito local". *REVESCO*, nº 68, pp. 179-214.

GARCÍA MAYNAR, A. y ESTEVE ARNAL, M.: "Las empresas de inserción en España: normativa y características", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 153-178.

LAVILLE, J. L.: *L'Économie solidaire. Une perspective internationale*, Desclée de Brouwer, Paris, 1994.

LÓPEZ-ARANGUREN MARCOS, L. M.: *Las Empresas de Inserción en España: un marco de aprendizaje para la inserción laboral*, CES, 2002.

LOZANO SERRANO, C.: "¿Existen beneficios fiscales para las sociedades laborales?", *Quincena Fiscal Aranzadi*, nº 22/2006, Pamplona, pp. 13 y ss. Versión electrónica en Westlaw.es: BIB 2006\1745.

MARCUELLO SERVÓS, C.: "Presentación del monográfico «Empresas de inserción: puentes de inclusión en el mercado laboral»", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 5-6.

MONZÓN, J.L.: "Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y ambigüedades conceptuales del Tercer Sector", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 56, 2006, pp. 9-24;

PRIETO JUÁREZ, J.A.: "La configuración de las cooperativas de iniciativa social como cauce de integración laboral" *REVESCO*, nº 73, pp. 149-181.

QUINTÃO, C.: "Empresas de inserción y empresas sociales en Europa", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 59, 2007, pp. 33-59.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, A.: "Algunas consideraciones sobre las cooperativas de iniciativa social en el marco del fomento del empleo y la inserción laboral. Una perspectiva jurídico-económica", *CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, nº 19, 2008.

SALVÁ MUT, F.: "Itinerarios de inserción sociolaboral", *Formación XXI, Revsita de Formación y Empleo,* nº 11, julio 2008, edición electrónica: http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineSection/2008/06/text/xml/Orientacion_e_insercion_laboral__Nuevas_estrategias__nuevos_sectores_.xml.html#/porqualMagazine/do/get/magazine/2008/06/text/xml/11.xml.html.

VEGA, M.I y COQUE, J.: "Los promotores de sociedades cooperativas de inserción social: análisis económico y jurídico"

REVESCO, nº 67, pp. 7-36.

LUCES Y SOMBRAS DE LA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES LABORALES

Mª del Mar Andreu Martí
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Departamento de Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias de la Empresa
Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN

El artículo analiza, desde una perspectiva jurídico sustantiva, las principales novedades de la PLSL para determinar su adecuación a las actuales necesidades de las SL. En concreto se abordan pormenorizadamente las siguientes propuestas:
- Conversión de los "derechos de voto" en eje de la calificación como "laboral" de una SA o SRL.
- Ampliación de las entidades que pueden superar los límites generales de participación individual.
- Prohibición de las participaciones sociales de "clase laboral" privadas del derecho de voto.
- Sistema de conversión semiautomático de las acciones o participaciones sociales de la "clase general" en "laboral" y viceversa, y consecuente creación de un deber de los administradores.
- Nuevo régimen de transmisión de las acciones y participaciones sociales.

PALABRAS CLAVE: Análisis Reforma Sociedades Laborales CONFESAL 2009.

CLAVES ALFANUMÉRICAS: K200 - Regulation and Business Law: General. K220 - Corporation and Securities Law. K230 - Regulated Industries and Administrative Law. K290 - Regulation and Business Law: Other.

Mª del Mar Andreu Martí
(pp. 119-144)

THE PROS AND CONS OF THE LABOUR COMPANY ACT REFORM

ABSTRACT

This paper aims to analyze, mainly from a legal point of view, the latest innovations coming from the recently outgoing Draft for the Spanish Law for Worker-owned companies, so as to check if the above-cited draft meets these companies´ current needs. More specifically, it deals with some of its proposals, paying special attention to the following ones:

- Making the right to vote an instrumental issue when it comes to define Public Limited
- Companies or Limited Companies as Worker-owned Companies.
- Enlarging entities which are able to overcome the general boundaries for individual stockholding.
- Forbidding voteless “work-owned” shares.
- Implementation of a partly-automatic system which turns standard shares into worker-owned ones and vice versa, that resulting in duties and obligations to be fulfilled by company administrators.
- A new regime ruling how to transfer shares or stock.

KEY WORDS: Analysis of Labour Company Act Reform CONFESAL 2009.

Luces y sombras de la reforma de la Ley de Sociedades Laborales
(pp. 119-144)

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. 1. La calificación como sociedad laboral: del "capital social" a los "derechos de voto". 2. Límites a la participación individual de los socios. 3. Prohibición de participaciones sociales de la "clase laboral" sin derecho de voto. 4. La reclasificación del capital social. 5. Régimen de transmisión de las acciones y participaciones. 6. Consideraciones finales

I. INTRODUCCIÓN[1]

La acuciante necesidad de acometer una reforma de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales (en adelante LSL)[2] viene determinada tanto por factores jurídicos como socio-económicos. Por una parte, la vigente LSL, si bien supuso un impulso considerable para que las sociedades laborales se consolidaran como un tipo social idóneo en el panorama societario español, hoy se muestra obsoleta. Así, como señala la introducción de la Proposición de Ley de Sociedades Laborales (en adelante PLSL) elaborada por la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL) de 3 de marzo de 2009, la LSL no ofrece mecanismos eficaces para la reforma laboral, para fomentar el trabajo autónomo o para incentivar adecuadamente la integración de nuevos trabajadores socios. Por otra parte, la gravísima quiebra de confianza en el seno del sistema financiero

1. Este trabajo se integra dentro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (nº SEJ2006-10880/JURI) siendo Investigadora principal la Dra. Dª Rosalía Alfonso Sánchez.

2. Para su estudio vid., entre otros, AAVV, Régimen jurídico de las Sociedades Laborales (Ley 4/1997) (dir. ALONSO ESPINOSA, F.J.), Valencia, 1997; GÓMEZ CALERO, J., Las sociedades laborales, Granada, 1999; NEILA NEILA, J.M., *Sociedades Laborales. Análisis sistemático de la Ley 4/1997, de 24 de marzo*, Madrid, 1998; PAGADOR LÓPEZ, J., Las sociedades laborales. La sociedad de garantía recíproca, en Tratado de Derecho Mercantil, t. XII, vol. 2º, Madrid, 2005; RUIZ PERIS, I., "Breves reflexiones en materia de sociedades laborales y acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", en AAVV, Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, Madrid, 2002, vol. IV, pp. 4.367 y ss.; SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C./ GOÑI SEIN, J.L./ HUCHA CELADOR, F./ PERDICES HUETO, A., "Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles" (dir. URÍA, R./ MENÉNDEZ, A./ OLIVENCIA, M.), t. XV, Sociedades Laborales (Ley 4/1997, de 24 de marzo), Madrid, 2000; SANTOS MARTÍNEZ, V., "Sociedades laborales: implantación y renovación de una peculiar figura societaria", en AAVV, Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, cit., pp. 4.379 y ss.; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., Las sociedades laborales, Pamplona, 1998.

como consecuencia de la crisis económica mundial a la que nos enfrentamos ha motivado, como es sabido, intensas restricciones en el crédito a las empresas y un elevadísimo aumento del desempleo.

La PLSL pretende responder a las necesidades que han ido surgiendo en los 12 años de aplicación de la vigente LSL con el propósito no sólo de acometer su actualización, por otra parte necesaria, sino también potenciar la utilización de las sociedades laborales para mantener y aumentar el tejido productivo empresarial español como medio de reactivar el empleo en la difícil situación que estamos atravesando.

En esta línea, este trabajo pretende analizar, desde una perspectiva jurídico sustantiva, las principales novedades introducidas por la PLSL para determinar si se adecua a las necesidades actuales de las sociedades laborales.

II. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

1. LA CALIFICACIÓN COMO SOCIEDAD LABORAL: DEL "CAPITAL SOCIAL" A LOS "DERECHOS DE VOTO"

La posible calificación como sociedad laboral de una SA o SRL se sustenta, como señala el art. 1 de la vigente LSL, en que en ellas "*la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido"*, además del cumplimiento del resto de requisitos legalmente establecidos. Por su parte, la PLSL exige para esta posible calificación, también en su art. 1, que en la SA o en la SRL *"la mayoría de los derechos de voto pertenezcan a trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido"*.

Por tanto, en esta sede la principal modificación introducida por la PLSL reside en sustituir la referencia al "*capital social"* por los "*derechos de votos"* de los citados trabajadores. Sustitución que supondría un notable acierto ya que solventa algunos de los principales problemas interpretativos que ha planteado la vigente LSL.

Debe partirse, en primer término, recordando que la exigencia para poder calificar a una SA o una SRL como laboral de que la mayoría del capital social (o de los derechos de voto según la PLSL) sea propiedad de un tipo determinado de trabajadores, debe conectarse con la existencia en las sociedades laborales de dos clases de acciones o participaciones sociales: "clase laboral" y "clase general"[3]. Tanto la LSL

3. Se plantea si el reconocimiento legal, tanto por la LSL como por la PLSL, de estas dos clases de acciones o participaciones sociales, de "clase general" y de "clase laboral" supone la existencia de dos clases en sentido técnico jurídico. Un sector doctrinal considera que no pueden considerarse, en sentido estricto, clases porque su existencia no viene condicionada por la atribución de derechos especiales, tan sólo es una consecuencia establecida por la LSL de que su titular sea o trabajador por tiempo indefinido. En este

como la PLSL definen las acciones o participaciones sociales de idéntico modo. Las de la "clase laboral" como aquellas que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las de la "clase general" las restantes.

La doctrina mayoritaria considera que esta exigencia de la vigente LSL se traduce en que la participación mayoritaria en el capital social de los trabajadores asalariados con relación laboral por tiempo indefinido debe venir representada, en todo momento, por acciones o participaciones de la "clase laboral". Los trabajadores también podrán ser titulares de acciones o participaciones de la "clase general" pero sólo en lo que exceda de la mayoría exigida[4].

Por el contrario, un sector minoritario ha venido defendiendo que la mayoría del capital social que debe pertenecer a los trabajadores por tiempo indefinido puede estar integrado tanto por acciones o participaciones sociales de la "clase laboral" como de la "clase general"[5]. Uno de los principales escollos que plantea, entre otros, esta interpretación es que los socios trabajadores computables a efectos del art. 1 LSL fueran titulares de acciones o participaciones sociales de "clase general" privadas de derecho de voto, con la posible pérdida del control y dirección de la sociedad por parte de los trabajadores[6].

Al tiempo, es importante destacar que, como es evidente, la imposición de la participación mayoritaria en el capital social de los trabajadores por tiempo indefinido tiene por finalidad, conectando con la esencia de la economía social, que el poder y dirección de la sociedad lo ostenten estos trabajadores. Sin embargo, con la vigente LSL no se garantiza, en especial, en las SRL esta finalidad ya que en este tipo social no rige, como en las SA, el principio de proporcionalidad entre capital y derecho de

---

sentido, vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades en el régimen de la posición jurídica del socio", AAVV, *Régimen jurídico*, cit., pp. 76-80; GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 93. Para otro destacado sector doctrinal, sí es posible hablar con propiedad de clases porque ambas se encuentran sometidas a un distinto régimen de transmisión. Con esta opinión vid., entre otros, NEILA NEILA, J.M., *Sociedades Laborales,* cit., pp. 146 y ss; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 190-202; SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C./ GOÑI SEIN, J.L./ HUCHA CELADOR, F./ PERDICES HUETO, A., "Comentario al régimen", cit., pp. 136-137; SELVA SÁNCHEZ, L., "Consideraciones críticas acerca de la Proposición de Ley de Sociedades Laborales", *Revista Jurídica La Ley*, nº 4.113, p. 1.334; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 78-79.

4. Vid. entre otros GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 94-96; GÓMEZ PORRÚA, J.M., "La nueva regulación de las sociedades laborales", *DN*, nº 80/1997, pp. 10 y 11, 29; LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida", en AAVV, *Régimen jurídico,* cit., p. 24; SANTOS MARTÍNEZ, V., "Sociedades laborales", cit., pp. 4.445-4.446; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 29-33;.

5. Vid. PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 40-42; PORTELLANO DÍEZ, P./MERCADER UGUINA, J., "La sociedad laboral: sencillamente una sociedad especial (a propósito de la Ley 471997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales)", *Revista de Relaciones Laborales*, nº 12/1997, pp. 51-52.

6. Vid. LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral", cit., p. 27, en esp. nota a pie 13.

voto. De este modo, la titularidad de la mayoría del capital social no supone ni se corresponde necesariamente con el control de la toma de decisiones en la SRL[7]. Circunstancia que se acrecienta por la posible existencia de participaciones sociales de la "clase laboral" sin derecho de voto, posibilidad que se prohíbe, como veremos más adelante, en la PLSL.

Por todo lo señalado consideramos un acierto la propuesta de exigir para que una SA o una SRL puedan calificarse como laboral que la mayoría de los derechos de voto pertenezcan a trabajadores por tiempo indefinido porque, por una parte, se eliminan los problemas interpretativos y prácticos que hemos enunciado[8]. Además, la PLSL diseña, como veremos, un sistema de conversión semiautomático de las acciones o participaciones sociales de la "clase general" en "laboral" y viceversa. Se garantiza, en definitiva, al convertir a los derechos de voto en piedra angular de la calificación como "laboral" que en este tipo de sociedades, en todo caso, el poder de dirección lo ostenten los socios trabajadores.

Por último, la Proposición elimina el requisito que la vigente LSL impone en cuanto a la relación que debía mantenerse entre el número de horas trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que sean socios de la sociedad y los que no lo sean[9]. Requisito que, por su carácter cambiante según las necesidades de producción, puede resultar, en ocasiones, de complejo cumplimiento y obligaba a las sociedades laborales a una constante revisión.

2. LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DE LOS SOCIOS

2.1. Límites generales

Otro requisito impuesto por la LSL en su art. 5.3 para obtener y conservar la condición de sociedad laboral se traduce en la observancia de límites en la participación individual de los socios en el capital social. Así, con carácter general ningún socio

7. Vid. LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral", cit., p. 27.

8. En realidad, parte de la doctrina ya apuntaban que el concepto de sociedad laboral debe centrarse legalmente no en que los trabajadores posean la mayoría del capital social, sino en que sean titulares de la mayoría de los votos. En este sentido vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades en el régimen de la posición jurídica del socio", AAVV, *Régimen jurídico*, cit., p. 72; LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral", cit., p. 29; SANTOS MARTÍNEZ, V., "Sociedades laborales", cit., pp. 4.445.

9. Art. 1. 2 LSL: *"El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al quince por ciento del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos de veinticinco socios trabajadores, el referido porcentaje no podrá ser superior al veinticinco por ciento del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Para el cálculo de estos porcentajes no se tomarán en cuenta los trabajadores con contrato de duración determinada. Si fueran superados los límites previstos en el párrafo anterior, la sociedad en el plazo máximo de tres años habrá de alcanzarlos, reduciendo como mínimo cada año una tercera parte del porcentaje en que inicialmente se exceda o supere el máximo legal. La superación de límites deberá ser comunicada al Registro de Sociedades Laborales..."*

podrá poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo una serie de supuestos excepcionales. En consecuencia, cualquier sociedad laboral debe tener un mínimo de 3 socios que, necesariamente para cumplir el requisito de que más de la mitad del capital social sea propiedad de los trabajadores, bien podrán ser 2 socios trabajadores por tiempo indefinido y otro que no lo sea, bien 3 socios trabajadores. En realidad, la finalidad de política legislativa perseguida con la imposición de este límite cuantitativo es garantizar que ningún socio individualmente considerado pueda tomar el control de la sociedad.

Sin embargo, dicha finalidad no se logra en el texto vigente porque, como ya se ha apuntado, la propiedad de determinada parte del capital social no implica necesariamente la proporcional cuota de poder en la sociedad. Así, sin entrar en mayores profundidades que desbordarían este trabajo, en primer término, en especial en las SRL no se exige, con carácter general, la proporcionalidad entre el valor nominal de las participaciones sociales y la intensidad del derecho de voto que éstas atribuyen[10], además de la posible existencia de participaciones sin derecho de voto. En segundo lugar, aún existiendo en una determinada sociedad laboral, sea SA o SRL, proporcionalidad estricta, tampoco puede asegurarse que la titularidad de una tercera parte del capital social atribuya al socio el poder de la sociedad, en especial en empresas de gran dimensión por el absentismo, dispersión de socios, etc[11].

La PLSL, como ya se ha señalado, en aras a solucionar estos problemas tanto prácticos como interpretativos y asegurar que el poder de la empresa lo ostenten realmente los trabajadores, propone acertadamente sustituir las referencias al "capital social" por los "derechos de voto"[12]. Así, también en la fijación de los límites participativos de los socios en la sociedad laboral exige en su art. 1.2 que ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte de los derechos de voto, salvo excepciones.

Desde un punto de vista meramente sistemático también consideramos acertado que se proponga la ubicación de los límites generales de la tenencia de derechos de voto en el art. 1 de la PLSL al definir las sociedades laborales y no, como en la vigente LSL en su art. 5.3, al hacer referencia al capital social y los socios.

---

10. Vid. en este sentido una crítica a la LSL en ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades…", cit., pp. 71-72 y 75-77; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 44.

11. Vid. PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 71-73; PORTELLANO DÍEZ, P./MERCADER UGUINA, J., "La sociedad laboral", cit., p. 52. Se ha llegado a proponer de *lege ferenda* que debería acomodarse la fijación de los límites al tamaño de la empresa, fijando límites altos para las pequeñas empresas y más pequeños para las grandes empresas. Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 44-45, nota a pie 30.

12. ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit, p. 77, considera, por una parte, que la LSL había sido "torpe" al considerar que el control de las sociedad laboral podía residir en los socios trabajadores por tiempo indefinido tan sólo obligando a que poseyeran la mitad del capital social. Por otra, que había "desperdiciado" una posibilidad idónea de lograr tal fin con la admisión del voto plural vía estatutaria.

2.2. Excepciones a los límites generales

El límite general de que ninguno socio pueda poseer más de un tercio del capital social se excepciona por la LSL en su art. 5.3 cuando se trate de sociedades laborales participadas por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales o las Sociedades Públicas participadas por cualquiera de tales instituciones; las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro. En estos casos, su participación podrá superar dicho límite, sin llegar a alcanzar el 50% del capital social.

Por su parte, la PLSL mantiene[13] en su art. 1.2 la excepción con idéntico límite porcentual aunque con dos novedades importantes. La primera, por sustituir la referencia al "capital social" por los "derechos de voto" por los motivos ya señalados.

La segunda novedad propuesta por la PLSL es la ampliación de los sujetos a los que puede aplicarse la excepción. Así, se refiere a las entidades públicas[14] -aunque simplificando su terminología[15]- y a las no lucrativas, adicionando las entidades de capital riesgo y las de economía social.

La justificación de la excepción a los límites generales cuando se trate de entidades públicas viene justificada por la búsqueda de inyecciones de capital público lo que deberá conciliarse en todo caso con la regulación sobre la libre competencia y la prohibición de ayudas públicas distorsionantes del mercado[16]. No obstante, quizá las últimas intervenciones públicas acaecidas en respuesta a la crisis económica obligarán, en cierta medida, a una reinterpretación de las normas generales sobre competencia en aras del interés general.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, la excepción trata también de obtener capital privado para refinanciar las sociedades laborales.

La ampliación propuesta a las entidades de capital riesgo y las de economía social puede resultar una medida eficaz para que las sociedades laborales puedan afrontar, con mayores garantías de éxito, la crisis. Así, las primeras pueden servir como útil herramienta temporal que permita en la coyuntura económica desfavorable captar recursos económicos que permitan la supervivencia de determinadas sociedades laborales. Por su parte, las entidades de economía social[17] pueden ayudar en aquellos sectores donde sea necesario a la reorganización y redimensionamiento del tejido empresarial de las entidades de economía social.

---

13. También se mantiene, en los supuestos de trasgresión de los límites señalados, la obligación de que la sociedad se acomode a la Ley en el plazo de un año desde el primer incumplimiento en el porcentaje de participación de cualquiera de sus socios.

14. Ya utilizaba de *lege ferenda* esta expresión PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 74.

15. Sobre los problemas conceptuales y de determinación que plantean "las sociedades públicas participadas" y las "asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro" vid. PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 73-78.

16. Vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit, p. 74; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 45.

17. Las sociedades de economía social se han introducido como posible excepción a los límites generales de tenencia de derechos de votos en la segunda versión de la PLSL de Confesal, no incluyéndose en la primera de 6 de enero de 2009.

3. PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA "CLASE LABORAL" SIN DERECHO DE VOTO

La vigente LSL prohíbe en su art. 5.2 la creación de acciones de "clase laboral" privadas del derecho de voto pero no extiende dicha prohibición a las acciones de "clase general" ni a ninguna clase de participaciones.

Conviene recordar, por una parte, que esta norma es residual al representar lo que quedó del precepto originario, art. 6.2. de la Proposición de Ley de la LSL, que establecía el principio general en las sociedades laborales de que las acciones o participaciones sociales de igual valor nominal habrían de otorgar a sus titulares idénticos derechos. Concretamente señalaba que *"No será válida la creación de acciones o participaciones sociales que, de forma directa o indirecta, alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción o participación y el derecho de voto o el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones o en la asunción de nuevas participaciones sociales o en los derechos al dividendo y a la cuota de liquidación"*[18]. Finalmente en el trámite parlamentario se redujo profunda y sustancialmente su contenido al actual art. 5.2 LSL que, reiteramos, se limita a prohibir las acciones de "clase laboral" privadas del derecho de voto para garantizar que sean los propios trabajadores con contrato indefinido quienes como "socios laborales" ejerzan el control de la SA laboral. La doctrina unánimemente ha señalado que con este fin, no sólo exige la participación mayoritaria de estos socios trabajadores en el capital social, requisito básico para su calificación como "laboral", sino que, además, quiere asegurarse de que, en la práctica, controlen la sociedad, prohibiendo que sus acciones estén desposeídas del derecho de voto[19].

La posibilidad de que las acciones o participaciones sociales de la "clase general" carezcan de derecho de voto es una medida de política legislativa que resulta congruente con su teórico destino para socios capitalistas que buscan una inversión productiva[20].

---

18. La desaparición de este artículo ha provocado incongruencias con el tenor de la Exposición de Motivos de la LSL que sigue predicando respecto de las SRLL que *"las participaciones de una Sociedad Laboral han de ser una radical igualdad, sin que se admita la creación de participaciones con diferentes clases de derechos"*. Expresión que era acorde con el texto original de la Proposición de Ley pero es incongruente con el texto definitivo. Vid. entre otros ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit, p. 70; SANTOS MARTÍNEZ, V., "Sociedades laborales", cit., pp. 4.442-4.444; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 86-87.

19. Vid. entre otros GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 91-93; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp 81-82, esp. notas 14 y 15 y bibliografía allí citada.

20. Como acertadamente se ha señalado en la inmensa mayoría de las sociedades laborales escasa importancia tiene el capital "no trabajador" y se trata, normalmente, bien de instituciones públicas para ayudar a sectores en crisis, bien familiares de los socios que pretenden ayudar a éstos. En este sentido vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 82-83, esp. nota 15.

Por su parte, los motivos por los que finalmente la vigente LSL no prohíbe las participaciones sociales sin voto se basaron en que no se quiso excluir para las SRLL todas las posibilidades que establecía la LSRL para la capitalización de este tipo social, especialmente porque las contraprestaciones a la privación de los derechos de voto, en especial dividendos preferentes y derechos especiales en la cuota de liquidación, pueden incentivar las inversiones[21].

Por el contrario, la PLSL opta por proponer, en su art. 5.2, que la prohibición se extienda tanto a las acciones como a las participaciones sociales de la "clase laboral" al establece que *"No será válida la creación de acciones o participaciones de clase laboral privadas del derecho de voto".*

Por tanto, de aceptarse el tenor de la propuesta sólo cabría la creación de acciones o participaciones sociales sin voto de la "clase general" para potenciar la entrada en el capital de las sociedades laborales de socios inversores que trataran de salvar a aquéllas que se encontraran en una situación económica difícil. Propuesta que resulta acorde con la ampliación de la excepción en la tenencia de acciones o participaciones no sólo a entidades públicas o sin ánimo de lucro sino también a las sociedades de capital riesgo u otras entidades de economía social.

Es importante destacar que si prosperara la propuesta de Confesal de centrar el concepto de la "laboralidad" en los derechos de voto y no, como ahora, en el capital social (art. 1 PLSL), carece de sentido elucubrar sobre la conveniencia o no de la admisión de acciones o participaciones sociales laborales sin derecho de voto porque, en todo caso, la PLSL garantiza, acertadamente en nuestra opinión, el control de los socios trabajadores por tiempo indefinido. Sin embargo, consideramos más congruente con el espíritu de la LSL y con la propia naturaleza de la sociedad laboral que se prohíba la creación de acciones o participaciones sociales de la "clase laboral" sin voto[22]. Resulta más acorde con la concepción idealista de la sociedad laboral como "una comunidad de trabajo autogestionada impulsada por el principio de ayuda y colaboración mutua"[23].

4. LA RECLASIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

4.1. Conversión de acciones y participaciones de "clase general" en "laboral"

El art. 6.3 LSL establece que *"Los trabajadores, socios o no, con contrato por tiempo indefinido que adquieran por cualquier título acciones o participaciones*

21. Sobre ello vid. en profundidad GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 91-92.

22. La doctrina ya se planteó con la derogada LSAL si los privilegios económicos atribuidos en la SA a las acciones sin voto eran coherentes con la naturaleza mutualista de las SAL. Sobre ello vid. BATLLE SALES, G., "Notas sobre sociedad anónima laboral: ventajas e inconvenientes para su adaptación a las PYMES", en AAVV, *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, 1996, vol. II, p. 1.531.

23. Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 81.

sociales pertenecientes a la "clase general" tienen derecho a exigir de la sociedad la inclusión de las mismas en la "clase laboral", siempre que se acrediten a tal efecto las condiciones que la Ley exige. Los administradores, sin necesidad de acuerdo de la Junta General, procederán a formalizar tal cambio de clase y modificar el artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil".

Se configura, por tanto, la conversión de acciones y participaciones de "clase general" en "laboral" como un derecho individual de los trabajadores por tiempo indefinido que, por cualquier concepto, adquieran acciones o participaciones de dicha clase. Tan sólo deben acreditar que cumplen las condiciones legalmente establecidas. Además, el ejercicio de tal derecho no se somete a la consideración de la Junta general[24] sino que se concibe como una competencia de los administradores a los que la LSL atribuye, además, poder para modificar los artículos de los Estatutos afectados y otorgar la pertinente escritura para su inscripción en el Registro mercantil.

Es importante destacar que este derecho individual se configura también como potestativo sobre la base de que el trabajador por tiempo indefinido que adquiera acciones o participaciones de la "clase general", aunque cumpliera los requisitos para solicitar su conversión a laborales, podía desear que se mantuvieran en esa clase para facilitar su posterior transmisión, dado el distinto régimen jurídico al que ambas se encuentran sometidas. El art. 6.3 LSL ha sido objeto de intensas discusiones doctrinales fruto de los múltiples problemas que genera su interpretación conjunta con el art. 1.1 LSL que, como sabemos, exige como piedra angular de la "laboralidad" de la sociedad que el 51% del capital social sea propiedad de los trabajadores por tiempo indefinido.

Para la doctrina mayoritaria[25], la mayoría del capital social propiedad de los trabajadores debe consistir en todo momento en acciones o participaciones de la "clase laboral" aunque, por autorización expresa del art. 6.3 LSL, estos trabajadores también podrán ser titulares de acciones o participaciones de la "clase general" pero únicamente en lo que exceda del 51 %. Cumpliéndose este porcentaje no es necesario obligar a un trabajador a que sus acciones o participaciones sean de un

---

24. Por el contrario, la derogada LSAL señalaba en su art. 6 p. 2 que *"Los trabajadores que adquieran por cualquier título acciones de la clase no reservada a ello, podrán solicitar de la sociedad el cambio de clase de estas acciones. Dicho cambio se efectuará mediante acuerdo favorable de la Junta general de accionistas. En todo caso, si recayera acuerdo favorable de la Junta general se sustituirán los títulos por otros de la clase solicitada"*. La atribución de la competencia para aprobar la conversión a la Junta general y el transcrito tenor literal de la LSAL parecía presuponer que se pudiera negar la modificación. Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 88-89, nota 30.

25. Entre otros GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 94-96; GÓMEZ PORRUA, J.M., "La nueva regulación de las sociedades laborales", *DN*, nº 80, 1997, pp. 10-11, 29; LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral", cit., p. 24; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 88-90.

tipo o de otro[26]. Sigue esta corriente doctrinal un criterio semejante al sostenido con el derogado régimen de la LSAL aunque considerándolo un derecho del trabajador y no tan sólo una posibilidad que precisaba para su ejercicio la aprobación por Junta general.

Por el contrario, un sector doctrinal minoritario considera que el art. 6.3 debe interpretarse como una excepción al art. 6.1 LSL, es decir, como una autorización legal para que el trabajador por tiempo indefinido que adquiera acciones o participaciones sociales de la "clase general" las pueda seguir mantenido en esa clase y que, como consecuencia, computen, junto con otras de la "clase laboral", para alcanzar el requisito de la mayoría del capital social en manos de estos trabajadores[27].

En esta sede, la PLSL introduce una profunda y acertada reforma que viene a solventar los problemas prácticos y las disquisiciones doctrinales que hemos esbozado. Así, el art. 5.3 PLSL propone el siguiente texto: *"La conversión de acciones y participaciones de clase general en laboral y viceversa, con el fin de adecuarse a lo establecido en el párrafo 1º se realizará por los administradores, sin necesidad de acuerdo de la Junta General. El cambio se realizará por acuerdo del órgano de administración y se inscribirá en el Registro Mercantil mediante certificación de dicho acuerdo"*.

Varias son las novedades que deben destacarse. La primera, que se determina claramente cuál es la finalidad de la conversión: "…*adecuarse a lo establecido en el párrafo 1º…",* párrafo donde se definen las dos clases que pueden existir en una sociedad laboral. Las acciones y participaciones que sean propiedad de los trabajadores por tiempo indefinido deberán pertenecer a la clase "laboral" y las restantes a la "clase general". La propuesta claramente opta por asegurar que el 51% de los derechos de voto en las sociedades laborales provenga de las acciones o participaciones sociales de la "clase laboral". La conversión no se configura ya como un derecho voluntario e individual del socio, sino como un régimen cuasi automático en el que la propia sociedad, a través de sus administradores, está obligada a reclasificar la composición de su capital social, sin necesidad de requerimiento alguno

26. Además, VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I. (Cfr. *Las sociedades*, cit., pp. 89-91) añaden que permitir que una parte importante del capital social esté representado por acciones o participaciones de la "clase general" pueden incentivar su adquisición por los trabajadores al facilitar su régimen de transmisión por ejemplo en el caso de sucesión *mortis causa*.

27. En este sentido PAGADOR LÓPEZ, J. (cfr. *Las sociedades laborales,* cit., pp. 38-44) considera que el art. 6.3 LSL es "*una norma extraña al sistema, discordante, disfuncional y fuente de no pocos problemas, en cuanto permite que los socios trabajadores por tiempo indefinido titulen cuotas sociales de clase general"*.

por parte del socio[28]. En definitiva, la posible división del capital social en una sociedad laboral debe responder a la existencia y razón de ser de las dos clases de acciones o participaciones que pueden existir en este tipo social.

La segunda novedad es que se configura un auténtico deber de los administradores que deben velar para que el capital social de su sociedad laboral responda a la división entre las dos clases de acciones o participaciones, incluyendo éstas en la "clase laboral" cuando los trabajadores indefinidos adquieran, por cualquier concepto, acciones o participaciones de la "clase general"[29], sin necesidad de acuerdo de la Junta General. En pura lógica, también se desprende que serán los administradores los que en el sistema propuesto deben comprobar que se cumplen todos los requisitos legales exigidos para la reclasificación de las cuotas de capital y no como en el sistema vigente en el que el socio solicitante debe acreditarlo.

En tercer lugar, parece que se tratan de simplificar los trámites procedimentales al señalar que "*El cambio se realizará por acuerdo del órgano de administración y se inscribirá en el Registro Mercantil mediante certificación de dicho acuerdo"*. El tenor de esta propuesta puede generar problemas interpretativos que, en nuestra opinión, deberían subsanarse. Así, tan sólo por apuntar algunos podría llegar a entenderse, por ejemplo, que se pretende excepcionar el régimen general de acceso al Registro mercantil[30] o cabría cuestionar quién debe emitir la certificación del acuerdo: si se

---

28. De *lege ferenda* ya se había apuntado que *"…el cambio de clase de las acciones generales adquiridas por los operarios, debería entenderse como una facultad cuyo ejercicio pudiera partir por propia iniciativa de la sociedad. … para la sociedad éste no es un hecho irrelevante, pues … es la propia sociedad la garante del cumplimiento de los requisitos para mantener la clasificación de laboral y … aumentar el número de acciones o participaciones de la clase laboral puede entenderse como una medida que permita el cumplimiento de tales requisitos. … hubiera sido preferible que el legislador hubiera mencionado expresamente la posibilidad de que la propia sociedad procediera en estos casos a la reclasificación …sin necesidad de ser para ello requeridos por el socio adquirente"*. Sobre ello vid. CIVERA GARCÍA, A., "Consideraciones en torno a la nueva Ley de Sociedades laborales*", RGD*, nº 634-635, julio-agosto 1997, p. 9.187. No obstante, con el tenor de la LSL no era posible que la sociedad pudiera por propia y única iniciativa obligar a la reclasificación. En este sentido vid. entre otros VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 89-90, esp. nota 32.

29. Ya señalaba PAGADOR LÓPEZ, J. (cfr.. *Las sociedades laborales,* cit., p. 41), aunque advirtiendo que su literalidad no lo permite, que lo deseable era entender que *"lo que este precepto establece* (el art. 6.3 LSL) *es el deber de los administradores de proceder a la inclusión en la clase laboral de las cuotas de capital de clase general que adquieran los trabajadores indefinidos de la sociedad, atribuyendo a éstos el derecho a exigir dicha conversión en caso de que los administradores desatiendan el aludido deber.* En el mismo sentido, GÓMEZ CALERO, J. (cfr. *Las sociedades,* cit., p. 96, esp. nota 16) apunta que no se comprende bien que no se admitieran en el trámite parlamentario las enmiendas que pretendían que los administradores pudieran por propia iniciativa efectuar el cambio de clase, incluyendo las acciones o participaciones en la "clase laboral".

30. Conviene recordar el tenor literal del art. 6.3 p. 2 LSL *"Los administradores, sin necesidad de acuerdo de la Junta General, procederán a formalizar tal cambio de clase y modificar el artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil"*.

refiere a una simple certificación de los administradores o si se sigue el régimen general -que parece lo más razonable- y se alude a la oportuna certificación del Registro de Sociedades Laborales[31]. Ésta parece la interpretación adecuada ya que se sigue exigiendo que la sociedad laboral comunique periódicamente al Registro de Sociedades Laborales las transmisiones de acciones o participaciones mediante certificación del libro-registro de acciones nominativas o del libro de socios[32]. Además, para asegurar la completa información de este registro administrativo se añade en la PLSL que *"El Juez que conozca de la impugnación de algún acuerdo social que afecte a la composición del capital …, pondrá en conocimiento del Registro de Sociedades Laborales la existencia de la demanda y las causas de impugnación, así como la sentencia que estime o desestime la demanda"*.

4.2. Conversión de acciones y participaciones de "clase laboral" en "general"

La LSL no regula el supuesto en que un trabajador "no indefinido" adquiera acciones o participaciones sociales de la "clase laboral". Se trata de una posibilidad no muy frecuente en la práctica pero que puede darse. Así, entre otros supuestos[33], pueden citarse a título de ejemplo cuando se extingue la relación laboral de un socio titular de acciones o participaciones de la "clase laboral", si mantiene legalmente su condición de socio, o cuando se produzca el fallecimiento del socio trabajador y sus herederos o legatarios no sean trabajadores por tiempo indefinido de la misma sociedad.

La doctrina, pese a la falta de regulación, considera que en tales casos el cambio de clase es obligatorio para el adquirente porque no puede ser titular de acciones o participaciones de la "clase laboral" sin ser trabajador por tiempo indefinido de la sociedad y que la conversión es, por analogía, competencia de los administradores ya que si están facultados para el cambio de la "clase general" a la "laboral", más aún en este supuesto[34].

31. Tanto la LSL como la propia PLSL, en sus arts. 4.3 y 4.6, respectivamente, preceptúan que el Registro mercantil no practicará ninguna inscripción de modificación de estatutos que afecte a la composición del capital social sin que se aporte por la sociedad certificado del Registro de Sociedades Laborales de que dicha modificación no afecta a su calificación como laboral. Algún autor ha considerado que el art. 6.3. p. 2 LSL constituía un supuesto excepcional y por tanto su inscripción registral no precisaba el certificado del Registro de Sociedades Laborales. En este sentido vid. GÓMEZ PORRUA, J.M., "La nueva regulación", cit., p. 11. En contra, GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., p. 97.

32. Cfr. idéntico tenor de los arts. 4.5 LSL y art. 4.4 PLSL.

33. Vid. más casos posibles en GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 98-99; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 90.

34. En este sentido vid., entre otros, GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 98-99; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 44; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 90-92, esp. nota 33 y bibliografía allí citada.

La PLSL contempla acertadamente el supuesto sometiéndolo al mismo régimen que ya hemos analizado para la conversión de acciones y participaciones de "clase general" en laboral[35] y a cuyos comentarios nos remitimos.

5. RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES

5.1. Transmisión voluntaria inter vivos de las acciones y participaciones de "clase laboral"

La vigente LSL regula de forma amplia y pormenorizada la transmisión de acciones y participaciones de "clase laboral" estableciendo un régimen legal e imperativo[36] basado en un supuesto de libre transmisión y en el reconocimiento de un derecho de adquisición preferente a favor de distintos sujetos con un orden de prelación legalmente establecido. En concreto, el art. 7 LSL establece que sólo es libre la transmisión de acciones o de participaciones sociales de la "clase laboral" si el adquirente es trabajador indefinido de la sociedad.

Cuando el adquirente no sea trabajador por tiempo indefinido de la sociedad, la LSL impone al socio transmitente el deber de comunicarlo *"por escrito al órgano de administración de la sociedad de modo que asegure su recepción, haciendo constar el número y características de las acciones o participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquiriente y el precio y demás condiciones de la transmisión"*. Tras la comunicación, el órgano de administración deberá realizar una serie de notificaciones a los cinco grupos de personas a los que la LSL concede un derecho de adquisición preferente por orden estricto de prelación.

Así, en primer lugar, deberá notificárselo, dentro del plazo de quince días a contar desde la fecha de recepción de la comunicación, a los trabajadores no socios con contrato indefinido que podrán adquirirlas dentro del mes siguiente a la notificación. En segundo lugar, si éstos no ejercitan el derecho de adquisición preferente, se notificará a los trabajadores socios que dispondrán para su adquisición del mismo plazo que los anteriores. En tercer y cuarto lugar, si tampoco ejercitaran dicho derecho, la notificación se realizará a los titulares de acciones o participaciones de la "clase

35. En concreto hace referencia al mismo tan sólo con el término *"y viceversa"* (cfr. art. 6.3 PLSL: *"La conversión de acciones y participaciones de clase general en laboral* ***y viceversa..."),***

36. Este régimen, como la doctrina mayoritaria señala, sustituye al previsto para las SA y para las SRL. En este sentido vid. ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit, p. 89; GÓMEZ PORRUA, J.M., "La nueva regulación", cit., p. 14; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 223 y 226; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 102-103. Debe tenerse en cuenta que, a pesar del tenor de la DF 1ª LSL, la aplicabilidad a las sociedades laborales de las normas de la SA o de la SRL con relación a supuestos contemplados por la LSL no puede realizarse sin analizar su compatibilidad con las *"líneas informadoras del sistema de restricciones de la LSL"* sobre todo en sede de SRLL. Al respecto vid. PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 223.

general" y, en su caso, al resto de los trabajadores no indefinidos, los cuales podrán optar a la compra, por ese orden, dentro de sucesivos períodos de quince días siguientes a la recepción de las notificaciones[37]. En quinto y último lugar, cuando ningún socio o trabajador haya ejercitado el derecho de adquisición preferente, las acciones o participaciones podrán ser adquiridas por la sociedad, dentro del mes siguiente desde el final del cómputo del último de los plazos citados. En todo caso, el socio será libre para transmitir si hubieran transcurrido 6 meses desde la comunicación de su propósito de transmisión sin que nadie hubiera ejercitado sus derechos de adquisición preferente.

El esbozado régimen de transmisión de acciones y participaciones de "clase laboral" diseñado por la LSL se caracteriza por su carácter imperativo y su complejidad, habiendo planteado múltiples problemas interpretativos estudiados por la mejor doctrina[38].

Por su parte, el art. 7 PLSL señala, al igual que la LSL, que el titular de acciones o participaciones sociales de la "clase laboral" es libre para transmitirlas a trabajadores indefinidos, sean socios o no[39]. Tan sólo tendrá que *"comunicar a la sociedad, por escrito y de modo que se asegure su recepción, el número de acciones o participaciones que se propone transmitir y la identidad del adquirente"*[40]. En los demás supuestos, el transmitente deberá comunicar a la sociedad, además de las menciones señaladas, el precio y las condiciones de la transmisión.

Tras la comunicación, el órgano de administración deberá realizar una serie de notificaciones a unos grupos de personas a los que la PLSL concede un derecho de adquisición preferente por orden estricto de prelación. Así, en primer lugar, lo notificará en el plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación, a los trabajadores indefinidos no socios que podrán adquirirlas en el mes siguiente a la notificación. En segundo lugar, si éstos no ofrecen adquirirlas en su totalidad, se ofrecerán las restantes a los trabajadores socios y, en su defecto, a la sociedad, que podrán adquirirlas en el plazo de 15 días. Si ninguna de estas personas ejercitara su derecho

37. En estos cuatro grupos, el propio art. 7. 5 LSL señala que cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición preferente, las acciones o participaciones sociales se distribuirán entre todos ellos por igual.

38. Para el estudio en profundidad de la transmisión *inter vivos* voluntaria y los problemas interpretativos que ha generado vid., entre otros, ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit., pp. 89-94; GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 102-115; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 222-247; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 101-121.

39. La PLSL aclara los problemas interpretativos planteados sobre si el adquirente debía o no ser socio, además de trabajador indefinido para que la transmisión fuera libre. Sobre ello vid. con opiniones divergentes ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit., pp. 90-91; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 22.

40. A diferencia de la LSL no se exige en esta comunicación que el socio transmitente indique el precio o el resto de condiciones de la transmisión.

de adquisición preferente, el socio podrá transmitir libremente las acciones o participaciones de su titularidad, salvo que los estatutos hayan reconocido algún otro derecho preferente de adquisición.

Varias son las novedades que debemos destacar propuestas por la PLSL.

En primer término, se reducen los grupos de personas a los que la PLSL otorga derecho de adquisición preferente de las acciones o participaciones sociales que se desean transmitir a los trabajadores indefinidos no socios, a los trabajadores socios y a la propia sociedad. Frente al sistema de la LSL, no se otorga este derecho a los grupos de los titulares de acciones o participaciones de la "clase general" y al grupo formado por los trabajadores no indefinidos. Esta modificación pretende, como expresamente se señala en la Exposición de Motivos de la PLSL, "*favorecer el carácter "laboral" de la sociedad dando mayor relevancia al papel de la sociedad en la transmisión de acciones y participaciones sociales"*.

No obstante, es importante destacar, en segundo lugar, que la PLSL permite un mayor margen a la voluntad social que la vigente Ley, ya que vía estatutaria se pueden reconocer a otros grupos derechos de adquisición preferente aunque siempre respetando el orden de prelación legalmente establecido[41]. Por ejemplo, podríamos pensar en la posible inclusión de los grupos que actualmente lo tienen reconocido (titulares de acciones o participaciones de la "clase general" y al grupo formado por los trabajadores no indefinidos).

En tercer lugar, se permite que se pueda alterar, vía estatutaria, el principio de que cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición preferente, las acciones o participaciones se distribuirán entre todos ellos por igual. La LSL establecía idéntico principio pero sin prever su alteración.

La cuarta novedad se centra en establecer un régimen específico para el supuesto de que sea la propia sociedad la que ejercite su derecho de adquisición preferente. Así, a diferencia de la LSL que se remite sin más a los arts. 75 y ss. LSA[42], la PLSL establece que *"La sociedad podrá adquirir sus propias acciones o participaciones, si así lo autoriza la Junta General, con el fin de ser enajenadas en el plazo máximo de tres años a favor de los trabajadores de la sociedad con contrato por tiempo indefinido"*. La finalidad de la adquisición debe ser, y así deberá constar en la autorización por la Junta, transmitir con posterioridad las acciones o participaciones a los trabajadores indefinidos que, quizá en ese momento, no puedan hacer frente a la compra de las mismas. Se trata de posibilitar, de acuerdo con la naturaleza de la sociedad laboral, el acceso de los trabajadores a los medios de producción ya que

41. Cfr. art. 7.5 PLSL.

42. En la actualidad debe entenderse referido a los arts. 144 y ss del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC).

si la sociedad no ejercitara su derecho de adquisición, el socio sería libre para transmitir a cualquiera.

En quinto lugar, se reducen[43] tanto los plazos en que los distintos grupos pueden ejercer su derecho de adquisición preferente (de 1 mes a 15 días) como el plazo en el que el socio puede transmitir libremente sus acciones o participaciones, si nadie ejercitara tales derechos, a 3 meses[44].

Por último, la PLSL reserva a la sociedad *la posibilidad de oponerse a cualquier transmisión de las acciones o participaciones si con la misma se superan los límites previstos en el art. 1 de esta Ley*.

5.2. Transmisión voluntaria inter vivos de las acciones y participaciones de "clase general"

El régimen establecido por la LSL para la transmisión de acciones y participaciones sociales de "clase general"[45] es el mismo que para las de "clase laboral"[46], aunque con algunas diferencias en cuanto a la determinación de los casos de libre transmisión y el orden de prelación del derecho de adquisición preferente.

Así, por una parte, la transmisión será libre cuando el adquirente tenga la condición de socio trabajador cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual. Por otra, el orden de prelación se altera comenzando por los socios trabajadores y, sucesiva y subsidiariamente, le siguen los trabajadores indefinidos no socios; los titulares de acciones o participaciones de la "clase general"; el resto de trabajadores no indefinidos y, por último la propia sociedad.

La PLSL propone un giro radical en la regulación de la transmisión de las acciones o participaciones de "clase general". Así, el art. 7.1 PLSL señala que "*El titular de acciones o participaciones sociales de la clase general, salvo previsión estatutaria en contra, es libre para transmitirlas a socios o terceros…"*. Por tanto, se parte de un sistema abierto para la transmisión de las acciones o participaciones sociales de la "clase general" que será libre tanto si el adquirente es socio, de cualquier clase, como si se trata de un tercero ajeno a la sociedad.

Se permite, sin embargo, que se incluyan en los Estatutos cláusulas que restrinjan la entrada de socios generales, bien a través del establecimiento de derechos de

43. Cfr. arts. 7.7. LSL y 7.6 PLSL.

44. La PLSL presentada por Confesal en enero de 2009 señalaba un plazo de 2 meses (cfr. art. 7.7).

45. En esta materia, la LSL estableció un cambio radical respecto del régimen de transmisión de las acciones no reservadas en la derogada LSAL que se regía por las disposiciones de la LSA, es decir, por el principio general de la libre transmisibilidad. La proposición de Ley de la LSL seguía este mismo sistema y fue uno de las cuestiones más debatidas en el trámite parlamentario hasta someterlo a idénticas restricciones que la transmisión de cuotas laborales. Sobre ello vid. PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., p. 224.

46. El diferente supuesto en el que la transmisión es libre, ha suscitado distintas interpretaciones sobre cuál debe ser el orden de prelación ya que el art. 7.8 se remite al régimen de transmisión de las cuotas laborales fijando únicamente que la notificación comenzará por los socios trabajadores.

adquisición preferente para alguno/s grupo/s, bien con otro tipo de cláusulas restrictivas siempre que no contradigan los principios configuradores de la sociedad laboral. Como se señala en la Exposición de Motivos de la PLSL se pretende dejar *"a la voluntad social, expresada en los estatutos, … el carácter más abierto o no de la sociedad frente a la participación de socios no trabajadores, con referencia a la libre transmisión o no de las acciones o participaciones en poder de éstos"*.

El régimen de transmisión libre de las acciones o participaciones de la "clase general" propuesto por la PLSL parece que pretende servir para impulsar la inversión en las sociedades laborales con la entrada de socios capitalistas que podrán recuperar su inversión con mayor facilidad. Aunque la finalidad pretendida resulta loable, en especial en momentos de crisis como medida que ayude al sostenimiento de determinados sectores de la economía social, no debe soslayarse el régimen general de transmisión de las cuotas sociales en las sociedades capitalistas. Así, aunque las leyes reguladoras de las sociedades laborales puedan establecer, como de hecho establecen, normas específicas configuradas legalmente para la transmisión de sus acciones o de sus participaciones sociales que establecen un régimen distinto al de la SA o SRL según el caso, no pueden contravenir los principios configuradores de estas sociedades capitalistas.

No plantea problema el sistema abierto propuesto por la PLSL para transmitir las acciones de la "clase general" aunque hubiera bastado con una remisión al régimen de transmisión previsto para la SA tal y como establecía la derogada LSAL en su art. 7.1.

El problema se ciñe en que la aplicación de un sistema abierto para la transmisión de las participaciones sociales de la "clase general" vulnera uno de los principios configuradores de las SRL que las caracteriza como sociedades cerradas con base en su vertiente personalista. Además, esta propuesta de la PLSL de un régimen de transmisión libre de las acciones o participaciones de la "clase general" no se justifica por el carácter laboral de la sociedad ya que precisamente afecta a sus cuotas no laborales[47].

En realidad, esta vulneración refleja, una vez más, los problemas que, desde siempre, ha generado la configuración de las sociedades laborales como tipo especial de SA o de SRL en lugar de haber optado por crear una forma social específica

47. La vigente LSL ya establece excepciones a las reglas estructurales de las SA y de las SRL que no se justifican por el carácter "laboral" de las sociedades laborales. Así, se puede citar en sede de SA la posibilidad de cláusulas estatutarias que prohíben la transmisión de acciones contrariando el principio fundamental de la SA de que las acciones son siempre transmisibles; o la supresión de derecho de suscripción preferente con fijación de la prima totalmente libre que soslaya el principio general de las sociedades de capital de mantenimiento de la igualdad de trato. En materia de la SRL, se cita por ejemplo la autocartera debida al ejercicio del derecho de preferencia se rige por las reglas de la SA, basados en principios contrarios a los de autocartera en las SRL. En este sentido, vid. las interesantes reflexiones de VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 264-265.

que respondiera adecuadamente a la razón de ser de las sociedades laborales con una regulación general de la figura[48]. Una vez más parece que se va a desaprovechar la oportunidad de una regulación específica para las sociedades laborales.

5.3. Transmisión forzosa de acciones y participaciones sociales

El art. 10 LSL[49] se limita a regular la transmisión forzosa de acciones o participaciones sociales en el supuesto derivado de la extinción de la relación laboral del socio. Así, establece en su art. 10 *"En caso de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste habrá de ofrecer la adquisición de sus acciones o participaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 7 y si nadie ejercita su derecho de adquisición, conservará aquél la cualidad de socio de clase general…"*. En síntesis, se establece la obligación del socio trabajador de ofrecer la adquisición de sus acciones o participaciones siguiendo el régimen y orden de prelación regulado por la Ley para transmitir voluntariamente las cuotas sociales. Sólo cuando nadie ejercitara tal derecho conservará la cualidad de socio de la "clase general".

La PLSL en su art. 10.1 se limita a reproducir el tenor de la LSL con la única salvedad de que el socio trabajador cuya relación laboral se ha extinguido dispone de un plazo máximo de 3 meses para ofrecer sus acciones o participaciones, comenzando el cómputo "*desde la firmeza de la extinción de la relación laboral".* La fijación de este plazo resulta conveniente aunque consideramos que podría ser menor para agilizar la posible salida del socio.

En la misma línea, la LSL impone al socio trabajador la obligación de formalizar la venta sin mayor dilación cuando alguno/s de los sujetos con derecho de adquisición preferente, lo ejerzan. Así, si no lo hiciera, podrá ser requerido notarialmente, debiendo proceder a la venta en el plazo de un mes. Cuando tampoco cumpla con esta obligación *"podrá ser ésta* -la venta- *otorgada por el órgano de administración y por el valor real, calculado en la forma prevista en el artículo 8, que se consignará a disposición de aquél bien judicialmente o bien en la Caja General de Depósitos o en el Banco de España"*.

En esta sede, la PLSL se limita, aunque con una redacción más clara, a sustituir la referencia al *"valor real"* de la LSL por el *"valor"* de conformidad con la propuesta que realiza de sustituir el concepto de "valor real" por el de "valor razonable", como más adelante veremos.

---

48. Sobre las críticas vertidas por la doctrina vid. entre otros CANO LÓPEZ, A., "Reflexiones acerca de un nuevo instrumento societario: la Ley 4/1997, de 24 de marzo de sociedades laborales", *Revista de Derecho de Sociedades*, nº 8, 1997, pp. 195 y ss.; EMBID IRUJO, J.M., Prólogo a AAVV, *Régimen jurídico de las Sociedades Laborales, cit., p. 12;* VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 259-269.

49. Para el estudio en profundidad de este supuesto de transmisión forzosa y los problemas interpretativos que ha generado vid., entre otros, ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit., pp. 97-98; GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 121-131; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 251-255; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 140-147.

La principal novedad que propone la PLSL es introducir la regulación del supuesto de transmisión forzosa de acciones y participaciones sociales como consecuencia de embargo[50] o de ejecución de prenda constituida sobre las mismas, remitiéndose al régimen de la SRL con algunas peculiaridades. En concreto, su art. 10.3 establece que *"En el caso de embargo de las acciones o participaciones de la sociedad o de ejecución de la prenda constituida sobre las mismas, se estará a lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada[51], con la particularidad de que las notificaciones se hagan también a los trabajadores no socios con contrato indefinido, y que el derecho de subrogación previsto pueda ejercitarse por quienes tengan conforme a los estatutos un derecho de adquisición preferente"*.

5.4. Transmisión mortis causa de acciones y participaciones sociales

En el régimen de la transmisión *mortis causa* de las acciones y participaciones sociales no se proponen variaciones significativas en la PLSL[52]. La regla general es que el heredero o legatario del fallecido adquirirá la condición de socio, admitiéndose que, vía estatutaria, se reconozca para el caso de muerte del socio trabajador un derecho de adquisición preferente sobre las acciones o participaciones de "clase laboral" siguiendo el régimen y orden de prelación regulado por la Ley para transmitir voluntariamente las cuotas sociales[53].

La PLSL tan sólo introduce dos propuestas de modificación. La primera, sustituir, de nuevo, la referencia al *"valor real"* de la LSL por el *"valor"*. La segunda, reducir el plazo máximo para ejercitar el derecho de adquisición preferente de 4 a 3 meses.

5.5. El valor razonable

El art. 8 LSL[54] distingue dos supuestos para determinar el valor de las acciones o participaciones sociales sobre las que se ejerciten los derechos de adquisición preferente legalmente previstos.

El primero, cuando se trate de una enajenación a título de compraventa. En este caso, el precio, la forma de pago y demás condiciones de la operación serán las

50. La ausencia de regulación en este caso en la LSL obligaba a la aplicación de los regímenes de la SA o SRL, según procediera, planteándose múltiples problemas interpretativos. Sobre ello vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 151-155.

51. Con idéntico régimen vid. art. 109 LSC.

52. Para el estudio en profundidad del supuesto de transmisión *mortis causa* y los problemas interpretativos que ha generado vid., entre otros, ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades", cit., pp. 98-99; GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 128-131; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 247-251; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 135-140.

53. Cfr. arts. 11 LSL y PLSL.

54. Sobre ello vid., entre otros, GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades,* cit., pp. 115-117; PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales,* cit., pp. 241-244; VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., pp. 125-128.

convenidas y comunicadas al órgano de administración por el socio transmitente. El sistema por el que opta el legislador entraña el peligro de que el socio comunique al órgano de administración un precio superior al realmente pactado para desincentivar la adquisición[55].

La PLSL[56] trata de evitar este peligro potencial permitiendo que no se aplique a la operación el precio y demás condiciones inicialmente comunicadas al órgano de administración cuando hubiera *"pacto o previsión estatutaria en contra"*. Los Estatutos podrán establecer el sistema que consideren más conveniente para fijar las condiciones de la operación de transmisión de sus cuotas sociales.

El segundo supuesto regula las transmisiones proyectadas a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito. En este caso "*El precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, el valor real de las mismas el día en que se hubiese comunicado al órgano de administración de la sociedad el propósito de transmitir"*.

El PLSL, por su parte, propone el siguiente texto *"…el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes, o el previsto estatutariamente, y en su defecto, el valor razonable de las mismas el día en que se hubiese comunicado al órgano de administración de la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas distinto al auditor de la sociedad, designado a este efecto por los administradores"*. Se proponen dos modificaciones: que se pueda determinar en los Estatutos el sistema para determinar el precio de adquisición y sustituir la referencia al *"valor real"* por el de *"valor razonable"*.

6. CONSIDERACIONES FINALES

La propuesta que realiza la PLSL de convertir a los derechos de voto en piedra angular de la posible calificación como "laboral" de una SA o una SRL, la consideramos acertada al permitir solventar algunos de los problemas interpretativos que genera la vigente LSL. Además, garantiza su propia finalidad: que el poder y dirección en las sociedades laborales sea ostentado por los trabajadores por tiempo indefinido, conectando con la esencia misma de la economía social.

Así, la LSL no garantiza, con la imposición de la participación mayoritaria en el capital social de los trabajadores por tiempo indefinido, que éstos ostenten el poder y dirección de la sociedad, en especial, en las SRL donde no rige, como en las SA,

55. Este problema, de difícil solución, se reproduce en los supuestos de tanteo y retracto. La LSL opta por este sistema por ser el más defensivo para la propiedad del socio transmitente al que, en teoría, le debe resultar económicamente indiferente que el adquirente sea la persona con la que pacta que cualquier otra que ejercite su derecho de adquisición preferente. En este sentido, vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBARENA BELZUNCE, I., *Las sociedades*, cit., p. 126, esp. nota 40 y bibliografía allí citada.

56. La PLSL propone sustituir la propia denominación del artículo 8 de *"valor real"* a *"valor razonable"*.

el principio de proporcionalidad entre capital y derecho de voto. Circunstancia que se ve acrecentada en la actualidad por la posible existencia de participaciones sociales de la "clase laboral" sin derecho de voto.

Esta posibilidad se prohíbe con la PLSL que únicamente permite las acciones o participaciones sociales de la "clase general" privadas del derecho de voto. En nuestra opinión, si prospera la propuesta de la PLSL de centrar el concepto de la "laboralidad" en los derechos de voto y no, como ahora, en el capital social, pierde sentido la tradicional discusión sobre la conveniencia o no de la admisión de acciones o participaciones sociales laborales sin derecho de voto porque, en todo caso, se garantiza el control por los socios trabajadores por tiempo indefinido. Sin embargo, consideramos más congruente con el espíritu de la Ley y con la propia naturaleza de la sociedad laboral que se prohíba la creación de acciones o participaciones sociales de la "clase laboral" sin derecho de voto.·

También merece una valoración positiva la propuesta de eliminación del requisito que la vigente LSL impone en cuanto a la relación que debe mantenerse entre el número de horas trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que sean socios de la sociedad y los que no lo sean. Esta exigencia, por su carácter cambiante en función de las necesidades de producción, resulta de complejo cumplimiento y obliga a las sociedades laborales a una constante revisión que no parece apropiada en el moderno tráfico económico.

Respecto de la propuesta de ampliar la excepción del límite general de que ningún socio pueda poseer más de la tercera parte de los derechos de voto, a las entidades de capital riesgo y las de economía social, se trata de una medida de política legislativa que podría ser eficaz para afrontar la crisis actual permitiendo la captación temporal de recursos económicos o reorganizar y redimensionar el tejido empresarial de las entidades de economía social. No obstante, será su aplicación en la práctica la que determine su acierto.

Muy interesante y apropiada nos parece la profunda reforma propuesta para la conversión de acciones y participaciones de "clase general" en "laboral" y viceversa. Conversión que ya no se configura, como en la LSL, como un derecho voluntario e individual del socio, con todos los problemas que se generan, sino como un régimen cuasi automático en el que la propia sociedad, a través de sus administradores, está obligada a reclasificar la composición de su capital social, sin necesidad de requerimiento alguno por parte del socio. En definitiva, la posible división del capital social en una sociedad laboral responde, al fin, a la existencia y razón de ser de las dos clases de acciones o participaciones que pueden existir en este tipo social.

Por último, respecto de las novedades en el régimen de transmisión voluntaria *inter vivos* de acciones y participaciones de "clase laboral", las consideramos acertadas porque permiten un mayor margen a la voluntad social que puede servir para una mayor adecuación a las necesidades reales de concretas sociedades laborales.

Por el contrario, el régimen de libre transmisión, incluso a terceros ajenos a la sociedad, diseñado por la PLSL para las acciones y participaciones sociales de

"clase general" debería ser, a nuestro parecer, objeto de revisión porque soslaya el régimen general de transmisión de las cuotas sociales en las sociedades capitalistas. No debemos olvidar que aunque las leyes reguladoras de las sociedades laborales puedan establecer, como de hecho establecen, normas específicas para transmitir sus acciones o sus participaciones que difieran de los regímenes previstos para la SA o la SRL, no pueden contravenir los principios configuradores de estas sociedades capitalistas.

No plantea problema el sistema abierto propuesto para la transmisión de las acciones de la "clase general" aunque bastaría con una remisión al régimen de la SA. La cuestión se plantea con la libre transmisión de las participaciones sociales de la "clase general" ya que se vulnera uno de los principios configuradores de las SRL.

En realidad, esta vulneración refleja, una vez más, los problemas que desde siempre ha generado la configuración de las sociedades laborales como tipo especial de SA o de SRL en lugar de la opción legislativa de crear una forma social específica que responda adecuadamente a la razón de ser de las sociedades laborales con una regulación general de la figura y que evitaría muchos de los problemas existentes.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV, *Régimen jurídico de las Sociedades Laborales (Ley 4/1997) (dir. ALONSO ESPINOSA, F.J.)*, Valencia, 1997.

ALONSO ESPINOSA, F.J., "Especialidades en el régimen de la posición jurídica del socio", AAVV, *Régimen jurídico de las Sociedades Laborales (Ley 4/1997) (dir. ALONSO ESPINOSA, F.J.)*, Valencia, 1997, pp. 67-99.

BATLLE SALES, G., "Notas sobre sociedad anónima laboral: ventajas e inconvenientes para su adaptación a las PYMES", en AAVV, *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, 1996, vol. II, pp. 1.521-1.536.

CANO LÓPEZ, A., "Reflexiones acerca de un nuevo instrumento societario: la Ley 4/1997, de 24 de marzo de sociedades laborales", *Revista de Derecho de Sociedades*, nº 8, 1997, pp. 194-213.

CIVERA GARCÍA, A., "Consideraciones en torno a la nueva Ley de Sociedades laborales*", RGD*, nº 634-635, julio-agosto 1997, pp. 9.181-9.195.

EMBID IRUJO, J.M., Prólogo a *Régimen jurídico de las Sociedades Laborales (Ley 4/1997) (dir. ALONSO ESPINOSA, F.J.)*, Valencia, 1997, pp. 11-16.

GÓMEZ CALERO, J., *Las sociedades laborales*, Granada, 1999.

GÓMEZ PORRUA, J.M., "La nueva regulación de las sociedades laborales", *DN*, nº 80, 1997, pp. 1-30.

LÁZARO SÁNCHEZ, E.J., "La calificación laboral de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Régimen de su adquisición y pérdida", en AAVV, *Régimen jurídico de las Sociedades Laborales (Ley 4/1997) (dir. ALONSO ESPINOSA, F.J.)*, Valencia, 1997, pp. 17-45.

NEILA NEILA, J.M., *Sociedades Laborales. Análisis sistemático de la Ley 4/1997, de 24 de marzo*, Madrid, 1998.

PAGADOR LÓPEZ, J., *Las sociedades laborales. La sociedad de garantía recíproca*, en *Tratado de Derecho Mercantil*, t. XII, vol. 2º, Madrid, 2005.

RUIZ PERIS, I., "Breves reflexiones en materia de sociedades laborales y acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", en AAVV, *Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, 2002, vol. IV, pp. 4.367 y ss.

SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C./ GOÑI SEIN, J.L./ HUCHA CELADOR, F./ PERDICES HUETO, A., "Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles" (dir. URÍA, R./ MENÉNDEZ, A./ OLIVENCIA, M.), t. XV, *Sociedades Laborales (Ley 4/1997, de 24 de marzo)*, Madrid, 2000.

SANTOS MARTÍNEZ, V., "Sociedades laborales: implantación y renovación de una peculiar figura societaria", en AAVV, *Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, 2002, vol. IV, pp. 4.379 y ss.

SELVA SÁNCHEZ, L., "Consideraciones críticas acerca de la Proposición de Ley de Sociedades Laborales", *Revista Jurídica La Ley*, nº 4.113, 2 de septiembre de 1996.

VALPUESTA GASTAMINZA, E.M./BARBERENA BELZUNCE, I., *Las sociedades laborales,* Pamplona, 1998.

LAS APORTACIONES NO DINERARIAS EN LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
Un caso singular: valoración por remisión a los criterios contenidos en las leyes fiscales sobre comprobación de valores[1]

Miguel Ángel Luque Mateo
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Almería

RESUMEN

La remisión a los criterios de las leyes fiscales sobre comprobación de valores, que la regulación de las SAT establece como mecanismo para evitar la sobrevaloración de las aportaciones no dinerarias, constituye una fórmula atípica en el derecho societario, que induce a confusión e inseguridad jurídica, carece del rigor que exige una adecuada técnica de redacción normativa, provoca múltiples problemas y puede resultar inoperante, en la práctica. Cabe resaltar la indeterminación de las consecuencias jurídicas respecto al incumplimiento del precepto; la expresa remisión de la normativa tributaria al valor nominal de la aportación, en determinados supuestos, o a conceptos jurídicos indeterminados (valor real, precio razonable, etc.) en otros, además de establecer la prevalencia del valor declarado sobre el comprobado. Por ello, se propone un régimen jurídico más respetuoso con el principio de seguridad jurídica, tanto respecto al contenido y procedimiento de valoración, como a los sujetos responsables.

1. Trabajo realizado en el marco del proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía SEJ-3251: *La reforma del Derecho cooperativo en el marco de las nuevas tendencias de la Economía Social*, dirigido por el prof. Dr. D. Juan José Hinojosa Torralvo.

PALABRAS CLAVE: Sociedades agrarias de transformación; aportaciones no dinerarias; valoración; comprobación de valores; Economía Social.

CLAVES ECONLIT: Q130; K340; L510.

NON-CASH CONTRIBUTIONS IN SATS*. A singular case: valuation by reference to criteria set out in tax laws concerning valuation checking

ABSTRACT

The remission to the criteria contained in the tax laws on verification of values established by the regulations of Agrarian Societies of Transformation (SAT) establish as a mechanism to avoid the overvaluation of non-monetary contributions is an atypical formula in Corporate Law, which leads to confusion and legal insecurity, lacks the strict accuracy demanded by the appropriate regulations writing style, causes manifold problems and can be unworkable in practice. It is necessary to point out the unclear definition of the consequences of failure to comply with the precept, the specific remission of tax regulations to the nominal value of contributions, in certain scenarios, or to vague legal concepts (real value, reasonable price, etc.) in others, besides the prevalence of the value declared over the verified value. For all these reasons, a legal regime is proposed which will be more respectful of the principle of legal security both with regard to valuation content and procedure and to responsible subjects.

KEY WORDS: Agrarian societies of transformation, non-monetary contributions; verification of values, social economy.

* Agrarian Societies of Transformation or Agricultural Transformation Companies.

Las aportaciones no dinerarias en las sociedades agrarias de transformación (pp. 145-167)

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN. II. CONFIGURACIÓN JURÍDICA Y SOCIETARIA DE LA SAT III. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS EN LAS SOCIEDADES DE CAPITALES Y COOPERATIVAS IV. PROBLEMAS QUE SUSCITA LA REGULACIÓN DE LA SAT. 1. Empleo de una terminología incorrecta. 2. Pluralidad e indeterminación de los conceptos de referencia. 3. Inexistencia de comprobaciones de valores tributarias. 4. Posible prevalencia del valor declarado sobre el comprobado. 5. Existencia de diversos métodos y medios de comprobación, así como posibilidad solicitar tasación pericial contradictoria. 6. Necesidad de respetar las exigencias de las comprobaciones de valores tributarias. V. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

La normativa reguladora de las Sociedades Agrarias de Transformación (en adelante, SAT), al igual que la del resto de sociedades, prevé que, además del dinero, pueda ser objeto de aportación cualquier bien o derecho patrimonial susceptible de valoración económica. Quedan, pues, incluidas en esta categoría, entre otras, las aportaciones de bienes muebles o inmuebles, empresas o establecimientos, derecho de propiedad industrial (marcas, patentes, etc.), derechos reales y de crédito, e incluso determinadas situaciones de hecho susceptibles de valoración económica, como el denominado "fondo de comercio"[2].

Las aportaciones *in natura,* a diferencia de las dinerarias, pueden representar un grave peligro para la debida integración del patrimonio social. Para evitarlo, los ordenamientos se preocupan de someterlas a un régimen especial y riguroso en el que destacan las garantías impuestas respecto de su valoración. La exigencia de efectividad patrimonial no se cumpliría si se sobrevalorase un bien y se entregasen a cambio participaciones por una suma equivalente. Lo aportado, para que se respete el principio de integración, tiene que tener un valor que cubra al menos el nominal de las participaciones suscritas[3].

El art. 8 del Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las SAT (en adelante, RD de 1981), contiene una regla atípica en el derecho societario que

2. BARBA DE VEGA, J.: "Aportaciones sociales", *La Sociedad de Responsabilidad Limitada,* (coord.. Bércovitz Rodríguez-Cano, A.), Thomson-Aranzadi, 2006, p. 188.

3. VV.AA.: *Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercantiles,* t. III, (dir. URIA, MENÉNDEZ y OLIVENCIA), Civitas, Madrid, 1993, pp. 73 y 74.

pretende cumplir el objetivo expuesto, mediante una remisión a la normativa tributaria sobre el procedimiento de comprobación de valores. Pero su redacción es tan desafortunada que no sólo no consigue tal finalidad, sino que induce a confusión e inseguridad jurídica, en sintonía con la indeterminación del régimen jurídico privado y fiscal de esta figura[4].

En las siguientes páginas analizamos esta cuestión, desde un punto de vista crítico, teniendo en cuenta que la actual redacción no sólo no tutela debidamente el interés de los socios, la sociedad y los posibles acreedores, sino que deja múltiples problemas sin resolver y puede resultar inoperante en la práctica.

II. CONFIGURACIÓN JURÍDICA Y SOCIETARIA DE LA SAT

El RD de 1981 consagró en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la SAT, calificándola como una sociedad civil tendente a la «producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad». Nació a modo de sucesora de los antiguos Grupos Sindicales de Colonización, íntimamente unidos a las cooperativas del campo, con las que compartían un régimen fiscal muy similar, en el marco de lo que se denominaba "tributación de agricultura asociativa o de grupo"[5]. Esta figura, típicamente española[6], ha tenido un gran auge y desarrollo dentro del asociacionismo agrario[7], que contrasta, de un lado con una escueta legislación que regula tan sólo sus aspectos esenciales, y de otro con un escaso interés doctrinal por el tema.

El RD que las regula contiene tan sólo catorce artículos, tres disposiciones transitorias y cuatro finales, permitiendo consignar en los estatutos cuantas menciones

4. Sobre este aspecto *vid.* LUQUE MATEO, M.A.: *Régimen fiscal de la Sociedad Agraria de Transformación,* Universidad de Almería – Instituto de Estudios Almerienses, 1999, pp. 15- 65.

5. *Vid.* OÑATE DE PEDRO, F. y BASANTA DEL MORAL, I.: *Cooperativas del Campo y Grupos Sindicales de Colonización,* Marcial Pons, Madrid, 1971, pp. 1-238.

6. Con cierta similitud con figuras asociativas francesas e italianas. *Vid.* SALINAS RAMOS, F.: *Manual Práctico de Cooperativismo,* Zero, Madrid, 1984, p. 16.

7. A finales de 1996 ya existían en España 10.661 S.A.T. en funcionamiento, formadas por 282.078 socios, cuyas aportaciones ascendían a 77.551 millones de pesetas, siendo Andalucía la segunda Comunidad Autónoma donde se inscribieron mayor número de estas sociedades en 1996. (*La Agricultura, la Pesca y la Alimentación en 1.996.* Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. pág. 297.) Y en el año 2000 su número rozaba las 12.000. Vid. sobre este aspecto ROSELLO ESTEBAN, P.: "Las Sociedades Agrarias de Transformación: Orígenes y Evolución", I Congreso Nacional de Sociedades Agrarias de Transformación, Lérida, 9 y 10 Mayo 1985, Barcelona, 1985, pág. 14.

se estimen necesarias para el normal desenvolvimiento funcional de la SAT, siempre que no se opongan a la norma reguladora[8]. Esta flexibilidad normativa, junto con ciertas ventajas fiscales han propiciado la utilización de esta figura asociativa para acometer una gran parte de proyectos empresariales, algunos de los cuales tienen poco que ver con el sector agrario, ganadero o forestal.

Esta circunstancia ha sido criticada por LÓPEZ DE MEDRANO, que la ha calificado como "un auténtico caballo de Troya que permite que se acojan a esta forma jurídica empresas cuyo objeto social poco, muy poco o nada tengan que ver con la actividad agrícola, ganadera o forestal"[9]. Por ello, parte de la doctrina considera como sociedad mercantil cuando mercantil sea su objeto, lo que ocurriría en el caso de transformación o comercialización de productos[10].

En este sentido, debe advertirse que la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas, rompió la tradicional asimilación SAT-cooperativas agrarias, para dotarlas de un régimen propio, mediante la sujeción de estas entidades al régimen tributario general, sin perjuicio del establecimiento de ciertas normas especiales aplicables en el Impuesto sobre Sociedades, especialmente en la valoración de las operaciones vinculadas SAT-socio y del reconocimiento de algunos beneficios en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

III. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS EN LAS SOCIEDADES DE CAPITALES Y COOPERATIVAS

La posible filosofía mercantil de la SAT, a pesar de su calificación como sociedad civil, hace necesario un previo y somero análisis de esta cuestión en el Real Decreto

8. Esta libertad estatutaria se traduce en la existencia de SAT muy diferentes según el modelo económico-financiero de referencia establecido. *Cfr.* VARGAS VASSEROT, C. y AGUILAR RUBIO, M.: "Régimen económico y fiscal de las cooperativas agrarias y de las SAT. El capital social, determinación de resultados, distribución de excedentes y obligación de auditoría", en *Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación* (dir. PULGAR EZQUERRA, J.), Dikinson, S.L., Madrid, 2006, p. 163.

9. LÓPEZ DE MEDRANO F.: "Notas críticas al Estatuto Jurídico Privado de las Sociedades Agrarias de Transformación", *RGD,* septiembre, 1991, p. 7600.

10. VICENT CHULIÁ, F: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil,* Tomo I, vol. 2º, Bosch, Barcelona 1.992, pág. 1011; LÓPEZ DE MEDRANO F.: *op. cit.,* p. 7601; BELTRÁN SÁNCHEZ, E.: "La agricultura de grupo: las sociedades agrarias de transformación", en ORDUÑA MORENO, J.F. (Dir.), *El derecho agrario. Su marco jurídico y económico,* Valencia, 1997, p. 81; CABALLERO GONZÁLEZ, J.M.: "El objeto de las Sociedades Agrarias de Transformación", *La Ley,* 1983-2, p. 1214. *Vid.* en este sentido, el auto 390/2002, de 17 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª) (*JUR* 2004\959).

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales (en adelante, TRLSC).

En este tipo de sociedades, se establece un criterio claro: las aportaciones no dinerarias no deben cuantificarse por encima de su valor real. Nada impide, sin embargo, que se establezca un valor inferior al real o de mercado[11].

La normativa societaria establece una serie de responsabilidades y mecanismos que operan en el momento de la constitución o del aumento de capital, que garantizan que la citada valoración no dependa de lo que pacten los socios[12], para proteger los intereses de los acreedores y de la propia sociedad. El artículo 67 del TRLSC, *v. gr.,* exige la elaboración de un informe pericial por expertos independientes designados por el Registrador Mercantil.

Centrándonos en los sujetos responsables solidarios de la sobrevaloración de las aportaciones no dinerarias, además del experto que emite el informe, distinguimos dos supuestos, según si las aportaciones se realizan en el momento fundacional de la sociedad o con ocasión de un aumento de capital. En el primer caso, son responsables los fundadores y quienes posteriormente adquieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias; en el segundo, las personas que ostenten la condición de socio en el momento de acordarse el aumento de capital, quienes adquieren alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, y los administradores (art. 73 TRLSC).

Se establecen, sin embargo, algunas excepciones en relación con la responsabilidad solidaria de los socios: cuando las aportaciones no dinerarias sean sometidas a valoración pericial y cuando, en un aumento de capital, se hubiera hecho constar en acta la oposición al acuerdo o a la valoración atribuida[13]. También quedarán excluidos de responsabilidad los administradores que, no habiendo intervenido en la realización y aprobación del informe de aumento de capital, prueben que desconocían su existencia, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél[14].

La acción de responsabilidad deberá ser ejercitada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores. También podrá realizarse por cualquier socio que represente al menos el 5% del capital social y haya votado en contra del acuerdo,

11. La infravaloración puede obedecer a motivos razonables. Piénsese en el caso de un aumento de capital en una sociedad cuyas acciones tienen un valor real superior al nominal. Si se quiere que el nuevo accionista realice aportaciones por un valor superior al nominal de las acciones que suscribe, puede recurrirse a la emisión con prima pero también a la infravaloración de la aportación. *Cfr.* VV.AA.: *Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercantiles, op. cit.,* p. 78.

12. BARBA DE VEGA, J.: "Aportaciones sociales", *op. cit.,* p. 201.

13. Arts. 76 y 73.2 TRLSC.

14. Art. 237 TRLSC.

así como por cualquier acreedor, en caso de insolvencia de la sociedad (art. 74 del TRLSC).

En relación con la responsabilidad de los administradores, se exige la concurrencia de tres requisitos clásicos para que sea viable una acción de responsabilidad por daños al patrimonio social: la existencia de un daño; una actuación antijurídica (dolosa o negligente) por parte del administrador, y una relación de causalidad entre el daño y la actuación de los administradores. Los socios y, en su caso, los acreedores sociales podrían alegar que la valoración de la aportación no dineraria de capital no ha sido realizada en defensa del interés social y que, en consecuencia, se han incumplido los deberes de lealtad y fidelidad frente a la sociedad. El perjudicado podría optar por la vía de impugnación de los acuerdos sociales correspondientes (arts. 204 y 207 TRLSC) o, alternativamente, acudir al régimen general previsto en los arts. 236 siguientes del TRLSC[15].

Finalmente, se establece que esta responsabilidad prescribe a los cinco años a contar desde el momento en que se hubiera realizado la aportación. Este plazo tan corto puede hacer inoperante la acción que se le otorga a los acreedores, en caso de insolvencia de la sociedad. No obstante, siempre podrían acudir a la vía de la responsabilidad de los administradores, por no haber ejercitado ellos mismos la acción dentro de dicho plazo y ocasionar con ello un perjuicio a los terceros[16].

La legislación cooperativa sobre las aportaciones no dinerarias es más compleja, por la disparidad con que las distintas leyes autonómicas la llevan a cabo[17]. Normalmente se prevé que dichas valoraciones se concreten en los estatutos sociales o por la Asamblea General. La Ley estatal de cooperativas dispone que será el Consejo Rector el que deba fijar la valoración, previo informe de uno o varios expertos independientes, designados por ese mismo órgano. Dicho informe deberá hacer referencia a las características, el valor de la aportación y los criterios empleados para calcularlo. En caso de que se trate de aportaciones iniciales, el Consejo realizará esa valoración *a posteriori*. Por último, la variedad normativa española suele establecer un régimen de responsabilidad-sanción que pesa sobre los administradores, además de un requisito de ratificación del valor asignado por la Asamblea General o por el Juez.

---

15 *Vid.* PUJOL PAMIES, A.: "Implicaciones mercantiles de las operaciones vinculadas", *Fiscalidad de los precios de transferencia (operaciones vinculadas),* -CORDÓN EZQUERRO, T. Dir.- CEF, 2010, pp. 847 a 883.

16. BARBA DE VEGA, J.: "Aportaciones sociales", *op. cit.,* p. 206.

17. *Vid.* MORILLAS JARILLO, Mª J. y FELIÚ REY, M.I.: *Curso de Cooperativas,* Tecnos, Madrid, 2ª ed., 374-377.

IV. PROBLEMAS QUE SUSCITA LA REGULACIÓN DE LA SAT

El art. 8 del Real Decreto 1776/1981 contiene dos reglas de valoración de las aportaciones no dinerarias que pretenden garantizar la efectividad patrimonial. El apartado cuarto dispone lo siguiente:

> «Las aportaciones podrán ser dinerarias o no dinerarias, debiendo fijarse en metálico la valoración de estas últimas. Las aportaciones no dinerarias no podrán ser valoradas en una cifra superior a la que resulte de aplicar los criterios establecidos por las leyes fiscales en los expedientes de comprobación de valores».

Por su parte, el apartado sexto remite al anterior en los siguientes términos:

> «Se podrá aportar a la SAT el derecho real de usufructo sobre bienes muebles o inmuebles, que se valorará conforme a lo establecido en el número 4 de este artículo».

En nuestra opinión, la regulación de esta cuestión en las SAT merece un juicio crítico por tres motivos:

Primero, porque, a diferencia del TRLSC, el RD de 1981 contiene muy pocas normas que garanticen la correspondencia efectiva entre el capital social suscrito y los bienes efectivamente aportados. Ello puede ser especialmente grave, si se tiene en cuenta que no será necesaria la intervención del notario para constituir este tipo de sociedades si no se aportan bienes inmuebles[18].

Segundo, porque los preceptos transcritos pueden carecer de eficacia práctica. Por un lado, una normativa tributaria de comprobación de valores permite declarar un valor superior al real y, por otro, porque no se establece una consecuencia jurídica clara frente al incumplimiento de la norma. En este sentido, cierta doctrina entiende que la infracción del precepto no ocasionaría una nulidad de raíz o absoluta (art. 6.3 del Código Civil), aunque podría ocasionar consecuencias jurídicas por su antijuricidad o como sanción[19]. Por otro lado, tampoco se especifican cuál son los sujetos u órganos responsables, las personas que pueden instar la acción de responsabilidad, ni el procedimiento a seguir.

Tercero, porque la terminología empelada carece del rigor que exige una adecuada técnica de redacción normativa. La remisión a "los criterios establecidos por las leyes fiscales en los expedientes de comprobación de valores" provoca una absoluta indeterminación e inseguridad jurídica.

---

18. *Cfr.* VARGAS VASSEROT, C. y AGUILAR RUBIO, M.: "Régimen económico y fiscal de las cooperativas agrarias y de las SAT", *op. cit*., p. 195; CUENCA ANAYA, F.: «Sociedades Agrarias de Transformación: Constitución, Representación y Régimen Fiscal», *Revista de Derecho Notarial,* 1983, pp. 375 y 376; PAZ CANALEJO, N.: «El nuevo Estatuto Reglamentario de las S.A.T. y la reforma de la legislación cooperativa», *Agricultura y Sociedad,* n.º 23, 1982, p. 85; CORRAL DUEÑAS, F.: «Sociedad Agraria de Transformación: Su regulación vigente», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,* n.º 611, 1992, pp. 440 y 441; LUCAS FERNÁNDEZ: *Relaciones Asociativas no Societarias en la Agricultura Española,* Sucesores de Nogués, Murcia, 1966, pp. 78 y ss.

19. LÓPEZ DE MEDRANO, F.: *Op. cit.,* p. 7621.

Seguidamente exponemos algunos de los principales problemas que suscita esta regulación. Somos concientes de que nos dejamos en el tintero múltiples cuestiones relacionadas con este tema, pero un trabajo de estas características impide abordar todos los aspectos que plantea esta materia[20].

1. EMPLEO DE UNA TERMINOLOGÍA INCORRECTA

Según el apartado cuarto del art. 8 del RD de 1981, el tope de valoración de una aportación no dineraria a la SAT se encuentra en la cifra que resulte de la aplicación de los criterios establecidos por las leyes fiscales en los expedientes de comprobación de valores.

En nuestra opinión, la utilización del término "criterio" se hace de manera incorrecta, puesto que las normas tributarias que regulan los procedimientos de comprobación de valores se refieren, normalmente, a "medios de comprobación", no a "criterios"[21]. Los criterios para determinar el valor de los bienes o derechos se recogen en los preceptos que regulan la base imponible de los diferentes tributos. Técnicamente, la actuación de comprobación de valor tendría como finalidad fijar el valor del bien objeto de tributación, de forma que coincida con el criterio establecido para la determinación de la base imponible, impidiendo a los obligados tributar por debajo de su verdadera capacidad económica.

Así, por ejemplo, en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITPyAJD) y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD) el criterio para determinar la base imponible del tributo es "el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda"[22]. Para comprobar dicho valor, la Administración tributaria podrá utilizar, *v. gr.,* el dictamen pericial[23]. Por otra parte,

20. Por ejemplo, la distinción del procedimiento de comprobación de valores con la aplicación de reglas normativas que establecen valores, en el caso de valoración de vehículos, *v. gr.*; los supuestos especiales en los que no procede la comprobación de valores, como la adquisición de bienes a través de subasta, o la heterogeneidad de la normativa tributaria sobre comprobación de valores, al ser una materia cedida a las Comunidades Autónomas.

21. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, por criterio debe entenderse la «norma para conocer la verdad» o «el juicio o discernimiento».

22. Art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del ITPyAJD (en adelante LITPyAJD), art. 37 del RD 828/1995, de 29 de mayo, que aprueba el Reglamento del ITPyAJD (en adelante RITPyAJD), art. 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del ISD (en adelante LISD) y art. 22 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento del ISD (en adelante RISD).

23. Art. 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) y art. 157 y ss. del RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, RGAPGIT).

la normativa interna[24] y las Directrices OCDE se refieren a diversos métodos para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas: precio libre comparable, precio de reventa, coste incrementado, beneficio conjunto de la operación, margen neto de la operación, etc[25].

Si la intención del redactor de la norma era fijar un tope máximo en el "valor real" o en el "valor de mercado" de los bienes o derechos aportados a la SAT, debería haberlo establecido expresamente[26], sin realizar reenvíos a la normativa tributaria de comprobación de valores o, a lo sumo, podría haber remitido a las normas que regulan la base imponible de determinados tributos, como realiza la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para determinar la ganancia de patrimonio en las transmisiones a título lucrativo[27].

En el caso de constitución y aumento de capital de sociedades, el art. 25 de la LITPyAJD establece dos criterios para cuantificar la base imponible del Impuesto sobre Operaciones Societarias (en adelante, IOS), según si existe o no limitación de responsabilidad de los socios. En el primer caso, la base imponible coincidirá con el importe nominal en que el capital quede fijado inicialmente o ampliado, con adición de las primas de emisión, en su caso exigidas; en el segundo supuesto, se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación.

Ambos criterios pueden ser aplicables a las SAT, puesto que, según establece el apartado segundo del RD de 1981, «de las deudas sociales responderá, en primer lugar, el patrimonio social, y, subsidiariamente, los socios de forma mancomunada e ilimitada, salvo que estatutariamente se hubiera pactado su limitación». Ello significa que, en caso de que los estatutos contengan la limitación de responsabilidad de los socios, el procedimiento de comprobación de valores carecería de sentido. Lo que habría que verificar, en todo caso, sería valor del importe nominal de la aportación; es decir, que no será otro sino el pactado libremente por los socios, sin limitación adicional. Por tanto, en este caso, la citada regla del art. 8.4 no tendría eficacia alguna y no serviría para garantizar la efectividad patrimonial de la sociedad.

---

24. Arts. 16.4 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRISD) y 16.5 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, RIS).

25. *Vid.* "Métodos de valoración", *Fiscalidad de los precios de transferencia (operaciones vinculadas), op. cit.,* pp. 345 a 366.

26. BARBERENA BELZUNCE, I.: *Sociedades Cooperativas, Anónimas Laborales y Agrarias de Transformación. Régimen Fiscal*. Aranzadi, Pamplona, 1992, pp. 312 y 313.

27. El art. 36 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone que se tomará «por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder el valor de mercado».

2. PLURALIDAD E INDETERMINACIÓN DE CONCEPTOS

La comprobación de valor de los bienes o derechos para determinar el valor máximo de la aportación no dineraria, sólo tendría sentido en las SAT que no han establecido limitación de la responsabilidad de los socios, según hemos expuesto en el epígrafe anterior. En tal caso, los sujetos responsables o los que pudieran ejercer la acción de responsabilidad deberían calcular el valor de dichos bienes o derechos para obtener el valor neto de la aportación, una vez minoradas las cargas y gastos que fueren deducibles.

Ahora bien, qué concepto debe tenerse en cuenta: ¿el "valor real", que constituye la base imponible en el ITPyAJD o en el ISD?, ¿el "valor razonable" al que se refiere el Plan General Contable? o ¿el "valor de mercado", empleado por el art. 16 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLIS), para el caso de operaciones vinculadas? Sea cual sea la opción elegida, siempre subyacerá el problema de la indeterminación del concepto jurídico utilizado, cuyo significado ha sido objeto de múltiples pronunciamientos jurisprudenciales sin que se haya podido llegar a una equiparación con otros términos más concretos[28].

La doctrina, la Administración tributaria y la jurisprudencia recaída respecto a la comprobación de valor en el ITPyAJD y en el ISD mantienen dos posiciones sobre esta cuestión que giran en torno a un mismo núcleo: defender la equiparación del "valor real" al "valor de mercado", o rechazarla, utilizando otros criterios, especialmente la asimilación al "precio". A ellas habría que añadir la tesis del "valor real administrativo", asumido por algunas normas autonómicas dictadas en los últimos años[29].

La primera postura se ha sostenido por diversos autores, aduciendo la necesidad de reconducir el concepto "valor real" a otro más fácilmente concretable.[30] Desde

28. El contenido de algunas sentencias no ha ayudado a clarificar la cuestión. Sirva de ejemplo el siguiente párrafo extraído de la STS de 7 de mayo de 1991 (*RJ* 1991, 4132), reiterado en otras más recientes:«Al no existir un sentido jurídico de lo que es "real", salvo que se entienda con ello una referencia a la cosa (o *res*), ni tampoco un sentido técnico, hay que acudir al sentido usual, y por "real" ha de entenderse lo existente, lo verdadero, lo no ilusorio, no imaginario ni ficticio y no de mera apariencia. Valor real será, por tanto, la estimación económica o precio verdadero, no ilusorio, meramente imaginario o aparente de una cosa. Sobre esta cuestión, *vid.* PEÑUELAS I REIXACH, LL.: *Valor de mercado y obras de arte,* Marcial Pons, 2005, pp. 33 a 65.

29. *Vid.*, entre otras, la Instrucción 3/2007, de 21 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Presupuestos de las Islas Baleares (LIB\2007\362) y Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 20 de diciembre de 2007, que aprueba los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del ITPyAJD y del ISD que se devenguen en el año 2008, se establece las reglas para la aplicación de los mismos y publica la metodología seguida para su obtención.

30. VARONA ALABERT, J.E.: «Artículo 10. Bienes inmuebles», en *Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio,* VV.AA., Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 1562; POVEDA BLANCO, F.: «La comprobación de valor de los bienes inmuebles transmitidos. Un problema en vías de solución», *Palau 14,* n.º 22, 1994, pp. 56 y ss, y MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: *Manual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,* 4ª. ed., Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 154 y ss.

esta posición, el valor real sería el precio más probable que el bien o derecho adquiere en el mercado, o puede alcanzar a corto plazo con razonable seguridad[31]. En definitiva, tal y como subraya la STSJ de Castilla y León, de 20 de enero de 2003, lo que se trataría de gravar en el ITP, «no es el importe cierto de la transmisión o precio realmente pagado, sino el valor de mercado, independiente y superpuesto al importe de la operación económica gravada»[32]. Esta opción coincidiría con la pauta utilizada en los procedimientos de comprobación de valores en la tributación sobre la renta y los beneficios, en caso de operaciones vinculadas y precios de transferencia.

Desde la segunda posición, se han defendido varias alternativas. La más significativa consiste en entender por "valor real" el "precio" o "importe efectivo". Para PERIS GARCÍA[33], esta opción supone ser «congruentes con la capacidad económica gravada y con el principio de seguridad jurídica». Exponente de esta teoría es una amplia jurisprudencia que considera que, cuando se tiene certeza de lo realmente pagado, no es necesaria la comprobación de valores[34]. Desde esta tesis, el "valor real" de los bienes y derechos que se aportan, se equipararía al importe nominal establecido, cuando se pueda probar su razonabilidad. Por tanto, el citado "valor real" podría ser superior al resultado de una comprobación de valor realizada con alguno de los medios contenidos en el art. 57 de la LGT, con lo que tampoco tendría efectividad la fórmula contenida en el RD de 1981.

Dado que el RD de 1981 no especifica ni concreta el parámetro al que hay que atenerse y que, además, se trata de conceptos ambiguos y dispares, mucho nos tememos que la norma no coadyuva a conseguir el objetivo propuesto.

3. INEXISTENCIA DE COMPROBACIONES DE VALORES TRIBUTARIAS

El Registro de las SAT no realiza el control del valor de los bienes y derechos correspondientes a aportaciones no dinerarias. Eso significa que, en todo caso, deberían ser los propios socios fundadores, el Consejo Rector y el Presidente los

31. MARÍN MARTÍNEZ, J.: «Valoraciones de inmuebles en Derecho Tributario», *Revista de Hacienda Autonómica y Local,* n.º 62, 1991, pp. 234 y 235, y CAAMAÑO ANIDO, M.A.: *Régimen fiscal de las donaciones,* IEF-Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 173.

32. *JT*, n.º 4, 2003, pp. 561 a 564. Utilizando la expresión del art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor de mercado sería «el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas».

33. PERIS GARCÍA, P.: *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente,* Cívitas, Madrid, 1996, p. 55. *Vid.,* en este mismo sentido, PLAZA VÁZQUEZ, A.L.: *El «valor Real» Tributario,* Aranzadi, Navarra, 2000, pp. 143, 174, 175, 444 y 445.

34. STS de 7 de mayo de 1991 (*RJ* 1991, 4132) y de 18 de septiembre de 1993 (*RJ* 1993, 6967), entre otras. El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 194/2000, de 19 de julio, subraya la posibilidad de que el valor declarado no coincida con el de mercado.

que debieran velar para que no se produjesen sobrevaloraciones en este tipo de aportaciones.

Dado que el art. 8 del RD de 1981 se remite a la normativa fiscal sobre comprobación de valores para determinar el límite máximo del valor de la aportación no dineraria, lo normal sería atenerse al resultado de los procedimientos realizados por la Administración tributaria. Ello plantea dos problemas:

- El primero, vendría provocado por la necesaria modificación de la cifra del capital suscrito, si el expediente de comprobación de valores concluye con un valor menor al asignado por los socios. Esta alteración debería realizarse una vez constituida la SAT o culminada la ampliación de capital, con los consiguientes trastornos, puesto que este tipo de procedimientos se inician normalmente varios meses o, incluso, años después de la realización del hecho imponible[35].

- El segundo, más grave, es consecuencia de la falta de realización de comprobaciones de valores sobre los bienes y derechos que se aportan. Ello es así porque los actos de constitución y los de ampliación de capital de las SAT están exentos en el ITPyAJD[36]. Si la Administración tributaria no va a obtener ingresos como consecuencia de la comprobación de valor que pudiera realizar, difícilmente va a iniciar este tipo de procedimientos. Por tanto, los sujetos responsables de velar por el principio de correspondencia efectiva o de realidad carecerán del instrumento necesario para evitar la mencionada sobrevaloración de los bienes o derechos aportados.

Por otro lado, al tratarse de aportaciones, normalmente, inferiores a 250.000 euros, aunque se considerasen operaciones vinculadas, tampoco existiría una documentación remitida a la Administración Tributaria que fundamentara la valoración realizada, según lo establecido en el RD 897/2010, de 9 de julio, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de obligaciones de documentación de este tipo de operaciones[37].

---

35. El art. 66 de la LGT dispone que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

36. *Cfr.* el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

37. Ni siquiera existirá la obligación de tener tal documentación, para el caso de operaciones no superiores a 100.000 euros, tas la modificación del art. 16 del TRLIS operada por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y del empleo. El actual apartado segundo del citado precepto dispone lo siguiente: «Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas».

Por tanto, salvo que se trate de aportaciones superiores a las citadas cantidades, según el tenor literal del art. 8 del RD de 1981, deberían ser esos mismos sujetos responsables los que debieran realizar la oportuna comprobación, con los medios contenidos en la normativa tributaria, respetando las exigencias del procedimiento administrativo. Una posible solución podría consistir en la elaboración de un informe pericial por parte de expertos independientes, al igual que establece el art. 67 del TRLSC. No obstante nos seguiríamos encontrando con otra serie de problemas que describimos seguidamente.

4. POSIBLE PREVALENCIA DEL VALOR DECLARADO SOBRE EL COMPROBADO

Los arts. 46.3 del TR de la LITPyAJD y 18.2 de la LISD establecen que «cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible»[38]. Sin embargo, el apartado tercero del art. 134 de la LGT obliga a notificar el resultado del procedimiento de comprobación de valor, cuando éste sea "distinto" del declarado[39].

El art. 8 del RD de 1981 realiza una remisión a las normas fiscales sobre comprobación de valores, en plural, sin concreción alguna. Por ello, nos surge la siguiente duda: ¿a qué régimen jurídico debemos remitirnos para la valoración de las aportaciones no dinerarias: al establecido en la LGT, que obliga a notificar el valor comprobado aunque sea inferior al declarado, o al contenido en la normativa reguladora del ITPyAJD, que dispone la prevalencia del valor declarado sobre el comprobado, cuando aquél es superior?

Si se utiliza el criterio de la Ley especial, que *a priori*, parece el más razonable, al tratarse de valoraciones en el ámbito del ITPyAJD, no existiría limitación máxima alguna para la valoración de las citadas aportaciones no dinerarias, puesto que la misma normativa a la que reenvía el art. 8 declara la prevalencia del valor declarado sobre el comprobado cuando aquél es superior. Por el contrario, si el reenvío se realiza al art. 134 de la LGT, podría seguir defendiéndose la existencia de ese límite máximo.

---

38. Esta misma previsión se reitera en diversas normas y disposiciones autonómicas, como la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, de las Juntas Generales de Álava, el Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, del Gobierno de Navarra o la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 20 de diciembre de 2007.

39. El proyecto de Ley asumía la opción contenida en la normativa del ITPyAJD. Sólo obligaba a notificar la comprobación cuando el valor resultante fuese superior al declarado por el obligado tributario. Sin embargo, en el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una enmienda de modificación, proponiendo que la actual redacción, que fue finalmente aprobada. En la justificación a la propuesta se aclaraba «que la valoración que realice la administración puede ser tanto al alza como a la baja». Enmienda número 134. (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado,* VII Legislatura, Serie II, Proyectos de Ley, de 21 de octubre de 2003, p. 239, y de 27 de noviembre de 2003).

Esta última opción presenta, empero, un inconveniente provocado por el hecho de que la propia LGT, en su disposición final cuarta, mantiene expresamente la fórmula de prevalencia del valor declarado sobre el comprobado, en la nueva redacción que ha dado al art. 18.2 de la LISD[40]. A pesar de ello, nosotros nos inclinamos por la aplicación del régimen establecido en el art. 134. de la LGT, debiendo considerarse derogada la cláusula de prevalencia del valor declarado establecida en la normativa del ITPyAJD y del ISD, basándonos en un triple razonamiento.

Por un lado, debe tenerse en cuenta que cuando se redacta la enmienda de modificación de la LISD, se realiza sobre la base del contenido del anterior art. 18.2 del ISD y de la previsión del art. 134.3 del Proyecto de LGT, que coincidían en la obligación de notificar sólo cuando el valor comprobado fuese superior al declarado[41]. Por otro lado, la justificación de la enmienda se refiere a la obligación de consignar el valor real de los bienes adquiridos y al cumplimiento del principio de legalidad en el ámbito sancionador[42]. Desde este punto de vista, se podría entender que el legislador mantuvo la redacción que ya existía y añadió un segundo párrafo relativo a la concesión de un plazo de diez días para cumplir la obligación de declarar los valores, sin tener intención de reforzar la tesis de la prevalencia del valor declarado sobre el comprobado. Por último, consideramos una contradicción defender que si ese valor resultante de la comprobación es superior al declarado, sí es el real; pero no es el real cuando es inferior al declarado, o lo que sería más peligroso, defender que siempre se intentará conseguir el valor real, pero que en el segundo supuesto, se sustituye el valor real por un valor formal: el declarado[43].

Téngase en cuenta que la LGT nació con vocación de generalidad para todo el sistema tributario español, aplicable a todas las Administraciones tributarias[44].

---

40. La modificación de este precepto no estaba prevista en el Proyecto de LGT. Su inclusión en la nueva LGT es consecuencia de una enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dirigida, fundamentalmente al cumplimiento del principio de legalidad en el ámbito sancionador. Enmienda n.º 369 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que fue aprobada. *Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado,* VII Legislatura, Serie II, Proyectos de Ley, de 21 de octubre de 2003, p. 253, y de 27 de noviembre de 2003, p. 745.

41. Adviértase que este precepto no se modificó en el trámite del Congreso, sino en el Senado.

42. La justificación de la enmienda se presentó en los siguientes términos: «La modificación del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 29/1987 pretende establecer de forma la obligación de consignar el valor real que los sujetos pasivos atribuyan a los bienes y derechos adquiridos. El precepto legal que se modifica esta obligación, pero era el Reglamento del impuesto el que concretaba la tipificación de la infracción, la calificaba como infracción tributaria simple y establecía sanción; todo ello, de acuerdo con la regulación contenida en los artículos 78 y 83 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. Con la nueva redacción del artículo 40 que se propone, la infracción y la sanción quedan tipificadas en la Ley del Impuesto, de forma armonizada con el Proyecto de Ley General Tributaria y con pleno cumplimiento del principio de legalidad».

43. PLAZA VÁZQUEZ, A.L.: *Op. cit.,* pp. 81 a 85 y 143.

44. Recuérdese, además, que el art. 47.1.b) de la 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, establece que estos Entes territoriales podrán incoar expedientes de comprobación de valores, «utilizando los mismos criterios que el Estado».

Además, su art. 134.3 no menciona la posibilidad de que se aplique el régimen jurídico que establece, "salvo que las leyes propias de cada tributo dispongan otra cosa", alusión que sí se produce, p. ej., en el apartado cuarto de este mismo precepto[45].

5. EXISTENCIA DE DIVERSOS MEDIOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN Y POSIBILIDAD DE SOLICITAR TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

El apartado primero del artículo 57 de la LGT contiene los siguientes medios para poder realizar la comprobación de valores de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria[46]:

«a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale.

b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración

45. «(...). La ley de cada tributo podrá establecer la obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria»

46. El art. 158 del RGAPGIT, lo desarrolla, bajo la rúbrica "Medios de comprobación de valores", en los siguientes términos**:** «1. La aplicación del medio de valoración consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigirá que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar. En el ámbito de competencias del Estado la aprobación corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante orden.

2. Cuando en la comprobación de valores se utilice el medio de valoración consistente en precios medios de mercado, la Administración tributaria competente podrá aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes. En el ámbito de competencias del Estado la aprobación corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante orden.

3. Cuando en la comprobación de valores se utilice el medio de valoración consistente en dictamen de perito de la Administración, este deberá tener titulación suficiente y adecuada al tipo de bien a valorar.

Tratándose de una valoración que se refiera a un bien o derecho individualizado se harán constar las características físicas, económicas y jurídicas que según la normativa aplicable hayan de considerarse para determinar el valor del bien o derecho.

4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 57.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el valor de los bienes transmitidos determinante de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria atendiendo al precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien realizadas dentro del plazo de un año desde la fecha del devengo del impuesto en el que surta efecto, siempre que se mantengan sustancialmente las circunstancias de carácter físico, jurídico y económico determinantes de dicho valor».

tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.

c) Precios medios en el mercado.

d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

e) Dictamen de peritos de la Administración.

f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.

g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.

h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo».

Por su parte, el art. 16.4 del TRLIS, alude a los siguientes métodos para determinar el valor normal de mercado de las operaciones vinculadas:

a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación».

Añade, además, que

«*cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no puedan aplicarse adecuadamente los métodos anteriores, se podrán aplicar los siguientes métodos para determinar el valor de mercado de la operación:*

a) Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona

o entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares.
b) Método del margen neto del conjunto de operaciones, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones, que el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones».

Esta variedad de métodos y medios de comprobación, junto con la libertad de elección que otorgan los preceptos, añade una nueva dificultad para poder ejercer la acción de responsabilidad frente a una posible sobrevaloración en las aportaciones no dinerarias. Piénsese que, según el método que se utilice, el resultado de la valoración será uno u otro. En el caso de la valoración de un bien inmueble urbano, *v. gr.,* si se aplica el método de multiplicar el valor catastral por un coeficiente aprobado por la Administración, el resultado puede ser totalmente distinto al que se obtendría si se tuviera en cuenta el valor asignado al bien en una póliza de contrato de seguro o en la tasación, en caso de que se hubiere hipotecado.

Dado que no se dispondrá de una valoración realizada por la Administración tributaria, los sujetos responsables siempre podrán argumentar que la valoración de la aportación no dineraria se realizó correctamente, utilizándose para ello el medio cuyo resultado era el más elevado.

Además, en nuestra opinión, se debería tener derecho a solicitar una tasación pericial contradictoria para oponerse al valor que se presenta como "real", dado que esta opción se contiene en la normativa tributaria que regula la comprobación de valores, a la que remite el art. 8.4 del RD de 1981[47].

Las opciones y las garantías que la normativa tributaria sobre comprobación de valores ofrecen a los sujetos responsables de una posible sobrevaloración, en el caso de aportaciones no dinerarias, entendemos que hacen muy difícil que la iniciación de una acción de responsabilidad culmine con éxito.

6. NECESIDAD DE RESPETAR LAS EXIGENCIAS DE LAS COMPROBACIONES DE VALORES TRIBUTARIAS

Si la normativa reguladora de las SAT sobre valoración de aportaciones no dinerarias remite a los "criterios" contenidos en las leyes fiscales sobre comprobación

47. *Vid.* arts. 135 de la LGT y 161 y 162 del RGAPGIT.

de valores, parece lógico admitir que el resultado de la actividad de los sujetos responsables de determinar una posible sobrevaloración deberá respetar las exigencias mínimas que la normativa y la jurisprudencia exigen en tales procedimientos tributarios. Ello puede complicar, aún más, el procedimiento de valoración que estamos analizando.

El art. 134.3 de la LGT sólo menciona la exigencia de motivación y la necesidad de expresar los medios y criterios empleados. Ello no significa que no existan otros requisitos necesarios para considerar jurídicamente correcta una comprobación de valor. Algunos vienen recogidos en normas reglamentarias[48], y otros son fruto de una consolidada doctrina que los tribunales han ido articulando en las últimas décadas[49].

El sentido de la jurisprudencia recaída al respecto apunta a un objetivo claro: la reducción de la discrecionalidad en este tipo de procedimientos[50]. En esta línea, se ha subrayado que «los principios de legalidad, juridicidad, seguridad e igualdad jurídicas y tutela judicial (artículos 9.3 *in fine*, 106.1, 120.3 y 24.1 de la Constitución Española) exigen limitar la discrecionalidad, lo que ha llevado a nuestra más reciente jurisprudencia a exigir que los acuerdos y resoluciones determinantes de la comprobación de valores cumplan una serie de exigencias legales, especialmente, las de motivación y fundamentación para conseguir una actividad reglada desprovista de todo elemento subjetivo»[51].

En nuestra opinión, existen cinco requisitos jurisprudenciales en relación con las comprobaciones de valores[52]: motivación, objetividad, individualización y comprobación *in situ*, competencia del perito y coetaneidad con el hecho imponible. Aunque determinados pronunciamientos de los tribunales económico-administrativos y de algunos órganos judiciales incluyen la objetividad y la individualización dentro de la motivación, creemos que constituyen pretensiones diferentes[53].

---

48. MALVÁREZ PASCUAL también alude a las exigencias que ha elaborado la doctrina. («Los límites a la facultad de dictar actos de comprobación de valores de forma reiterada», *Estudios Financieros,* n.º 216, 2001*,* pp. 38 y 39). En este sentido, *vid.* PERIS GARCÍA, P.: *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente, op. cit.*, pp. 32 y 33.

49. La STSJ de Castilla y León/Burgos, de 6 de febrero de 2002 (*JT* n.º 4, 2003, pp. 611 a 615) describe la evolución histórica de la doctrina del TS, desde la aceptación de una sucinta motivación, hasta la situación actual. *Vid.* también, la STS de 15 de diciembre de 1994 (*Impuestos,* n.º 23, 1996, p. 70).

50. CERVERA TORREJÓN, F. y MAGRANER MORENO, F.J.: *La comprobación de valores: causas de impugnación,* Tecnos, Madrid, 1994, p. 12.

51. *Cfr.* las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, de 25 de abril y 25 de julio de 2001; 25 de marzo, 24 de mayo y 25 de noviembre de 2002; 25 de marzo, 25 de junio y 25 de septiembre de 2003, entre otras.

52. Especialmente si se trata de bienes inmuebles y se ha utilizado el medio del dictamen pericial.

53. La Resolución del TEARA de 25 de febrero de 2004 señala que la jurisprudencia «impone no solo la motivación del acuerdo aprobatorio del expediente de comprobación de valores, sino que impone a modo de cautela unas condiciones mínimas a las valoraciones administrativas para que puedan producir efectos jurídicos. Entre estas condiciones destacan la objetividad e individualización».

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTA *DE LEGE FERENDA*

Las extensas lagunas y las profundas deficiencias que presenta el régimen legal de las SAT, generadoras de importantes problemas de seguridad jurídica y de amplios márgenes para la autonomía estatutaria, ha determinado que su utilización, a veces, obedezca a veces más al deseo de obtener las ventajas y beneficios asociados a ésta que a su ideoneidad como modelo de organización de actividades ligadas al sector agrario. Por ello, cierto sector doctrinal ha calificado su naturaleza como mercantil, cuando tal calificación tenga su objeto social, como podría ocurrir en el caso de transformación de productos.

La remisión a los criterios contenidos en las leyes fiscales sobre comprobación de valores, que el RD de 1981 establece como mecanismo para evitar la sobrevaloración de las aportaciones no dinerarias a las SAT, constituye una fórmula atípica en el derecho societario, que induce a confusión e inseguridad jurídica, carece del rigor que exige una adecuada técnica de redacción normativa, provoca múltiples problemas y resulta inoperante, en la práctica, por los siguientes motivos:

1. No se regulan de manera precisa las consecuencias jurídicas de un eventual incumplimiento del precepto. Es más, no se especifican cuáles son los sujetos u órganos responsables, las personas que pueden instar la acción de responsabilidad, ni el procedimiento a seguir.

2. Se utiliza incorrectamente el concepto "criterio", puesto que la normativa tributaria contiene "medios y métodos" de comprobación, no "criterios". Éstos se recogen en los preceptos que regulan la base imponible de los diferentes tributos.

3. Cuando la SAT haya limitado estatutariamente la responsabilidad de los socios, el propio art. 25 de la LITPyAJD dispone que la valoración de las aportaciones no dinerarias se hará conforme al importe nominal. Por tanto, sólo tendrá sentido acudir al procedimiento de comprobación de valores, para determinar el valor real de los bienes y derechos aportados, en los escasos supuestos en los que no se haya establecido dicha limitación de responsabilidad.

4. No se concreta a cuál de los parámetros contenidos en la normativa tributaria y contable hay que remitirse: ¿al "valor real", al "precio razonable" o al "valor de mercado"?, constituyendo en todo caso conceptos jurídicos indeterminados.

5. La propia normativa tributaria que regula la comprobación de valores en el ITPyAJD establece expresamente la prevalencia del valor declarado sobre el comprobado cuando aquél sea superior. No obstante, nosotros defendemos la aplicación de la LGT, que se decanta por el valor comprobado, aunque sea inferior.

6. Los sujetos responsables de velar por el principio de correspondencia efectiva en la SAT carecerán del instrumento necesario para hacerlo cumplir puesto que la Administración tributaria no iniciará expedientes de comprobación de valores, al estar exentos del ITPyAJD los actos de constitución y de ampliación de capital y, al tratarse, en todo caso, de operaciones vinculadas inferiores a 100.000 euros, no existirá documentación alguna que fundamente la valoración realizada.

7. La variedad de medios, la libertad de elección, así como las opciones y las garantías que la normativa tributaria sobre comprobación de valores ofrecen a los sujetos responsables de una posible sobrevaloración de aportaciones no dinerarias, harán muy difícil que la iniciación de una acción de responsabilidad culmine con éxito.

8. Un último aspecto que puede complicar aún más el procedimiento de valoración analizado es el hecho de que la actividad de los sujetos responsables de determinar una posible sobrevaloración deban respetar los requisitos que la normativa y la jurisprudencia exigen a una comprobación de valor tributaria: motivación, objetividad, individualización, competencia del perito y coetaneidad.

Ante esta situación, proponemos, *de lege ferenda*¸ la modificación del RD de 1981, de manera que se sustituya por una regulación acorde con la normativa mercantil, con las pertinentes adaptaciones o incluir la sencilla fórmula de que tales aportaciones no podrán superar el valor de mercado[54], estableciéndose, además, como sujetos responsables a los socios fundadores o existentes en el momento del aumento de capital, a la Junta Rectora y al Presidente, además de la Comisión liquidadora, en su caso. Mientras tal reforma se produce, se podría contemplar una fórmula de valoración y responsabilidad en los propios estatutos de la SAT, cumpliendo los vidriosos límites del art. 8.4 del RD.

54. BARBERENA BELZUNCE, I.: *Sociedades Cooperativas, Anónimas Laborales y Agrarias de Transformación, op. cit.,* p. 313.

BIBLIOGRAFÍA

BARBA DE VEGA, J.: "Aportaciones sociales", *La Sociedad de Responsabilidad Limitada,* (coord. Bércovitz Rodríguez-Cano, A.), Thomson-Aranzadi, 2006, p. 188.

BARBERENA BELZUNCE, I.: *Sociedades Cooperativas, Anónimas Laborales y Agrarias de Transformación. Régimen Fiscal.* Aranzadi, Pamplona, 1992, pp. 312 y 313.

BELTRÁN SÁNCHEZ, E.: "La agricultura de grupo: las sociedades agrarias de transformación", en ORDUÑA MORENO, J.F. (Dir.), *El derecho agrario. Su marco jurídico y económico,* Valencia, 1997, p. 81.

CAAMAÑO ANIDO, M.A.: *Régimen fiscal de las donaciones,* IEF-Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 173.

CABALLERO GONZÁLEZ, J.M.: "El objeto de las Sociedades Agrarias de Transformación", *La Ley,* 1983-2, p. 1214.

CERVERA TORREJÓN, F. y MAGRANER MORENO, F.J.: *La comprobación de valores: causas de impugnación,* Tecnos, Madrid, 1994, p. 12.

CORRAL DUEÑAS, F.: «Sociedad Agraria de Transformación: Su regulación vigente», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,* n.º 611, 1992, pp. 440 y 441.

CUENCA ANAYA, F.: «Sociedades Agrarias de Transformación: Constitución, Representación y Régimen Fiscal», *Revista de Derecho Notarial,* 1983, pp. 375 y 376.

LÓPEZ DE MEDRANO, F.: «Notas críticas al Estatuto jurídico Privado de las Sociedades Agrarias de Transformación», *RGD,* Septiembre, 1991, pp. 7601-7602 y 7621.

LUCAS FERNÁNDEZ: *Relaciones Asociativas no Societarias en la Agricultura Española,* Sucesores de Nogués, Murcia, 1966, pp. 78 y ss.

LUQUE MATEO, M.A.: *Régimen fiscal de la Sociedad Agraria de Transformación,* Universidad de Almería – Instituto de Estudios Almerienses, 1999, pp. 15-65.

MALVÁREZ PASCUAL, L.A.: «Los límites a la facultad de dictar actos de comprobación de valores de forma reiterada», *Estudios Financieros,* n.º 216, 2001, pp. 38-39.

MARÍN MARTÍNEZ, J.: «Valoraciones de inmuebles en Derecho Tributario», *Revista de Hacienda Autonómica y Local,* n.º 62, 1991, pp. 234 y 235.

MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: *Manual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,* 4ª. ed., Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 154 y ss.

MORILLAS JARILLO, Mª J. y FELIÚ REY, M.I.: *Curso de Cooperativas,* Tecnos, Madrid, 2ª ed., 374-377.

OÑATE DE PEDRO, F. y BASANTA DEL MORAL, I.: *Cooperativas del Campo y Grupos Sindicales de Colonización,* Marcial Pons, Madrid, 1971, pp. 1-238.

PAZ CANALEJO, N.: «El nuevo Estatuto Reglamentario de las S.A.T. y la reforma de la legislación cooperativa», *Agricultura y Sociedad,* n.º 23, 1982, p. 85.

PEÑUELAS I REIXACH, LL.: *Valor de mercado y obras de arte,* Marcial Pons, 2005, pp. 33-65.

PERIS GARCÍA, P.: *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente,* Cívitas, Madrid, 1996, p. 55.

PLAZA VÁZQUEZ, A.L.: *El «valor Real» Tributario,* Aranzadi, Navarra, 2000, pp. 81-85, 143, 174-175, 444-445.

POVEDA BLANCO, F.: «La comprobación de valor de los bienes inmuebles transmitidos. Un problema en vías de solución», *Palau 14,* n.º 22, 1994, p. 56.

PUJOL PAMIES, A.: "Implicaciones mercantiles de las operaciones vinculadas", *Fiscalidad de los precios de transferencia (operaciones vinculadas),* (dir. CORDÓN EZQUERRO, T.), CEF, 2010, pp. 847-883.

ROSELLO ESTEBAN, P.: "Las Sociedades Agrarias de Transformación: Orígenes y Evolución", I Congreso Nacional de Sociedades Agrarias de Transformación, Lérida, 9 y 10 Mayo 1985, Barcelona, 1.985, pág. 14.

SALINAS RAMOS, F.: *Manual Práctico de Cooperativismo,* Zero, Madrid, 1984, p. 16.

VARGAS VASSEROT, C. y AGUILAR RUBIO, M.: "Régimen económico y fiscal de las cooperativas agrarias y de las SAT", en *Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación* (dir. PULGAR EZQUERRA, J.), Dikinson, S.L., Madrid, 2006, p. 163 y 195.

VARONA ALABERT, J.E.: «Artículo 10. Bienes inmuebles», en *Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio,* VV.AA., Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 1562.

VICENT CHULIÁ, F: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil,* Tomo I, vol. 2º, Bosch, Barcelona 1.992, pág. 1011.

VV.AA.: *Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercantiles,* t. III, (dir. URIA, MENÉNDEZ y OLIVENCIA), Civitas, Madrid, 1993, pp. 73 y 74.

RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL ANTE LA REALIDAD DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA[1]

Rosalía Alfonso Sánchez*
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia
Directora de la Cátedra de Economía Social

RESUMEN

Desde la aplicación del Reglamento sobre la Sociedad Cooperativa Europea (RSCE) no todos los Estados han dictado las normas para su implementación, lo que no ha impedido el establecimiento de Sociedades Cooperativas Europeas (SCEs) en sus territorios ni la existencia de SCEs integradas por socios de dichos Estados.
España, hasta el momento, sólo ha dictado la norma que incorpora las Directivas que completan el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) y el de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Ley 31/2006, de 18 octubre). No obstante, el "Balance del Programa de Fomento de la Economía Social 2008-2009" proponía la elaboración de un anteproyecto de ley sobre la SCE con domicilio en España[2], y se encuentra ya en el Congreso un

---

* Experta española participante en el *Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE).* Contract No SI2.ACPROCE029211200 of 8 October 2009. Cooperatives Europe-Euricse-Ekai.

1. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación *"La Responsabilidad Social de la Empresa desde la perspectiva del Derecho Mercantil",* 08734/PPC/08, financiado por la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010.

2. Balance elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Cfr. apartado 5).F, p.2 del Informe. Han sido cuatro las versiones de Anteproyecto elaboradas: 11-11-2009; 09-03-2009; 22-04-2010; 17-06-2010.

Proyecto de Ley al respecto (PLSCE)[3]. Desde una perspectiva práctica, hasta hace poco sólo se tenía noticia de la participación de alguna cooperativa española en SCEs domiciliadas en otro Estado de la Unión Europea; pero en diciembre de 2009 aparece en el Registro Mercantil una SCE domiciliada en España.
Las circunstancias descritas exigen un análisis de la proyectada regulación de la SCE domiciliada en nuestro Estado.

PALABRAS CLAVE: Sociedad Cooperativa Europea, Registro, Domicilio, Ley de Cooperativas aplicable

CLAVES ECONLIT: P130 – K220 – K290

THE SPANISH LEGAL SYSTEM'S RESPONSE TO THE EUROPEAN COOPERATIVE SOCIETY

ABSTRACT

Not all of the EU Member States have implemented national rules passing on the Council Regulation on the European Cooperative Society (SCE). Nevertheless, that fact has not prevented the formation of SCE´s whose registered offices are located within their very territories nor the existence of SCEs consisting of members from those same states either.
So far, Spain has been the only Member State providing itself with rules which add to our national legal system the EU Directives which oversee the involvement of employees at both SCE´s and SE´s having their registered offices in Spain (Law 31/2006, passed on October 18th). But the "Balance of the Program for the Promotion of Social Economy 2008-2009" suggested a preliminary draft for the SCE registered in Spain, much before the current Draft bill (PLSCE). From a practical point of view, it is only recently that it has been heard about Spanish cooperatives taking part in SCE´s registered in some other state. But in December 2009, a Spain-based SCE appeared in the Spanish Commercial Registrar.
All the cited circumstances demand an approach for the projected SCE registered in Spain regulation.

KEY WORDS: European Cooperative Society, Register, Registered Office, Applicable cooperative law

ECONLIT DESCRIPTORS: P130 – K220 – K290

3. Proyecto de ley sobre la SCE con domicilio en España. Núm. Reg.: 130261 Fecha: 02/07/2010 Entrada en Comisión: 20/07/2010. BOCG: Serie A Núm. 83-1 de 23 de julio de 2010. Tramitación: Competencia Legislativa Plena.

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN. II. 2003-2010: SIETE AÑOS DE RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE UNA LEY SOBRE LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA DOMICILIADA EN ESPAÑA. 1. Recordatorio: Situación de la legislación cooperativa en España. 2. El régimen jurídico previsto para la SCE por el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003. 3. [Posibles] razones para el retraso en la promulgación de una norma sobre la SCE domiciliada en España. 4. La demora en la implementación del RSCE y el plazo para la revisión del RSCE. III. APROXIMACIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE LA SCE DOMICILIADA EN ESPAÑA. 1. Estructura del Proyecto de Ley sobre la SCE domiciliada en España. 2. Grado de cumplimiento por parte del Proyecto de las previsiones del RSCE con respecto a su implementación en nuestro Estado. IV. ACTITUD DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS ESPAÑOLES ANTE LA SCE.1. Participación de entidades españolas en SCEs domiciliadas en otro Estado miembro. 2. Existencia de SCE domiciliadas en España. BIBLIOGRAFÍA. ANEXO. Proyecto de Ley por la que se regula la SCE con domicilio en España

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro Ordenamiento se ha impuesto la concepción según la cual el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo de 22 de julio, sobre la SCE, ha de ser implementado, en ciertos y concretos aspectos, a través de una Ley específica dictada por el Estado. Así lo evidencia el PLSCE que en su DFPrimera ampara la competencia estatal para dictar la norma en el art. 149.1.6º CE, esto es, en la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil[4].

Con carácter previo, la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (que complementa el régimen comunitario de la SCE haciendo de dicho régimen un todo), fue incorporada a nuestro Ordenamiento a través de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

Esta norma se vio modificada por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), que incluyó un Título IV sobre disposiciones aplicables a las fusiones transfronterizas intracomunitarias

4. La disposición final única del borrador de anteproyecto amparaba la competencia estatal a estos efectos de forma vaga en el art. 149.3 CE.

de sociedades de capital, con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de incorporación del art. 16 de la Directiva 2005/56/CE, en una materia tan importante y técnicamente compleja como la de la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de una fusión transfronteriza (DFTercera).

En cualquier caso, la demora en la promulgación de la Ley que haga posible –en principio- la domiciliación de SCEs en España, parece haber obedecido no sólo a razones de índole jurídica sino también –y casi fundamentalmente- de carácter político. En el presente trabajo se ofrece una perspectiva general sobre cuáles puedan haber sido las razones técnico-jurídicas motivadoras del retraso a la vez que se da cuenta del régimen proyectado para esta figura societaria de alcance supranacional.

II. 2003-2010: SIETE AÑOS DE RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE UNA LEY SOBRE LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA DOMICILIADA EN ESPAÑA

1. RECORDATORIO: SITUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA EN ESPAÑA

La evolución de las normas en materia de sociedades cooperativas en España se ha visto condicionada por la Constitución. En concreto, por el artículo 129.2 CE, con el mandato a los poderes públicos de fomento de las sociedades cooperativas *mediante una legislación adecuada,* y por los artículos 148 y 149 CE, con la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Nuestra realidad constitucional permitió que cinco Comunidades Autónomas asumieran en sus Estatutos la competencia exclusiva en materia de cooperativas [País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia y Navarra] y dictaran sus propias leyes. Otras Comunidades asumieron competencias de desarrollo y ejecución [Galicia e Islas Baleares], o tan sólo de ejecución [Canarias]; y no faltaron Comunidades que previeran la posibilidad de ampliar sus competencias en esta materia [así, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León]. Muy pocas Comunidades carecían, por tanto, en la década de los ochenta, de algún tipo de competencia en materia de cooperativas o de la posibilidad de obtenerla [Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia].

En 1987 se dicta la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas (LGC), Ley estatal que deroga la Ley 52/1974, de 19 de diciembre, General de Cooperativas y su Reglamento (RD 2710/1978, de 16 de noviembre). Esa nueva Ley tiene en cuenta la situación competencial descrita para concretar su ámbito de aplicación: a) en primer lugar, las cooperativas con domicilio social y ámbito de actuación circunscritos al de una Comunidad Autónoma sin competencia exclusiva; en b) segundo lugar, las de domicilio y ámbito en Comunidades Autónomas que, aún con compe-

tencia exclusiva, no hubieran dictado su propia regulación; y, c) en tercer lugar, las cooperativas cuyo ámbito exceda del de una Comunidad Autónoma cualquiera que sea su domicilio social. Además, declara el carácter básico de algunos de sus preceptos para las cooperativas pertenecientes al ámbito de aquellas Comunidades con competencia de desarrollo legislativo.

En la década de los noventa el Estado transfirió a todas las Comunidades la materia cooperativa *"respetando la legislación mercantil"* (Leyes Orgánicas 9/1992, de 23 de diciembre, y 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias -así como Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre-), por lo que, en la actualidad todas las Comunidades han asumido competencia exclusiva en materia de cooperativas, (salvo, lógicamente, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Esta decisión ha provocando la existencia de, hasta el momento, 15 leyes autonómicas de cooperativas –sólo faltan por legislar Canarias y Cantabria- sin razón objetiva que justifique una diversa regulación de la sociedad cooperativa en cada Comunidad Autónoma[5].

La situación descrita fue restringiendo el ámbito inicial de aplicación de la LGC, lo que unido a la intención de dotar de un régimen legal más flexible a la sociedad cooperativa, motivó en 1999 la promulgación de la Ley 27/1999, de 16 de noviembre, –Estatal- de Cooperativas (LCoop), aplicable tan sólo a las cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en más de una Comunidad Autónoma pero en ninguna con carácter principal, así como a las cooperativas de Ceuta y Melilla (art. 2 LCoop).

2. EL RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO PARA LA SCE POR EL REGLAMENTO (CE) NÚM. 1435/2003 DEL CONSEJO, DE 22 DE JULIO DE 2003

A) Las normas expresamente previstas por el RSCE

El Estatuto se ocupa expresamente de regular las vías de acceso a la figura, de establecer las reglas de constitución –pese a las constantes referencias a la legislación del Estado del domicilio-, del régimen para el traslado del domicilio, de la estructura orgánica [en cuanto al órgano/s de administración (sistema monista o dualista) y la Asamblea General -no obstante las remisiones a la legislación interna-], de

5. Incluso con respecto a la organización, régimen y funcionamiento interno de las instituciones de crédito cooperativo, público y territorial, algunas Comunidades Autónomas asumieron competencias de diversa naturaleza. La regulación autonómica del crédito cooperativo no ha sido una cuestión pacífica sino objeto de varios recursos ante el Tribunal Constitucional por la fricción de aquél sector con la competencia estatal sobre las bases de la ordenación del crédito *ex* art. 149.1.11ª CE. No hay que olvidar, tampoco, que a esta "profusión" legislativa territorial se une la existencia de normas sectoriales propias en materia de régimen fiscal, crédito, seguro, transporte o vivienda, así como de ciertas peculiaridades de la legislación cooperativa sin parangón en el Derecho de Sociedades.

algunos aspectos del régimen económico y financiero y, lógicamente, de lo relacionado con la implicación de los trabajadores de la SCE dispuesto por la Directiva 2003/72/CE. Así, en todos estos supuestos se aplicarán las disposiciones del propio RSCE (y, en su caso, las reglas estatutarias de la concreta SCE cuando el RSCE así lo autorice expresamente), descartándose la aplicación de las normas nacionales sobre cooperativas. El RSCE deja claro, además que las normas dictadas por los Estados miembros para las SCEs que se domicilien en su territorio no pueden entrar a regular aspectos específicamente previstos en el RSCE en contradicción con sus preceptos.

B) La legislación nacional

a) El RSCE contiene constantes remisiones a la legislación del Estado del domicilio, ya sea en materia de cooperativas, de sociedades anónimas, o ya se trate de normas que incorporen una determinada Directiva, o que específicamente se dicten para las SCEs que se domicilien en él.

Dado que el régimen jurídico de la sociedad cooperativa no ha sido objeto de armonización en Europa (como sí lo ha sido, por el contrario, el de las sociedades de capital) las diferencias que esas remisiones provocan entre Ordenamientos son notables. Obsérvese que si ya las "llamadas" o los "reenvios" del RSCE a la legislación sobre sociedades anónimas del Estado del domicilio de la SCE para aspectos concretos de su regulación -o a la legislación que incorpore determinada Directiva- pueden dar lugar a diferencias sustanciales de unos Ordenamientos a otros, las remisiones del RSCE a la legislación cooperativa provocarán diferencias aún más notables.

b) El art. 78 RSCE, por su parte, impone a los Estados dos obligaciones. Una de ellas, la "designación de las autoridades competentes" que han de intervenir en los casos de traslado del domicilio de la SCE (art. 7 RSCE) o de constitución de la SCE mediante fusión (arts. 21, 29 y 30 RSCE), o con facultad para convocar, en su caso, la Asamblea general (art. 54 RSCE) o de solicitar la disolución de la SCE en ciertos supuestos (art.73 RSCE). La otra, la adopción de "todas las disposiciones adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento".

A este último respecto, en el ámbito de la SE, el legislador español dictó la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España (LSAEu)[6]. Dicha ley introducía un nuevo Capítulo en la (ahora derogada)

6. La Ley 19/2005, de 14 de noviembre tiene por objeto, por un lado, cumplir con el específico mandato del art. 68 RSE –el equivalente al art. 78 RSCE-, en cuanto a que los Estados adopten todas aquellas *disposiciones que sean precisas para garantizar la efectividad de las normas de aplicación directa que en él se contienen* (apartado I, E. de M.); y, por otro, ofrecer aquellas *precisiones indispensables* que exige el Reglamento *para la plena operatividad de la normativa,* incorporando, además, los *mecanismos de tutela de los intereses particulares* de socios y acreedores y los mecanismos de tutela *y de interés público* que se han juzgado más adecuados en la fase actual de la progresiva construcción de la Unión Europea (apartado II.3, E. de M.).

Ley de Sociedades Anónimas (Capítulo XII "De la sociedad anónima europea") que, en sus tres Secciones (disposiciones generales, constitución y órganos sociales), integraba los art. 312 a 338; autorizando al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución y cumplimiento de la Ley 19/2005 (DFCuarta), y para proceder a realizar las modificaciones necesarias para adecuar el Reglamento del Registro Mercantil a su contenido (DASegunda). Estas modificaciones se recogieron en el RD 659/2007, de 25 de mayo. En la actualidad, esta materia se contiene en el Título XIII, arts. 455 a 494 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSSC).

Por lo que se refiere a la SCE, se ha rechazado la posibilidad de incluir en la Ley 27/1999, de Cooperativas –estatal- un Capítulo específico dedicado a la Sociedad Cooperativa Europea[7] y se ha optado por elaborar un texto autónomo e independiente. Así lo evidencia la tramitación parlamentaria del PLSCE.

c) El RSCE también considera supletorias las normas que dicten los Estados en aplicación de medidas específicas dictadas por la Unión Europea. Respecto de cuáles puedan ser dichas medidas, quizá se trate de Directivas para armonizar la materia cooperativa; o puede que tal previsión se refiera a la aplicabilidad de la Directiva sobre el cometido de los trabajadores en la SCE; y también podría tener que ver con las normas internacionales de contabilidad. Cualquiera de las hipótesis es admisible, pero se carece de datos que permitan concretar dichas medidas.

3. [POSIBLES] RAZONES PARA EL RETRASO EN LA PROMULGACIÓN DE UNA NORMA SOBRE LA SCE DOMICILIADA EN ESPAÑA

A) El problema de la Ley de cooperativas aplicable a una Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España

El RSCE otorga un papel determinante al criterio de la sede real de la sociedad, entendido como el lugar donde esté situada la administración central de la SCE. Su función es, básicamente, determinar el derecho subsidiario aplicable a una SCE constituida según el RSCE, al margen de concretar el Registro competente para su inscripción (art. 11.1 RSCE).

Ese papel determinante se advierte en diversos preceptos del RSCE, como por ejemplo el art. 6 RSCE, que dispone que el domicilio social de la SCE deberá estar situado, dentro de la Comunidad, en el lugar en el que se encuentre su administración central, pudiendo el Estado miembro imponer la obligación de situar la administración central y el domicilio social en el mismo lugar; el 8 RSCE, que somete a la SCE a la ley aplicable a las cooperativas constituidas conforme a la legislación

7. En la medida que sea posible la existencia de SCE a las que les resulte de aplicación la Ley estatal de cooperativas, será preciso que el Estado dicte las normas oportunas para la aplicabilidad del RSCE.

del Estado en el que la SCE tiene su domicilio; el art. 9 RSCE, relativo al principio de igualdad de trato con las cooperativas del Estado del domicilio; o el C. 14 RSCE, que sanciona el principio de la sede efectiva.

No obstante, algún precepto se aparta de dicho criterio, como el art. 7.16 RSCE, que para el caso de traslado del domicilio de una SCE a otro Estado miembro, y por lo que se refiere a reclamaciones suscitadas con anterioridad al mismo, declara que la SCE queda sujeta a la ley del Estado de origen, aún cuando la interposición de la demanda sea posterior al traslado.

En cualquier caso, y con carácter general, el criterio del domicilio social de la SCE va a determinar el Derecho nacional aplicable, como también determina la ley aplicable a la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) o a la Sociedad Europea (SE), respectivamente.

En nuestro Ordenamiento, esta circunstancia no ha provocado dificultad alguna a la hora de aplicar el RAEIE ni el RSE, pero la cuestión no es tan sencilla en lo que se refiere a la SCE, básicamente por la existencia de dos poderes legislativos con competencia en materia de sociedades cooperativas, el estatal y el autonómico.

Si para seleccionar la ley –nacional- aplicable atendemos al *criterio del domicilio* que impone el RSCE, resultará que a una SCE con domicilio en cualquiera de las Comunidades Autónomas, se le aplicaría la Ley de Cooperativas de dicha Comunidad (si tiene ley propia, y de no ser así, la LCoop), con independencia de cualquier otra circunstancia (por ejemplo, dónde realice principalmente la actividad cooperativizada). Pero si atendemos al *criterio* de determinación de la ley de cooperativas aplicable que impera en nuestro Ordenamiento –lugar en el que se realice *principalmente la actividad cooperativizada*-, una cooperativa domiciliada en el mismo lugar que la SCE del ejemplo anterior pudiera no quedar sometida a la misma ley reguladora.

Podrán producirse, así, situaciones internas carentes de lógica, como cooperativas *nacionales* con actividad cooperativizada en más de una Comunidad Autónoma pero en ninguna con carácter principal, sometidas a la Ley estatal de cooperativas (art. 2.a) LCoop), y SCE (*transnacionales)* sometidas a la ley autonómica del domicilio. Situaciones que irían en contra del principio de no discriminación.

El PLSCE parece zanjar el conflicto planteado optando por la primera de las soluciones, de manera que "la sociedad cooperativa europea (…) se regirá por lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003, por las disposiciones de esta Ley *y por la Ley de Cooperativas aplicable en función del lugar donde realice principalmente la actividad cooperativizada* en los aspectos no regulados por el citado Reglamento, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas" (art. 1.2).

B) El problema de la ordenación territorial y la competencia (Estatal o Autonómica) para dictar normas en desarrollo de previsiones del RSCE o en aplicación de medidas específicas dictadas por la UE para la SCE

Como es sabido, cuando una norma comunitaria (por ejemplo un Reglamento) permite ser desarrollada, el reparto interno de las competencias entre las Instituciones centrales del Estado y las Comunidades Autónomas no puede verse modificado; esto es, las Comunidades Autónomas pueden desarrollar legislativa y reglamentariamente el Derecho comunitario, ajustándose directamente a lo exigido o permitido por la norma comunitaria, si la materia necesitada de desarrollo les corresponde según sus respectivos Estatutos de Autonomía. En consecuencia, las Comunidades Autónomas están facultadas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden a la aplicación del RSCE, siempre y cuando las materias en que así se requiera conciernan al ámbito competencial sustantivo de aquéllas. Todo ello con independencia de la obligación constitucional del Estado de controlar el cumplimiento del Derecho comunitario (art. 93 CE).

Habría que estar, entonces, al concreto aspecto del RSCE precisado de desarrollo, ejecución o aplicación para determinar si es el Estado o las Comunidades Autónomas quien/es ostente/n ostenten la competencia.

Así, por ejemplo, la facultad que el RSCE otorga a los Estados miembros para prever modificaciones de las disposiciones nacionales de desarrollo de las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE a fin de reflejar las peculiaridades de las cooperativas (art. 68.1 RSCE), correspondería al Estado y no a las Comunidades Autónomas, habida cuenta la competencia en materia de contabilidad; o la facultad de adaptar el Reglamento del Registro mercantil a la obligatoria inscripción de la SCE. Por el contrario, el establecimiento de un número máximo, mínimo o ambos de miembros del órgano de dirección (art. 37.4 RSCE), sería competencia de las Comunidades Autónomas por ser legislación cooperativa -aunque también del Estado para las cooperativas enmarcables en las exigencias del art. 2 LCoop-.

No obstante, el problema no es sólo determinar las materias de competencia estatal y las de ámbito autonómico (lo que no es una cuestión baladí), sino que va más allá pues, una vez concretado (por ejemplo) que se trata de una competencia autonómica, habrá que intentar que la regulación que emane de las diferentes Comunidades sea, en la medida de lo posible, homogénea. La dificultad radica en determinar los medios a través de los cuales poder alcanzar esa homogeneidad, lo que requiere, como premisa básica, la existencia de una voluntad convergente.

Como hemos tenido ocasión de indicar en otros lugares, las alternativas en orden a superar las circunstancias descritas son varias. Por una parte, en la medida en que la aplicación del RSCE por las Comunidades Autónomas puede llevar a resultados dispares en cuanto al régimen de derechos y obligaciones dimanantes del mismo[8], la solución podía venir por la vía de una ley de armonización de apreciarse

8. Al igual que es dispar el régimen jurídico contenido en las diversas leyes de cooperativas autonómicas, y ello pese a la eficacia armonizadora de los principios cooperativos en nuestro Ordenamiento.

discriminaciones graves en el patrimonio jurídico de los particulares (art. 150.3 CE). Por otra parte, era también posible recurrir, en busca de una imprescindible coordinación, al instituto de las Conferencias Sectoriales[9], órganos de cooperación en aquellas materias en las que existe interrelación competencial, con funciones de coordinación o cooperación, según los casos[10]. La lectura de la Exposición de Motivos del PLSCE pone de manifiesto la utilización de esta posibilidad, pero sólo en cuanto la adopción de una posición común en cuanto al contenido del Proyecto de Ley estatal[11].

Las cuestiones que regula el PLSCE son mínimas en atención al bloque de reglas que habría que dictar para completar el régimen jurídico aplicable a la SCE según el propio RSCE. La simple comparación entre el contenido del texto del Proyecto con el propio de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España (LSAEu), evidencia la afirmación realizada. En este sentido, la alusión al título competencial habilitante para la promulgación de la norma que realiza la DFPrimera PLSCE, esto es, la exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6º CE), aunque calificable como sumamente valiente e importante, es, en cualquier caso, insuficiente, puesto que dicha competencia habría permitido al Estado dictar una completa Ley sobre la SCE domiciliada en España y no es ese, precisamente, el resultado que ofrece el Proyecto[12]. Las lagunas que éste deja sin colmar vuelven a crear el marco de inseguridad jurídica que se ha expuesto *supra;* o dicho de manera gráfica: "la pelota vuelve a estar en el tejado de las Comunidades Autónomas"[13].

---

9. Previsto en el art. 5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Estas conferencias se integran por miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

10. La doctrina señala que las Conferencias Sectoriales están llamadas a desempeñar un doble cometido: a) asegurar la necesaria coherencia de la actuación de los poderes públicos y la imprescindible coordinación, y, b) intercambiar puntos de vista y examinar en común los problemas de cada sector y las acciones proyectadas para afrontarlas y resolverlas. Incluso pueden acordar la realización de un plan o programa conjunto de los previstos en el art. 7 de la Ley 30/1992.

11. Según la E. de M., "en todo el proceso de elaboración de la norma se ha consultado a los Ministerios con competencia en relación con esta materia y a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales".

12. Así lo evidencia la enmienda nº 1 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la DFPrimera, que propone la siguiente redacción: "Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación mercantil, *sin perjuicio de las competencias en materia de cooperativas de las Comunidades Autónomas*". La enmienda se justifica por coherencia con el artículo 124 del Estatuto de Catalunya, que atribuye la competencia exclusiva en materia de cooperativas.

13. La E. de M. del Proyecto, por el contrario, considera que la *"Ley supone cumplir un mandato comunitario y cerrar definitivamente el bloque legal de regulación de la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España".*

4. LA DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL RSCE Y EL PLAZO PARA LA REVISIÓN DEL RSCE

El art. 79 RSCE impone a la Comisión la obligación de presentar al Consejo y al Parlamento Europeo un Informe sobre la aplicación del Reglamento, sobre las posibles propuestas de modificación y, en particular, sobre la conveniencia de incorporar ciertas previsiones ya tenidas en cuenta por el propio Reglamento en orden a una posible revisión de éste[14].

Para tal fin, la Comunidad Europea contrató la realización de un estudio sobre la implementación del RSCE en todos los estados miembros y en los países del EEA (Noruega, Islandia y Liechtenstein); estudio que ha sido publicado recientemente por las instancias comunitarias.

Puede darse, entonces, la circunstancia de que el RSCE sea modificado sin que en España se hallan podido detectar los problemas derivados de su aplicación práctica por la inexistencia de normas específicas al respecto. Por inminente que fuera la entrada en vigor de la regulación proyectada ya habría llegado tarde, pudiendo incluso haber quedado la nueva regulación obsoleta desde su vigencia.

III. APROXIMACIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE LA SCE DOMICILIADA EN ESPAÑA

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA SCE DOMICILIADA EN ESPAÑA

El PLSCE no es muy extenso. Se estructura en cuatro capítulos y cuenta con veinte artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales.

El Capítulo I ("Disposiciones generales") se divide en cinco artículos que contienen las reglas sobre el régimen jurídico aplicable a la SCE domiciliada en España, sobre la regularización de la que deje de tener su administración central en nuestro territorio, la inscripción y publicación de los actos relativos a la SCE, el traslado de su domicilio a otro Estado miembro (derecho de separación, posible oposición de acreedores y certificación del registrador) y oposición a ese traslado por razones de interés público.

Los cinco artículos que integran el Capítulo II ("Constitución por Fusión y Transformación") se ocupan de establecer la autoridad competente para la designación de expertos independientes (el registrador mercantil), el derecho de sepa-

14. Obligación que ha de cumplir también la Comisión en sede de SE (art. 69 RSE), difiriendo solamente en las materias objeto de posible incorporación al RSE. La Comisión disponía para ello de cinco años desde la entrada en vigor del RSCE; plazo que acabó el 21 de agosto de 2008 (crf., arts. 79 y 80).

ración de los socios, la competencia y colaboración entre el Registro de Cooperativas y el Registro Mercantil con respecto a la certificación de inexistencia de obstáculos para la formación por fusión así como para la inscripción de la fusión, y el caso de la transformación de una cooperativa española en SCE.

El Capítulo III se ocupa de los aspectos relativos a los órganos de la SCE, estableciendo el régimen aplicable a la administración de la sociedad, permitiendo a los estatutos optar entre el sistema de administración monista o dual (art. 11), y concretando los extremos del sistema monista (art. 13) y del dual (arts. 14 a 18). El art. 12 se reserva para concretar el régimen de responsabilidad de los miembros de los órganos de administración.

Por ultimo, el art. 20 del Capítulo IV asigna al Juez de lo Mercantil del domicilio de la SCE la competencia para declarar la disolución de la sociedad en ciertos supuestos.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROYECTO DE LAS PREVISIONES DEL RSCE CON RESPECTO A SU IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRO ESTADO

A) Llamadas del RSCE a las leyes aplicables a las sociedades cooperativas

En diversas ocasiones el RSCE realiza una llamada a la ley aplicable a las sociedades cooperativas del Estado miembro en el que se domicilie la SCE para regular ciertos aspectos de la SCE. En el caso de España, hay supuestos en los que ni la legislación estatal ni la autonómica de cooperativas contienen previsiones al respecto, por lo que el PLSCE se ocupa de algunas de ellas. Así:

a) En cuanto a las "formas previstas por el Estado Miembro para la publicidad de la propuesta de traslado del domicilio social" (art. 7.2 RSCE), el PLSCE dispone en su art. 3.3 que *"los actos y datos de una SCE con domicilio en España deberán hacerse públicos en los casos y forma previstos en las disposiciones generales aplicables a las sociedades anónimas"*.

b) Por lo que se refiere a la "posibilidad de elaborar un informe único de expertos independientes para todas las cooperativas que se fusionan cuando las legislaciones a que estén sujetas dichas cooperativas lo permitan" (art. 26.2 RSCE), el art. 6 del PLSCE establece que *"(…) el registrador mercantil será la autoridad competente para, previa petición conjunta de las sociedades que se fusionan, designar uno o varios expertos independientes (...)*[15].

15. "(Q)*ue elaboren el informe único (...)",* rezaba la redacción dada a este art. 6 en el Anteproyecto. Ello permitía entender que, pese a la existencia de varios expertos independientes, se podía elaborar un único informe si las sociedades así lo solicitaban al registrador mercantil. Con la redacción que contiene el art. 6 PLSCE el informe único sólo será posible cuando se solicite por las sociedades, no un único informe, sino un solo experto.

c) Con relación a "las disposiciones aplicables a las cooperativas del Estado miembro donde esté domiciliada la SCE en materia de responsabilidad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control o de administración por el perjuicio sufrido por la SCE por incumplimiento de las obligaciones de aquéllos" (art. 51 RSCE), el PLSCE determina que sean las *disposiciones sobre responsabilidad de los administradores de sociedades anónimas* las aplicables (art. 12).

d) En lo que respecta a la "disolución por resolución judicial o de otra autoridad del Estado miembro del domicilio" (art. 73.1.2º RSCE), el PLSCE atribuye al *Juez de lo mercantil del domicilio social de la SCE la competencia para declarar tal disolución* (art. 20)[16].

B) Alusiones a la legislación que adopten los Estados miembros en aspectos de la SCE no regulados o regulados parcialmente por el RSCE

a) En la mayoría de las ocasiones, el RSCE *faculta* a los Estados miembros para regular ciertos aspectos. El PLSCE ha hecho uso de esta facultad en las siguientes cuestiones:

- Según el RSCE, "los Estados miembros *podrán imponer* a las SCEs registradas en su territorio la obligación de situar la administración y el domicilio en el mismo lugar" (art. 6). La respuesta del PLSCE es que "*la SCE deberá fijar su domicilio en España cuando su administración central se halle dentro del territorio español"* (art. 1.1 *in fine*)[17].

- La legislación de un Estado miembro *podrá establecer* que la autoridad competente pueda oponerse –por razones de interés público- al traslado del domicilio social cuando ello suponga un cambio de legislación aplicable (art. 7.14 RSCE). En nuestro caso el art. 5.1 del PLSCE incorpora esta opción[18], de manera que *"el traslado (…) no surtirá efecto si el Gobierno (...) o el órgano que determine la Comunidad Autónoma*

16. En el Borrador del Anteproyecto, y en éste mismo, se dejaba a la legislación cooperativa aplicable la determinación del órgano competente a los efectos del art. 73.1 RSCE (art. 14).

17. Aspecto también previsto en la LSAEu, que introducía en la LSA el art. 312: *"La sociedad anónima europea deberá fijar su domicilio en España cuando su administración central se halle dentro del territorio español"* (ahora art. 458 LSSC).

18. Aspecto también previsto en la LSAEu, que introducía en la LSA el art. 316.1: *"El traslado de domicilio de una sociedad anónima europea registrada en territorio español que suponga un cambio de la legislación aplicable no surtirá efecto si el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia o de la Comunidad Autónoma donde la sociedad anónima europea tenga su domicilio social, se opone por razones de interés público. Cuando la sociedad anónima europea esté sometida a la supervisión de una autoridad de vigilancia, la oposición podrá formularse también por dicha autoridad".* Art. 316.3 *"El acuerdo de oposición al traslado de domicilio habrá de formularse dentro del plazo de los dos meses siguientes a la publicación del proyecto del traslado de domicilio. El acuerdo podrá recurrirse ante la autoridad judicial competente"* (ahora art. 463.1 y 3 LSSC).

competente en función de la legislación aplicable[19] *se opone por razones de interés público"*[20].

- "Los Estados miembros *podrán adoptar* (…) disposiciones encaminadas a garantizar una protección adecuada a los socios que se hayan pronunciado en contra de la fusión" (art. 28.2 RSCE). La protección elegida por el PLSCE es reconocer un *derecho de separación* a los socios que voten en contra de una fusión que implique la constitución de una SCE domiciliada en otro Estado miembro, y a los de una cooperativa española absorbida por una SCE domiciliada en otro Estado miembro (art. 7)[21].

- "Los Estados miembros cuya legislación no contemple el sistema dual en relación con las cooperativas domiciliadas en su territorio *podrán adoptar* las medidas oportunas con relación con las SCE" (art. 37.5 RSCE). Estas medidas se traducen en el PLSCE en la posibilidad de *concretar en los estatutos el sistema de administración elegido* (monista o dual, art. 11.2[22]), y en la elaboración de concretas normas aplicables al sistema monista (art. 13) y al dual (arts. 14 a 18).

- Establecer un número mínimo, máximo o ambos de miembros del órgano de dirección (art. 37.4 RSCE). En este caso, el PLSCE remite a los estatutos dicha concreción (art. 16.1)[23].

- Fijar el número de miembros o la composición del órgano de control o bien un número mínimo, máximo o ambos (art. 39.4 RSCE), lo que realiza indirectamente el

---

19. El Anteproyecto atribuía esta función directamente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma competente en función de la legislación aplicable.

20. En nuestro Estado esa oposición al traslado podrá formularse, no sólo si el cambio de legislación aplicable viene provocado por un traslado del domicilio a otro Estado, sino, dentro de nuestras fronteras, si el traslado de domicilio provoca el cambio de ley autonómica aplicable.

21. Aspecto también previsto en la LSAEu que introducía en la LSA el art. 320: *"Los accionistas de las sociedades españolas que voten en contra del acuerdo de una fusión que implique la constitución de una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro podrán separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto en el art. 149. Igual derecho tendrán los accionistas de una sociedad española que sea absorbida por una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro"* (ahora art. 468 LSSC).

22. Aspecto también previsto en la LSAEu, que introducía en la LSA el art. 327: *"La sociedad anónima europea que se domicilie en España podrá optar por un sistema de administración monista o dual, y lo hará constar en sus estatutos"* (ahora art. 467 LSSC).

23. Aspecto previsto igualmente en la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 331: *"1. La gestión podrá confiarse, conforme dispongan los estatutos, a un solo director, a varios directores que actúen solidaria o conjuntamente o a un consejo de dirección. Cuando la gestión se confíe conjuntamente a más de dos personas, éstas constituirán el consejo de dirección. El consejo de dirección estará formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete. Los estatutos de la sociedad, cuando no determinen el número concreto, establecerán el número máximo y el mínimo y las reglas para su determinación"* (ahora art. 480 LSSC).

PLSCE remitiendo a las previsiones de funcionamiento del consejo rector en la legislación cooperativa correspondiente (art. 18.1)[24].

- Fijar mínimo y máximo de miembros del órgano de administración (42.2 RSCE), que el PLSCE opta por remitir a la legislación aplicable (art. 13 PLSCE) [25].

- Establecer que el propio órgano de control pueda determinar las operaciones del consejo de dirección sujetas a su autorización previa (art. 48.3 RSCE)[26].

b) En otras ocasiones el RSCE *impone* a los Estados miembros la regulación de ciertos aspectos. El PLSCE ha previsto los siguientes:

- Según el RSCE, el Estado miembro del domicilio social de la SCE *adoptará las medidas necesarias para obligar* a la SCE que deje de tener su administración central en dicho Estado miembro a regularizar su situación (art. 73.2 RSCE) y *para garantizar* que se proceda a liquidar aquellas SCE que no se regularicen (art. 73.3 RSCE). El PLSCE concede el *plazo de un año para que la SCE se regularice* (reestableciendo su administración central en España o trasladando el domicilio al Estado en el que tenga su administración central) y establece la *disolución como medida sancionadora* por la falta de regularización (art. 2)[27].

- El art. 78.2 RSCE señala que *cada Estado miembro designará* las autoridades competentes en el sentido de los artículos 7 (traslado del domicilio), 21 (oposición a la fusión), 29 (control del procedimiento de fusión), 30 (control de la legalidad de la fusión), 54 (convocatoria de asamblea general) y 73 (declarar la disolución).

El PLSCE contiene la *designación de la autoridad que puede dejar sin efecto un traslado de domicilio* (el Gobierno (...) o el órgano que determine la Comunidad

---

24. Aspecto previsto en la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 333.1: *"Será de aplicación al consejo de control lo previsto en esta ley para el funcionamiento del consejo de administración de las sociedades anónimas en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento CE 2157/2001"* (ahora art. 485 LSSC).

25. Así también, aunque más detallada, la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 328: *"En caso de que se opte por un sistema de administración monista, será de aplicación a su órgano de administración lo establecido en la presente Ley para los administradores de las sociedades anónimas, en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento CE 2157/2001, y en la Ley que regule la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas"* (ahora art. 477 LSSC).

26. Así, la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 334: *"El consejo de control podrá acordar que determinadas operaciones de la dirección se sometan a su autorización previa. La falta de autorización previa será inoponible a los terceros, salvo que la sociedad compruebe que el tercero hubiera actuado en fraude o con mala fe en perjuicio de la sociedad"* (ahora art. 489 LSSC).

27. Aspecto también previsto en la LSAEu, que introducía en la LSA el art. 313.2: *"Las sociedades anónimas europeas que se encuentren en el supuesto descrito en el párrafo anterior (deje de tener su administración central en España) que no regularicen la situación en el plazo de un año, se deberán disolver conforme al régimen general previsto en el capítulo IX de esta ley, pudiendo el gobierno designar a la persona que se encargue de intervenir y presidir la liquidación y de velar por el cumplimiento de las leyes y del estatuto social"* (ahora art. 460 LSSC).

Autónoma competente, en función de la legislación aplicable, art. 5.1[28]), *la que ha de controlar el procedimiento y la legalidad de la fusión* (Registro de cooperativas y Registro mercantil, art. 8[29]) así como *la que puede declarar la disolución de la SCE* en los supuestos del art. 73.1 RSCE (el Juez de lo Mercantil del domicilio, art. 20[30]). Pero guarda silencio, por el contrario, con respecto a la autoridad competente para el caso de oposición a la fusión, siendo la razón de esta ausencia la opción del PLSCE de no incorporar la posible oposición planteada por el art. 21 RSCE. Y tampoco designa la autoridad competente para la convocatoria de asamblea general, siendo en este caso la razón de la ausencia [quizá] el hecho de que las leyes de cooperativas regulan la convocatoria judicial de la Asamblea (v.gr., art. 23 LCoop)[31].

C) Posibles imprecisiones del PLSCE

Cuando el RSCE deja a los legisladores nacionales la fijación de plazos concretos, no siempre el PLSCE cumple de forma precisa la delegación recibida. Es el caso, por ejemplo, del plazo de un año que prevé el art. 2 PLSCE para regularizar la situación de la SCE que provoque una discordancia entre la ubicación de su domicilio y su administración central; imprecisión que deviene por no haberse previsto el *dies a quo,* esto es, el comienzo del cómputo. Y es también el caso del plazo de un año que como máximo puede un miembro del órgano de control actuar como miembro del órgano de dirección, pues el art. 17 PLSCE alude al "nombramiento", sin hacer referencia a la necesidad de aceptación del cargo.

Por otra parte, hay determinados preceptos que, a nuestro juicio, se limitan a "facilitar información" respecto de algunos extremos; información que habría mere-

28. Aspecto también previsto en la LSAEu, que introducía en la LSA el art. 315.2: *"El registrador mercantil del domicilio social, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura pública de traslado presentada, certificará el cumplimiento de los actos y trámites que han de realizarse por la sociedad antes del traslado"* (ahora art. 463 LSSC). El Borrador de anteproyecto no concretaba el órgano competente de la Comunidad Autónoma y el Anteproyecto apostaba por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma competente (art. 5.1).

29. El Borrador de Anteproyecto aludía tan sólo al Registrador Mercantil del domicilio (art. 8).

30. El Borrador de Anteproyecto remitía "al órgano que determinara la legislación de cooperativas aplicable" (art. 14)

31. Aspecto previsto, por el contrario, en la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 337: *"1. En el sistema dual de administración, la competencia para la convocatoria de la junta general corresponde a la dirección. La dirección deberá convocar la junta general cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social". "2. Si las juntas no fueran convocadas dentro de los plazos establecidos por el Reglamento CE 2157/2001 o los estatutos, podrán serlo por el consejo de control o, a petición de cualquier socio, por el juez de lo mercantil del domicilio social conforme a lo previsto para las juntas generales en esta ley". "3. El consejo de control podrá convocar la junta general de accionistas cuando lo estime conveniente para el interés social"* (ahora art. 492 LSSC).

cido una especial aclaración. Esta circunstancia se observa en la información que ofrece el art. 5.3 PLSCE de que el acuerdo de oposición al traslado de domicilio puede recurrirse "ante la autoridad judicial competente", sin aclarar cuál sea la misma, ni el recurso que proceda. También se observa en la información que contiene el art. 5.1.2º PLSCE de que la "autoridad de vigilancia", a cuya supervisión pudiera estar sometida la SCE, puede formular oposición al traslado de domicilio de ésta a otro Estado miembro. El art. 7.14.2º RSCE alude a "una autoridad nacional financiera de control con arreglo a directivas comunitarias" y el PLSCE hace coincidir ésta con aquélla aún sin precisar cuál sea.

En el marco de las imprecisiones contradictorias cabría situar la posibilidad de someter determinadas operaciones del órgano de dirección a la autorización previa del consejo de control por acuerdo de éste, declarando al tiempo inoponible a terceros de buena fe la falta de dicha autorización (art. 19 PLSCE). La seguridad jurídica habría exigido la previsión estatutaria de las concretas operaciones susceptibles de autorización previa provocando así su oponibilidad a terceros (cfr. art. 48 RSCE).

D) Materias en las que el PLSCE no cumplimenta las previsiones del RSCE

Como se ha tenido la ocasión de señalar, en el caso de aspectos no regulados o parcialmente regulados por el RSCE, el Estado miembro puede o debe (según establezca el RSCE) adoptar las normas que los prevean (art. 8.1.c) RSCE), pero el PLSCE no ofrece cobertura a todos los posibles aspectos.

a) Por lo que se refiere a los supuestos en los que el RSCE *faculta* a los Estados miembros para regular ciertos aspectos de la SCE, el PLSCE no ha estimado conveniente atender a las siguientes opciones:

- Prever que una entidad jurídica que no tenga su administración central en la Comunidad pueda participar en la constitución de una SCE (art. 2.2 RSCE)[32].

- Hacer extensiva la protección de terceros que dispensa el art. 7.7.1º RSCE también a las obligaciones nacidas o que pudieran nacer antes del traslado (art. 7.7.2º RSCE).

- Facultar al órgano de dirección o de administración para modificar estatutos sin acuerdo de la Asamblea general en cuanto a nuevas disposiciones en materia de implicación de los trabajadores (art. 11.4.2º RSCE).

32. Aspecto previsto, por el contrario, en la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 317: *"En la constitución de una sociedad anónima europea que se haya de domiciliar en España, además de las sociedades indicadas en el Reglamento (...), podrán participar las sociedades que, aún cuando no tengan su administración central en la Unión Europea, estén constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un estado miembro, tengan en él su domicilio y una vinculación efectiva y continua con la economía de un estado miembro. Se presume que existe vinculación efectiva cuando la sociedad tenga un establecimiento en dicho Estado miembro desde el que dirija y realice sus operaciones"* (ahora art. 465 LSSC).

- Establecer excepciones a las disposiciones nacionales de desarrollo de la Directiva 89/666 (art. 12.2 RSCE).

- Establecer que una cooperativa no puede participar en la constitución de una SCE por fusión si una autoridad competente se opone por razones de interés público (art. 21.1º RSCE)[33].

- Condicionar la transformación a votación favorable del órgano que controle la cooperativa que debe transformarse en el que esté organizada la participación de los trabajadores (art. 35.7 RSCE).

- Disponer que el responsable de la administración corriente sea un consejero delegado en las mismas condiciones establecidas para las cooperativas domiciliadas en su territorio (art. 37.1 RSCE).

- Establecer o permitir que los estatutos dispongan nombramiento/revocación de los miembros del órgano de dirección por la asamblea general en las mismas condiciones que se aplican para las cooperativas domiciliadas en su territorio (art. 37.2.2º RSCE).

- Disponer que los miembros del órgano de control gocen de la atribución del propio órgano de exigir información al órgano de dirección (art. 40.3 RSCE).

- Disponer que el responsable de la administración corriente sea un consejero delegado en las mismas condiciones que para las cooperativas domiciliadas en su territorio (42.1 RSCE).

- Establecer que la SCE no quedará obligada frente a terceros por los actos de sus órganos en los términos del art. 47.2.2º RSCE.

- Estipular que el poder de representación quede atribuido por disposición estatutaria a una persona o a varias que actúen conjuntamente; pueden establecer que esta disposición sea oponible a terceros si se refiere al poder general de representación (art. 47.4 RSCE).

- En el sistema monista, determinar las operaciones sujetas a autorización y órgano autorizante que deban figurar en los estatutos; y, en el sistema dual, determinar esas operaciones (art. 48.3 RSCE).

- En materia de participación de los trabajadores, los Estados miembros podrán disponer que el quórum y la toma de decisiones del órgano de control queden sujetos a las normas aplicables, en las mismas condiciones, a las cooperativas constituidas con arreglo al Derecho del Estado del domicilio (art.50.3 RSCE).

---

33. Aspecto previsto, por el contrario, en la regulación que la LSAEu introducía en la LSA, art. 318.1: *"El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia o de la Comunidad Autónoma donde la sociedad anónima tenga su domicilio social, podrá oponerse por razones de interés público a que una sociedad española participe en la constitución mediante fusión de una sociedad anónima europea en otro Estado miembro. Cuando la sociedad española que participe en la constitución de una sociedad anónima europea mediante fusión esté sometida a la supervisión de una autoridad de vigilancia, la oposición a su participación podrá formularse también por dicha autoridad"* (ahora art. 466.1 LSSC).

- Disponer que la primera asamblea general pueda reunirse dentro de los 18 meses siguientes a la constitución de la SCE (art. 54.1 RSCE).

- Requisitos mínimos de quórum en caso de socios inversores en SCE de crédito o seguros (art. 61.3.2º RSCE).

- Adaptación de las normas nacionales de contabilidad a las especialidades de las cooperativas (art. 68.1 RSCE)[34].

b) Por cuanto hace a los supuestos en los que el RSCE *impone* a los Estados miembros la regulación de ciertos aspectos de la SCE, el PLSCE ha desatendido tanto la determinación de cuál sea la autoridad competente para informar de la falta de coincidencia en el mismo Estado miembro del domicilio y de la administración central de la SCE como el establecimiento de un recurso jurisdiccional o de otro tipo adecuado contra cualquier acto de infracción del art. 6 (art. 73.4 RSCE).

IV. ACTITUD DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS ESPAÑOLES ANTE LA SCE

1. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESPAÑOLAS EN SCES DOMICILIADAS EN OTRO ESTADO MIEMBRO

La SCE es un "instrumento jurídico adecuado" para facilitar el desarrollo de las actividades transfronterizas (C.6 RSCE) de cualquier persona física o jurídica pero no sólo, o fundamentalmente, de las cooperativas. Así, al determinar los sujetos que pueden constituir una SCE se alude a "personas físicas", "sociedades" y "entidades", sin exigir que alguna de ellas tenga que ser cooperativa. Tan sólo en sede de fundación por fusión o transformación se establece que la base subjetiva originaria sea cooperativa (art. 2.1 RSCE)[35]. Por tal razón, entidades españolas de diversa naturaleza están participando en Sociedades Cooperativas Europeas domiciliadas en algún Estado miembro.

Con domicilio en Luxemburgo, la SCE denominada LHEDCO (Logement, Hábitat Etudes et Développement Coopératif SC)[36] cuenta con la participación de la sociedad

34. Esta es la intención que persigue el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), con la ayuda de la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría (AECA).

35. Hasta Mayo de 2010 se tiene noticia de 17 SCE domiciliadas en diversos Estados miembros. Italia es el Estado con mayor número de SCEs registradas (5), seguido por Eslovaquia (3), Bélgica y Hungría (2). Alemania, Liechtenstein, Holanda y España registran, por su parte, una SCE cada uno de ellos. Fuente: *Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE).* Contract No SI2.ACPROCE029211200 of 8 October 2009.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/

36. http://www.firmenwissen.de/az/firmeneintrag/1540/9370102273/
/LHEDCO_LOGEMENT_HABITAT_ETUDES_ET_DEVELOPPEMENT_COOPERATIF_SC.html.

pública española VISESA desde junio de 2006, junto con otras entidades (públicas y privadas) francesas y luxemburguesas.

ESCOOP[37] fue la primera SCE domiciliada en Italia (julio de 2006) y está conformada por varias organizaciones italianas, finlandesas y españolas vinculadas a los servicios sociales, el mundo académico y la administración pública. En el momento de su constitución ya habían mostrado interés por unirse a ella organizaciones de Francia, Alemania, Grecia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Portugal y Hungría.

2. EXISTENCIA DE SCE DOMICILIADAS EN ESPAÑA

El hecho de que no exista en nuestro Estado una Ley que regule la SCE domiciliada en España no ha impedido la creación de una SCE con domicilio en nuestro Estado. Se trata de EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK, una SCE de enseñanza domiciliada en Vizcaya en diciembre de 2009, e integrada por 9 cooperativas de enseñanza regidas por la Ley de Cooperativas del País Vasco y por 3 cooperativas de enseñanza francesas. El caso no ha de ser considerado excepcional pues Italia, por ejemplo, carece de ley que implemente el RSCE y registra el mayor número de SCEs con domicilio social en su territorio[38].

Quizá la constitución de esta SCE pueda haber sido el detonante de la activación del proceso conducente a la promulgación de una Ley sobre la SCE domiciliada en España. Y ello por dos razones: la primera, porque los estatutos sociales de esta concreta cooperativa establecen que la SCE se regirá por las disposiciones del RSCE "y por la ley de cooperativas del país vasco", despejando de esta forma la duda sobre la ley aplicable a una SCE con domicilio en España: ésta será la autonómica del domicilio de la SCE[39]. Resulta llamativo que el art. 1 del PLSCE resuelva el problema de la ley de cooperativas aplicable (estatal o autonómica), estableciendo que "La sociedad cooperativa europea (SCE) que tenga su domicilio en España se regirá por lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003, por las disposiciones de esta Ley y *por la Ley de Cooperativas aplicable en función del lugar donde realice principalmente la actividad cooperativizada* en los aspectos no regulados por el citado Reglamento, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas". La segunda razón, porque la inscripción de EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK, SCE, en el Registro Mercantil de Vizcaya diluye la

37. http://www.escoop.eu/es/

38. No han implementado el RSCE los siguientes Estados: Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Italia, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. Fuente: *Study on the implementation, cit.*

39. http://www.astileku.com/cast/20090420EstatutosSociales.pdf

contienda relativa al Registro competente para la inscripción de la SCE domiciliada en España: el de Cooperativas –avalado por la atribución al mismo de tal competencia por las leyes de cooperativas- o el Mercantil –avalado por las previsiones del RSCE (art. 11)[40]. La cuestión se resuelve, pues a favor de este último, y así el PLSCE dispone que *"la SCE se inscribirá en el Registro Mercantil que corresponda a su domicilio en España"* y en él "se depositará el proyecto de constitución de una SCE que vaya a tener su domicilio en España".

En cualquier caso, no deja de producir "extrañeza" que antes de que se dicten las normas pertinentes para hacer posible la inscripción de la SCE en el Registro Mercantil, se haya podido practicar la inscripción de una de ellas. Si atendemos al PLSCE, su DAÚnica atribuye el plazo de un año al Gobierno para que proceda "a realizar las modificaciones que sean necesarias con objeto de proceder a la *adecuación del Reglamento del Registro Mercantil al contenido de la presente Ley".* Habría que recordar, asímismo, que el art. 11.2 RSCE prohíbe el registro de una SCE salvo que se haya celebrado un acuerdo de implicación de los trabajadores en virtud del art. 4 de la Directiva 2003/72/CE, se haya tomado una decisión en virtud del art. 3.6 de la misma Directiva o haya expirado el periodo de negociaciones conforme a su art. 5 sin que se haya celebrado ningún acuerdo. Estas cuestiones deberán quedar acreditadas ante el Notario otorgante de la Escritura pública de constitución y ante el Registrador Mercantil territorial encargado de calificar la constitución de la SCE cuya inscripción se solicita.

40. Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 241, 18-12-2009, p. 73044.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., *La internacionalización de la Sociedad Cooperativa,* Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

AA.VV., *La sociedad cooperativa domiciliada en España,* (Dir. ALFONSO SÁNCHEZ), Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur-Menor, 2009.

AA.VV., *La internacionalización del Derecho de Sociedades* (Coords. ARENAS GARCÍA/GORRIS LÓPEZ/MIQUEL RODRÍGUEZ), Ed. Atelier, Barcelona, 2010.

AA.VV. *Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE).* Contract No SI2.ACPROCE029211200 of 8 October 2009. Cooperatives Europe-Euricse-Ekai. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/

ALFONSO SÁNCHEZ, R. "La sociedad cooperativa europea. Un nuevo tipo social en un escenario complejo", *Noticias de la U.E.,* núm. 252, enero 2006, pp. 19-34.

- "El desarrollo normativo de la sociedad cooperativa europea: propuestas de implantación", *Boletín de la Academia Vasca de Derecho,* nº 2, extraordinario, sobre *La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea,* 2006, pp. 11-52.
- "Aproximación a ciertos aspectos del régimen económico-financiero de la sociedad cooperativa europea", *Actas del Congreso Hispano Argentino de Derecho de Sociedades,* Valencia, 2006 (en prensa).
- "¿Regulación Supranacional del grupo cooperativo paritario?. La sociedad cooperativa europea", *Anuario Ciudad de Lleida,* 2006.

ALONSO SOTO, F., "Informe sobre la sociedad cooperativa europea (cooperativa multinacional)", *Rev. Crédito Cooperativo,* núm. 44, 1990, pp. 3 y ss.

BARAHONA RIBER, A., "La economía social en la Unión Europea: la propuesta de estatuto de la sociedad cooperativa europea", *Anuario de Estudios Cooperativos,* 1995, pp. 13-26.

- "Mesa redonda", en *La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea*, cit., pp. 95 y sigs.

DABORMIDA, R., "El Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea", *Ciriec-España,* nº 13, 1993, pp. 29-50.

- "El estatuto de la sociedad cooperativa europea: evolución, actualidad y perspectivas", *Ciriec-España,* nº 17, 1994, pp. 121-145.

ESPIN SÁEZ, M., "Implicación de los trabajadores en la Sociedad Cooperativa Europea (Comentario a la Directiva 2003/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003)", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,* nº 47, pp. 233-243.

FAJARDO, I.G., "Reflexiones sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea: Nuevas posibilidades", AA.VV., *Integración empresarial cooperativa. Posibilidades, ventajas, inconvenientes*, (CHAVES/FAJARDO/NAMORADO, Coords.), Ed. Ciriec-España, Valencia, 2003, pp. 203-210.

FERNÁNDEZ-GOLFIN APARICIO, A., "La propuesta de Reglamento de Sociedad Cooperativa Europea", La Ley, nº 5, 2002, pp. 1713-1718.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M.B./BENAVIDES VELASCO, P., "La sociedad cooperativa europea: análisis del Reglamento 1435/2003, por el que se regula su estatuto jurídico", *RdS*, 27, 2006, pp. 273 y sigs.

GORRIZ LÓPEZ, C., "La sociedad anónima europea domiciliada en España: luces y sombras de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre", en AA.VV., *La internacionalización del Derecho de Sociedades* (Coords. ARENAS GARCÍA/GORRIS LÓPEZ/MIQUEL RODRÍGUEZ), Ed. Atelier, Barcelona, pp.79-101.

GUILLEM CARRAU, J., "La Sociedad Cooperativa Europea", *Revista Valenciana de Estudios Autonómicos*, nº 35, 2001, pp. 81-100.

LAMBEA RUEDA, A., "La sociedad cooperativa europea: el Reglamento 1435/2003, de 22 de julio", *RDP,* mayo-junio 2004, pp. 300-323.

- "Criterios orientativos para optar a la calificación de sociedad cooperativa europea", *Revesco,* núm. 87, 2005, pp. 77-107.
- "Marco jurídico de la Sociedad Cooperativa europea domiciliada en España", *Rev. Ciriec-España*, 17, 2007, pp.85 y sigs.

MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., "A representación da sociedade cooperativa europea. Consideracións críticas", *Revista de Cooperativismo y Economía Social,* núm. 26 (2003-2004), pp. 49-60.

MARTÍNEZ SEGOVIA, F.J., "Primera aproximación al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea", *Revesco,* núm. 80, 2003, pp. 61-106.

MINONDO SANZ, J., "El nuevo Estatuto de la Sociedad cooperativa Europea", *Ciriec-España,* nº 41, 2002, pp. 9-23.

MONTOLIO, J.M., "Repercusiones en España del proyectado estatuto de la sociedad cooperativa europea", *Ciriec-España,* nº 17, 1994, pp. 147-169.

NAMORADO, R., "La sociedad cooperativa europea: problemas y perspectivas", AA.VV., *Integración empresarial cooperativa. Ponencias del II coloquio ibérico de cooperativismo y economía social,* Ed. Ciriec-España, Valencia, 2003, pp. 211-221.

PASTOR SEMPERE, C., "La sociedad cooperativa europea", *Revesco,* núm. 74, 2001, pp. 181-200.

- "La Sociedad Cooperativa Europea: la compleja articulación de un nuevo tipo societario", AA.VV., *La internacionalización de la Sociedad Cooperativa, ob.cit.,* pp. 157-181.
- "La sociedad cooperativa europea domiciliada en España", *Revesco*, núm. 94, 2009, pp. 117-144.

RODRÍGUEZ ABELENDA, P., "La sociedad cooperativa europea y su adecuación a los principios de la ACI", *Rev. Ciriec-España*, 15, 2004, pp.129 y sigs.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.S., "La sociedad cooperativa europea: Introducción y estudio: propuesta modificada de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea", Boletín del Colegio de Registradores de la propiedad, nº 4, 1995, pp. 1041-1064.

VICENT CHULIA, F., "La sociedad cooperativa europea", *Ciriec-España,* nº 14, 2003, pp. 51-82.

ANEXO
Proyecto de Ley por la que se regula la SCE con domicilio en España

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) comprende el Reglamento (CE) número1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003, que regula aspectos societarios y la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, que contempla la implicación de los trabajadores en la sociedad cooperativa europea, la cuál regula los derechos de información, consulta o participación de los trabajadores en la misma. Ambos textos fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea del 18 de agosto de 2003. La Directiva 2003/72/CE fue transpuesta a nuestro derecho interno mediante la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. El Reglamento (CE) número 1435/2003 conllevó por primera vez normativa propia en materia de cooperativas en el ámbito de la Unión Europea, con la creación de una legislación específica europea en el área del derecho de sociedades. Se trata, por lo tanto, de un nuevo instrumento normativo europeo regulador del régimen jurídico de las cooperativas de ámbito europeo que permite la intensificación de las actividades transnacionales a las sociedades cooperativas, utilizando para ello los instrumentos que corresponden a sus características especiales. Aunque la aplicación de un reglamento comunitario es directa, el Reglamento 1435/2003 remite en varios aspectos al desarrollo del Estado miembro en relación a su legislación aplicable. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento citado, cada Estado miembro debe adoptar las disposiciones de ejecución adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del mismo, designando las autoridades competentes oportunas. En este sentido, la constitución de una sociedad cooperativa europea requería de la regulación y adaptación de elementos tales como el régimen de la SCE de conformidad con la legislación española, regularización, inscripción y publicación de actos, traslado, oposición, fusión, transformación y disolución de la SCE con domicilio en España. Por lo tanto, la presente Ley supone cumplir un mandato comunitario y cerrar definitivamente el bloque legal de regulación de la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España. Con esta norma se propicia la dotación eficaz de un instrumento en el ámbito del derecho de sociedades que permitirá mejorar la situación económica y social en el conjunto de la Unión Europea, reduciendo obstáculos del mercado interior y potenciando el desarrollo entre regiones y Estados miembros a través de la fórmula jurídica cooperativa sin necesidad de crear otras sociedades mercantiles para desarrollar en una sola estructura jurídica cooperativa actividades transfronterizas.

La SCE tiene como objetivo principal la satisfacción de las necesidades de sus socios y el desarrollo de sus actividades económicas o sociales respetando los principios cooperativos de participación democrática y distribución equitativa del beneficio neto y sin obstáculos a la libre adhesión. La Ley por la que se regula la sociedad cooperativa europea en España beneficiará sin duda la contribución a la extensión del Estatuto de la SCE en aras al respeto de la igualdad de condiciones de la competencia y de desarrollo económico que persigue la Unión Europea, por cuanto de este modo se dota a las cooperativas, entidades comúnmente reconocidas en todos los Estados miembros, de los instrumentos jurídicos adecuados que permiten facilitar el desarrollo de sus actividades transnacionales. El objetivo principal de la Ley es permitir *de iure* la constitución de la SCE en España. Por este motivo, desde la aprobación del Reglamento comunitario se han ido efec-

tuando diferentes análisis del desarrollo en España de los aspectos diferidos por dicho Reglamento, y que fundamentalmente residen en la determinación de la legislación aplicable y el Registro competente en todos los actos de la SCE. A tal efecto, en todo el proceso de elaboración de la norma se ha consultado a los Ministerios con competencias en relación con esta materia y a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Además se remitió la propuesta al sector cooperativo, a través de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), que dio su conformidad al texto. La norma también ha sido informada positivamente por el Consejo para el Fomento de la Economía Social. Finalmente el Consejo de Estado ha emitido el dictamen preceptivo, cuyas observaciones se han tenido en cuenta en el articulado de la norma. A raíz de las observaciones formuladas por los distintos Departamentos ministeriales y por las Comunidades Autónomas se ha elaborado un texto normativo que responde a la conciliación de la estructura legislativa específica cooperativa de España, con competencias en materia de cooperativas asumidas por las Comunidades Autónomas y por el Estado, manteniendo la principalidad de la actividad cooperativa como criterio que emana de la legislación cooperativa específica española en la determinación de la legislación aplicable que puede ser bien la legislación estatal o bien la autonómica correspondiente. Además, se ha incorporado al texto la necesidad clara de cooperación y colaboración en las operaciones de traslado, fusión, transformación entre Registro Mercantil, que es el competente en la inscripción según la norma comunitaria y los Registros de cooperativas competentes. También se adecua el régimen monista y dualista que prevé la SCE.

II. La Ley consta de 20 artículos, encuadrados en cuatro capítulos, más una Disposición adicional, y tres Disposiciónes finales.

La Ley consta de 20 artículos, encuadrados en cuatro capítulos, más una disposición adicional, y tres disposiciones finales.

El capítulo I recoge las disposiciones generales que determinan la legislación aplicable y régimen de la SCE, los supuestos de regularización, el Registro competente en materia de inscripción y publicación de actos y las reglas de traslado de la sociedad cooperativa europea y oposición al mismo, con cautelas concretas en materia de coordinación entre el Registro Mercantil Central y los Registros de cooperativas competentes, ya sea el estatal o el correspondiente autonómico.

El capítulo II establece las peculiaridades específicas de la legislación cooperativa en relación con los actos de fusión y transformación, que también contiene medidas concretas de coordinación entre Registros.

El capítulo III dispone que la sociedad cooperativa europea que se domicilie en España podrá optar por un sistema de administración monista o dual, y lo hará constar en sus estatutos. Por esta razón, se contempla el desarrollo del sistema dual, por cuanto no es el propio de la legislación española.

El capítulo IV regula el órgano competente para la disolución de la SCE fijada por el Reglamento.

En la disposición adicional única se prevé la modificación del Reglamento del Registro Mercantil para adecuarlo al contenido de la presente ley.

Por su parte, la disposición final primera determina el título competencial de esta norma, que es el establecido en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil.

La disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias.

Por último, la disposición final tercera prevé una "vacatio legis" de un mes,plazo que se considera adecuado para su entrada en vigor.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Régimen de la sociedad cooperativa europea.

1. Se considera sociedad cooperativa europea (SCE) domiciliada en España aquella cuya admi-

nistración central y domicilio social se encuentren dentro del territorio español. La sociedad cooperativa europea deberá fijar su domicilio en España cuando su administración central se halle dentro del territorio español.

2. La sociedad cooperativa europea (SCE) domiciliada en España se regirá por lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, por las disposiciones de esta Ley y por la Ley de Cooperativas aplicable en función del lugar donde realice principalmente la actividad cooperativizada en los aspectos no regulados por el citado Reglamento, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

Artículo 2. Regularización de la sociedad cooperativa europea.

1. Cuando una sociedad cooperativa europea domiciliada en España deje de tener su administración central en España deberá regularizar su situación en el plazo de un año, bien restableciendo su administración central en España, bien trasladando su domicilio social al Estado miembro en el que tenga su administración central.

2. Las sociedades cooperativas europeas, que se encuentren en el supuesto descrito en el apartado anterior, que no regularicen su situación en el plazo de un año, se deberán disolver conforme al régimen general previsto en la legislación de Cooperativas que sea de aplicación, pudiendo el Gobierno o el órgano que determine la Comunidad Autónoma competente designar a la persona que se encargue de intervenir y presidir la liquidación y de velar por el cumplimiento de las leyes y de sus estatutos sociales.

Artículo 3. Inscripción y publicación de los actos relativos a la sociedad cooperativa europea.

1. La sociedad cooperativa europea se inscribirá en el Registro Mercantil que corresponda a su domicilio en España.

2. En el Registro Mercantil se depositará el proyecto de constitución de una sociedad cooperativa europea que vaya a tener su domicilio en España.

3. La constitución y demás actos inscribibles de una sociedad cooperativa europea que tenga su domicilio en España se inscribirán en el Registro Mercantil conforme a lo dispuesto para las sociedades anónimas. Los actos y datos de una sociedad cooperativa europea con domicilio en España deberán hacerse públicos en los casos y forma previstos en las disposiciones generales aplicables a las sociedades anónimas.

4. No se podrá inscribir en el Registro Mercantil una sociedad cooperativa europea que vaya a tener su domicilio en España, cuya denominación sea idéntica a la de otra sociedad española preexistente.

5. El Registro Mercantil Central será el órgano competente para expedir las certificaciones negativas de denominación de las sociedades cooperativas europeas previa comprobación de que no existe una sociedad cooperativa con idéntica denominación en el Registro estatal de cooperativas y en los Registros autonómicos correspondientes, los cuáles estarán coordinados con aquél.

Artículo 4. Traslado del domicilio a otro Estado miembro.

1. En el caso de que una sociedad cooperativa europea con domicilio en España acuerde su traslado a otro Estado miembro de la Unión Europea:

a) Los socios que voten en contra del acuerdo de cambio de domicilio podrán separarse de la sociedad en los términos previstos en el artículo 7.5 del Reglamento (CE) 1435/2003.

b) Los acreedores cuyo crédito haya nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de traslado del domicilio social a otro Estado miembro tendrán el derecho de oponerse al traslado en el plazo de dos meses desde la publicación del proyecto, no pudiendo llevarse a efecto el traslado hasta que los créditos queden suficientemente garantizados o satisfechos.

2. El registrador mercantil del domicilio social, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura pública de traslado del domicilio social presentada, certificará el cumplimiento de

los actos y trámites que han de realizarse por la sociedad antes del traslado.

Artículo 5. Oposición al traslado del domicilio a otro Estado miembro.

1. El traslado de domicilio de una sociedad cooperativa europea registrada en territorio español a otro Estado miembro que suponga un cambio de la legislación aplicable no surtirá efecto si el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Trabajo e Inmigración, o del órgano que determine la Comunidad Autónoma competente, en función de la legislación aplicable, se opone por razones de interés público.

Cuando la sociedad cooperativa europea esté sometida a la supervisión de una autoridad de vigilancia, la oposición podrá formularse también por dicha autoridad.

2. Una vez que tenga por efectuado el depósito, el registrador mercantil, en el plazo de cinco días, comunicará a los órganos citados en el apartado anterior y, en su caso, a la autoridad de vigilancia correspondiente, la presentación del proyecto de traslado de domicilio de una sociedad cooperativa europea.

3. El acuerdo de oposición al traslado de domicilio habrá de formularse dentro del plazo de los dos meses siguientes a la publicación del proyecto de traslado de domicilio. El acuerdo podrá recurrirse ante la autoridad judicial competente.

CAPÍTULO II.

CONSTITUCIÓN POR FUSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Artículo 6. Nombramiento de experto o expertos independientes que han de informar sobre el proyecto de fusión.

1. En el supuesto de que una o más sociedades cooperativas españolas participen en la fusión o cuando la sociedad cooperativa europea vaya a fijar su domicilio en España, uno o varios expertos independientes deberán examinar el proyecto de fusión y establecer un informe escrito destinado a los socios, según lo previsto en el artículo 26 del Reglamento (CE) 1435/2003.

2. El registrador mercantil será la autoridad competente para, previa petición conjunta de las sociedades que se fusionan, designar a uno varios expertos independientes a que se hace referencia en el apartado anterior.

Artículo 7. Derecho de separación de los socios en caso de fusión.

Los socios de las sociedades cooperativas españolas que voten en contra del acuerdo de una fusión que implique la constitución de una sociedad cooperativa europea domiciliada en otro Estado miembro podrán separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto en la legislación de cooperativas aplicable. Igual derecho tendrán los socios de una sociedad cooperativa española que sea absorbida por una sociedad cooperativa europea domiciliada en otro Estado miembro.

Artículo 8. Certificación relativa a la sociedad que se fusiona.

1. Las cooperativas españolas participantes en la fusión, una vez otorgada la escritura pública de fusión, y con anterioridad a su presentación en el Registro Mercantil, deberán presentarla al Registro de Cooperativas en el que se encuentren inscritas, a fin de que éste informe al Registro Mercantil, en el plazo de 15 días, sobre la inexistencia de obstáculos para la fusión, procediendo el Registro de Cooperativas correspondiente, en su caso, al cierre provisional de la hoja registral.

2. El Registrador mercantil del domicilio social, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura pública de fusión presentada, certificará el cumplimiento por parte de la sociedad cooperativa española que se fusiona de todos los actos y trámites previos a la fusión.

Artículo 9. Inscripción de la sociedad resultante de la fusión.

1. En el caso de que la sociedad cooperativa europea resultante de la fusión fije su domicilio en España, el registrador mercantil controlará la existencia de los certificados de las autoridades competentes de los países en los que tenían su domicilio las sociedades cooperativas extran-

jeras participantes en la fusión y la legalidad del procedimiento en cuanto a la realización de la fusión y la constitución de la sociedad cooperativa europea.

2. Una vez practicada la inscripción de la fusión, el Registro Mercantil comunicará la misma a los Registros de Cooperativas correspondientes donde se encuentren inscritas las cooperativas domiciliadas en el territorio español que hayan participado en el proceso de fusión para que procedan a su cancelación.

Artículo 10. Transformación de una sociedad cooperativa existente en sociedad cooperativaeuropea.

1. En el caso de constitución de una sociedad cooperativa europea mediante la transformación de una sociedad cooperativa española, sus administradores redactarán un proyecto de transformación de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1435/2003 y un informe en el que se explicarán y justificarán los aspectos jurídicos y económicos de la transformación y se indicarán las consecuencias que supondrá para los socios y para los trabajadores la adopción de la forma de sociedad cooperativa europea. El proyecto de transformación será depositado en el Registro Mercantil y se publicará conforme a lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

2. Una vez otorgada la escritura pública de transformación, la cooperativa española que se transforme deberá presentarla al Registro de Cooperativas en el que se encuentre inscrita a fin de que por el mismo se informe al Registro Mercantil sobre la inexistencia de obstáculos para la transformación, procediendo el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente, en su caso, al cierre provisional de la hoja registral.

3. Una vez practicada la inscripción de la transformación, el Registro Mercantil comunicará la misma al Registro de Cooperativas correspondiente donde se encuentre inscrita la cooperativa domiciliada en el territorio español que se haya transformado para que proceda a su cancelación.

CAPITULO III.
De los Órganos Sociales

Sección 1ª.
Sistemas de administración

Artículo 11. Régimen aplicable a los sistemas de administración.

1. La administración de la sociedad cooperativa europea domiciliada en España se rige por lo establecido en el Reglamento (CE) 1435/2003, por las disposiciones de esta Ley, por la Ley de Cooperativas aplicable en función del lugar donde realice principalmente la actividad cooperativizada, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y en las cooperativas europeas, todo ello en los aspectos no regulados por el citado Reglamento.

2. La sociedad cooperativa europea que se domicilie en España podrá optar por un sistema de administración monista o dual, y lo hará constar en sus estatutos.

Artículo 12. Responsabilidad de los miembros de los órganos de administración.

Las disposiciones sobre responsabilidad previstas para los administradores de sociedades anónimas se aplicarán a los miembros de los órganos de administración, de dirección y del Consejo de control en el ámbito de sus respectivas funciones.

Sección 2ª.
Sistema monista

Artículo 13. Sistema monista.

En el caso de que se opte por un sistema monista, existirá un órgano de administración, que será el Consejo Rector de la cooperativa o el órgano de gobierno correspondiente, según la legislación aplicable.

Sección 3ª.
Sistema dual

Artículo 14. Órganos del sistema dual.

En el caso de que se opte por un sistema de administración dual, existirá una dirección y un Consejo de control.

Artículo 15. Facultades de la dirección.

1. La gestión y la representación de la sociedad corresponden a la dirección.

2. Cualquier limitación a las facultades de los directores de las sociedades cooperativas europeas, aunque se halle inscrita en el Registro será ineficaz frente a terceros.

3. La titularidad y el ámbito del poder de representación de los directores se regirán conforme a lo dispuesto para los consejeros en la legislación de cooperativas que les sea de aplicación.

Artículo 16 Modos de organizar la dirección.

1. La gestión podrá confiarse, conforme dispongan los estatutos, a un solo director, a varios directores que actúen solidaria o conjuntamente o a un Consejo de dirección. Cuando la gestión se confíe conjuntamente a más de dos personas, éstas constituirán el consejo de dirección. Los estatutos de la sociedad cooperativa, cuando no determinen el número concreto, establecerán el número máximo y el mínimo, y las reglas para su determinación.

2. Salvo lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1435/2003, la organización, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos del Consejo de dirección se regirá por lo establecido en los estatutos sociales y, en su defecto, por lo previsto en la legislación de cooperativas que les sea de aplicación para el Consejo rector de las sociedades cooperativas.

Artículo 17. Límite a la cobertura de vacante en la dirección por un miembro del Consejo de control.

La duración del nombramiento de un miembro del Consejo de control para cubrir una vacante de la dirección, conforme al artículo 37.3 del Reglamento (CE) 1435/2003, no será superior al año.

Artículo 18. Consejo de control

1. Será de aplicación al Consejo de control lo previsto en la legislación de cooperativas correspondiente para el funcionamiento del Consejo rector de las sociedades cooperativas en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1435/2003.

2. Los miembros del Consejo de control serán nombrados y revocados por la asamblea general, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1435/2003 y en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y en las cooperativas europeas.

3. La representación de la sociedad frente a los miembros de la dirección corresponde al Consejo de control.

4. El Consejo de control, cuando lo estime conveniente, podrá convocar a los miembros de la dirección para que asistan a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 19. Operaciones sometidas a autorización previa del Consejo de control.

El Consejo de control podrá acordar que determinadas operaciones de la dirección se sometan a su autorización previa. La falta de autorización previa será inoponible a los terceros, salvo que la sociedad cooperativa pruebe que el tercero hubiera actuado en fraude o con mala fe en perjuicio de la sociedad.

CAPÍTULO IV.
De la disolución

Artículo 20. Disolución por resolución judicial o de otra autoridad del Estado miembro del domicilio.

La autoridad competente para declarar la disolución en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 73 del Reglamento (CE) 1435/2003, será el Juez de lo Mercantil del domicilio social de la sociedad cooperativa europea.

Disposición adicional única. Adaptación del Reglamento del Registro Mercantil.

El Gobierno, en el plazo de un año, procederá a realizar las modificaciones que sean necesa-

rias con objeto de proceder a la adecuación del Reglamento del Registro Mercantil al contenido de la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.6ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación mercantil.

Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus competencias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"

RESEÑA DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL JULIO 2008 JUNIO 2009

Gemma Fajardo García
Jesús Olavarría Iglesia
Profs. Titulares del Dep. Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont" Investigadores del IUDESCOOP - Universitat de València

Rocío Martí Lacalle
Consuelo Alcover
Profesoras del Dep. Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont" Universitat de València

** Índice sistemático*
I. Cooperativas
II. Sociedades Laborales
III. Mutualidades
IV. Cajas de Ahorro

** Índice cronológico*

NOTA: La abreviatura RA significa *Referencia Aranzadi* y TOL hace referencia a la Base de Datos Jurídica *Tirant Online.*

ÍNDICE SISTEMÁTICO

I. COOPERATIVAS

NATURALEZA JURÍDICA

** Sentencia de 19 de noviembre de 2008 (Cont. Adm). RA 7918/2008*
Cooperativa de servicios de asistencia social. Cooperativa sin ánimo de lucro. Exención procedente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 212

SOCIOS

** Sentencia de 6 de abril de 2009 (Civil). TOL 1.490.809*
Cooperativas. Expulsión de socios. Modificación de estatutos. Se considera nulo el acuerdo de expulsión de los socios acordado en Asamblea General Extraordinaria que ratifica el acuerdo de expulsión acordado por el Consejo Rector, pues tanto el expediente sancionador como el acuerdo de sanción adoptado por el Consejo Rector de la Cooperativa están viciados de nulidad, dado que en el momento de inicio del expediente y la sanción posterior todavía no estaba vigente la modificación estatutaria impugnada aunque fue acordada antes de la imposición de la sanción y por ello no regía el artículo en el que se basa el acuerdo de sanción, dado el efecto constitutivo de la inscripción de la modificación. 219

** Sentencia de 13 de julio de 2009 (Social). TOL 1.584.727*
Cooperativas de trabajo asociado. Cuando el cese o la expulsión de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues se entiende que nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral. La relación del socio de trabajo con la cooperativa no es laboral, sino societaria, y en el desarrollo de tal relación no percibe salario, sino anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa. 222

** Sentencia de 8 de octubre de 2008 (Social). RA 7377/2008*
Pago único de la prestación por desempleo, por incorporación a cooperativa o sociedad laboral. Cuantía limitada a la necesaria para adquirir la condición de socio, entendiéndose por ésta no el capital suscrito inicialmente por el socio, sino el capital social cuyo desembolso es exigible. 210

ÓRGANOS SOCIALES

** Sentencia de 23 de julio de 2008 (Civil) RA 4620/2008*
Intromisión ilegítima derecho al honor. Improcedencia. Preguntas y opiniones formuladas en asamblea general de cooperativa y presidente y gerente, relacionadas con los intereses de la cooperativa. Inexistencia de divulgación fuera de la asamblea. Derecho de información y libertad de expresión 206

** Sentencia de 3 de octubre de 2008 (Civil) RA 6298/2008*
Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: responsabilidad de los miembros del Consejo Rector. Se desestima la acción de responsabilidad interpuesta contra ellos al no acreditarse que el perjuicio sufrido por los actores, derivado del impago de sus créditos, tuviera su causa en el comportamiento doloso, abusivo o gravemente negligente de los miembros del Consejo Rector, quienes se esforzaron en inyectar liquidez a la sociedad para saldar las deudas contraídas, también con los actores. La causa primordial de la crisis económica de la cooperativa no estuvo en la gestión de los miembros el Consejo, sino en la propia actuación de los socios cooperativistas. Además todas las actuaciones del Consejo Rector en orden a evitar o mitigar la situación de crisis económica habían sido previamente autorizadas por la Asamblea General, órgano soberano de la cooperativa 207

** Sentencia de 26 de febrero de 2009 (Civil). TOL 1.463.065*
Cooperativas. Impugnación de acuerdos adoptados por la Asamblea de sociedad cooperativa. Veinte socios postulan la nulidad de los acuerdos por no haber sido aprobada el Acta, por haber sido privados los cooperativistas del derecho al voto, ya que no se sometieron a votación diversos puntos del orden del día, por defecto de convocatoria que adolecía de falta de claridad y por vulneración del principio de igualdad. Se desestiman todos los motivos. 214

** Sentencia de 14 de abril de 2009 (Civil). TOL 1.514.753*
Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: Responsabilidad por negligente ejercicio de sus deberes: procedencia. El principio prohibitivo del enriquecimiento injusto no cabe aplicarlo a los socios de una cooperativa para que respondan de las deudas sociales más allá de sus aportaciones al capital social, alterando el régimen legal de garantía de los acreedores más allá de sus aportaciones sociales. 221

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

** Sentencia de 13 de julio de 2009 (Social). TOL 1.584.727*
Cooperativas de trabajo asociado. Cuando el cese o la expulsión de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues se entiende que nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral. La relación del socio de trabajo con la cooperativa no es laboral, sino societaria, y en el desarrollo de tal relación no percibe salario, sino anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa. 222

COOPERATIVA DE VIVIENDAS

** Sentencia de 14 de octubre de 2008 (Civil). RA 6913/2008*
Cooperativa de viviendas. Suspensión de pagos. Responsabilidad de auditores por ejecución deficiente de auditoría. Relación de causalidad con insolvencia sobrevenida de la cooperativa. Infracción art. 11 Ley Auditoría 12/1988 y art. 1902 Código civil 211

COOPERATIVA DE ASISTENCIA SOCIAL
** Sentencia de 19 de noviembre de 2008 (Cont. Adm). RA 7918/2008*
Cooperativa de servicios de asistencia social. Cooperativa sin ánimo de lucro. Exención procedente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 212

INTEGRACIÓN COOPERATIVA
** Sentencia de 4 de marzo de 2009 (Civil). TOL 1.466.725*
Sociedad Anónima de capital repartido entre cooperativas, sociedades anónimas, sociedades agrarias y comerciantes individuales relacionados con la fruta. Impugnación de acuerdos del Consejo de Administración: Validez o nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad demandada consistente en autorizar la venta por una sociedad anónima (Mercolleida S.A) de sus acciones de una también sociedad anónima (Indulleida S.A) a una cooperativa (Actel SCCL). Consecuencias que asumen las sociedades agrarias y los empresarios individuales relacionados con la fruta cuando deciden agruparse bajo la forma de una sociedad eminentemente capitalista como es la sociedad anónima 216

II. SOCIEDADES LABORALES

** Sentencia de 25 de septiembre de 2008 (Social). RA 6601/2008*
No existe sucesión de empresa cuando la actividad de la empresa en quiebra es continuada por los trabajadores de la misma mediante la constitución de una sociedad laboral con los bienes de aquella, arrendados a los síndicos de la quiebra 224
** Sentencia de 17 de febrero de 2009 (Social). TOL 1.474.775*
Sociedad Laboral. Prestación por desempleo. Derecho a la prestación por desempleo de socio trabajador de sociedad laboral que ostenta el cargo de consejero delegado, sin retribución alguna por este cargo 225

III. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

** Sentencia de 9 de julio de 2008 (Social). RA 7553/2008; TOL 1.393.258*
** Sentencia de 10 de julio de 2008 (Social). RA 6557; TOL 1.369.548*
** Sentencia de 30 de septiembre de 2008 (Social). RA 7359/2008; TOL1.408.028*
** Sentencia de 6 de noviembre de 2008 (Social). RA 7412/2008; TOL1.413.291*
** Sentencia de 26 de enero de 2009 (Social). RA 1176/2009; TOL 1.460.271*
** Sentencia de 22 de abril de 2009 (Social). RA 2626/2009 ; TOL 1.564509*
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227
** Sentencia de 3 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 8060/2008; TOL 1.438.831*
** Sentencia de 22 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 711/2009; TOL 1.438.830*
Mutualidades de Previsión social. Régimen fiscal. Impuesto de sociedades: Ley 61/1978. Improcedencia de devolución de retenciones por rendimientos de capital mobiliario 229
** Sentencia de 9 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 207/2009; TOL 1.413.347*
Mutualidad Notarial. Real Decreto 1505/2003: si bien supone el paso de los miembros del Cuerpo único de Notarios al sistema público de protección social, mediante la integración en el RETA, mantiene el régimen mutualista de los notarios respecto de las prestaciones complementarias a las del RETA dejando su destino pendiente de la correspondiente decisión sobre su extinción o adaptación a la normativa mutualista, y mientras tanto mantiene su funcionamiento con ese carácter residual. 230

IV. CAJAS DE AHORRO

** Sentencia de 16 de octubre de 2008 (Civil). RA 5695/2008*
Cajas de Ahorros: Órganos: Asamblea General extraordinaria: impugnación de acuerdos. En primer lugar, no procede la impugnación del acuerdo de elección de miembro de la Comisión de Control. El empate entre candidaturas, no previsto en la normativa de aplicación, se resolvió adecuadamente en favor del candidato de mayor edad, conforme al criterio interpretativo de la Comisión electoral al efecto. En segundo lugar, sí resulta procedente la impugnación del acuerdo de elección de miembro suplente de la Comisión de Control, al adoptarse el acuerdo con el voto favorable de 35 miembros de los 76 asistentes: ausencia de la mayoría simple (39 votos) requerida al efecto 231

** Sentencia de 17 de diciembre de 2008 (Social). RA 8250/2008*
Cajas de Ahorros: "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez". Rescate de Fondo Interno de Pensiones. El demandante, Director General de la demandada "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Huelva", fue objeto de despido improcedente. En la fecha del despido, la entidad demandada estaba inmersa en un proceso de fusión con la Caja de Ahorros de Jerez y externalización de un Fondo interno para garantizar las mejoras voluntarias de Seguridad Social establecidas en el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, de ámbito estatal para sus trabajadores. Resulta procedente la petición del demandante, en virtud de la cual, cuando se produzcan los hechos causantes de las prestaciones económicas previstos en el convenio colectivo del sector, el citado demandante o sus beneficiarios tendrán derecho a las mismas en las condiciones previstas en la norma. 233

I. COOPERATIVAS

*** Sentencia de 23 de julio de 2008 (Civil) RA 4620/2008**
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta

Resumen

Intromisión ilegítima derecho al honor. Improcedencia. Preguntas y opiniones formuladas en asamblea general de cooperativa y presidente y gerente, relacionadas con los intereses de la cooperativa. Inexistencia de divulgación fuera de la asamblea. Derecho de información y libertad de expresión.

Fundamentos de derecho

«SEGUNDO. (…)

En primer lugar, como primer elemento valorativo hay que atender al cargo ostentado por los demandantes como miembros de la Junta Directiva, uno Presidente y otro Gerente de la Sociedad Cooperativa que celebró la Asamblea donde se profirieron las expresiones objeto de debate. En este sentido, se ha destacado por esta Sala (Sentencias de 14 de junio de 1996 y 17 de diciembre de 1997) la necesidad de atender al carácter público o privado que ostente la persona ya que «la persona ejerciente de algún cargo público o que desempeñe un cometido de relieve social está más próxima a que ella o sus circunstancias de conducta sean noticiables en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión [art. 20.1, a) de la Constitución y del derecho de información (art. 20.1 d) de la propia Norma Suprema], debiendo por ello soportar la correspondiente crítica o censura a su labor con superior tolerancia respecto al supuesto de que se tratase de una persona privada sin ese relieve social». En este sentido, la actuación de los aquí recurrentes, como miembros de la Junta Directiva de la Cooperativa, es hecho noticiable, sometido a la crítica de los socios, en ejercicio del derecho a la información del que gozan. Las preguntas realizadas en el seno de la Asamblea son una búsqueda de información de la actuación llevada a cabo por la Junta Directiva -Presidente y Gerente- en relación con los fondos económicos de la Asociación y con los intereses de ésta. Por tanto, no se trata de la formulación de preguntas completamente desvinculadas con la Cooperativa sino de información relevante para los socios, como es el destino del dinero, la actuación del gerente como miembro de otra sociedad con intereses contrapuestos a los de la cooperativa o la utilización de su cargo para conseguir favores personales. Todas las preguntas realizadas están, por tanto, relacionadas con los intereses de la Cooperativa y no se consideran innecesarias en relación con el contexto en que se vierten. Las preguntas realizadas en el seno de la Asamblea de Cooperativistas en relación con la actuación de su junta directiva se consideran expresión del derecho a la información de que gozan los socios acerca de la gestión de aquellos que componen su Junta Directiva, sin que el término "putear" pueda ser considerado un insulto sino una opinión de la conducta cuya información se pretende: si se es miembro de otra sociedad con intereses contrapuestos y, por tanto, término que tiene relación con la opinión y la información vertida que no puede considerarse insulto.

Atendiendo al contexto en que estas preguntas se formularon (Asamblea de cooperativistas), al cargo ostentado por aquellos que se consideran ofendidos (Junta Directiva), a la relación de las preguntas con los intereses de la Cooperativa (destino de fondos, utilización del cargo para favores personales), a la persona que lo realiza (socio cooperativista), a la inexistencia de divulgación fuera del contexto asambleario y la falta de expresiones injuriosas o

innecesarias para la información que se pretendía, esta Sala debe confirmar la sentencia recurrida desestimando así todos los motivos del recurso».

*** Sentencia de 3 de octubre de 2008 (Civil) RJ 6298/2008**

Ponente: Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete

Resumen

Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: responsabilidad de los miembros del Consejo Rector. Se desestima la acción de responsabilidad interpuesta contra ellos al no acreditarse que el perjuicio sufrido por los actores, derivado del impago de sus créditos, tuviera su causa en el comportamiento doloso, abusivo o gravemente negligente de los miembros del Consejo Rector, quienes se esforzaron en inyectar liquidez a la sociedad para saldar las deudas contraídas, también con los actores. La causa primordial de la crisis económica de la cooperativa no estuvo en la gestión de los miembros el Consejo, sino en la propia actuación de los socios cooperativistas. Además todas las actuaciones del Consejo Rector en orden a evitar o mitigar la situación de crisis económica habían sido previamente autorizadas por la Asamblea General, órgano soberano de la cooperativa.

Fundamentos de Derecho

«PRIMERO. (…) La demanda fue rechazada en ambas instancias, razonando la Audiencia que, en atención a los datos fácticos contenidos en el fundamento jurídico sexto de la resolución apelada, (no discutidos por las partes litigantes), no podían tenerse por acreditados los presupuestos de la acción de responsabilidad instada, faltando, en primer lugar, un comportamiento negligente imputable a los miembros del Consejo Rector, causalmente determinante de la ruina y del consecuente impago de los créditos que ostentaban los actores, en la medida que, según el informe pericial aportado en segunda instancia, la causa primordial de la crisis económica de la Cooperativa no estuvo en la gestión de los miembros del Consejo Rector, sino en la propia actuación de los socios cooperativistas, "que tras recoger sus propias cosechas desean el mayor precio posible para las mismas, sin tener en consideración que el volumen de pérdidas producidas, más tarde o más temprano, deviene en nuevas aportaciones de fondos, para hacer frente a las deudas contraídas, ya que cualquier sociedad en pérdidas continuas, inevitablemente llega a una carencia de tesorería y posteriormente a una insolvencia definitiva". En segundo lugar, se aduce que la ausencia de comportamiento negligente causalmente determinante del daño patrimonial experimentado por los demandantes resulta patente si se tiene en cuenta que todas las actuaciones del Consejo Rector en orden a evitar o mitigar la situación de crisis económica habían sido previamente autorizadas por la Asamblea General, órgano soberano de la Cooperativa; en concreto, y por lo que respecta a la decisión -que se sostenía como negligente- de pedir un préstamo hipotecario en vez de acudir a los procedimientos concursales e interesar la disolución y liquidación ordenada de la entidad, la Audiencia afirma que el Consejo obró de esa manera después de que la Asamblea General Extraordinaria de 18 de septiembre de 1988, a la vista del informe elaborado por la Comisión de Estudio creada en anterior Asamblea de 10 de abril del mismo año, decidiera autorizar al Consejo para hipotecar bienes, y de que la Asamblea de 16 de julio de 1989 acordase expresamente la solicitud de un préstamo hipotecario por 50.000.000 de pesetas a la Caja Rural Provincial de Sevilla.

SEGUNDO. (…) Los recurrentes, a la sazón trabajadores por cuenta ajena de la Sociedad Cooperativa Olivarera Carmonense, y titulares de diversos créditos laborales contra la sociedad que no han podido hacer efectivos, buscan el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado promoviendo contra los miembros del Consejo Rector la acción de responsabilidad prevista en el párrafo 2º del artículo 65 de la entonces vigente Ley General de Cooperativas de 2 de abril de 1987, en relación con lo previsto en el artículo 64 del mismo texto legal, circunstancia que, en buena lógica, obliga a examinar la viabilidad de su pretensión a la luz de los presupuestos legales y jurisprudenciales de dicha clase de acción, de marcado carácter subjetivo. El último de los mencionados preceptos señala que los miembros del Consejo Rector están obligados a desempeñar su cargo «con la diligencia de un ordenado gestor y de un representante leal», con la consecuencia de que deban responder «solidariamente frente a la Cooperativa, frente a los socios y asociados y frente a los acreedores del daño causado por dolo, abuso de facultades o negligencia grave» (art. 65.2º), por lo cual, cabe colegir de todo ello que la viabilidad de la acción individual de responsabilidad depende -como acertadamente entiende la sentencia recurrida-, de la necesaria acreditación de un daño patrimonial, y además, de que se pruebe que ese menoscabo está vinculado causalmente a un comportamiento doloso, abusivo o siquiera, gravemente negligente, de los miembros de dicho órgano gestor, lo que no es el caso.

Llegados a este punto, de baldío cabe calificar el intento de la parte actora, hoy recurrente, de vincular causalmente el impago de sus créditos al comportamiento negligente del Consejo. Si bien es reiterada la doctrina jurisprudencial (verbigracia, Sentencia de 9 de julio de 1999) que califica de cuestión de derecho y, por tanto, revisable en casación, la calificación de la acción u omisión como culpable o negligente, ello es así siempre que se parta de los hechos que, respecto a la existencia y caracteres de las mismas, queden definitivamente acreditados. Por esta razón, el argumento de que fue únicamente la conducta descuidada del Consejo la que abocó a la Cooperativa a la situación de crisis económica resulta casacionalmente irrelevante en la medida que no busca revisar la calificación que merece el comportamiento del Consejo, sino cambiar el juicio referente al nexo de causalidad, a fin de convertir el, por otra parte no acreditado actuar negligente del Consejo, en la única causa determinante de la situación de iliquidez, y por ende, del perjuicio que los acreedores pretenden les sea resarcido, marginando interesadamente la conclusión que alcanza el tribunal de apelación en sentido contrario, y que apunta, en base al propio informe pericial, a que fue la mala gestión de los cooperativistas -y no la conducta de los miembros del Consejo Rector- la causa determinante de la situación de pérdidas continuadas, parecer sobre la verdadera causa de la situación de crisis, que obtiene la Sala de apelación, -esto es lo relevante-, apoyándose en los elementos fácticos contenidos en la sentencia de primera instancia (fundamento jurídico sexto), los cuales no fueron controvertidos en apelación, y que han de considerarse igualmente incólumes en casación toda vez que la casación no es una tercera instancia (por todas, Sentencias de 8 de marzo y 28 de noviembre de 2007), teniendo dicho esta Sala que incurre en el inadmisible defecto de hacer supuesto de la cuestión o petición de principio todo aquel que construye su discurso variando la apreciación que de los hechos se hace en la sentencia recurrida o partiendo de datos fácticos diferentes de los fijados o tenidos en cuenta en la resolución objeto del recurso, si, tal como aquí acontece, previamente no se ha obtenido su modificación o integración por parte del Tribunal de Casación por la única vía admisible que es la del error de derecho en la valoración probatoria con cita de la norma legal de prueba que se estima infringida, a lo que ha de añadirse que, esta excepcional posibilidad de revisar la valoración probatoria es a la luz de la nueva Ley procesal una cuestión que excede del recurso de casación, por estar

reservada al extraordinario por infracción procesal en los casos en que proceda este recurso (entre los más recientes, se hacen eco de esta doctrina los Autos de 31 de julio de 2007, 27 de marzo de 2007, 3 de mayo de 2007, 10 de julio de 2007 y 15 de julio de 2008,). Del mismo modo debe rechazarse el segundo argumento sustentador del motivo, que se encamina a apreciar la responsabilidad del Consejo por una incorrecta gestión de la crisis, una vez que, constatada la negativa situación contable, eludió instar la disolución y liquidación ordenada del patrimonio social en la forma prevista legalmente, incumplimiento de deberes legales que la doctrina vincula con la existencia de responsabilidad individual aun en el supuesto de que no se pruebe que la crisis fue debida a una mala gestión del Consejo (dice la Sentencia de 22 de abril de 1994 que «la no liquidación en forma legal del patrimonio social cuando la sociedad se encuentra en una situación de insolvencia es susceptible de inferir ese daño directo contemplado en el artículo 81 por configurar una negligencia grave de los administradores en el incumplimiento de sus deberes legales»). La tesis expuesta olvida que la Audiencia descarta la responsabilidad de los miembros del órgano gestor por haberse limitado a dar cumplimiento efectivo a los acuerdos adoptados con fecha 10 de abril de 1988 y 16 de julio de 1989 por la Asamblea General, el último de los cuales expresamente tenía por fin autorizar al Consejo a solicitar un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 50.000.000 de pesetas con el fin de hacer viable a la compañía. La interpretación de la Audiencia, rechazando apreciar actuación dolosa, abusiva o gravemente negligente en los gestores demandados cuando los hechos probados demuestran que estos, cumpliendo con sus legales cometidos, se limitaron a informar al órgano soberano de cuál era la situación económica de la Cooperativa, dejando en todo momento en manos de la Asamblea la decisión ateniente a las medidas concretas que debían adoptarse para hacer frente a las dificultades económicas, entre las que se encontraba la posibilidad de obtener liquidez a cambio de gravar el patrimonio inmobiliario, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley, que literalmente establece que «todos los asuntos propios de la Cooperativa, aunque sean competencia de los otros órganos sociales, podrán ser objeto de debate y acuerdo de la Asamblea General», y con la propia naturaleza del Consejo, que el artículo 53 configura como órgano de gobierno, gestión y representación de la Sociedad Cooperativa, enteramente sujeto a la Ley y a los Estatutos, y también «a la política general fijada por la Asamblea General», habiendo recordado esta Sala, -si bien con relación a la Junta de accionistas de la Sociedad Anónima-, órgano soberano equivalente a la Asamblea General de la Sociedad Cooperativa, que "no se puede negar la soberanía de la Junta de accionistas sobre los demás órganos de administración de la sociedad..." soberanía que ha de entenderse en las relaciones de carácter vertical, "en el sentido de que los acuerdos de la junta son soberanos respecto a los demás actos de la administración de la sociedad que puedan nacer de otros órganos de gobierno de la sociedad sobre cuestiones tratados legalmente en la Junta de conformidad con el orden del día". En consecuencia, la demanda fue acertadamente desestimada en ambas instancias al faltar los presupuestos de la acción de responsabilidad ejercitada, sin que haya sido acreditado que el perjuicio sufrido por los actores, derivado del impago de sus créditos, tuviera su causa en el comportamiento doloso, abusivo o gravemente negligente de los miembros del Consejo Rector, quienes, según consta, se esforzaron en inyectar liquidez a la sociedad para saldar las deudas contraídas, también con los actores.»»

*** Sentencia de 8 de octubre de 2008 (Social) RA 7377/2008**[1]

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana

Resumen

Pago único de la prestación por desempleo, por incorporación a cooperativa o sociedad laboral. Cuantía limitada a la necesaria para adquirir la condición de socio, entendiéndose por ésta no el capital suscrito inicialmente por el socio, sino el capital social cuyo desembolso es exigible.

Fundamentos de derecho

La sentencia se dicta en virtud de un recurso de casación para la unificación de la doctrina, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación del INEM contra la sentencia de 29 de marzo de 2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el recurso se alega infracción del art. 228.3 LGSS y del RD 1044/1985, de 19 de junio, la DT Cuarta 1.1º párrafo 2º de la Ley 45/2002 en relación con los arts. 12.6 y 13.2 f de la Ley 2/1999 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y se aporta como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de abril de 2006.

El Tribunal Supremo reconoce contradicción entre ambas sentencias al tratarse de decisiones dispares sobre una misma cuestión planteada por dos trabajadores que se integraron en Cooperativas, que suscribieron el 25% del capital social inicialmente, y alega que la cuestión de fondo planteada ya fue resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 octubre 2007 y 16 enero 2008 y se remite literalmente a los fundamentos dictados en estas, para concluir que:

«a) tal como evidencia el art. 12.6 de LSCA es perfectamente diferenciable la «aportación obligatoria inicial para ser socio» y la «parte de la misma que debe desembolsarse en el momento de la suscripción», de manera que en principio no parece factible identificar aquélla con ésta; b) aclarado este extremo, un recto entendimiento de la norma nos lleva a considerar que la cualidad de socio se adquiere por la suscripción de la aportación obligatoria y el desembolso que en la misma fecha ha de realizarse de la parte correspondiente de aquélla, sin perjuicio de la obligación que tal socio tiene para llevar a cabo el pago aplazado de los siguientes reembolsos, hasta cuya fecha ejerce -desde luego- los derechos inherentes a la condición de socio; c) la distinción se proyecta sobre la DT Cuarta de la Ley 42/2002, de forma que la frase «aportación obligatoria establecida [...] en lo necesario para acceder a la condición de socio», no puede sino entenderse razonablemente alusiva al concreto desembolso inicial que consiente ejercer los derechos sociales, no a la totalidad de aporte dinerario que se suscribe y que ha de ingresarse aplazadamente, pues de interpretarse en esta última forma el sentido del precepto, resultaría absolutamente superfluo el segundo inciso [particularmente la adjetivación «en lo necesario»] y bastaría con la referencia la «aportación obligatoria establecida»; y d) en el caso de autos, la aportación inicial [obligatoria para ser socio] es la cantidad fijada en los Estatutos, pero la condición de socio se ostenta desde el momento

1. Esta sentencia, junto con otras relativas al tema del pago único de la prestación por desempleo ha sido objeto de comentario por Vanessa Martí Moya y Luis Millán Alventosa en RJCiriec Nº 20/2009 pp. 307 – 311.

en que se suscriben la totalidad de los títulos que integran aquélla [veinte mil] y se abona el importe fijado como primer pago [cinco mil]. Por ello es correcto que la EG satisfaga en pago único la cantidad -inicialmente desembolsada- de 5.000 euros y que destine la restante prestación capitalizada a atender los futuros devengos cotizatorios del trabajador; tal como inequívocamente norma la regla segunda de la DT Cuarta de la Ley 42/2002».

El Tribunal resuelve que la doctrina ajustada a Derecho es la contenida en la decisión de contraste y revoca la sentencia recurrida.

*** Sentencia de 14 de octubre de 2008 (Civil) RA 6913/2008**

Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel

Resumen

Cooperativa de viviendas. Suspensión de pagos. Responsabilidad de auditores por ejecución deficiente de auditoría. Relación de causalidad con insolvencia sobrevenida de la cooperativa. Infracción art. 11 Ley Auditoría 12/1988 y art. 1902 Código civil.

Fundamentos de derecho

«TERCERO. (…) Como se indicó, hemos de partir de que cuando un conjunto de condiciones es antecedente necesario de un resultado conforme a las reglas de la experiencia, todas ellas merecen la calificación de causa, con independencia de su jerarquía relativa, esto es, aunque fueran meramente cooperadoras o concomitantes.

Ello sentado, no hay duda de que la actividad de los auditores como garantía de la veracidad de las cuentas auditadas, en particular, en los casos en que la norma la impone -como es el contemplado en el recurso: artículos 69 y 131 de la entonces vigente Ley 3/1987, de 2 de abril -importaba a la otra parte del contrato de auditoría y a las personas en ella integradas como socios y tenía, además, un indudable interés general -al que se refiere la sentencia de 10 de diciembre de 1998 -.

Hoy destaca ese aspecto el considerando 9º de la Directiva 2006/43 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 -relativa a la auditoria legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo-, al indicar que "una amplia comunidad de personas e instituciones confían en la calidad del trabajo de un auditor legal" y añadir que "la buena calidad de las auditorias contribuye al correcto funcionamiento de los mercados al incrementar la integridad y la eficiencia de los estados financieros".

También atribuye esa proyección a la auditoria, con detalle descriptivo, la exposición de motivos de la Ley 19/1988, según la que "la auditoría de cuentas es, por tanto, un servicio que se presta a la empresa revisada y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa, sino también a terceros que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas".

Por ello -como señala el considerando 19º de la Directiva 2006/43/C- los auditores, obligados a llevar a cabo su trabajo con la diligencia debida, son responsables de los perjuicios financieros que hayan causado por negligencia. Y, hay que añadir, no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de la prestación, sino también frente a los terceros que se relacionen con la sociedad auditada -como expresamente establecía el artículo 11.1 de la Ley 19/1988, en la

redacción vigente cuando la demanda fue interpuesta-, claro está, siempre que concurran los requisitos precisos para afirmar una responsabilidad extracontractual conforme a las normas generales del Código Civil -a las que se remite el artículo 11.1 citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 44/2002, de 24 de noviembre -.

III. La declarada infracción de las reglas de la "lex artis" por parte de los auditores demandados, aunque no hubiera sido la causa principal de la crisis económica de la sociedad auditada y, por ello, del incumplimiento por la misma de sus compromisos frente a los actores, contribuyó a ese resultado, pues privó a estos, como socios, de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de aquella.

Ello sentado, un razonable juicio de probabilidad, a la vista de todas las apariencias, lleva a concluir que, de haber dispuesto los socios actores de esa información habrían modificado su actitud ante la cooperativa sustituyendo sus periódicos asentimientos sobre las cuentas presentadas por una reacción ante lo que no era más que una gestión social irregular que, de modo irremisible, llevaba a la sociedad a la situación económica causante del objetivo incumplimiento de los compromisos por ella asumidos.

Reacción, la omitida, que con toda probabilidad hubiera sido más eficaz que la que los actores emprendieron más tarde, al tener que aceptar, como única solución, un aumento de costes de la adjudicación de las viviendas, con novación de lo pactado y, al fin, con una forzada actitud de tolerancia ante el desconocimiento por PSV Sociedad Cooperativa de la regla "pacta sunt servanda".

Para proporcionar a los socios de la entidad auditada esa información, el ordenamiento regula un medio útil, por su carácter profesional y riguroso, al fin de posibilitar una emisión consciente del voto sobre la aprobación de las cuentas sociales.

Los intereses de los actores y los demás socios estaban, en definitiva, protegidos por la norma que los auditores demandados infringieron. De ahí que proceda imputarles objetivamente el daño que los demandantes sufrieron, en los términos que había establecido la sentencia de la primera instancia».

*** Sentencia de 19 de noviembre de 2008 (Cont. Adm) R.A. 7918/2008**

Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frías Ponce

Resumen

Cooperativa de servicios de asistencia social. Cooperativa sin ánimo de lucro. Exención procedente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Antecedentes de hecho

La cooperativa presentó escrito a la Administración de la AEAT solicitando el reconocimiento de la exención prevista en el artículo 20 Uno 8 de la Ley 37/1992, invocando su condición de entidad privada de carácter social y alegando que la entidad era resultado de la fusión de otras dos cooperativas a las cuales se les había reconocido previamente el carácter social. Dicha pretensión fue denegada por resolución y formulado recurso de reposición fue igualmente desestimado.

Contra dicho acuerdo se promovió reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña, que fue desestimada, y se impugnó ante el TEAC, quien dictó sentencia igualmente desestimatoria, negándose la carencia de fin de lucro "ya que, aunque los estatutos de la entidad así lo expresen, el hecho de tratarse de una sociedad cooperativa y, por ello,

actuar en el comercio y tener carácter empresarial, impide que se considere tal ausencia de ánimo de lucro".

La sentencia recurrida estimó el recurso, no acogiendo los razonamientos del TEAC, al partir "de una afirmación que no es cierta, cual es que las cooperativas deben por imperativo del ordenamiento jurídico tener carácter lucrativo, pues la Ley 27/1999 de Cooperativas, en su disposición adicional primera, expresamente reconoce la posibilidad de la existencia de Cooperativas sin ánimo de lucro, estableciendo los requisitos al efecto, y si bien esta Ley es posterior a la solicitud de exención, y con anterioridad la regulación no señalaba nada al respecto, no considera consustancial a una cooperativa en la regulación anterior el ánimo de lucro, al ser posible la adopción de esta forma societaria para el cumplimiento de fines sociales sin ánimo de lucro, cuando, como en este caso, resulte de sus estatutos".

Se formula por el Abogado del Estado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, amparado en un único motivo de casación por infracción de los artículos 20.1.8 y 20.3 de la Ley 37/1992 del IVA, en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 27/1999 y con el artículo 9.3 de la Constitución Española. Alega la parte recurrente que "aunque los estatutos sociales de la entidad reconocen la ausencia de ánimo de lucro, lo cierto es que el hecho de tratarse de una sociedad cooperativa y, por ello actuar en el comercio y tener legalmente carácter empresarial, impide que se considere tal carencia", y aunque el texto de la Ley 27/1999 admita la existencia de sociedades cooperativas sin ánimo de lucro, por la fecha de iniciación de su actividad, la cooperativa no había podido obtener la calificación legal de sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, "puesto que era un concepto inexistente en la normativa anterior".

Fundamentos de derecho

El Tribunal analiza los arts. 20.1.8 y 20.3 de la Ley 37/1992 y tomando en consideración que de los estatutos de la sociedad se deduce de modo indubitado que la entidad carece de ánimo de lucro, concluye que el único elemento objetivo sobre el que se ha fundado la denegación de la exención ha sido la forma jurídica elegida por la entidad peticionaria, y prosigue:

«CUARTO "…Sin embargo tales argumentos son insuficientes para denegar la exención solicitada, ya que si la Ley hubiera querido imponer o proscribir alguna forma jurídica para las entidades eventualmente beneficiarias de tal exención lo hubiera manifestado expresamente y no lo ha hecho. Se entiende que la opción de una forma jurídica u otra es un asunto de legítima opción en materia societaria, en la medida en que la Ley confiere a las distintas entidades, diferentes facultades de actuación, distintos órganos de gestión y decisión y diferente responsabilidad jurídica para sus titulares. Por ello la elección de una u otra forma jurídica no es indiferente sino que tiene unas consecuencias jurídicas bien definidas que razonablemente deben adaptarse a las finalidades perseguidas. Sin embargo, la forma jurídica no puede erigirse como elemento constitutivo para el disfrute de las exenciones fiscales en las actividades desarrolladas por la entidad, ya que la Ley no lo regula así y, ante el silencio de la misma, no pueden hacerse interpretaciones restrictivas que no están contenidas ni en su letra ni en su espíritu.

Finalmente, tampoco menciona la Ley que, en caso de prestarse los servicios exentos por entidades que revistan la forma de cooperativas, deban obtener la previa calificación de "sociedad cooperativa sin ánimo de lucro", sino que el texto legal sólo alude a requisitos de carácter material, cuya concurrencia en este supuesto no parece ser discutida o negada por la Administración, ni en sede administrativa ni jurisdiccional, sino que más bien sus alegaciones se centran exclusivamente en objetar la procedencia de la exención por la forma socie-

taria de la entidad y por su falta de calificación como sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, cuestiones ambas que no son exigidas por la norma legal».

Por lo que concluye el Tribunal desestimando el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado

*** Sentencia de 26 de febrero de 2009 (Civil) TOL 1.463.065**

Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente-Luis Montés Penadés

Resumen

Cooperativas. Impugnación de acuerdos adoptados por la Asamblea de sociedad cooperativa. Veinte socios postulan la nulidad de los acuerdos por no haber sido aprobada el Acta, por haber sido privados los cooperativistas del derecho al voto, ya que no se sometieron a votación diversos puntos del orden del día, por defecto de convocatoria que adolecía de falta de claridad y por vulneración del principio de igualdad. Se desestiman todos los motivos.

Fundamentos de derecho

«PREELIMINAR.- (…) De modo que la nulidad de los acuerdos de la misma Asamblea se postulaba: a) Por no haber sido aprobada el Acta; b) Por haber sido privados los cooperativistas del derecho de voto, ya que no se sometieron a votación diversos puntos del orden del día; c) Por defecto de la convocatoria, que adolecía de falta de claridad y d) vulneración del principio de igualdad por entregarse viviendas en distinta situación respecto del final de las obras. Además, respecto de los acuerdos comprendidos en el primer punto del orden del día, se postula la nulidad por ser contrarios a la Ley o, subsidiariamente, contrarios a los Estatutos y lesivos del interés social. Finalmente, se solicita la declaración de nulidad, o subsidiariamente de anulabilidad del acuerdo del tercer apartado del punto primero, relativo al tratamiento de los gastos financieros y otros asuntos económicos.

PRIMERO.- En el primero de los motivos del recurso se denuncia la infracción del artículo 7.1 del Código Civil y la inaplicación de "la pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina de los propios actos"….. El motivo se desestima…..La aplicación de la doctrina de los propios actos es, en la sentencia recurrida, un obiter dictum. El Recurso de Casación se da contra el fallo, no contra los fundamentos de la sentencia, salvo que sean determinantes del fallo, ni contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento, no sobre obiter dicta (SSTS 14 y 20 de febrero y 30 de octubre de 2002, 29 de abril de 2003, 29 de octubre de 2004 etc). Los pedimentos 1 y 2 se desestiman por aplicación del criterio que se contiene en el artículo 113 LSA sobre el valor del acta, pues se estima que su falta en los quince días siguientes a la Asamblea no genera la nulidad de los acuerdos, sino que a lo sumo produce la falta de ejecutividad de los acuerdos. Tal criterio, por cierto, en orden a la validez de los acuerdos se obtiene con igual claridad de los artículos 28.5, 29.2 y 31.1 de la Ley General de Cooperativas. De este modo no puede decirse que la alusión a la doctrina de los propios actos, por desafortunada que pueda considerarse, constituya fundamento del fallo, ni, por ende, puede ser objeto del recurso de casación.

SEGUNDO.- En el segundo de los motivos del recurso se denuncia la infracción del artículo 29.1 de la Ley 27/1999, de Cooperativas, que se refiere al contenido mínimo del acta….El motivo no puede prosperar….. Los ahora recurrentes postulan la nulidad de la Asamblea, y de los acuerdos adoptados, por una infracción que habría que referir al artículo 29.2 LC, puesto que hay acta y relación de asistentes, pero se redactaron o confeccionaron más allá del plazo

de quince días que señala el artículo 29.2…. El criterio de esta Sala no va en esa dirección. La STS de 31 de julio de 2002 recordaba que, según su doctrina, el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas no decreta la nulidad por incumplir alguna de sus reglas, sino que tal declaración queda a la discreción y prudencia de los Tribunales, y que la doctrina jurisprudencial tiene declarado que aunque la lista de asistentes no conste en el acta, basta que se demuestre que ha existido (STS 31 de octubre de 1984) y también que puede incluirse en documento diferente al acta (STS 19 diciembre de 1984).

Finalmente el artículo 31.1II de la Ley de Cooperativas establece que si fuera posible eliminar la causa de impugnación el Juez otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada. En el caso, la falta de la relación de asistentes ha sido subsanada al efectuase su presentación en autos….

TERCERO.- En el motivo tercero denuncian los recurrentes la infracción del artículo 24.2 de la Ley 27/1999 de cooperativas, en relación con el artículo 22.3 de los Estatutos "e inaplicación de la pacífica doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia de claridad en la convocatoria…..El motivo se desestima…El motivo, en vista de lo actuado, carece de consistencia, es intempestivo y contradictorio. Por una parte, hay que señalar que fue votado por una gran mayoría de los socios. Por otra parte, que no es coherente, y constituye una actuación contra la buena fe (artículo 7.1 CC) que es exigible en el ejercicio de toda clase de derechos, que se reciba la convocatoria con el Plan, se solicite una ampliación del orden del día, sin objetar falta de claridad, se acuda a la votación conforme al orden del día establecido con la intervención de los ahora disidentes, y después se pretenda obtener la nulidad de los acuerdos por falta de claridad. Se trata de una conducta desleal, que no puede ser amparada por el derecho (SSTS 3 de enero de 2007, 20 de junio y 4 de julio de 2006, 14 de mayo de 2002, 22 de febrero de 2001, 2 de octubre de 2000 etc).

CUARTO.- En el motivo cuarto se denuncia la infracción de los artículos 1 y 89 de la Ley 27/99, de Cooperativas, en relación con el artículo 4 de los Estatutos, así como la "inaplicación de la pacífica doctrina de esta Sala sobre los principios rectores de igualdad, solidaridad y mutualismo que han de regir la actividad cooperativa"…..La cooperativa, dicen los recurrentes, está obligada a cumplir con su objeto social, que no es otro que proporcionar a sus socios las viviendas terminadas, pero el Consejo Rector opta por entregar las viviendas en la situación en que se encontraban, unas terminadas y otras por terminar..El motivo no puede prosperar….El documento 20 de los acompañados a la demanda, demuestra que el socio, con los respectivos descuentos, o la Cooperativa, se hacían cargo de las obras imprescindibles para obtener el certificado de fin de obras y la cédula de habitabilidad. La Sala entiende, al considerar la solución adoptada y la especial circunstancia en que se encontraba la Cooperativa, que hay que convenir con el Juzgado y con la Sala de instancia en que no puede considerarse en quiebra el principio de igualdad ni que se haya tratado de manera discriminatoria a unos socios respecto de otros, y que se da cumplimiento, de este modo, al menos sustancialmente, al objeto de la sociedad cooperativa, sin que pueda apreciarse vulneración de lo dispuesto en los artículos 1 y 89 de la Ley de Cooperativas, respecto de los cuales, por otra parte, no se ha efectuado con precisión el acotamiento que permitiera un análisis más detenido en cuanto a los específicos preceptos que pudieran resultar infringidos».

*** Sentencia de 4 de marzo de 2009 (Civil) TOL 1.466.725**

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

Resumen

Sociedad Anónima de capital repartido entre cooperativas, sociedades anónimas, sociedades agrarias y comerciantes individuales relacionados con la fruta. Impugnación de acuerdos del Consejo de Administración: Validez o nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad demandada consistente en autorizar la venta por una sociedad anónima (Mercolleida S.A) de sus acciones de una también sociedad anónima (Indulleida S.A) a una cooperativa (Actel SCCL). Consecuencias que asumen las sociedades agrarias y los empresarios individuales relacionados con la fruta cuando deciden agruparse bajo la forma de una sociedad eminentemente capitalista como es la sociedad anónima.

Fundamentos de derecho

«PRIMERO.- (...) las cuestiones que plantea el presente recurso de casación, interpuesto por las diversas sociedades anónimas, sociedades agrarias de transformación, sociedades cooperativas catalanas y agricultores individuales que integran la parte actora, socios todos ellos a su vez de la mercantil demandada, se ciñen a la validez o nulidad del acuerdo relativo al segundo punto del orden del día adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad demandada en su reunión de 12 de junio de 2001, acuerdo consistente, en esencia, en autorizar la venta por Mercolleida S.A de sus acciones de Indulleida S.A a Actel SCCL por un precio de 410.001.408 pesetas.

Rechazada la nulidad de tal acuerdo por la sentencia impugnada al considerarlo acorde con las facultades reconocidas al Consejo de Administración por el art. 6 de los estatutos sociales, modificado en su día muy significativamente en comparación con su anterior redacción e interpretado de acuerdo con el principio general favorable a la libre transmisibilidad de las acciones presente en el art. 63 de la LSA, el recurso de casación interpuesto por los codemandantes, integrado por tres motivos después de haberse inadmitido por esta Sala otros dos, insiste en la nulidad del acuerdo el cuestión desde la perspectiva general de que Indulleida S.A constituye una extensión de la actividad propia de sus socios, todos ellos comerciantes individuales o sociedades relacionadas con la fruta, y que por tanto la modificación de sus estatutos mantuvo la "filosofía inicial" de la compañía de evitar tanto la entrada de socios capitalistas como el control de la sociedad por un accionista que tuviera mayoría absoluta.

SEGUNDO.- Al centrarse la cuestión litigiosa, por tanto, en las facultades del Consejo de Administración en relación con la venta de acciones según el art. 6 modificado de sus estatutos, antes de examinar los motivos del recurso conviene transcribir literalmente el contenido de dicho artículo antes de ser modificado y el texto resultante de su modificación, no sin dejar sentado que en el litigio no se ha planteado la posible nulidad del propio artículo en si mismo.

"ARTICULO 6º.- *Las transmisiones por título hereditario serán válidas en cualquier caso en que se realicen. La transmisión intervivos al cónyuge, ascendiente, descendiente y hermanos, será válida sin ningún otro requisito. Para la validez del resto de transmisiones intervivos se tendrá en cuenta lo siguiente:*

A).- El accionista que se proponga enajenar una o más acciones, lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo de Administración mediante carta certificada, en la que se expresará la numeración de las acciones que se desee transferir y su precio.

B).- Dentro de los quince días siguientes al recibo de dicho escrito, el Presidente del Consejo transmitirá la oferta recibida única y exclusivamente a los accionistas de la sociedad,

directamente mediante carta certificada en caso de ser conocido su domicilio, y de no serlo, por medio de anuncio publicado en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia donde la sociedad tenga su domicilio.

C) Los accionistas que deseen ejercitar el derecho preferente de compra, deberán comunicarlo al Presidente del Consejo de Administración dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación, o en su caso, de la publicación del anuncio. Transcurrido este plazo, el Presidente trasladará las ofertas recibidas al oferente…"

….Tras su modificación, el mismo artículo quedó redactado así:

"ARTICULO 6º.- *Las transmisiones de acciones por título hereditario serán válidas en cualquier caso en que se realicen. Para la validez de las transmisiones intervivos deberán cumplirse los siguientes requisitos:*

A).- El accionista que pretenda transmitir una o más acciones lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo de Administración mediante notificación fehaciente, en la que se expresarán los datos de la persona a favor de la que piensa efectuarse la transmisión, la numeración de las acciones a transmitir, su precio y la forma de pago. Simultáneamente procederá al depósito de los títulos de las acciones ante el propio Presidente mediante su entrega en las oficinas de la sociedad.

B).-1) El Consejo de Administración, durante los quince días siguientes al de recepción de la notificación podrá acordar la compra de todas o parte de las acciones, bien directamente cumpliendo los requisitos que para las adquisiciones de acciones propias señala la legislación, o bien ofreciéndoselas a terceros interesados, sean o no accionistas, si bien en el caso de que el vendedor de acciones o derechos sea una Cooperativa Agraria de primer grado o una Sociedad Agraria de Transformación, que sean socios de una cooperativa de segundo grado, y pertenezca a su Organización de de Productores y le aporten toda su fruta o la de sus respectivos socios para su comercialización o en definitiva para darle un destino en común y que acredite fehacientemente tal condición, se las ofrecerá prioritariamente a dicha cooperativa de segundo grado. La cooperativa de segundo grado dispondrá de un plazo de quince días para ejercer, en su caso, el derecho de compra, lo que llevará a cabo mediante notificación fehaciente al Presidente.…

TERCERO.-(…) Si esa contradicción interna del planteamiento del motivo es suficiente ya por sí sola para desestimarlo, pues revela que el texto del art. 6 de los estatutos sí estaba necesitado de interpretación más allá de la pura literalidad de sus términos, lo que a su vez determina que según reiteradísima doctrina de esta Sala deba respetarse la labor interpretativa del tribunal sentenciador, también resulta, además, que en este motivo la parte recurrente prescinde por completo, tal vez obligada por la radicalidad de su planteamiento sobre la absoluta claridad del texto en cuestión, de la muy extensa motivación de la sentencia impugnada, con razonamientos que comprenden desde la finalidad que guió en su momento la modificación de ese artículo de los estatutos hasta el carácter con el que actuaban los miembros del Consejo de Administración que autorizó la compraventa de las acciones, pasando por una muy atenta consideración de la libre transmisibilidad de las acciones como principio o regla general del régimen de las sociedades anónimas, lo que significa, en suma, que la parte recurrente opta en este motivo por lo puramente anecdótico, centrando su crítica en el vocablo "bendecir" que el tribunal sentenciador incluye en su extensa motivación como figura puramente retórica para explicar gráficamente la actuación del Consejo de Administración, y en cambio rehuye lo fundamental, que es por qué razón no puede considerarse tercero interesado al tercero que ya ha manifestado su interés.

(…) Y es que dicha parte recurrente, que tanto en este segundo motivo como en todo su escrito de interposición del recurso omite cualquier referencia al texto anterior del art. 6 en cuestión, atribuye al texto modificado el sentido que en su opinión habría debido de tener pero no el que por su propio contenido, comparado con el de su anterior redacción, efectivamente tiene, añadiendo la misma parte, de su propia cosecha, un serie de limitaciones a las facultades del Consejo que en modo alguno resultan del texto de los estatutos ni, menos aún, del hecho de la modificación del texto anterior.

Podría haberse planteado tal vez la nulidad del nuevo texto del art. 6 por atribuir al Consejo de Administración unas facultades excesivas o una delegación permanente de facultades no acompañada de los requisitos del art. 141.2 LSA; como también cabría preguntarse sobre las consecuencias que asumen las sociedades cooperativas y agrarias y los empresarios individuales relacionados con la fruta cuando deciden agruparse bajo la forma de una sociedad eminentemente capitalista como es la sociedad anónima.

Lo que no cabe discutir, en cambio, es que la modificación del art. 6 de los estatutos de la sociedad demandada, comportó como claramente se desprende de comparar su texto anterior con el resultante de su modificación, la supresión en la práctica del derecho de adquisición preferente de los accionistas, pues si antes el apdo B) de dicho artículo anteponía "única y exclusivamente a los accionistas de la sociedad", a quienes en el apartado C) se facultaba para ejercitar, literalmente "el derecho preferente de compra", después, en cambio, facultó al Consejo de Administración para acordar la compra de todas o parte de las acciones, cumpliendo en tal caso los requisitos legales de las adquisiciones de acciones propias, o para ofrecérselas a "terceros interesados, sean o no accionistas", con la sola restricción de que si el accionista vendedor fuera una cooperativa agraria de primer grado o una sociedad agraria de transformación, socios a su vez de una cooperativa de segundo grado y con unos requisitos añadidos, la oferta se haría prioritariamente a esa cooperativa de segundo grado. En consecuencia, el Consejo sólo tenía esa limitación en su oferta a "terceros interesados" fueran o no accionistas, y únicamente si no decidía la adquisición para la propia sociedad o su oferta a "terceros interesados", esto es a uno o varios, el Consejo venía obligado a ofrecerlas al "resto de accionistas", que sólo entonces tenían "un derecho de preferente adquisición" según el apdo. F. del art. 6.

Pues bien, si al sentido que inequívocamente tuvo la modificación estatutaria se une que, como razona la sentencia recurrida y se desprende del art. 63 LSA y de la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 25-10-99, citada por la propia recurrente y 30-4-99), el principio o regla general en el régimen jurídico de las sociedades anónimas es el de la libre transmisibilidad de las acciones ("Sólo serán válidas frente a la sociedad las restricciones…", apdo.1 del art. 63; "serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción", apdo. 2 del mismo artículo; "La transmisibilidad de acciones sólo podrá condicionarse" apdo 3 y último), forzoso será concluir que la sentencia recurrida en modo alguno infringe el art. 1281 CC ni ninguno de los que le siguen referidos a la interpretación de los contratos, pues habiendo ya un tercero interesado en comprar las acciones, el aprobar o autorizar una compraventa previamente proyectada entre comprador y vendedor equivalía, como entiende el tribunal sentenciador, a ofrecer las acciones a ese mismo tercer interesado con la subsiguiente aceptación de la oferta de éste.

En suma de contrastar los apdos. A), B) y C) del texto modificado con sus apartados F) y G),lo que resulta es una muy considerable capacidad de control del Consejo de Administración, tal vez excesiva, sobre quién podía comprar las acciones del socio que quisiera venderlas, pero no un derecho d los accionistas, salvo que la vendedora fuese una cooperativa agraria de

primer grado o una sociedad agraria de transformación, con todos los demás requisitos que se añadían el el apdo. B.1. del art. 6, a comprar las acciones, con prioridad al tercero ya interesado en la compra, pues el Consejo, según el mismo apdo. B.1 podía "acordar la compra", lo que sí parece equivalente a autorizar la compra, bien para la propia sociedad, bien por un tercero interesado, de suerte que difícilmente cabe tachar de ilógica, arbitraria, irrazonable o contraria a un precepto legal la interpretación del art. 6 de los estatutos por el tribunal sentenciador.

Todo lo razonado hasta ahora conduce prácticamente por sí solo a desestimar el tercer y último motivo admitido del recurso».

*** Sentencia de 6 de abril de 2009 (Civil) TOL 1.490.809**

Ponente: Encarnación Roca Trias

Resumen

Cooperativas. Expulsión de socios. Modificación de estatutos. Se considera nulo el acuerdo de expulsión de los socios acordado en Asamblea General Extraordinaria que ratifica el acuerdo de expulsión acordado por el Consejo Rector, pues tanto el expediente sancionador como el acuerdo de sanción adoptado por el Consejo Rector de la Cooperativa están viciados de nulidad, dado que en el momento de inicio del expediente y la sanción posterior todavía no estaba vigente la modificación estatutaria impugnada aunque fue acordada antes de la imposición de la sanción y por ello no regía el artículo en el que se basa el acuerdo de sanción, dado el efecto constitutivo de la inscripción de la modificación.

Fundamentos de derecho

«PRIMERO.- Resumen de los hechos.

1º.- La sociedad cooperativa de viviendas Ladera había contratado la construcción de unas viviendas, habiéndose producido un problema económico con la empresa constructora, la sociedad se vio obligada a tomar unos acuerdos en una Asamblea General celebrada el 22 de febrero de 2001, en la que el Consejo Rector de la citada cooperativa propuso y se aprobó un plan rector.

2º.- Según consta en los hechos probados y aceptados por ambas partes, en la Asamblea General extraordinaria celebrada el día 12 de julio de 2001 se modificaron los artículos 15 y 16 de los estatutos de la Sociedad cooperativa. En el artículo 15 (j) se tipificaba una nueva falta muy grave, consistente en el incumplimiento por parte de los socios de cualquier acuerdo económico o social adoptado por la Asamblea o Consejo Rector….

3º.- En el mes de julio de 2001 los socios demandantes fueron requeridos dos veces por la cooperativa para el correspondiente otorgamiento de la escritura pública, fijándose dos fechas en las que los requeridos comparecieron en la Notaría, pero no se llegaron a firmar las correspondientes escrituras por no estar de acuerdo dichos socios con el contenido propuesto, que a su parecer, vulneraba los acuerdos de la asamblea de febrero de 2001 y proyecto rector…

4º.- El 13 de septiembre de 2001, el Consejo Rector adoptó el acuerdo de instruir expediente a los cuatro socios por falta muy grave, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 (j) de los estatutos, por no haber procedido a la firma de las correspondientes escrituras. Los socios formularon alegaciones y el instructor propuso la expulsión. El acuerdo del Consejo Rector, de 15 de noviembre de 2001, impuso a los cuatro socios la sanción de expulsión. Se recurrió dicho acuerdo, que fue ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de 13 de marzo de2002 (…).

6.- La sentencia del Juzgado de1ª Instancia nº 4 de Murcia de 30 de diciembre de 2002 determinó que el objeto del pleito se centraba en la *"legalidad del procedimiento de expulsión y la concurrencia o no de causa de expulsión de los actores"*….en realidad la única causa que se calificó como grave y que motivó la expulsión fue la negativa a otorgar la escritura pública. Respecto del acuerdo, la sentencia concluye que…"*la demanda debe ser estimada y anulado el acuerdo impugnado, pues cuando tanto el expediente sancionador como el acuerdo de sanción adoptado por el Consejo Rector de la Cooperativa están viciados de nulidad, pues en el momento de inicio del expediente y la sanción posterior todavía no estaba vigente la modificación estatutaria impugnada y acordada y por ello no regía el artículo 15 j) en el que se basa el acuerdo de sanción"…*

7.- Recurrió en apelación la Sociedad Cooperativa de viviendas Ladera. La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, dictó sentencia en fecha 30 de diciembre de 2002 estimando el recurso de apelación y revocó la sentencia apelada. Señala que "*frente a lo que entiende el Juez de Primera Instancia, considera esta Sala que la única trascendencia de que todavía no estuviera inscrita en el Registro la modificación estatutaria es que hasta el momento de la expulsión no era ejecutiva y por tanto no podía materializarse el acuerdo de expulsión de los cooperativistas expedientados, pero una vez inscrita la modificación estatutaria cesaba la suspensión del acuerdo…..El acuerdo de expulsión, tras el expediente y la modificación estatutaria, fue válidamente adoptado, pero no se podía aplicar hasta que dicha modificación estatutaria se inscribiera en el Registro de Sociedades Cooperativas*….por lo cual debía declararse la validez del acuerdo de expulsión

A) RECURSO POR INFRACCION PROCESAL.

SEGUNDO.- El motivo único del recurso por infracción procesal presentado por los recurrentes denuncia la infracción del artículo 218 LEC, porque la resolución recurrida no se pronuncia sobre los distintos puntos que fueron objeto del litigio y está insuficientemente motivada. ….El motivo no se estima….L a sentencia es absolutamente coherente con lo discutido en el recurso de apelación…..

B) RECURSO DE CASACION

(…) QUINTO.- A favor de que no sea aplicable la modificación efectuada en los estatutos sociales existen varios argumentos:

1º.- Necesidad de la inscripción para la modificación estatutaria. El artículo 19 de la Ley 37/1987 establecía que la inscripción de las modificaciones de los estatutos de las cooperativas era constitutiva. La expresión ha desaparecido en el artículo 9 del Reglamento del registro de las sociedades cooperativas (RD 136/2002, de 1 de febrero), aunque se sigue obligando a inscribir la modificación de los Estatutos en el artículo 9.1, b), que establece que dicha inscripción es preceptiva. El carácter constitutivo que la inscripción de la modificación tenía en el momento en que se produjo la que ahora ocupa esta Sala, significa que el Registro opera como elemento para que el cambio tenga lugar, de modo que aunque se haya producido por un acuerdo del órgano establecido en los Estatutos para tomar esta decisión, éste sólo actúa como el elemento previo indispensable para que pueda inscribirse, pero sólo a partir de la inscripción de este acuerdo, se producirá la modificación acordada. Por tanto, para que la modificación quede perfectamente establecida se necesita la inscripción, por lo menos en la normativa reguladora en el momento en que ésta se produjo.

2º.- Como una consecuencia del anterior argumento, debe señalarse que al no estar inscrito el acuerdo, la sanción no estaba tipificada, por lo que en aplicación del principio de la tipicidad para las sanciones, contenido en el artículo 25.1CE, debe concluirse que nadie puede ser sancionado por una causa que no estaba tipificada en el momento de cometerse el acto por

el cual se impone la sanción. Es cierto que el principio de legalidad establecido en el artículo 25.1 CE se aplica a los delitos y las sanciones administrativas, y que se ha discutido si existe también este principio en el ámbito civil. Lo cierto es que la situación en este caso es típicamente sancionatoria, en el sentido de que, además de la imposición de una multa, se prevé en los estatutos la expulsión del socio incumplidor, por lo que al no estar tipificada la sanción en el momento en que se produce el hecho, se ha incurrido en una vulneración del principio constitucional de legalidad.

3.- La cuestión en este caso tiene mayor importancia al tratarse de la privación de la condición de socio, lo que, además podría vulnerar de forma directa el artículo 22 CE.

4.- Finalmente, por los mismos argumentos expuestos en el apartado segundo de este fundamento, no sería posible la aplicación de una norma sancionadora con efectos retroactivos…

SEPTIMO.- (…) debe considerarse nulo el acuerdo por el que se sancionaba a los socios ahora recurrentes».

*** Sentencia de 14 de abril de 2009 (Civil) TOL 1.514.753**

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Resumen

Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: Responsabilidad por negligente ejercicio de sus deberes: procedencia. El principio prohibitivo del enriquecimiento injusto no cabe aplicarlo a los socios de una cooperativa para que respondan de las deudas sociales más allá de sus aportaciones al capital social, alterando el régimen legal de garantía de los acreedores más allá de sus aportaciones sociales.

Fundamentos de Derecho

«CUARTO.- (…) Procede a continuación examinar el recurso de casación interpuesto por la misma actora, integrado por un solo motivo que se funda en infracción del art. 1.4 cc en relación con la jurisprudencia de esta Sala sobre el principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto.

Según la parte recurrente, la sentencia impugnada habría infringido la doctrina de esta Sala sobre el carácter subsidiario de la acción por enriquecimiento injusto al considerar acción específica, impeditiva de la acción de enriquecimiento contra los socios de la cooperativa, la de responsabilidad de los miembros de su consejo rector. Para la recurrente no cabe este planteamiento porque la responsabilidad de administradores y cooperativistas tiene un mismo presupuesto, que es la insolvencia de la cooperativa, de modo que el tribunal tendría razón si en este litigio se hubiera demandado por enriquecimiento a la cooperativa o a sus socios sin antes haber ejercitado la correspondiente acción por incumplimiento contractual contra la cooperativa, pero no cuando resulta que tal incumplimiento se declaró anteriormente por un laudo arbitral que condenaba a la cooperativa y a continuación se promovió este litigio para que, por insolvencia de dicha cooperativa, respondieran los miembros de su consejo rector y sus socios por dos títulos diferentes: los primeros por su gestión desleal y los segundos por su enriquecimiento al no haber hecho las aportaciones necesarias para nivelar la pérdida que supuso la condena de la cooperativa.

Pues bien, semejante planteamiento no puede ser aceptado porque el principio prohibitivo del enriquecimiento injusto no puede servir de pretexto para hacer que los socios respondan

personalmente de las deudas sociales más allá del régimen establecido por la ley para cada tipo de sociedad. Si bien se mira, la tesis de la parte recurrente sería trasladable a las sociedades anónimas para que los socios respondieran también de las deudas sociales con su propio patrimonio, pues igualmente se habrían enriquecido no haciendo las aportaciones necesarias para atender la deuda. Por ello la cuestión debe resolverse no desde hipótesis más o menos aventuradas sobre la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento en este caso sino desde la terminante disposición del art. 5 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas que, de la misma forma que el art. 15.3 de la Ley estatal 27/1999. De 16 de julio, de Cooperativas, limita la responsabilidad de los socios por las deudas de la cooperativa a sus aportaciones al capital social, sin extenderlas lógicamente a las que tendrían que hacer para atender cada deuda social en caso de insolvencia de la cooperativa porque, de ser así, se estaría imponiendo a los socios una responsabilidad personal ilimitada por las deudas sociales.

Así las cosas, y al margen del mayor o menor acierto de los fundamentos de la sentencia impugnada sobre la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento, debe concluirse que en modo alguno infringió el art. 1.4 cc ni la jurisprudencia de esta Sala sobre el principio prohibitivo del enriquecimiento injusto, porque este principio no puede convertirse en una fuente indiscriminada de obligaciones que haga responder a sujetos distintos del legalmente obligado por la sola circunstancia de haber obtenido aquéllos alguna ventaja o provecho cuando, como en este caso, existe un régimen legal que junto al sujeto contractualmente obligado, la cooperativa, contemple la posible responsabilidad solidaria, en garantía de los acreedores, de otros sujetos, los miembros del consejo rector, pero sin extender en modo alguno esta garantía también a la responsabilidad de los propios socios, ya que, en tal caso, la referida limitación legal de su responsabilidad sería puramente ilusoria, porque por cada deuda social desatendida tendrían que hacer nuevas aportaciones, no representativas ya del capital social, o pagar directamente al acreedor social en proporción a su respectiva participación en dicho capital».

*** Sentencia de 13 de julio de 2009 (Social). TOL 1.584.727**

Ponente: Juan-Francisco García Sánchez.

Resumen

Cooperativas de trabajo asociado. Cuando el cese o la expulsión de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues se entiende que nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral. La relación del socio de trabajo con la cooperativa no es laboral, sino societaria, y en el desarrollo de tal relación no percibe salario, sino anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa.

Fundamentos de derecho

«PRIMERO.- Constituye el único objeto del presente recurso de casación para la unificación de la doctrina, el esclarecimiento de la cuestión relativa a determinar si la expulsión por motivos disciplinarios de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, cuando tal expulsión es declarada como indebida o improcedente por sentencia firme, confiere o no derecho al aludido socio a percibir los salarios de tramitación a los que se refiere el artículo 56.1.b9 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para el caso de despido improcedente.

A dicha única cuestión se ha circunscrito el planteamiento del recurso, quedando, por consiguiente, fuera de su ámbito lo relativo a si la repetida expulsión ostenta o no jurídicamente el carácter de despido.

(…) Únicamente interesa destacar aquí que el actor en el proceso de origen pertenecía como socio trabajador a la cooperativa valenciana "CONSUM", en la que trabajaba como auxiliar de caja reponedor, … CONSUM acordó la expulsión de aquél… Formuló el cesado demanda por despido, que se resolvió por el correspondiente Juzgado de lo Social en el sentido de declarar la improcedencia del despido del actor derivado de su expulsión… y condenar a la demandada que opte entre readmitir al actor o abonarle una indemnización… con el abono en ambos casos de los salarios de tramitación producidos desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia.

SEGUNDO.- El recurso de suplicación que la cooperativa interpuso fue desestimado…., que, en lo atinente a los salarios de tramitación, consideró…..que pese a que a la relación societaria resultaran de aplicación la ley estatal 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas, y la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 8/2003 de 24 de marzo, el ingreso del actor en la cooperativa demandada conllevó la firma de un contrato de trabajo, de lo que dedujo la Sala que la expulsión del demandante quedaba equiparada a un despido disciplinario previsto en el artículo 55 del ET…

TERCERO.- Para dar adecuada respuesta al objeto de la controversia, lo primero que deberá averiguarse es la verdadera naturaleza jurídica de la relación obligacional que liga a la cooperativa de trabajo asociado con sus socios trabajadores, ya que los derechos y deberes recíprocos de ambas partes habrán de regirse por la ley reguladora de dicha relación obligacional (…)

En el artículo 80 de la tan citada Ley 27/1999, de 16 de Julio… se esclarece ya la naturaleza jurídica de la relación existente entre la cooperativa y sus socios trabajadores, pues señala, en primer lugar que "*la relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria* (art. 80.1) y en segundo término que "*los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en el plazo no superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa, denominados anticipos societarios que no tienen la condición de salario, según su participación en la actividad cooperativizada (art.80.4)*(…).De cuya normativa resulta que la relación obligacional que nos ocupa tiene carácter societario, debiendo descartarse todo atisbo acerca de que estemos en presencia de una relación laboral, ni siquiera como concurrente con la societaria o de naturaleza híbrida, porque en otro caso no habría tenido necesidad el legislador de dejar claro que las percepciones periódicas de los socios trabajadores "no tienen la condición de salario" sino que son anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa….

Finalmente el artículo 87 comienza por establecer que las "*las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores, por su condición de tales, se resolverán aplicando, con carácter preferente, esta Ley, Los Estatutos y el Reglamento de régimen interno de las cooperativas, los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de las cooperativa y los principios cooperativos",* sin hacer mención alguna a principios de Derecho Laboral.

(…) En definitiva, al quedar claramente descartada la naturaleza laboral de la relación existente entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, habrá que llegarse, necesariamente a la conclusión en el sentido de que cuando el cese o la expulsión de uno de estos socios, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral.»

II. SOCIEDADES LABORALES

*** Sentencia de 25 de septiembre de 2008 (Social). RA 6601/2008**
Ponente: Exmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández

Resumen

No existe sucesión de empresa cuando la actividad de la empresa en quiebra es continuada por los trabajadores de la misma mediante la constitución de una sociedad laboral con los bienes de aquella, arrendados a los síndicos de la quiebra.

Antecedentes de hecho

Dos trabajadores de una empresa en quiebra demandan a esta y al Fondo de Garantía Salarial por reclamación de cantidad, y más tarde solicitan la ampliación de la ejecución de la sentencia contra las empresas que habían constituido los trabajadores.

La sentencia de 30 de enero de 2007 del TSJ del País Vasco revocó el Auto del Juez de lo Social y ordenó se ampliase la ejecución de la sentencia contra las empresas creadas por los trabajadores C. SAL y S de M.G, SL, de forma solidaria, por considerar que las mismas integraban un grupo que se presentaba sucesor empresarial de la quebrada, originariamente condenada al pago de determinadas cantidades, por conceptos salariales diversos.

La SAL recurre la sentencia como contradictoria con la STSJ del País Vasco 17 febrero 2004, y denuncia infracción del art. 44 ET y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con las Directivas CEE 98/50, 77/187 y 2001/23.

La STSJ de 17 de febrero de 2004 excluyó la existencia de sucesión de empresa porque los empleados de una empresa en quiebra constituyeron una sociedad cooperativa con actividad similar a la de la primitiva empresa, utilizando el mismo inmueble, instalaciones y bienes, que arrendaron a los órganos de la quiebra.

Fundamentos de Derecho

«SEGUNDO. El TS reconoce como patente la similitud de los casos sometidos a enjuiciamiento, pero advierte una diferencia sustancial entre ambas, y es que, la sentencia recurrida afirma que la empresa recurrente había procedido al "reconocimiento de deuda" por la indemnización y salarios de trámite correspondientes a los actores ejecutantes, y que este dato comportaba "casi un reconocimiento tácito de su condición de empleadora".

Según el TS *"esa afirmación no tiene naturaleza fáctica que obligue a respetarla en este trámite, sino que es una apreciación jurídica –no vinculante para la Sala- que no se corresponde con la realidad. En efecto, en el reconocimiento de deuda se mantiene la identidad jurídica de la relación y únicamente se refuerza un vínculo obligatorio ya existente entre las partes, cosa impredicable de un supuesto como el presente, en el que la constitución de la sociedad recurrente es posterior al nacimiento del crédito frente a la empresa declarada en quiebra. Como tampoco el fenómeno se presenta propiamente como una asunción de deuda, puesto que ésta requiere un negocio jurídico con el deudor (aparte del consentimiento del acreedor: art. 1205 CC, inexistente en el caso examinado. Lo que en realidad se produjo en autos fue un simple pago con subrogación, de forma que un tercero –la recurrente- hace frente a determinada deuda salarial de "Malta, SA (la derivaba de la extinción contractual) y los trabajadores así indemnizados ceden a "Cumenager, SAL" sus correlativos créditos contra su empleadora, como se desprende de otras afirmaciones posteriores, … La figura jurídica de que tratamos ninguna relación guarda con la admisión tácita de ser sucesora empresarial".*

TERCERO. El TS también acoge la infracción normativa que se denuncia, porque –como dice- *"superando anterior criterio jurisprudencial que sostenía la existencia de sucesión de empresa cuando la explotación se transmite -vía subasta judicial- a la SAL previamente constituida por los trabajadores despedidos, que aportan sus subsidios de desempleo (así, las SSTS de 16/11/92; 15/02/93; 20/03/93; 17/05/93; 14/12/92; 16/07/93; 23/11/93; y 22/12/93), la vigente doctrina de la Sala mantiene que el art. 44 ET exige que se transmita como tal una empresa o una unidad productiva en funcionamiento o susceptible de estarlo, y este supuesto no se produce cuando ya no existe una organización empresarial que reúna esas condiciones y cuando los contratos de trabajo se han extinguido. Además, la actuación de los trabajadores que, recurriendo a formas asociativas y través de la utilización de relaciones comerciales y de determinados elementos patrimoniales de la anterior empresa, que han obtenido de forma indirecta en el proceso de liquidación de ésta, tratan de lograr un empleo mediante el lanzamiento de un nuevo proyecto empresarial no es sólo una acción lícita, sino que merece la protección del ordenamiento laboral [art. 228.3 LGSS; RD 1044/1985, l de 19/junio], y en estos casos -en los que se trata más de una «reconstrucción» que de una «transmisión» de la empresa- no se está en el supuesto del art. 44 ET, que es una norma con una finalidad de conservación del empleo y no puede convertirse en una fórmula rígida que impide la aplicación de soluciones para la creación de nuevos empleos que sustituyan los perdidos como consecuencia de la crisis de la anterior empresa, como por lo demás permite el art. 4 bis de la Directiva CE 77/187, [en la redacción de la Directiva CE 98/50] SSTS 15/04/99 -, dictada en Sala General; 11/04/01; 25/06/01; 11/07/01; y 25/02/02"*.

A lo que añade el Tribunal que *"en este sentido también se ha dicho que por encima de las palabras utilizadas en la letra del precepto o en las sentencias interpretativas del mismo, lo que se trasluce de ellas es la exigencia de que se haya producido una transmisión de activos patrimoniales y personales, o sea, de elementos que permitan continuar una explotación empresarial «viva», que es lo que podría permitir hablar de la permanencia en su identidad, siendo así que este dato -conservación de la identidad- es exigido por la normativa comunitaria -Directiva 1977/187/CEE, de 14 /febrero; Directiva 1998/50/CE, de 29 de junio; y Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo-, y ha sido considerado elemento determinante de la existencia o no de una sucesión empresarial en la jurisprudencia comunitaria [STCE 65/1986, de 18/marzo/86, Asunto Spijkers], habiendo señalado al respecto ese mismo Tribunal que aun cuando esa circunstancia se deduce normalmente del hecho de que la empresa «continúe efectivamente su explotación o que ésta se reanude», para llegar a dicha conclusión hay que tener también en cuenta «otros elementos, como el personal que la integra, su marco de actuación, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone» [STCE 212/2000, de 26/septiembre, Asunto C-175/1999]] (así, la citada STS 25/02/02)»*.

*** Sentencia de 17 de febrero de 2009 (Social). TOL 1.474.775**

Ponente: Exmo. Sr. D. Victor-Eladio Fuentes López.

Resumen

Sociedad Laboral. Prestación por desempleo. Derecho a la prestación por desempleo de socio trabajador de sociedad laboral que ostenta el cargo de consejero delegado, sin retribución alguna por este cargo.

Fundamentos de derecho

«PRIMERO.- La cuestión debatida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el actor contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de Madrid de 26-12-2007, es la de determinar si el mismo que trabajaba como maestro industrial con remuneración propia por tal cometido en una Sociedad Laboral, en la que participaba junto con su esposa en un 25% del capital ostentando el cargo de Consejero Delegado, tiene derecho a percibir la prestación de desempleo, tal y como se solicitó en la demanda, al cesar en la relación laboral.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia estimó la demanda, que fue revocada en suplicación. Consta en los hechos probados que el actor prestó servicios para la empresa Tecnifergo SAL, en las condiciones ya dichas; tras el cese, inicialmente le fue reconocida la prestación de desempleo, lo que fue revocado de oficio por el SPEE, porque en la escritura de los estatutos de constitución de la Sociedad el actor figuraba como Consejero Delegado, realizando funciones de gestión y de administración de la sociedad, siendo remunerado por ello, por lo que aunque estaba incluido en el RGSS, y la empresa ha cotizado mientras prestaba servicios como maestro industrial, dichas cotizaciones no son válidas a efectos de desempleo, por no poder cotizar por dichos conceptos. La Sociedad fue constituida en 1991 por cuatro matrimonios, uno de ellos el actor y su esposa; el capital social está dividido en 10.000 acciones, suscribiendo el actor 1.500 y su esposa 1.000; el resto de matrimonios miembros, idéntico porcentaje de capital, como miembro del Consejo de Administración ostentando el cargo de Consejero Delegado, constaba en los Estatutos que podría percibir una remuneración del 10% sobre los beneficios sociales anuales; la Sala de Suplicación al desestimar la demanda razonó que el actor además de trabajar como Maestro Industrial, era Consejero Delegado, cargo retribuido según los Estatutos, y si bien no declaró probado que pese a lo dispuesto en los Estatutos Sociales efectivamente obtuviese remuneración, sostuvo, contra lo alegado en la sentencia de instancia y por el trabajador, de que aun en el supuesto de que no había percibido retribución por el cargo la falta de remuneración tampoco originaría la estimación de la demanda (…)

QUINTO.- En el recurso se denuncia infracción del art. 205 LGSS en relación con el artículo 1 del E.T. y 21-2 de la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales alegando que el recurrente exclusivamente realizó tareas y funciones propias de su categoría profesional de Maestro Industrial, sin percibir retribución alguna como consecuencia de su normal cargo de Consejero Delegado de la Sociedad Laboral, en funciones de gerencia y dirección.

Esta Sala en su sentencia de 17-05-1999, aborda la cuestión aquí planteada… En dicha sentencia, en un supuesto parecido al de autos, en el que constaba que el actor era miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado, ostentando como socio trabajador la categoría profesional de Oficial de 1ª, no constando que percibiese retribución por desempeño de cargo de Consejero Delegado se decía lo siguiente:

"Ante tal situación se ha de reconocer en el actor la existencia de relación laboral con primacía sobre las funciones de dirección y gerencia, que no tienen entidad suficiente para absorber la actividad laboral del socio trabajador, y negar el carácter de ajenidad respecto a la empresa-sociedad laboral-para las que trabajan, al no constar que aquellas fuesen retribuidas. Pues la finalidad de las sociedades laborales es como señala la Exposición de Motivos de su Ley reguladora "conseguir nuevos métodos de creación de empleo" en cuyas líneas maestras destaca, "que la mayoría del capital sea propiedad del conjunto de los socios trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y fijación del máximo de capital que pueda poseer cada socio (…).

(…) es plenamente aplicable al supuesto de autos, se manifiesta en el sentido de que "esto es lo que ocurre normalmente en las sociedades de trabajadores cuyo modelo institucional –las llamadas sociedades laborales- admiten naturalmente la compatibilidad de socio trabajador y administrador social y esto es lo que sucede también en el presente caso, en el que estamos ante un supuesto claro de sociedad de trabajadores, en la que la asunción de cargos sociales representa más una continuidad de la colaboración que una situación de poder específico frente a los restantes socios trabajadores»

III. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

*** Sentencia de 9 de julio de 2008 (Social). RA. 7553/2008; TOL 1.393.258**
Ponente: Excmo Sr. José Luis Gilolmo López
*** Sentencia de 10 de julio de 2008 (Social). RA. 6557; TOL 1.369.548**
Ponente: Excmo Sr. Víctor Fuentes López
*** Sentencia de 30 de septiembre de 2008 (Social). RA. 7359/2008; TOL 1.408.028**
Ponente: Excmo Sr. Joaquín Samper Juan
*** Sentencia de 6 de noviembre de 2008 (Social). RA. 7412/2008; TOL 1.413.291**
Ponente: Excmo Sr. Víctor Fuentes López
*** Sentencia de 26 de enero de 2009 (Social). RA. 1176/2009; TOL 1.460.271**
Ponente: Excmo Sr. Luis Ramón Martínez Garrido
*** Sentencia de 22 de abril de 2009 (Social). RA.2626 ; TOL 1.564509**
Ponente: Excma. Sra. Rosa María Virolés Piñol

Resumen

Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro

Fundamentos de Derecho

«QUINTO.- La cuestión debatida ya ha sido abordada y resuelta por esta Sala en sentencias de 10-07-08 (R-2540/07) y (R-384/08), 30-09-08 (R-2536/07), 06-11-2008 (RJ 2008, 7412) (R. 4467/07) y 26-01-2009 (R. 4619/07) recaídas en recursos muy similares al presente. a su doctrina habremos de estar por lógicas razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la Ley, al no concurrir en este caso circunstancias distintas que aconsejen su abandono.

La tesis correcta, en cuanto al tema de fondo, es la de la sentencia recurrida. Como señalamos en la STS de 6/11/2008 antes citada: "La Separata primera del Reglamento de Prestaciones del Montepío de 1989, tal y como se precisa en el art. 32 de este último, para dar cumplimiento al art. 16 de los Estatutos Sociales del Montepío, disponía que todas las prestaciones de retiro de ese Fondo Social serían cuantificados en función del factor T (cuyo valor vendría dado en cada momento por la ecuación de equilibrio financiero del estudio Técnico-Actuarial correspondientes al año del hecho causante) y que será el porcentaje a aplicar por cada año cotizado por el asociado, señalándose en la Separata los cálculos Técnicos-Actuariales, en los que se recogerá el valor T y su periodo de validez en cada momento, fijando una plaza de validez de 5-08-1987 hasta su cambio por la Separata 2 y la forma de aplicación de las prestaciones definidas en el mismo, indicando que las prestaciones posteriores a 5-08-1987 tendrán una revalorización del 2% de las prestaciones acordadas y con efectos del uno de enero del año siguiente a la concesión.

Teniendo en cuenta lo anterior y que además esta probado, que el 31-01-1995, la Dirección General de Seguros requirió a la Mutualidad para que incorporara a su contabilidad los ajustes contenidos en el Anexo de la resolución, revisando las hipótesis financieras, lo que se llevaría a efectos de forma inmediata, dando lugar incluso a que por dicha Dirección se iniciara expediente de medidas cautelares, más tarde sobreseidas, al haber iniciado el Montepío los tramites necesarios para actualizar los parámetros técnicos antes dichos, todo ello, indicaba que la modificación llevada a cabo por la Asamblea General de 26-06- 1997, aprobando los nuevos Estatutos, así como el Reglamento de prestaciones y bases técnicas de está y como consecuencia los coeficientes "T" del equilibrio actuarial de los Fondos Sociales de Vuelo, con valor para el periodo de 27-06-1997 a 30-06- 1998, para quien causen derecho a prestaciones mutuales entre 27-06-1997 y 31-12-1999 estaba justificada, y por tanto la supresión de la revalorización del 2% incluyendo este último, que no es pensión propiamente dicha y que por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues de lo antes expuesto resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro; no se trata de declarar la pensión ya establecida a la baja, que atentaría a un derecho adquirido lo que iría, como dice la recurrida, contra el principio de seguridad jurídica, sino de aumentar la pensión con una previsión que se realiza cada año máxime, cuando además, también consta probado que la impugnación del acuerdo de la Asamblea por la vía civil, no llegó a prosperar, siendo firme, vinculando a un destinatario de futuro en todo aquello que no se había devengado en el momento de la reforma.

No es este el caso de nuestras sentencias del pasado Julio, este caso es muy distinto al resuelto por las sentencias de 22-11-1995 (rcud. 1132/95) y 29-12-2000 (rcud. 2123/00), en las que se analizó la modificación llevada a cabo en la Asamblea de 26- 06-1997 de la base reguladora de las pensiones de jubilación y en las que consideramos que dicha base reguladora si era un derecho adquirido del que no podían ser privados los pasivos. Aquí, por el contrario, no esta en discusión el modo de determinar la base reguladora de la pensión que, por otra parte, no ha sido objeto de modificación, sino que se debate solo si es posible o no que la Asamblea pueda variar el porcentaje de revalorización anual de la pensión complementaria. Y además, ha quedado eliminada toda duda sobre el carácter de socios de número que los pasivos tenían en aquella fecha, y consta acreditado que a dicha Asamblea asistieron por representación socios mutualistas pasivos, y que estos tenían la condición de socios de número, con derecho a participar y a votar, siendo a partir de dicha Asamblea, cuando estas circunstancias se modifican, dejando de ser el personal pasivo socio de número; por lo que los

acuerdos tomados por aquella Asamblea les vinculan, a no ser que se declaren nulos o inválidos, lo que en este caso no sucedió en las dos impugnaciones realizadas en la vía civil por otro personal pasivo."»

*** Sentencia de 3 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA. 8060/2008; TOL 1.438.831**

Ponente: Excmo Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero

*** Sentencia de 22 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA. 711/2009; TOL 1.438.830**

Ponente: Excmo Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero

Resumen

Mutualidades de Previsión social. Régimen fiscal. Impuesto de sociedades: Ley 61/1978. Improcedencia de devolución de retenciones por rendimientos de capital mobiliario.

Fundamentos de Derecho

«SEGUNDO. Problema sustancialmente idéntico al planteado en este recurso y con fundamento en motivos semejantes ha sido resuelto por la sentencia de esta Sala de 1 de marzo de 2003 y las que en ella se citan.

En virtud de principio de unidad de doctrina habrá de estarse a lo declarado en dichas sentencias, donde se razonó: "(…).

... en el régimen del Impuesto sobre Sociedades de la Ley 61/1978, tanto los Montepíos y Mutualidades como el resto de las entidades a que se refiere el precepto comentado, se beneficiaban de una exención parcial, en cuanto, si bien afectaba a todas las rentas por las mismas percibidas, encontraba la excepción de los rendimientos sometidos a retención (art. 5.3), en concreto, los procedentes de los rendimientos del capital mobiliario (art. 347.2 del Reglamento de 15 de octubre de 1982). Es claro que la Ley podía —y puede— delimitar el ámbito objetivo de una exención por ella establecida y claro, también, que, si la única tributación posible de las entidades aquí consideradas era la correspondiente a los rendimientos sometidos a retención que obtuvieran —porque los demás quedaban comprendidos en el ámbito objetivo de la exención—, era lógico que las cantidades retenidas no pudieran ser tenidas, pese a su nombre, como pagos a cuenta de un cuota que era inexistente, simplemente porque era la única tributación posible.

De todo cuanto se lleva expuesto, y pese al tratamiento ciertamente insólito que supuso la configuración de la excepción aquí examinada —que determinó su supresión consciente en la vigente Ley del Impuesto, Ley 43/1995, de 27 de diciembre, al configurar en su art. 9º similar exención—, se desprende la imposibilidad de reconocer la devolución aquí postulada, por la imposibilidad, asimismo, de desconocer los preceptos antes analizados, que tan clara y rotundamente excluyeron, del ámbito objetivo de la exención, los tan repetidos rendimientos del capital mobiliario.

La misma suerte ha de correr el segundo de los motivos aducidos. Basta para ello con reproducir los argumentos contenidos en los apartados C y E del F.J. Tercero de la Sentencia de esta Sala, también antes citada, de 11 de junio de 2001.

Se decía en ellos, y ha de repetirse ahora, que no se ha infringido el principio de "capacidad económica" (…), difícilmente puede entenderse que ha existido infracción de tal principio

en el artículo 5.3 de la Ley 61/1978 (y en el 18.3 de la Ley 5/1983) que perjudique a la entidad recurrente, cuando, por el contrario, dicha norma (dichas normas) implica (implican) no gravar su total capacidad económica (la totalidad de los rendimientos obtenidos), sino, por las razones que el legislador creyó oportunas, la capacidad económica derivada de los rendimientos sujetos a retención, con exclusión de los restantes.

Tampoco resulta viable admitir la existencia de vulneración del principio de "igualdad", en cuanto todas las Entidades como la de autos estaban sujetas, del mismo modo y con total respeto a la igualdad, al régimen de exención programado en el art. 5.2 y 3 de la Ley 61/1978, tributando igualmente por los rendimientos sujetos a retención"».

*** Sentencia de 9 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). R.A. 207/2009; TOL 1.413.347**

Ponente: Excmo Sr. octavio juan herrero pina

Resumen

Mutualidad Notarial. Real Decreto 1505/2003: si bien supone el paso de los miembros del Cuerpo único de Notarios al sistema público de protección social, mediante la integración en el RETA, mantiene el régimen mutualista de los notarios respecto de las prestaciones complementarias a las del RETA dejando su destino pendiente de la correspondiente decisión sobre su extinción o adaptación a la normativa mutualista, y mientras tanto mantiene su funcionamiento con ese carácter residual.

Reseña

Se desestima recurso de dos asociaciones de notarios mutualistas y jubilados contra el apartado 215 del art. 1 del RD 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el art. 344.B.4 y D.2 del Reglamento de la organización y régimen del Notariado.

A lo efectos de esta reseña interesa destacar como el Tribunal Supremo señala que el Real Decreto 1505/2003, si bien supone el paso de los miembros del Cuerpo único de Notarios al sistema público de protección social, mediante la integración en el RETA, la propia norma permite el mantenimiento del régimen mutualista, adaptado a los caracteres de complementariedad del sistema público y voluntariedad, establecidos en la legislación sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de manera que tal real Decreto traslada las prestaciones comunes al RETA pero deja subsistente el sistema mutualista respecto de las demás prestaciones complementarias, aunque pendiente de la correspondiente adaptación a la legislación de Seguros Privados, lo que supone que el régimen mutualista pierde su contenido esencial que viene constituido por las prestaciones comunes, pero no se extingue por la entrada en vigor de dicho Real Decreto 1505/03 , que deja su destino pendiente de la correspondiente decisión sobre su extinción o adaptación a la normativa mutualista, y mientras tanto mantiene su funcionamiento con ese carácter residual.

IV. CAJAS DE AHORRO

*** Sentencia de 16 de octubre de 2008 (Civil). R.A. 5695/2008**

Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías

Resumen

Cajas de Ahorros: Órganos: Asamblea General extraordinaria: impugnación de acuerdos. En primer lugar, no procede la impugnación del acuerdo de elección de miembro de la Comisión de Control. El empate entre candidaturas, no previsto en la normativa de aplicación, se resolvió adecuadamente en favor del candidato de mayor edad, conforme al criterio interpretativo de la Comisión electoral al efecto. En segundo lugar, sí resulta procedente la impugnación del acuerdo de elección de miembro suplente de la Comisión de Control, al adoptarse el acuerdo con el voto favorable de 35 miembros de los 76 asistentes: ausencia de la mayoría simple (39 votos) requerida al efecto.

Fundamentos de Derecho

SEGUNDO.- "… El primer motivo del recurso alega la infracción de lo establecido en los artículos 54.2 y 41 de la Ley 4/1997 (LCACM), en relación con lo previsto en los artículos. 52 y 38 del mismo texto legal y de los artículos 45 y 38 del Decreto 135/1997, de 17 de septiembre , de Desarrollo Parcial de la Ley 4/1997 y con lo previsto en los artículos 24 y 35 de los Estatutos de la Caja de Ahorros provincial de Guadalajara , todo ello en relación con el Código civil .

Entienden los recurrentes que el sistema electoral establecido en los artículos que se consideran infringidos se funda en la existencia de listas cerradas y bloqueadas, en el que se forman candidaturas a titulares, los primeros de la lista, y suplentes, los que siguen a titulares en la lista correspondiente. El sistema de candidaturas se articula como fundamental en la elección de los miembros de la Comisión de control, de modo que la votación se efectúa a candidaturas y no a personas. Según los recurrentes se debe corregir la infracción cometida por la sentencia recurrida y se pide se aclare el sentido de las normas legales antes citadas ante el supuesto de empate de las distintas candidaturas, de modo que en este caso deba acudirse al criterio de la mayor edad para la elección del titular, pero el suplente debe designarse de acuerdo con la regla general que garantice que la suplencia no altere la representatividad. Dice que si se altera esta norma, se da a la suplencia un sentido que no tiene, es decir, "el de servir para distribuir la representación entre las distintas candidaturas en lugar de, precisamente, garantizar que la suplencia no modifique la candidatura" y además, "la Asamblea general está prescindiendo de la voluntad del grupo de representación, que propuso dos candidaturas con titular y suplente en cada caso".

El motivo no puede ser estimado.

La cuestión que se somete a la consideración de esta Sala se refiere a la solución del empate entre dos candidaturas, respecto a los criterios que debían utilizarse para la propuesta del suplente y ello a falta de una norma directamente aplicable al supuesto de hecho presentado. Efectivamente, las normas citadas como infringidas por los recurrentes no contienen una directa regla aplicable, por lo que la Comisión electoral utilizó analógicamente la regla del candidato de mayor edad que había sido aceptada para la propuesta del miembro de la comisión de control y después intentó aplicarla para la elección del suplente, designación que es la ahora impugnada.

Esta Sala ha proclamado repetidamente que debe respetarse el derecho de autoorganización de las personas jurídicas de derecho privado, entre las que pueden incluirse las Cajas de Ahorros, con su peculiar naturaleza jurídica; así el Tribunal Constitucional, si bien ha venido declarando que la actividad de las asociaciones "no forma naturalmente una zona exenta de control judicial" (STC 218/1988, de 22 noviembre), ha determinado cuál es el ámbito de este control, ya que de acuerdo con el artículo 22 CE , la autonomía de las asociaciones para establecer su propia organización forma parte también del núcleo del derecho fundamental reconocido en la mencionada norma constitucional. Esta Sala ha aplicado el mismo criterio y, tal como afirma la sentencia de 5 de julio de 2004 que "la persona jurídica goza de la facultad de autoorganizarse y, mientras no se declare la nulidad de los Estatutos o de una norma de los mismos, de autogobernarse; el control judicial se produce cuando la dirección de la persona jurídica se aparta de su propia normativa o contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico o bien atenta a principios o derechos constitucionales, pero en ningún caso el órgano judicial puede sustituir la voluntad de la persona jurídica, manifestada a través de sus órganos de gobierno" (ver asimismo sentencias de 24 marzo 1992, 2 marzo 1999, 18 noviembre 2000, 9 julio 2001, 16 junio 2003, 31 marzo 2005, 23 junio 2006 y 6 noviembre 2007).

En definitiva, lo que aquí se nos está pidiendo es si las normas reguladoras de las Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha y de los Estatutos de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara han sido bien interpretados por la Comisión electoral. Las normas reguladoras de la elección prevén dos sistemas para llegar a la designación de los candidatos que la Asamblea debe acabar votando: la elección entre ellos de las candidaturas que se presenten y caso que ello no funcione, como realmente ocurrió por el empate producido, el de la mayor edad, que no ha sido impugnado como criterio por la parte recurrente. La aplicación de éste deriva de que no se puede emplear el de la candidatura cerrada para elegir al suplente, al haberse producido un empate y no funcionar ni el de la mayoría ni el de la proporcionalidad previstos en los Estatutos. Por ello no resulta ni absurda ni contradictoria la interpretación efectuada por la Comisión electoral al utilizar el de la mayor edad para designar al suplente que debería ser elegido por la Asamblea general, entre los candidatos propuestos. Se produce en este caso una laguna que fue solucionada por la interpretación de la comisión electoral, que era quien podía hacerlo por el criterio de analogía entre situaciones iguales, decisión que fue bien refrendada por la sentencia recurrida.

Además, debe advertirse que ninguna de las disposiciones que se denuncian como infringidas tienen ninguna relación directa ni indirecta con el problema efectivamente planteado que ya se ha dicho, produce una laguna legal, que sólo puede resolverse aplicando la vía interpretativa utilizada a la espera de que un texto normativo lo solucione.

TERCERO.- El segundo motivo denuncia la infracción del art. 36 Ley 4/1997 (LCLM 1997, 123) (LCACM), en relación con lo previsto en el art. 19 Estatutos de la Caja de Ahorros provincial (LCLM 1998, 71). Se refiere a la decisión de considerar válidamente adoptada una decisión de la Asamblea general extraordinaria por no haber tomado parte en la votación 36 de los consejeros, que decidieron no votar. Entienden los recurrentes que estos consejeros votaron en contra de que la Asamblea general se pronunciara sobre la cuestión planteada. Por ello, "cuando se produce la elección, además de las abstenciones, existe una postura que se manifiesta en el sentido de no votar por entender que la elección no debe hacerse por la Asamblea general en los términos propuestos. Los que manifiestan expresamente no votar no se están absteniendo, sino que están manifestándose en contra de que la Asamblea general vote sobre este punto".

El motivo debe ser estimado.

El artículo 19 de los Estatutos de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, aprobados por resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 marzo 1998 establece que "los acuerdos de la Asamblea general se adoptarán por mayoría simple de los votos de los concurrentes" y reitera que "Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por la mayoría simple de los votos de los asistentes", excepto en algunos casos, en los que se "requerirá el voto favorable de los dos tercios de los asistentes". Por tanto, la regla establecida para la formación de la voluntad en la toma de acuerdos es que el quórum se forma sobre los miembros de la Asamblea general que están presentes en la reunión.

Resulta probado que el acuerdo de la Asamblea general en relación con la elección del miembro suplente fue adoptado por 35 votos favorables y 5 abstenciones y que 36 de los miembros presentes se abstuvieron de votar; por tanto, los asistentes a la asamblea eran 76, por lo que la mayoría simple era de 39 votos a favor de la propuesta, lo que impide considerar válido el acuerdo tomado por 35 votos favorables. Ciertamente, los no votantes no pueden ser considerados como votos contrarios a la propuesta, pero este argumento no resulta decisivo, al no haber votado la mayoría simple de los asistentes, como se exige en los Estatutos de la Caja de Ahorros, que es la norma que debe aplicarse".

*** Sentencia de 17 de diciembre de 2008 (Social). R.A. 8250/2008**

Ponente: Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá

Resumen

Cajas de Ahorros: "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez". Rescate de Fondo Interno de Pensiones. El demandante, Director General de la demandada "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Huelva", fue objeto de despido improcedente. En la fecha del despido, la entidad demandada estaba inmersa en un proceso de fusión con la Caja de Ahorros de Jerez y externalización de un Fondo interno para garantizar las mejoras voluntarias de Seguridad Social establecidas en el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, de ámbito estatal para sus trabajadores. Resulta procedente la petición del demandante, en virtud de la cual, cuando se produzcan los hechos causantes de las prestaciones económicas previstos en el convenio colectivo del sector, el citado demandante o sus beneficiarios tendrán derecho a las mismas en las condiciones previstas en la norma.

ÍNDICE CRONOLÓGICO

*** Sentencia de 9 de julio de 2008 (Social). RA 7553/2008; TOL 1.393.258**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 10 de julio de 2008 (Social). RA 6557; TOL 1.369.548**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 23 de julio de 2008 (Civil) RA 4620/2008**
Intromisión ilegítima derecho al honor. Improcedencia. Preguntas y opiniones formuladas en asamblea general de cooperativa y presidente y gerente, relacionadas con los intereses de la cooperativa. Inexistencia de divulgación fuera de la asamblea. Derecho de información y libertad de expresión 206

*** Sentencia de 25 de septiembre de 2008 (Social). RA 6601/2008**
No existe sucesión de empresa cuando la actividad de la empresa en quiebra es continuada por los trabajadores de la misma mediante la constitución de una sociedad laboral con los bienes de aquella, arrendados a los síndicos de la quiebra 224

*** Sentencia de 30 de septiembre de 2008 (Social). RA 7359/2008; TOL 1.408.028**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 3 de octubre de 2008 (Civil) RJ 6298/2008**
Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: responsabilidad de los miembros del Consejo Rector. Se desestima la acción de responsabilidad interpuesta contra ellos al no acreditarse que el perjuicio sufrido por los actores, derivado del impago de sus créditos, tuviera su causa en el comportamiento doloso, abusivo o gravemente negligente de los miembros del Consejo Rector, quienes se esforzaron en inyectar liquidez a la sociedad para saldar las deudas contraídas, también con los actores. La causa primordial de la crisis económica de la cooperativa no estuvo en la gestión de los miembros el Consejo, sino en la propia actuación de los socios cooperativistas. Además todas las actuaciones del Consejo Rector en orden a evitar o mitigar la situación de crisis económica habían sido previamente autorizadas por la Asamblea General, órgano soberano de la cooperativa 207

*** Sentencia de 8 de octubre de 2008 (Social) RA 7377/2008**
Pago único de la prestación por desempleo, por incorporación a cooperativa o sociedad laboral. Cuantía limitada a la necesaria para adquirir la condición de socio, entendiéndose por ésta no el capital suscrito inicialmente por el socio, sino el capital social cuyo desembolso es exigible 210

*** Sentencia de 14 de octubre de 2008 (Civil) RA 6913/2008**
Cooperativa de viviendas. Suspensión de pagos. Responsabilidad de auditores por ejecución deficiente de auditoría. Relación de causalidad con insolvencia sobrevenida de la cooperativa. Infracción art. 11 Ley Auditoría 12/1988 y art. 1902 Código civil 211

*** Sentencia de 16 de octubre de 2008 (Civil). RA 5695/2008**
Cajas de Ahorros: Órganos: Asamblea General extraordinaria: impugnación de acuerdos. En primer lugar, no procede la impugnación del acuerdo de elección de miembro de la Comisión de Control. El empate entre candidaturas, no previsto en la normativa de aplicación, se resolvió adecuadamente en favor del candidato de mayor edad, conforme al criterio interpretativo de la Comisión electoral al efecto. En segundo lugar, sí resulta procedente la impugnación del acuerdo de elección de miembro suplente de la Comisión de Control, al adoptarse el acuerdo con el voto favorable de 35 miembros de los 76 asistentes: ausencia de la mayoría simple (39 votos) requerida al efecto 231

*** Sentencia de 6 de noviembre de 2008 (Social). RA 7412/2008; TOL 1.413.291**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 19 de noviembre de 2008 (Cont. Adm) 7918/2008**
Cooperativa de servicios de asistencia social. Cooperativa sin ánimo de lucro. Exención procedente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 212

*** Sentencia de 3 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 8060/2008; TOL 1.438.831**
Mutualidades de Previsión social. Régimen fiscal. Impuesto de sociedades: Ley 61/1978. Improcedencia de devolución de retenciones por rendimientos de capital mobiliario 229

*** Sentencia de 9 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 207/2009; TOL 1.413.347**
Mutualidad Notarial. Real Decreto 1505/2003: si bien supone el paso de los miembros del Cuerpo único de Notarios al sistema público de protección social, mediante la integración en el RETA, mantiene el régimen mutualista de los notarios respecto de las prestaciones complementarias a las del RETA dejando su destino pendiente de la correspondiente decisión sobre su extinción o adaptación a la normativa mutualista, y mientras tanto mantiene su funcionamiento con ese carácter residual 230

*** Sentencia de 17 de diciembre de 2008 (Social). RA 8250/2008**
Cajas de Ahorros: "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez". Rescate de Fondo Interno de Pensiones. El demandante, Director General de la demandada "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Huelva", fue objeto de despido improcedente. En la fecha del despido, la entidad demandada estaba inmersa en un proceso de fusión con la Caja de Ahorros de Jerez y externalización de un Fondo interno para garantizar las mejoras voluntarias de Seguridad Social establecidas en el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, de ámbito estatal para sus trabajadores. Resulta procedente la petición del demandante, en virtud de la cual, cuando se produzcan los hechos causantes de las prestaciones económicas previstos en el convenio colectivo del sector, el citado demandante o sus beneficiarios tendrán derecho a las mismas en las condiciones previstas en la norma 233

*** Sentencia de 22 de diciembre de 2008 (Cont.-Admvo.). RA 711/2009; TOL 1.438.830**
Mutualidades de Previsión social. Régimen fiscal. Impuesto de sociedades: Ley 61/1978. Improcedencia de devolución de retenciones por rendimientos de capital mobiliario 229

*** Sentencia de 26 de enero de 2009 (Social). RA 1176/2009; TOL 1.460.271**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 17 de febrero de 2009 (Social). TOL 1.474.775**
Sociedad Laboral. Prestación por desempleo. Derecho a la prestación por desempleo de socio trabajador de sociedad laboral que ostenta el cargo de consejero delegado, sin retribución alguna por este cargo 225

*** Sentencia de 26 de febrero de 2009 (Civil). TOL 1.463.065**
Cooperativas. Impugnación de acuerdos adoptados por la Asamblea de sociedad cooperativa. Veinte socios postulan la nulidad de los acuerdos por no haber sido aprobada el Acta, por haber sido privados los cooperativistas del derecho al voto, ya que no se sometieron a votación diversos puntos del orden del día, por defecto de convocatoria que adolecía de falta de claridad y por vulneración del principio de igualdad. Se desestiman todos los motivos. 214

*** Sentencia de 4 de marzo de 2009 (Civil). TOL 1.466.725**
Sociedad Anónima de capital repartido entre cooperativas, sociedades anónimas, sociedades agrarias y comerciantes individuales relacionados con la fruta. Impugnación de acuerdos del Consejo de Administración: Validez o nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad demandada consistente en autorizar la venta por una sociedad anónima (Mercolleida S.A) de sus acciones de una también sociedad anónima (Indulleida S.A) a una cooperativa (Actel SCCL). Consecuencias que asumen las sociedades agrarias y los empresarios individuales relacionados con la fruta cuando deciden agruparse bajo la forma de una sociedad eminentemente capitalista como es la sociedad anónima 216

*** Sentencia de 6 de abril de 2009 (Civil) TOL 1.490.809**
Cooperativas. Expulsión de socios. Modificación de estatutos. Se considera nulo el acuerdo de expulsión de los socios acordado en Asamblea General Extraordinaria que ratifica el acuerdo de expulsión acordado por el Consejo Rector, pues tanto el expediente sancionador como el acuerdo de sanción adoptado por el Consejo Rector de la Cooperativa están viciados de nulidad, dado que en el momento de inicio del expediente y la sanción posterior todavía no estaba vigente la modificación estatutaria impugnada aunque fue acordada antes de la imposición de la sanción y por ello no regía el artículo en el que se basa el acuerdo de sanción, dado el efecto constitutivo de la inscripción de la modificación 219

*** Sentencia de 14 de abril de 2009 (Civil) TOL 1.514.753**
Cooperativa: Órganos: Consejo Rector: Responsabilidad por negligente ejercicio de sus deberes: procedencia. El principio prohibitivo del enriquecimiento injusto no cabe aplicarlo a los socios de una cooperativa para que respondan de las deudas sociales más allá de sus aportaciones al capital social, alterando el régimen legal de garantía de los acreedores más allá de sus aportaciones sociales 221

*** Sentencia de 22 de abril de 2009 (Social). RA 2626/2009 ; TOL 1.564509**
Mutualidad de Previsión Social. Incremento de un 2% del complemento de pensión de jubilación suprimido por Asamblea General Extraordinaria celebrada en donde se aprobaron los nuevos Estatutos así como el Reglamento de Prestaciones y bases técnicas de las prestaciones. Inexistencia del derecho de los jubilados con anterioridad a la fecha de dicha Asamblea a la citada revalorización. Dicha revalorización no es pensión propiamente dicha y por tanto no existe un derecho adquirido a esa revalorización porcentual, pues resulta que su procedencia dependía de unos cálculos Tecnicos-Actuales anuales, variables cada año, razón por la cual, era posible y asumible la modificación estatutaria que dejara sin efecto el aumento de futuro 227

*** Sentencia de 13 de julio de 2009 (Social). TOL 1.584.727**
Cooperativas de trabajo asociado. Cuando el cese o la expulsión de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebida por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues se entiende que nunca había percibido "salario" en sentido jurídico-laboral. La relación del socio de trabajo con la cooperativa no es laboral, sino societaria, y en el desarrollo de tal relación no percibe salario, sino anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa. 222

RESEÑA DE LEGISLACIÓN SOBRE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

GEMMA FAJARDO GARCÍA

Profesora Titular del Departamento de Derecho Mercantil
Investigadora del IUDESCOOP
Universitat de València

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES: JULIO 2009 - JULIO 2010

LEGISLACIÓN ESTATAL

Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre. (BOE 185, 1 de agosto de 2009). Mutualidades de previsión social[1]

Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales. (BOE 200, 19 de agosto de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Autónomos / Empleo**

Orden TIN/2533/2009, de 18 de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones para los programas de inserción laboral de personas con discapacidad y para la promoción del empleo autónomo, cooperativas y sociedades laborales, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. (BOE 230, 23 de septiembre de 2009). **Discapacitados / Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción laboral / Empleo / Autoempleo**

Orden SAS/2670/2009, de 22 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del premio Reina Sofía, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. (BOE 238, 2 de octubre de 2009). **Inserción laboral / discapacitados / Premio**

Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la crisis económica. (BOE 240, 5 de octubre de 2009). **Interés general**

Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. (BOE 245, 10 de octubre de 2009). **Entidades de pesca**

1. Véase el texto de esta ley en el apartado *Disposiciones de mayor interés.*

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. (Prorroga del programa en el Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero en BOE 41, 16 de febrero de 2010). (BOE 273, 12 de noviembre de 2009). **Inserción sociolaboral / Protección desempleo**

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2009, destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE 286, 27 de noviembre de 2009). **Cooperativas / Integración**

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las subvenciones concedidas en base a la convocatoria establecida en la Orden TIN/970/2009, de 6 de abril. (BOE 294, 7 de diciembre de 2009). **Economía social**

Orden TIN/3440/2009, de 16 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal. (BOE 306, 21 de diciembre de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Economía social / Responsabilidad social / Autónomos / Inserción**

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. (BOE 315, 31 de diciembre de 2009). **Protección desempleo**

Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración. (BOE 29, 3 de febrero de 2010). Empresas de inserción / Registro[2]

Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. (BOE 41, 16 de febrero de 2010). **Inserción laboral / Protección por desempleo**

Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal. (BOE 42, 17 de febrero de 2010). **Economía social / Empresas de inserción / Responsabilidad social / Autoempleo**

2. Véase el texto de esta ley en el apartado *Disposiciones de mayor interés.*

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. (Corrección de errores BOE 95, 20 de mayo de 2010). (BOE 89, 13 de abril de 2010). **Empleo**

Orden ARM/1219/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden APA/180/2008, de 22 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE 117, 13 de mayo de 2010). **Cooperativas / Integración**

Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. (BOE 142, 11 de junio de 2010). **Desarrollo Rural**

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. (BOE 147, 17 de junio de 2010). **Empleo**

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal, para el ejercicio 2010. (BOE 153, 24 de junio de 2010). **Cooperativas / Integración**

Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional. (BOE 154, 25 de junio de 2010). **Cooperación internacional**

Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. (BOA 159, 1 de julio de 2010). **Empresas / Interés general**

Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Corrección de errores BOE 173, 17 de julio de 2010 (BOE 169, 13 de julio de 2010). **Cajas de Ahorro**

Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. (BOE 170, 14 de julio de 2010). **Empleo**

ANDALUCÍA

Decreto-Ley 2/2009, de 20 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA 208, 23 de octubre de 2009). **Cajas de Ahorros**

Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 53, 18 de marzo de 2010). **Interés general**

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. (BOJA 54, 19 de marzo de 2010 y BOE 77, 30 de marzo de 2010). **Vivienda**

Orden de 20 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para apoyar el aumento de dimensión y tamaño de las empresas y cooperativas del sector agroindustrial, fomentando la cooperación empresarial, las fusiones, integración y alianzas estratégicas e impulsando la constitución de entidades asociativas de 2.º y ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2010. (BOJA 82, 29 de abril de 2010). **Entidades agrarias / Cooperativas agrarias / Cooperación empresarial / Integración**

Decreto 114/2010, de 6 de abril, por el que se aprueba el III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014. (BOJA 89, 10 de mayo de 2010). **Voluntariado**

Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía. (BOJA 90, 11 de mayo de 2010). **Empresas de inserción / Registro**

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y uniones de la citada Confederación. (BOE 171, 15 de julio de 2010). **Cooperativas agrarias**

Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOA 144, 23 de julio de 2010 y BOE 193, 10 de agosto de 2010). **Empresas**

ARAGÓN

Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. Corrección de errores en BOA 217, de 9 de noviembre de 2009 y en BOE 283, de 24 de noviembre de 2009. (BOA 132, 10 de julio de 2009 y BOE 201, de 20 de agosto de 2009). **Servicios Sociales**

Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda modificar los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 8 de mayo de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones reguladas en el Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOA 253, 31 de diciembre de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo**

Orden de 1 de marzo de 2010, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2010 las subvenciones reguladas en el Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 68, 8 de abril de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo**

Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. Corrección de errores BOA 142, 21 de julio de 2010. (BOA 124, 25 de junio de 2010 y BOE 195, 12 de agosto de 2010). Cooperativas[3]

ASTURIAS

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la informatización de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 180, 4 de agosto de 2009). **Cooperativas agrarias / Informatización**

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones para la informatización de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas del Principado de Asturias. (BOPA 194, 21 de agosto de 2009). **Cooperativas agrarias / Informatización**

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 2010-2011, recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias. (BOPA 262, 12 de noviembre de 2009). **Economía social / Autoempleo**

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases y normas reguladoras para la concesión de subvenciones recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias. (BOPA 262, 12 de noviembre de 2009). **Economía social / Autoempleo**

3. Véase el texto de esta ley en el apartado *Disposiciones de mayor interés.*

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para la concesión de ayudas a la informatización de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 267, 18 de noviembre de 2009). **Cooperativas agrarias / Modernización**

Ley del Principado de Asturias 3/2010, de 26 de marzo, de tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro. (BOPA 81, 9 de abril de 2010). **Cajas de Ahorro**

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias para planes de explotación y otros gastos de funcionamiento. (BOPA 136, 14 de junio de 2010). **Cofradía de Pescadores**

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 152, 2 de julio de 2010). **Cooperativas agrarias**

Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas (BOPA 160, 12 de julio de 2010). Cooperativas[4]

BALEARES

Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 18 de junio de 2009 por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas públicas para entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales, de iniciativas de inserción social y de profesionales autónomos para realizar proyectos que promuevan el autoempleo en los nuevos yacimientos de empleo y en las TICS, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE de las Islas Baleares 2007-2013. (BOIB 095, 2 de julio de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción Social / Autónomos / Autoempleo / TICS**

Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 10 de julio de 2009 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas al objeto de apoyar a las entidades asociativas de cooperativas y sociedades laborales en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009. (BOIB 106, 23 de julio de 2009). **Cooperativas / Sociedades Laborales / Asociacionismo**

Resolución de la consejera de Treball i Formació, por la que se nombran las personas titulares y suplentes del Consell de l'Economia Social i del Cooperativisme de las Illes Balears. (BOIB 177, 5 de diciembre de 2009). **Economía social**

4. Véase el texto de esta ley en el apartado *Disposiciones de mayor interés.*

Resolución de concesión de subvenciones, al amparo de la Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 23 de julio de 2009, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar la ocupación y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 25, 13 de febrero de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad**

Decreto 61/2010, de 23 de abril, por el que se regulan la composición, la organización y el funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de las Illes Balears. (BOIB 65, 29 de abril de 2010). **Servicios sociales**

Decreto 62/2010, de 23 de abril, por el cual se regulan la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Comité de Ética de Servicios Sociales de las Illes Balears. (BOIB 65, 29 de abril de 2010). **Servicios sociales**

Decreto 15 /2010, de 7 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el que se confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el ámbito de las Illes Balears. (BOIB 76, 22 de mayo de 2010). **Fundaciones**

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de mayo de 2010, por la que se convocan, para el ejercicio 2010, las ayudas para el fomento de la intercooperación y la concentración de las cooperativas. (BOIB 76, 22 de mayo de 2010). **Cooperativas / Concentración**

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 9 de junio de 2010 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para fomentar el empleo y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas en un 50% por el Fondo Social Europeo a través del programa operativo pluriregional "Adaptabilidad y empleo" dentro del período de programación 2007-2013; para la concesión de otras ayudas cofinanciadas en un 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2007-2013, y para la concesión de ayudas consistentes en el abono de las cuotas de la Seguridad Social a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único (BOIB 92, 19 de junio de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Competitividad / Empleo / Seguridad Social**

Decreto 85/2010, de 25 de junio por el cual se regula la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears (BOIB 99, 3 de julio de 2010). **Servicios Sociales**

CANARIAS

Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias. (BO Can. 198, 8 de octubre de 2009 y BOE 255, 22 de octubre de 2009). **Artesanía**

Resolución de 22 de abril de 2010, del Presidente, por la que se establece la convocatoria para el año 2010 de concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas como I+E, de Empresas de Economía Social y de Empresas de Inserción, en el marco del Plan Canarias Emplea, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BO Can 86, 4 de mayo de 2010). **Economía social / Empresas de inserción / Creación de empresas**

Orden de 30 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes. (BO Can 91, 11 de mayo de 2010). **Entidades de pesca**

Orden de 28 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión de subvenciones en las áreas de personas mayores, con discapacidad, voluntariado e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010. (BO Can 92, 12 de mayo de 2010). **Mayores / Discapacitados / Voluntariado / Inserción social**

Decreto 47/2010, de 6 de mayo, que modifica el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, así como otras normas en materia de vivienda. (BO Can 95, 17 de mayo de 2010). **Cooperativa de viviendas**

Orden de 7 de junio de 2010, por la que se convocan para el ejercicio 2010, las subvenciones establecidas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipamiento y gastos corrientes, aprobadas por Orden de 30 de abril de 2010, de esta Consejería. (BO Can 116, 15 de junio de 2010). **Entidades de Pesca**

Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana. (BO Can 127, 30 de junio de 2010 y BOE 168, 12 de julio de 2010). **Acción Social**

CANTABRIA

Orden DES/65/2009, de 31 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2009 ayudas al sector pesquero de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca (2007-2013). (BO Cant 174, 9 de septiembre de 2009). **Entidades de pesca**

Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. (BO Cant. 245, 23 de diciembre de 2009 y BOE 15, 18 de enero de 2010). **Servicios sociales**

Orden EMP/38/2010, de 19 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social. (BO Cant 64, 6 de abril de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad**

Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de carácter social correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 71, 15 de abril de 2010). **Entidades no lucrativas**

Orden DES/19/2010, de 31 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2010 de las ayudas de concurrencia competitiva destinadas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Federación. (BO Cant 72, 16 de abril de 2010). **Cofradía de pescadores / Competitividad**

Anuncio de convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y al fomento del asociacionismo, correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 91, 13 de mayo de 2010). **Asociacionismo**

Aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones humanitarias y de cooperación al desarrollo correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 92, 14 de mayo de 2010). **Cooperación al desarrollo**

Orden des/27/2010, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2010 de las ayudas a las cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras asociaciones sin ánimo de lucro. (BO Cant 93, 17 de mayo de 2010). **Entidades de pesca / Entidades no lucrativas**

CASTILLA - LA MANCHA

Decreto 103/2009, de 28 de julio de 2009, que modifica el Decreto 77/2006, de 6 de junio, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales a los diferentes órganos de la Consejería de Trabajo y Empleo. (DOCM 148, 31 de julio de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales**

Orden de 18 de agosto de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se regulan y convocan ayudas para el ejercicio 2009 para la formalización de aval bancario a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con objeto de facilitar el acceso a los créditos destinados a la financiación de circulante a la industria agroalimentaria y las cooperativas y sociedades agrarias de transformación agroalimentarias, así como a sus socios, en la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha. Corrección errores en DOCM Nº 187 del 24 de septiembre de 2009. (DOCM 180, 15 de septiembre de 2009). **Cooperativas agrarias / SAT / Financiación**

Decreto 142/2009, de 29 de septiembre de 2009, por el que se regulan subvenciones para promover la creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social de Castilla-La Mancha y para la generación de empleo. (DOCM 193, 2 de octubre de 2009). **Economía social / Competitividad / Empleo**

Decreto 11/2010, de 09 de marzo de 2010, por el que se modifica el Decreto 65/2009, de 26 de mayo, por el que se regula el Plan de choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha. (BOCM 51, 15 de marzo de 2010). **Protección desempleo**

Orden de 25 de marzo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para las redes regionales de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. (BOCM 61, 30 de marzo de 2010). **Desarrollo rural**

Decreto 21/2010, de 20 de abril de 2010, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOCM 77, 23 de abril de 2010). **Discapacitados / Inserción laboral / Centros de empleo**

Decreto 22/2010, de 20 de abril de 2010, por el que se dictan normas de desarrollo para la calificación de empresas de inserción y se crea el registro administrativo de estas empresas. (DOCM 77, 23 de abril de 2010). **Empresas de inserción / Registro**

Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. (BOCM 97, 21 de mayo de 2010). **Comercio**

Cajas de Ahorro. Ley 3/2010, de 13 de mayo, de modificación de la Ley 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha. (BOCM 97, 21 de mayo de 2010). **Cajas de Ahorro**

CASTILLA Y LEÓN

Orden EYE/2401/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el año 2010 dirigidas al fomento de las inversiones para la creación y desarrollo de cooperativas y sociedades laborales y, para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en ellas. (Códigos REAY 006 y 007). (BOCyL 251, 31 de diciembre de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Integración socios**

Orden EYE/2402/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para el año 2010 para la difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo. (BOCyL 251, 31 de diciembre de 2009). **Economía social / Empleo**

Orden EYE/2403/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor y del asociacionismo de Trabajadores Autónomos, en Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla y León en el año 2010. (BOCyL 251, 31 de diciembre de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales / Emprendedores / Asociacionismo**

Decreto 1/2010, de 7 de enero, por el que se modifica el Decreto 2/1992, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León. (BOCyL 7, 13 de enero de 2010). **Economía Social / Reglamento**

Acuerdo 40/2010, de 29 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Director de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo (2009-2012). (BOCyL 84, 5 de mayo de 2010). **Cooperación al desarrollo**

Orden AYG/729/2010, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden AYG/652/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas para promover y fomentar el movimiento cooperativo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 105, 3 de junio de 2010). **Cooperativas Agrarias**

Orden AYG/1002/2010, de 18 de junio, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas para promover y fomentar el Movimiento Cooperativo Agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 135, 15 de julio de 2010). **Entidades agrarias / Cooperativismo**

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y uniones de la citada Confederación (BOE 171, 15 de julio de 2010). **Cooperativas Agrarias**

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 2 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, con destino a la realización de itinerarios personalizados de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad para el año 2010. (BOCyL 137, 19 de julio de 2010). **Entidades no lucrativas / Inserción laboral / Discapacitados**

CATALUÑA

Resolución TRE/2043/2009, de 13 de julio, por la que se acuerda descalificar las cooperativas que no han adaptado sus estatutos sociales a la Ley 18/2002, de cooperativas de Cataluña. (DOGC 5425, 21 de julio de 2009). **Cooperativas**

Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas. (DOGC 5580, 4 de marzo de 2010 y BOE 63, 13 de marzo de 2010). **Entidades de pesca**

Resolución TRE/517/2010, de 23 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción de justificación de las subvenciones públicas de las convocatorias del año 2009 para la financiación de planes de formación de oferta de carácter intersectorial, específicos para la economía social, sectorial y extraordinaria para el sector del metal, la automoción y su industria auxiliar. (DOGC 5580, 4 de marzo de 2010). **Economía Social / Financiación / Formación**

Orden GAP/127/2010, de 1 de marzo, de convocatoria para otorgar subvenciones plurianuales a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de actuaciones y de actividades cívicas, comunitarias y de fomento del voluntariado y de aprobación de las bases reguladoras para los años 2010 y 2011. (DOGC 5583, 9 de marzo de 2010). **Entidades no lucrativas / Voluntariado**

Orden TRE/142/2010, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promocionar y divulgar de las cooperativas y sociedades laborales. (DOGC 5588, 16 de marzo de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Economía social**

Resolución TRE/663/2010, de 9 de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2010 para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover y divulgar las cooperativas y sociedades laborales, que regula la Orden TRE/142/2010, de 8 de marzo. (DOGC 5588, 16 de marzo de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Desarrollo empresarial**

Resolución TRE/664/2010, de 9 de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2010 para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones a los programas de ámbito local de fomento y asesoramiento para la creación de empresas, a los proyectos singulares y/o experimentales de soporte para la creación de empresas (entidades colaboradoras de la Dirección de Economía Cooperativas y Creación de Empresas, denominadas Inicia: para la Creación de Empresas). (DOGC 5588, 16 de marzo de 2010). **Creación de empresas / Asistencia técnica**

Orden TRE/166/2010, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden TRE/277/2009, de 15 de mayo, por la que se regula el régimen de subvenciones en especie para los/las técnicos/as de las entidades colaboradoras de la Dirección General de Economía Cooperativa y Creación de Empresas para participar en el curso de formación superior universitaria en materia de creación de empresas, que regula la Orden TRE/341/2008, de 9 de julio, y se establece la convocatoria para presentar solicitudes para el año 2010. (DOGC 5596, 26 de marzo de 2010). **Creación de empresas / Formación**

Orden GAP/168/2010, de 22 de marzo, de convocatoria de subvenciones a entidades del tercer sector y otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para inversiones en el patrimonio propio y de aprobación de las bases reguladoras. (DOGC 5597, 27 de marzo de 2010). **Entidades no lucrativas / Tercer Sector**

Orden JUS/196/2010, de 24 de marzo, de convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al ejercicio 2010 para la organización y realización de cursos, postgrados y masters, seminarios, jornadas y congresos y estudios y trabajos relacionados con la evolución, la adaptación y el desarrollo de las organizaciones que conforman el tercer sector, su influencia dentro de la sociedad y sus perspectivas de futuro. (DOGC 5061, 6 de abril de 2010). **Formación / Tercer Sector**

Resolución TRE/1409/2010, de 7 de abril, por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones para los programas de soporte para la contratación de personas en situación o grave riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción sociolaboral inscritas en el Registro administrativo de empresas de inserción de Cataluña durante el año 2009. (DOGC 5623, 6 de mayo de 2010). **Inserción sociolaboral**

Orden AAR/287/2010, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la concentración, la intercooperación y la modernización de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las correspondientes al año 2010. (DOGC 5631, 18 de mayo de 2010). **Cooperativas / Entidades agrarias / Modernización /Concentración**

Orden TRE/364/2010, de 21 de junio, por la que se modifica la Orden TRE/142/2010, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover y divulgar las cooperativas y sociedades laborales, y se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes. (DOGC 5661, 1 de julio de 2010). **Empresas / Economía Social / Cooperativismo**

Decreto 83/2010, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. (DOGC 5664, 6 de julio de 2010). **Cooperativas**

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. (DOGC 5677, 23 de julio de 2010 y BOE 196, de 13 de agosto de 2010). **Consumo**

CEUTA Y MELILLA

Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia. (BOE 244, 9 de octubre de 2009). **Dependencia / Servicios sociales**

EXTREMADURA

Orden de 1 de julio de 2009 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre de 2009 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas, y empresas de la economía social. (DOE 137, 17 de julio de 2009). **PyMES / Empresas de Economía Social**

Decreto 199/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2009 y se modifica el Decreto 107/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan los programas de talleres de recualificación para el empleo y se aprueba la primera convocatoria del programa de talleres de recualificación para emprendedores en el ámbito de la dependencia, correspondiente al año 2009. Corrección errores en DOE 183, 22 de septiembre de 2009. (DOE 172, 4 de septiembre de 2009). **Economía Social / Autoempleo / Empleo**

Orden de 2 de octubre de 2009 por la que se modifica el modelo normalizado de solicitud de subvenciones acogidas al Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el que se regula el Programa de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social. (DOE 199, 15 de octubre de 2009). **Economía social / Empleo**

Orden de 30 de diciembre de 2009 por la que se establecen instrumentos para la materialización de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 8, 14 de enero de 2010). **Cajas de Ahorro / Obra Social**

Decreto 21/2010, de 19 de febrero, por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Extremadura. (DOE 38, 25 de febrero de 2010). **Autónomos / Registro**

Orden de 2 de marzo de 2010 por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2009, por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de inserción social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, para el año 2010. (DOE 42, 3 de marzo de 2010). **Inserción Social**

Decreto 27/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura. (DOE 44, 5 de marzo de 2010). **Jóvenes**

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se actualizan determinados precios del Decreto 114/2009, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012, y se modifica el régimen transitorio del Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 48, 11 de marzo de 2010). **Cooperativas de vivienda**

Decreto 78/2010, de 18 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral y la creación del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 57, 25 de marzo de 2010). **Inserción laboral / Registro**

Decreto 151/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 199/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2009 y se modifica el Decreto 107/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan los Programas de Talleres de Recualificación para el Empleo y se aprueba la primera convocatoria del Programa de Talleres de Recualificación para Emprendedores en el ámbito de la dependencia, correspondiente al año 2009. (DOE 131, 9 de julio de 2010). **Economía social / Emprendedores / Autoempleo**

Decreto 158/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 246/2009, de 27 de noviembre, por el que se determina la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Extremeño del Trabajo Autónomo, adscrito a la Consejería de Igualdad y Empleo. (DOE 135, 15 de julio de 2010). **Interés general / Autoempleo**

GALICIA

Resolución de 10 de junio de 2009 por la que se hace pública la concesión de los premios sobre cooperativismo en la enseñanza dirigido a los centros educativos de Galicia. (DOG 133, 9 de julio de 2009). **Cooperativismo**

Orden de 23 de julio de 2009 por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2009, por la que se regulan las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para inversión, mantenimiento y promoción de actividades y programas de servicios sociales, y se procede a su convocatoria. (DOG 152, 5 de agosto de 2009). **Entidades de iniciativa social / Servicios sociales**

Orden de 14 de agosto de 2009 por la que se convocan ayudas para el apoyo a las cooperativas y otras entidades de economía social de carácter no lucrativo para el año 2009. (DOG 172, 2 de septiembre de 2009). **Cooperativas / Economía social / Entidades no lucrativas**

Decreto 406/2009, de 22 de octubre, por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG 222, 12 de noviembre de 2009. **Autónomos / Registro**

Orden de 11 de noviembre de 2009 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas para el fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en común para la mejora de los procesos productivos en cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación convocadas por la Orden de 25 de junio de 2009. (DOG 225, 17 de noviembre de 2009). **Cooperativas agrarias / Sociedades agrarias de transformación / Uso en común**

Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia. (DOG 2, 5 de enero de 2010 y BOE 47, 23 de febrero de 2010). **Cajas de Ahorro**

Resolución de 15 de diciembre de 2009 por la que se hacen públicas las bases del certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido a los centros educativos de Galicia y se procede a su convocatoria. (DOG 45, 8 de marzo de 2010). **Cooperativas de Enseñanza**

Orden de 22 de febrero de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo de programas que contribuyan a fomentar la inclusión social y la integración en el mercado de trabajo de las personas en situación o riesgo de exclusión social y se procede a su convocatoria. (DOG 51, 16 de marzo de 2010). **Entidades de iniciativa social / Inserción Sociolaboral**

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. (DOG 61, 31 de marzo de 2010). **Cooperativa de viviendas**

Orden de 1 de junio de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores autónomos, y se procede a su convocatoria para el año 2010 (DOG 112, 15 de junio de 2010). **Autónomos / Asociacionismo**

Orden de 14 de junio de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas de fomento del empleo en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo y se procede a su convocatoria para el año 2010 (DOG 119, 24 de junio de 2010). **Economía Social / Cooperativismo**

Orden de 1 de julio de 2010 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para inversión en servicios sociales especializados en el área de atención a personas con discapacidad y se procede a su convocatoria. (DOG 128, 7 de julio de 2010). **Servicios sociales / Discapacitados**

Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento del sector naval de Galicia Corrección errores DOG 127, 06 de julio de 2010 (DOG 126, 05 de julio de 2010 y BOE 174, 19 de julio de 2010). **Entidades de pesca**

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1065-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio y 4/1996, de 31 de mayo, de Cajas de Ahorros de Galicia (DOG 166, 9 de julio de 2010). **Cajas de Ahorros**

LA RIOJA

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (BOE 170, 15 de julio de 2009). **Vivienda**

Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja. (BOR 160, 28 de diciembre de 2009 y BOE 14, de 16 de enero de 2010). **Servicios sociales**

MADRID

Orden 1758/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2009 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de inversiones para la prestación de servicios sociales especializados (sector de atención a personas con discapacidad). (BOCM 183, 4 de agosto de 2009). **Entidades no lucrativas / Servicios sociales**

Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. (BOCM 17, 21 de enero de 2010). **Consumo / Reglamento**

Orden 3935/2009, de 31 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2010. Corrección errores BOCM 57, 9 de marzo de 2010. (BOCM 34, 10 de febrero de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad / Mujeres**

Orden 119/2010, de 8 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de los Programas de Inclusión Social regulados en el artículo 6.1.b) de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. (BOCM 62, 15 de marzo de 2010). **Inserción Social**

Orden 2886/2009, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Voluntariado durante el año 2010. (BOCM 86, 12 de abril de 2010). **Entidades no lucrativas / Voluntariado**

Orden 1164/2010, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden 1857/2008, de 11 de julio, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (BOCM 101, 30 de abril de 2010). **Centros de empleo / Discapacitados / Inserción laboral**

Orden 664/2010, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de servicios sociales para el año 2010. (BOCM 107, 6 de mayo de 2010). **Servicios sociales**

Orden 2049/2010, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden 3520/2005, de 20 de septiembre de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se establecen las bases que regulan la concesión de ayudas y subvenciones públicas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales, y de trabajadores autónomos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y por la que se convocan ayudas para el año 2010 (BOCM 149, 24 de junio de 2010). **Cooperativas / Sociedades laborales / Autónomos**

MURCIA

Resolución de 2 de diciembre de 2009, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agricultura y Agua y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) para la promoción del Asociacionismo Agrario en OPFHS. (BORM 289, 16 de diciembre de 2009). **Asociacionismo**

Orden de 24 de febrero de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan las bases y se convocan subvenciones para Programas de Fomento de la Economía Social para el año 2010. (BORM 53, 5 de marzo de 2010). **Economía social**

Decreto nº 53/2010, de 18 de marzo, de concesión directa de una subvención por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia para la realización de actuaciones de promoción internacional de las organizaciones integradas en dicha entidad. (BORM 67, 23 de marzo de 2010). **Cooperativas agrarias / Asociacionismo**

Decreto n.º 104/2010, de 21 de mayo, de concesión directa de unas subvenciones, por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, a favor de Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia y Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca, para la realización del Programa de Promoción de Iniciativas Emprendedoras 2010. (BORM 118, 25 de mayo de 2010). **Emprendedores / Iniciativa empresarial**

NAVARRA

Decreto Foral 80/2009, de 9 de noviembre, por el que se concede la Medalla de Oro de Navarra a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra. (BON 143, 20 de noviembre de 2009). **Cooperativas agrarias / Premios**

Ley Foral 4/2010, de 6 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. (BON 46, 14 de abril de 2010 y BOE 128, 26 de mayo de 2010). **Cooperación al desarrollo**

Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. (BON 46, 14 de abril de 2010 y BOE 128, 26 de mayo de 2010). **Discapacitados**

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. (BON 60, 17 de mayo de 2010 y BOE 132, 31 de mayo de 2010). **Vivienda**

Orden Foral 222/2010, de 5 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 477/2007, de 2 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas que regirán la concesión de ayudas al fomento de procesos de integración cooperativa, en el marco de la reestructuración del sector de cooperativas agrarias, y se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2010. (BON 61, 19 de mayo de 2010). **Cooperativas agrarias / Integración**

Orden Foral 212/2010, de 17 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la que se establece para el año 2010 el régimen temporal de las ayudas para impulsar la economía en Navarra. (BON 79, 30 de junio de 2010). **Economía / Financiación**

Resolución 1549/2010, de 2 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo de jóvenes, dentro de las medidas anticrisis del Gobierno de Navarra para el ejercicio de 2010. (BON 82, 7 de julio de 2010). **Jóvenes / Autoempleo**

PAÍS VASCO

Orden de 5 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social. (BOPV 129, 8 de julio de 2009). **Economía social / Integración socios**

Orden de 5 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. (BOPV 129, 8 de julio de 2009). **Economía social / Cooperación**

Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 129, 8 de julio de 2009). **Economía Social / Formación**

Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas. (BOPV 130, 9 de julio de 2009). **Empresas participativas**

Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 130, 9 de julio de 2009). **Economía Social**

Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se articulan las ayudas para la realización de inversiones en Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales, de la CAPV. (BOPV 130, 9 de julio de 2009). **Cooperativas / Sociedades Laborales / Inversión**

Resolución de 1 de diciembre de 2009, del Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión Social, por la que se da publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante el año 2009 para la financiación de las ayudas previstas en la Orden de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, de 17 de junio de 2009, por la que se regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 34, 19 de febrero de 2010). **Economía social / Asistencia técnica / Financiación**

Resolución de 24 febrero de 2010, del Viceconsejero de Hacienda y Finanzas, por la que se da publicidad al importe total de los créditos asignados, en el año 2010, para la financiación de las ayudas previstas en el Decreto 252/2006, de 12 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria. (BOPV 47, 10 de marzo de 2010). **Entidades de Previsión Social**

Decreto 80/2010, de 9 de marzo, de modificación del Decreto por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y profesionales autónomos. (BOPV 51, 16 de marzo de 2010). **PyMEs /Autónomos**

Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. (BOPV 65, 9 de abril de 2010). **Cooperación al desarrollo**

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social. (BOPV 146, 30 de julio de 2010). **Economía Social / Integración socios**

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 146, 30 de julio de 2010). **Economía Social / Asistencia técnica**

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. (BOPV 146, 30 de julio de 2010). **Economía Social / Cooperación empresarial**

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 146, 30 de julio de 2010). **Economía Social / Formación**

COMUNIDAD VALENCIANA

Orden de 28 de julio de 2009, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano. (DOCV 6076, 11 de agosto de 2009). **Cooperativas agrarias**

Orden de 6 de agosto de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan los programas de Talleres de Empleo, para el reciclaje profesional, durante el ejercicio 2009. (DOCV 6088, 27 de agosto de 2009). **Empleo**

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba una segunda convocatoria para el año 2009 de las ayudas reguladas en la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano (DOCV 6003, de 29.04.2009), como consecuencia de la aprobación de la dotación extraordinaria prevista en el Plan de Impulso de los Sectores Productivos de la Generalitat Valenciana. (DOCV 6118, 7 de octubre de 2009). **Cooperativas Agrarias**

Resolución de 6 de noviembre de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca para el año 2009 una segunda fase de las ayudas para el fomento de las cooperativas y sociedades laborales para el año 2009. (DOCV 6148, 19 de noviembre de 2009). **Cooperativas / Sociedades laborales**

Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009. (DOCV 6149, 20 de noviembre de 2009). **Discapacitados / Empleo**

Decreto 38/2010, de 19 de febrero, del Consell, por el que se crea el Comité Consultivo Autonómico del Sistema Valenciano para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se establecen sus normas de funcionamiento. (DOCV 6212, 23 de febrero de 2010). **Dependencia**

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dispone la publicación de la relación de árbitros designados por el Consejo Valenciano del Cooperativismo, para emitir laudo en los arbitrajes cooperativos en que intervenga dicho órgano. (DOCV 6276, 27 de mayo de 2010). **Cooperativas**

Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 (DOCV 6301, 1 de julio de 2010). **Cooperativa de viviendas**

Ley 11/2010, 16 de julio, de la Generalitat, Reguladora del Estatuto de las Personas Cooperantes Valencianas. Publicada en el BOE nº 194 de 11 de agosto de 2010 Corrección errores DOCV 6316, 22 de julio de 2010 (DOCV 6315, 21 de julio de 2010). **Cooperación internacional**

Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo Publicada en el (DOCV 6316, 22 de julio de 2010 y BOE 194, 11 de agosto de 2010). **Empleo**

Orden 29/2010, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la ampliación transitoria de las subvenciones públicas de ayuda salarial para mantenimiento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009 (DOCV 6317, 23 de julio de 2010). **Discapacitados / Centros de empleo**

II. DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS

Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas (BOPA 160, de 12 de julio)

El Presidente del Principado de Asturias

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de Cooperativas.

PREÁMBULO

La Constitución de 1978 supuso un punto de inflexión en el desarrollo legislativo del derecho cooperativo español y fue el origen del complejo panorama legislativo actual. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, establece, en su artículo 10.1.27, que el Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en materia de cooperativas. Posteriormente, a través de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, el Estado transfirió dicha competencia al Principado de Asturias, traspasándose por medio del Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, las correspondientes funciones y servicios.

En este escenario, el Principado de Asturias ha considerado conveniente impulsar una legislación propia que suponga una seria apuesta de las instituciones públicas asturianas en favor del movimiento cooperativo existente en el Principado de Asturias y, además, capaz de satisfacer las legítimas aspiraciones que aquél demanda.

En la redacción del texto legal se ha procurado la adaptación de la normativa cooperativa a la realidad económica y social del Principado de Asturias, pero, al mismo tiempo, se ha pretendido que éste constituya un instrumento jurídico eficaz para que el cooperativismo asturiano pueda hacer frente a los grandes desafíos económicos y empresariales que el siglo XXI plantea. Este segundo objetivo ha exigido, igualmente, crear un marco normativo preciso, moderno e innovador, que, alejado de visiones localistas, incorpore una regulación técnica y actualizada para las sociedades cooperativas de Asturias. Por ello, el objeto de la presente ley es configurar a las cooperativas asturianas como sociedades modernas y competitivas, con un régimen jurídico y económico consolidado y flexible, que se adapte bien a las necesidades actuales y futuras del mercado, sin perder de vista los principios cooperativos que deben regir en este tipo de sociedades, y que se caracteriza singularmente por el alto grado de autonomía estatutaria o la amplia libertad autorreguladora reconocida a estas sociedades para decidir el diseño organizativo que juzguen más apropiado y conveniente para afrontar eficazmente todas sus exigencias estructurales, financieras y funcionales.

La ley consta de 208 artículos, estructurados en siete títulos, tres disposiciones transitorias y una final.

II

El texto articulado comienza con una definición de cooperativa, en la que se subraya que su objeto prioritario es la promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades, a través de una empresa gestionada democráticamente.

La ley ha seguido el criterio de delimitación espacial utilizado por la estatal y la mayoría de las autonómicas, declarándose aplicable a las cooperativas que desarrollen total o principalmente en el territorio del Principado de Asturias la actividad cooperativizada con sus socios, esto es, la actividad societaria típica de la cooperativa. Para estas sociedades, la legislación de cooperativas del Estado se aplicará como norma supletoria, para cubrir eventuales lagunas legales.

La personalidad jurídica de las cooperativas se supedita a la clásica doble exigencia de escritura pública e inscripción en el registro de cooperativas, en este caso, del Principado de Asturias. Al efecto, se crea un registro definido por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

La ley regula los derechos y las obligaciones de los socios que configuran el estatuto básico del cooperativista, lo que se ha de completar con las previsiones adicionales legales y estatutarias, sin perjuicio de las especialidades que concurren en las distintas categorías de socios. Aunque el trato igualitario a los socios es una característica consustancial al cooperativismo, los derechos y las obligaciones de los socios de la cooperativa no van a ser siempre los mismos, sino que dependerán del tipo de socio que sea y de las concretas previsiones estatutarias al respecto. En este sentido, debe ser objeto de especial consideración la disciplina del derecho de baja del socio, ya que si bien es regulado como forma tradicional de abandono voluntario de la sociedad por parte de los socios, ello se hace sin perjuicio del reconocimiento expreso de la plena autonomía estatutaria de la cooperativa para acordar su supresión o prohibición, para decantarse por la transmisión de las aportaciones sociales como vía preferente de salida voluntaria de los socios, como acontece en otros tipos de sociedades, y así dar una respuesta adicional a la problemática derivada de la inevitable aplicación a las sociedades cooperativas de los nuevos criterios contables que, por decisión de la Unión Europea, son fruto de la plena vigencia en nuestro ordenamiento de las Normas Internacionales de Contabilidad, especialmente, por lo que a este tipo de empresas interesa, la número 32 (NIC 32), que supone la consideración del capital social cooperativo como un recurso ajeno si éste fuere incondicionalmente reembolsable al socio con motivo del ejercicio de su derecho de baja voluntaria.

El socio de trabajo, caracterizado por realizar una actividad cooperativizada consistente en la prestación de su trabajo personal en las cooperativas que no sean de trabajo asociado o de explotación comunitaria de la tierra, ostenta un peculiar estatuto jurídico que debe ser precisado en los estatutos de la cooperativa, determinando tanto los requisitos de admisión y baja, como las principales condiciones de su prestación de servicios, siendo de aplicación subsidiaria las normas establecidas en la Ley para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.

El socio colaborador se define, en concordancia con otras leyes autonómicas, como el socio vinculado a la cooperativa por realizar aportaciones al capital social de carácter voluntario, especificándose legalmente las particularidades de su régimen en cuanto a los derechos y obligaciones que ostenta.

La ley, tras reconocer el principio de igualdad en el trato a los socios, recoge un catálogo de los derechos mínimos y obligaciones básicas de los socios, para después regular con cierto detalle algunos de ellos, debiendo destacarse, por su novedad, la regulación específica de la participación de los socios en la actividad cooperativizada.

Una cuestión especialmente tratada ha sido la de las normas de disciplina social. Se parte del principio de tipicidad estatutaria de los hechos sancionables, que deben ser calificados en faltas leves, graves y muy graves. Del mismo modo, se deben establecer en los estatutos el procedimiento sancionador y las consecuencias concretas derivadas de su infracción, que pueden consistir en sanciones pecuniarias, la suspensión de derechos, e incluso, la exclusión de la sociedad.

La suspensión de derechos, que se precisará necesariamente en los estatutos, sólo podrá establecerse en los casos en el que el socio se halle al descubierto de sus obligaciones económicas o no participe en la actividad cooperativizada

que le corresponda, y, en ningún caso, puede alcanzar al derecho de información y a los derechos económicos básicos del socio. En cuanto a la expulsión del socio, que sólo puede acordarse por falta muy grave establecida en los estatutos, se regula con cierto detalle su procedimiento y, como novedad, se incluye expresamente en la propia Ley un listado de causas susceptibles de motivar la exclusión.

En consonancia con la tradición en el derecho cooperativo; la Ley establece la presencia de tres órganos sociales obligatorios: el órgano de administración como órgano de gestión y representación, la asamblea general como órgano soberano de decisión y la intervención como órgano de fiscalización. También, se contempla la posibilidad de que estatutariamente se prevean un comité de recursos y otras instancias de carácter consultivo o asesor, aunque éstas en ningún caso tendrán la consideración de órganos sociales.

En relación con la asamblea general se han determinado con precisión sus competencias, y en atención a su condición de órgano soberano de la cooperativa se admite que imparta instrucciones al órgano de administración sobre determinados asuntos de gestión.

El régimen jurídico del órgano de administración presenta novedades sobre su estructura y configuración, que han pretendido dejar margen para la determinación estatutaria de la configuración que se ajuste mejor a los intereses de la cooperativa. Así, frente al sistema más generalizado en la legislación cooperativa que establece como órgano prototípico el consejo rector, admitiendo la posibilidad de la figura del administrador único sólo para las cooperativas de menor dimensión, esta ley permite que el órgano de administración se configure de cuatro maneras diferentes, bien la tradicional del consejo rector, o por un administrador único, dos solidarios o dos mancomunados, pudiendo los socios optar por uno de estos sistemas sin que la elección esté condicionada por la dimensión de la cooperativa.

La ley regula el régimen jurídico de la intervención partiendo de la idea de que su competencia, como órgano de fiscalización, resulta importante para garantizar, por lo menos, la existencia de un control interno de la contabilidad de la sociedad, frente a otras posturas doctrinales que cuestionan su utilidad y que incluso abogan por la eliminación de este órgano.

En la regulación del régimen económico; la Ley persigue un doble objetivo: por una parte, pretende fortalecer la vertiente empresarial de las cooperativas y, por otra, garantizar la solvencia y credibilidad económica de estas entidades, en especial, ofreciendo vías concretas para preservar la fortaleza patrimonial de la cooperativa ante la entrada en vigor de la NIC 32.

Para conseguir el primer objetivo, además de la referida exigencia de un capital mínimo para ofrecer un testimonio real de seriedad del proyecto, se permite, siguiendo la orientación marcada por las leyes más recientes, que la aportación obligatoria inicial sea diferente para los distintos tipos de socios o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma en la actividad cooperativizada.

Para garantizar la solvencia y credibilidad de las cooperativas y los derechos de los terceros que contratan con ellas, el texto articulado prevé dos medidas fundamentales: el sistema de imputación de pérdidas y la exigencia de mantener la cuantía de la aportación obligatoria para adquirir la condición de socio. Y, por otro lado, como consecuencia de la inevitable aplicación de la NIC 32 en nuestro ordenamiento, para garantizar la indemnidad patrimonial y no mermar la estructura financiera ni los actuales niveles de solvencia empresarial en el mercado de las sociedades cooperativas. frente a terceros o al resto de operadores económicos; la Ley ha optado básicamente por consagrar la absoluta autonomía de las propias cooperativas para decidir lo que estimen más conveniente y adecuado al respecto para sí, aunque ofreciéndoles en esencia dos posibilidades: de un lado, el reconocimiento del derecho de baja del socio pero con la decisión de que haya un porcentaje determinado de capital social, algunas aportaciones sociales, que sean consideradas como no exigibles por parte de los socios, pero que pudieran ser reembolsables por la cooperativa, si quisiera, para con ello consentir su califica-

ción como recurso propio de la sociedad, si bien esta decisión estatutaria se compatibiliza con la salida justificada de aquellos socios que no estuvieren de acuerdo con esta medida y, de otro lado, la prohibición del derecho de baja voluntaria del socio y su salida mediante la enajenación de sus aportaciones sociales, lo que comportaría la total consideración del capital social cooperativo como recurso propio, en tanto que no reembolsable.

Dentro del régimen económico de las cooperativas también es conveniente resaltar la regulación de otros aspectos en los queda patente la singularidad de este tipo societario como la remuneración, la actualización, el reembolso y la transmisión de las aportaciones, la determinación de resultados, la distribución de excedentes y los criterios sobre posibles destinos de los fondos sociales obligatorios.

Por lo que se refiere a la documentación social y la contabilidad, no ha habido novedades significativas respecto al régimen general de las sociedades mercantiles, si acaso la especial regulación que se ha hecho de la auditoría externa, en la que se ha afrontado el complejo tema de la designación y nombramiento de los auditores cuando la asamblea general no quiera o no pueda hacerlo.

En materia de modificación de estatutos; la Ley introduce una referencia general a las modificaciones estatutarias antes de abordar las llamadas modificaciones estructurales que son la fusión, la escisión y la transformación.

En la Ley se admite la fusión de varias cooperativas en una nueva, así como la fusión de una o varias cooperativas por absorción de otra cooperativa ya existente. Se contempla el derecho de separación de los socios que no han votado a favor del proyecto de fusión, indicando el plazo y la forma de ejercicio de su derecho a la liquidación de su participación.

La escisión de una cooperativa puede consistir en su extinción, previa división de todo su patrimonio en dos o más partes que se trasmiten en bloque a otra sociedad de nueva creación, o que será absorbido por una sociedad ya existente. La escisión de las cooperativas también puede consistir en la segregación de una parte del patrimonio de la cooperativa que se trasmite en bloque a otra sociedad ya existente.

La ley admite la transformación de la cooperativa en sociedades civiles o mercantiles, para lo que se establece con detalle el contenido del proceso de transformación, respetando el derecho de separación de los socios que no votaron a favor de la transformación.

La ley, asimismo, regula el proceso de disolución de la sociedad, determinando las causas de disolución y sus efectos.

III

Para aclarar el régimen jurídico de las cooperativas de segundo o ulterior grado, en vez de introducir a lo largo del articulado de la Ley excepciones al régimen general, se ha preferido regular sus especialidades en un único capítulo. En cuanto al grupo cooperativo, como realidad de integración empresarial que goza de una larga tradición en España, se ha puesto de manifiesto la necesidad para su existencia de una dirección unificada, y se han precisado algunos aspectos de su régimen. Por otra parte, para el mejor cumplimiento de su objeto social y defensa de sus intereses, se prevé que las cooperativas puedan constituir sociedades, agrupaciones, consorcios, y formalizar convenios o acuerdos, entre sí o con otras personas. A su vez, también se prevé la posibilidad de constituir uniones, federaciones y confederaciones, lo que nos lleva al tema del asociacionismo cooperativo, que también se regula de manera específica.

Las sociedades cooperativas asturianas, siguiendo un criterio ya clásico en el ordenamiento cooperativo español, se ordenan en atención a la finalidad perseguida y al concreto objeto de la actividad desarrollada, en cooperativas de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, de viviendas, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de servicios, del mar, de transportistas, de seguros, de crédito, sanitarias, de enseñanza, aparte de las cooperativas sin ánimo de lucro, integrales y mixtas.

Se ha aclarado el estatuto profesional de los socios en las cooperativas de trabajo asociado, reconociendo legalmente el carácter societario del vínculo entre la cooperativa y el socio trabajador.

Se han regulado con cierto detalle determinados aspectos de las cooperativas de vivien-

das, al considerarse que si bien éste puede ser un instrumento muy útil con el que resolver algunos problemas relacionados con la vivienda en nuestro territorio, se deben garantizar al máximo los derechos de los socios y evitar algunos de los abusos que se han dado en el sector.

Intentando adaptar la Ley a las peculiaridades concretas de la realidad económica asturiana, respecto a las cooperativas agrarias, cabe destacar las normas sobre las actividades cooperativizadas, permitiendo que los estatutos exijan una participación mínima o exclusiva, y un tiempo mínimo de permanencia de los socios en la cooperativa.

La ley ha abordado con peculiar detalle el régimen de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, precisando las actividades que pueden desarrollar esta clase de cooperativas.

Se fijan legalmente las actividades que pueden desarrollar las cooperativas del mar, que son aquéllas que asocian a personas titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras o de industrias marítimo-pesqueras y derivadas, y a profesionales por cuenta propia.

En las cooperativas integrales se hace especial hincapié en que deben regularse en sus estatutos los derechos y obligaciones correspondientes a las distintas clases de socios y en la necesaria representación equilibrada, que debe fijarse también estatutariamente, en los órganos sociales de las distintas actividades realizadas por la cooperativa.

La regulación de las cooperativas mixtas se introduce para ofrecer soluciones al problema de la participación de una sociedad de capitales en una sociedad cooperativa.

IV

En cuanto a la acción de la Administración autonómica, la regulación de la política de fomento refleja el interés real de los poderes públicos de la comunidad autónoma por apoyar el cooperativismo con fidelidad al mandato constitucional. Esta afirmación se pone de manifiesto al reconocer como de interés general la promoción y el desarrollo de las cooperativas y de sus estructuras de integración económica, en las medidas de fomento incluidas en la Ley, en la previsión de creación de cooperativas de servicios públicos y en el compromiso asumido por el Principado de Asturias de fomentar la formación cooperativa.

Por otra parte, se crea el Consejo Asturiano de la Economía Social, con funciones asesoras y consultivas para las actividades relacionadas con la economía social, y que se configura como un órgano de colaboración y coordinación del movimiento asociativo, de la administración autonómica y otros agentes sociales.

En materia de inspección en relación con el cumplimiento de la Ley, se atribuye con carácter general a la Consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora. Se regulan las clases de infracciones, que pueden ser leves, graves y muy graves, y sus respectivas sanciones, así como las causas y el procedimiento de descalificación de una sociedad cooperativa.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Concepto y denominación.

1. La cooperativa es una sociedad constituida por personas físicas o jurídicas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la satisfacción conjunta de sus necesidades e intereses socioeconómicos comunes, a través del desarrollo de actividades empresariales y de la adopción de una estructura, funcionamiento y gestión democráticos, siempre con el propósito de mejorar la situación económica y social de sus miembros y de su entorno comunitario.

2. Cualquier actividad económica y social lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una sociedad constituida al amparo de la presente ley.

3. La denominación social de la cooperativa incluirá necesariamente las palabras «Sociedad Cooperativa Asturiana» o su abreviatura «S. Coop. Astur.». Esta denominación deberá ser exclusiva, y reglamentariamente podrán regularse sus requisitos.

4. Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primero y ulterior grado, de acuerdo con las especificidades previstas en esta ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplicará a las sociedades cooperativas que desarrollen total o principalmente la actividad cooperativizada con sus socios en el territorio del Principado de Asturias, sin perjuicio de la actividad que realicen con terceros no socios, de la instrumental o de la personal accesoria que puedan realizar fuera de dicho ámbito territorial.

2. Se entenderá que la actividad cooperativizada se realiza principalmente en el territorio del Principado de Asturias cuando la misma resulte superior en su conjunto a la desarrollada fuera del mismo.

3. Asimismo, esta ley será aplicable a todas las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas que, con domicilio social en el Principado de Asturias, desarrollen su objeto social principalmente en ese ámbito territorial.

Artículo 3. Domicilio social.

La sociedad cooperativa fijará su domicilio social dentro del territorio del Principado de Asturias, en el lugar donde realice principalmente las actividades con sus socios o centralice su gestión administrativa y dirección empresarial.

Artículo 4. Capital social y responsabilidad.

1. El capital social de la cooperativa, que será variable, deberá alcanzar, al menos, la cifra de tres mil euros y, en la cuantía correspondiente a ese mínimo legal, estará íntegramente desembolsado desde la constitución de la sociedad con cargo a aportaciones obligatorias.

En el supuesto de baja voluntaria del socio los estatutos sociales podrán establecer si el órgano de administración puede rehusar incondicionalmente el reembolso del importe de las aportaciones obligatorias del socio que integraren la cifra de capital social mínimo estatutariamente previsto, y que tendría la condición de recurso propio de la cooperativa. En todo caso, el socio disconforme con esta previsión estatutaria podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada.

2. La cooperativa responderá de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al fondo de educación y promoción cooperativa, que sólo responderá de las obligaciones estipuladas para el cumplimiento de sus fines.

3. Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales, limitándose su responsabilidad exclusivamente al importe de las aportaciones al capital social que hubieren suscrito. No obstante, el socio que cause baja en la cooperativa responderá, previa excusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de su condición y hasta el importe reembolsado o pendiente de rembolsar de sus aportaciones al capital social, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja.

4. El Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 5. Operaciones con terceros.

Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios, si así lo prevén sus estatutos, con las limitaciones y condiciones contenidas en ellos y en la presente ley, sin perjuicio de la normativa fiscal y sectorial que les sea aplicable.

Artículo 6. Secciones.

1. Los estatutos podrán regular la constitución y el funcionamiento de secciones sin personalidad jurídica independiente, que desarrollen, dentro del objeto social, actividades económico-sociales específicas con autonomía de gestión, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa, con la salvedad prevista en el artículo 156.3 para las cooperativas de vivienda que ejecuten más de una promoción o fase separada.

2. Las secciones habrán de observar una contabilidad diferenciada e integrada dentro de la contabilidad general de la cooperativa, que permitirá informar separadamente sobre los activos, pasivos, gastos e ingresos correspondientes a la misma, de conformidad con la legislación contable que resultare aplicable. En su caso, las pérdidas de la sección serán imputadas a sus socios conforme al criterio general previsto en el artículo 99.

La cooperativa podrá repetir contra los socios de la sección para resarcirse de las cantidades desembolsadas por el cumplimiento de responsabilidades contraídas en el ejercicio de sus actividades específicas.

3. Las cooperativas de cualquier clase, excepto las de crédito, podrán regular en los estatutos la existencia de una sección de crédito, que limitará sus operaciones activas y pasivas al seno de la propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio de poder rentabilizar sus excedentes de tesorería en depósitos en otros intermediarios financieros, fondos públicos y valores emitidos por empresas públicas. El volumen de las operaciones activas de la sección de crédito en ningún caso podrá superar el 50 por ciento de los recursos propios de la cooperativa.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de cooperativas y previa audiencia del Consejo Asturiano de la Economía Social, fijará la proporción máxima permitida entre el total del pasivo exigible de la sección y los recursos propios de la cooperativa.

4. Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a auditar sus cuentas anuales.

Artículo 7. Acuerdos y representación de las secciones.

1. Los acuerdos de la junta de socios de la sección se reflejarán en un libro de actas especial, obligarán a todos los socios integrados en la misma, con inclusión de los ausentes y disidentes, y serán impugnables en los términos señalados en los artículos 57 y 58. La asamblea general podrá acordar la suspensión de los acuerdos de la junta de socios de una sección, haciendo constar los motivos por los que los considera ilegales, antiestatutarios o contrarios al interés general de la cooperativa. El acuerdo de suspensión tendrá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser impugnado según lo establecido en los artículos 57 y 58.

2. La representación y gestión de la sección corresponderá a los administradores de la cooperativa, sin perjuicio de que pueda ser designado un Director o apoderado de la sección encargado del giro o tráfico de la misma.

TÍTULO I
CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

CAPÍTULO I
CONSTITUCION

Artículo 8. Constitución e inscripción.

La cooperativa se constituirá mediante escritura pública y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

Artículo 9. Número mínimo de socios.

Las cooperativas de primer grado deberán estar integradas al menos por tres socios ordinarios, entendiendo por socio ordinario aquel que participa en la actividad cooperativizada. Las de segundo grado estarán integradas como mínimo por dos cooperativas.

Artículo 10. Modalidad de constitución.

1. Los promotores de la cooperativa podrán optar por constituirla directamente mediante escritura pública con la asistencia de todos ellos ante notario, o por celebrar, con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública, una asamblea constituyente.

2. Si se celebra la mencionada asamblea, se levantará la correspondiente acta, que reflejará:

a) la voluntad de los promotores de fundar una cooperativa y la clase de cooperativa de que se trate,

b) la aprobación de los estatutos sociales que han de regir la futura cooperativa,

c) la suscripción de la aportación obligatoria inicial para ser socio,

d) el nombramiento, entre los promotores, del gestor o gestores que actuarán en nombre de la futura cooperativa,

e) el nombramiento, entre los promotores, de quienes, una vez inscrita la sociedad en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, han de constituir el primer órgano de administración, los interventores y, si estuviera previsto por los estatutos sociales, el comité de recursos, y

f) la valoración de las aportaciones no dinerarias, de existir éstas.

3. En el acta deberá figurar, además, la relación de promotores, que será suscrita por todos ellos, con los siguientes datos identificativos: para las personas físicas, nombre y apellidos, edad, número de identificación fiscal y domicilio; para las personas jurídicas, nombre o razón social, código de identificación fiscal y domicilio; nombre, apellidos y número de identificación fiscal de su representante legal. Al acta se incorporará el texto de los estatutos sociales aprobados por la propia asamblea constituyente.

Artículo 11. Sociedad cooperativa en constitución.

1. Los promotores de la sociedad cooperativa en constitución, o los gestores designados de entre aquéllos en la asamblea constituyente, celebrarán, en nombre de la sociedad, los actos y contratos indispensables para su constitución, así como los que la asamblea constituyente les encomiende expresamente. También estarán habilitadas para actuar en nombre de la sociedad durante esta fase las personas designadas y con mandato específico para ello.

2. De los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias responderán solidariamente quienes los hubiesen celebrado, salvo que su eficacia hubiese quedado condicionada a la inscripción y, en su caso, a la posterior asunción de los mismos por parte de la sociedad cooperativa.

3. En el supuesto de que el valor del patrimonio social, sumado el importe de los gastos indispensables para la inscripción de la sociedad cooperativa, fuese inferior a la cifra del capital social, los socios estarán obligados a cubrir la diferencia.

4. Hasta que no se produzca la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias la sociedad deberá añadir a su denominación las palabras "en constitución".

Artículo 12. Contenido de los estatutos.

1. Los estatutos deberán regular como contenido mínimo los siguientes extremos:

a) la denominación de la sociedad,

b) la actividad que constituya el objeto social,

c) el domicilio social,

d) el ámbito territorial de actuación,

e) la duración de la sociedad,

f) el capital social mínimo,

g) la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, forma y plazos de desembolso y los criterios para fijar la aportación obligatoria que habrán de efectuar los nuevos socios que se incorporen a la cooperativa,

h) la forma de acreditar las aportaciones al capital social,

i) devengo o no de intereses por las aportaciones obligatorias al capital social,

j) las clases de socios, requisitos para su admisión y baja voluntaria u obligatoria y régimen aplicable,

k) derechos y deberes de los socios,

l) derecho de reembolso de las aportaciones de los socios, así como el régimen de transmisión de las mismas,

m) normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimiento sancionador, y pérdida de la condición de socio, y

n) estructura y composición del órgano de administración, y período de duración de los cargos. Asimismo, determinación del número y período de actuación de los interventores y, en su caso, de los miembros del Comité de Recursos.

Se incluirán también las exigencias impuestas por esta ley para la clase de cooperativas de que se trate.

2. Los promotores de la cooperativa podrán, con carácter previo a la elevación a pública de la escritura de constitución, solicitar al Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias la calificación previa del proyecto de estatutos.

3. Los estatutos podrán ser desarrollados a través del reglamento de régimen interno, que deberá ser aprobado por la asamblea general.

Artículo 13. Escritura de constitución.

1. La escritura de constitución de la cooperativa será otorgada por todos los promotores o por las personas facultadas a tal efecto por la asamblea constituyente. En este caso, el plazo de su otorgamiento será como máximo de tres

meses desde la celebración de la asamblea constituyente.

2. La escritura pública de constitución de la cooperativa, que recogerá, en su caso, el acta de la asamblea constituyente, deberá contener como mínimo los siguientes extremos:

a) la identidad de los otorgantes,

b) manifestación de éstos de que reúnen los requisitos necesarios para ser socios,

c) voluntad de constituir una sociedad cooperativa y clase de que se trate,

d) acreditación por los otorgantes de haber suscrito la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio y de haberla desembolsado, al menos, en la proporción exigida estatutariamente,

e) si las hubiere, la valoración asignada a las aportaciones no dinerarias realizadas por los socios, haciendo constar, en su caso, sus datos registrales, con detalle de las que realicen los distintos promotores. Quedarán excluidos de responsabilidad los socios cuyas aportaciones no dinerarias sean sometidas a valoración pericial por experto independiente,

f) acreditación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones desembolsadas no es inferior al del capital social mínimo establecido estatutariamente,

g) identificación de las personas que, una vez inscrita la sociedad, han de ocupar los distintos cargos del primer órgano de administración, el de interventor o interventores y declaración de que no estén incursos en causa de incapacidad o prohibición alguna para desempeñarlos establecida en esta u otra ley,

h) declaración de que no existe otra entidad con idéntica denominación, a cuyo efecto se presentará al notario la oportuna certificación acreditativa expedida por el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias,

i) los estatutos.

En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los promotores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad cooperativa.

Artículo 14. Inscripción de la cooperativa.

1. Una vez otorgada la escritura de constitución de la cooperativa, los promotores facultados deberán solicitar en el plazo de un mes desde su otorgamiento la inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

2. Transcurridos doce meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución sin que se haya procedido a su inscripción o verificada la voluntad de no inscribir la cooperativa, cualquier socio podrá instar la disolución de la sociedad en constitución y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la restitución de sus aportaciones. En tales circunstancias, si la cooperativa ha iniciado o continúa sus actividades, le serán de aplicación las normas reguladoras de la sociedad colectiva o, en su caso, de la sociedad civil.

3. Para la inscripción de las cooperativas de crédito y de seguros deberá adjuntarse la previa autorización del organismo competente.

4. Inscrita la sociedad cooperativa, ésta quedará obligada por los actos y contratos a que se refiere el artículo 11. También quedará obligada por aquellos actos y contratos que acepte dentro del plazo de tres meses desde su inscripción. En ambos supuestos cesará la responsabilidad solidaria de los promotores, gestores o mandatarios.

CAPÍTULO II

El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias

Artículo 15. Características, estructura y ámbito competencial.

1. El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias está adscrito a la Consejería competente en materia de cooperativas desarrollando sus actuaciones en coordinación con los demás registros de cooperativas.

2. Tiene carácter público y estructura orgánica unitaria y competencia sobre todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias respecto de las sociedades cooperativas asturianas así como de sus uniones, federaciones y confederaciones. Su régimen jurídico se regulará reglamentariamente.

Artículo 16. Funciones del Registro.

El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias asumirá las siguientes funciones:

a) la calificación, inscripción y certificación de los actos que, según la normativa vigente, deben acceder a dicho Registro,

b) la legalización de los libros sociales y de contabilidad de las cooperativas así como de las asociaciones, uniones y federaciones de cooperativas,

c) el depósito de las cuentas anuales, de los informes de gestión y de auditoría, así como de los libros y documentación social en los casos de liquidación de la cooperativa,

d) el nombramiento de auditores y otros expertos independientes, en los casos en que le corresponda al Registro,

e) la calificación de las cooperativas como entidades no lucrativas, de acuerdo con lo establecido en esta ley,

f) la expedición de certificaciones sobre la denominación social de las sociedades cooperativas así como de certificaciones acreditativas del número de socios al cierre del ejercicio económico,

g) la resolución de las consultas que sean de su competencia,

h) la colaboración y coordinación con otros registros y

i) cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por esta ley u otras disposiciones legales y por sus normas de desarrollo.

Artículo 17. Eficacia.

1. La eficacia del Registro viene definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

2. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el Registro o mediante simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados, respetando las garantías correspondientes. La certificación será expedida por el encargado de dicho Registro, en los términos previstos reglamentariamente, y constituirá el único medio de acreditación fehaciente del contenido de los asientos registrales.

3. Se presume que el contenido de sus libros es conocido por terceros y no se podrá invocar ignorancia de ello. Los documentos sujetos a inscripción y no inscritos no producirán efectos frente a terceros de buena fe. No podrá invocarse la falta de inscripción por quien incurrió en su omisión.

4. Los asientos inscritos se presumen exactos y válidos. Esta presunción de exactitud y validez no alcanza a las cuentas anuales ni al informe de auditoría depositados en el registro.

En todo caso, la inscripción no convalida los actos y contratos nulos según la legislación vigente, pero desplegará todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad. La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido del Registro.

Artículo 18. Calificación.

1. La inscripción en el Registro se practicará en virtud de documento público, salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

2. El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias calificará bajo su responsabilidad, con referencia a los documentos presentados, la competencia y facultades de quienes los autorizan y firman, la legalidad de las formas extrínsecas, la capacidad y legitimación de los otorgantes y la validez del contenido de los documentos, examinando si han cumplido los preceptos legales de carácter imperativo.

La calificación se basará en lo que resulte de los títulos presentados y en los correspondientes asientos del Registro.

Al depósito de cuentas anuales, acompañadas en su caso del informe de gestión, y al depósito del informe de auditoría, se aplicará lo previsto al respecto en la legislación de sociedades anónimas y las demás normas mercantiles que sean aplicables.

3. Cuando, dentro de los plazos establecidos y en la forma legal o reglamentaria prevista, el Registro no notifique a los interesados la correspondiente resolución referente a la práctica de cualquier inscripción o asiento solicitados, el

solicitante podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, todo ello sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar la resolución registral expresa.

Si las normas legales o reglamentarias de aplicación no establecieren expresamente plazo para dictar y notificar las resoluciones registrales, se entenderá que dicho plazo es de tres meses. El plazo será de un mes para los actos de constitución, fusión, escisión, transformación, prórroga de la sociedad y cesión global de activo y pasivo.

En todo caso, practicada la inscripción o el asiento solicitado se entenderá estimada la solicitud del interesado.

Artículo 19. Libros del Registro y asientos registrales.

1. En el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias se llevarán los siguientes libros:

a) libro diario,

b) libro de inscripción de sociedades cooperativas,

c) libro de inscripciones de uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas del Principado de Asturias,

d) libro de nombramientos,

e) libro de legalización de libros,

f) libro de reserva de denominaciones, y

g) los demás libros que se establezcan reglamentariamente.

2. En los libros de inscripción se extenderán las siguientes clases de asientos: inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas y notas marginales. La inscripción se hará de forma sucinta, remitiéndose al expediente correspondiente, donde constará el documento objeto de inscripción. La ordenación y práctica de los asientos registrales se regulará reglamentariamente.

Artículo 20. Actos inscribibles.

1. La inscripción de los actos de constitución, modificación de los estatutos, fusión, escisión, disolución, reactivación y liquidación de las sociedades cooperativas, así como la transformación de éstas, será constitutiva. Las restantes inscripciones serán declarativas.

2. La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, prórroga, disolución, reactivación, declaración de haber finalizado el proceso de liquidación y aprobación del balance final, y transformación, se practicará en virtud de escritura pública, resolución judicial o resolución administrativa.

3. La inscripción del nombramiento y cese de los cargos sociales y auditores, y el depósito de cuentas anuales, podrá practicarse mediante certificación del correspondiente acuerdo adoptado por el órgano social competente, elevado a público o con las firmas del Secretario y del presidente de la cooperativa, legitimadas por notario o autenticadas por el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias. También podrá practicarse en virtud de resolución administrativa o judicial que así lo acuerde.

4. Se practicarán mediante escritura pública:

a) La inscripción de la delegación permanente de facultades en Consejeros delegados, su modificación o revocación se practicará en virtud de escritura pública que determinará las facultades delegadas.

b) La inscripción del nombramiento y cese del Director de la cooperativa y la del otorgamiento de poderes de gestión y administración con carácter permanente a cualquier persona, así como su modificación y revocación, se practicará mediante escritura pública, que expresará las facultades y poderes conferidos al Director o apoderado.

5. La inscripción de la descalificación de la cooperativa o la constatación de su disolución por ministerio de la Ley se practicará en virtud de la correspondiente resolución administrativa, cuando adquiera firmeza. Podrá solicitarse la anotación preventiva de dichos actos cuando se encuentren pendientes de adquirir firmeza.

6. Con carácter previo a la inscripción de los actos que se refieran a la liquidación, transformación o fusión especial, el registro deberá exigir la acreditación de que el haber líquido resultante se ha consignado o puesto a disposición de quienes sean sus destinatarios legítimos.

CAPÍTULO III
LOS SOCIOS

SECCION PRIMERA
Cualidad del socio y sus clases

Artículo 21. Personas que pueden ser socias.

1. En las sociedades cooperativas de primer grado pueden ser socios, en función de la actividad cooperativizada, tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, y asimismo las comunidades de bienes.

En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado se estará a lo dispuesto en la presente ley en su regulación específica.

2. Los estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio de acuerdo con el objeto social y demás características de la cooperativa.

3. Nadie podrá ser socio de una cooperativa a título de empresario, contratista, capitalista u otro análogo respecto a la misma o a los socios como tales.

Artículo 22. Procedimiento de admisión de nuevos socios.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, toda persona que esté interesada en formar parte de la cooperativa tiene derecho a solicitar el ingreso como socio y, en su caso, a ser admitido.

La solicitud de admisión se formulará por escrito al órgano de administración de la cooperativa, que resolverá en un plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de aquélla, y dando publicidad interna del acuerdo en la forma que estatutariamente se establezca.

Dentro del citado plazo, el órgano de administración comunicará por escrito su resolución. La admisión sólo podrá denegarse por causa justificada derivada de los estatutos o de alguna disposición legal o por imposibilidad técnica o estructural debidamente acreditada, debiendo motivarse tal resolución. Transcurrido el plazo sin haberse comunicado la decisión, se entenderá estimada.

2. El acuerdo denegatorio podrá ser impugnado por el solicitante en un plazo de veinte días, a contar desde el día de recepción de la notificación, ante el comité de recursos, si existiera, el cual resolverá en el plazo de un mes, y, en su defecto, ante la asamblea general, que resolverá en la primera reunión que celebre mediante votación secreta. Transcurridos dichos plazos, sin resolución expresa, el recurso se entenderá estimado.

Será preceptiva, en todo caso, la audiencia del interesado.

3. El acuerdo de admisión podrá ser impugnado, ante los mismos órganos y plazos que los indicados en el número anterior salvo que los estatutos establezcan otro procedimiento específico, por un porcentaje de socios no inferior al 5 por ciento del total o menor, si los estatutos así lo permiten. En todo caso, será preceptiva la audiencia del interesado. Si el recurso de los socios no fuere resuelto por el órgano competente en los plazos previstos en el apartado anterior se entenderá que ha sido desestimado.

La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que resuelva el comité de recursos o, en su caso, la asamblea general.

4. El acuerdo social del órgano social competente que resolviere negativamente los recursos a que se refieren los dos apartados anteriores podrá ser objeto de impugnación ante la jurisdicción competente con arreglo a lo previsto en los artículos 57 y 58 por quienes los hubieran hecho valer.

Artículo 23. Socio de trabajo.

1. En las cooperativas de primer grado que no sean de trabajo asociado o de explotación comunitaria de la tierra y en las de segundo o ulterior grado podrán adquirir la condición de socios de trabajo, si los estatutos lo prevén, las personas físicas cuya actividad cooperativizada consista en la prestación de su trabajo personal en la cooperativa.

2. Los estatutos de las cooperativas que prevean la admisión de socios de trabajo deberán fijar los requisitos de admisión y baja, así como su estatuto jurídico, determinando las principales condiciones de su prestación de servicios y estableciendo criterios que aseguren

su participación equitativa y ponderada en las obligaciones y derechos de naturaleza social y económica.

3. Las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada que corresponda soportar a los socios de trabajo se imputarán al fondo de reserva y, en su defecto, a los socios usuarios en la cuantía necesaria para garantizar a los primeros una compensación en la cuantía fijada por los estatutos sociales, que será, como mínimo, equivalente al salario mínimo interprofesional vigente.

4. En todo lo que no haya sido previsto en este artículo resultarán de aplicación a los socios de trabajo las normas establecidas en la presente ley para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.

Artículo 24. Socio temporal.

1. Si lo prevén los estatutos y se acuerda en el momento de la admisión, podrán establecerse vínculos sociales de duración determinada, siempre que el conjunto de estos socios no supere la quinta parte de los socios de carácter indefinido, ni de los votos de éstos en la asamblea general.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado y otras que tengan socios de trabajo, el vínculo temporal de los socios que cooperativicen su trabajo no podrá exceder de tres años.

2. Estos socios tendrán los mismos derechos y obligaciones, y deberán cumplir los mismos requisitos de admisión, que los de vinculación indefinida, pero su aportación obligatoria a capital no podrá exceder del 25 por ciento de la exigida a éstos. Asimismo, la cuota de ingreso no será exigible a estos socios hasta que, en su caso, se produjera la integración como socios de vinculación indefinida.

3. Transcurrido el período de vinculación, el socio tendrá derecho a la liquidación de sus aportaciones al capital social, que les serán reembolsadas inmediatamente o, si así se prevé en los estatutos, en el plazo máximo de un año desde la fecha efectiva de su baja, con abono en este caso del interés legal del dinero correspondiente a ese año. Todo ello, sin perjuicio del reconocimiento estatutario al órgano de administración de la cooperativa de la facultad para rehusar incondicionalmente el reembolso al socio temporal, ya fuere en su totalidad o en modo parcial, de las cantidades que éste hubiere efectuado a título de aportación al capital social.

Artículo 25. Socio colaborador.

1. Si los estatutos lo prevén, la cooperativa podrá incorporar socios colaboradores, personas físicas o jurídicas, que contribuyan a la consecución del fin social necesariamente mediante la realización de aportaciones al capital social de carácter voluntario. Del mismo modo, los socios que causen baja justificada u obligatoria podrán adquirir la condición de socio colaborador, transformando su aportación obligatoria al capital social en voluntaria.

2. Los socios colaboradores no podrán tener simultáneamente la condición de socio usuario, pero ostentarán los mismos derechos y obligaciones que éstos, con las siguientes particularidades:

a) No estarán obligados a hacer aportaciones obligatorias al capital social.

b) No participarán en la actividad cooperativizada con la cooperativa.

c) La suma total de los derechos de voto de los socios colaboradores en la asamblea general no podrá superar el 25 por ciento de los votos presentes y representados en cada votación.

d) Los estatutos sociales podrán reconocer al socio colaborador el derecho de voto, en las mismas condiciones que para los socios usuarios, incluido el voto plural si a éstos se les reconociere, aunque siempre con el referido límite global de la cuarta parte. Si la suma de votos individuales sobrepasara este límite global, se ponderará el voto de los socios colaboradores del modo previsto en los estatutos.

Los socios colaboradores ejercerán el derecho de voto y los demás derechos políticos en las mismas condiciones que los socios ordinarios, incluido el derecho de impugnación.

e) Si lo establecen los estatutos, podrán ser miembros del órgano de administración hasta un porcentaje que no supere la tercera parte de éstos. En ningún caso podrán ostentar el cargo de presidente o vicepresidente del consejo rector, ni ser designados administradores.

f) Las aportaciones de los socios colaboradores y su retribución se sujetarán al régimen previsto en esta ley para las aportaciones volun-

tarias. De modo alternativo, si los estatutos así lo establecen, se podrá atribuir hasta un 45 por ciento de los excedentes anuales a su distribución entre los socios colaboradores en proporción al capital desembolsado. En este caso, las pérdidas del ejercicio se soportarán por éstos en la misma proporción, hasta el límite de su aportación.

3. Los socios colaboradores no podrán desarrollar actividades en competencia con las que desarrolle la cooperativa de la que sean colaboradores, salvo autorización expresa del órgano de administración de la cooperativa.

Artículo 26. Socio inactivo.

1. Los estatutos de la cooperativa podrán prever la figura del socio inactivo para aquellos socios que por cualquier causa justificada, y con la antigüedad mínima que establezcan, dejen de utilizar los servicios prestados o de realizar la actividad cooperativizada, y sean autorizados para mantener una vinculación con la cooperativa.

2. Tales socios tendrán los derechos y obligaciones que resulten de lo establecido en los estatutos, con estas particularidades:

a) El conjunto de los votos atribuidos a los socios inactivos no podrá ser superior a la décima parte del total de votos presentes y representados en la asamblea general para cada votación, aunque existieren también socios colaboradores en la cooperativa.

b) Los socios inactivos en ningún caso pueden ser miembros de los órganos rectores de la cooperativa, y no tienen derecho al retorno cooperativo.

3. Si la inactividad estuviera provocada por la jubilación del socio, el interés abonable a su aportación al capital social podrá ser superior al de los socios en activo, respetando siempre el límite máximo señalado en la presente ley para las aportaciones voluntarias.

SECCION SEGUNDA
Derechos y obligaciones de los socios

Artículo 27. Derechos de los socios.

1. Los socios pueden ejercitar todos los derechos reconocidos legal o estatutariamente, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador, de medidas cautelares estatutarias o de las exigencias de la buena fe.

2. Con carácter general, todos los socios ostentan en condiciones de igualdad los mismos derechos económicos y políticos, sin perjuicio de las previsiones particulares establecidas en la presente ley para las distintas categorías de socios.

3. En especial, todo socio tiene derecho a:

a) asistir, participar en los debates, formular propuestas según la regulación estatutaria y votar las propuestas que se les sometan en la asamblea general y demás órganos colegiados de los que formen parte,

b) ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales,

c) participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones,

d) el retorno cooperativo, en su caso,

e) la actualización y el reembolso, cuando procedieren, de las aportaciones al capital social, así como a percibir intereses por las mismas, en su caso,

f) la baja voluntaria o, si ésta se prohibiera estatutariamente, a transmitir sus aportaciones sociales a tenor de lo previsto al efecto en el artículo 92.4,

g) recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y

h) a cualesquiera otros derechos previstos legal o estatutariamente.

4. Además, los socios trabajadores y los socios de trabajo tienen derecho a la formación profesional adecuada para realizar su trabajo.

Artículo 28. Obligaciones de los socios.

Los socios están obligados a cumplir con lealtad los deberes legales y estatutarios, y en especial a:

a) asistir a la reunión de la asamblea general y demás órganos de la cooperativa a los que pertenezcan o fuesen convocados,

b) cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa,

c) participar en las actividades que constituyen el objeto de la cooperativa, según prevean los estatutos,

d) guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos,

e) no realizar actividades competitivas con la actividad empresarial de la cooperativa, ni colaborar con quien las realice, a menos que sean autorizados expresamente por el órgano de administración,

f) aceptar los cargos sociales para los que fueren elegidos, salvo causa justificada de excusa,

g) participar en las actividades de formación,

h) efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma prevista, e

i) las demás obligaciones que resulten de las leyes y de los estatutos.

Artículo 29. La participación en la actividad cooperativizada.

1. Los socios usuarios ostentan el derecho a participar en la actividad cooperativizada en condiciones de igualdad, con arreglo a lo previsto en esta ley y, en su caso, en los estatutos sociales.

2. Con carácter general, los estatutos sociales establecerán los términos en que los socios están obligados a participar en la actividad cooperativizada. Si bien el órgano de administración, cuando exista causa que lo justifique, podrá dispensar de dicha obligación al socio, en la cuantía o cantidad que proceda y según las circunstancias que concurran.

3. Las relaciones cooperativizadas entabladas por la cooperativa con sus socios se sujetarán a las condiciones fijadas en los estatutos sociales, en el reglamento de régimen interno o, en su caso, en los acuerdos sociales de la asamblea general.

En su defecto, esas relaciones se someterán a las estipulaciones singularmente pactadas por la cooperativa con cada socio, debiendo observar siempre la sociedad el principio de igualdad de trato al establecer las condiciones aplicables.

Artículo 30. Derecho de información.

1. Todo socio de la cooperativa podrá ejercitar el derecho de información en los términos previstos en esta ley, en los estatutos o en los acuerdos de la asamblea general.

2. Los socios tendrán derecho como mínimo a:

a) recibir copia de los estatutos sociales y, si existiese, del reglamento de régimen interno y de sus modificaciones, con mención expresa del momento de entrada en vigor de éstas,

b) libre acceso a los libros de registro de socios de la cooperativa, así como al libro de actas de la asamblea general y, si lo solicita, el órgano administrativo deberá proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las asambleas generales, en plazo no superior a diez días desde la solicitud y asimismo, en su caso, copia certificada de aquellas actas que fueren de su interés y no estuvieren aún incorporadas al libro de actas,

c) recibir, si lo solicita, del órgano de administración copia certificada de los acuerdos del mismo que afecten al socio, individual o particularmente y, en todo caso, a que se le muestre y aclare, en un plazo no superior a un mes, el estado de su situación económica en relación con la cooperativa,

d) examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los estatutos, en el plazo comprendido entre la convocatoria de la asamblea y su celebración, los documentos que vayan a ser sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los interventores o el informe de la auditoría, según los casos,

e) solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación con los puntos contenidos en el orden del día.

Los estatutos deberán regular el plazo mínimo de antelación para presentar en el domicilio social la solicitud por escrito y el plazo máximo en el que el órgano de administración podrá responder fuera de la asamblea, por la complejidad de la petición formulada. El plazo de respuesta en ningún caso será superior a quince días,

f) solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los estatutos y, en particular, sobre la que afecte a sus derechos econó-

micos o sociales. En este supuesto, el órgano de administración deberá facilitar la información solicitada en el plazo de 30 días o, si se considera que es de interés general, dentro del plazo existente entre la convocatoria y la celebración de la asamblea general en que se sometan a aprobación las cuentas,

g) cuando el 10 por ciento de los socios de la cooperativa, o cien socios, si ésta tiene más de mil, soliciten por escrito al órgano de administración la información que considere necesaria, éste deberá proporcionarla también por escrito, en un plazo no superior a un mes, y

h) asimismo, el socio tiene derecho a ser notificado de los acuerdos adoptados en su ausencia que supongan obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas en los estatutos. En tales casos, el órgano de administración estará obligado a remitir dicha notificación en un plazo de quince días desde la aprobación del acuerdo correspondiente.

3. En los supuestos de las letras e), f) y g) del apartado anterior, el órgano de administración podrá negar la información solicitada, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes. No obstante, estas excepciones no procederán cuando la información haya de proporcionarse en el acto de la asamblea y ésta apoyase la solicitud de información por más de la mitad de los votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el comité de recursos, o, en su defecto, la asamblea general como consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la información.

En todo caso, la negativa del órgano de administración a proporcionar la información solicitada podrá ser impugnada por los solicitantes de la misma por el procedimiento a que se refiere el artículo 32.4, además, respecto a los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado 2 de este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 2.166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 31. Baja voluntaria.

1. El socio podrá solicitar voluntariamente la baja por escrito dirigido al órgano de administración en cualquier momento, con cumplimiento del plazo de preaviso previsto en los estatutos sociales, que no podrá ser superior a seis meses, salvo para las cooperativas agrarias en cuyo caso no podrá exceder de un año.

La solicitud de baja surtirá efectos desde el momento en que fuere recibida por la cooperativa, cuya prueba recae sobre el socio.

2. Los estatutos podrán establecer el compromiso del socio de no darse de baja voluntariamente, sin causa que la califique de justificada, hasta el final del ejercicio económico en el que quiera causar baja o hasta que haya transcurrido, desde su admisión, el tiempo que fijen los estatutos, que no podrá ser superior a cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 162.2 y 166.1 para las cooperativas agrarias y las de explotación comunitaria de la tierra, respectivamente. En este caso, de solicitarse la baja voluntaria, se hará mediante escrito motivado dirigido al órgano de administración.

Artículo 32. Calificación y efectos de la baja voluntaria.

1. La calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia del órgano de administración, que deberá formalizarla en un plazo máximo de tres meses desde la solicitud por escrito motivado, que habrá de ser comunicado al socio interesado. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá calificada la baja como justificada.

2. El incumplimiento del plazo del preaviso así como las bajas que se soliciten dentro de período mínimo de permanencia, tendrán la consideración de baja no justificada, salvo que el órgano de administración, atendiendo a las circunstancias del caso, acordase motivadamente lo contrario. Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse al socio, además, el cumplimiento de las actividades y servicios cooperativos en los términos en que venia obligado o, en su caso, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Los estatutos podrán determinar los criterios objetivos para cuantificar los daños y perjuicios exigibles en el caso de tal incumplimiento.

3. Se considerarán justificadas las bajas derivadas de las siguientes causas:

a) La adopción de acuerdos por la asamblea general que impliquen obligaciones o cargas gravemente onerosas, no previstas estatutariamente, si el socio manifiesta su disconformidad por escrito al órgano de administración de la cooperativa, en el plazo que fijen los estatutos, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a cuarenta, contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo para los socios presentes en la asamblea general y desde el día siguiente a la notificación del acuerdo para los socios ausentes de la misma. En ambos casos deberá formalizar su solicitud de baja dentro del mes siguiente a la fecha de realización de la asamblea o de la presentación de dicho escrito.

b) En todos los demás supuestos previstos en la presente ley o en los estatutos.

4. El socio disconforme con el acuerdo del órgano de administración sobre la calificación y efectos de su baja voluntaria, podrá recurrir, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el comité de recursos, que resolverá en el plazo de dos meses, o, en su defecto, ante la asamblea general, que resolverá en la primera reunión que celebre, mediante votación secreta.

Transcurridos dichos plazos sin resolución expresa del recurso, se entenderá estimado.

En todo caso, la resolución del recurso podrá ser impugnada ante la jurisdicción competente en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58.

Artículo 33. Prohibición de causar baja voluntaria.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 92.4, el derecho de baja voluntaria podrá prohibirse estatutariamente pero el socio siempre ostentará el derecho a transmitir sus aportaciones sociales a otro miembro de la cooperativa o a un tercero de conformidad al régimen previsto legal y estatutariamente para la transmisión del capital social en estos casos.

Artículo 34. Baja obligatoria.

1. Causarán baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo según esta ley o los estatutos de la cooperativa.

2. La baja obligatoria será acordada, previa audiencia del interesado, por el órgano de administración, de oficio o a petición de cualquier otro socio o del propio afectado. En este último caso podrá prescindirse de la audiencia si el acuerdo se basa sólo en la solicitud presentada por el propio interesado.

3. El acuerdo de los administradores no será ejecutivo hasta que se notifique la ratificación de la baja por el comité de recursos o, en su defecto, por la asamblea general, o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos sin haberlo hecho. No obstante, podrá establecerse con carácter inmediato la suspensión cautelar de derechos y obligaciones del socio hasta que el acuerdo sea ejecutivo si así lo prevén los estatutos, que deberán determinar el alcance de dicha suspensión. El socio conservará su derecho de voto en la asamblea general mientras el acuerdo no sea ejecutivo.

Artículo 35. Calificación y efectos de la baja obligatoria.

1. La baja obligatoria siempre tendrá la consideración de justificada, salvo que la pérdida de los requisitos para ser socio sea consecuencia de la voluntad del socio de incumplir sus obligaciones con la cooperativa o de beneficiarse indebidamente con su baja obligatoria; en estos supuestos, podrá ser acordada la expulsión del socio de la cooperativa y deberá indemnizar a ésta de los daños y perjuicios derivados de su actuación antijurídica y fraudulenta. En todo caso, será asimismo aplicable a los casos de baja obligatoria no justificada lo establecido en el artículo 32.2.

2. El socio disconforme con la decisión de los administradores sobre la calificación o efectos de su baja obligatoria, podrá recurrirla según los trámites previstos en el artículo 32.4.

Artículo. 36. Efectos económicos de la baja.

El socio que salga de la cooperativa, ya sea por baja voluntaria u obligatoria, tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones sociales al capital social, con arreglo a lo previsto en los artículos 88 y siguientes, todo ello sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el artículo 80.1. b) de que el órgano de administración de la cooperativa pudiere rehusar total o parcialmente el reembolso de las aportaciones sociales al socio.

Además, el socio seguirá obligado al cumplimiento de los contratos y otras obligaciones que haya asumido con la cooperativa, que por su naturaleza no se extingan con ocasión de la pérdida de la condición de socio.

SECCION TERCERA
Normas de disciplina social

Artículo 37. Tipicidad y prescripción.

1. Los socios sólo podrán ser sancionados por aquellos hechos previamente tipificados en los estatutos, que se clasificarán en faltas leves, graves y muy graves. Del mismo modo, deberán establecerse con carácter previo las consecuencias concretas derivadas de su infracción, que podrán consistir en sanciones pecuniarias, la suspensión de derechos e, incluso, la expulsión de la sociedad.

2. Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son leves a los dos meses, si son graves a los cuatro meses, y si son muy graves a los seis meses. Los plazos empezarán a computarse a partir de la fecha en la que se hayan cometido. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y notifica la resolución.

3. Específicamente para los socios trabajadores y socios de trabajo, respecto de su prestación laboral a la cooperativa, se estará también a lo establecido en el artículo 144.

Artículo 38. Procedimiento sancionador.

Los estatutos establecerán los procedimientos sancionadores y los recursos que procedan, respetando las siguientes normas:

a) la facultad sancionadora es competencia indelegable del órgano de administración, sin perjuicio de lo previsto para el caso de expulsión por el artículo 40.1,

b) en todos los supuestos es preceptiva la audiencia previa de los interesados y sus alegaciones deberán realizarse por escrito en los casos de faltas graves o muy graves, y

c) el acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de un mes, desde su notificación, ante el comité de recursos que deberá resolver en el plazo de dos meses o, en su defecto, ante la asamblea general que resolverá en la primera reunión que se celebre. Transcurridos dichos plazos sin haberse resuelto y notificado el recurso se entenderá que éste ha sido estimado.

Si la impugnación no fuese admitida o se desestimase, podrá recurrirse en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación ante la jurisdicción competente, por el cauce procesal previsto para la impugnación de los acuerdos sociales de la asamblea en los artículos 57 y 58.

Artículo 39. Suspensión de derechos.

1. El ámbito y alcance de la suspensión de los derechos del socio serán determinados necesariamente por los estatutos sociales y sólo podrá establecerse para los casos en que el socio se hallare al descubierto de sus obligaciones económicas o no participase, según los términos previstos estatutariamente, en las actividades cooperativizadas.

2. En todo caso, la sanción de suspender al socio en sus derechos no podrá alcanzar:

a) al derecho de información,

b) al de percibir el retorno cooperativo, en su caso,

c) al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, y

d) al derecho de actualización de las aportaciones sociales.

3. No tendrá carácter sancionador la suspensión cautelar que el órgano de administración pueda acordar respecto a sus miembros, a los de otros órganos o de socios, en los casos y según las reglas estatutarias.

Artículo 40. Expulsión.

1. La expulsión de los socios sólo podrá acordarla el órgano de administración de la cooperativa, por falta muy grave, mediante expediente instruido al efecto y con audiencia del interesado. No obstante, los estatutos podrán atribuir la competencia para la exclusión de socios a la asamblea general.

2. En todo caso, se consideran faltas muy graves susceptibles de motivar la exclusión del socio:

a) la realización de actividades que puedan perjudicar los intereses de la cooperativa, como operaciones de competencia con ella, salvo

cuando sea consentida; el fraude en las aportaciones u otras prestaciones, y cualquier actuación dirigida al descrédito de la misma,

b) el incumplimiento del deber de participar en la actividad económica de la cooperativa, de acuerdo con los módulos fijados en los estatutos sociales,

c) el incumplimiento de la obligación de desembolsar las aportaciones al capital social,

d) el incumplimiento persistente o reiterado de las obligaciones económicas asumidas frente a la cooperativa,

e) prevalerse de la condición de socio de la cooperativa para realizar actividades especulativas o ilícitas,

f) las determinadas específicamente por esta ley para alguna clase de cooperativas, y

g) las que puedan establecerse en los estatutos sociales.

Cuando la causa de la expulsión sea la de encontrarse el socio al descubierto de sus obligaciones económicas, no se aplicarán los plazos de prescripción previstos en el apartado 2 del artículo 37, pudiendo acordarse su expulsión en cualquier momento, salvo que el socio haya regularizado su situación.

Artículo 41. Recursos contra el acuerdo de expulsión.

1. Contra el acuerdo de expulsión, el socio podrá recurrir, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general.

El recurso ante la asamblea general deberá incluirse como primer punto del orden del día de la primera que se celebre y se resolverá, previa audiencia del interesado, por votación secreta, salvo que los estatutos o la propia asamblea dispongan lo contrario.

El recurso ante el comité de recursos, en su caso, deberá ser resuelto, con audiencia del interesado, en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación.

Transcurridos dichos plazos sin haber sido resuelto y notificado, se entenderá que el recurso ha sido estimado.

2. El acuerdo de expulsión será ejecutivo desde que sea notificada la ratificación del comité de recursos o, en su defecto, de la asamblea general, o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos.

No obstante, si los estatutos lo contemplan, podrá aplicarse el régimen de suspensión cautelar previsto en esta ley para la baja obligatoria.

Tras agotar oportunamente la vía interna de impugnación del acuerdo social de exclusión ante el órgano social competente, el acuerdo social que resuelva este recurso podrá ser impugnado ante la jurisdicción ordinaria, en el plazo establecido en la legislación jurisdiccional, salvo para el caso de exclusión de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y de los socios de trabajo, en que el plazo será de veinte días. La impugnación de los acuerdos de expulsión se sujetará a los trámites procesales previstos en los artículos 57 y 58.

3. En el caso de que los estatutos sociales atribuyesen la competencia para la expulsión a la asamblea general, la exclusión requerirá acuerdo de este órgano social. A estos efectos, deberá incluirse la exclusión como primer punto del orden del día en la reunión de la asamblea y, tras la debida audiencia del afectado, se resolverá por votación mayoritaria de todos los socios presentes y representados con excepción del interesado.

Si los estatutos sociales lo prevén, la votación podrá realizarse en secreto pero, en todo caso, cualquier socio podrá solicitar que se haga constar en el acta de la reunión el sentido de su voto, a favor o en contra de la expulsión.

El acuerdo favorable a la exclusión será ejecutivo inmediatamente, desde su adopción, y podrá ser impugnado en el plazo de dos meses desde su adopción por el afectado o por cualquier otro socio con arreglo a los trámites previstos para la impugnación de acuerdos sociales de la asamblea.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 42. Órganos de la sociedad.

1. Son órganos de la sociedad:

a) La asamblea general.

b) El órgano de administración.

c) La intervención.

2. Los estatutos sociales podrán prever la existencia de un comité de recursos y de otras instancias de carácter consultivo o asesor, cuyas funciones, que se determinarán en los estatutos, en ningún caso podrán confundirse con las propias de los órganos sociales.

SECCION PRIMERA
La asamblea general

Artículo 43. Disposiciones generales.

1. Los socios reunidos en asamblea general decidirán, por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de su competencia. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la asamblea.

2. Es competencia de la asamblea general deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

a) el nombramiento y revocación, de las personas administradoras, interventoras y liquidadoras, así como el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los mismos,

b) el nombramiento y revocación, que sólo cabrá cuando exista justa causa, de los auditores de cuentas,

c) el examen de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la distribución de excedentes o imputación de pérdidas,

d) el establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, del interés que devengarán las aportaciones al capital social y de las cuotas de ingreso o periódicas,

e) la emisión de obligaciones, de títulos participativos o de participaciones especiales,

f) la modificación de los estatutos sociales. Los estatutos podrán establecer que el cambio de domicilio dentro del mismo término municipal será competencia del órgano de administración,

g) la constitución de cooperativas de segundo grado o de crédito, y otras entidades, así como la adhesión y separación de las mismas y la regulación, creación, modificación y extinción de secciones de la cooperativa,

h) fusión, escisión, transformación, cesión global de activo y pasivo y disolución de la sociedad,

i) toda decisión que implique una modificación sustancial en la estructura organizativa o funcional de la cooperativa, y en la económica que suponga, al menos, un tercio del activo total según el último balance aprobado,

j) aprobación o modificación del reglamento interno de la cooperativa,

k) determinación de la política general de la cooperativa, y

l) todos los demás asuntos en que así lo establezcan la Ley o los estatutos.

3. Sin perjuicio de las atribuciones específicas de competencia de otros órganos sociales, la asamblea general podrá decidir sobre los recursos interpuestos con ocasión de las altas y bajas de los socios, y sobre la inadmisión de los aspirantes rechazados por el órgano de administración así como sobre los acuerdos de suspensión de los derechos de los socios, o sobre los referentes a la imposición de sanciones por faltas muy graves o graves. También podrá decidir sobre la propia sesión asamblearia, respetando las competencias legales de quien la presida y sobre todos los actos en que así lo establezca una normal legal o los estatutos.

Es indelegable la competencia de la asamblea general sobre aquellas materias o actos en que su acuerdo sea preceptivo en virtud de norma legal.

Además, y salvo disposición estatutaria en sentido contrario, la asamblea podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60.

Artículo 44. Clases de asamblea general.

1. Las asambleas generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. La asamblea general ordinaria tiene que reunirse una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio anterior, para examinar la gestión social, aprobar si procede, las cuentas anuales y, en su caso resolver sobre la distribución de resultados. Podrá asimismo incluir en el orden del día cualquier otro asunto propio de la competencia de la asamblea. Todas las demás asambleas tendrán el carácter de extraordinarias.

2. La asamblea general tendrá el carácter de universal cuando, estando presentes o representados todos los socios, de forma espontánea o mediante convocatoria no formal, decidan constituirse en asamblea, aprobando y firmando todos el orden del día y la lista de asistentes. Realizado esto no será necesaria la permanencia de todos los socios para que la sesión pueda continuar.

Artículo 45. Facultad y obligación de convocar.

1. La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el órgano de administración, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico.

2. Cumplido el plazo legal sin haberse realizado la convocatoria, los interventores deberán instarla del órgano de administración, y si éste no la convoca dentro de los quince días siguientes al recibo del requerimiento, deberán solicitarla a la jurisdicción competente, que la convocará.

Transcurrido el plazo legal sin haberse realizado la convocatoria de la asamblea ordinaria, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, cualquier socio podrá solicitar de la referida autoridad su convocatoria. En todo caso, la autoridad judicial sólo tramitará la primera de las solicitudes de convocatoria que se realicen.

3. La asamblea general extraordinaria podrá ser convocada por los administradores a iniciativa propia o a petición de la intervención o de un número de socios, que representen el 10 por ciento del total de los socios o de cincuenta socios. A la petición de asamblea se acompañará el orden del día de la misma. Si el requerimiento de convocatoria no fuese atendido por los administradores dentro del plazo máximo de un mes, los solicitantes podrán instar de la jurisdicción competente la convocatoria de la asamblea.

Artículo 46. Forma de la convocatoria.

1. La convocatoria se hará siempre mediante anuncio publicado en alguno de los diarios de mayor circulación de los lugares donde se encuentre el domicilio social y los centros de trabajo, además de su constancia en el domicilio social de la cooperativa y en cada uno de los centros de trabajo.

Los estatutos podrán establecer otros medios de comunicación personal de la convocatoria al socio que garanticen su recepción, sea a través de carta certificada o por medios informáticos o telemáticos.

En todo caso, en las cooperativas de hasta 100 socios la convocatoria se hará por carta certificada.

2. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la asamblea deberá existir un plazo de al menos quince días hábiles, y ésta no podrá ser posterior en dos meses a la fecha de la convocatoria.

Artículo 47. Contenido de la convocatoria.

1. La convocatoria indicará, al menos, la fecha, si es en primera o segunda convocatoria, y la hora y el lugar de la reunión, y expresará con claridad y precisión los asuntos a tratar que componen el orden del día. Además, la convocatoria deberá hacer constar la relación completa de información o documentación que se acompañe, de acuerdo con esta ley.

2. Si la documentación estuviese depositada en el domicilio social se indicará el régimen de consultas de la misma desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la asamblea.

3. El intervalo de tiempo que debe mediar entre la primera y la segunda convocatoria será de treinta minutos.

4. El orden del día será fijado por el órgano de administración sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 48. Lugar de la asamblea.

La reunión de la Asamblea deberá celebrarse, salvo que tenga carácter de universal, en cualquier localidad del concejo donde esté ubicado el domicilio social.

Artículo 49. Constitución de la asamblea.

1. La asamblea general quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando estén presentes o representados más de la mitad

de los socios. En segunda convocatoria será suficiente con la asistencia, presentes o representados, del 10 por ciento de los socios o de 50 socios. Los estatutos sociales podrán aumentar el quórum de constitución de la asamblea, sin que en segunda convocatoria pueda superar el 25 por ciento de los socios.

2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la asamblea estará presidida por el presidente y asistida por el Secretario que, en su caso, serán los del órgano de administración. A falta de estos, la propia asamblea designará los cargos de la mesa.

Artículo 50. Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos presentes y representados en la asamblea. Los estatutos podrán establecer una mayoría superior siempre que no sobrepase los dos tercios de los votos presentes y representados. Para la elección de cargos será suficiente con que los candidatos obtengan la mayoría simple.

2. Exigirán la mayoría de dos tercios de los votos presentes o representados los acuerdos de modificación de estatutos, fusión, escisión, transformación, cesión de activo y pasivo, emisión de obligaciones, aprobación de nuevas aportaciones obligatorias.

3. Las votaciones serán secretas, salvo disposición contraria de los estatutos, cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales o el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de los órganos sociales, así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción.

4. Para deliberar y tomar acuerdos sobre un asunto será indispensable que conste en el orden del día de la convocatoria o en el aprobado al inicio de la asamblea general universal, salvo cuando se trate de:

a) Convocatoria de una nueva asamblea general, o prórroga de la que se está celebrando.

b) Nombramiento de un auditor para la verificación extraordinaria de las cuentas anuales.

c) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores, los interventores, los auditores o los liquidadores.

d) Revocación de los cargos sociales antes mencionados.

Artículo 51. Funciones de la presidencia de la asamblea.

Corresponden al presidente las siguientes funciones:

a) ordenar la confección de la lista de asistentes a cargo del secretario, decidiendo sobre las representaciones defectuosas,

b) proclamar el número de socios asistentes, y en su caso, declarar constituida la asamblea,

c) dirigir las deliberaciones, haciendo respetar el orden del día,

d) proclamar el resultado de las votaciones, y

e) decidir con arreglo a las previsiones estatutarias sobre la asistencia de personas no socias cuando resulte conveniente para los intereses de la cooperativa, salvo acuerdo en sentido contrario de la asamblea.

Artículo 52. Legitimación para asistir y ejercicio del derecho de voto.

1. Todos los socios tienen derecho a asistir a las reuniones de la asamblea general. En la asamblea a cada socio le corresponde un voto. Los estatutos establecerán los supuestos en que el socio deba abstenerse de votar por encontrarse en conflicto de intereses incluyendo, en todo caso, la adopción de un acuerdo que le excluya de la sociedad, le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle fondos, concederle crédito o préstamos, prestar garantías a su favor o facilitarle cualquier asistencia financiera, así como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia.

2. En las cooperativas de primer grado los estatutos podrán establecer la posibilidad de voto plural ponderado en proporción al volumen de la actividad cooperativizada del socio para las agrarias, de servicios, de transportistas y del mar, lo que no permitirá atribuir a cada socio en ningún caso más de diez votos sociales, ni consentirá que el colectivo de miembros con voto plural llegue a alcanzar en su conjunto y para

cada ejercicio económico un porcentaje de votos que supere a la mitad del número total de votos sociales que habría en la cooperativa. Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de cuanto se indicare específicamente para alguna de esas clases de cooperativas.

En las cooperativas de segundo grado, los estatutos pueden establecer el voto de los socios proporcional a su participación en la actividad cooperativizada de la sociedad, o al número de activos que integran la cooperativa asociada, tal como establece el artículo 131.1 sobre cooperativas de segundo grado.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, en ningún caso un sólo socio podrá ostentar más de un tercio de los votos totales, salvo que la cooperativa sólo tenga tres socios, o dos socios en las cooperativas de segundo grado.

La relación entre los votos sociales y la actividad cooperativizada necesaria para la atribución del voto plural ponderado se recogerá en los estatutos sociales o, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interno. En su virtud, el órgano de administración deberá elaborar un listado que recoja el número de votos sociales que correspondan a cada socio, tomando como base los datos de la actividad cooperativizada de cada uno de ellos referidos a los dos últimos ejercicios económicos y, en todo caso, dicho listado deberá estar a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa desde el momento del anuncio de la convocatoria de la asamblea general, pudiendo los socios interesados solicitar del órgano de administración las correcciones que fueren procedentes hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la referida asamblea.

3. El socio podrá hacerse representar en la asamblea general por otro socio, que no podrá representar a más de dos, o bien por el cónyuge o pareja de hecho, ascendiente o descendiente. La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para cada asamblea. Los estatutos podrán autorizar el ejercicio del derecho de representación por medio de no socios.

4. Los estatutos podrán autorizar la asistencia a la asamblea de terceros no socios, en particular de los asesores jurídicos o económicos de la cooperativa. También podrán autorizar los estatutos, la asistencia de cualquier otra persona cuya presencia esté justificada en relación con los puntos del orden del día, previa propuesta del órgano de administración sin oposición de la propia asamblea.

Artículo 53. Acta de la asamblea.

1. De cada sesión, el Secretario redactará un acta, que deberá ser firmada por el presidente y el secretario. En todo caso el acta deberá expresar:

a) el anuncio de la convocatoria o bien el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día de la misma,

b) si se celebra en primera o segunda convocatoria,

c) manifestación de la existencia de quórum suficiente para su válida constitución,

d) resumen de las deliberaciones sobre las propuestas sometidas a votación,

e) intervenciones que los interesados hayan solicitado que consten en acta, y

f) los acuerdos tomados, indicando los términos de las votaciones y los resultados de cada una de las mismas.

2. Como anexo al acta, firmada por el presidente y Secretario o personas que la firmen, se acompañarán la lista de los socios asistentes, presentes o representados, y los documentos que acrediten la representación.

3. El acta de la asamblea deberá ser aprobada como último punto del orden del día, salvo que sea aplazada a petición de la presidencia. En este caso, deberá aprobarse dentro del plazo de quince días, por el presidente, el Secretario y dos socios, designados entre los asistentes, que no ostenten cargos sociales ni estén en conflicto de intereses o hayan sido afectados a título particular por algún acuerdo asambleario, quienes la firmarán junto con el presidente y el secretario. En los supuestos de imposibilidad manifiesta podrán firmar el acta socios que ostenten cargos sociales.

4. El Secretario del órgano de administración, cualquiera de los administradores solidarios, los dos administradores mancomunados de forma conjunta y, en su caso, el administrador único incorporarán el acta de la asamblea al correspondiente libro de actas de la misma.

Artículo 54. Certificación del acta.

Cualquier socio podrá solicitar certificación del acta. Dicha certificación podrá ser expedida por el administrador único, cualquiera de los administradores solidarios, los dos administradores mancomunados, y en su caso, por el Secretario o por cualquier miembro del consejo rector, debiendo llevar siempre el visto bueno del Presidente de dicho órgano, y deberá ser entregada al socio en el plazo máximo de diez días desde su solicitud.

Artículo 55. Acta notarial de la asamblea.

El órgano de administración podrá requerir la presencia de notario para que levante acta de la asamblea y estará obligado a hacerlo siempre que lo solicite al menos el 10 por ciento de los socios en las cooperativas con más de quince socios y del 25 por ciento en las cooperativas con quince o menos socios, con cinco días de antelación al previsto para la sesión. Los honorarios notariales irán a cargo de la cooperativa. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación y tendrá la consideración de acta de la asamblea.

Si la presencia del notario hubiera sido solicitada por los socios de conformidad con las exigencias establecidas para su ejercicio en el párrafo anterior, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial.

Artículo 56. Asamblea general de delegados.

1. Si la cooperativa tiene más de 500 socios o si concurren circunstancias que dificulten la presencia de todos los socios en la asamblea general, los estatutos podrán establecer que la asamblea general se constituya como una asamblea de delegados de los socios.

2. Los estatutos regularán los criterios de adscripción de los socios a las juntas preparatorias, el sistema de convocatoria y constitución de éstas, las normas para la elección entre los socios de los delegados y el número de votos que les correspondan a estos en la asamblea, así como el carácter, y duración del mandato.

3. Las actas correspondientes a la reunión se aprobarán al final o conforme establece el artículo 53.3.

4. En lo no previsto en este artículo sobre las juntas preparatorias se estará a lo dispuesto para las asambleas generales.

Artículo 57. Impugnación de acuerdos de la asamblea general.

1. Podrán ser impugnados los acuerdos de la asamblea general que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios, o de terceros, los intereses de la cooperativa.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás acuerdos a que se refiere el número anterior serán anulables.

3. No procederá la impugnación de un acuerdo que haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Si fuera posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo para que pueda ser subsanada.

Artículo 58. Acción de impugnación de acuerdos de la asamblea general.

1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos podrá ser ejercitada por cualquier socio, miembro del órgano de administración, interventor y en su caso por cualquier tercero que acredite interés legítimo. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año, con excepción de los acuerdos, que por causa o contenido, resulten contrarios al orden público.

2. La acción de impugnación de acuerdos anulables podrá ser ejercitada por los socios asistentes que hubieren hecho constar su oposición al acuerdo en el acta de la asamblea o mediante documento fehaciente entregado dentro de los cuatro días siguientes a su conclusión, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como por los miembros del órgano de administración o los interventores. La acción de impugnación de los

acuerdos anulables caducará a los cuarenta días.

3. Los plazos de caducidad mencionados en este artículo se computarán desde la fecha de adopción del acuerdo, o, si fuera inscribible, desde la fecha de su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

4. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, las acciones de impugnación se ajustarán en su ejercicio conforme a lo establecido específicamente al respecto por la legislación reguladora de las Sociedades Anónimas.

SECCION SEGUNDA
Órganos de administración

Artículo 59. Modos de organizar la administración.

1. La administración de la sociedad se podrá confiar a:

a) Un administrador único.

b) Dos administradores solidarios.

c) Dos administradores mancomunados.

d) Un consejo rector.

2. Los estatutos podrán establecer distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la asamblea general la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.

3. Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de estatutos, se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

Artículo 60. Competencia y ámbito de representación.

1. La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá a:

a) Al administrador único.

b) A cada uno de los administradores solidarios.

c) A los dos administradores mancomunados conjuntamente.

d) Al consejo rector de forma colegiada.

2. El órgano de administración podrá hacer y llevar a cabo, con sujeción al régimen de actuación propio que corresponda en cada caso a la modalidad adoptada, todo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, pudiendo contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por los estatutos a la asamblea general.

Artículo 61. Nombramiento.

1. Para ser nombrado administrador no será necesaria la condición de socio, salvo disposición contraria de los estatutos.

2. Los administradores y, en su caso, los suplentes serán nombrados por la asamblea general en votación secreta, salvo disposición contraria de los estatutos o acuerdo de la asamblea general en sentido contrario, y por el mayor número de votos.

3. Los estatutos deberán regular el proceso electoral. En todo caso, no serán válidas las candidaturas presentadas fuera del plazo previsto en los estatutos, ni los administradores sometidos a renovación podrán decidir sobre la validez de las candidaturas.

Artículo 62. Aceptación e inscripción del nombramiento.

El nombramiento de administrador tendrá efectos internos a partir de la aceptación. El nombramiento de administrador deberá inscribirse en el plazo de un mes desde su aceptación. Para proceder a su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias será necesario que consten las circunstancias personales del administrador, su declaración de no estar incurso en ninguna causa legal o estatutaria de incompatibilidad, así como su aceptación.

Artículo 63. Duración del cargo.

1. El cargo de administrador tendrá la duración fijada en los estatutos, hasta un máximo de

cinco años, pudiendo ser reelegidos sucesivamente por iguales períodos de tiempo salvo disposición contraria de los estatutos.

2. Los administradores que hubieran agotado su plazo deberán seguir ocupando el cargo hasta que los nuevos administradores acepten sus cargos.

Artículo 64. Deber de diligencia del administrador.

1. Los miembros del órgano de administración deben llevar a cabo una gestión empresarial ordenada. En todo caso tienen que actuar con lealtad a la sociedad, respetando el deber de secreto.

2. Los administradores deben conocer en todo momento cual es la situación de la cooperativa.

3. Salvo autorización expresa de la asamblea general, los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia a administrar otra sociedad que se dedique al mismo o análogo género de actividad.

Artículo 65. Separación del cargo.

1. Los administradores podrán ser destituidos por la asamblea general aunque no conste en el orden del día, si bien en este caso será necesario que el acuerdo se adopte con el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes o representados, y en los demás casos bastará con la mayoría simple.

2. Cualquier socio podrá solicitar judicialmente el cese del administrador que haya incumplido la prohibición prevista en el apartado 3 del artículo anterior.

Artículo 66. Responsabilidad por daños. Presupuestos y causas de exoneración.

1. Los administradores responden frente a la cooperativa, los socios y los acreedores sociales del daño causado por actos u omisiones contrarios a la Ley, a los estatutos o contrarios a su deber de diligencia.

2. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo. Podrán exonerarse de responsabilidad los administradores que prueben que no habiendo intervenido en la adopción del acuerdo o su ejecución, desconocían su existencia o que conociéndola hicieron todo lo posible por evitar el daño, o al menos se opusieron expresamente a aquél.

3. No exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o el acuerdo lesivo, haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la asamblea general.

Artículo 67. Acción social de responsabilidad.

1. La acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración por los daños causados a la cooperativa, será ejercitada por ésta con el acuerdo previo de la asamblea general. Este será adoptado por mayoría de los votos presentes o representados en la asamblea, sin que sea necesario que conste en el orden del día.

2. Si no se obtiene el acuerdo mencionado o si transcurridos tres meses desde su adopción la cooperativa no entabla la acción de responsabilidad, ésta puede ser ejercida en cualquier momento por cualquier socio y por cuenta de la sociedad.

3. Los acreedores podrán ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores, cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

Artículo 68. Acción individual de responsabilidad.

No obstante lo previsto en los artículos precedentes quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos.

Artículo 69. El consejo rector. Composición y designación de cargos.

1. Los estatutos sociales determinarán la composición del consejo rector, siendo su número mínimo de tres miembros y máximo de quince, debiendo existir en todo caso un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Cuando la cooperativa tenga tres socios, el

consejo rector estará formado por dos miembros, no existiendo el cargo de Vicepresidente. Además los estatutos sociales podrán prever que la composición de este órgano refleje, en cada cooperativa, su implantación geográfica, las diversas actividades desarrolladas por la misma y la proporción existente entre ellos y otras circunstancias objetivas, estableciendo incluso las correspondientes reservas de puestos vocales.

2. Los miembros del consejo rector serán elegidos por la asamblea general. Los cargos de presidente, vicepresidente, en su caso, y Secretario serán elegidos de entre sus miembros por el propio consejo rector, salvo disposición en contrario de los estatutos.

3. El presidente del consejo rector, que lo será también de la cooperativa, ostenta la representación legal de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 70. El consejo rector. Organización y adopción de acuerdos.

1. El consejo rector se reunirá en sesión ordinaria cuando lo establezcan los estatutos y al menos una vez al trimestre, y en sesión extraordinaria, a iniciativa del presidente o a petición de cualquier Consejero. Si la solicitud de este ultimo no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por quien hubiese hecho la petición, siempre que logre para su convocatoria la adhesión, al menos, de un tercio del consejo.

El presidente convocará al consejo con tres días de antelación, como mínimo, pudiendo, en caso de urgencia, hacerse la convocatoria en forma verbal, telefónica o por cualquier otro instrumento. No será necesaria la convocatoria cuando, estando presentes todos los Consejeros, decidan por unanimidad la celebración del consejo.

2. El consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión más de la mitad de sus componentes. La asistencia de los mismos a las reuniones será personal e indelegable.

3. Cada Consejero tiene un voto. Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos de los Consejeros presentes.

Los estatutos podrán autorizar que el consejo adopte acuerdos por escrito y sin sesión cuando varios Consejeros tuviesen serias dificultades para desplazarse al domicilio social o lugar de reunión habitual del consejo y fuese necesario al interés de la cooperativa la adopción rápida de un acuerdo. En este caso, el presidente dirigirá por correo ordinario o electrónico una propuesta de acuerdo a cada uno de los Consejeros, los cuales responderán favorable o desfavorablemente a la propuesta a vuelta de correo; el acuerdo se entenderá adoptado, en su caso, cuando se reciba la última de las comunicaciones de los Consejeros, en cuyo momento el Secretario transcribirá el acuerdo al libro de actas, haciendo constar las fechas y conducto de las comunicaciones dirigidas a los Consejeros, y las fechas y conducto de las respuestas, incorporándose además como anexo al acta el escrito emitido por el presidente y los escritos de respuesta de los demás Consejeros. Este procedimiento sólo se admitirá cuando ningún Consejero se oponga al mismo.

4. Los acuerdos del consejo serán llevados a un libro de actas. Las actas recogerán los debates en forma sucinta, los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones. Salvo disposición contraria de los estatutos, el acta deberá aprobarse al finalizar la reunión o, si no fuera posible, al inicio de la siguiente. Estas actas deberán estar firmadas por el presidente y el secretario.

Artículo 71. El consejo rector. Delegación de facultades.

El consejo rector, con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, podrá delegar algunas de sus facultades, siempre que legal o estatutariamente no sean indelegables, en uno o varios Consejeros delegados que podrán actuar indistinta o mancomunadamente. Tales delegaciones no producirán efectos hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas.

Artículo 72. Impugnación de acuerdos del órgano de administración.

Lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general resulta de apli-

cación a la impugnación de los acuerdos del órgano de administración contrarios a la Ley, los estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios, o terceros, los intereses de la cooperativa.

SECCION TERCERA
La intervención

Artículo 73. Funciones, nombramiento y responsabilidad.

1. La intervención es el órgano de fiscalización de la cooperativa, y tiene atribuidas, además de las funciones previstas en esta ley, las que se establezcan en los estatutos que no estén expresamente encomendadas a otros órganos.

2. Los estatutos fijarán el número de interventores titulares, que no podrá ser superior a tres, pudiendo establecer la existencia de suplentes. La duración del mandato de los interventores se fijará en los estatutos hasta un máximo de cinco años, pudiendo ser reelegidos salvo disposición contraria de los estatutos.

3. El interventor o interventores serán elegidos por la asamblea general por el mayor número de votos. Un tercio de los interventores podrá ser designado entre expertos independientes.

4. Se aplica a la responsabilidad de los interventores lo dispuesto para la responsabilidad de los administradores.

Artículo 74. Informe.

1. La intervención, como órgano de fiscalización de la cooperativa, tiene como principal función la censura de las cuentas anuales.

2. La intervención dispondrá de un plazo de treinta días desde que las cuentas le fueren entregadas por el órgano de administración, para formular su informe por escrito, proponiendo su aprobación a la asamblea general ordinaria o formulando a aquél los reparos que estime convenientes. Si, como consecuencia del informe, el órgano de administración se viera obligado a modificar o alterar las cuentas anuales, la intervención habrá de ampliar su informe sobre los cambios introducidos.

3. La intervención tiene derecho a consultar y comprobar, en cualquier momento, toda la documentación de la cooperativa, y proceder a las verificaciones que estime necesarias, no pudiendo revelar particularmente a los demás socios o a terceros el resultado de sus investigaciones.

4. En tanto no se haya emitido el informe de la intervención o transcurrido el plazo para hacerlo, no podrá ser convocada la asamblea general, a cuya aprobación deberán someterse las cuentas.

Artículo 75. Auditoría externa.

Cuando la cooperativa tenga designados auditores de cuentas, la intervención queda exonerada de emitir el informe al que se refiere el artículo anterior.

SECCION CUARTA
Disposiciones comunes al órgano de administración e intervención

Artículo 76. Retribución.

Los estatutos podrán establecer que los cargos de administrador y los de interventor sean retribuidos, en cuyo caso deberán establecer el sistema y los criterios para fijarla por la asamblea, debiendo figurar todo ello en la memoria anual. En cualquier caso, los administradores e interventores serán compensados de los gastos que origine su función.

Artículo 77. Incompatibilidades.

1. No podrán ser administradores los quebrados y concursados no rehabilitados, los menores, los incapacitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio del cargo público, los que hubieren sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y aquéllos que por razón de su cargo no pueden ejercer el comercio.

2. Tampoco podrán serlo los funcionarios al servicio de la Administración con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la sociedad, ni quienes se hallen incursos en causa legal de incompatibilidad.

3. Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena al mismo género de comercio que constituye el objeto de la sociedad,

salvo acuerdo de la asamblea general adoptado con la mayoría de votos prevista para la modificación de los estatutos.

4. Los cargos de administradores e interventores son incompatibles entre sí. Tal incompatibilidad se extiende a los cónyuges y parejas de hecho y a los parientes de los expresados cargos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 78. Conflicto de intereses.

1. Es necesario el previo acuerdo de autorización de la asamblea general cuando la cooperativa hubiera de obligarse con cualquier administrador o interventor o con uno de sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, no pudiendo el socio incurso en esta situación de conflicto participar en la votación. El acuerdo previo de la asamblea no será necesario cuando se trate de las relaciones propias de la condición de socio.

2. Los actos, contratos u operaciones realizados sin la mencionada autorización serán anulables.

SECCION QUINTA
El comité de recursos

Artículo 79. Funciones y competencias.

1. Se podrá establecer estatutariamente la creación de un comité de recursos, que tramitará y resolverá los que se interpongan contra las sanciones impuestas a los socios, incluso cuando ocupen cargos sociales, por el órgano de administración, y en los demás supuestos que establezcan la presente ley o los estatutos.

2. El funcionamiento y composición del comité se fijarán en los estatutos y estará integrado por, al menos, tres miembros elegidos de entre los socios por la asamblea general en votación secreta. Los estatutos establecerán la duración de su mandato pudiendo ser reelegidos.

3. Los acuerdos del comité de recursos serán inmediatamente ejecutivos y definitivos, pudiendo ser impugnados conforme a lo dispuesto para la impugnación de acuerdos adoptados por la asamblea general.

4. A los miembros del comité les resultan aplicables las causas de abstención y recusación aplicables a los jueces y magistrados. Sus acuerdos, cuando recaigan sobre materia disciplinaria, se adoptarán mediante votación secreta y sin voto de calidad. Además, se aplicarán a este órgano las disposiciones de los artículos 61, 76, 77 y 78, si bien la posibilidad de retribución sólo podrán establecerla los estatutos para los miembros de dicho comité que actúen como ponentes.

TÍTULO II
RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I
APORTACIONES SOCIALES

Artículo 80. Conformación del capital social.

1. El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de sus socios, que podrán ser:

a) Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.

b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el órgano de administración.

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el órgano de administración, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los estatutos. El socio disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada.

Los estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del órgano de administración; todo ello sin perjuicio de que se contemplare, en su caso, la posibilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 4.1. El socio que hubiese

salvado expresamente su voto o estuviese ausente o disconforme con el establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada. Para este supuesto se aplicarán también los artículos 86.3, 90.2 y 127.4.

2. Las aportaciones de los socios se realizarán en moneda de curso legal. No obstante, si lo autorizan los estatutos o lo acuerda la asamblea general, también podrán consistir en bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. En este caso, el órgano de administración deberá designar uno o varios expertos independientes, con el objeto de que éstos, bajo su responsabilidad, determinen justificadamente el valor de la aportación no dineraria, previa descripción de las características de los bienes e indicación de los criterios utilizados para calcular su valor. Si los estatutos lo estableciesen, la valoración anteriormente referida deberá ser aprobada por la asamblea general. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2 para el momento de constitución de la sociedad cooperativa.

Se aplicará la normativa reguladora en materia de sociedades anónimas a la entrega de las aportaciones no dinerarias, el saneamiento por evicción y la transmisión de los riesgos.

3. El importe total de las aportaciones de cada socio en las cooperativas de primer grado no podrá exceder de un tercio del capital social, salvo que se trate de socios colaboradores, sociedades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas. En esos casos, no rige la limitación general prevista en el precepto, aunque podrá fijarse un límite máximo en los estatutos o por acuerdo en la asamblea general.

4. Con relación a la composición del capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 94.1, respecto a las participaciones especiales, en caso de que la asamblea general acuerde su emisión.

Artículo 81. Forma de acreditar las aportaciones sociales.

Los estatutos sociales determinarán si las aportaciones sociales se acreditarán mediante títulos no negociables o libretas de participación nominativos, que habrán de reflejar las aportaciones realizadas, las cantidades desembolsadas y las sucesivas variaciones de éstas.

No obstante, si los estatutos sociales prohibieren la baja voluntaria del socio a favor de su salida a través de la técnica de la transmisión de sus aportaciones sociales previsto en el artículo 92.4, cabría la posibilidad de que las aportaciones sociales se documentaran a través de títulos valores, nominativos o no, según la concreta categoría de miembros y de la clase de cooperativa, cuando la cesión de las mismas pueda ser libremente transmisible sin intervención previa de la autorización por parte de la cooperativa.

Artículo 82. Aportaciones obligatorias.

1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria inicial para adquirir y mantener la condición de socio, que podrá ser diferente para los distintos tipos de socios o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial de la actividad cooperativizada que cada uno de ellos asuma. Las aportaciones obligatorias no serán reembolsables hasta la extinción del vínculo del socio con la cooperativa y siempre que el órgano de administración no tenga reconocido estatutariamente el poder para rehusar incondicionalmente su reembolso al socio, en los términos previstos en los artículos 4.1 y 80.1.b).

2. La aportación obligatoria inicial para adquirir la condición de socio deberá desembolsarse, al menos, en un 25 por ciento en el momento de la suscripción, y el resto en el plazo que se establezca en los estatutos o que se decida en la asamblea general, que como máximo será de cuatro años. Ello sin perjuicio de que, declarado el concurso de la cooperativa, la administración concursal pueda reclamar a los socios, en el momento y cuantía que estime conveniente, el desembolso de la cuantía de las aportaciones que hubiesen sido diferidas, con independencia del plazo fijado para su abono.

En todo caso, el desembolso parcial de las aportaciones obligatorias sólo será posible siempre que se halle íntegramente desembolsado el cifra legal de capital social mínimo de la cooperativa exigida en el apartado uno del artículo 4.

3. Si por la imputación de pérdidas de la cooperativa a los socios, la aportación al capital social de alguno o algunos de ellos quedara por debajo del importe fijado como aportación obligatoria, el socio afectado deberá realizar la aportación necesaria hasta alcanzar dicho importe, para lo cual será inmediatamente requerido por el órgano de administración, el cual deberá fijar un plazo para efectuar el desembolso, que no podrá ser superior a un año.

4. Los socios que no efectúen sus aportaciones en el plazo establecido incurrirán automáticamente en mora. El órgano de administración deberá exigir a los socios que se encuentren en esa situación, incluso por la vía judicial, el cumplimiento de la obligación de desembolso con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por la morosidad. A partir del día siguiente al requerimiento extrajudicial que deberá realizar el órgano de administración al socio moroso, quedarán automáticamente suspendidos sus derechos societarios hasta que no regularice su situación con la cooperativa.

Artículo 83. Nuevas aportaciones obligatorias al capital social.

La asamblea general, por mayoría de las dos terceras partes de votos sociales de los asistentes, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias y fijar su cuantía, que podrá ser diferente para los distintos socios en función de los criterios recogidos en el artículo anterior, el plazo y las condiciones en que habrán de desembolsarse.

En ese caso, los socios podrán imputar las aportaciones voluntarias que tengan suscritas al cumplimiento de esta obligación, e incluso los disconformes podrán solicitar la baja, que tendrá la consideración de justificada a los efectos regulados en esta ley.

Artículo 84. Aportaciones obligatorias al capital social de los nuevos socios.

La asamblea general no podrá exigir a los nuevos socios que entren en la cooperativa, aportaciones superiores a las obligatorias exigibles en ese momento, actualizadas según el índice de precios al consumo o aquél que le sustituya. Su desembolso se efectuará en las condiciones que establezca el acuerdo de admisión.

Artículo 85. Aportaciones voluntarias.

1. La asamblea general y, si lo prevén los estatutos, el órgano de administración, podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias al capital social, que habrán de desembolsarse en el plazo y en las condiciones que establezca el acuerdo de emisión. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de administración podrá aceptar en cualquier momento aportaciones voluntarias de los socios al capital social. Su remuneración será la fijada para la última admisión acordada o, en su defecto, la prevista para las aportaciones obligatorias.

2. El órgano de administración podrá decidir, a requerimiento de su titular, la transformación de aportaciones obligatorias en voluntarias, que tienen también el carácter de permanencia propio de las aportaciones obligatorias al capital social del que forman parte, cuando aquéllas deban reducirse para adecuarse al potencial uso cooperativo del socio.

Artículo 86. Remuneración de las aportaciones.

1. La asamblea general acordará, en cada ejercicio, si las aportaciones obligatorias al capital dan derecho al devengo de intereses por la parte efectivamente desembolsada. En el caso de las aportaciones voluntarias, la remuneración se determinará en el acuerdo de admisión.

2. La remuneración de las aportaciones al capital social estará condicionada a la existencia de resultados positivos para satisfacerla y no excederá en más de seis puntos el interés legal del dinero.

3. Si la asamblea general acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado por el órgano de administración, tendrán preferencia para percibir la remuneración que se establezca en los estatutos, sin que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del ejercicio.

Artículo 87. Actualización de las aportaciones.

1. El balance de la cooperativa podrá ser regularizado en los mismos términos y con los mismos beneficios previstos para las sociedades de derecho común, sin perjuicio de lo establecido por esta ley para la plusvalía resultante de la regularización.

2. La plusvalía citada se destinará, en primer lugar, a la compensación de las pérdidas que la cooperativa pudiera tener sin compensar y, seguidamente, en uno o más ejercicios, a la actualización de las aportaciones al capital social o al incremento de las reservas, obligatorias o voluntarias, en la proporción que estime la asamblea general.

Artículo 88. Reembolso de las aportaciones obligatorias al capital social.

1. En caso de baja en la cooperativa y con la salvedad establecida en el artículo 80.1 de la presente ley, el socio tiene derecho a exigir el reembolso de sus aportaciones obligatorias y la parte correspondiente de las reservas voluntarias repartibles, que resultará según los criterios de reparto fijado en los estatutos o en el acuerdo que determinó su constitución o, en su defecto, en atención a su participación media en la actividad cooperativizada durante los últimos cinco años o, en las cooperativas cuya duración hubiese sido inferior a ese plazo, desde su constitución. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del ejercicio social en el que se produzca la baja, y su importe se determinará conforme a lo previsto en los apartados siguientes.

2. Del valor acreditado y, en su caso, actualizado de las aportaciones obligatorias se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar.

3. Además, si los estatutos lo prevén, sobre el importe líquido de las aportaciones obligatorias, los administradores podrán practicar las deducciones que acuerden en caso de baja no justificada o expulsión, respetando el límite máximo fijado en los estatutos, que no podrá superar el 20 y el 30 por ciento, respectivamente. Igualmente, los estatutos podrán prever que, en caso de incumplimiento del período de permanencia mínimo pactado, los porcentajes por deducción para la baja no justificada puedan incrementarse hasta diez puntos porcentuales.

4. Los administradores tendrán un plazo de tres meses desde la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio para comunicar la liquidación efectuada.

Artículo 89. Reembolso de las aportaciones voluntarias al capital social.

1. Las aportaciones voluntarias se reembolsarán, liquidadas, en las condiciones que determine el acuerdo de emisión o de transformación. Salvo que dicho acuerdo hubiera previsto un régimen diferente, las aportaciones voluntarias se reembolsarán en el momento en que la baja deba surtir efectos. No podrán practicarse deducciones sobre ellas, salvo si las pérdidas imputables al socio no pueden cubrirse con las aportaciones obligatorias. Tampoco se les podrá aplicar el aplazamiento previsto en el artículo siguiente.

2. Lo previsto en el párrafo anterior se ha de entender sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo siguiente.

Artículo 90. Plazos de reembolso de las aportaciones al capital social.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el último apartado de este artículo, el plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja o expulsión. En caso de fallecimiento del socio, el reembolso a los causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho causante.

Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar.

2. Para las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) los plazos señalados en el apartado anterior se computarán a partir de la fecha en la que el órgano de administración acuerde el reembolso.

Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) hayan causado baja, el reembolso que, en su caso, acuerde el órgano de administración se efectuará por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de la baja.

En caso de ingreso de nuevos socios los estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de los mismos deberán preferentemente efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.

Artículo 91. Disconformidad con el reembolso de las aportaciones al capital social.

El socio disconforme con el importe a reembolsar o con el aplazamiento, podrá impugnarlo por el procedimiento previsto en el artículo 32.4.

Artículo 92. Transmisión de las aportaciones sociales y de la condición de socio.

1. Las aportaciones podrán transmitirse:

a) Por actos ínter vivos entre socios y entre quienes se comprometan a serlo en los tres meses siguientes, en los términos fijados por los estatutos, y sin perjuicio de la debida aplicación de lo previsto en el último párrafo del artículo 90.2.

b) Por sucesión mortis causa, a los causahabientes si fueran socios y así lo soliciten, o si no lo fueran, previa admisión como tales realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, que habrá de solicitarse en el plazo de tres meses desde el fallecimiento. En otro caso, tendrá derecho a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación social, en los términos previstos en el artículo precedente, sin perjuicio, en su caso, de que se efectúe merced a la adjudicación de las aportaciones sociales del causahabiente al nuevo socio a tenor de lo previsto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 90.

2. En el supuesto del apartado 1. b), el nuevo socio no estará obligado a desembolsar cuotas de ingreso.

3. Los acreedores personales del socio no podrán embargar ni ejecutar las aportaciones sociales, sin perjuicio de ejercer sus derechos sobre los reembolsos, intereses y retornos que pudieran corresponder al socio.

4. Sin perjuicio del régimen ordinario de transmisión de aportaciones sociales previsto en los apartados anteriores, los estatutos sociales podrán prohibir la salida voluntaria del socio de la cooperativa a través del ejercicio del tradicional derecho de baja y a favor del empleo preferente del mecanismo de la transmisión ínter vivos de sus aportaciones sociales con arreglo a los siguientes criterios:

a) A favor de cualquiera que asuma su mismo compromiso obligacional con la cooperativa, bien sea porque ya lo ostentare, por ser miembro de la cooperativa, o bien porque estuviere en condiciones de cumplir debidamente ese mismo compromiso hacia la cooperativa, al tratarse de un tercero susceptible de reunir los requisitos exigidos para ser socio y suceder al socio saliente.

b) En su defecto, a cualquiera que estuviere dispuesto a suceder al socio saliente aunque con un compromiso obligacional distinto al suyo, bien fuere ya miembro de la cooperativa o bien, sin serlo aún, estuviere dispuesto a ingresar en ella, aunque, ello no obstante, sólo estuviere dispuesto a asumir íntegramente el capital social suscrito por el socio saliente, y ostentando una condición de miembro diversa a la que ostentaba su cedente.

En todo caso, sobre el socio saliente recae la carga de encontrar adquirente de sus aportaciones sociales con arreglo al criterio de preferencia previsto y debiendo comunicar a la cooperativa su voluntad de abanDonar la cooperativa, si bien esa voluntad no obsta a su obligación de responder, en su caso, ante la cooperativa por los daños derivados para ésta por la pérdida de compromiso obligacional asumido previamente por el socio saliente.

Los estatutos sociales regularán específicamente el modo en que, según la clase de cooperativa y el tipo de miembro de la cooperativa, fuere o no precisa la autorización previa por parte de la cooperativa como condición imprescindible de la transmisión de las aportaciones sociales y, en su caso, de la condición de socio. Podrá preverse para el caso de que la condición de socio se contemplare como libremente transmisible que su acreditación se lleve a cabo a través de títulos nominativos o no, según el tipo de miembros y la clase de cooperativa, y que tendrán la condición de títulos valores.

La previsión estatutaria de este sistema de salida voluntaria de los miembros de la cooperativa habrá de ser acordada con una mayoría de dos tercios de los votos sociales presentes o representados de la cooperativa. El socio disconforme podrá darse de baja, que tendrá el carácter de justificada.

Artículo 93. Aportaciones no integradas en el capital social.

1. Los estatutos o la asamblea general podrán establecer cuotas de ingreso o periódicas, que no formarán parte del capital social ni serán reembolsables.

Las cuotas de ingreso, que se integrarán en la reserva obligatoria, no podrán exceder del resultado de dividir la mencionada reserva por el número de socios, o número de aportaciones, según vengan determinadas las cuotas por socio o por módulos de participación.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la cuota de ingreso de los nuevos socios no podrá ser superior al 20 por ciento del importe de la aportación obligatoria al capital social que se le exija para su ingreso en la cooperativa cuando el cociente señalado en el párrafo anterior sea inferior a esta cantidad.

2. La entrega por los socios de cualquier tipo de bienes para la gestión cooperativa y, en general, los pagos para la obtención de los servicios cooperativizados, no integran el capital social y están sujetos a las condiciones establecidas con arreglo a lo previsto en el artículo 29. Las entregas referidas no integran el patrimonio de la cooperativa, por lo que no pueden ser embargadas por los acreedores sociales, salvo que se dispusiere o se dedujere lo contrario de los estatutos sociales, del reglamento de régimen interno, de los acuerdos sociales o, en última instancia, de las estipulaciones singularmente pactadas con cada socio, en cuyo caso sí que podrían ser embargadas por los acreedores sociales.

Artículo 94. Participaciones especiales

1. Se denominarán participaciones especiales las aportaciones patrimoniales realizadas por los socios y por terceros cuyo reembolso no tenga lugar hasta que transcurran al menos cinco años y que, a efecto de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.

Cuando el vencimiento de estas participaciones no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa, salvo decisión de la sociedad para su reembolso anterior, tendrán la consideración de capital social. Sin embargo, en ese caso, para efectuar el reembolso anticipado deberá seguirse el procedimiento establecido para la reducción de capital por restitución de aportaciones en la legislación reguladora de las sociedades limitadas.

2. Las participaciones especiales, que serán libremente transmisibles, se representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta y podrán tener la consideración de valores mobiliarios, si así se prevé en el acuerdo de emisión. Cuando tengan el carácter de valores mobiliarios, su régimen jurídico se ajustará a la normativa relativa a estos activos financieros.

3. El régimen de las participaciones especiales será libremente fijado por la asamblea general cuando acuerde su emisión, aunque, en ningún caso, podrá atribuir a sus titulares los derechos propios de los socios.

4. Lo establecido en este artículo sólo será de aplicación a las cooperativas de crédito y de seguros cuando su normativa reguladora así lo establezca expresamente, pudiendo captar recursos con el carácter de subordinados previo acuerdo del órgano de administración, cualquiera que fuese su instrumentación y siempre que tal posibilidad esté expresamente prevista en los estatutos.

Artículo 95. Otras financiaciones.

1. La asamblea general podrá acordar la financiación voluntaria de la cooperativa procedente de los socios y de terceros, bajo cualquier modalidad jurídica y en el plazo y condiciones que se establezcan en el acuerdo.

2. Las sociedades cooperativas, previo acuerdo de la asamblea general, podrán emitir obligaciones de carácter no convertible en partes sociales, cuyo régimen se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. La asamblea general, al aprobar la distribución de resultados, podrá acordar que la parte que se determine repartir entre los socios se destine a un fondo de retornos acreditados a éstos. El acuerdo de constitución de este fondo determinará el destino del mismo, el plazo para su restitución al socio y la retribución que devengará para éste, que en ningún caso podrá ser superior a la máxima prevista para el capital social.

4. La asamblea general podrá acordar igualmente la emisión de títulos participativos, que darán derecho a la remuneración que se establezca en el acuerdo de emisión, que deberá fijarse en función de los resultados de la cooperativa, pudiendo, además, incorporar un interés fijo, con los límites establecidos en esta ley para remunerar el capital social.

El acuerdo de emisión, que concretará, asimismo, el plazo de amortización de los títulos y demás condiciones aplicables, podrá establecer el derecho de asistencia de los participes a la asamblea general, con voz y sin voto.

5. También podrán contratarse cuentas en participación cuyo régimen se ajustará a lo establecido por el Código de Comercio.

CAPÍTULO II

EJERCICIO ECONOMICO Y FONDOS SOCIALES

Artículo 96. Ejercicio económico.

El ejercicio económico tendrá una duración de doce meses, salvo en los casos de constitución, extinción o fusión de la cooperativa, y coincidirá con el año natural si los estatutos no disponen lo contrario.

Artículo 97. Determinación de resultados.

1. Para la determinación de los resultados del ejercicio económico se observarán las normas y criterios establecidos por la normativa contable. No obstante, se considerarán gastos deducibles para obtener el resultado neto los siguientes:

a) El importe de los bienes entregados para la gestión cooperativa, en valoración no superior a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos societarios de los socios trabajadores y de trabajo, en cuantía no superior a las retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente.

b) El importe de la remuneración de las aportaciones al capital social, de las participaciones especiales y de las aportaciones y financiaciones no integradas en el capital social.

2. La cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados extracooperativos, sin perjuicio de su alcance fiscal.

3. Si la cooperativa no opta por el sistema de contabilización previsto en el apartado anterior, deberá contabilizar separadamente los resultados extracooperativos, que son los derivados de la actividad económica cooperativa con no socios, excepto en las cooperativas de trabajo asociado, donde la actividad cooperativizada llevada a cabo por terceras personas no socias es resultado cooperativo si la cooperativa cumple los límites a la contratación establecidos por la presente ley, los procedentes de inversiones financieras en sociedades y los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, y los extraordinarios, que son los procedentes de plusvalías que resulten de operaciones de enajenación de los elementos del activo inmovilizado, con las siguientes excepciones:

a) Los derivados de ingresos procedentes de inversiones o participaciones financieras en cooperativas, o en sociedades no cooperativas cuando éstas realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa, que se consideran a todos los efectos resultados cooperativos.

b) Las plusvalías obtenidas por la enajenación de elementos del inmovilizado material destinados al cumplimiento del fin social, cuando concurran los siguientes requisitos: que se reinvierta la totalidad de la plusvalía en nuevos elementos del inmovilizado con idéntico destino, que la reinversión tenga lugar en el plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de entrega o puesta a disposición de los elementos patrimoniales y los tres años posteriores, y que el elemento adquirido permanezca en el patrimonio social hasta su total amortización, salvo en el supuesto de pérdidas justificadas o su nueva reinversión.

4. Para la determinación de los resultados extracooperativos, de los ingresos derivados de estas operaciones se deducirán, además de los gastos específicos para su obtención, la parte que proceda de los gastos generales de la cooperativa.

5. No obstante, las cooperativas de cualquier clase han de cumplir la Ley fiscal y las normas contables que les sean de aplicación en cuanto a la determinación de los resultados cooperativos y extracooperativos.

Artículo 98. Distribución de excedentes.

1. En la aplicación de resultados, a efecto de fijar los porcentajes de dotación de los fondos obligatorios, cabe distinguir dos supuestos:

a) En caso de optar por la contabilización separada de los resultados extracooperativos:

1.º De los excedentes o resultados cooperativos, una vez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto sobre sociedades, se destinará, al menos, el 20 por ciento al fondo de reserva obligatorio y el 5 por ciento al fondo de educación y promoción cooperativa.

2.º De los beneficios extracooperativos y extraordinarios, una vez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto sobre sociedades, se destinará, al menos, un 50 por ciento al fondo de reserva obligatorio.

b) En caso de optar por la contabilización conjunta, de los resultados de la cooperativa, y no desglosar en nota independiente en la memoria anual los resultados extracooperativos, una vez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores, y antes de la consideración del impuesto de sociedades, se destinará, al menos, el 35 por ciento al fondo de reserva obligatorio y el 5 por ciento al fondo de educación y promoción cooperativa.

2. Realizadas las asignaciones anteriores, la cantidad restante, una vez satisfechos los impuestos exigibles, estará a disposición de la asamblea general, que podrá distribuirla en la forma siguiente: retornos a los socios, dotación a fondos de reserva voluntarios, con el carácter repartible o irrepartible que establezcan los estatutos o, en su defecto, la asamblea general, y, en su caso, a la participación de los trabajadores asalariados en los resultados de la cooperativa.

3. Los retornos se adjudicarán a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada socio con la cooperativa. Su distribución podrá hacerse, según acuerde la asamblea, mediante su pago efectivo, mediante su incorporación a capital, o mediante la creación de un fondo de retornos en los términos establecidos en el artículo 95.3.

4. La cooperativa podrá reconocer y concretar en sus estatutos, o por acuerdo de la asamblea general, el derecho de sus trabajadores asalariados a participar en los resultados favorables. Esta participación tendrá carácter salarial y sustituirá al complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.

Artículo 99. Imputación de pérdidas.

1. Los resultados positivos del ejercicio se destinarán, en primer lugar, a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Cuando los resultados del ejercicio no permitan compensar todas las pérdidas de ejercicios anteriores, los estatutos, que deberán fijar los criterios para su compensación, podrán admitir la apertura de una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de siete años.

2. En la regulación estatutaria de la compensación de pérdidas, la cooperativa habrá de respetar las siguientes reglas:

a) A los fondos de reserva voluntarios, repartibles o irrepartibles, si existiesen, podrá imputarse la totalidad de las pérdidas.

b) En caso de contabilización separada de los resultados extracooperativos: al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, dependiendo del origen de las pérdidas, los porcentajes medios de los excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su constitución, si ésta no fuera anterior a dichos cinco años.

En caso de no contabilización separada de los resultados extracooperativos: al fondo de reserva obligatorio podrá imputarse, como máximo, el porcentaje medio de los resultados que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su constitución, si ésta no fuese anterior a dichos cinco años.

c) La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará necesariamente a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa o en atención a la participación mínima obligatoria fijada en los estatutos sociales para el socio, si su participación efectiva fuera menor.

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran producido, con las salvedades previstas en los apartados c) y f), de alguna de las formas siguientes:

a) Directamente, mediante su pago en efectivo.

b) Mediante deducciones en el importe desembolsado de las aportaciones voluntarias del socio al capital social.

c) Mediante deducciones en el importe desembolsado de las aportaciones obligatorias, iniciales o sucesivas, del socio al capital social; en ambos casos, el socio deberá reponer las cantidades deducidas en el plazo fijado en el artículo 82.3.

d) Si existiese el fondo de retornos a que se refiere el artículo 98.3, se podrá imputar al mismo el porcentaje que fije la asamblea general.

e) Con cargo a cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esa imputación.

f) Con cargo a los retornos que pudieran corresponder al socio en los cinco años siguientes. Transcurrido este período, si quedasen pérdidas sin compensar deberán ser satisfechas por el socio en el plazo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el órgano de administración.

4. La asamblea general decidirá la forma en que se procederá a la satisfacción de la deuda de cada socio. En todo caso, el socio podrá optar por su pago en efectivo. Si se acuerda el pago mediante reducción de las aportaciones al capital social, se reducirá en primer lugar el importe desembolsado de las aportaciones voluntarias del socio, si las tuviere, y a continuación el importe desembolsado de sus aportaciones obligatorias.

Artículo 100. Fondo de reserva obligatorio.

1. La cooperativa está obligada a constituir un fondo de reserva obligatorio, que será destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad. Dicho fondo será irrepartible entre los socios, excepto en el supuesto previsto en el artículo 127.2. c), cuando así se hubiera previsto en los estatutos sociales.

2. Al fondo de reserva obligatorio se destinarán necesariamente:

a) los porcentajes de los excedentes cooperativos y de los beneficios extracooperativos o extraordinarios o de los resultados, según la opción de contabilización separada o conjunta que se adopte, que establezca la asamblea general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98,

b) las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social en caso de baja no justificada o expulsión de socios,

c) las cuotas de ingreso de nuevos socios, y

d) la asignación que corresponda como consecuencia de la regularización del balance.

Artículo 101. Fondo de educación y promoción cooperativa.

1. El fondo de educación y promoción cooperativa tiene por objeto la formación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas cooperativas, económicas y profesionales; la promoción de las relaciones intercooperativas, la difu-

sión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la comunidad en general.

Para el cumplimiento de sus fines, que serán determinados por los estatutos o por la asamblea general, el fondo puede ser aportado, parcialmente o en su totalidad, a una cooperativa de segundo o ulterior grado, unión, federación o confederación de cooperativas, o a un organismo público o asociación de interés social.

El informe de gestión recogerá con detalle las cantidades que con cargo al fondo se hayan destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que se remitieron para el cumplimiento de dichos fines.

2. Al fondo de educación y promoción cooperativa se destinarán necesariamente:

a) Los porcentajes de los excedentes cooperativos o de los resultados que establezcan los estatutos o la asamblea general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.

b) Las sanciones económicas que imponga la cooperativa a sus socios.

c) Las subvenciones, donaciones y todo tipo de ayuda recibida de los socios o de terceras personas para el cumplimiento de los fines propios de este fondo.

3. El importe del fondo de formación y promoción cooperativa es inembargable, excepto por deudas contraídas para el cumplimiento de sus fines, e irrepartible, incluso en caso de liquidación de la cooperativa.

El importe del fondo deberá aplicarse o comprometerse en el ejercicio económico en que se haya efectuado su dotación. En caso contrario, y siempre dentro del siguiente ejercicio, su importe deberá aplicarse a su objeto o materializarse en depósitos en entidades financieras o en valores de deuda pública, cuyos rendimientos se aplicarán también al objeto del mismo. Dichos depósitos o valores no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de préstamo.

4. Si el fondo o parte del mismo se aplicase en bienes del inmovilizado, se tendrá que hacer, en su caso, expresa referencia a su carácter inembargable en el Registro de la Propiedad o en aquel en que el bien se hallare inscrito.

CAPÍTULO III

DOCUMENTACION SOCIAL Y CONTABILIDAD

Artículo 102. Documentación social.

1. Las cooperativas llevarán, en orden y al día, los siguientes libros:

a) libro registro de socios, especificando en el mismo las diferentes clases de socios, así como su fecha de admisión y baja,

b) libro registro de aportaciones al capital social, en el que se hará constar, al menos, la naturaleza de las mismas, sucesivas transmisiones, su actualización y reembolso,

c) libros de actas de la asamblea general, del órgano de administración y, en su caso, de otros órganos colegiados,

d) libro de inventarios y cuentas anuales y libro diario, y

e) cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones legales.

2. Todos los libros sociales y contables serán diligenciados y legalizados, con carácter previo a su utilización, por el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

3. También son válidos los asientos y las anotaciones realizados por procedimientos informáticos o por otros procedimientos adecuados, que posteriormente serán encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán legalizados por el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias en el plazo de cuatro meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

4. Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del órgano de administración, que deberá conservarlos, al menos, durante los seis años siguientes a la trascripción de la última acta o asiento o a la extinción de los derechos u obligaciones que contengan, respectivamente.

Artículo 103. Contabilidad y cuentas anuales.

1. Las cooperativas deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo a lo establecido en el Código de Comercio y en la normativa contable, con las peculiaridades contenidas en esta ley y normas que la desarrollen, pudiendo formular las cuentas

anuales en modelo abreviado cuando concurran las mismas circunstancias contenidas en los artículos 181 y 190 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2. El órgano de administración está obligado a formular, en un plazo máximo de tres meses computados a partir de la fecha del cierre del ejercicio social, establecida estatutariamente, las cuentas anuales, el informe de gestión y una propuesta de aplicación de los excedentes disponibles o de imputación de pérdidas.

3. El órgano de administración presentará para su depósito en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, en el plazo de un mes desde su aprobación, certificación de los acuerdos de la asamblea general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación de los excedentes o imputación de las pérdidas, en su caso, adjuntando un ejemplar de cada una de dichas cuentas así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría, o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría. Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa.

Artículo 104. Auditoría de cuentas.

1. Las sociedades cooperativas deberán auditar sus cuentas anuales y el informe de gestión en cualquiera de los casos siguientes:

a) Cuando así resulte de la legislación sobre auditoría de cuentas.

b) Cuando lo establezcan los estatutos o lo acuerde la asamblea general.

c) Cuando lo establezca ésta u otra ley.

2. Si la cooperativa no está obligada a auditar sus cuentas anuales, el 5 por ciento de los socios en las cooperativas con más de quince socios y del 25 por ciento en las cooperativas con quince o menos socios podrá solicitar del Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.

3. La designación de los auditores de cuentas corresponde a la asamblea general cuando sea obligado su nombramiento por imperativo legal o por solicitud de los socios de acuerdo con el apartado anterior y habrá de realizarse antes de que finalice el ejercicio a auditar. El nombramiento de los auditores deberá hacerse por un período de tiempo determinado que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos por la asamblea general anualmente una vez haya finalizado el período inicial. No obstante, cuando la asamblea general no hubiera nombrado oportunamente los auditores, o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia u otros que determinen la imposibilidad de que el auditor nombrado lleve a cabo su cometido, el órgano de administración y los restantes legitimados para solicitar la auditoría podrán pedir al Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias que nombre un auditor para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio. Una vez nombrado el auditor, no se podrá proceder a la revocación de su nombramiento, salvo por justa causa.

TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FUSIÓN, ESCISIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

CAPÍTULO I
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 105. Modificación de estatutos.

1. La modificación de los estatutos sociales deberá ser acordada por la asamblea general y exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) que los autores de la propuesta formulen un informe escrito con la justificación de la misma,

b) que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse, y

c) que en el anuncio de la convocatoria se haga constar expresamente el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

2. La modificación estatutaria se elevará a escritura pública, que se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias. En la escritura se hará constar la certificación del acta del acuerdo de modificación y el texto íntegro de la modificación aprobada.

3. Los acuerdos de cambio de denominación, cambio de domicilio o de modificación del objeto social se anunciarán, además, en uno de los diarios de mayor circulación del Principado de Asturias.

4. Cuando la modificación consista en el cambio de clase de la cooperativa, en la modificación sustancial del objeto social o en el cambio de responsabilidad de los socios, los que hayan votado en contra o los ausentes en la asamblea que expresen su disconformidad por escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días, a contar desde la inscripción del acuerdo en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, tendrán derecho a separase de la cooperativa y su baja se considerará como justificada.

Artículo 106. Cambio del domicilio social.

Salvo disposición contraria de los estatutos, la modificación estatutaria consistente en el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal podrá acordarse por los propios administradores, sin necesidad de acuerdo de la asamblea. En todo caso, la modificación estatutaria se elevará a escritura pública, que se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

CAPÍTULO II
FUSION

Artículo 107. Clases y efectos de la fusión.

1. Pueden fusionarse sociedades cooperativas de la misma o diferente clase, mediante la constitución de una cooperativa nueva o la absorción de una o más cooperativas por otra ya existente.

2. La fusión de cualesquiera cooperativas en una cooperativa nueva implicará la extinción de cada una de ellas y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad que haya de adquirir por sucesión los derechos y obligaciones de aquéllas.

3. Si la fusión hubiere de resultar de la absorción de una o más cooperativas por otra ya existente, ésta adquirirá de igual forma los patrimonios de las cooperativas absorbidas, que se extinguirán, aumentando en su caso, el capital social en la cuantía que proceda.

4. La totalidad de las reservas o fondos sociales obligatorios de las cooperativas que se extingan como consecuencia de la fusión pasarán a integrarse en los de la cooperativa nueva o absorbente.

Artículo 108. Preparación de la fusión, contenido del proyecto de fusión y derecho de información del socio.

1. Los administradores de las cooperativas que participen en la fusión deben redactar un proyecto de fusión. Una vez suscrito el proyecto de fusión los administradores de las sociedades que se fusionen se abstendrán de realizar cualquier acto u operación que pudiera comprometer la aprobación del proyecto de fusión, o modificar la participación de los socios.

2. El proyecto de fusión contendrá como mínimo las siguientes menciones:

a) la denominación, clase, ámbito y domicilio de las cooperativas que participen en la fusión y de la nueva cooperativa, en su caso, incluidos los datos regístrales de la inscripción de aquéllas,

b) el sistema para fijar la cuantía que, como aportación de capital a la sociedad nueva o absorbente, se reconoce a cada socio de las cooperativas que participan en la fusión,

c) los derechos y obligaciones que se reconozcan a los socios de la cooperativa o cooperativas extinguidas en la cooperativa nueva o absorbente,

d) la fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables, por cuenta de la cooperativa nueva o absorbente, y

e) los derechos que correspondan en la cooperativa nueva o absorbente a los titulares de participaciones especiales, títulos participativos u otros títulos asimilables de las cooperativas que se extingan.

3. Cuando se convoque la asamblea que deba aprobar la fusión deberá ponerse a disposición de los socios en el domicilio social de cada una de las sociedades que participen en la fusión, la siguiente documentación:

a) el proyecto de fusión,

b) los informes redactados por los administradores de las cooperativas participantes en el proceso de fusión sobre la conveniencia y los efectos de la fusión que se propone. Y si la cooperativa tiene auditores de cuenta nombrados, será necesario un informe de éstos sobre la situación económico financiera de ésta y la previsible situación de la cooperativa resultante,

c) el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria explicativa, de las cooperativas que participen en el proceso de fusión,

d) el balance de fusión de cada una de las cooperativas si es diferente del último balance anual aprobado. Puede considerarse balance de fusión el último aprobado, siempre y cuando hubiese sido cerrado dentro de los seis últimos meses anteriores a la fecha de la asamblea que ha de decidir sobre el proyecto de fusión,

e) el proyecto de estatutos de la nueva cooperativa o de los estatutos resultantes de la cooperativa absorbente, y

f) un informe sobre el órgano de administración de la sociedad resultante de la fusión, en el que se indique el tipo de órgano y los miembros que lo integrarían.

Artículo 109. Aprobación del proyecto de fusión y publicidad.

1. La asamblea general de cada una de las cooperativas participantes en la fusión deberá aprobar sin modificaciones el proyecto de fusión, por la mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados.

2. El acuerdo de fusión de cada una de las cooperativas, una vez adoptado se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en un diario de gran circulación en el Principado de Asturias.

Artículo 110. Derecho de separación.

Los socios de las cooperativas que se fusionan que no hayan votado a favor de la fusión tendrán derecho a separarse de su cooperativa, por medio de escrito dirigido al órgano de administración, en el plazo de cuarenta días desde la publicación del último anuncio del acuerdo, conforme a lo dispuesto en esta ley. La cooperativa resultante de la fusión asume la obligación de pagar la liquidación de su participación a los socios que hubieran ejercitado el derecho de separación, en el plazo y condiciones previstas en esta ley para las bajas justificadas, y conforme a lo dispuesto en la cooperativa de la que eran socios.

Artículo 111. Derecho de oposición de los acreedores.

Los acreedores de las sociedades participantes en la fusión cuyos créditos hubieran nacido antes del último anuncio de fusión, podrán oponerse por escrito a la fusión antes de que transcurran dos meses desde la publicación del anuncio de fusión. No podrán oponerse a la fusión aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren suficientemente garantizados. Si algún acreedor se opusiere a la fusión no podrá llevarse a efecto ésta hasta que la sociedad no presente garantía a satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta que le notifique la prestación de fianza solidaria o aval a su favor por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla.

Artículo 112. Inscripción de la fusión.

Los acuerdos de fusión se harán constar en escritura pública, que deberán contener el balance de fusión de las sociedades que se extinguen, y se presentará en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de

Asturias, teniendo eficacia para la cancelación de las sociedades que se extinguen y la inscripción de las modificaciones de la absorbente. En la escritura pública se manifestará que no se ha producido oposición de los acreedores a la fusión o en su caso que habiéndose opuesto han sido pagados o garantizados con indicación de los acreedores, créditos y garantías prestadas.

Artículo 113. Fusión especial.

Las cooperativas pueden fusionarse con sociedades no cooperativas sin que se vea afectada su personalidad jurídica, siempre que no lo prohíba una norma legal. En estos casos, a la sociedad cooperativa que participe en el proceso se le aplicaran las normas relativas al acuerdo de fusión y derechos de separación de los socios y garantías de terceros previstas en esta ley.

Cuando el resultado de la fusión no sea una entidad cooperativa se aplicarán las disposiciones previstas en esta ley para la transformación.

CAPÍTULO III

ESCISION

Artículo 114. Escisión.

1. La escisión de una cooperativa puede consistir en la extinción de la cooperativa, previa división de todo su patrimonio, en dos o más partes, que se trasmitirán en bloque a una o varias sociedades de nueva creación, o que será absorbido por una o varias sociedades ya existentes. La escisión también podrá consistir en la segregación de una o más partes del patrimonio de la cooperativa que se trasmitirán a una o a varias nuevas sociedades o a una o varias sociedades ya existentes.

2. A la escisión se le aplicarán las normas previstas para la fusión en esta ley, cuando la sociedad o sociedades resultantes de la escisión, en su caso las absorbentes, o las cesionarias no sea una cooperativa se aplicarán las normas previstas para la transformación en cuanto al destino de los fondos especiales.

3. En defecto de cumplimiento por una sociedad beneficiaria de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, las sociedades beneficiarias de la escisión responderán solidariamente del cumplimiento de la misma hasta el importe del activo atribuido a cada una de ellas y, si la sociedad escindida no hubiera dejado de existir, se extiende a la propia sociedad escindida la responsabilidad por la totalidad de la obligación.

CAPÍTULO IV

TRANSFORMACION

Artículo 115. Transformación de sociedad cooperativa.

1. Las cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles o mercantiles, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal aplicable. En ningún caso se verá afectada la personalidad jurídica de la entidad transformada.

2. El procedimiento de transformación de la sociedad cooperativa será el siguiente:

a) acuerdo expreso de la asamblea general adoptado conforme a lo establecido para la modificación de los estatutos,

b) publicación del acuerdo de la asamblea en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en un periódico de los de mayor circulación de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias,

c) elevación del acuerdo a escritura pública, que contendrá todas las menciones exigidas legalmente para la constitución de la nueva entidad respetando lo dispuesto en la presente ley,

d) la escritura deberá presentarse en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias para inscribir la baja correspondiente y deberá ir acompañada del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación y verificado por los interventores de la cooperativa, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de los socios desde el día de la convocatoria de la asamblea general, y

e) igualmente deberá acompañarse a la escritura una relación de socios que hayan hecho uso del derecho de separación y el balance final cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura. Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar dicha escritura, además, en otros registros

públicos, conforme a la normativa estatal aplicable.

3. Tendrán derecho de separación los socios que votaron en contra de la transformación en la asamblea general y los no asistentes que se opusieron al acuerdo, por escrito, dirigido al órgano de administración, en el plazo de cuarenta días desde la última publicación realizada. La baja de estos socios tendrá la consideración de baja justificada.

4. El fondo de educación y promoción, así como cualquier otro fondo o reserva no repartible entre los socios, se pondrán a disposición de la Administración del Principado de Asturias, que los destinará, exclusivamente, a los fines de educación y promoción de las cooperativas, a través del Consejo Asturiano de la Economía Social.

Artículo 116. Transformación en sociedad cooperativa.

1. Las sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo podrán transformarse en cooperativas de conformidad con las disposiciones vigentes.

2. La escritura pública de transformación, que contendrá todos los requisitos previstos en esta ley para la constitución de una cooperativa, deberá presentarse a inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias acompañada del balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación, sin perjuicio de su presentación en los demás registros que resulten pertinentes conforme a la legislación aplicable.

CAPÍTULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 117. Causas de disolución.

1. La cooperativa quedará disuelta por las causas siguientes:

a) Por acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados.

b) Por la realización de su objeto social. Por la imposibilidad manifiesta de desarrollar la actividad cooperativizada. Por la paralización o inactividad de la asamblea general.

c) Por la paralización de la actividad cooperativizada durante dos años consecutivos, sin causa justificada.

d) Por la reducción del número de socios por debajo del mínimo establecido por esta ley para constituir una cooperativa, sin que se restablezca en el plazo de un año.

e) Por reducción del capital social a una cantidad inferior al capital social mínimo establecido en los estatutos.

f) Por cumplimiento del término de duración fijado en los estatutos, a no ser que con anterioridad hubiese sido prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias. En dicho caso, el socio disconforme con la prórroga podrá causar baja, que tendrá, en todo caso, la consideración de justificada.

g) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

2. Si por pérdidas o cualquier otra circunstancia la sociedad estuviera en situación de insolvencia, se aplicará lo dispuesto en la legislación concursal. La declaración de concurso de la sociedad no constituye por sí sola causa de disolución; no obstante, si durante la tramitación del concurso se abre la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta.

Artículo 118. Proceso de disolución

1. Cuando concurra cualquiera de las causas de disolución previstas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 1 del artículo anterior, el órgano de administración deberá convocar, en el plazo de treinta días, la asamblea general para que adopte el acuerdo de disolución. Con este fin, cualquier socio podrá requerir al órgano de administración para que convoque la asamblea general, si a su juicio existen algunas de las mencionadas causas de disolución.

2. El acuerdo de disolución, que deberá formalizarse en escritura pública, será adoptado por la asamblea general por más de la mitad de los votos presentes y representados.

3. Si la asamblea no fuera convocada, no se celebrara o no adoptara el acuerdo de disolución o el que fuere necesario para la remoción de la causa de disolución, cualquier socio o tercero con interés legitimo podrá solicitar la

disolución de la cooperativa ante el Juez competente del domicilio social de la misma.

4. El órgano de administración está obligado a solicitar la disolución judicial de la cooperativa cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. La solicitud de disolución habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la asamblea, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la asamblea, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

Artículo 119. Disolución y legislación concursal.

El incumplimiento de lo dispuesto en la legislación concursal en orden a la solicitud del concurso, determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales nacidas a partir del momento en que surja la situación de insolvencia. La responsabilidad de los administradores prescribe a los cuatro años desde que pudo ser ejercitada la acción.

Artículo 120. Inscripción y publicación del acuerdo de disolución.

El acuerdo de disolución o, en su caso, la resolución judicial, deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias y se publicará en uno de los diarios de mayor circulación del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el plazo de treinta días desde que se adoptó el acuerdo o se notificó la resolución.

Artículo 121. Liquidación.

1. La disolución de la cooperativa abre el período de liquidación. La cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante este tiempo deberá añadir a su denominación la expresión "en liquidación".

2. Mientras se esté en liquidación, se seguirán aplicando a la cooperativa las normas previstas para la contabilidad de la sociedad en esta ley. En particular, lo dispuesto sobre las auditorías y, en tanto la liquidación dure más de la fecha prevista para el cierre del ejercicio social, se aplicará lo dispuesto para la aprobación de las cuentas anuales.

3. En este período, la cooperativa podrá participar, hasta la aprobación del balance final de liquidación, en un proceso de fusión o escisión que se regulará por las normas previstas en el capítulo IX de este título.

Artículo 122. Nombramiento de liquidadores.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, o acuerdo de la asamblea general en sentido contrario, los administradores quedarán convertidos en liquidadores. Se aplicarán a los liquidadores las normas previstas para los administradores que no sean incompatibles con lo dispuesto en los siguientes artículos.

2. Si transcurriera un mes desde la disolución de la cooperativa sin que se hubiera efectuado la elección y aceptación del liquidador, cualquier socio podrá solicitar del Juez competente el nombramiento del mismo, que podrá recaer en persona no socia.

3. Durante el período de liquidación se observarán las disposiciones legales y estatutarias en cuanto a la convocatoria y reunión de asambleas generales, que se convocarán por el órgano de liquidación, que las presidirá y dará cuenta de la marcha de la liquidación. La asamblea general podrá acordar lo que convenga al interés común.

4. Los liquidadores, en su caso con la colaboración de los antiguos administradores, presentarán para su aprobación por la asamblea general, en el plazo de tres meses desde la disolución de la sociedad, un balance inicial de liquidación, acompañado de una memoria explicativa del proyecto de liquidación de la sociedad. En el caso que se previera que la liquidación durase más de un año, deberá justificarse este extremo exponiendo los motivos en la citada memoria. Si los liquidadores incumplieran lo previsto en la memoria, sin la previa autorización de la asamblea, cualquier interesado podrá pedir al Juez del domicilio de la cooperativa, el cese y designación de nuevos liquidadores.

Artículo 123.Funciones de los liquidadores.

Corresponde al liquidador o liquidadores de la cooperativa, la gestión y representación de la sociedad en liquidación, y en particular:

a) Velar por la integridad del patrimonio social y llevar la contabilidad de la cooperativa, así como custodiar los libros y la correspondencia de la sociedad.

b) Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la cooperativa.

c) Percibir los créditos y pagar las deudas sociales.

d) Enajenar los bienes sociales.

e) Comparecer en juicio y concertar transacciones cuando convenga al interés social.

f) Adjudicar el haber social a quien corresponda.

Artículo 124. Responsabilidad de los liquidadores. Insolvencia de la sociedad en liquidación.

1. A los liquidadores les resulta de aplicación el régimen de responsabilidad por daños previsto para los administradores.

2. En caso de insolvencia de la cooperativa, el liquidador o liquidadores deberán solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la legislación concursal. En caso de incumplimiento de esta obligación dentro de los plazos previstos en la legislación concursal, los liquidadores responderán solidariamente por las nuevas deudas sociales que surjan a partir de la aparición de la situación de insolvencia.

Artículo 125. Reactivación de la cooperativa.

1. La cooperativa podrá ser reactivada previo acuerdo de la asamblea general, con la mayoría necesaria para la modificación de estatutos, siempre que haya desaparecido la causa que motivó su disolución y no se haya aprobado el balance final de liquidación.

2. El acuerdo de reactivación se elevará a escritura pública y se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, momento a partir del cual surtirá efecto la reactivación.

Artículo 126. Balance final de liquidación.

1. Concluidas las operaciones de liquidación, el liquidador someterá a la aprobación de la asamblea general un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de adjudicación del haber social. Tales documentos serán informados siempre por la intervención de la cooperativa, y, en su caso, por los auditores de cuentas de la cooperativa.

2.Tras su aprobación por la asamblea, el balance final y el proyecto de distribución del haber social, se anunciará su aprobación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor circulación en el Principado de Asturias, estando dicha documentación en el domicilio social a disposición de los socios y terceros con interés legítimo durante los treinta días siguientes a la publicación del último anuncio.

3. En el plazo de cuarenta días a partir de la publicación a la que se refiere el apartado anterior, el acuerdo aprobatorio podrá ser impugnado por los socios que, no habiendo votado a su favor, se sientan perjudicados por el mismo y, también, por los acreedores cuyos créditos no hubieran sido satisfechos o garantizados.

4. En tanto no haya transcurrido el plazo para su impugnación o resuelto por sentencia firme las reclamaciones interpuestas, no podrá procederse al reparto o adjudicación del activo resultante.

Artículo 127. Adjudicación del haber social.

1. No se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, o se haya consignado su importe en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.

2. Una vez satisfechas o garantizadas las deudas anteriores, el resto del haber social se adjudicará según el siguiente orden:

a) Se reintegrará a los socios y, en su caso, a los colaboradores, sus aportaciones al capital una vez liquidadas y actualizadas, comenzando por las aportaciones voluntarias y a continuación las obligatorias.

b) La reserva voluntaria, si la hubiera, se distribuirá entre los socios en proporción a su participación en el capital de la cooperativa.

c) El importe correspondiente al fondo de educación y promoción cooperativa se pondrá a disposición de la entidad pública o privada elegida por acuerdo de la asamblea general para la realización de los fines de la cooperativa. Si no se designase ninguna entidad en particular, se destinará a la unión o federación de cooperativas a la que pertenezca la entidad en liquidación, y, en su defecto, al Consejo Asturiano de la Economía Social para la realización de los mismos fines.

De establecerse estatutariamente la posibilidad de reparto parcial del fondo de reserva obligatorio, el 50 por ciento que reste del mismo, después de efectuadas las operaciones indicadas en este apartado, se repartirá entre los socios atendiendo al tiempo de permanencia, así como a la actividad desarrollada en la entidad.

d) El activo sobrante, si lo hubiere, se destinará a los mismos fines que el fondo de educación y promoción cooperativa, poniéndose a disposición de la misma entidad pública o privada encargada de su realización, y, en caso de no producirse dicha designación, de la unión o federación mencionada, y, en su defecto, del Consejo Asturiano de la Economía Social.

3. Si un socio de la cooperativa en liquidación tiene que incorporarse a otra cooperativa donde le exigen una cuota de ingreso, podrá requerir del haber líquido sobrante, y para el pago de dicha cuota, la parte proporcional que le correspondería en relación al total de socios de la cooperativa en liquidación.

4. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b), los titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción y antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios.

Artículo 128. Extinción. Activo y pasivo sobrevenidos.

1. Finalizada la liquidación, y adjudicado el haber social, los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la cooperativa que contendrá:

a) la manifestación de que el balance final y el proyecto de distribución del haber social han sido aprobados por la asamblea general y publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor circulación del Principado de Asturias,

b) la manifestación de los liquidadores de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final, sin que se hayan formulado impugnaciones, o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto, y

c) la manifestación de que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos, y a la adjudicación del haber social de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores.

A la escritura pública se incorporará el balance final de liquidación y la relación de los socios y, en su caso, de los socios colaboradores, haciendo constar su identidad e importe de la cuota de liquidación que les hubiere correspondido a cada uno.

La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, y en ella el liquidador deberá solicitar la cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida, depositando, asimismo, en dicha dependencia los libros y documentación social, que se conservarán durante un período de seis años.

2. En caso de deudas sobrevenidas una vez cancelada la inscripción de la cooperativa, los antiguos socios y, en su caso, socios colaboradores, responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, si su responsabilidad por las deudas sociales era limitada; y ello sin perjuicio de la responsabilidad del liquidador en caso de dolo o culpa.

3. En caso de activo sobrevenido se repartirá por los antiguos liquidadores entre los antiguos socios y socios colaboradores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127. Si transcurren tres meses desde su aparición sin que hubiera resultado adjudicado dicho activo, cualquier interesado podrá solicitar del Juez competente del domicilio que designe, previa audiencia de los antiguos liquidadores, un nuevo liquidador.

TÍTULO IV
COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO, GRUPO COOPERATIVO Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO I
COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO

Artículo 129. Objeto.

1. La cooperativa de segundo o ulterior grado tiene por objeto completar, promover, coordinar, reforzar o integrar la actividad económica de las entidades miembros y del grupo resultante en el sentido y con la extensión o alcance que establezcan los estatutos.

2. Los estatutos deberán incluir la enumeración de las facultades esenciales que, por ser precisas para el desarrollo de aquel objeto, quedan transferidas a los órganos de dicha cooperativa. Cuando la cooperativa se constituya con fines de integración empresarial, los estatutos determinarán las áreas de actividad empresarial integradas, las bases para el ejercicio de la dirección unitaria del grupo y las características de éste.

Los estatutos regularán, además, las materias o áreas respecto de las cuales las propuestas de las entidades asociadas serán meramente indicativas, y no vinculantes, para la cooperativa de segundo o ulterior grado. En caso de duda al respecto se presumen transferidas a esta cooperativa todas las facultades directamente relacionadas con su objeto social, teniendo prioridad los acuerdos e instrucciones de la misma frente a las decisiones de cada una de las entidades agrupadas.

Artículo 130. Socios y aportaciones al capital social.

1. Podrán ser miembros de pleno derecho de estas sociedades, además de las cooperativas de grado inferior y los socios de trabajo, cualesquiera entidades y personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre que exista la necesaria convergencia de intereses o necesidades y que los estatutos no lo prohíban. En ningún caso el conjunto de estas últimas entidades podrá ostentar más de la mitad del total de los votos existentes en la cooperativa de segundo o ulterior grado, si bien los estatutos podrán establecer un límite inferior.

2. La admisión de cualquier socio persona jurídica requerirá acuerdo favorable del consejo rector por mayoría de al menos dos tercios de los votos presentes y representados, salvo previsión de otra mayoría en los estatutos. El socio persona jurídica que pretenda darse de baja habrá de cursar un preaviso de al menos un año, y antes de su efectiva separación estará obligado a cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de segundo o ulterior grado o a resarcirla económicamente, si así lo decide el órgano de administración de ésta. Asimismo, salvo previsión estatutaria en contra, la entidad separada deberá continuar desarrollando, durante un plazo no inferior a dos años, aquellos compromisos adquiridos que hubiera asumido con anterioridad a la fecha de la baja.

3. Las aportaciones obligatorias al capital social de una cooperativa de segundo o ulterior grado se realizarán en función de la actividad cooperativa comprometida con aquélla por cada socio, siendo los estatutos sociales los que fijarán los criterios para definir las mismas. La distribución de resultados, tanto si son positivos como si registran pérdidas, se acordará en función de la actividad cooperativa comprometida estatutariamente, después de haber realizado la imputación que proceda a los fondos de reserva y, en su caso, al fondo de educación y promoción cooperativa.

Artículo 131. Órganos sociales.

1. La asamblea general estará formada por un número de representantes legales de los socios personas jurídicas proporcional al derecho de voto de cada entidad social y, en su caso, por los representantes de los socios de trabajo de acuerdo a los estatutos. A su vez, el derecho de voto de las entidades será proporcional a la participación en la actividad cooperativa o al número de socios. El número de votos de una entidad que no sea sociedad cooperativa no podrá ser superior a un tercio de los votos sociales, salvo que hubiese menos de cuatro socios.

2. Las cooperativas de segundo o ulterior grado serán administradas por un consejo rector,

que tendrá un número mínimo de tres y un número máximo de quince miembros, y en él estarán representadas, directa o indirectamente, todas las entidades socias. Si éstas fuesen más de quince, las que tengan menor número de votos deberán agruparse a efectos de designar sus representantes, observando las previsiones estatutarias o reglamentarias internas al respecto. El derecho de voto en el seno del consejo podrá ser proporcional a la actividad cooperativa o al número de socios de la entidad o entidades a las que representan los Consejeros, con el límite señalado para la asamblea general. Los estatutos podrán prever que hasta un tercio de los miembros del consejo rector puedan ser designados, por los rectores electos, entre personas capacitadas que podrán ser o no miembros de alguna cooperativa del grupo.

Artículo 132. Disolución.

En caso de disolución con liquidación de una cooperativa de segundo o ulterior grado, el activo sobrante será distribuido entre los socios en proporción al importe del retorno percibido en los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución. En su defecto, se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en la actividad cooperativa o, en su caso, al número de miembros de cada entidad agrupada en aquella cooperativa.

Artículo 133. Regulación.

En lo no previsto en los artículos anteriores, se estará a lo establecido en los estatutos y en el reglamento de régimen interno y, en su defecto, en cuanto lo permita la específica función y naturaleza de las cooperativas de segundo o ulterior grado, a lo establecido en la presente ley sobre cooperativas de primer grado.

CAPÍTULO II

GRUPO COOPERATIVO

Artículo 134. Definición.

1. Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta ley, el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades.

2. La emisión de instrucciones podrá afectar a distintos ámbitos de gestión, administración o gobierno, entre los que podrían incluirse:

a) El establecimiento en las cooperativas de base de normas estatutarias y reglamentarias comunes.

b) El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.

c) Compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su respectiva evolución empresarial o cuenta de resultados.

3. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito, sea en los estatutos de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o mediante otro documento contractual que necesariamente deberá incluir:

a) la duración del mismo, caso de ser limitada,

b) el procedimiento para su modificación,

c) el procedimiento para la separación de una sociedad cooperativa, y

d) las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo.

La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados podrá efectuarse, si así se ha establecido, mediante acuerdo del órgano máximo de la entidad cabeza de grupo. El documento contractual deberá elevarse a escritura pública.

4. La responsabilidad derivada de las operaciones, que realicen directamente con terceros las sociedades cooperativas integradas en un grupo, no alcanzará al mismo, ni a las demás sociedades cooperativas que lo integran, salvo prueba de que su actuación responde al cumplimiento de las instrucciones recibidas de observancia obligatoria que redunde en interés de todos, parte o de alguno del resto de socios del grupo, en cuyo caso serán responsables solidariamente todas aquellas entidades en cuyo interés se hubiera obrado.

Artículo 135. Integración.

1. La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo precisará el acuerdo inicial de cada una de las entidades de base, conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento.

2. El acuerdo de integración en un grupo se anotará en la hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

CAPÍTULO III
OTRAS FORMAS DE COLABORACION ECONOMICA

Artículo 136. Otras formas de colaboración económica.

1. Las cooperativas de cualquier clase podrán constituir sociedades, agrupaciones, consorcios y uniones entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y formalizar convenios o acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses.

2. Las cooperativas que concentren sus empresas por fusión o por constitución de otras cooperativas de segundo grado, así como mediante uniones temporales, disfrutarán de todos los beneficios otorgados en la legislación sobre agrupación y concentración de empresas.

3. Las cooperativas podrán suscribir con otras acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios en la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma consideración que las operaciones cooperativizadas con los propios socios.

TÍTULO V
CLASES DE COOPERATIVAS

Artículo 137. Disposiciones generales.

1. Las sociedades cooperativas se ordenan, en atención a la finalidad perseguida y al concreto objeto de la actividad desarrollada, en las siguientes clases:

a) cooperativas de trabajo asociado,
b) cooperativas de consumidores y usuarios,
c) cooperativas de viviendas,
d) cooperativas agrarias,
e) cooperativas de explotación comunitaria de la tierra,
f) cooperativas de servicios,
g) cooperativas del mar,
h) cooperativas de transportistas,
i) cooperativas de seguros.
j) cooperativas de crédito,
k) cooperativas sanitarias,
l) cooperativas de enseñanza,
m) cooperativas sin ánimo de lucro,
n) cooperativas integrales, y
ñ) cooperativas mixtas.

2. Las cooperativas que deban constituirse con arreglo a esta ley, se regirán en primer lugar, por las disposiciones de este título específicamente aplicables a la clase de cooperativa a la que pertenezcan y, en lo no previsto, por las normas generales establecidas en los otros títulos de esta ley.

En todo caso, si una cooperativa no se ajustase directamente a ninguna de las clases específicamente contempladas, se regirá, en lo que resulte necesario, por las disposiciones de la clase con la que guarde mayor analogía.

3. Las clases de cooperativas previstas en este título no son excluyentes e incompatibles entre sí. Aun cuando toda sociedad cooperativa deba ser ubicada principalmente dentro de una clase concreta y sujetarse a su regulación específica, ello no impedirá la aplicación de las normas destinadas a otra clase que fueren compatibles en atención a las finalidades perseguidas o su estructura económico-social.

Asimismo, cuando el objeto social de una cooperativa comprenda actividades propias de distintas clases, se regirá prioritariamente por las normas específicas de la actividad principal.

4. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de cooperativas, podrá desarrollar reglamentariamente el régimen de las distintas clases previstas así como establecer las normas específicas necesarias para desarrollar otras actividades en régimen de cooperativa constitutivas de nuevas clases de cooperativas.

CAPÍTULO I
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Artículo 138. Objeto y actividad cooperativizada.

1. Son cooperativas de trabajo asociado las que agrupan a personas físicas que realizan

cualquier actividad económica o profesional de producción de bienes o servicios destinados a terceros, como fórmula de autoempleo colectivo.

2. La actividad cooperativizada será la realizada por los socios trabajadores y los trabajadores no socios de la cooperativa, entendiéndose los resultados y rendimientos de los mismos como cooperativos, en los términos señalados por el artículo 97.

Artículo 139. Socios. Disposiciones generales.

1. Podrán ser socios trabajadores quienes tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo de acuerdo con la normativa laboral y, en su caso, la legislación específica en materia de extranjería. No obstante, los menores de edad o incapaces necesitarán el complemento de capacidad legalmente exigible.

Los socios trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellos que la normativa estatal haya declarado insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para la salud del trabajador menor de edad como para su formación profesional o humana.

2. Se entenderá a todos los efectos que el socio inicia la actividad cooperativizada cuando comience efectivamente la prestación de trabajo.

3. A los efectos de la Seguridad Social, los socios trabajadores estarán asimilados a trabajadores por cuenta ajena o a trabajadores autónomos. Los estatutos deberán necesariamente contener la opción entre el régimen general y cualquiera de los regímenes especiales según lo previsto en las normas relativas a Seguridad Social.

4. La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa, sin que se posean otros derechos frente a la misma distintos a los propios de la condición de socio.

Artículo 140. Socios a prueba.

1. Los estatutos podrán fijar un período de prueba para los socios que no podrá exceder de seis meses, salvo en el caso de técnicos titulados en que podrá extenderse a un año. Cualquiera de las partes podrá rescindir libremente la relación durante este período.

2. Los socios a prueba tendrán los derechos y obligaciones propios de los socios, y en particular los derechos de voz e información, con las excepciones siguientes:

No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos societarios.

No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de ingreso.

No les alcanzará la imputación de pérdidas, ni participarán en los excedentes más allá de los anticipos que hubieran percibido.

3. Aunque los estatutos prevean un período de prueba para los socios trabajadores, no procederá establecerlo cuando el nuevo socio hubiera desempeñado para la cooperativa las mismas funciones con anterioridad como trabajador por cuenta ajena.

Artículo 141. Socios temporales.

1. En las cooperativas de trabajo asociado podrán integrarse socios con el carácter de temporales cuando el objeto de su prestación sea realizar una actividad superior a la que se venía desarrollando en la cooperativa a causa de un encargo concreto o un contrato de duración determinada, por un período igual o superior a seis meses.

2. La cooperativa llevará, además de los libros exigidos en el artículo 102, un libro específico para estos socios en el que constará la causa específica a la que se anuda la condición de socio temporal.

3. Los socios temporales tendrán en la cooperativa en la que se integren el mismo estatuto jurídico que los socios ordinarios, con las siguientes particularidades:

a) Una vez finalizado o resuelto el encargo o contrato que motivó la integración y, en su caso, las sucesivas prórrogas, perderán dicha condición, siéndoles de aplicación lo dispuesto en los artículos 35 y 36 sobre la baja obligatoria de los socios cuando dejan de reunir las cualidades objetivas para mantener su condición.

b) En cualquier caso, nadie podrá pertenecer a una cooperativa a título de socio temporal por un plazo superior a tres años ininterrumpidos, a cuyo término causará baja en la entidad en las condiciones establecidas en el apartado anterior, o devendrá socio ordinario.

c) Sólo podrá exigirse a los socios temporales que realicen aportaciones al capital social en el supuesto de que el contrato que motive su incorporación se extienda, al menos, a dos años. En dicho supuesto, el valor de la aportación exigible al socio temporal no superará en ningún caso el 25 por ciento del importe de la aportación obligatoria del socio ordinario. El plazo de devolución de dichas aportaciones no excederá de un año desde que se produzca la baja en la entidad.

d) Los socios temporales tendrán, en todo caso, derecho a percibir, con carácter mensual, anticipos societarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143.

e) Los socios temporales tendrán derecho en sus respectivas cooperativas al sufragio activo y pasivo para la elección de los órganos sociales, mientras detenten la condición de socio.

f) Los estatutos sociales o el acuerdo social de incorporación podrán establecer reglas de ponderación del voto entre los socios temporales y los ordinarios. Cuando las expresadas reglas las establezca el órgano de administración, deberán ser ratificadas o modificadas, en su caso, por la primera asamblea general, provocando la modificación estatutaria correspondiente.

g) En cualquier caso, el conjunto de votos de los socios temporales, no podrá representar más del 33 por ciento de la suma de los correspondientes a los socios ordinarios.

Artículo 142. Estatuto profesional.

1. La relación de los socios trabajadores con la cooperativa tendrá exclusivamente carácter societario, siendo su estatuto profesional, en consecuencia, el establecido en la presente ley y en los estatutos sociales o, en su caso mediante un reglamento de régimen interno, que deberá aprobarse en asamblea general por una mayoría de dos tercios de votos de los asistentes.

2. En el estatuto profesional deberá regularse, como mínimo, las materias que a continuación se detallan:

a) la forma de organización de la prestación del trabajo,

b) la movilidad funcional y geográfica,

c) la clasificación profesional,

d) el régimen de fiestas, vacaciones y permisos,

e) la jornada, turnos y descanso semanal,

f) las causas de suspensión o extinción de la prestación laboral,

g) los anticipos societarios y

h) la disciplina laboral, de acuerdo con el artículo 144.

En cualquier caso, la regulación que se haga de la jornada, descanso semanal, fiestas, vacaciones y permisos respetará los mínimos establecidos en la legislación estatal de cooperativas. Asimismo, serán de plena aplicación las reglas sobre reducciones de jornada por razones familiares, suspensiones por riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción y acogimiento establecidas en la legislación vigente para los trabajadores asalariados.

3. La asamblea general, por mayoría de dos tercios, podrá acordar la modificación del estatuto profesional. En tal caso, el socio disconforme podrá solicitar al órgano de administración su baja en el plazo de un mes desde la efectiva aplicación de la modificación, que tendrá el tratamiento de baja voluntaria justificada.

4. En ausencia de regulación cooperativa, se aplicará, supletoriamente, lo establecido en la normativa laboral común.

Artículo 143. Anticipos societarios.

Los socios trabajadores tendrán derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa denominadas anticipos societarios, que no tienen la consideración de salario, según su participación en la actividad cooperativizada. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.3, en el caso de que una cooperativa de trabajo asociado mantenga más del 80 por ciento de su facturación anual con un único cliente o con un único grupo de empresas, el anticipo societario garantizado al socio en cómputo anual deberá ser equivalente al salario medio de la zona, sector y categoría profesional correspondientes.

Artículo 144. Disciplina de la prestación de trabajo.

1. Los estatutos o el reglamento de régimen interno aprobado por la asamblea general deberán establecer los tipos de faltas que

pueden producirse en la prestación del trabajo, así como las diferentes sanciones, los órganos y las personas con facultades sancionadoras delegadas. También regularán el procedimiento sancionador, con expresión de los trámites, plazos y recursos.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la expulsión de los socios trabajadores sólo podrá ser acordada por el órgano de administración, contra cuya decisión el socio podrá recurrir, en el plazo de quince días desde la notificación, ante el comité de recursos, que resolverá en el plazo de dos meses, o ante la asamblea general, que resolverá en la primera asamblea que se convoque. Transcurrido dicho plazo sin haber adoptado la decisión, se entenderá estimado el recurso. El acuerdo de expulsión sólo será ejecutivo desde que sea ratificado por el correspondiente órgano o cuando haya transcurrido el plazo para recurrir ante el mismo, aunque el órgano de administración podrá suspender al socio trabajador en su empleo, conservando éste todos sus derechos económicos.

Artículo 145. Prevención de riesgos laborales.

1. Serán aplicables a los socios trabajadores, con carácter inderogable, la legislación de prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo, con las precisiones establecidas en sus reglamentos de régimen interno en aquellos aspectos en que la norma estatal haya previsto su aplicación.

2. El procedimiento para la designación de los delegados de prevención en las sociedades cooperativas deberá estar previsto en sus estatutos o ser objeto de acuerdo en asamblea general.

A los efectos de determinar su número, cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, en la sociedad cooperativa existan trabajadores asalariados se computarán ambos colectivos. En este caso, la designación de los delegados de prevención se realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de éstos.

Artículo 146. Suspensión de la relación de trabajo.

1. En las cooperativas de trabajo asociado se suspenderá temporalmente la obligación y el derecho del socio trabajador a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicas correspondientes a dicha prestación, por las siguientes causas:

a) Incapacidad temporal.

b) Maternidad o paternidad, adopción o acogimiento de menores.

c) Privación de libertad del socio trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.

d) Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o desempeñado en el movimiento cooperativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

e) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como situaciones de fuerza mayor temporal.

f) Las consignadas válidamente en los estatutos sociales.

2. Para la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor, la asamblea general, salvo previsión estatutaria, deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión la totalidad o parte de los socios trabajadores que integran la cooperativa, así como el tiempo que ha de durar la suspensión, designando los concretos socios trabajadores que deban quedar en situación de suspensión.

3. Los socios trabajadores incursos en los supuestos a), b), c) y e) del apartado 1, mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus derechos y obligaciones como socio.

Los socios trabajadores en excedencia, mientras permanezcan en dicha situación, tendrán los derechos establecidos en la presente ley para los socios excepto el derecho a percibir anticipos y retornos, el derecho al voto y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos sociales, debiendo guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos que puedan perjudicar los intereses sociales de la cooperativa. Si durante el tiempo en que estén en situación de suspensión, la asamblea general acordara la realiza-

ción de nuevas aportaciones obligatorias, estarán obligados a realizarlas.

4. En los supuestos a), b), c), d) y f) del apartado 1, las cooperativas de trabajo asociado, para sustituir a los socios trabajadores en situación de suspensión, podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con trabajadores asalariados en los que conste la persona a la que se sustituye y la causa que lo motiva. Estos trabajadores asalariados no serán computables a efectos del porcentaje a que se refiere el apartado 1 del artículo 151.

Artículo 147. Cese de las causas de suspensión.

Al cesar las causas legales de suspensión, el socio trabajador recobrará la plenitud de sus derechos y obligaciones como socio, con derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado.

Artículo 148. Excedencia voluntaria.

1. Los estatutos o el reglamento de régimen interno podrán prever la posibilidad de conceder a los socios trabajadores excedencias voluntarias con la duración máxima que se determine por el órgano de administración. La excedencia voluntaria también podrá ser acordada por la asamblea general, salvo que existiese una limitación prevista en las disposiciones referenciadas.

2. La situación de los socios trabajadores en situación de excedencia voluntaria se ajustará a las siguientes normas:

a) no tendrán derecho a la reincorporación automática, sino un derecho preferente a reingresar en la cooperativa si hubiera en ella al finalizar la excedencia, o se produjera con posterioridad, un puesto de trabajo vacante igual o similar al que tenían en origen y

b) sus demás derechos y obligaciones serán los establecidos en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 146 para los socios trabajadores en excedencia forzosa.

Artículo 149. Causas de baja obligatoria.

1. Cuando por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como las derivadas de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa sea preciso reducir con carácter definitivo el número de socios trabajadores a criterio de la asamblea general, ésta, en votación secreta, designará a los que, concretamente, deberán causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de obligatoria y justificada.

2. Las expresadas causas serán debidamente constatadas por la autoridad laboral, con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento establecido en la legislación estatal aplicable.

3. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en el apartado 1 tendrán derecho a la devolución de su aportación social en el plazo de un año, salvo que los estatutos, desde la constitución de la cooperativa o con una antelación no inferior a dos años a la fecha de las mencionadas bajas obligatorias, hubieran establecido expresamente que no sea de aplicación este plazo especial de reembolso de las aportaciones.

Ello no obstante, en caso de que los socios cesantes sean titulares de las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) y la cooperativa no acuerde su devolución inmediata, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones inmediatamente en los términos que acuerde la asamblea general.

Artículo 150. Sucesión de empresas.

1. Cuando una cooperativa se subrogue en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, en aplicación del artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores afectados por esta subrogación tendrán la opción de incorporarse como socios trabajadores, siempre que así lo acuerden con la cooperativa y que superen el correspondiente período de prueba. Dicho período se regirá por lo establecido en el artículo 140.

En el acuerdo, que deberá constar por escrito, se especificará si la nueva relación mercantil sustituye a la laboral anterior o si esta última simplemente se suspende hasta la fecha en que finalice el período de prueba pactado, reanudándose sus efectos en el caso de no consolidarse la condición de socio trabajador.

2. Cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciese cargo de éstas, los socios trabajadores que vinieran desarrollando su actividad en las mismas tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido de acuerdo con la normativa vigente, como si hubiesen prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 151. Trabajadores asalariados de la cooperativa.

1. El número de horas realizadas por trabajadores asalariados no podrá ser superior, en cómputo anual, al 30 por ciento del total de horas realizadas por los socios trabajadores. No se computarán en este porcentaje las realizadas por:

a) Los integrados en la cooperativa mediante subrogación legal.

b) Los que presten servicios en centros de trabajo de carácter subordinado o accesorio. Se entenderá como trabajo prestado en centro subordinado o accesorio el realizado directamente para una Administración Pública o entidad que coadyuve al interés general cuando sea realizado en locales o espacios de titularidad pública.

c) Los que sustituyan a socios trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, así como a los que estén ejercitando un cargo público o en excedencia.

d) Los que sustituyan a trabajadores asalariados que hayan interrumpido la prestación de servicios con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

e) Los que formalicen un contrato en prácticas o para la formación.

f) Los contratados conforme a disposiciones de fomento del empleo.

g) Los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de empresas usuarias cuando la cooperativa actúa como empresa de trabajo temporal.

h) Los que reuniendo los requisitos establecidos al efecto se negaren explícitamente a ser socios trabajadores.

2. Los estatutos podrán determinar el procedimiento por el que los trabajadores asalariados puedan acceder a la condición de socios. En todo caso, cuando la cooperativa de trabajo asociado rebase el límite establecido en el apartado anterior, los trabajadores con contrato indefinido y dos años de antigüedad deberán ser admitidos como socios trabajadores si así lo solicitan dentro de un plazo de seis meses, siempre que reúnan los demás requisitos y condiciones estatutarias. No procederá establecer un período de prueba a los que accedan a la condición de socio trabajador conforme a lo establecido en este precepto.

CAPÍTULO II

COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Artículo 152. Objeto.

1. Son cooperativas de consumidores y usuarios aquéllas que tienen por objeto el suministro de bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí mismas, para uso o consumo de los socios y de quienes con ellos conviven, así como la educación, formación y defensa de los derechos de sus socios en particular y de los consumidores y usuarios en general.

2. Pueden ser socios de estas cooperativas, las personas físicas y las entidades u organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales.

CAPÍTULO III

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS

Artículo 153. Objeto.

1. Son aquellas que tienen por objeto procurar a precio de coste, exclusivamente a sus socios, viviendas o locales, edificaciones e instalaciones complementarias, tanto nuevas como rehabilitadas. Asimismo pueden tener como objeto, incluso único, mejorar, conservar y administrar dichos inmuebles y los elementos comunes; crear y prestar servicios comunes a dichas edificaciones y a sus socios.

Las cooperativas de viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos, y en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

2. En consecuencia, podrán ser socios de estas cooperativas las personas físicas que

necesiten alojamiento para sí o sus familiares, así como los entes públicos y entidades sin ánimo de lucro mercantil que precisen alojamiento para sus empleados o que precisen locales para desarrollar sus actividades. Cuando así lo prevean los estatutos, podrán igualmente ser socios las personas que cofinancien la vivienda o local, segundos aportantes, pero poseyendo entre ellas un voto por vivienda que ejercerá la persona que hayan decidido de común acuerdo y comunicado al consejo rector.

Las cooperativas de viviendas necesariamente adoptarán la forma de consejo rector como órgano de administración.

3. Las viviendas y locales promovidos por la cooperativa podrán, mediante cualquier título admitido en derecho, ser adjudicadas en propiedad a los socios o cedidos a los mismos para su uso y disfrute por ellos o sus familiares, con parentesco de hasta tercer grado, ya sea de forma habitual, ya sea para descanso o vacaciones, ya sea como residencia de personas mayores o discapacitadas. Cuando la cooperativa retenga la propiedad de las viviendas o locales, los estatutos establecerán las normas a que han de ajustarse tanto el uso o disfrute por los socios o sus familiares como los demás derechos y obligaciones de estos y de la cooperativa, pudiéndose prever la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute con socios de otras cooperativas de viviendas que tengan establecida esta posibilidad. En el supuesto de viviendas de protección pública en la modalidad de alquiler con opción de compra, cuando la vivienda vaya a ser disfrutada por el familiar del socio, de acuerdo con lo establecido anteriormente, la cooperativa suscribirá el contrato de alquiler con opción de compra no con el socio sino con dicho familiar, que deberá reunir los requisitos exigidos en la legislación especial de viviendas protegidas.

4. Las cooperativas de viviendas podrán enajenar o arrendar a terceros no socios, los locales comerciales y las instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad. La asamblea general acordará el destino del importe obtenido por la enajenación o arrendamiento de los mismos. Excepcionalmente, en el caso de que, una vez finalizada la promoción y adjudicación de las viviendas a los socios, quedara alguna sin adjudicar, podrá ser adjudicada a una tercera persona no socia siempre que cumpla las condiciones objetivas que fijen los estatutos sociales y las específicas señaladas en los mismos para adquirir la condición de socio, y siempre que las viviendas a adjudicar no supongan más del 30% del conjunto de viviendas de la promoción. Dicha enajenación deberá ser sometida a comunicación del Registro de Cooperativas. El incumplimiento de esta obligación de comunicación será causa de responsabilidad de los miembros del Consejo Rector, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 154. Ámbito geográfico.

Las cooperativas de viviendas asturianas sólo podrán realizar promociones dentro del ámbito geográfico establecido estatutariamente, que no podrá exceder del territorio del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.

Artículo 155. Disposiciones específicas sobre los socios.

1. Son causas de baja justificada de los socios de las cooperativas de vivienda, además de las generales previstas en esta ley y en los estatutos, las siguientes:

a) Los cambios del centro o lugar de trabajo del socio a un municipio alejado más de cuarenta kilómetros del emplazamiento de la promoción.

b) Las situaciones de desempleo, grave enfermedad u otra severa circunstancia familiar o personal que impidan hacer efectivas las aportaciones comprometidas en la promoción.

c) Un aumento superior al 20 por ciento de la cuantía total de las aportaciones previstas por la cooperativa en el plan de financiación de la vivienda.

d) Un retraso en la entrega de las viviendas que supere los dieciocho meses a la fecha prevista por la cooperativa o en todo caso que hubiera transcurrido al menos cinco años desde que el socio se inscribió en la cooperativa o en su caso en la promoción. En caso de baja no justificada el consejo rector podrá acordar las deducciones que se establezcan estatutariamente y que no podrán ser superiores al 20 por

ciento de las cantidades entregadas por el socio en concepto de capital y al 5 por ciento de las cantidades entregadas por el mismo para financiar el pago de las viviendas y locales.

2. Las cantidades a que se refiere el último párrafo del apartado anterior, así como las aportaciones del socio al capital social, deberán reembolsarse a éste en el momento en que sea sustituido en sus derechos y obligaciones por otro socio o por un tercero no socio cuya subrogación en la posición de aquel sea válida o, en todo caso, en el plazo de tres años y si la baja fuese justificada, en el plazo máximo de dieciocho meses. Este plazo se reducirá a un año a favor de los herederos o legatarios del socio fallecido. En cuanto a los intereses por las cantidades aplazadas se aplicará lo establecido en el artículo 90.

3. Cuando las viviendas se construyan para su adjudicación en propiedad, al concluir la recepción definitiva de las mismas, dentro de una fase o promoción y los socios adscritos a la misma estén al día en todos sus compromisos y obligaciones, tanto en los específicos de la fase como en la parte proporcional de las cargas comunes que les sean imputables, de acuerdo con los estatutos y el reglamento de régimen interno, tendrán derecho a pedir la adjudicación de las viviendas y a causar baja justificada en la cooperativa, con un preaviso no superior a tres meses.

En cualquier caso, el consejo rector podrá promover la baja obligatoria justificada de los socios de una determinada fase cuyas viviendas y locales hubieran sido adjudicadas, previa liquidación de los derechos económicos financiados con sus aportaciones, y siguiendo el procedimiento previsto en los estatutos conforme a lo establecido en los artículos 35 y 36.

4. Cuando la cooperativa no tuviera viviendas o locales en promoción, habiendo adjudicado las mismas a sus socios, y gestione únicamente servicios comunes a los inmuebles, el consejo rector podrá dar de baja de oficio a los socios que hubieran transmitido la propiedad de sus viviendas o locales, adquiriendo los nuevos propietarios la condición de socios siempre que lo soliciten conforme a lo establecido en el artículo 22, quedando subrogados los mismos en los derechos y obligaciones de los socios a los que sustituyan.

Artículo 156. Construcciones por fases o promociones.

1. Si la cooperativa de viviendas desarrollase más de una promoción o fase separada, por acuerdo del consejo rector, que deberá ser ratificado en la primera asamblea general que se celebre e inscrito en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, con indicación de la localización prevista, estará obligada a dotar a cada una de ellas, incluida la promoción inicial no terminada, de autonomía de gestión y de un patrimonio separado, para lo que deberá contar con una contabilidad independiente para cada fase o promoción, sin perjuicio de la general de la cooperativa, individualizando todos los justificantes de cobros o pagos que no sean generales. Cada fase se identificará con una denominación específica que deberá figurar de forma clara y destacada en toda la documentación relativa a la misma, incluidos permisos o licencias administrativas y cualquier contrato celebrado. En la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos o solares se hará constar la fase a la que están destinados, y si ese destino se acordase con posterioridad a su adquisición se hará constar por nota marginal a solicitud del representante de la cooperativa.

2. Deberán constituirse por cada fase juntas especiales de socios, cuya regulación deberá contener los estatutos, siempre respetando las competencias propias de la asamblea general sobre las operaciones y compromisos comunes de la cooperativa y sobre lo que afecte a más de un patrimonio separado o a los derechos u obligaciones de los socios no adscritos a la fase respectiva. La convocatoria de las juntas se hará en la misma forma que las de las asambleas generales.

En el libro de socios de la cooperativa, legalizado por el Registro, se deberá anotar la promoción en la que está incluido el socio. La junta especial será presidida conforme a lo previsto para las juntas preparatorias de la asamblea de delegados. Para documentar los acuerdos deberá existir un libro de actas legalizado por el

Registro. Si los estatutos lo prevén, las juntas especiales actuaran como juntas preparatorias.

3. Los bienes y derechos que integren el patrimonio debidamente contabilizado de una determinada promoción o fase separada no responderán de las deudas de las restantes.

4. En el momento de alcanzarse el 80 por ciento de los socios previstos para la promoción, el consejo rector deberá convocar una junta especial con el objeto de ratificar o en su caso modificar las normas de la promoción y designar asimismo un representante de la promoción en el consejo rector, como vocal, cuando ninguno de los miembros de este órgano forme parte de la promoción. Los estatutos tendrán prevista esta circunstancia, sin que la limitación del número máximo de miembros del consejo rector dispuesta en el artículo 69 sea de aplicación en este supuesto.

Artículo 157. Auditoría.

Las cooperativas de viviendas, antes de presentar las cuentas anuales para su aprobación a la asamblea general, deberán someterlas a auditoría, en los ejercicios económicos en que se produzca alguno de los siguientes supuestos:

a) Que la cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a veinte.

b) Cualquiera que sea el número de viviendas y locales en promoción, cuando correspondan a distintas fases, o cuando se construyan en distintos bloques que constituyan, a efectos económicos, promociones diferentes.

c) Que la cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas, distintas de los miembros del consejo rector.

d) Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.

e) Cuando concurran los demás supuestos previstos en el artículo 104.

Artículo 158. Garantías especiales.

1. Los estatutos de las cooperativas de vivienda deberán incluir al menos las siguientes medidas de participación, información y control por parte de los socios:

a) ámbito geográfico de actuación cooperativa, que no podrá ser superior al del Principado de Asturias,

b) la obligatoriedad de garantizar mediante aval o seguro las cantidades que los socios entreguen a la cooperativa para financiar la construcción de las viviendas. En el momento en que los socios comiencen a entregar dichas cantidades, las viviendas deberán estar aseguradas o avaladas,

c) la convocatoria de todas las asambleas generales, salvo las universales, por un medio que asegure la recepción de la convocatoria por los socios con una anticipación no inferior a quince días hábiles,

d) determinación de la minoría de socios de una promoción o, en su caso, de la cooperativa, entre el 20 y el 40 por ciento, que podrá solicitar motivadamente, con cargo a la cooperativa y una vez al año, la elaboración de un informe por consultores externos, en las áreas urbanísticas, financiera, jurídica, cooperativa o cualquier otra relevante para el mejor desarrollo del objeto social de la entidad. Tales expertos no podrán ser socios ni estar vinculados directa o indirectamente con ellos ni con los administradores independientes, auditores, apoderados, gestores y profesionales con los que la cooperativa haya contratado cualesquiera prestaciones o servicios necesarios para la promoción de las viviendas, pudiendo ser auxiliados a este fin por el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

e) establecimiento y regulación en las promociones de doscientas o más viviendas, de sendos comités, financiero y de obras para el seguimiento de las actividades de la cooperativa en ambas vertientes, debiendo evacuar informe en la correspondiente junta especial cuando en el desarrollo de la promoción adviertan modificaciones sustanciales sobre los proyectos arquitectónicos o financieros iniciales. En las promociones con más de cien viviendas y menos de doscientas, deberán constituirse un solo comité que asumirá ambas funciones, y

f) la incompatibilidad para desempeñar simultáneamente el cargo de miembro del consejo rector en otra cooperativa de viviendas, así como que el ejercicio del cargo será gratuito, sin

perjuicio de su derecho a ser resarcido por los gastos que se le originen.

2. Con carácter previo al ingreso de cantidades por los socios para financiar la promoción a la que estén adscritos, ésta deberá estar definida y dotada de unas reglas básicas denominadas "normas de la promoción" que tendrá como contenido mínimo el siguiente:

a) la denominación específica de la promoción,

b) el concejo, la localización dentro del mismo y extensión aproximada de los terrenos sobre los que se edificarán las viviendas, ordenanza que les afecte, y en sus caso indicación de la existencia de superficie comercial o de otros usos diferentes al residencial,

c) el tipo constructivo o clase de viviendas a promover,

d) en su caso, el régimen de protección oficial al que se pretendan acoger las viviendas con la cita de las normas jurídicas reguladoras,

e) el estudio financiero previsto para el desarrollo de la promoción,

f) el calendario previsto de actuaciones que señalará los hitos más relevantes de la promoción: adquisición de terrenos; aprobación del planeamiento correspondiente; urbanización de los terrenos; obras de edificación y su finalización,

g) requisitos y formalidades exigidas a los socios, así como compromisos económicos y calendario de ingresos a efectuar por los mismos,

h) el sistema de elección de las viviendas, locales y anexos por los socios, e

i) la eventual existencia de compromisos previos de la cooperativa con terceras personas o empresas, indicando, en su caso, los términos más importantes de los acuerdos, como las funciones a desarrollar, y los parámetros fijados para su retribución.

Artículo 159. Transmisión de derechos.

Los estatutos podrán regular los derechos de tanteo y retracto de la cooperativa en el supuesto de transmisión de la propiedad de las viviendas a personas que no sean socios. El período para ejercer dichos derechos, en todo caso, no podrá ser superior a cinco años desde la elevación a escritura pública de la transmisión de la vivienda.

Artículo 160. Socios no adscritos a ninguna promoción.

De acuerdo con los estatutos, en la cooperativas de vivienda podrá existir socios no adscritos a una promoción, que tendrán de modo general los derechos y obligaciones que se prevean en los estatutos de acuerdo con lo establecido en esta ley para los socios inactivos; además, específicamente tendrán derecho preferente para adscribirse a las nuevas promociones que se pudieran iniciar, y en las promociones ya iniciadas y completas sólo tendrán derecho a sustituir a un socio que pretenda darse de baja en la promoción o en la cooperativa si así lo establecen los estatutos, garantizándose en todo caso la preferencia de los descendientes y ascendientes del transmitente, así como del cónyuge separado o divorciado en aplicación de sentencia o convenio judicial.

CAPÍTULO IV

COOPERATIVAS AGRARIAS

Artículo 161. Objeto y ámbito.

1. Son cooperativas agrarias las que asocian a personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad agrícola, ganadera, forestal, de acuicultura, mixta o conexa a las mismas, ya sea de forma exclusiva o compartida.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y derechos, comunidades de regantes, comunidades de aguas, herencias yacentes y sociedades civiles, siempre que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a las de la propia cooperativa.

Los estatutos sociales regularán la forma de participación, en su caso, de los miembros de la comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del socio o comunidad de derechos de la que el mismo forme parte.

2. Las cooperativas agrarias tendrán por objeto la producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos de las

explotaciones de los socios, la prestación de servicios y suministros de bienes o materias primas a los mismos, la fabricación de productos para suministrar a los socios, la centralización de compras para los mismos y, en general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes a la mejora, tanto económica como social y técnica, de las explotaciones de los socios, de sus elementos o complementos, o de la propia cooperativa u otros fines relacionados con dichas actividades, así como la prestación de servicios y fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población agraria y el medio rural.

3. Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias podrán desarrollar cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los estatutos sociales, y aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la consecución de su objeto, y entre otras, las siguientes:

a) Proveer a los socios de materias primas, medios de producción, productos y otros bienes que necesiten.

b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, equipos y medios de producción.

c) Industrializar o comercializar la producción agraria y sus derivados, adoptando, cuando proceda, los estatutos de organización de productores agrarios.

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o mantener en explotación en común tierras y otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria.

e) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros mediante cajas rurales y secciones de crédito y otras entidades especializadas, así como fundar secciones de crédito para que cumplan las funciones propias de las cooperativas de crédito.

f) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su entorno social.

g) Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con el fin de canalizar directamente, a los consumidores y empresarios transformadores, la producción agraria.

4. Las explotaciones de los socios deberán estar ubicadas dentro del ámbito territorial de la cooperativa, establecido estatutariamente, con observancia de lo establecido en el artículo 2.

Artículo 162. Las actividades cooperativizadas y el derecho al voto.

1. Los estatutos establecerán los módulos y formas de participación de los socios en las actividades cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad exclusiva en las actividades que desarrolle la cooperativa. Cuando en virtud de acuerdo social de la asamblea general se pongan en marcha nuevos servicios, actividades o secciones con obligación de participación mínima o exclusiva, se entenderá extendida a todos los socios, salvo que, por justa causa, el socio comunique expresamente ante el consejo rector su voluntad en contra en el plazo de los tres meses siguientes a su adopción.

2. Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia de los socios en la cooperativa, que no podrá ser superior a cinco años. El incumplimiento de esta obligación no eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros, ni de la que hubiere asumido con la cooperativa por obligaciones asumidas e inversiones realizadas y no amortizadas.

Con ocasión de acuerdos de la asamblea general que impliquen la necesidad de asegurar la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en niveles o en plazos nuevos o superiores a los exigidos en esta ley o en los estatutos con carácter general, tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares, se podrán acordar nuevos compromisos de permanencia obligatorios para los socios, que no podrán exceder de cinco años. En estos casos, los socios de la cooperativa o de la sección a los que afecte tal acuerdo, podrán solicitar su baja en la cooperativa o en la sección de que se trate, que tendrá el carácter de justificada, en los plazos fijados en el artículo 32.3.

3. Los estatutos de las cooperativas agrarias podrán optar entre un sistema de voto unitario o de voto plural, sometido a un criterio de ponderación. En este segundo caso deberán observarse las siguientes reglas:

a) Se otorgará a cada socio entre uno y cinco votos, sin que puedan atribuir a un solo socio

más de la quinta parte de los votos totales de la cooperativa. Los estatutos regularán los criterios de ponderación, que siempre estarán en función proporcional a la actividad o servicio cooperativizado y, en ningún caso, en función de la aportación al capital social. Con independencia de la ponderación anterior, los estatutos podrán prever la asignación de votos específicos a los socios que acrediten su condición de agricultores a título principal o explotación agraria prioritaria, según prevean los estatutos, sin que esta atribución pueda superar el límite máximo de cinco votos.

Los estatutos sociales establecerán la relación entre los votos sociales y la actividad cooperativizada necesaria para la distribución de los votos. La suma de votos plurales, excepto en el caso de cooperativas de segundo grado, no podrá alcanzar una cifra superior al 50 por ciento de la totalidad de los votos sociales de la cooperativa.

b) Con la convocatoria de la primera asamblea general que se celebre en cada ejercicio, el órgano de administración elaborará una relación en la que se establecerá el número de votos sociales que correspondan a cada socio para dicho ejercicio, tomando para ello como base los datos de la actividad o servicios cooperativizados de cada uno de ellos, referidos al número de ejercicios cerrados anteriores que fijen los estatutos, y, en su caso, a la condición que acredite el socio agricultor referido al ejercicio anterior. Dicha relación se expondrá en el tablón de anuncios del domicilio social de la cooperativa el mismo día del anuncio de la convocatoria de la asamblea, pudiendo solicitarse del órgano de administración, las correcciones que procedan hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la referida asamblea.

c) Los socios titulares de votos plurales podrán renunciar a ellos para una asamblea o en cualquier votación, ejercitando un solo voto. Además, los estatutos deberán regular los supuestos en que sea imperativo el voto igualitario.

4. Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas con carácter de operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de sus socios.

Artículo 163. Operaciones con terceros.

Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo del 50 por ciento del total de las realizadas por los socios para cada tipo de actividad desarrollada por aquéllas en cada ejercicio. Dicha limitación no será aplicable respecto de las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios.

CAPÍTULO V

COOPERATIVAS DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA

Artículo 164. Objeto y ámbito.

1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma, para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.

2. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y las que tengan por objeto constituir o perfeccionar la explotación en todos sus elementos, así como las de recolección, almacenamiento, tipificación, transporte, transformación, distribución y venta, al por mayor o directamente al consumidor, de los productos de su explotación y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o sean antecedentes, complemento o consecuencia directa de las mismas.

3. En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, su ámbito, fijado estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que

los socios trabajadores de la cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación de trabajo, y dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la explotación.

4. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán realizar operaciones con terceros no socios en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas en esta ley para las cooperativas agrarias.

Artículo 165. Régimen de los socios.

1. Pueden ser socios de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:

a) Las personas físicas y jurídicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierra u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos derechos a la cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce de bienes a la cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, presten su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de socios trabajadores.

c) También pueden ser socios de esta clase de sociedades cooperativas en la condición de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de aprovechamiento agrario:

1.º Los organismos del sector público.

2.º Las sociedades en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.

3.º Las comunidades de bienes y derechos. En este supuesto, los cotitulares elegirán a uno de ellos para que los represente y ejercite los derechos propios del socio en su nombre, incluido el derecho de voto, que será único para todos los comuneros.

4.º Los aprovechamientos agrícolas y forestales, los montes en mano común y demás instituciones de naturaleza análoga, debiendo designarse por aquéllas un representante ante la sociedad cooperativa.

2. Serán de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de bienes a la cooperativa, las normas establecidas en esta ley para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en esta sección.

3. El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos en el artículo 151.1 para las cooperativas de trabajo asociado.

Artículo 166. Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.

1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no podrá ser superior a quince años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no superiores a cinco años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la cooperativa en su condición de cedente del goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el período de permanencia obligatoria de éste en la cooperativa, la cual, si hace uso de dicha facultad, en compensación, abonará al socio cesante la renta media de la zona de los referidos bienes.

3. El arrendatario y demás titulares de un derecho de goce, podrán ceder el uso y aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo. En este supuesto, la cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo esta-

tutario de permanencia obligatoria, siempre que el titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a terceros derechos sobre dichos bienes que impidan el del uso y aprovechamiento de los mismos por la cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma o, en su caso, durante el plazo inferior que resulte de la duración máxima del contrato o titulo jurídico del que derive su derecho de goce.

Artículo 167. Valoración de los bienes susceptibles de explotación en común.

Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes susceptibles de explotación en común, así como el régimen de obras, mejoras y servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria comprenderá el régimen de indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres. Si los estatutos lo prevén y el socio cedente del goce tiene titularidad suficiente para autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre se mantendrá, aunque el socio cese en la cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en el documento de constitución de la servidumbre. En todo caso, será de aplicación la facultad de variación recogida en el párrafo segundo del artículo 545 del Código Civil.

Para la adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este apartado, será necesario que la mayoría prevista en el apartado 1 del artículo 50 comprenda el voto favorable de socios que representen, al menos, el 50 por ciento de la totalidad de los bienes cuyo uso y disfrute haya sido cedido a la cooperativa.

Artículo 168. Limites a la cesión del uso y aprovechamiento de bienes.

Ningún socio podrá ceder a la cooperativa el usufructo de tierras u otros bienes inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación, salvo que se tratase de entes públicos o sociedades en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.

Artículo 169. Baja del socio cedente de uso y aprovechamiento de bienes.

El socio que fuese baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la cooperativa a su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes, si éstos son socios o adquieren tal condición en el plazo de tres meses desde la baja de aquél.

Artículo 170. Aportaciones al capital social.

1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio trabajador, cause baja en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las aportaciones realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente de bienes o la de socio trabajador.

Artículo 171. Régimen económico.

1. Los socios, en su condición de socios trabajadores, percibirán anticipos de acuerdo con lo establecido para las cooperativas de trabajo asociado, y en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes a la cooperativa, percibirán, por dicha cesión, la renta usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por los mencionados anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta de los resultados finales, en el ejercicio de la actividad económica de la cooperativa.

Tanto los anticipos societarios como las mencionadas rentas tendrán la consideración de gastos deducibles.

2. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:

a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la explotación por títulos distintos a la cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores, de acuerdo con las normas establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación:

1.º La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

2.º La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada conforme a la retribución usual en la zona para la actividad desarrollada, aunque hubiese percibido anticipos de cuantía distinta.

3. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el apartado anterior.

No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios diera lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de trabajo sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad a los fondos de reserva y, en su defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la cuantía necesaria para garantizar a los socios trabajadores una compensación mínima igual al 70 por ciento de las retribuciones satisfechas en la zona por igual actividad y, en todo caso, no inferior a una cantidad equivalente al importe del salario mínimo interprofesional.

CAPÍTULO VI

COOPERATIVAS DE SERVICIOS

Artículo 172. Objeto.

1. Son cooperativas de servicios las que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia, y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios, o la producción de bienes y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios.

2. No podrá ser clasificada como cooperativa de servicios aquélla en cuyos socios y objeto concurran circunstancias o peculiaridades que permitan su clasificación en otra clase de cooperativas.

CAPÍTULO VII

COOPERATIVAS DEL MAR

Artículo 173. Objeto.

1. Son cooperativas del mar las que asocian a pescadores, armadores de embarcaciones, cofradías, organizaciones de productores pesqueros, titulares de viveros de algas, de cetáreas, mariscadores y familias marisqueras, concesionarios de explotaciones de pesca y de acuicultura y, en general, a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras o de industrias marítimo-pesqueras y derivadas, en sus diferentes modalidades del mar, rías y lagunas marinas, y a profesionales por cuenta propia de dichas actividades, y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas de mar podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar, mantener y desguazar instrumentos, útiles de pesca, maquinaria, instalaciones, sean o no frigoríficas, embarcaciones de pesca, animales, embriones y ejemplares para la reproducción, pasto y cualesquiera otros productos, materiales y elementos necesarios o convenientes para la cooperativa y para las actividades profesionales o de las explotaciones de los socios.

b) Conservar, tipificar, transformar, distribuir y comercializar, incluso hasta el consumidor, los productos procedentes de la cooperativa y de

la actividad profesional o de las explotaciones de los socios.

c) En general, cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la actividad profesional o de las explotaciones de los socios.

CAPÍTULO VIII

COOPERATIVAS DE TRANSPORTISTAS

Artículo 174. Objeto.

1. Son cooperativas de transportistas las que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el local, la actividad de transportistas, de personas, cosas o mixto, y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus socios.

2. Las cooperativas de transportistas también podrán realizar aquellas actividades para las que se encuentran expresamente facultadas por la legislación vigente en materia de transporte terrestre, en los términos que en la misma se establecen.

Artículo 175. Ámbito de actuación.

1. El ámbito de actuación de esta clase de cooperativas será determinado estatutariamente.

2. De conformidad con lo previsto por el artículo 5, las cooperativas de transportistas podrán desarrollar operaciones con terceros no socios en el ámbito de la actividad cooperativizada según lo permitido legalmente para las distintas modalidades de esta clase de cooperativas.

CAPÍTULO IX

COOPERATIVAS DE SEGUROS Y DE CRÉDITO

Artículo 176. Objeto.

1. Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora con sus socios con arreglo a la normativa reguladora del seguro, teniendo aplicación subsidiaria los preceptos de la presente ley.

2. Son cooperativas de crédito las que tienen por objeto servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito, con arreglo a su normativa específica y a la legislación sobre entidades de crédito, teniendo aplicación subsidiaria los preceptos de la presente ley.

CAPÍTULO X

COOPERATIVAS SANITARIAS

Artículo 177. Objeto.

Son cooperativas sanitarias las que desarrollan su actividad en el área de la salud, pudiendo estar constituidas por los prestadores de la asistencia sanitaria, por los destinatarios de la misma o por unos y otros. Podrán realizar también actividades complementarias y conexas incluso de tipo preventivo, general o para grupos o colectivos determinados.

Artículo 178. Normativa aplicable.

1. A las cooperativas sanitarias les serán de aplicación las normas establecidas en la presente ley para las de trabajo asociado o para las de servicios, según proceda, cuando los socios sean profesionales de la medicina; cuando los socios sean los destinatarios de la asistencia sanitaria se aplicarán a la sociedad las normas sobre cooperativas de consumidores y usuarios; cuando se den las condiciones previstas en el artículo 185 se aplicará la normativa sobre cooperativas integrales. Si estuvieran organizadas como empresas aseguradoras se ajustarán, además, a la normativa mencionada en el artículo 176.

Cuando por imperativo legal no puedan desarrollar la actividad aseguradora, ésta deberá realizarse por sociedades mercantiles que sean propiedad, al menos mayoritaria, de las cooperativas sanitarias. A los resultados derivados de la participación de las cooperativas sanitarias en dichas sociedades mercantiles les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 97.3, a).

2. Cuando una cooperativa de segundo grado integre al menos una cooperativa sanitaria, aquélla podrá incluir en su denominación el término «Sanitaria».

CAPÍTULO XI
COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA

Artículo 179. Objeto.

Las cooperativas de enseñanza tendrán por objeto organizar y prestar servicios de enseñanza, en cualquier rama del saber, de la formación, o del aprendizaje técnico, artístico, deportivo u otros. Podrán realizar también, como complementarias, actividades extraescolares y conexas, así como prestar servicios que faciliten las actividades docentes.

Artículo 180. Modalidades y normativa aplicable.

Las cooperativas de enseñanza podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades:

a) Cooperativa de trabajo asociado, que agrupe a los profesores y personal no docente, con el fin de ofrecer servicios de enseñanza a terceros.

A esta modalidad de cooperativa de enseñanza le será de aplicación las normas previstas en esta ley para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Cooperativa de consumo del servicio de enseñanza, integrada por padres o representantes legales de alumnos o por los mismos alumnos.

A esta modalidad de cooperativa de enseñanza les serán de aplicación la normativa específica establecida en la presente ley para las cooperativas de consumidores y usuarios.

c) Cooperativa de enseñanza mixta, que se ajustará a los requisitos siguientes:

1.º En la constitución de la cooperativa se diferenciarán las aportaciones patrimoniales efectivas, dinerarias o no dinerarias, que integrarán el capital social, de las prestaciones consistentes en la obligación de aportar trabajo, servicios o asistencia técnica, que no podrán integrar el capital social.

2.º Los estatutos sociales deberán establecer los módulos de participación en el excedente de los socios que hayan aportado el derecho de uso de inmuebles, instalaciones u otros bienes y los de los socios que aporten también o exclusivamente, su trabajo, los cuales tendrán la condición de socios de trabajo.

3.º Los retornos se acreditarán a los socios, dentro de los módulos a que se refiere el número anterior, en proporción a los anticipos societarios y a las rentas que abonará la cooperativa por la cesión del uso de los bienes. En todo caso, la imputación de pérdidas garantizará al socio de trabajo una compensación equivalente al salario mínimo interprofesional.

Artículo 181. Socios de naturaleza pública o de utilidad pública.

1. Las entidades e instituciones públicas y las privadas de utilidad pública, incluidas las benéficas, sin perjuicio de su eventual admisión como socios colaboradores, podrán asumir, incluso simultáneamente, la condición de socios usuarios cuando ejerzan la guarda y protección legal de escolares menores o incapaces, o cuando representen a alumnado adulto que, estando acogido a centros, residencias o establecimientos regidos por aquéllas les hayan otorgado expresamente su representación. Las consecuencias de la eventual acumulación de la cualidad de socio colaborador y de socio usuario serán objeto de expresa regulación estatutaria, dentro del marco de la presente ley y de las disposiciones vigentes sobre el sistema educativo.

2. Tales entidades e instituciones podrán realizar, por cualquier título jurídico, aportaciones patrimoniales de toda clase, incluida la cesión de terrenos, edificios y otros bienes inmuebles, equipados o no, que sean necesarios para el establecimiento o el adecuado desarrollo de la sociedad cooperativa.

3. Si los estatutos lo prevén, dichos socios institucionales tendrán la reserva de puestos en el consejo rector y en su condición de usuarios podrán asistir a las asambleas generales con un número de votos proporcional al del alumnado que representen, sin las limitaciones señaladas en el artículo 52.

CAPÍTULO XII
COOPERATIVAS SIN ANIMO DE LUCRO

Artículo 182. Calificación.

1. Podrán ser calificadas e inscritas como cooperativas sin ánimo de lucro, cualquiera que

sea su objeto, las que, cumpliendo los requisitos que se determinan en sus respectivas regulaciones, recojan expresamente en sus estatutos:

a) Que los excedentes o beneficios que puedan producirse en un ejercicio económico, en ningún caso serán repartidos entre los socios, destinándose a la consolidación de la cooperativa y a la creación de empleo.

b) Que las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios al capital social, sin perjuicio de su posible actualización, no devengarán un interés superior al legal del dinero.

c) Que el desempeño de los cargos del órgano de administración tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de las compensaciones económicas que proceda abonarles por los gastos en los que incurran en el ejercicio de sus funciones.

d) Que las retribuciones de los socios trabajadores, o, en su caso, de los socios de trabajo, así como las de los trabajadores por cuenta ajena no superarán una cantidad equivalente al 150 por ciento de las que establezca para la actividad desarrollada el convenio colectivo aplicable en el sector de que se trate.

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la condición de cooperativa sin ánimo de lucro.

2. Las cooperativas calificadas como sin ánimo de lucro no pierden por esta calificación su carácter empresarial y han de ser consideradas a todos los efectos como cooperativas de la clase a la que pertenecen, aplicándoseles, en consecuencia, las normas relativas a la misma.

Artículo 183. Cooperativas de iniciativa social.

1. Serán calificadas como de iniciativa social aquellas cooperativas sin ánimo de lucro que, con independencia de su clase, tengan por objeto la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social.

En la denominación de estas cooperativas figurará, además, la indicación «Iniciativa Social».

2. Las entidades y organismos públicos podrán participar en calidad de socios en la forma que estatutariamente se establezca.

3. Resultará de aplicación a estas cooperativas lo previsto en la presente ley para la clase de cooperativa de que, según su objeto, se trate.

Artículo 184. Cooperativas de integración social.

1. Serán calificadas como de integración social aquellas cooperativas sin ánimo de lucro que tengan por finalidad la integración de colectivos con problemas de inserción social o laboral, constituidas mayoritariamente por personas pertenecientes a dichos colectivos y, en su caso, los tutores y el personal de atención.

El objeto de estas cooperativas será promover la integración a través del empleo de las personas pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción, organizando, promoviendo y comercializando los bienes o servicios producto del trabajo de los socios, o bien proveer a dichas personas de bienes y servicios de consumo general o específico.

2. Podrán ser socios de estas cooperativas las administraciones, entidades públicas y privadas cuya normativa o estatutos prevean o permitan la financiación u otra forma de colaboración en el desarrollo de las actividades de tales cooperativas. Estos socios institucionales, además de ejercitar los derechos y obligaciones previstos en el estatuto de la cooperativa, designarán un representante técnico que será miembro del órgano de administración.

3. A estas cooperativas les serán de aplicación las normas relativas a la clase de cooperativa a la que pertenezcan. No obstante lo anterior, la prestación del trabajo personal se regirá por las normas establecidas en la presente ley para las cooperativas de trabajo asociado.

4. No se aplicará a este tipo de cooperativas el límite de socios temporales cuando estos pertenezcan a cualquiera de los colectivos con problemas de integración.

CAPÍTULO XIII

COOPERATIVAS INTEGRALES

Artículo 185. Objeto y normas aplicables.

1. Se denominan cooperativas integrales las que cumplen finalidades propias de varias clases

de cooperativas y unifican las distintas actividades en una sola cooperativa de primer grado.

2. En sus estatutos sociales han de constar específicamente los derechos y obligaciones, tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes clases de socios.

3. En los órganos sociales de las cooperativas integrales deberá haber siempre representación equilibrada, establecida estatutariamente, de las distintas actividades realizadas por la cooperativa.

4. Para acceder a la condición de especialmente protegidas, de conformidad con la legislación fiscal, será necesario que cumplan los requisitos exigidos para ser consideradas como tales respecto a todas y cada una de sus actividades.

CAPÍTULO XIV
COOPERATIVAS MIXTAS

Artículo 186. Objeto y normas aplicables.

1. Son cooperativas mixtas aquellas en las que existen socios cuyo derecho de voto en la asamblea general se podrá determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado en las condiciones establecidas en los estatutos, que estará representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta, sometidos a la legislación reguladora del mercado de valores.

2. En estas cooperativas el derecho de voto en la asamblea general respetará la siguiente distribución:

a) Al menos el 51 por ciento de los votos se atribuirá, en la proporción que definan los estatutos, a socios cuyo derecho de voto viene determinado en el artículo 52.

b) Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del 49 por ciento de los votos se distribuirá en partes sociales con voto, que, si los estatutos lo prevén, podrán ser libremente negociables en el mercado.

3. En el caso de las partes sociales con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de las aportaciones se regularán por los estatutos y, supletoriamente, por lo dispuesto en la legislación de sociedades anónimas para las acciones.

4. La participación de cada uno de los dos grupos de socios en los excedentes anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los colectivos ostente según lo previsto en el apartado 2.

Los excedentes imputables a los poseedores de partes sociales con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los excedentes imputables a los restantes socios se distribuirán entre éstos según los criterios generales definidos en esta ley para las cooperativas de régimen ordinario.

Artículo 187. Modificación de los derechos y obligaciones de los socios.

La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los dos colectivos de socios, requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la asamblea general.

Artículo 188. Autorización de reparto del fondo de reserva obligatorio en caso de liquidación

En el momento de la configuración, constitutiva o por modificación, de estas cooperativas, la Consejería competente en materia de cooperativas, previo informe del Consejo Asturiano de la Economía Social, podrá autorizar la previsión estatutaria de reparto del fondo de reserva obligatorio en caso de liquidación, con arreglo a los criterios señalados en el apartado 4 del artículo 186 y respetando las demás normas de adjudicación del haber social establecidas en esta ley.

TÍTULO VI
ASOCIACIONISMO COOPERATIVO

Artículo 189. Libertad de asociación.

1. Para la defensa y promoción de sus intereses las cooperativas podrán constituir libre y voluntariamente uniones, federaciones y confederaciones que tendrán personalidad jurídica y establecerán sus propios estatutos, gobernándose con plena autonomía.

2. Los estatutos contendrán, al menos, la denominación y domicilio de la entidad asociativa, el objeto y el ámbito territorial, los requisitos y el procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada, la composición, el funcionamiento y la elección de los órganos de gobierno, representación y administración y el régimen económico, regulando su funcionamiento de acuerdo con los principios democráticos.

Artículo 190. Uniones de cooperativas.

1. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para constituir, dentro del Principado de Asturias, asociaciones o uniones de cooperativas de la misma clase o sector económico. Para constituir una unión han de participar al menos tres cooperativas, pudiendo también integrarse en ella uniones ya existentes.

2. En las uniones de cooperativas constituidas por cooperativas agrarias podrán también integrarse sociedades agrarias de transformación. Asimismo, y sin perjuicio de la posibilidad de crear sus propias entidades asociativas, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán también integrarse en las uniones de cooperativas constituidas por cooperativas agrarias o por cooperativas de trabajo asociado.

3. En las uniones de cooperativas constituidas por cooperativas de trabajo asociado podrán también integrarse sociedades laborales, para la defensa de sus intereses comunes. Las asociaciones o agrupaciones en activo que asocien a cooperativas de trabajo asociado y a sociedades laborales tendrán, a los efectos de esta ley, la misma consideración que las uniones de cooperativas.

4. Los órganos sociales de las uniones de cooperativas serán la asamblea general, el consejo rector y la intervención, estableciéndose en los estatutos su composición y atribuciones sin que, en ningún caso, pueda atribuirse la mayoría absoluta de votos a uno de sus miembros. La asamblea general estará formada por los representantes de las cooperativas directamente asociadas y, en su caso, de las uniones que la integran.

Artículo 191. Federaciones y confederaciones.

1. Las uniones de cooperativas podrán constituir federaciones y éstas confederaciones, así como afiliarse a las de igual carácter que se hallen constituidas.

2. Las federaciones podrán admitir la afiliación directa de aquellas cooperativas en cuyo ámbito no exista unión constituida o integrada previamente en ellas.

Artículo 192. Normas comunes.

1. A las uniones, federaciones y confederaciones, en sus respectivos ámbitos, corresponden entre otras, las siguientes funciones:

a) Representar y defender los intereses generales de las cooperativas y de sus socios ante las Administraciones Públicas y ante cualesquiera otras personas físicas o jurídicas y ejercer, en su caso, las acciones legales pertinentes.

b) Fomentar la promoción y formación cooperativa.

c) Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las sociedades cooperativas que asocien o entre éstas y sus socios.

d) Organizar servicios de asesoramiento, auditorías, asistencia jurídica o técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios.

e) Actuar como interlocutores y representantes ante las entidades y organismos públicos.

f) Colaborar con el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias en las tareas de actualización y depuración técnica del censo de sociedades inscritas en aquél.

g) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

2. En la denominación de las entidades asociativas de cooperativas deberá incluirse, respectivamente, la palabra «Unión de Cooperativas», «Federación de Cooperativas», o «Confederación de Cooperativas» o sus abreviaturas «U. de Coop.», «F. de Coop.» y «C. de Coop.». Se exceptúan de esta norma aquellas asociaciones y agrupaciones que no tomen la forma de unión, a las que hace referencia el artículo 190.3.

3. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, para poder incluir en su denominación términos que hagan referencia a

un determinado ámbito geográfico, deberán acreditar que asocian, directamente o a través de las entidades asociadas, el 20 por ciento, al menos, de las sociedades cooperativas inscritas y no disueltas, con domicilio social en dicho ámbito geográfico.

4. En todo lo no previsto en este título, se estará a lo dispuesto, con carácter general, en la presente ley.

Artículo 193. Trámites registrales.

1. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas depositarán en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias la escritura pública de constitución, que habrá de contener, al menos:

a) relación de las entidades promotoras,

b) certificación del acuerdo de constitución,

c) integrantes de los órganos de representación y gobierno,

d) certificación del Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias de que no existe otra entidad con idéntica denominación, y

e) los estatutos sociales.

2. El Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias dispondrá, en el plazo de un mes, la publicidad del depósito o el requerimiento a sus socios promotores, por una sola vez, para que, en el plazo de otro mes, subsanen los defectos observados. Transcurrido este plazo, el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el presente título.

La publicidad del depósito se realizará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La entidad adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar al mes de solicitar al Registro el depósito de la escritura de constitución, salvo que éste hubiera formulado reparos o acuerde rechazar el depósito en dicho término mediante resolución fundada.

3. Las uniones, federaciones y confederaciones deberán comunicar al Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias la variación en el número de sus miembros.

TÍTULO VII
ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 194. Competencia administrativa.

La actuación del Principado de Asturias en materia de cooperativas se ejercerá a través de la Consejería competente en dicha materia, que ejercerá las funciones de ejecución, fomento, inspección y sancionadoras reguladas en esta ley, sin perjuicio de las facultades reconocidas a otras Consejerías u organismos dependientes de ellas, en relación con el cumplimiento de la legislación específica que les corresponda aplicar.

CAPÍTULO I
PROMOCION DEL COOPERATIVISMO

Artículo 195. Principios generales.

1. El Principado de Asturias reconoce de interés general la promoción y el desarrollo de las cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa, cuya libertad y autonomía garantiza.

En este marco, el Principado de Asturias fomentará la actividad que desarrollen las cooperativas, a través de medidas que favorezcan la inversión empresarial, la creación de empleo, la elevación del nivel de formación profesional y preparación técnica de los socios y el asociacionismo cooperativo.

2. La correspondiente actuación se llevará a cabo a través de la Consejería competente en materia de cooperativas, a la que se dotará de recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 196. Medidas de fomento del cooperativismo.

1. El Principado de Asturias realizará programas de ayuda para la creación y desarrollo de cooperativas, en el marco de su política general y en la aplicación de la política de empleo.

Se garantizará la participación y colaboración de los distintos sectores cooperativos en la ejecución de los programas de inversiones públicas del Principado de Asturias.

2. Se promoverá la utilización de las fórmulas cooperativas para la satisfacción de las necesidades empresariales y, singularmente, en relación con las de los profesionales, colegiados o no, y las de los pequeños y medianos empresarios, incluidos los autónomos y los del sector agrario.

3. Se fomentará la creación de cooperativas de trabajo asociado.

4. Se promoverán las cooperativas agrarias, las de explotación comunitaria de la tierra y las demás que contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales fijando la población y el empleo en las comarcas en recesión.

Artículo 197. Fomento y creación de cooperativas para la gestión y prestación de servicios públicos.

1. Se promocionará la creación de cooperativas para la gestión de servicios públicos, y se fomentará la participación de los usuarios, en colaboración con los distintos organismos competentes.

2. El Principado de Asturias, en la prestación de servicios públicos con la participación directa de los ciudadanos, fomentarán la creación de cooperativas con este objetivo en aquellas actividades en que no exista aún una iniciativa privada en este sentido, compartiendo la gestión de estos servicios.

Artículo 198. Fomento del cooperativismo que favorezca la integración social y la igualdad de género.

1. En la planificación y ejecución de los programas de fomento del cooperativismo, gozarán de especial consideración las cooperativas que promuevan o lleven a efecto actuaciones en favor de las personas en riesgo de exclusión, singularmente a través de la creación de puestos de trabajo adecuados a sus características.

2. Las actuaciones de promoción del cooperativismo, en especial las relativas al empleo, se coordinarán con las que se lleven a efecto en aplicación de sus programas de remoción de las desigualdades de género.

Artículo 199. Medidas de fomento del asociacionismo cooperativo.

Se promoverán las estructuras asociativas de empresas de Economía Social, las Uniones y Federaciones de Cooperativas.

Artículo 200. Formación en el cooperativismo.

El Principado de Asturias fomentará la formación cooperativa, y con este fin:

a) Formulará programas de formación, promoviendo la participación en ellos de las propias cooperativas, tanto en lo que atañe a su gestión o ejecución, como en lo referente a su financiación a través de los respectivos fondos de formación y promoción cooperativa.

b) Coordinará todas las actividades de formación cooperativa realizadas con cargo a su presupuesto.

c) Incluirá la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo en sus distintas clases y niveles y fomentará la creación de cooperativas de enseñanza.

CAPÍTULO II

CONSEJO ASTURIANO DE LA ECONOMIA SOCIAL

Artículo 201. Concepto y naturaleza.

El Consejo Asturiano de la Economía Social, es el órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, adscrito a la Consejería competente en dicha materia.

Actuará como un órgano de colaboración y coordinación del movimiento asociativo, de la administración autonómica y otros agentes sociales.

Artículo 202. Funciones, composición y funcionamiento.

Reglamentariamente se establecerán las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento de este Consejo.

CAPÍTULO III

FUNCION INSPECTORA Y DESCALIFICACION DE COOPERATIVAS

Artículo 203. La inspección de cooperativas.

Corresponde a la Consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora en relación con el cumplimiento de la presente ley, que ejercerá a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las funciones inspectoras que correspondan a otras

Consejerías en función de la legislación específica aplicable.

Artículo 204. Sujetos responsables.

Las sociedades cooperativas son sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta ley, a sus normas de desarrollo y a las disposiciones complementarias contenidas en los estatutos, sin perjuicio de las responsabilidades personales exigibles a Consejeros, interventores o liquidadores.

Artículo 205. Infracciones.

1. Son infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones o la vulneración de las prohibiciones impuestas por esta ley, que no supongan un conflicto entre partes, no interrumpan la actividad social y no puedan ser calificadas de graves o muy graves.

2. Son infracciones graves:

a) No convocar la asamblea general ordinaria en tiempo y forma.

b) Incumplir la obligación de inscribir los actos que han de acceder obligatoriamente al Registro.

c) No efectuar las dotaciones, en los términos establecidos en esta ley, a los fondos obligatorios o destinarlos a finalidades distintas a las previstas.

d) La falta de auditoría de cuentas, cuando ésta resulte obligatoria, legal o estatutariamente.

e) Incumplir, en su caso, la obligación de depositar las cuentas anuales.

f) La transgresión generalizada de los derechos de los socios.

3. Son infracciones muy graves:

a) La paralización de la actividad cooperativizada, o la inactividad de los órganos sociales durante dos años.

b) La transgresión de las disposiciones imperativas o prohibitivas de esta ley, cuando se compruebe connivencia para lucrarse o para obtener ficticiamente subvenciones o bonificaciones fiscales.

c) Superar los límites previstos en esta ley para las operaciones con terceros o para la contratación de trabajadores por cuenta ajena por tiempo indefinido.

d) La asignación de retornos a personas que no sean socios en activo o con criterio distinto al de su participación en las actividades sociales.

4. Las infracciones leves, graves y muy graves se graduarán a efectos de su correspondiente sanción atendiendo al número de socios afectados, repercusión social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa.

Artículo 206. Sanciones y procedimiento sancionador.

1. Las infracciones tipificadas por la presente ley se sancionarán:

a) Las infracciones leves de grado mínimo con una multa de 150 euros a 300 euros; las de grado medio, con una multa de 301 euros a 450 euros, y las de grado máximo, con una multa de 451 euros a 600 euros.

b) Las infracciones graves de grado mínimo con una multa de 601 euros a 1.500 euros; las de grado medio, con una multa de 1.501 euros a 2.400 euros, y las de grado máximo, con una multa de 2.401 euros a 3.000 euros.

c) Las infracciones muy graves de grado mínimo con una multa de 3.001 euros a 6.000 euros; las de grado medio, con una multa de 6.001 euros a 15.000 euros, y las de grado máximo, con una multa de 15.001 euros a 30.000 euros, o bien con la descalificación de la cooperativa.

2. Las infracciones serán sancionadas, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el caso de infracciones leves, por la persona titular de la Dirección General competente en materia de cooperativas; en el caso de infracciones graves, por el titular de la Consejería competente en dicha materia y, en el caso de infracciones muy graves, por el Consejo de Gobierno.

3. En la tramitación de los expedientes sancionadores resultará de aplicación el Reglamento del procedimiento sancionador general de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 207. Prescripción.

Las infracciones leves prescribirán a los tres meses; las graves, a los seis meses y las muy graves, al año, contados desde la fecha en que se hubieran cometido.

Artículo 208. Descalificación de cooperativas.

1. Podrán ser causas de descalificación de una sociedad cooperativa:

a) En general, la pérdida o incumplimiento de los requisitos necesarios para la calificación de la sociedad como cooperativa.

b) La comisión de infracciones muy graves de normas imperativas o prohibitivas de la presente ley.

2. El procedimiento para la descalificación se ajustará a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes particularidades:

a) La instrucción del expediente requerirá el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de la organización representativa a la que pertenezca la sociedad cooperativa afectada, debiendo emitirse ambos en el plazo de un mes. Si no se hubiese emitido alguno de estos informes dentro del plazo indicado, se tendrá por evacuado.

b) En el trámite de audiencia a la sociedad, se personará el órgano de administración o, en su defecto, un número de socios no inferior a tres. Cuando no se produjese o no fuese posible dicha comparecencia, el trámite se cumplirá publicando el correspondiente aviso en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

c) Será competente para resolver la descalificación la persona titular de la Consejería competente en materia de cooperativas.

3. La descalificación, una vez firme, surtirá efectos registrales de oficio e implicará la disolución de la sociedad cooperativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Expedientes en tramitación.

1. Los expedientes en materia de cooperativas, incluidos los sancionadores, iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, se tramitarán y resolverán con arreglo a la normativa anterior, salvo que la nueva ley resulte más beneficiosa.

2. El contenido de las escrituras y de los estatutos de las sociedades cooperativas existentes a la entrada en vigor de esta ley, no podrá ser aplicado si se opone a ésta, entendiéndose modificado o completado por cuantas normas prohibitivas o imperativas se contienen en la misma.

Segunda. Adaptación de las sociedades cooperativas a las previsiones de la presente ley.

1. Las cooperativas, así como sus uniones y federaciones que se hallen constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, dispondrán de un plazo de tres años a partir de esa fecha, para adaptar sus estatutos a los preceptos de la presente ley.

2. El acuerdo de adaptación de estatutos se adoptará en asamblea general, siendo suficiente el voto favorable de más de la mitad de los votos presentes y representados. Cualquier Consejero o socio estará legitimado para solicitar del órgano de administración la convocatoria de la asamblea general con esta finalidad y si, transcurridos dos meses desde la solicitud, no se hubiese hecho la convocatoria, podrán solicitarla del Juez competente, previa audiencia de los administradores, acordará lo procedente designando, en su caso, la persona que habrá de presidir la reunión.

3. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, no se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias documento alguno de cooperativas sometidas a esta norma hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de sus estatutos sociales. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente ley, así como a la transformación, fusión, disolución y liquidación de la sociedad, y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

Tercera. Registro de Sociedades Cooperativas.

En tanto no sea aprobado el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias, con arreglo a lo previsto en el artículo 15.2, será de aplicación el vigente Reglamento del Registro de Cooperativas del Estado en lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley.

DISPOSICION FINAL

Desarrollo reglamentario

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

2. El Consejo de Gobierno dictará en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley las normas reguladoras del régimen de organización y funcionamiento del Registro de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.

Dado en Oviedo, a 29 de junio de 2010

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces

Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. Corrección de errores BOA 142, de 21 de julio. (BOA 124, de 25 de junio)

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

Transcurridos más de diez años desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, las circunstancias socioeconómicas existentes en el momento de su aparición han experimentado una notable evolución que ha venido acompañada de la consiguiente modificación del contexto normativo regulador. Desde el año 1998, dichas novedades socioeconómicas y legales se han ido asentando en el ordenamiento jurídico y han venido a incidir directamente en el contenido de la ley, haciendo necesaria su exhaustiva modificación para adaptarse a las mismas.

De entre todas las novedades legales acaecidas en el período de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Cooperativas en el año 1998, el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, constituye la más destacada, por ser el Estatuto de Autonomía la norma institucional básica sobre la que se construye nuestro edificio normativo. La citada Ley Orgánica, en su artículo 71.31.ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de «Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social».

Asimismo, en la década transcurrida desde la aprobación de la Ley 9/1998, se han venido produciendo importantes transformaciones derivadas de la liberalización de los mercados y de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la realización de transacciones mercantiles. En este sentido, la Unión Europea, el Estado español y las Comunidades Autónomas vienen realizando un importante esfuerzo para adaptar sus ordenamientos jurídicos a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y para incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a su actividad ordinaria a través de, entre otras normas, la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y del Decreto aragonés 228/2006, de 21 de noviembre, por el que se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se regula la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos y se establecen otras medidas en materia de administración electrónica.

Es destacable, asimismo, la reciente aparición de nuevas normas en materia de contabilidad, a las que han de adaptarse las cooperativas, lo que requiere la modificación de la regulación del régimen económico de las sociedades cooperativas, que se contiene en la Ley de Cooperativas de Aragón. En este sentido, se han incorporado a la presente ley las disposiciones contenidas en la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

De otra parte, otros aspectos regulados en la Ley de Cooperativas de Aragón, referidos en muchos casos a sectores concretos del cooperativismo, colocan a éste en desventaja frente a otras figuras societarias, que han ido evolucionando de forma más ágil para adecuarse a la coyuntura socioeconómica actual.

Por todos estos motivos, las entidades asociativas representantes del cooperativismo, aglutinadas en el Consejo Aragonés del Cooperativismo y a través de éste, manifestaron la necesidad de modificar la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.

El conjunto de modificaciones que se introducen a través de la presente norma en el régimen jurídico de las sociedades cooperativas responde, por tanto, a un triple objetivo: dotar a este tipo de sociedades de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias; adaptar su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado internacionalmente sobre la base de la normativa de la Unión Europea; e introducir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las Cooperativas de Trabajo Asociado, de las Cooperativas Agrarias y de las Cooperativas de Viviendas.

Las principales modificaciones introducidas a lo largo del articulado de la ley son las siguientes:

Se definen más claramente aquellas actividades que la cooperativa puede llevar a cabo directamente con terceros no socios, por tener carácter meramente preparatorio, accesorio, complementario, subordinado o instrumental. También se amplía la regulación de las secciones de crédito, con la finalidad de crear un marco normativo básico que permita una implantación y un desarrollo mejores de esta figura.

En relación con los aspectos registrales, para una mayor organización y eficacia del Registro de Cooperativas y facilitar y garantizar el acceso de los ciudadanos al mismo, se prevé la adopción de los medios de gestión telemática que progresivamente se vayan implantando por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Respecto a los aspectos generales de las cooperativas, se han introducido a través de esta ley novedades esenciales. En primer lugar, y en cuanto a los requisitos para su constitución, se reduce a tres con carácter general el número mínimo de socios, sin perjuicio de las excepciones que puedan contenerse en la propia ley. En lo que se refiere al funcionamiento de sus órganos sociales, cabe señalar la introducción de la posibilidad de utilizar medios electrónicos o telemáticos para su convocatoria, facilitando así su funcionamiento. También se establece la obligación de que en la Asamblea General Universal estén presentes de forma directa todos los socios de la cooperativa, para salvaguardar mejor su naturaleza, y se procede a una mejor delimitación de las facultades que pueden ser delegadas o no por el Consejo Rector y de la posición de este órgano social en relación con la figura del director o gerente de la entidad.

Destaca asimismo en materia de régimen económico de las cooperativas la adaptación a la nueva regulación contable europea, según se regula en la ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Ley Mercantil en Materia Contable. En este sentido se introduce, al igual que ya se ha hecho en la ley que regula las cooperativas a nivel estatal, la posibilidad de desdoblar las aportaciones al capital social entre aquellas que han de ser reembolsables al socio en todo caso con motivo de su baja en la entidad y aquellas cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por Consejo Rector, posibilitando de esta manera la creación de un capital con mayor carácter de fijeza y estabilidad. Ello contribuirá, junto con el establecimiento de un capital social mínimo de la cooperativa que no habrá de ser inferior a tres mil euros, a un reforzamiento patrimonial, en línea con lo exigido en la letra y el espíritu de las nuevas normas contables.

En este mismo encuadre hay que situar la introducción de una nueva figura, novedosa en nuestro Derecho, que abre la posibilidad a la adquisición en cartera de participaciones por la propia cooperativa. Esta previsión, junto con otras más referidas fundamentalmente al reforzamiento de los fondos obligatorios de la entidad, contribuirá sin duda a una mejor consolidación de la situación económico-financiera de esta figura social, dado que se trata de elementos indisponibles de forma directa por el socio, cuya

finalidad es la de atender las necesidades sociales, reforzando su objeto y garantizando su supervivencia y mantenimiento ante situaciones adversas.

En este mismo sentido, y para finalizar la parte correspondiente a novedades de carácter económico, debe mencionarse la rectificación que efectúa en lo referente al destino del remanente de la cooperativa en los casos de disolución y liquidación o transformación, una de cuyas partidas fundamentales son las dotaciones existentes en el Fondo de Educación y Promoción. El destino a las Federaciones de Cooperativas con carácter principal es la consecuencia lógica de la actividad de éstas, ya que una de sus finalidades primordiales es el fomento del cooperativismo y la economía social, llevado a cabo por entidades nacidas en el seno del propio sector.

Otra novedad a destacar es la extensión a todas las clases de cooperativas de la facultad de poder llevar a cabo actividades que, en principio, son propias de otras pertenecientes a clase distinta, que hasta ahora solo se reservaba de forma directa y limitada para las cooperativas agrarias. Esta extensión requiere, sin embargo, que dichas actividades se diferencien a través de secciones de aquellas otras que constituyen el objeto social principal de la cooperativa y que sus beneficiarios sean únicamente socios de la entidad o sus familiares.

Además de las novedades que afectan con carácter general al régimen de funcionamiento, organización y actividades de la cooperativa en cuanto forma societaria, como ya se ha adelantado, la modificación que se opera a través de esta ley ha tenido especialmente en cuenta las necesidades de las cooperativas que operan en tres sectores concretos: el del trabajo asociado, el de vivienda y el agrario.

En cuanto a las Cooperativas de Trabajo Asociado, en primer lugar se destaca la introducción de la posibilidad de constituir la cooperativa con solo dos socios trabajadores a través de la implantación de la nueva figura de la «Pequeña Empresa Cooperativa», a la que también se le facilitan los trámites de constitución y registro. Su finalidad es fomentar la constitución de cooperativas de trabajadores como instrumento adecuado para dinamizar la actividad económica a través de esta modalidad de empresa de economía social, al igual que ya se viene realizando por otras comunidades autónomas. En segundo lugar, cabe destacar la creación de una nueva clase de cooperativa, la «Cooperativa de Trabajo Asociado de Transporte». Con ello se pretende atender a las necesidades concretas de un sector específico, que precisa de la creación de un modelo de empresa en el que se permita que, internamente, la cooperativa pueda otorgar un cierto grado de autonomía económica a los distintos socios que la integran, que en muchos casos aportan al capital y a la actividad de la sociedad su vehículo de transporte. De esta manera se posibilita que los ingresos y gastos específicos puedan individualizarse e imputarse internamente a cada vehículo, sin perjuicio de que, de cara a terceros, se mantenga la necesaria unidad empresarial. Por último, se actualizan y modifican puntualmente otros aspectos concretos de la regulación de las Cooperativas de Trabajo Asociado, como son el régimen jurídico del período de prueba, la cotización a la Seguridad Social, el acceso a la condición de socio trabajador desde la situación de trabajador contratado, o el concepto de centro de trabajo subordinado o accesorio.

En aquellas cooperativas destinadas a prestar servicios a empresarios y profesionales, se incrementa hasta un cincuenta por ciento la posibilidad de efectuar operaciones con terceros en cada ejercicio económico, tal y como establece la actual ley estatal, posibilidad que también se ha extendido a las Cooperativas Agrarias. En lo que se refiere a estas últimas, se ha procedido también a la modificación del sistema de voto ponderado y se ha buscado la fidelización de la relación del socio con la cooperativa mediante el establecimiento, con carácter genérico, de la obligación de suministro a través de la misma de todo lo necesario para su explotación y de la entrega de todos los productos que obtenga de sus explotaciones, siempre que estén incluidos en el objeto social de la cooperativa. Para facilitar su cumplimiento, se introduce también la obligación por parte de cada socio de presentar a la cooperativa una declaración de explotación agraria.

Igualmente, respecto a las Cooperativas de Viviendas, se ha llevado a cabo una reforma general, tratando aspectos relativos a su orga-

nización, gestión y régimen económico-financiero, con el fin principal de adaptarlas a la normativa que regula la vivienda protegida. En este sentido, cabe destacar un mejor aseguramiento de las cantidades que habrá de devolver al socio en caso de baja o inejecución de la promoción, y la estructuración del sistema de entrega por parte de éste de las cantidades destinadas a la construcción de la vivienda, de conformidad con las distintas fases este proceso, para el que también se fijan unos plazos máximos.

Otro aspecto fundamental en esta materia se refiere a una regulación más pormenorizada de las gestoras de viviendas, como pieza clave en este proceso. Al mismo tiempo, se crea la figura del promotor social de vivienda protegida, a través de una nueva disposición fi nal que modifica la norma específica que regula esta modalidad de vivienda. Esta técnica, posible en nuestro Derecho, responde a motivos de oportunidad por la conexión existente entre ambas materias, dado que una buena parte de la vivienda protegida se canaliza a través de la figura cooperativa. La incorporación en la normativa sectorial de vivienda permite que el nuevo régimen pueda aplicarse de inmediato, sin necesidad de esperar a futuras reformas legales que dejarían en total incertidumbre el régimen propuesto desde la legislación de cooperativas. Al mismo tiempo y por las mismas razones de oportunidad, se extiende la aplicación de la normativa cooperativa a las comunidades de bienes, cuando éstas promuevan vivienda protegida.

También se regula de una forma más concreta lo referente a la construcción por fases o promociones, que precisaba de un mayor desarrollo normativo tanto a nivel de funcionamiento interno como en lo que respecta a su relación con los órganos generales de la cooperativa.

Por último, en relación con algunas de las materias previstas en la ley, se concreta la competencia del departamento correspondiente en materia de cooperativas, asignando también la organización y gestión del Registro de Cooperativas al Instituto Aragonés de Empleo, y se habilita al Gobierno de Aragón para que regule las sociedades agrarias de transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.31.ª del Estatuto de Autonomía, dada su naturaleza de entidades asimilables a las cooperativas.

Artículo único. Modificación de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.

Uno. Se modifica el artículo 5 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 5. Operaciones con terceros.

Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios cuando estos tengan carácter preparatorio, accesorio, complementario, subordinado o instrumental, en los términos que establezcan sus Estatutos y con las condiciones y limitaciones que fija la presente ley o sus normas de desarrollo, siempre que tales actividades o servicios tengan como finalidad el desarrollo del objeto social y posibiliten el cumplimiento de los fines de la cooperativa. No se considerarán operaciones con terceros las resultantes de los acuerdos intercooperativos regulados en el artículo 91 de esta ley.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. Deberán llevar un sistema de contabilidad que permita determinar los resultados de las operaciones específicas de cada sección.»

Tres. Se modifica el apartado 6 del artículo 6 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que pasa a ser el nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 6 bis. Secciones de crédito.

Cualquier clase de cooperativa que no sea de crédito podrá prever en sus Estatutos la existencia de una sección de crédito, que deberá aprobarse en Asamblea General, sin personalidad jurídica independiente ni patrimonio propio, que actuará como intermediario financiero en las operaciones activas y pasivas de la cooperativa y de sus socios.

Al objeto de gestionar eficazmente sus fondos, podrá colocar sus excedentes de tesorería en depósitos de otras entidades financieras, fondos públicos y valores emitidos por empresas públicas, siempre y cuando el depósito realizado reúna garantías suficientes de seguridad y liquidez.

El volumen de las operaciones de las secciones de crédito no podrá superar en ningún caso el cincuenta por ciento de los recursos propios de la cooperativa.

La sección de crédito deberá llevar una contabilidad separada e independiente, sin perjuicio de la general de la cooperativa.

Las cooperativas con sección de crédito someterán anualmente sus estados fi nancieros a auditoría externa y depositarán el informe de auditoría junto con las cuentas anuales aprobadas.

Se comunicarán al Registro de Cooperativas, para que éste a su vez dé traslado al departamento competente en materia de entidades de crédito y seguros, los acuerdos de creación y cierre y otras modificaciones que se produzcan en las secciones de crédito, así como la contabilidad e informes de auditoría y cualquier otra información que dicho departamento solicite para el ejercicio de sus competencias.

Las cooperativas con sección de crédito no podrán incluir en su denominación las expresiones «cooperativa de crédito», «caja rural» u otras análogas, ni sus abreviaturas, que están reservadas legalmente a estas sociedades.

Sin perjuicio de los preceptos de carácter general que sean de aplicación a las secciones de crédito por hallarse contenidos en esta ley o en sus normas supletorias o de desarrollo, en aquello que les sea de aplicación se regirán supletoriamente por la normativa reguladora de las Cooperativas de Crédito.»

Cuatro. Se añade en el artículo 9 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, una nueva letra f bis), con la siguiente redacción:

«f bis) Carácter reembolsable o no de las aportaciones en caso de baja y casos y condiciones en los que el Consejo Rector puede rehusar el reembolso.»

Cinco. Se suprime la letra e) del apartado 2 del artículo 11 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, y se modifica el apartado 3 del mismo artículo, que queda redactado de la siguiente manera:

«3. Asimismo, los otorgantes conferirán en la escritura cualquier tipo de apoderamiento necesario tanto para el inicio como para el desarrollo de su actividad, incluso el de subsanación de la misma para el caso de que contenga algún defecto que obste a su inscripción.»

Seis. Se modifica el artículo 13 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, añadiendo los apartados 10 y 11, cuya redacción es la que sigue:

«10. El Registro de Cooperativas adoptará los medios de gestión telemática compatibles con su estructura y función que se consideren necesarios y se vayan implantando progresivamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente, tanto para el almacenamiento documental como para la elaboración de sus libros y asientos, podrá utilizar los soportes de carácter electrónico que precise.

11. Las cooperativas deberán comunicar anualmente al Registro de Cooperativas la información que en materia estadística sea requerida por la normativa aplicable al efecto, en relación con el número de socios que las integran a fecha de cierre de su ejercicio económico y, en su caso, la categoría o clase a la que pertenecen.»

Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«4. Las inscripciones de los actos relativos a nombramiento y cese de los miembros de los órganos sociales y cambio del domicilio social dentro o fuera del municipio en el que se desarrolle la actividad cooperativizada, según lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, se podrán practicar también mediante certificación con las firmas del Secretario y del Presidente del Consejo Rector, legitimadas notarialmente o autenticadas por funcionario competente.»

Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«3. Las cooperativas de primer grado, salvo en los casos en que la presente ley establezca lo contrario, habrán de estar integradas por, al menos, tres socios. Las de segundo y ulterior grado tendrán un mínimo de dos socios.»

Nueve. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«3. Los Estatutos podrán prever la existencia de socios colaboradores de la cooperativa, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en la consecución del mismo, que desembolsen la aportación fijada por la Asamblea General que no podrá ser superior al cuarenta y nueve por ciento de las aportaciones de la totalidad de los socios y, en su caso, fijarán los criterios de ponderada y equitativa participación de los mismos en los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa. No se les podrá exigir nuevas aportaciones al capital social. Tampoco podrán disponer de un conjunto de votos que, sumados entre sí, representen más del treinta por ciento de la totalidad de los votos de los socios existentes en los órganos sociales de la cooperativa.

Si lo establecen los Estatutos, podrán ser miembros del Consejo Rector, siempre que no superen la tercera parte de estos.

Los socios colaboradores, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tendrán derecho a participar en los resultados de la cooperativa, si así lo prevén expresamente los Estatutos o lo acuerda el Consejo Rector. En todo caso, se informará a la Asamblea General del alcance de esta participación en los resultados.

El régimen de responsabilidad de los socios colaboradores es el que se establece en el artículo 47 para los socios.

4. Las cooperativas podrán, si así se prevé en sus Estatutos, admitir a socios trabajadores de duración determinada con derechos y obligaciones propios equivalentes a los de duración indefinida, que serán regulados en los Estatutos o en el Reglamento de Régimen Interno. El número de socios trabajadores de duración determinada no podrá superar el veinte por ciento de los de carácter indefinido, salvo que el número de horas/año de trabajo realizadas en conjunto por los socios de duración determinada y los trabajadores por cuenta ajena no llegue al cincuenta por ciento del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores o de trabajo de carácter indefinido. Los socios trabajadores o de trabajo de duración determinada que acumulen un período de tres años en esa situación podrán optar a la adquisición de la condición de socio de duración indefinida, antes de llegar a los cinco años, siempre que esté en vigor la relación societaria. Una vez finalizada esta relación, no podrán ejercitar dicha opción. En todo caso, deberán cumplir los demás requisitos estatutariamente establecidos para los socios de duración indefinida.»

Diez. Se modifica la letra a) del artículo 22 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactada de la siguiente manera:

«a) En cualquier momento, el socio podrá causar baja voluntaria en la cooperativa observando el plazo de preaviso establecido en los Estatutos, que no tendrá una duración superior a tres meses. Si se ha fijado un plazo mínimo de permanencia, no podrá ser superior a cinco años, con las excepciones previstas en esta ley, pudiendo determinarse, en su caso, la imposibilidad de causar baja antes de finalizar el ejercicio económico. El plazo de preaviso habrá de observarse incluso una vez transcurrido el plazo mínimo de permanencia.

En el caso de que la Asamblea General haya adoptado acuerdos que impliquen inversiones, planes de financiación o cualquier otro tipo de decisiones que exijan aportaciones extraordinarias, y estos sean objeto de recurso, el socio que no haya recurrido deberá permanecer durante el plazo establecido y participar de la manera y con los requisitos exigidos por dicho acuerdo. En caso de incumplimiento, responderá frente a la cooperativa y frente a terceros por la responsabilidad contraída.»

Once. Se modifica el artículo 24 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24. Normas de disciplina social.

1. Los Estatutos establecerán las normas de disciplina social. Los socios sólo podrán ser sancionados por las faltas previamente tipificadas en los Estatutos. Las sanciones que pueden ser impuestas a los socios por cada clase de falta serán fijadas en los Estatutos y pueden ser de amonestación, económicas, de suspensión de derechos sociales o de expulsión. 2. Las infracciones leves prescriben al mes; las graves, a los dos meses; y las muy graves, a los tres meses. El plazo de prescripción empieza a contar el día en que el Consejo Rector tenga conocimiento de la comisión de la infracción por constancia en acta y, en cualquier caso, doce meses después de haber sido cometida. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta ni se notifica la resolución.

3. Los Estatutos fijarán los procedimientos sancionadores y los recursos que correspondan, respetando en cualquier caso las siguientes normas: a) La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo Rector o de los Rectores.

b) Es obligatoria la audiencia previa del interesado.

c) Las sanciones por faltas graves o muy graves son recurribles ante el Comité de Recursos o, si no lo hubiere, ante la Asamblea General en el plazo de treinta días desde la notificación de la sanción. d) El acuerdo de sanción puede ser impugnado ante la Asamblea General. En su caso, la ratificación de la sanción puede ser impugnada en el plazo de un mes desde la notificación por el trámite procesal de impugnación establecido en el artículo 36.

4. El alcance de la suspensión de los derechos del socio vendrá determinado necesariamente por los Estatutos sociales.»

Doce. Se añade en el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, una nueva letra e bis), con la siguiente redacción:

«e bis) Creación de secciones de crédito.»

Trece. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. La Asamblea General ordinaria será convocada por el Consejo Rector en el plazo establecido en el artículo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado, un veinte por ciento de los socios de la cooperativa deberán instarla del Consejo Rector en forma fehaciente, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. Si el requerimiento no fuese atendido en el plazo de treinta días, cualquiera de los socios de la cooperativa que haya instado al Consejo Rector podrá solicitar la convocatoria ante el Juez competente del domicilio social. Si se estimase la demanda, el Juez ordenará la convocatoria y designará a los socios o personas ajenas a la cooperativa que habrán de presidir la Asamblea General y ejercer de Secretario. 2. La Asamblea General ordinaria convocada fuera de plazo será válida, pero el Consejo Rector deberá justificar las razones que motivaron el retraso ante la Asamblea General y, si no fueran aceptadas por la misma, el Consejo Rector responderá, en su caso, de los perjuicios que de ello se deriven para la entidad y para los socios.»

Catorce. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. La convocatoria de la Asamblea General deberá efectuarse mediante anuncio en el domicilio social y con la publicidad prevista en los Estatutos, de manera que todos los socios tengan noticia de la convocatoria con una antelación mínima de diez días naturales, y máxima de treinta, a la fecha prevista para su celebración. Los Estatutos sociales podrán prever que la convocatoria se realice por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.»

«3. El orden del día será fijado por el Consejo Rector. Cualquier petición hecha por el veinte por ciento de los socios durante los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria deberá ser incluida en el orden del día.

4. No obstante lo anterior, la Asamblea General se entenderá válidamente constituida, con carácter de universal, siempre que estén presen-

tes la totalidad de los socios y acepten, unánimemente, su celebración y los asuntos a tratar, firmando todos ellos el acta. En ningún caso podrá nombrarse representante del socio para una Asamblea General Universal concreta, sin perjuicio de los poderes de representación que, con carácter general, aquel otorgue o tenga otorgados.»

Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. La Asamblea General habrá de celebrarse en la localidad del domicilio social de la cooperativa o en cualquier otra señalada por los Estatutos sociales o la Asamblea General anterior, salvo en el caso de la Asamblea General constituyente.»

Dieciséis. Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del artículo 34 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«2. Los acuerdos sobre fusión, escisión, disolución por la causa prevista en el artículo 67.1.c) de esta ley, emisión de obligaciones, transmisión por cualquier título, creación de secciones de crédito y, en general, cualesquiera que impliquen modificación de los Estatutos sociales requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los votos válidamente emitidos. El acuerdo relativo a la transformación de la sociedad cooperativa en otro tipo de entidad requerirá la mayoría de dos tercios del total de sus socios de pleno derecho.» «3. Para el resto de los acuerdos, los Estatutos sociales no podrán establecer una mayoría superior a los dos tercios de los votos presentes y representados o, en su caso, superior a más de la mitad de los votos sociales, salvo las excepciones previstas en esta ley.» «5. Las votaciones serán secretas, cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales o el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de los órganos sociales, así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción. Se adoptará, también mediante votación secreta, el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día, cuando así lo solicite un veinte por ciento de los votos presentes y representados.»

Diecisiete. Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 39 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. Los Estatutos de la sociedad regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector, así como la periodicidad con la que deba reunirse. Su convocatoria la efectuará el Presidente a iniciativa propia o de, al menos, la mayoría de los miembros del Consejo, pudiendo ser convocado por los que hayan hecho la petición si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días.»

Dieciocho. Se modifica el artículo 40 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 40. Delegación de facultades.

1. El Consejo Rector podrá delegar sus facultades, de forma permanente o por un período determinado, en uno de sus miembros como consejero delegado o en una Comisión ejecutiva, mediante el voto favorable de los dos tercios de sus componentes. Asimismo, podrá otorgar poderes a cualquier persona sobre facultades que no sean de competencia indelegable del Consejo Rector, y se recogerán en la correspondiente escritura de poder. Los acuerdos de delegación y, en su caso, de revocación de la misma se inscribirán en el Registro de Cooperativas.

2. Las facultades delegadas sólo podrán abarcar el tráfico empresarial ordinario de la cooperativa. En todo caso, el Consejo Rector conservará como indelegables las facultades de: a) Fijar las directrices generales de la cooperativa, con sujeción a la política establecida por la Asamblea General.

b) Controlar en todo momento las facultades delegadas.

c) Presentar a la Asamblea General la Memoria de su gestión, la rendición de cuentas y la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas.

d) Prestar avales o fianzas en favor de terceras personas, salvo en el caso de las Cooperativas de Crédito. e) Otorgar poderes generales. f) La

admisión, baja y expulsión de un socio. g) Adquirir por la cooperativa participaciones en cartera.

3. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo Rector en un consejero delegado y la designación de los miembros del Consejo que hayan de ocupar tales cargos, así como su revocación, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo Rector y no producirán efectos hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas.»

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. Los Estatutos determinarán el número y la duración de su mandato, que no será inferior a dos años ni superior a seis.»

Veinte. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 48 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. El capital social de la cooperativa, que será variable, estará formado por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, que se acreditarán mediante inscripción en el libro de registro de aportaciones al capital social y en la forma que determinen los Estatutos. El capital social mínimo de la cooperativa, fijado en Estatutos, no podrá ser inferior a tres mil euros, que habrá de estar desembolsado al menos en un veinticinco por ciento. Las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios podrán consistir en:

a) Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.

b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector.

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los Estatutos. Los Estatutos podrán prever que, cuando, en un ejercicio económico, el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector. El socio disconforme con el establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta de justificada, siempre que hubiese salvado expresamente su voto o, en su caso, estuviese ausente.»

«4. El importe total de las aportaciones de cada socio en las cooperativas de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas o socios colaboradores, no podrá exceder de un tercio del capital social.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. Las sucesivas aportaciones obligatorias al capital social se desembolsarán en la forma y plazos establecidos en los Estatutos o por la Asamblea General, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.1 y 2.»

Veintidós. Se modifica el artículo 51 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 51. Intereses.

1. Los Estatutos determinarán si las aportaciones al capital social pueden devengar intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés para las aportaciones obligatorias lo fi jarán los Estatutos o la Asamblea General y, para las voluntarias, el acuerdo de emisión, sin que en ningún caso pueda superar en tres puntos el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del acuerdo, y en cinco puntos para las voluntarias. 2. Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado por el Consejo Rector tendrán preferencia para percibir la remuneración que se establezca en los Estatutos, sin

que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del ejercicio.»

Veintitrés. Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado como sigue, y se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al mismo artículo, con el texto que figura a continuación:

«1. El balance de la cooperativa podrá ser actualizado en idénticos términos y con los mismos beneficios previstos en la normativa para las sociedades. Las aportaciones de los socios al capital social de la cooperativa, tanto las obligatorias como las voluntarias, se actualizarán si lo aprueba la Asamblea General y en la proporción que acuerde la misma.»

«3. Los criterios de atribución entre los socios de las plusvalías resultantes de la regularización de balance destinadas al capital social deberán ser aprobados por la Asamblea General. Podrán referirse, respetando lo que en su caso establezcan los Estatutos, bien al saldo realmente desembolsado de las aportaciones de capital de cada socio, o bien a su respectiva participación en la actividad cooperativizada desde la última actualización practicada, de acuerdo con las previsiones establecidas en el apartado 4 del presente artículo. 4. En la actualización de las aportaciones, se tomará como fecha de devengo la del acuerdo de regularización de balance o la del acuerdo de disposición de las reservas de regularización, adoptado por la Asamblea General. Tendrán derecho a dicha actualización todos aquellos socios que lo fuesen a la fecha de devengo elegida, con independencia de que causen baja como socios con posterioridad a dicha fecha. Una vez que la cuenta de actualización sea disponible, el citado derecho solamente se podrá ejercitar desde la fecha del acuerdo de disposición, adoptado por la Asamblea General.»

Veinticuatro. Se modifica el artículo 53 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 53. Reembolso de aportaciones.

Los Estatutos sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital en caso de baja en la cooperativa, de acuerdo con las normas fijadas en este artículo. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses, desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El socio que esté disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada por el Consejo Rector podrá impugnarlo por el procedimiento previsto en la ley y, en su caso, por el que establezcan los Estatutos.

b) En los supuestos de expulsión o baja no justificada, podrá aplicarse una deducción no superior al cuarenta o al veinte por ciento, respectivamente, del importe de las aportaciones obligatorias, una vez realizada la deducción por pérdidas. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo fijado en los Estatutos, se podrá establecer una deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior. Los estatutos fijarán el porcentaje a deducir, sin que éste pueda superar el treinta por ciento.

c) El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el plazo de reembolso a los causahabientes no podrá ser superior a un año desde que el hecho causante se ponga en conocimiento de la cooperativa. Una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, ésta no será susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el

interés legal del dinero, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del reembolso.

d) Para las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b), los plazos señalados en la letra anterior se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo Rector acuerde el reembolso.

e) Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) hayan causado baja, el reembolso que, en su caso, acuerde el Consejo Rector se efectuará por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de la baja.

f) Excepcionalmente, en los supuestos en que la devolución pueda poner en dificultad la estabilidad económica de la cooperativa, el departamento competente podrá ampliar los citados plazos, a petición de la misma, hasta el límite de diez años.

g) En todo caso, cuando existan compromisos anteriores a la baja del socio pendientes de cumplir, será de aplicación la previsión estatutaria a que se refiere el artículo 22.a) de la presente ley.

h) La reducción de la actividad cooperativizada por parte del socio, por el motivo que sea y aun siendo ésta definitiva sin causar baja en la cooperativa, no dará derecho al reembolso parcial de las aportaciones al capital social, salvo que exista una previsión estatutaria que lo posibilite.

i) En caso de ingreso de nuevos socios, los estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de estos deberán, preferentemente, efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.

j) En caso de disolución y liquidación de la cooperativa, y una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción, los titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios.»

Veinticinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 54 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados como sigue, y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 al mismo artículo, con el texto que figura a continuación:

«1. Las aportaciones sólo pueden transmitirse:

a) Por actos ínter vivos entre socios, y entre quienes vayan a adquirir dicha condición en los términos fijados en los Estatutos. Los Estatutos podrán prever que las aportaciones obligatorias iniciales de los nuevos socios, deban efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) cuyo reembolso hubiese sido rehusado por la cooperativa tras la baja de sus titulares. Esta transmisión se producirá, en primer lugar, a favor de los socios cuya baja haya sido calificada como obligatoria, y, a continuación, por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones. En caso de solicitudes de igual fecha, se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.

b) Por sucesión mortis causa.

2. En este último supuesto, la participación del causante en la cooperativa se repartirá entre los derechohabientes en la proporción que legalmente les corresponda, si fueran socios. Si no lo fueran, cada uno de ellos podrá solicitar al Consejo Rector, en el plazo de seis meses, la liquidación de su parte o su admisión como socio, según lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de esta ley, y en la cuantía que le haya correspondido en la partición hereditaria. Si ésta fuera inferior a la aportación obligatoria que deba realizar el nuevo socio, deberá suscribir y, en su caso, desembolsar la diferencia en el momento en que adquiera dicha condición.» «5. Los Estatutos podrán regular el derecho de adquisición preferente de las participaciones derivadas de bajas de socios, a favor de los socios o de la propia cooperativa, realizándose en primer lugar entre los socios de la misma clase; en segundo lugar, entre los socios cuya baja se haya calificado como obligatoria y tengan aportaciones

pendientes de reembolso; en tercer lugar, entre todos los socios en general; y, finalmente, a favor de la sociedad cooperativa. Este derecho se ejercerá por los socios en proporción a la actividad cooperativizada. 6. La adquisición en cartera por la cooperativa de las participaciones requerirá el acuerdo del Consejo Rector, siempre y cuando se establezca en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente a las aportaciones adquiridas que figuren en el activo, con cargo a reservas disponibles o excedentes acumulados pendientes de distribución, hasta el límite de su dotación. Dicha reserva indisponible deberá mantenerse en tanto las aportaciones no sean amortizadas. No obstante, no será necesaria la constitución de la reserva indisponible ni la compensación con nuevas aportaciones a capital en los siguientes supuestos:

a) Cuando las aportaciones se adquieren formando parte de un patrimonio adquirido a título universal.

b) Cuando las aportaciones se adquieran a título gratuito.

c) Cuando las aportaciones se adquieran como consecuencia de una compensación de créditos en una adjudicación judicial, para satisfacer un crédito de la cooperativa frente al titular de las aportaciones.

d) Cuando el valor nominal de las aportaciones adquiridas no exceda de la cuantía que resulte de sumar el diez por ciento del capital social y los Fondos de Reserva Obligatorios de la cooperativa.

e) Cuando el activo de la sociedad, minorado en el importe de las aportaciones adquiridas en cartera por la cooperativa, sea superior en un cincuenta por ciento a las deudas contraídas por la misma, aun en el caso de que estas no sean exigibles.»

Veintiséis. Se suprime completamente el apartado 6 del artículo 55 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, y se modifica su apartado 1, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. Los Estatutos o la Asamblea General podrán establecer cuotas de ingreso y periódicas que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrán ser superiores al resultado de dividir los Fondos de Reserva que figuren en el último balance aprobado por el número de socios o por el volumen de participación en la actividad cooperativizada y multiplicado por la actividad cooperativizada potencial del nuevo socio.»

Veintisiete. Se modifica el apartado 4 del artículo 56 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado como sigue:

«4. Los Estatutos establecerán los casos en que sea necesario someter a auditoría externa las cuentas anuales y el estado económico de la cooperativa y, en todo caso, en los supuestos previstos en la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo y en la presente ley. En los casos en que la auditoría sea preceptiva legalmente o se haya practicado a petición de la mayoría de socios, se depositará en el Registro de Cooperativas.»

Veintiocho. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 57 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«2. En todo caso, se incluirán como gastos deducibles para obtener el excedente neto los siguientes: a) El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión cooperativa, valorados a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos de los socios trabajadores y los socios de trabajo.

b) Los necesarios para la gestión cooperativa.

c) Los intereses debidos por las aportaciones al capital social regulados en el artículo 48 de esta ley, así como por las aportaciones y financiación de distinta naturaleza no integrada en el capital social.

d) Cualesquiera otros gastos deducibles autorizados por la legislación fiscal a estos efectos.»

«4. Se considerarán extracooperativos y se contabilizarán separadamente, destinándose como mínimo un cincuenta por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio, los excedentes obtenidos en las operaciones con terceros, los obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, los derivados de

inversiones o participaciones en sociedades de naturaleza no cooperativa, salvo las que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la propia actividad de la cooperativa, y los procedentes de plusvalías derivadas de la enajenación del activo inmovilizado no reinvertidas en su totalidad en activos de idéntico destino en un plazo no superior a tres años. Las cooperativas agrarias destinarán la totalidad de los resultados extracooperativos al Fondo de Reserva Obligatorio. Se considerarán también como extracooperativas las pérdidas procedentes de disminuciones patrimoniales.

En las Cooperativas de Trabajo Asociado, no se considerarán extracooperativos los resultados derivados de la prestación de trabajo de los trabajadores no socios, siempre que se cumplan los límites establecidos por la presente ley.

Las cooperativas de viviendas no contabilizarán separadamente los resultados extracooperativos dentro de cada promoción y realizarán las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio previstas en este apartado.»

Veintinueve. Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del artículo 58 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. De los excedentes del ejercicio económico previos al cálculo de impuestos, se destinará el resultado en un treinta por ciento como mínimo a dotar los fondos obligatorios. Una vez deducidos los impuestos y dotaciones a los Fondos Obligatorios, se destinará el resultado, en su caso, a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social, se destinará al menos un cinco por ciento al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, y un diez por ciento, al menos, cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe superior al doble del capital social.»

«4. Los Estatutos o la Asamblea General podrán prever, entre otras, las siguientes modalidades para el destino efectivo de dichos retornos:

a) Abono a los socios en el plazo que determine la Asamblea General.

b) Incorporación al capital como incremento de las aportaciones obligatorias de los socios, en la parte que les corresponda.

c) Constitución de un fondo, con límite de disponibilidad por la cooperativa a un plazo de cinco años y garantía de distribución posterior al socio titular en la forma que establezcan los Estatutos. Su remuneración no podrá exceder de la establecida en el artículo 51 de esta ley.

d) Retribución de las aportaciones al capital social, ya sean obligatorias o voluntarias.

e) Actualización de aportaciones.

f) Incremento de las dotaciones de los Fondos Obligatorios (Fondo de Reserva Obligatorio, Fondo de Educación y Promoción), o Reservas Estatutarias o Voluntarias irrepartibles o repartibles.

5. Los Estatutos deberán fijar los criterios para la imputación de las pérdidas del ejercicio económico. En la imputación de pérdidas, la cooperativa se sujetará a las siguientes reglas: a) Al Fondo de Reserva Obligatorio se imputará hasta un máximo del cincuenta por ciento de las mismas. La diferencia resultante se imputará a cada socio en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizados en la cooperativa o que estuviese obligado a realizar de acuerdo con los módulos básicos establecidos en los Estatutos sociales. En ningún caso se imputarán en función de las aportaciones de cada socio al capital social. En todo caso, las pérdidas procedentes de operaciones extracooperativas se imputarán previamente y en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio hasta el límite de su dotación. Si ésta fuese insuficiente para compensar dichas pérdidas, la diferencia se recogerá en una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros ingresos del fondo.

b) En caso de existir Fondo de Reserva Voluntario, podrá imputarse el porcentaje que acuerde la Asamblea General.

c) Las pérdidas se podrán imputar a cada socio, dentro del ejercicio, siguiente a aquel en que se hubieran producido, en función de su actividad cooperativizada. El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social que tengan el carácter de reintegrables o, en su caso, en

cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación.

d) Las pérdidas se podrán imputar a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, en un plazo máximo de siete años. En este caso, las pérdidas se comenzarán a amortizar por orden de antigüedad de las mismas. Si, transcurrido el plazo de siete años, quedasen pérdidas sin compensar, deberán satisfacerse directamente por el socio en el plazo de un mes a partir de la aprobación del último balance por la Asamblea General, en función de su actividad cooperativizada en los años de origen de las pérdidas.

e) Las pérdidas asumidas por la Asamblea General y no compensadas serán consideradas como un crédito a favor de la cooperativa, que podrá ser ejercitado aunque el socio haya causado baja voluntaria u obligatoria en la misma.»

Treinta. Se modifican los apartados 2, 4, y 6 del artículo 59 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, se introduce un nuevo apartado 7, y el anterior apartado 7 pasa a ser el nuevo apartado 8, que quedan redactados de la siguiente manera:

«2. El Fondo de Reserva Obligatorio es irrepartible entre los socios y se constituye: a) Con el porcentaje de los excedentes que establece el artículo 58.1 de esta ley. b) Con el cincuenta por ciento, al menos, de los beneficios extracooperativos. c) Con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja de los socios.

d) Con las cuotas de ingreso, si estuviesen establecidas en los Estatutos, y con aquellas cuotas periódicas en cuyo acuerdo de emisión se establezca expresamente que se llevarán directamente a este fondo.

e) Con las cantidades resultantes de la actualización de aportaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.2 de esta ley. f) Con las dotaciones previstas en el artículo 54.5 de esta ley.»

«4. El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa tiene por objeto la formación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas cooperativas, económicas y profesionales, la consecución de mejoras en los sistemas de prestaciones sociales, la prevención de los riesgos laborales y la vigilancia de la salud, la promoción social de los socios y trabajadores dentro del marco social y laboral, la ampliación de los sistemas cuyo objetivo sea facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, la educación y cuidado de los hijos de socios y trabajadores y las ayudas a las trabajadoras y socias víctimas de la violencia de género, el fomento y la difusión del cooperativismo en su entorno social, la promoción cultural profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental, y la realización de actividades intercooperativas.» «6. Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa puede ser aportado a una unión, federación o confederación de cooperativas, o a un organismo público. La entrega a estas entidades quedará condicionada por su destino a las finalidades indicadas en el apartado 4, a través de actuaciones propias o de otras personas físicas o jurídicas a las que dicha entidad destine los recursos recibidos. La cooperativa no tiene poder de disposición sobre esta contribución, más allá de destinarla a las finalidades indicadas, siendo, en consecuencia, inembargable y debiendo figurar en el pasivo del balance.

7. Las cantidades destinadas a lo largo del ejercicio a la realización de las finalidades indicadas en el apartado 4 podrán considerarse como un gasto previo del Fondo de Educación y Promoción a la propia distribución de los excedentes, realizándose el ajuste correspondiente una vez conocido el resultado del ejercicio. 8. El importe del referido fondo que no se haya aplicado deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en inversiones que garanticen suficientemente la seguridad, liquidez y rentabilidad del mismo, conforme a lo que establezcan los Estatutos.»

Treinta y uno. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 66 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, con la siguiente redacción:

«6. En los casos de transformación de una sociedad cooperativa en sociedad civil o mercantil, los saldos de los fondos de reserva obligatorio, el fondo de educación y cualesquiera otros fondos o reservas que estatutariamente no sean repartibles entre los socios recibirán el destino previsto en el artículo 69.e) de esta ley.»

Treinta y dos. Se modifica la letra e) del artículo 69 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactada de la siguiente manera:

«e) El sobrante, si lo hubiera, y el Fondo de Educación y Promoción se depositarán en la entidad asociativa, de entre las reguladas en el artículo 93 de la presente ley, a la que esté asociada la cooperativa o, en su defecto, en la que se decida en Asamblea General. Se depositarán asimismo certificación de los acuerdos vigentes relativos al destino del Fondo de Educación y Promoción y un listado de los socios a la fecha de dicha Asamblea General, con expresión de la parte que les corresponda en el sobrante.»

Treinta y tres. Se modifica el artículo 70 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado como sigue: «Artículo 70. Declaración de concurso.

1. A las cooperativas les será aplicable la legislación concursal general del Estado en los supuestos de insolvencia. 2. El auto que declare el concurso de una cooperativa se inscribirá en el correspondiente Registro de Cooperativas.»

Treinta y cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 71 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, con la siguiente redacción:

«4. Las cooperativas, al servicio de sus socios o familiares con los que convivan, podrán llevar a cabo cualquier tipo de actividad cooperativizada que sea distinta del objeto social propio de la clase a la que pertenezcan, siempre que ello esté establecido y regulado en sus Estatutos sociales. Dicha actividad habrá de llevarse a cabo de forma independiente a través de secciones, que tendrán contabilidad propia y la fiscalidad que les corresponda por normativa. Dicha actividad no habrá de afectar a los rendimientos cooperativizados que se deriven de la actividad que constituya el objeto principal de la cooperativa, de acuerdo con la clase a la que pertenezca. A cada sección se le aplicará el régimen jurídico específico que corresponda a la actividad cooperativizada que desarrolle.»

Treinta y cinco. Se modifican los apartados 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10 del artículo 72 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. Son Cooperativas de Trabajo Asociado aquellas que asocian principalmente a personas físicas que, mediante su trabajo, a jornada completa o parcial, realizan cualquier actividad económica o social de producción de bienes o servicios destinados a terceros. Constarán documentalmente las condiciones y distribución horaria de la jornada a tiempo parcial y sus posibles modificaciones. La relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria. Se entenderá a todos los efectos que el socio inicia la actividad cooperativizada cuando comience efectivamente la prestación de su trabajo.

Se entiende por actividad cooperativizada en las Cooperativas de Trabajo Asociado el trabajo que prestan en ellas los socios y trabajadores, siempre que se respeten los límites establecidos en el apartado 4 de este artículo.

2. Podrán ser socios trabajadores quienes legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. El número mínimo de socios trabajadores será de tres, con excepción de aquellas Cooperativas de Trabajo Asociado que obtengan la calificación de Pequeña Empresa Cooperativa, que estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de diez socios trabajadores. La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa.» «4. El trabajador con contrato indefinido con más de dos años de antigüedad que reúna los requisitos establecidos en los Estatutos deberá ser admitido como socio, previa solicitud y una vez superado el período de prueba si éste se hubiese previsto en los estatutos, no pudiéndosele exigir

el cumplimiento de obligaciones superiores a las ya efectuadas por los socios existentes. El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores. No se computarán en este porcentaje:

a) Los trabajadores que se incorporen a la cooperativa por subrogación legal, así como los que lo hagan en actividades sometidas a esta subrogación.

b) Los trabajadores que sustituyan a socios trabajadores o asalariados en situación de excedencia o incapacidad temporal.

c) Los trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo de carácter subordinado o accesorio. Se entenderá en todo caso como trabajo prestado en un centro de trabajo subordinado o accesorio el que se lleve a cabo por los trabajadores por cuenta ajena que contraten las cooperativas para prestar servicios de duración determinada en los locales del cliente o su beneficiario y para la Administración pública; también aquellas actividades que deba realizar la cooperativa en obras, montajes o actividades auxiliares, siempre que éstas no constituyan el objeto social principal de la cooperativa y se presten fuera de sus locales por exigencias propias de la actividad, y que la relación con la cooperativa no tenga carácter claramente estable y de duración indefinida.

d) Los trabajadores de cooperativas que operen como empresas de trabajo temporal, de conformidad con lo previsto en la normativa específica para este tipo de empresas.

e) Los trabajadores que se negasen expresamente a ser socios trabajadores.

Si las necesidades objetivas de la empresa obligaran a superar este porcentaje, excluido el personal asalariado relacionado precedentemente, ello será válido para un período que no exceda de tres meses; para superar dicho plazo, deberá solicitarse autorización motivada del departamento competente, que ha de resolver en el plazo de quince días. En caso de silencio, se entenderá concedida la autorización.

Las Pequeñas Empresas Cooperativas, durante un plazo máximo de cinco años desde la fecha de su constitución, podrán contratar a trabajadores en cualesquiera de sus modalidades, sin los límites previstos en este apartado. En cualquier caso, el número de trabajadores a contratar por la Pequeña Empresa Cooperativa no podrá exceder de cinco.

5. En las Cooperativas de Trabajo Asociado, los Estatutos podrán prever un período de prueba para los nuevos socios trabajadores que no excederá de seis meses. El período de prueba podrá ser reducido o suprimido de mutuo acuerdo. Los Estatutos podrán ampliar dicho plazo hasta doce meses para ocupar puestos directivos, de técnicos superiores o aquellos otros que, por sus características en cuanto a confianza o especial dedicación, determine el Consejo Rector o, en su caso, la Asamblea General. El número de socios trabajadores en prueba no podrá ser superior a un veinte por ciento a la vez respecto de los socios trabajadores en plenitud de derechos y obligaciones. Esta limitación no será aplicable durante los dos primeros años de constitución de la cooperativa.

No procederá el período de prueba si el trabajador ya hubiera estado en situación de prueba y la hubiera superado sin incorporarse como socio en los anteriores veinticinco meses desde que se resolvió la relación.

Si procediese el período de prueba, y se resolviera la condición de socio trabajador en período de prueba, de forma unilateral, por cualquiera de las partes, se entenderá renovada la relación jurídico-laboral existente al iniciarse el período de prueba.

Los socios trabajadores, durante el período de prueba, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás socios, con las siguientes particularidades:

a) Durante dicho período, ambas partes pueden resolver la relación por libre decisión unilateral.

b) No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad.

c) No podrán votar en la Asamblea General sobre materias que les afecten personal y directamente. d) No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de ingreso. e) No les alcanzará la imputación de las pérdidas que se produ-

jesen en la cooperativa durante el período de prueba.»

«7. Los socios trabajadores, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tienen derecho a percibir periódicamente, en el plazo no superior a un mes, anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa, por importe no inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. En aquellas cooperativas que así lo tengan establecido en sus Estatutos, procederá la participación en los resultados positivos por parte de los trabajadores por cuenta ajena en la forma y proporción que aquellos determinen.

8. Los Estatutos optarán por el régimen de Seguridad Social, al que se adscribirán todos sus socios trabajadores, pudiendo quedar asimilados a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia o autónomos, de acuerdo con la legislación existente en materia de Seguridad Social, siéndoles de aplicación a las cooperativas y a sus socios las mismas modalidades y peculiaridades del régimen elegido. Las Cooperativas de Trabajo Asociado que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, hubieran optado en sus Estatutos por asimilar como trabajadores autónomos del régimen especial correspondiente a sus socios trabajadores asumirán la obligación del pago de las cuotas y obligaciones de los socios durante su período activo en la cooperativa, sin perjuicio del sometimiento a la normativa reguladora del régimen correspondiente de la Seguridad Social. Las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo laboral y tendrán la consideración de partida deducible para la determinación del excedente neto definido en el artículo 57 de la ley.»

«10. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores, derivadas de la prestación del trabajo, se resolverán aplicando con carácter preferente esta ley, los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno de la cooperativa y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la misma. El conocimiento de las citadas cuestiones, una vez agotada la vía interna establecida en el párrafo anterior, corresponderá al órgano jurisdiccional que resulte competente.»

Treinta y seis. Se modifican la rúbrica y el contenido del apartado 3 del artículo 74 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, y se añaden dos nuevos apartados 4 y 5, quedando redactados de la siguiente manera:

«Artículo 74. Modificación, suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor y sucesión de empresa.

«3. Los socios trabajadores afectados por la suspensión temporal de la prestación de su trabajo perderán, proporcionalmente, mientras dure la suspensión, los derechos y obligaciones económicos de dicha prestación, conservando los restantes derechos y obligaciones. Dichos socios quedarán temporalmente excluidos de la aplicación de cualquier obligación que suponga tener que hacer frente a una aportación obligatoria a la cooperativa, aun cuando ésta hubiera sido debidamente aprobada por la Asamblea General. La aportación se hará efectiva cuando finalice la suspensión temporal. 4. Cuando una cooperativa deba subrogarse en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular, incorporará a los trabajadores por cuenta ajena afectados por esta subrogación, de acuerdo con lo previsto en la normativa laboral. Durante este proceso, no se tendrá en cuenta el límite legal previsto en esta ley sobre el número de horas/año del personal asalariado si fuere rebasado por la cooperativa, una vez ofrecida a los trabajadores incorporados la posibilidad de convertirse en socios. 5. Cuando una Cooperativa de Trabajo Asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios, concesión administrativa o situaciones contractuales análogas y un nuevo empresario se hiciese cargo de las mismas, los socios trabajadores tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido de acuerdo con la normativa laboral aplicable, como si hubiesen prestado su trabajo en la cooperativa con la condición de trabajadores por cuenta ajena.»

Treinta y siete. Se modifican íntegramente la rúbrica y el contenido del artículo 75 de la Ley

9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 75. Cooperativas de Trabajo Asociado de Transporte.

1. Serán aquellas Cooperativas de Trabajo Asociado cuyo objeto social consista en organizar y prestar servicios de transporte. 2. Los Estatutos sociales podrán establecer que todas o parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, estén formadas por uno o más vehículos, de las características que fije la cooperativa. Su tratamiento será el establecido por esta ley para las aportaciones no dinerarias. 3. En caso de baja del socio, el reembolso de las aportaciones en vehículos se hará mediante la devolución del vehículo y del fondo de amortización a él aplicado. 4. Los Estatutos podrán establecer que los ingresos, así como los gastos específicos a los que se refiere el artículo 57, se imputen internamente a cada vehículo que los haya producido, constituyendo cada uno de éstos una unidad de gestión. Frente a terceros deberá garantizarse la actuación unitaria de la cooperativa, siendo ésta última a todos los efectos la responsable como transportista frente al usuario.»

Treinta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. Las cooperativas de servicios podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros, hasta un cincuenta por ciento del volumen total de actividad cooperativizada realizada con los socios. Estas operaciones se reflejarán por separado en la contabilidad de la cooperativa.»

Treinta y nueve. Se modifica el artículo 79 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 79. Cooperativas de Transportistas.

Son aquellas cooperativas de servicios que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer la actividad de transportistas de personas, cosas o mixtos. Podrán desarrollar operaciones con terceros no socios siempre que una norma específica así lo autorice. Estas operaciones se reflejarán por separado en la contabilidad de la cooperativa.»

Cuarenta. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 80 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. Son Cooperativas Agrarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas del sector agroalimentario o forestales. También podrán asociar a otras Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, Comunidades de Regantes y a aquellas personas jurídicas que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a las de la propia Cooperativa. Tienen por finalidad la prestación de servicios y suministros, la producción, transformación, comercialización de los productos obtenidos y, en general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las explotaciones de sus socios o de la cooperativa, así como de las condiciones económicas y sociales del ámbito en que desarrollen su actividad. Podrán también suministrar bienes y servicios para el uso y consumo de sus socios.

Junto con su solicitud de alta, los socios deberán presentar una declaración de explotación familiar agrícola, ganadera o forestal. En el supuesto de que se produzca alguna modificación de la explotación declarada, ésta deberá acreditarse documentalmente. Se considerará explotación agrícola, ganadera o forestal del socio el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción agraria, primordialmente con fi nes de mercado.

Las Cooperativas Agrarias podrán, si así lo establecen sus Estatutos, llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad al servicio de sus socios o familiares con los que estos convivan, organizadas de forma independiente a través de secciones, que tendrán contabilidad propia.

Expresamente, las Cooperativas Agrarias podrán gestionar la contratación y contratar, si la normativa aplicable se lo permite, a trabaja-

dores eventuales para la realización de tareas agrarias con la finalidad de canalizar adecuadamente los flujos de mano de obra hacia las concretas necesidades de sus socios.

2. Los Estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia de los socios en la cooperativa, que no podrá ser superior a diez años. El incumplimiento de esta obligación no eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros ni de la que hubiere asumido con la cooperativa por inversiones realizadas y no amortizadas. Con ocasión de acuerdos de Asamblea General que impliquen la conveniencia de asegurar la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en niveles o plazos superiores a los exigidos por la ley o los Estatutos con carácter general, tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares, los socios podrán asumir voluntariamente dichos compromisos. En caso de incumplimiento, se estará a lo establecido en el artículo 22.a) de esta ley. 3. Las Cooperativas Agrarias podrán realizar operaciones con terceros en cada ejercicio económico hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del total de las realizadas con los socios, para cada tipo de suministro y actividad desarrollada por la cooperativa. En caso de concurrir circunstancias excepcionales no imputables a la cooperativa que pongan en peligro su existencia, el departamento competente podrá autorizar el sobrepasar los citados límites. Estas operaciones se reflejarán por separado en su contabilidad. 4. Los Estatutos establecerán el voto ponderado en función del volumen de participación del socio en las actividades cooperativizadas, sin que la diferencia pueda ser inferior de uno a tres votos, ni superior de uno a diez.» «7. Los Estatutos podrán establecer los módulos y formas de participación de los socios en las actividades cooperativizadas. A falta de previsión estatutaria, los socios entregarán la totalidad de los productos que obtengan en sus explotaciones agrarias, cuando pertenezcan a los tipos de productos que comercialice en cada momento la cooperativa. También estarán obligados a suministrarse en la misma de todo lo necesario para su explotación, siempre que la cooperativa disponga de ello. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 57.3 de esta ley. Cuando, por acuerdo de su Asamblea General, válidamente adoptado, se pongan en marcha nuevos servicios o actividades con obligación de utilización mínima o plena, se entenderá extendida a ellos esta obligación, salvo que, por justa causa, el socio lo comunique expresamente al Consejo Rector en el plazo de seis meses desde la adopción del acuerdo.»

Cuarenta y uno. Se modifican la rúbrica y los apartados 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9 del artículo 84 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados como sigue, y se suprime su actual apartado 10:

«Artículo 84. Concepto, caracteres y organización.

1. Son las que tienen por objeto procurar al precio de coste, exclusivamente para sus socios, viviendas, servicios o edificaciones complementarios, así como su rehabilitación, pudiendo organizar el uso y disfrute de los elementos comunes y regular la administración, conservación y mejora de los mismos en el modo que se establezca en los Estatutos. En relación con las viviendas protegidas, serán de aplicación en todo caso las limitaciones de precio y coste establecidas en su normativa específica. Podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objetivo social.

2. Pueden ser socios las personas físicas, así como las cooperativas y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro. En caso de baja del socio, para la devolución de las aportaciones que haya realizado se procederá del siguiente modo: a) Las aportaciones al capital serán devueltas por la cooperativa conforme a lo establecido en el artículo 53 de esta ley. b) Las aportaciones realizadas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados, siempre que no superen el veinte por ciento de su coste estimado, deberán ser íntegramente devueltas por la cooperativa dentro del plazo de quince días desde que el nuevo socio que sustituya al que causa baja haga efectivas sus aportaciones. En

todo caso, la devolución deberá hacerse efectiva dentro del plazo máximo de cinco años desde la baja del socio.

c) Las aportaciones realizadas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados que excedan del veinte por ciento de su coste estimado deberán ser devueltas por la cooperativa dentro del plazo de quince días desde que sea requerida para ello.

3. Varias personas interesadas en la consecución como titulares de una sola vivienda podrán adquirir la condición simultánea de socios, con derecho a expresar un único voto, haciéndose constar así en su especial inscripción como tales, y responderán solidariamente de las obligaciones como socios.» «5. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados a los socios mediante cualquier título legal. Si la cooperativa mantiene la propiedad, los Estatutos establecerán las normas a que habrán de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de estos y de la cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de otras cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad. Igualmente, podrán enajenar o arrendar a terceros no socios los locales o cualquier otra edificación complementaria de su propiedad, destinándose los importes obtenidos en estas operaciones a la minoración del coste de las viviendas y anejos vinculados para los socios.

6. Los Estatutos sociales podrán establecer el derecho de tanteo y retracto a favor de la cooperativa, en cuyo caso, si el socio titular pretendiera transmitir, ínter vivos, sus derechos sobre la vivienda o local antes de haber transcurrido cinco años o plazo superior establecido estatutariamente desde la fecha de concesión de la cédula de habitabilidad de la vivienda o local o del documento que legalmente le sustituya, deberá ponerlos a disposición de la cooperativa, que los ofrecerá a los socios expectantes por orden de antigüedad. El precio de tanteo será igual a la cantidad desembolsada por el socio transmitente, incrementada con la revalorización correspondiente al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre la fecha en que se entregó la vivienda y la de transmisión de derechos. Transcurridos tres meses desde que el socio pusiera en conocimiento del Consejo Rector el propósito de transmitir sus derechos sin que ningún socio expectante hubiera hecho uso de su derecho de preferencia para la adquisición de los mismos, el titular quedará autorizado a transmitirlo a terceros no socios.»

«8. Serán modalidad específica de esta clase de cooperativas las de construcción de plazas de aparcamiento para vehículos. A tal fin, podrán solicitar la concesión de suelo o subsuelo público por el plazo y condiciones que acuerden.

9. El departamento competente en materia de vivienda podrá declarar promotoras sociales preferentes de vivienda protegida a aquellas cooperativas de viviendas y empresas gestoras de cooperativas de viviendas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa de vivienda protegida, siempre que no hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones graves ni muy graves en materia de vivienda protegida, subvenciones públicas, Seguridad Social, trabajo o tributaria.»

Cuarenta y dos. Se modifica en su totalidad el artículo 85 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 85. Gestión y régimen económico-financiero.

1. Las cooperativas de viviendas podrán contratar los servicios de asesoramiento, la asistencia técnica o la gestión, al objeto de desarrollar plenamente su objeto social. Si dicha contratación se efectuase con empresas gestoras especializadas al efecto, mantendrán en todo caso la plena independencia y capacidad de decisión de sus órganos sociales. Las empresas gestoras de cooperativas podrán ser personas físicas o jurídicas que cuenten con una organización empresarial adecuada y suficiente para la prestación de estos servicios. Dichas empresas serán responsables de las decisiones y actuaciones que adopte o realice la cooperativa por su asesoramiento o gestión, así como por las actuaciones que realice por apoderamiento

conferido a su favor por la cooperativa. En cualesquiera supuestos en que una cooperativa de viviendas otorgase poderes de representación para el desarrollo de la gestión de la promoción, estos serán expresos y conferidos por escrito. Constará expresamente en el poder la prohibición de que el apoderado nombre a un sustituto suyo, no admitiéndose cláusulas de irrevocabilidad del poder ni de exoneración de la responsabilidad del apoderado.

2. Las cooperativas podrán realizar promociones inmobiliarias en distintas fases que tendrán la consideración de secciones o fases de la cooperativa y que se regularán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, con las siguientes especialidades: a) Las secciones o fases se constituirán y extinguirán por acuerdo del Consejo Rector, que deberá ser inscrito en el Registro de Cooperativas. Para la extinción deberá adoptarse acuerdo previo por la Asamblea de la sección.

b) Las secciones o fases contarán con una Asamblea General, integrada por los socios que vayan a obtener su vivienda en la correspondiente promoción y una comisión delegada de ésta. La Asamblea General de la sección podrá adoptar las decisiones que afecten a su gestión y patrimonio, además de las que correspondan a la Asamblea General de la cooperativa como preparatoria de la misma. La comisión delegada tendrá las facultades de gestión ordinaria que le correspondan de acuerdo con los Estatutos de la cooperativa y las que le sean delegadas por el Consejo Rector en relación con la promoción o fase. Será oída, en todo caso, antes de someter los acuerdos cuya adopción corresponda a la Asamblea de la sección o fase o al propio Consejo Rector de la cooperativa. c) El Consejo Rector y la Asamblea General de la cooperativa tienen con respecto a las secciones todas las facultades y competencias que la ley y los Estatutos les atribuyen con carácter general para la cooperativa, sin perjuicio de que pueda otorgar los apoderamientos que considere y del régimen de autonomía de las secciones o fases regulado en esta ley y en los Estatutos de la cooperativa.

d) En toda la documentación de la cooperativa que se refiera a la actividad de una sección se deberá identificar ésta.

e) Cuando en una cooperativa existan varias secciones, la Asamblea General de la cooperativa se constituirá por los delegados de las secciones previamente elegidos en su Asamblea de fase o sección, en la cual deberán adoptarse igualmente los acuerdos que competan a la Asamblea General de la Cooperativa, además de los propios de la sección. Los delegados de las secciones serán cooperativistas que vayan a obtener su vivienda en la promoción a la que representen y ejercerán el voto con mandato imperativo y de acuerdo con el número y clase de voto ejercido en las respectivas Asambleas de sección o fase.

3. La contratación de las empresas gestoras de cooperativas de viviendas, la adquisición de suelo, la concreción de los productos inmobiliarios a promover, la contratación de los profesionales integrantes de la dirección facultativa del proyecto y la obra, la de los préstamos para la financiación de la promoción y la de la construcción del inmueble deberán ser aprobados por la Asamblea General de la cooperativa o de la sección o fase en su caso. El acuerdo deberá ser adoptado con carácter previo al otorgamiento de los respectivos contratos, con excepción de la adquisición de suelo de las administraciones públicas o sus entidades instrumentales, en los que será suficiente la autorización conferida al efecto por la Asamblea General o de sección o fase, en su caso, a favor del Consejo Rector.

4. Las Cooperativas de Viviendas, antes de presentar las cuentas anuales para su aprobación a la Asamblea General, deberán someterlas a auditoría externa en los ejercicios económicos en que se produzca alguno de los siguientes supuestos: a) Que la cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a cincuenta.

b) Cualquiera que sea el número de viviendas y locales en promoción, cuando correspondan a distintas fases o cuando se construyan en distintos bloques que constituyan, a efectos económicos, promociones diferentes.

c) Cuando la cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del Consejo Rector o contratado a una empresa gestora.

d) Cuando lo prevean los Estatutos o lo acuerde la Asamblea General.

e) Cuando la promoción se lleve a cabo sobre suelo obtenido en una enajenación de suelo público.

En todo lo no establecido en este apartado sobre auditoría externa de las cuentas anuales de las Cooperativas de Viviendas, será de aplicación con carácter general lo establecido en la presente ley.

5. Las aportaciones realizadas por los cooperativistas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados deberán ser aseguradas por la cooperativa o la empresa gestora mediante aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice su devolución, más los intereses legales correspondientes, en caso de no obtener la calificación definitiva, no terminar las obras dentro del plazo fijado en la calificación provisional o tratándose de vivienda libre en la licencia o, en cualquiera de los casos señalados, en la prórroga reglamentariamente concedida.

6. Antes de la compra del suelo sobre el que haya de construirse vivienda protegida no podrán exigirse ni realizarse, por ningún concepto, aportaciones que superen el tres por ciento del precio máximo de la vivienda protegida de que se trate. Para adquirir el suelo, la aportación máxima de los socios no podrá superar la cantidad resultante de calcular el límite máximo de repercusión de suelo y urbanización en función de las características de la promoción conforme a la normativa vigente de vivienda protegida.

7. En la promoción de viviendas en régimen de cooperativa se observarán los siguientes plazos: a) La compra del suelo sobre el que haya de desarrollarse cada promoción o fase de viviendas protegidas deberá tener lugar dentro del plazo máximo de tres años contados desde la inscripción de la cooperativa, sección o fase en el Registro de Cooperativas.

b) Las obras de edificación se iniciarán dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de adquisición del suelo.

Dichos plazos podrán prorrogarse excepcionalmente y por causas no imputables a las cooperativas promotoras ni a sus entidades gestoras por un plazo máximo que no exceda la mitad de los mismos. Su incumplimiento o, en su caso, el de la prórroga será causa de disolución o descalificación de la cooperativa. La inspección de vivienda podrá instar del órgano competente el inicio del procedimiento de descalificación.»

Cuarenta y tres. Se modifica la letra c) del artículo 90 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactada de la siguiente manera:

«c) Los miembros del Consejo Rector, Interventores y Liquidadores se elegirán de entre los candidatos presentados por las entidades asociadas, de las que habrán de ser socios, cesando en sus cargos si perdiesen tal condición, manteniendo la cooperativa socia el cargo.»

Cuarenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 12 del artículo 94 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que quedan redactados de la siguiente manera:

«1. Corresponde al departamento competente en materia de cooperativas la inspección y fiscalización, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cumplimiento por las cooperativas de lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de las competencias que otros órganos específicos tengan encomendadas.» «12. El consejero titular del departamento competente en materia de cooperativas, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en la infracción cometida, podrá acordar la imposición de sanción consistente en la descalificación de la cooperativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.»

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 97 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. El departamento competente en materia de cooperativas tendrá la competencia con carácter general para el desarrollo de las funciones de promoción, fomento, difusión y formación del cooperativismo, sin perjuicio de las actuaciones que otros departamentos realicen en razón de sus competencias específicas.»

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Calificación de la Pequeña Empresa Cooperativa.

El procedimiento para la calificación e inscripción de una Cooperativa de Trabajo Asociado como Pequeña Empresa Cooperativa se regulará en el Reglamento del Registro de Cooperativas de Aragón.

En el marco de los procesos de implantación de la Administración electrónica, se facilitará el establecimiento de sistemas y procedimientos que agilicen los trámites necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución de la Pequeña Empresa Cooperativa, a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en las normas que resulten de aplicación, en particular las que regulan el empleo de dichas técnicas por los notarios, los registradores y las Administraciones públicas. El departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de cooperativas podrá establecer puntos de asesoramiento e inicio de tramitación de las Pequeñas Empresas Cooperativas de Aragón, en colaboración con las entidades asociativas del sector cooperativo y otras que se dediquen al fomento de la economía social.

Dicho departamento aprobará un modelo de Estatutos sociales que se pondrá a disposición de las personas interesadas en la constitución de Pequeñas Empresas Cooperativas. El Registro de Cooperativas dará preferencia a los actos de tramitación relativos a la constitución de este tipo de empresas, siempre que se utilice el citado modelo de Estatutos sociales.

Con la finalidad de facilitar la presentación de los documentos que acompañan a las cuentas anuales de las Pequeñas Empresas Cooperativas, para su depósito en el Registro de Cooperativas de Aragón, su Reglamento establecerá modelos de solicitud y de certificación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Adaptación de Estatutos de Cooperativas Agrarias.

Las Cooperativas Agrarias deberán adaptar el contenido de sus Estatutos sociales a las prescripciones específicas para esta clase de cooperativas recogidas en la presente ley en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.

Igualmente y a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 80.1, los socios de las Cooperativas Agrarias que se encuentren ya de alta en las mismas a la entrada en vigor de esta ley deberán presentar en el plazo de seis meses la declaración de explotación prevista en el citado precepto.

Segunda. Entrada en vigor de las disposiciones sobre Cooperativas de Viviendas.

El régimen de las Cooperativas de Viviendas establecido en esta ley será de aplicación a todas las Cooperativas de Viviendas, aun cuando ya estuviesen inscritas en el Registro de Cooperativas en la fecha de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Cláusula derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Creación del Instituto Aragonés de Empleo.

Único. Se modifica el artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Creación del Instituto Aragonés de Empleo, que establece sus funciones, añadiendo un nuevo apartado 9 con el siguiente texto:

«9. La organización y gestión de los Registros de Cooperativas de Aragón y de Sociedades Laborales, así como las demás funciones que se deriven de ello.»

Segunda. Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de política de vivienda protegida.

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 9 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de política de vivienda protegida, con la siguiente redacción:

«3. Las comunidades de bienes, las entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas. y sus empresas gestoras, cuando promuevan viviendas protegidas, quedarán sujetas a lo establecido en las disposiciones específicas reguladoras de las cooperativas de viviendas, con excepción de las relativas a la promoción por fases y al régimen especial de los promotores sociales preferentes de vivienda protegida. »

Dos. Se añade una nueva disposición adicional séptima en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de política de vivienda protegida, con la siguiente redacción:

«Séptima. Promotores sociales preferentes de vivienda protegida.

1. El departamento competente en materia de vivienda podrá declarar promotores sociales preferentes de vivienda protegida a aquellos promotores, cooperativas de viviendas y empresas gestoras de cooperativas de viviendas que cumplan, al menos, las siguientes condiciones:

a) Haber impulsado en Aragón, directa o indirectamente y como mínimo, más de ochocientas viviendas protegidas en los doce últimos años. Reglamentariamente, con la finalidad de estimular la promoción de vivienda protegida en el medio rural, podrán establecerse umbrales mínimos específicos en función del número de viviendas o de promociones cuando todas se hayan impulsado en municipios de Aragón de población inferior a ocho mil habitantes.

b) No haber sido sancionados por la comisión de infracciones graves ni muy graves en materia de vivienda protegida, subvenciones públicas, Seguridad Social, trabajo o tributaria.

2. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico de los promotores sociales preferentes de vivienda protegida, que incluirá, al menos, las siguientes cuestiones: a) El procedimiento y las condiciones de declaración, que tendrá lugar previa convocatoria pública. b) La duración de la declaración, que no podrá ser inferior a tres años siempre que se mantengan las condiciones exigibles. c) Las obligaciones específicas de los promotores sociales preferentes, desde la perspectiva de la comunicación, la relación con sus clientes de vivienda protegida y, en su caso, la resolución de conflictos con estos.

d) La adjudicación por procedimiento restringido entre los promotores sociales preferentes para la promoción concertada de viviendas protegidas sobre suelos procedentes de los patrimonios públicos de suelo con calificación adecuada a tal fin. La convocatoria deberá motivarse por razones de interés público y para dar respuesta a necesidades de vivienda de colectivos específicos, que hayan de atenderse mediante tipologías adecuadas de vivienda protegida de escasa oferta en el ámbito de demanda en el que se ubiquen los terrenos.

3. La condición de promotor social preferente se acreditará mediante certificado expedido al efecto por el departamento competente en materia de vivienda, que indicará al menos el período de vigencia y las condiciones esenciales de la declaración.»

Tercera. Equivalencia en euros.

Las cantidades que aparecen expresadas en pesetas en la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, se entenderán referidas a su equivalente en euros.

Cuarta. Regulación de las sociedades agrarias de transformación.

Se faculta al Gobierno de Aragón para regular la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades agrarias de transformación que se constituyan en Aragón y desarrollen en su territorio su actividad principal. La regulación que se apruebe tomará en cuenta la evolución de las circunstancias económicas y sociales del sector agroalimentario, y favorecerá su competitividad, así como la incorporación de las mujeres y los jóvenes.

Quinta. Autorización para refundir textos.

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará el decreto legislativo que refunda la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, con los correspondientes preceptos contenidos en esta ley. 2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Sexta. Autorización normativa.

Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias exigidas para el desarrollo de esta ley.

Séptima. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón».

Zaragoza, 22 de junio de 2010.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU.

Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (Capítulo IV) (BOCM 308, de 29 de diciembre)

PREÁMBULO

La presente ley contiene la regulación de diversas medidas fiscales y administrativas vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. Su contenido lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria que anualmente acompañan a la Ley de Presupuestos, así como otras medidas de diferente carácter que afectan al régimen presupuestario y patrimonial, a la gestión de recursos humanos, a los organismos vinculados o relacionados con la Administración regional y a la actividad administrativa que ésta desarrolla.

IV

En el Capítulo IV se incluye un nuevo artículo 14 bis en la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, con el fin de incorporar la regulación de los novedosos sistemas institucionales de protección (los denominados SIP). Los sistemas institucionales de protección fueron regulados en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición), que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, entre otros, mediante el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, y la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. Se trata de una nueva fórmula de integración de entidades de crédito que sin tener las características propias de una fusión permite a las entidades participantes enfrentarse a los retos de futuro y a las nuevas estrategias de consolidación ante la actual coyuntura financiera internacional. Por la especial incidencia que la creación de esos sistemas institucionales de protección puede tener en la estructura, recursos, solvencia y gestión social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid, la participación de una de estas Cajas en uno de esos sistemas se sujeta a autorización previa de la Consejería competente.

Por otra parte, se modifica la mayoría exigible para la revocación de la atribución de funciones ejecutivas al Presidente de la entidad, fijándola en los dos tercios de los miembros del Consejo de Administración, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad al ejercicio de esas funciones ejecutivas.

Además, se modifica la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, en consonancia con la nueva legislación mercantil en materia contable. Los nuevos criterios contables derivados de dicha legislación y que serán plenamente aplicables a partir del 1 de enero de 2010, implicarían importantes perjuicios a las cooperativas en materia de imagen y solvencia, ya que el capital social de éstas tradicionalmente tiene la característica de ser reembolsable a los socios, lo que acarrea la consideración contable de pasivo y no de patrimonio neto. Con la modificación, se habilita a las cooperativas a crear aportaciones al capital social cuyos propietarios no tengan el derecho incondicional a su reembolso, de modo que puedan ser consideradas contablemente fondos propios y no pasivos.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

Artículo 11. Modificación parcial de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 4/2003, de 11 de

marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se añade un nuevo artículo 14 bis, con la siguiente redacción:

"Artículo 14 bis. Sistemas institucionales de protección.

La participación de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid en un sistema institucional de protección según lo previsto en la normativa vigente, requerirá la autorización previa de la Consejería competente".

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 63 de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, que queda redactada de la siguiente forma:

"a) Requerirán para su validez el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. En el caso de la revocación de tales acuerdos se requerirá el voto favorable de dos tercios de los miembros del Consejo".

Artículo 12. Modificación parcial de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

Uno. El apartado 1 del artículo 49 queda redactado del siguiente modo:

"1. El capital social estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de sus socios y, en su caso, asociados que podrán ser:

a) Aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja.

b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o por la Asamblea General si así se establece en los Estatutos.

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los Estatutos.

Los Estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector o, en su caso, al de la Asamblea General.

El socio disconforme con las decisiones de la Asamblea General en esta materia, tanto si suponen modificación de los Estatutos como si no, podrá darse de baja que será calificada como justificada, aplicándose al respecto el procedimiento previsto en el artículo 68.5 de esta ley.

Los Estatutos fijarán el capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar una cooperativa. Dicho capital no podrá ser inferior a mil ochocientos euros, excepto en las Cooperativas de Escolares que podrá ser de cualquier cuantía.

El capital social deberá estar desembolsado como mínimo en un veinticinco por ciento en el momento constitutivo¿.

Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 52 en los siguientes términos:

"4. Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b) de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado, tendrán preferencia para percibir la remuneración que se establezca en los Estatutos, sin que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del ejercicio".

Tres. El apartado 1 del artículo 55 queda redactado de la siguiente manera:

"1. Los Estatutos Sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital social, en su caso actualizadas, en el supuesto de baja en la cooperativa. La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de situación correspondiente al semestre en que se haya producido la baja".

Cuatro. Se añaden los apartados 6 y 7 al artículo 55 con la siguiente redacción:

"6. Para las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b), los plazos señalados en el apar-

tado 3 se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo Rector o, en su caso, la Asamblea General acuerde el reembolso. Cuando los titulares de dichas aportaciones hayan causado baja, el reembolso se efectuará por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de baja.

7. En caso de ingreso de nuevos socios los Estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de los nuevos socios deberán preferentemente efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones".

Cinco. Se añade un apartado 4 al artículo 101 en los siguientes términos:

"4. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b) los titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe de la reserva de educación y promoción y antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios".

Seis. Se adiciona un apartado 5 al artículo 105 con el siguiente tenor literal:

"5. Será de aplicación igualmente la regulación estatal sobre bajas obligatorias de socios por causas económicas, técnicas, organizativas, o de fuerza mayor, al objeto de mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa. En el caso de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector o en su caso, por la Asamblea General, y no se acuerde su reembolso inmediato, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir dichas participaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja en los términos que acuerde la Asamblea General".

Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre (BOE 185, de 1 de agosto)

En el marco de los objetivos de la Estrategia Renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo, el Consejo de Ministros en su reunión de 20 de junio de 2008 adoptó el Acuerdo sobre el desarrollo del Plan de Reducción de Cargas Administrativas y la Mejora de la Regulación, que introdujo medidas dirigidas a reducir la carga administrativa que soportan las empresas. Este plan contiene un conjunto de propuestas de simplificación de procedimientos a poner en práctica a finales de 2009. El Consejo de Ministros, anticipándose a dicha fecha, aprobó el 27 de junio de 2008 un primer conjunto de medidas de reducción de cargas administrativas.

Como continuación de este primer acuerdo, el Consejo de Ministros adoptó otro, de fecha 14 de agosto de 2008, por el que se aprueban medidas a corto plazo para reducir cargas administrativas. Tales medidas afectan a procedimientos cuyos responsables son distintos departamentos ministeriales, entre ellos, el Ministerio de Economía y Hacienda y, dentro de éste, a procedimientos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Con esa finalidad de simplificación de procedimientos, este real decreto lleva a cabo modificaciones en distintos artículos del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. En concreto, en cuanto a la reducción del plazo para la resolución de consultas por el Ministro de Economía y Hacienda sobre el carácter asegurador o no de determinadas operaciones; el régimen de comunicaciones a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación a la modificación de la documentación aportada para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad; la supresión de la obligación de presentar anualmente información detallada acerca de la ejecución del programa de actividades; la supresión de la necesidad de orden ministerial para el inicio del período de información pública para autorizar operaciones societarias entre entidades aseguradoras; la reducción de trámites en relación con la acreditación de presentación de escrituras públicas en el Registro Mercantil; y la ampliación de la periodicidad de la remisión de la memoria sobre la marcha de la liquidación, las desviaciones observadas y las medidas correctoras a adoptar.

En otro orden de cosas, este real decreto modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados con el objeto de introducir un régimen específico de información previa a los asegurados en materia de seguros de decesos.

Considerados en su conjunto, los seguros del ramo de decesos se caracterizan por haber logrado una gran difusión social y por la utilización de distintas fórmulas de aseguramiento de la contingencia de fallecimiento, con modelos de comercialización característicos del ramo. Esta situación de madurez del ramo, unida a la

aparición de nuevos productos y modalidades de aseguramiento en las que el nivel de información transmitida por la aseguradora al asegurado se convierte en un factor crítico y relevante a la hora de valorar el grado de cumplimiento de la obligada transparencia en el ámbito de los contratos de seguros lleva a la conclusión de que resulta necesario proponer ciertas modificaciones normativas para, con ello, establecer unas nuevas bases en materia de transparencia que posibiliten continuar con el elevado nivel de desarrollo del ramo en su conjunto.

Estas modificaciones se llevan a cabo mediante la creación de un nuevo artículo 105.bis en el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.

Asimismo, el real decreto da nueva redacción al artículo 13.2 del Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1439/2002, de 27 de diciembre, con objeto de simplificar el régimen de comunicaciones a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación a la modificación de la documentación aportada para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad, y en línea con la modificación propuesta en el artículo 5 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.

La disposición final segunda del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, habilita al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, a desarrollar la ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria, así como, en general, en todas aquellas susceptibles de desarrollo reglamentario en que sea preciso para su correcta ejecución, mediante la aprobación de su reglamento y las modificaciones ulteriores de este que sean necesarias.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, con la aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 2009,

DISPONGO

Artículo primero. Modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«3. Las dudas que puedan surgir sobre la calificación de una operación, a efectos de su sometimiento a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y a este Reglamento, serán resueltas en vía administrativa por el Ministro de Economía y Hacienda. Cuando la duda se refiera a si la operación forma parte de la Seguridad Social obligatoria se solicitará informe previo del Ministerio competente por razón de la materia.

A estos efectos, las entidades aseguradoras y cualquier persona que acredite ser titular de un interés legítimo podrán formular consultas mediante escrito dirigido a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el que, con relación a la cuestión planteada, se expresarán con claridad y con extensión necesaria los antecedentes y las circunstancias del caso, el objeto de la consulta y los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración. En dicho escrito se hará constar el nombre, apellidos, denominación o razón social, domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que le represente, así como el lugar, fecha y firma de aquéllos.

Si el escrito de consulta no reuniera los requisitos señalados en los apartados anteriores, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito será archivado sin más trámite. En caso de resultar ajustada la consulta a tales requisitos o subsanadas en tiempo y forma las deficiencias advertidas, la Dirección

General de Seguros y Fondos de Pensiones remitirá las actuaciones, con su propuesta de resolución, al Ministro de Economía y Hacienda.

En la contestación, el órgano competente no estará obligado a aplicar los criterios manifestados en contestaciones a consultas similares evacuadas con anterioridad, si bien deberá motivarse el cambio de criterio.

La contestación se notificará al interesado en el plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción de la consulta en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, de la subsanación de las deficiencias advertidas y contra la misma, en su carácter de mera información y no de acto administrativo, no podrá entablarse recurso alguno, sin perjuicio de que puedan impugnarse el acto o actos administrativos dictados de acuerdo con los criterios manifestados en la misma.»

Dos. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las modificaciones de la documentación que haya servido de base para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad aseguradora se notificarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitiendo, en su caso, certificación íntegra de los acuerdos de los órganos sociales competentes, dentro de los diez días siguientes a la aprobación del acta correspondiente.

No obstante, en el supuesto de modificación de la relación de socios a que hace referencia el artículo 4 de este Reglamento, lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será aplicable cuando las participaciones tengan la calificación de significativas o cuando, sin tener tal calificación, sean iguales o superiores al 5 por 100 del capital o de los derechos de voto.

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones copia autorizada de la escritura de elevación a públicos de tales acuerdos, cuando ello proceda. En caso de que deban inscribirse tales acuerdos en el Registro Mercantil, la copia autorizada de la escritura a la que se refiere este párrafo se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro.

Cualquier modificación de los representantes designados en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.f) del reglamento deberá ser comunicada al Consorcio de Compensación de Seguros.

2. Las modificaciones de la documentación aportada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros cuando se trate de los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros a que se refiere el artículo 4.1.f) del reglamento, que determinen que la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento para el otorgamiento de la autorización administrativa, darán lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación, sin perjuicio del posible trámite de subsanación previsto en el artículo 26.3 de la ley.»

Tres. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:

«Durante los tres primeros ejercicios, si la actividad de la entidad no se ajusta a su programa de actividades, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar las medidas oportunas para proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios de contratos de seguros. A fin de verificar su ejecución, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir información detallada durante este período.»

Cuatro. El primer párrafo del apartado 1, el apartado 2, el apartado 4 y el apartado 7 del artículo 70 quedan redactados del siguiente modo:

«1. La cesión de cartera requerirá autorización del Ministro de Economía y Hacienda, para lo cual deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: […]»

«2. Una vez presentada la documentación precitada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad interesada a publicar

anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde la cedente tenga su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de cesión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la cesión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la cesión.»

«4. Una vez autorizada, la cesión se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger los acuerdos de cesión, traspaso patrimonial y, en su caso, de disolución, y se inscribirá en el Registro Mercantil. Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como justificación de su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiese producido.»

«7. En aquellos supuestos en los que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley, los tomadores de seguro puedan resolver los contratos, deberá notificárseles individualmente tal derecho. El derecho de resolución podrá ser ejercitado en el plazo de un mes contado desde la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la orden ministerial, teniendo derecho, además, al reembolso de la parte de prima no consumida.»

Cinco. El primer párrafo del apartado 1, el apartado 2 y el apartado 4 del artículo 71 quedan redactados del siguiente modo:

«1. La transformación de una entidad aseguradora en otra de naturaleza jurídica o clase distinta, prevista por la Ley, requerirá autorización del Ministro de Economía y Hacienda, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación [...]:»

«2. Una vez presentada la documentación relacionada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad a publicar anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde tenga su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de transformación y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la transformación. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la transformación.»

«4. Autorizada la transformación se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger, además de cuantas otras menciones resulten preceptivas, el acuerdo de transformación, las liquidaciones efectuadas a los socios, el balance final de la entidad que se transforma y las modificaciones estatutarias correspondientes, y se inscribirá en el Registro Mercantil.

Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como la justificación de su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiese producido.»

Seis. El primer párrafo del apartado 1, el apartado 2, el apartado 4 y el apartado 7 del artículo 72 quedan redactados del siguiente modo:

«1. La fusión requerirá autorización del Ministro de Economía y Hacienda, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: [...]»

«2. Presentada dicha documentación junto con la solicitud de autorización, mediante Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a las entidades interesadas la publicación de anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de las provincias donde tengan su domi-

cilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de fusión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la fusión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la fusión.»

«4. Autorizada la fusión se otorgará la correspondiente escritura pública. En el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, se remitirá copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acreditando asimismo su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiese producido.»

«7. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de concentraciones económicas. En concreto, si la operación de fusión supera los umbrales previstos en el artículo 8.1.a) o b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los partícipes habrán de notificar la operación en los términos previstos en el artículo 9 de la citada ley, comunicando al mismo tiempo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones esta notificación. Consecuentemente, el procedimiento previsto en este artículo se suspenderá hasta la terminación del procedimiento eventualmente iniciado por la Comisión Nacional de la Competencia o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de acuerdo con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.»

Siete. El apartado 3, el apartado 6 y el apartado 8 del artículo 73 quedan redactados del siguiente modo:

«3. La escisión requerirá la autorización del Ministro de Economía y Hacienda, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación precisada en el artículo 72 de este Reglamento.»

«6. Presentada la documentación relacionada junto con la solicitud de autorización, mediante Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad interesada a publicar anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde tenga su domicilio social y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de escisión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la escisión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la escisión.»

«8. Autorizada la escisión se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger, además de cuantas otras menciones resulten preceptivas, los acuerdos de escisión, la constitución de una nueva entidad, en su caso, el traspaso patrimonial y el balance inicial de la nueva entidad. Dicha escritura pública se inscribirá en el Registro Mercantil.

Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acreditando asimismo su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiera producido.»

Ocho. El título del artículo 87 y su apartado 2.b) pasan a tener la siguiente redacción:

«Artículo 87. Documentación a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por los administradores y por los liquidadores.»

«2. Además, los liquidadores de la entidad deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o a los interventores si la liquidación fuese intervenida, la siguiente información: […]

b) Con periodicidad semestral: memoria sobre la marcha de la liquidación, las desviaciones observadas y las medidas correctoras a adoptar. No obstante, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o los interventores si la

liquidación fuese intervenida, podrán requerir esta información trimestralmente.»

Nueve. Se añade un nuevo artículo 105 bis con la siguiente redacción.

«Artículo 105 bis. Deber particular de información en el caso de seguros de decesos.

Además de las obligaciones establecidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 104 de este Reglamento, antes de la celebración de un contrato de seguro de decesos, en cualquiera de sus modalidades de cobertura, se deberá hacer entrega al tomador del seguro de una nota informativa redactada de forma clara y precisa, con el siguiente contenido:

1. En función de cuál sea la modalidad del seguro de decesos que se está ofertando:

a) Identificación de la modalidad conforme a la siguiente tipificación: a prima nivelada, natural o seminatural.

b) Definición de la modalidad que se está ofertando, características y método de cálculo de la prima inicial.

2. Para cualquiera de las modalidades del seguro de decesos que se está ofertando:

a) Identificación de los factores de riesgo objetivos a considerar en la tasa de prima a aplicar en las sucesivas renovaciones de la póliza: edad del asegurado, variaciones en el capital asegurado, evolución en los costes de los servicios funerarios u otros.

b) Cuadro evolutivo estimado de las primas comerciales anuales hasta que el asegurado alcance la edad de noventa años, elaborado conforme a las siguientes especificaciones:

1.º Detalle de la evolución previsible de las primas comerciales anuales a partir de la edad del asegurado en el momento de la contratación de la póliza, expresadas en tasas sobre 1.000 euros de capital asegurado inicial.

2.º Detalle de la evolución de los capitales asegurados.

c) Información sobre las actualizaciones de capitales asegurados y de primas a aplicar en las renovaciones y plazo previo al vencimiento y forma en la que se van a realizar las comunicaciones al tomador del seguro.

d) Garantías accesorias opcionales a la cobertura de decesos que se ofrecen en la misma póliza, con indicación del importe de la prima correspondiente a cada una de ellas cuando correspondan a otro ramo de seguro.

e) Condiciones de resolución del contrato.

f) Supuestos de renuncia, por parte de la entidad aseguradora, a oponerse a la renovación de la póliza a su vencimiento.

g) Existencia, o no, del derecho de rehabilitación de la póliza y normas por las que se rige, en su caso.»

Artículo segundo. Modificación del Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.

El apartado 2 del artículo 13 «Ampliación de actividad y modificación de la documentación aportada» del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, queda redactado del siguiente modo:

«2. Las modificaciones de la documentación que haya servido de base para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad aseguradora se notificarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, remitiendo, en su caso, certificación íntegra de los acuerdos de los órganos sociales competentes dentro de los diez días siguientes a la aprobación del acta correspondiente.

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones copia autorizada de la escritura de elevación a públicos de tales acuerdos, cuando ello proceda. En caso de que deban inscribirse tales acuerdos en el Registro Mercantil, la copia autorizada de la escritura a que se refiere este párrafo se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro.

Las modificaciones de la documentación aportada que determinen que la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en la Ley y en este Reglamento para el otorgamiento de la autorización administrativa darán lugar al inicio del procedimiento

administrativo de revocación, sin perjuicio del posible trámite de subsanación prevenido en el artículo 26.3 de la ley.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de este real decreto quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo en él establecido.

Disposición final primera. Carácter básico.

Las disposiciones contenidas en este real decreto tienen la consideración de bases de la ordenación de los seguros dictadas al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución, excepto las modificaciones de los artículos 70.7, 71, 72 y 73 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en el Consulado Honorario de España en Funchal, el 31 de julio de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda,
ELENA SALGADO MÉNDEZ

Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 29, 3 de febrero)

El artículo 9.2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, establece que, sin perjuicio de la inscripción de las empresas de inserción en el Registro competente de la comunidad autónoma donde se encuentre su centro de trabajo, se creará por el Ministerio de Trabajo e Inmigración un Registro Administrativo de Empresas de Inserción a los únicos efectos de coordinación e intercambio de información.

Asimismo, la disposición final cuarta de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, insta al Gobierno a aprobar en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de la referida Ley, el reglamento de funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de Inserción a efectos de coordinación e intercambio de información registral y estadística con los registros competentes de las comunidades autónomas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y de la Ministra de Sanidad y Política Social, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de enero de 2010,

DISPONGO

Artículo 1. Creación, objeto y adscripción.

1. El presente real decreto tiene por objeto crear el Registro Administrativo de Empresas de Inserción en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como regular su organización y funcionamiento propios.

2. Dicho Registro Administrativo tiene como finalidad la coordinación e intercambio de información con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas.

3. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción estará adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 2. Naturaleza del Registro Administrativo de Empresas de Inserción.

El Registro Administrativo de Empresas de Inserción es un registro público y gratuito.

Artículo 3. Organización del Registro Administrativo de Empresas de Inserción.

1. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción llevará un Libro de Inscripción de Empresas de Inserción, abriéndose una hoja registral por cada empresa calificada en el Registro autonómico competente, donde podrán constar los siguientes datos:

a) Número de registro que se le asigne.

b) Denominación de la empresa, con indicación de su forma jurídica, e identificación fiscal.

c) Objeto social.

d) Sector de la actividad económica.

e) Domicilio social.

f) Domicilio del centro o centros de trabajo con que cuenta la empresa en cada comunidad autónoma.

g) Capital social.

h) Razón social de las entidades promotoras, su identificación fiscal y su participación en el capital social.

i) Número de trabajadores que se encuentren en proceso de inserción y el total de la plantilla (en cada comunidad autónoma).

j) Fecha de la resolución de calificación.

2. Corresponde a los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas facilitar y actualizar los datos señalados en el apartado anterior. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción se llevará por el procedimiento electrónico que se establezca de acuerdo a un sistema de registro común con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas.

3. La competencia para la conservación y custodia del Libro de Inscripción de Empresas de Inserción, así como la práctica de las inscripciones previstas en el presente real decreto y la expedición de certificados sobre los datos que constan en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal.

El Registro dispondrá los medios organizativos y técnicos adecuados para garantizar la seguridad e interoperabilidad del registro electrónico, de acuerdo con lo que establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Artículo 4. Coordinación e intercambio de información con las comunidades autónomas.

1. Los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas remitirán semestralmente al Registro Administrativo de Empresas de Inserción la información señalada en el artículo 3.1 de las empresas que se inscriban, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

2. El Registro Administrativo de Empresas de Inserción remitirá semestralmente a todas las comunidades autónomas información estadística sobre el número de empresas de inserción, sector de la actividad económica, número de trabajadores en proceso de inserción y de trabajadores en plantilla y tipos de contratos respectivos.

3. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en este artículo se mantendrá la oportuna colaboración entre el Registro Administrativo de las Empresas de Inserción y los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas.

Disposición transitoria única. Suministro de información registral.

1. Los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas tendrán un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente real decreto para remitir al Registro Administrativo de Empresas de Inserción los datos señalados en el artículo 3.1.

2. La primera remisión de la información estadística a que alude el artículo 4.2 se realizará en un plazo de tres meses a partir de la recepción en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de los datos previstos en el apartado anterior.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 22 de enero de 2010.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

DOCUMENTACIÓN

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Distintos tipos de empresa» (2009/C 318/05). 1 de octurbre de 2009

Ponente: Mr. Cabra de Luna - Coponente: Ms. Zvolská

El 10 de julio de 2008, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Distintos tipos de empresa».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de septiembre de 2009 (ponente: Miguel Ángel CABRA DE LUNA; coponente: Marie ZVOLSKA).

En su 456 o Pleno de los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2009 (sesión del 1 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 113 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El presente dictamen se propone como objetivo describir la diversidad de formas de empresa existente en la Unión Europea (UE), cuya salvaguarda y fomento son muy importantes para alcanzar el mercado único y mantener el modelo social europeo, así como para conseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo, competitividad y cohesión social.

1.2 El dictamen se centra en la necesidad de que el marco legal regulatorio de las empresas y de la política de competencia promueva de forma coherente la diversidad y la pluralidad de formas de empresa, que constituyen uno de los principales activos de la UE, a fin de lograr la igualdad de condiciones entre todos los diferentes tipos de empresas teniendo en cuenta las características de cada uno.

1.3 El pluralismo y la diversidad de las diferentes formas de empresa son reconocidos tanto en el Tratado como en los hechos, a través de los diferentes estatutos jurídicos ya aprobados y aquellos que están todavía en fase de estudio.

1.4 Esta diversidad contribuye a la riqueza de la UE y tiene una dimensión central para Europa, cuya divisa es «Unidos en la diversidad». Todas las formas de emprender son la expresión de una parte de la historia europea, y cada una es portadora de nuestra memoria y cultura colectivas, de «nuestras culturas». Esta diversidad merece ser preservada.

1.5 Esta diversidad constituye igualmente una base indispensable para el éxito de los objetivos de Lisboa en materia de crecimiento, empleo, desarrollo sostenible y cohesión social basada en el mantenimiento y el desarrollo de la competitividad de las empresas.

1.6 El derecho de la competencia no debe tener como objetivo la uniformidad sino proporcionar un marco legal igualitario de aplicación entre las diferentes formas de empresa, que deben poder desarrollarse conservando sus propios objetivos y modalidades de funcionamiento.

1.7 El CESE solicita a la Comisión que inicie los trabajos para aprobar sendos estatutos europeos de las asociaciones y las mutualidades y se felicita por los trabajos iniciados sobre el estatuto europeo de las fundaciones que esperamos concluyan próximamente con la aprobación del Estatuto de la Fundación Europea. Asimismo recibe con agrado la simplificación del reglamento de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), cuya complejidad ralentiza su desarrollo.

1.8 Las redes y servicios de apoyo y de información, asesoramiento jurídico, asistencia en temas de marketing y otros servicios deben cubrir la pluralidad de formas de empresa.

1.9 El CESE exhorta a la Comisión a respetar la identidad de las cooperativas en materia contable, de modo que el capital social de los socios sea considerado como fondo propio de las cooperativas y no como deuda mientras que el socio no se convierta en acreedor al darse de baja.

1.10 Las estadísticas económicas sobre cooperativas, mutualidades, asociaciones, funda-

ciones y otras empresas similares son muy limitadas y heterogéneas, lo que dificulta la realización de análisis sobre las mismas y la evaluación de su contribución a los grandes objetivos macroeconómicos.

1.10.1 Por ello, el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de registros estadísticos de las empresas anteriormente mencionadas. En particular, la elaboración de sus cuentas satélite, según los criterios armonizados por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-1995) en el «Manual for drawing up the satellite accounts of Companies in the Social Economy: Cooperatives and Mutual Societies»[1] y en el «Informe del CESE sobre la Economía Social en la Unión Europea»[2].

1.11 El CESE pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de conceder medidas compensatorias a las empresas sobre la base de su utilidad social comprobada o de su contribución contrastada al desarrollo regional[3].

1.12 El CESE solicita a la Comisión Europea que, junto con un observatorio de la diversidad de formas de empresa, en cuanto elemento esencial para la competitividad europea, desarrolle los instrumentos orgánicos necesarios ya existentes, cuyo papel sería velar para que las empresas no sufran discriminación en ninguna de las políticas que las afectan y coordinarse con los distintos servicios de la Comisión al efecto.

1.13 Por último, el CESE invita a que, en aquellos casos que demuestren su representatividad, las organizaciones más representativas de la diversidad de formas de empresa sean involucradas en el diálogo social.

2. Diversidad de formas de empresa y mercado interior en la Unión Europea

2.1 Las diversas formas de las empresas existentes en la Unión Europea se derivan de nuestra compleja y variada evolución histórica. Cada una de ellas responde a un determinado contexto histórico y a una situación social y económica, a menudo diferentes en cada país europeo. Por otra parte, las empresas tienen que evolucionar y se adaptan continuamente a la evolución de las sociedades y las tendencias del mercado, incluso modificando su forma jurídica. El pluralismo y la diversidad de diferentes formas de empresa constituyen un valioso patrimonio de la Unión Europea, imprescindible para el logro de los objetivos establecidos por la Estrategia de Lisboa en materia de crecimiento, empleo, desarrollo sostenible y cohesión social basada en el mantenimiento y el desarrollo de la competitividad de las empresas. La defensa y preservación de dicha diversidad constituyen objetivos de primer orden para garantizar el desarrollo de mercados competitivos, la eficiencia económica y la competitividad de los agentes económicos, manteniendo la cohesión social de la UE.

2.2 Esto es reconocido por las instituciones europeas a través de las disposiciones contenidas en los artículos 48, 81 y 82 del Tratado, y en el Tratado de Lisboa[4], cuyo artículo 3.3 propugna como objetivo de la Unión una economía social de mercado, basada en el equilibrio entre las reglas del mercado y la protección social de los individuos en tanto que trabajadores y ciudadanos.

2.3 La diversidad de formas de empresa puede definirse en función de diferentes criterios como el tamaño, su estructura jurídica, sus formas de acceso a la financiación, sus objetivos, los diferentes derechos políticos y económicos atribuidos al capital (distribución de beneficios y dividendos, poder de voto) o la propia composición de este último, público o privado, la designación de gestores, su importancia para la economía (Europea, nacional y local), el empleo, el riesgo de quiebra, etc.

Todo ello crea una matriz de la diversidad que puede apreciarse simplificadamente en el siguiente cuadro:

1 . «Manual for drawing up the satellite accounts of Companies in the Social Economy: Co-operatives and Mutual Societies,» CIRIEC, en nombre de la Comisión Europea, 2006.

2. CIRIEC, «La Economía Social en la Unión Europea», CESE, Bruselas 2008, www.cese.europea.eu, ISBN 928-92-830-08-59-0

3 .DO C 234 de 22.9.2005.

4. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea tras la aprobación del Tratado de Lisboa. DO C 115 de 09.5.2008.

DIVERSIDAD DE FORMAS DE EMPRESA EN LA UNIÓN EUROPEA

Tamaño tipo	Multinacional	Grande	Pequeña y mediana
Pública (propiedad del sector público)	X	X	X
Cotizada en bolsa (listed)	X	X	X
No cotizadas en bolsa (unlisted)		X	X
Familiares		X	X
Sociedades colectivas, civiles, comanditarias (partnership)	X	X	X
Cooperativas	X	X(*)	X(*)
Mutualidades		X(*)	X(*)
Fundaciones		X(*)	X(*)
Asociaciones		X(*)	X(*)
Otras formas no lucrativas que pueden encontrarse en diferentes Estados miembros		X(*)	X(*)

* Son diferentes tipos de empresa que en algunos Estados miembros, el Parlamento, la Comisión Europea y el CESE se conocen con el nombre de empresas de economía social, EES. Nos encontramos ante una categoría sociológica, no jurídica.

Según la diversa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[5], las fundaciones, asociaciones y demás entidades no lucrativas pueden ser «operadores económicos» por cuanto realizan «actividades económicas» en el sentido de los artículos 43 y 49 del Tratado CE, y por lo tanto se incluyen en esta clasificación.

2.4 Aunque la finalidad común de cualquier tipo de empresa consiste en crear valor y maximizar resultados, los parámetros o conceptos de medición de dichos valores y resultados pueden ser distintos según el tipo de empresas y según los objetivos perseguidos por quienes las controlan o se benefician de su actividad. En algunos casos, la maximización de resultados consiste en obtener la mayor rentabilidad del capital invertido para los socios accionistas; en otros, la creación de valor y optimización de resultados se traduce en maximizar la calidad de los servicios ofrecidos a los socios o al público en general (por ejemplo, en una cooperativa de enseñanza cuyos socios propietarios son las familias o en una mutualidad de previsión social, o en las obligaciones de los servicios públicos).

2.4.1 También puede ocurrir que algunas grandes empresas no tengan socios accionistas y sus beneficios financieros se destinen a la reinversión o al cumplimiento de fines sociales de interés general, como ocurre en las cajas de ahorros de algunos países europeos[6].

2.4.2 Además, en algunas PYME y microempresas enraizadas en el ámbito local, la generación de valor no se traduce únicamente en beneficios económicos sino en un propósito

5. Véanse, por ejemplo, los asuntos acumulados C-180/98, C-184/98, Pavlov. Asunto C-352/85, Bond van Adverteerders.

6. Desde hace 50 años, la literatura económica ha subrayado la diversidad de funciones objetivo según los tipos de empresa (B.Ward, (1958); E. D. Domar (1967); J. Vanek (1970); J. Meade (1972) y J.L. Monzón (1989). Autores citados en: Manual for drawing up… Ídem nota 1.

social, como las condiciones de trabajo, la autogestión, etc.

2.5 A continuación se describen más detalladamente las distintas modalidades de empresa según su tamaño y, seguidamente, según su tipología en función de la propiedad.

2.6 Las multinacionales y las grandes empresas que habitualmente cotizan en bolsa debido a su dimensión se consolidan en el ámbito de la productividad y la competitividad de los sistemas económicos, y cuando consiguen resultados positivos pueden mantener también niveles de empleo elevados[7].

2.7 Cada vez en mayor medida, las ventajas competitivas de las empresas se fundamentan en estrategias competitivas en las que la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i) adquieren una dimensión central. Las empresas multinacionales y las grandes empresas desempeñan un papel de liderazgo en la I+D+i desarrollada por el sector privado de la economía en la UE, aunque puede que aún no haya suficientes multinacionales ni grandes empresas en los sectores líderes de la economía global. Además, junto a la importancia económica y laboral que en sí mismas tienen las grandes empresas y las multinacionales, es preciso considerar que, frecuentemente, cada una de estas empresas se configura como eje de extensas redes de producción mundial integradas bien por PYME muy relacionadas entre sí (gran empresa en red) o por empresas independientes (redes de producción modular). Precisamente es en los países europeos con mayor peso específico de multinacionales y grandes empresas donde más pronto se está frenando la caída de la producción y del empleo provocada por la actual crisis económica.

2.8 La externalización que estas empresas han realizado en los últimos decenios de muchas fases de sus procesos productivos y de infraestructuras de servicios que ahora son producidas por PYME supone que, a menudo, los niveles de producción y de empleo de estas últimas dependen, entre otros factores, de la demanda de las multinacionales y grandes empresas que, por lo tanto, constituyen una vía para el posicionamiento de Europa en el mercado global. Aunque de las 40 mayores empresas industriales del mundo, el 30 % pertenecían a la UE[8], su valor de mercado solo representa el 24 % del total y en algunos sectores de tecnología punta como los basados en las tecnologías de la información y la comunicación la participación de la UE se reduce a una sola gran empresa.

2.9 Las PYME, las redes de PYME, las microempresas y los trabajadores autónomos han promovido importantes cambios tecnológicos en los últimos decenios y son la base de la economía europea: el 99 % de las empresas de la UE son PYME y proporcionan el 66 % del empleo[9]. Normalmente son empresas no cotizadas en bolsa, si bien pueden utilizar la cotización bursátil para ampliar capital o desarrollar el capital-riesgo (venture capital).

2.9.1 En general, debería haber apoyo a las PYME, que no se consigue sólo a través del Small Business Act[10]. Las PYME constituyen frecuentemente una vía para el mantenimiento del empleo ya que los grupos de interés que promueven y controlan estas empresas son ciudadanos vinculados al territorio en el que actúan, habiendo demostrado una gran capacidad para crear y mantener empleo. Las PYME «constituyen las incubadoras naturales de la cultura empresarial», escuelas permanentes de formación de directivos y jefes de empresa.

7. En algunos casos las grandes empresas pueden no tener socios accionistas y no distribuyen beneficios bajo ninguna modalidad, como ocurre con las cajas de ahorros de algunos países europeos. También hay grandes empresas, cooperativas con títulos de capital, que no cotizan en bolsa o mutualidades que funcionan con fondos propios y no con capital adquirido por los socios.

8. www.forbes.com The Global 2000, 4.2.2008.

9. DO C 120 de 20.5.2005, pág. 10, (punto 2.1); DO C 112 de 30.4.2004, pág. 105 (punto 1.7); «Small Business Act» enel DO C 182 de 4.8.2009, pág. 30.

10. COM(2008) 394 final – «Pensar primero a pequeña escala» – «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas.

2.10 En función de su propietario, las empresas de interés general pueden ser públicas, de capital mixto, o pueden incluso tener la forma legal de empresa privada. Geográficamente, pueden ser tanto de carácter multinacional, nacional o local, pese a que la mayoría operan en el ámbito local o regional. Sus actividades se centran en la provisión de servicios de interés general, como por ejemplo transporte público, energía, agua, gestión de residuos, comunicaciones, servicios sociales, atención sanitaria, educación, etc. No obstante, no se excluye que estas empresas participen también en actividades comerciales, siempre que cumplan con la directiva sobre transparencia 93/84/EEC[11]. A la vez que persiguen el interés general, sus beneficios se reinvierten en actividades regionales y locales; por lo tanto contribuyen en gran medida a la cohesión social, económica y regional. Las empresas proveedoras de servicios de interés general, como proveedoras de servicios esenciales, son actores esenciales para impulsar la economía en general invirtiendo en sectores clave que tengan un efecto palanca sobre el resto de la economía (electricidad, telecomunicaciones y su infraestructura, transporte, etc.).

2.11 Los propietarios de las empresas cotizadas en bolsa (listed enterprises) son sus accionistas registrados. Los accionistas compran y venden sus acciones en los mercados bursátiles públicos.

2.12 Las empresas no cotizadas en bolsa pueden ser grandes y pequeñas y sus títulos de propiedad (acciones, participaciones sociales u otros títulos) no están sometidos por definición a la cotización en bolsa. Sin embargo, en muchos casos, también las empresas no cotizadas se orientan hacia la cotización bursátil, especialmente si el capital riesgo o los inversores de capital privado están involucrados. Incluso las PYME privadas pueden utilizar la cotización bursátil en las ampliaciones de capital que les permita la expansión empresarial.

2.13 Las empresas familiares constituyen un poderoso instrumento de difusión de la cultura empresarial y siguen siendo el medio de entrada por excelencia al mundo de los negocios para millones de ciudadanos, no solo en las PYME, donde son mayoría, sino también en las grandes empresas familiares, que en países tan significativos como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia suponen cifras de entre un 12 % y un 30 % del total de grandes empresas[12]. Las empresas familiares, grandes o pequeñas, se caracterizan por que el núcleo familiar ejerce el control permanente de la empresa, aunque sea una sociedad por acciones. En estos casos puede no haber interés en la cotización bursátil.

2.14 Las sociedades colectivas, civiles o comanditarias (partnership) son empresas comerciales típicas del mundo anglosajón, pero existentes también en otros países de la UE, constituidas frecuentemente por profesionales. Estas empresas de «partenariado» entre personas físicas constituyen un eficaz instrumento de participación de los profesionales cualificados (del Derecho, la Contabilidad y otras profesiones) en el mundo de los negocios de servicios profesionales. Este tipo de empresas es propiedad de los socios, cuyo principal vínculo, junto al capital aportado, está constituido por su propio trabajo. Cuando los socios se jubilan o se dan de baja transfieren a la sociedad sus participaciones sociales.

2.15 Finalmente, y para completar este análisis del variado elenco de empresas existentes en la UE, existe una gran diversidad de empresas privadas en la UE que comparten características similares de organización y funcionamiento, desarrollando una actividad de finalidad social con el objetivo prioritario de satisfacer necesidades de las personas antes que de retribuir a

11. Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros y las empresas públicas (DO L 254, 10.12.1993, pág.16)

12. COLLI, A. FERNÁNDEZ, P., Y ROSE, M. (2003): «National Determinants of Family Firm Development? Family Firms in Britain, Spain and Italy in the Nineteenth and Twentieth Centuries», Enterprise & Society, 4, 28-64.

inversores de capital[13]. Estas empresas se identifican principalmente con las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones[14]. Los documentos de la Comisión, el Parlamento Europeo y el CESE suelen agrupar a este conjunto de empresas bajo la denominación común de empresas de economía social (EES)[15], si bien esta denominación no es utilizada en todos los países de la UE, empleándose en otros casos las expresiones «tercer sector»[16], «tercer sistema», «economía solidaria» y otras, aunque describen empresas que «comparten las mismas características en todas partes de Europa»[17].

3. La dimensión social

3.1 Aunque las multinacionales, grandes empresas y PYME no tengan una finalidad explícita de bienestar social, su actuación en los mercados contribuye de forma determinante a la competitividad y al empleo y tienen una trascendente dimensión social. Esta dimensión general, social y territorial es muy evidente en el caso de las PYME y microempresas locales fuertemente ligadas al territorio.

3.2 Cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones son agentes de gran importancia en la UE, con notable actividad económica en tres de los cinco sectores institucionales en que el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-1995) agrupa a todos los centros de decisión económica de cada economía nacional[18]. La economía social representa el 10 % del conjunto de las empresas europeas, es decir, 2 millones de empresas[19] y el 7 %[20] del empleo asalariado total. Las cooperativas agrupan a 143 millones de socios, las mutualidades a 120 millones y las asociaciones al 50 % de la ciudadanía de la UE[21].

3.2.1 Sean grandes o pequeñas, estas empresas se localizan en aquellos territorios y/o ámbitos sociales en los que existen problemas y desafíos que amenazan el mercado interior y la cohesión social, internalizando costes sociales y generando externalidades positivas.

3.2.2 Por su enraizamiento en las comunidades locales y por la prioridad dada en sus objetivos de satisfacer las necesidades de las personas, estas empresas no se deslocalizan, combatiendo de forma eficaz la despoblación de zonas rurales y contribuyendo al desarrollo de las regiones y municipios desfavorecidos[22].

3.3 *Las empresas proveedoras de servicios de interés general* constituyen un fuerte eje de la dimensión social europea. Tienen un papel

13. «La Economía Social ...» Ídem nota 2.

14. Informe sobre economía social del Parlamento Europeo (2008/2250 (INI)).

15. En numerosos documentos, la Comisión hace referencia al sector de la «economía social» (COM(2004) 18 final «sobre fomento de las cooperativas en Europa» (punto 4.3)).

16. Por ejemplo, en el Reino Unido existe el Office of the Third Sector (OTS) que agrupa en su ámbito de actuación a los «voluntary and community groups, social enterprises, charities, cooperatives and mutuals», es decir, el mismo conjunto de empresas denominadas en este documento «empresas de economía social». El Office of the Third Sector (OTS) es un organismo público integrado en el Cabinet Office del Gobierno Británico (www.cabinetoffice.gov.uk).

17. Informe (2008/2250) (INI)). Ídem nota 13.

18. El SEC-1995 agrupa a las entidades con un comportamiento económico análogo (SEC-1995,2.18) en cinco grandes sectores institucionales (SEC-1995, Tabla 2.2): a) Sociedades no financieras (S.11); b) Instituciones financieras (S.12); c) Administraciones Públicas (S.13); d) Hogares (S.14) y e) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.15). El SEC-1995 también clasifica a las diferentes entidades productivas en ramas de actividad, incluyendo en cada una de ellas a las que desarrollan una actividad económica idéntica o similar (SEC-1995,2.108), estableciendo cinco diferentes niveles de desagregación en 60, 31, 17, 6 y 3 ramas de actividad. (SEC-1995, Anexo IV).

19. Informe (2008/2250 (INI)). Ídem nota 13.

20. Las EES proporcionan empleo directo a tiempo completo a once millones de europeos y están presentes en todas las ramas de actividad económica, bien en sectores altamente competitivos como el financiero o el agrícola, bien en sectores innovadores como los servicios a las personas o las energías renovables.

21. CESE (2008): «La Economía Social en ...» Ídem nota 2.

22. COM(2004) 18 final, punto 4.3 (Fomento de las cooperativas en Europa).

específico que desempeñar como parte integral del modelo europeo de sociedad, puesto que mediante sus actividades de provisión de servicios cumplen y promueven los principios alta calidad, seguridad y precios asequibles, igualdad de trato, acceso universal y derechos de los usuarios. En este sentido, también tienen un efecto directo e indirecto en el empleo, puesto que una buena infraestructura atrae la inversión privada. Las empresas de interés general son una parte esencial de la economía, que representa entre el 25 y el 40 % de la mano de obra y que contribuye con más del 30 % del PIB.

3.4 *Las empresas sociales* (cooperativas sociales y otras empresas similares de muy diverso estatuto jurídico) desarrollan su actividad en el ámbito de la prestación de servicios como la sanidad, el medio ambiente, los servicios sociales y la educación. Frecuentemente incorporan a sus procesos productivos importantes recursos en forma de aportaciones altruistas actuando como eficaces instrumentos de las políticas públicas de bienestar social. Asimismo, hay un importante numero de «Empresas Sociales de Integración Laboral» (WISE, por sus siglas en inglés) que buscan la creación de empleo y la integración en el mercado de trabajo de personas desfavorecidas.

3.5 *La empresa social* no siempre forma una categoría legal, sino que incluye empresas que tienen beneficios sociales y económicos en sectores muy diversos. Su categorización no es sencilla. Lo esencial debería ser cómo apoyar a estos emprendedores con entornos que les permitan desarrollar su capacidad de innovación, una habilidad que en tiempos de crisis económica resulta especialmente valiosa[23]. La Comisión Europea debería considerar seriamente la posibilidad de diseñar una política para empresas sociales [24].

3.6 Siempre y cuando demuestren su representatividad, las organizaciones más representativas de las diversas formas de empresa deberían ser involucradas en el diálogo social.

3.6.1 Algunos de los sectores citados ya han participado en el diálogo sectorial, como por ejemplo la Asociación de Cooperativas de Seguros y Mutualidades Europeas (AMICE) en el sector de seguros, y algunos miembros de *Cooperatives Europe*[25], como la Asociación Europea de Bancos Cooperativos (EACB) y la Agrupación Europea de Cajas de Ahorro (ESBG), en el sector bancario[26].

4. Marco jurídico y reglamentario de la diversidad de formas de empresa

4.1 Introducción: Diversidad de formas de empresa y mercado interior

4.1.1 La configuración y el desarrollo del mercado interior no pueden subordinar los fines a los medios, por lo que deberá establecerse un marco jurídico y reglamentario adaptado a las características de los diferente agentes económicos que actúan en el mercado, a fin de que se logre la igualdad de condiciones entre todas las diferentes formas de empresa teniendo en cuenta las características de cada una de ellas. En la actualidad, este marco está destinado por lo general a grandes empresas que cotizan en bolsa, y su aplicación a todos los tipos de empresas crea obstáculos para las empresas más pequeñas. Este marco debería alentar de forma efectiva a los operadores a comportarse de manera eficiente, lo que contribuirá a hacer el sistema más justo. Este marco tiene su expresión en los ámbitos del derecho de sociedades, derecho contable, de la competencia, fiscal, armonización estadística y política de empresa.

4.2 Derecho de sociedades

23. «It's time for social entreprise to realise its potential» por TRIMBLE, Robert, en la revista The Bridge, p.17 www.ipt.org.uk.

24. Dictamen del CESE «Espíritu de empresa y Estrategia de Lisboa»,DO

C 44 de 16.2.2008, pág. 84.

25. Cabe señalar que algunas organizaciones, como Cooperatives Europe, están llevando a cabo un estudio sobre su representatividad para participar en las consultas sobre diálogo social.

26. Dictámenes del CESE en el DO C 182 de 4.8.2009, pág. 71 y en el DO C 228 de 22.9.2009, págs. 149–154.

4.2.1 Las sociedades anónimas europeas y las cooperativas tienen sus propios estatutos jurídicos, pero otras modalidades de empresa se enfrentan a diversas barreras en el mercado interior debido a la inexistencia de estatutos jurídicos europeos. Las PYME europeas están necesitadas de una legislación europea ágil y flexible que les facilite el desarrollo de sus actividades transfronterizas. Asimismo, las cooperativas requieren una simplificación del reglamento de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), cuya complejidad ralentiza su desarrollo.

4.2.2 La ausencia de cobertura jurídica impide a las fundaciones que operan a nivel europeo actuar en condiciones de igualdad con otras formas jurídicas de empresa. Por ello, el CESE se felicita por los resultados del estudio de viabilidad para un Estatuto de la Fundación Europea y solicita a la Comisión que concluya la evaluación de impacto a comienzos de 2010 presentando una propuesta de reglamento que permita a las fundaciones de ámbito europeo operar en pie de igualdad en el mercado interior[27].

4.2.3 Por similares razones, el CESE solicita a la Comisión que inicie los trabajos para aprobar sendos estatutos europeos de las asociaciones y de las mutualidades.

4.3 Derecho contable

4.3.1 Las normas contables deben adaptarse a las distintas formas de empresa. Otro ejemplo de limitaciones ligadas al derecho contable son los obstáculos que está planteando la introducción del nuevo sistema contable internacional (*International Accounting System*, IAS) en las empresas que cotizan en bolsa. El proceso de armonización contable europea no puede hacerse a costa de eliminar las características esenciales de alguna de las diferentes clases de empresas existentes en la Unión Europea.

4.3.2 En el caso concreto de las cooperativas se hace patente la dificultad de articular un concepto de *fondo propio* de aplicación general e indiscriminada, que podría tener consecuencias negativas y destructoras de la diversidad empresarial. El CESE exhorta a la Comisión a respetar la identidad de las cooperativas en materia contable de modo que el capital social de los socios sea considerado como fondo propio de las cooperativas y no como *deuda* mientras que el socio no se convierta en acreedor al darse de baja[28].

4.3.3 El Comité está de acuerdo con la recomendación del *«Grupo de Larosière»*[29] que sostiene que las normas no debería estar sesgadas según los modelos de negocio, promover el comportamiento procíclico o desalentar la inversión a largo plazo y la estabilidad de las empresas.

4.4 Derecho de la competencia

4.4.1 Cada forma jurídica de empresa debe poder desarrollar sus actividades conservando sus peculiaridades operativas. Así, el derecho de la competencia no puede basarse en un modelo único y uniforme de espíritu emprendedor, y debe evitar comportamientos discriminatorios y valorizar las buenas prácticas a nivel nacional. No se trata de establecer privilegios sino de promover un derecho de la competencia equitativo, por lo que el CESE, de conformidad con anteriores dictámenes[30], propugna que las normas de la competencia y las de carácter tributario regulen compensatoriamente los costes diferenciales de las empresas que no estén vinculados a procesos productivos ineficientes, sino a la internalización de costes sociales.

4.4.2 Algunos instrumentos de las políticas de competencia no son neutrales respecto a las diversas formas de empresa por lo que, como

27. El estudio de viabilidad de la Comisión sobre el Estatuto de Fundación Europea estima que los costos de dichas barreras a las actividades transfronterizas de las fundaciones europeas oscila entre 90 y 100 millones de euros por año.

28. Así ha sido reclamado por la reciente literatura contable: CIRIEC- España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n o 58, agosto 2007 (www.ciriec.es), «Clasificación del capital social de la sociedad cooperativa: una visión crítica», B. Fernández-Feijóo y M. J. Cabaleiro.

29. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la supervisión financiera en la Unión Europea, febrero de 2009, (http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf ; recomendación 4, página 21).

30. DO C 234 de 22.9.2005 y COM(2004) 18 final.

ha señalado el CESE, «*el sector de la economía social requiere soluciones a la medida en lo referente a la fiscalidad, contratación y normas de la competencia*»[31]. Así, por ejemplo, el apoyo público a actividades privadas de inversión en I+D+i para aumentar la competitividad del sistema productivo favorece principalmente a las empresas de gran dimensión, que son las que más desarrollan estas actividades. También la mayor libertad de elección de las grandes empresas en la localización de las plantas productivas les permite aprovechar mejor las inversiones públicas en infraestructuras de apoyo al sector productivo. En ocasiones, esto genera desventajas competitivas a las empresas de pequeño tamaño, con pocas posibilidades reales de elegir entre diferentes alternativas de localización empresarial.

4.4.3 Las normas de la competencia también deben contemplar la singularidad de las empresas sociales, que producen y distribuyen bienes y servicios de no-mercado a personas excluidas o en riesgo de exclusión social, y que incorporan a sus procesos productivos importantes recursos de carácter altruista.

4.5 Derecho fiscal

4.5.1 Con frecuencia, en algunos Estados miembros, algunas empresas se ven sometidas a situaciones de desigualdad competitiva por causas ajenas a los procesos productivos propiamente dichos y que se derivan de fallos de asignación del mercado[32], es decir, de situaciones en las que el propio mercado es ineficiente, asignando los recursos de manera no óptima. El CESE apoya el proyecto de directiva sobre tasas reducidas de IVA para los servicios suministrados a nivel local que conciernen fundamentalmente a las PYME y reitera su conformidad con el principio formulado por la Comisión según el cual las ventajas fiscales concedidas a un tipo de sociedad deben ser proporcionales a las limitaciones jurídicas o al valor social añadido inherente a dicha fórmula[33]. En consecuencia, el CESE pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de conceder medidas compensatorias a las empresas sobre la base de su utilidad pública comprobada o de su contribución constatada al desarrollo regional[34]. En especial, se deberían buscar soluciones para el problema que se genera a las organizaciones no lucrativas ante la imposibilidad de que recuperen el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de sus actividades ligadas al interés general, en aquellos países en que esta situación suponga un problema. Igualmente cabe mencionar los regímenes fiscales que se aplican a las ONG que realizan actividades económicas no vinculadas a fines de interés general.

4.5.2 En la actualidad, las PYME tienen pocas oportunidades reales para invertir en I+D+i, que es un elemento importante para la eficiencia en la producción y para mantener la competitividad empresarial. Esto crea una situación de desventaja competitiva que debe ser equilibrada mediante ventajas fiscales que premien la inversión de las PYME en este campo. Las recomendaciones incluyen una rica gama de medidas compensatorias, entre las que podrían mencionarse, según cada Estado, desgravaciones fiscales extraordinarias para inversiones múltiples en I+D, reembolsos en caso de ausencia de

31. DO C 117 de 26.4.2000, pág. 52 (punto 8.3.1). También DO C 117 de 26.4.2000, página 57. La Comisión Europea distingue entre «ayudas estatales» y «medidas generales», situando entre éstas últimas «los incentivos fiscales destinados a las inversiones medio ambientales, en investigación y desarrollo o formación [que] sólo favorecen a las empresas que llevan a cabo tales inversiones, sin que por ello sean necesariamente constitutivos de ayudas estatales» (Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384/30 de 10.12.1998, punto 14). En toda la Unión Europea las grandes empresas son las que mas desarrollan actividades de I+D; por ejemplo en España el 27,6 % del total de grandes empresas realizan I+D, mientras que entre las empresas de menos de 250 empleados sólo el 5,7 % de las mismas realizan I+D según datos del año 2007 www.ine.es.

32. Comunicación de la Comisión COM(2008) 394 final. Ídem nota 8

33. COM(2004) 18 final.

34. Dictamen del CESE sobre el COM (2004) 18 final (DO C 234 de 22.9.2005, página 1, punto 4.2.3).

beneficios y reducciones de las cargas sociales. Habida cuenta del papel estratégico que desempeñan las PYME en la economía comunitaria, el CESE recomienda que cada Estado miembro utilice una combinación óptima de medidas compensatorias para facilitar la supervivencia y el crecimiento de las PYME en su economía. Con diferencia, el impacto más importante que tienen estos programas es la manera en que pueden respaldar el desarrollo de PYME especializadas en I+D durante los primeros años de su existencia

4.6 Armonización estadística

4.6.1 Las magnitudes agregadas de las diferentes modalidades de empresa son elaboradas en los Estados miembros y en la UE siguiendo criterios homologados por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-1995). Sin embargo, las estadísticas económicas sobre las cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y otras empresas similares son muy limitadas y están elaboradas con criterios heterogéneos, lo que dificulta la realización de análisis y la evaluación de su contribución a los grandes objetivos macroeconómicos. Por esta razón, y por encargo de la Comisión, se ha redactado un «*Manual*»[35] que permitirá construir registros estadísticos nacionales de estas empresas sobre la base de criterios homogéneos en términos de contabilidad nacional. El CESE solicita que se utilicen estos nuevos instrumentos de análisis para elaborar estadísticas armonizadas de las empresas citadas en todos los países de la Unión Europea y para implementar políticas más eficaces respecto de las mismas.

También es aconsejable establecer la metodología que permita impulsar en el ámbito europeo un observatorio de las microempresas.

Bruselas, 1 de octubre de 2009.

El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Mario SEPI

35. «Manual for drawing…», ídem nota 1.

ÍNDICE ACUMULADO
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa

Nº 1 – 1990

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Entidades de Economía Social del año 1988. 3

Nº 2 – 1991

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre entidades de Economía Social. 1980-1989. 5
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social.1989. 57
Reseña Legislativa sobre entidades de Economía Social (Enero 1989 - Junio 1990). 145

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Real Decreto 3 de Marzo de 1989 nº 225/1989. Seguridad Social. Incorporación de los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. (BOE 57 de 8 de marzo). Ref. Aranz. 510. 161
- Ley 26 de Mayo de 1989 nº 13/1989. Jefatura del Estado. Cooperativas de Crédito. Normas reguladoras. (BOE 129 de 31 de mayo). Ref. Aranz. 1025. 163
- Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas de Navarra. (BOE 244, 11 de octubre de 1989). 166
- Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades (BOE, nº 178 de 27 de julio). 169
- Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido d la Ley de Sociedades Anónimas. 169
- Real Decreto 1579/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (BOE, nº 313, de 30 de diciembre; corrección de errores en BOE, nº 8, de 8 de enero 1990). 169
- Real Decreto 1079/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueba la actualización del Régimen Jurídico de las Mutualidades de Previsión Social (BOE nº 214, de 7 de septiembre). 176
- Real Decreto-Ley 29 de Diciembre de 1989, nº 7/1989. Jefatura del Estado. Presupuestos del Estado. Medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria (BOE 313 de 30 de diciembre de 1989). Ref. Aranz. 2761 177

- Real Decreto 664/1990, de 25 de mayo, sobre cuotas participativas de las Cajas de Ahorro. (BOE 129, 30 de mayo 1990).. 177
- Real Decreto 22 de junio 1990 nº 825/1990. Ministerio de Sanidad y Consumo. Consumo. Regula el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones. (BOE nº 155 de 29 de junio de 1990). Ref. Aranz. 1326. 179

Nº 3 – 1992

COMENTARIOS
- Las Cooperativas agrarias y el campo de aplicación de la Seguridad Social, por Juan López Gandía 270
- Consecuencias jurídicas de la variación del coste final de la vivienda cooperativa, por Gemma Fajardo García 277
- "Los delitos societarios" en el Anteproyecto de Código Penal (con especial referencia a los administradores que falsearan las cuentas anuales u otros documentos) por Jesús Olavaria Iglesias. 283

NOTAS A LA JURISPRUDENCIA
- Nota a la sentencia del T. S. de 24 de enero de 1990, por Gemma Fajardo García. 43
- Nota a la sentencia del T. S. de 7 de noviembre de 1990, por Gemma Fajardo García. 49
- Nota a la sentencia del T. S. de 17 de abril de 1990, por Juan Antonio Esteban García 63
- Nota a la sentencia del T. S. de 29 de junio de 1989, por Juan Antonio Esteban García 70
- Nota a las sentencias del T. S. de 26 de marzo de 1990 y 10 de mayo de 1990, por Jesús Olavaria Iglesias 77

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1990 9
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía social 1990. 25
Reseña de Jurisprudencia de otros Tribunales sobre entidades de Economía Social de 1988 – 1990 137
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social julio 1990 – junio 1991 245

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
Reseña de las disposiciones de mayor interés por G. Fajardo, J. F. Juliá, J. Olavarría, M. Cubedo, J. Castaños y F. López Almenar 256

Nº 4 – 1993

COMENTARIOS
- Recientes reformas en el Derecho cooperativo italiano, por Renato Dabormida 162
- Ley francesa nº 92 de 13 de julio de 1992 relativa a la modernización de las empresas cooperativas, por Gemma Fajardo 171
- La Ley Marcora: la gestión en forma cooperativa de las empresas en crisis en Italia, por Simonetta Ronco 181

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social, por Jesús Olavarria y Gemma Fajardo. 14
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Socal (julio 1991 - febrero 1993), por Gemma Fajardo. 91

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Orden de 29 de julio de 1992. 116
- R. D. 1345/1992, de 6 de noviembre. 120
- Orden de 30 de septiembre de 1992 124
- R. D. 84/1993, de 22 de enero 127

Nº 5 – 1994

COMENTARIOS
- La regulación de las empresas de trabajo temporal según la Ley 14/1994, de 1 de junio, y su incidencia sobre el régimen jurídico de las cooperativas. Por Consuelo Chacartegui Jávega 386
- La transformación de la cooperativa en otras formas sociales, por José Luis Sánchez Moliner 396
- La responsabilidad del socio en la gestión económica de la cooperativa de viviendas desde la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por Gemma Fajardo García. 415

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre entidades de Economía Social, 1992, por Gemma Fajardo García. 7
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre entidades de Economía Social, 1992, por Gemma Fajardo y Jesús Olavarria. 28
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (marzo 1993 - agosto 1994), por Gemma Fajardo García. 197

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley Vasca 4/1993 de Cooperativas 234
- Reglamento del Registro vasco de cooperativas (D. 189/1994). 309
- Ley 14/1994 de Empresas de trabajo temporal 342
- Ley 12/1994 de Fundaciones del País Vasco 351
- Ley 9/1994 de Régimen fiscal de las cooperativas navarras 367

Nº 6 – 1995

COMENTARIOS
- Breve comentario del Título I de la Ley de Fundaciones. Por Remigio Beneyto Berenguer 253
- Algunas reflexiones en torno a la nueva Ley de Cooperativas Valencianas, por Mª Luisa Llobregat Hurtado 265
- La acreditación de las aportaciones sociales mediante anotaciones en cuenta en la Ley de Cooperativas e la Comunidad Valenciana, por Francisco González Castilla. 271
- Elecciones sindicales y empresas cooperativas, por Federico V. López Mora 291
- Fondo de garantía salarial y sociedades anónimas laborales, por Federico V. López Mora 301

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre entidades de Economía Social (enero 1993-marzo 1994). Por Alicia García Herrera 7
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre entidades de Economía Social 1993. Por Jesús Olavarria y Gemma Fajardo 43
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (septiembre 1994 - junio 1995), por Gemma Fajardo García. 119

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 30/1994 de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general 147
- Ley 8/1994 de cajas de ahorro. 175
- Ley 3/1995 de modificación de la Ley 11/1985 193
- Ley 2/1995 de sociedades de responsabilidad limitada (art. 93 y disposición adicional séptima). 229
- Ley 4/1995 de crédito cooperativo 231

Nº 7 – 1995

COMENTARIOS
- Las Mutualidades en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Por Luis Miguel Avalos Muñoz 209
- Los grupos cooperativos, por José Miguel Embid Irujo 221
- Notas críticas al Estatuto Jurídico Privado de las Sociedades Agrarias de Transformación, por Félix López de Medrano 233
- Notas sobre la elección de miembros del Consejo de Administración en las Cajas de Ahorros: A propósito de la resolución de la D.G.R.N. de 14 de enero de 1994, por María José Vañó Vañó 269
- Empresas públicas locales: De la iniciativa pública en la actividad económica a la arbitrariedad. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1993), por Javier Viciano Pastor. 283

NOTAS A LA JURISPRUDENCIA
- Nota a la sentencia del T. S. de 14 de octubre de 1994, por Mª José Vañó Vañó 58
- Nota a la sentencia del T. S. de 30 de mayo de 1995, por Carlos Salinas 63

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre entidades de Economía Social (enero 94- junio 95), por Gemma Fajardo y Jesús Olavarraría. 9
Reseña de Legislación sobre entidades de economía social (julio 1995 - diciembre 1995), por Gemma Fajardo García 93

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las Explotaciones Agrarias . . 109
- Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. 127
- Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 135

Nº 8 – 1996

COMENTARIOS
- La reforma de la legislación cooperativa valenciana: algunas aportaciones, dudas y problemas, por Narciso Paz Canalejo 111
- Reflexiones sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas laborales y las cooperativas de trabajo asociado. Por María Luisa Llobregat Hurtado. 123

- Mutualidades de Previsión Social vinculadas a Colegios Profesionales: incorporación obligatoria (comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de enero de 1996). Por Jesús Olavarria Iglesia 143
- Comentarios al Real Decreto 2028/1995 relativo a cooperativas de viviendas que soliciten financiación pública. Por Jaime Oñate Clemente de Diego 165
- Protección por desempleo y trabajo cooperativo, por Federico Vicente López Mora 171
- Seguridad social en las empresas de Economía Social, por Federico Vicente López Mora 175

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre entidades de Economía Social (julio 95-diciembre 95), por Gemma Fajardo y Jesús Olavarria 9
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (enero 1996 - septiembre 1996), por Gemma Fajardo García 45

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 4/1996, de 31 de mayo, de Cajas de ahorro de Galicia 63
- Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra 81

Nº 9 – 1998

COMENTARIOS
- La determinación y distribución de resultados del ejercicio económico en el anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Análisis crítico, por Manuel Paniagua Zurera 9
- Organizaciones de trabajo asociado y transmisión de empresas. Por Frederic López i Mora 31
- La cooperativización en la economía cubana. Su reglamentación jurídica, por Marta Moreno Cruz y Emilia Horta Herrera 43
- Estudio comparado de las estructuras financieras de las empresas cuyos titulares son sociedades cooperativas reguladas por las leyes españolas de cooperativas, general y autonómicas, así como del régimen jurídico de las principales masas patrimoniales que las integran, por Primitivo Borjabad Gonzalo 53

SEMINARIO. EL COOPERATIVISMO VALENCIANO: PERSPECTIVA JURÍDICA ACTUAL (15, 23 y 29 de octubre / 5, 13 y 19 de noviembre de 1997)
- Presentación por Manuel Serrano Richarte 104
- Tendencias de la legislación cooperativa en España, por Gemma Fajardo García 106
- Ámbito de aplicación de la legislación autonómica sobre cooperativas. Por Narciso Paz Canalejo 115

- Consideraciones generales sobre la reforma del régimen de los órganos sociales de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, por Vicente Cuñat Edo. 134
- Problemas actuales de la integración cooperativa, por José Miguel Embid Irujo. 149
- Cuestiones sobre el régimen económico de la cooperativa. Por Francisco Vicent Chuliá 167
- Mesa Redonda: Situación del cooperativismo valenciano 183

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social, enero 1996-junio 1997 215
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (octubre 1996 - mayo 1997) 261

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales 269
- Decreto Ley nº 7/1998, de 15 de enero. Reglamenta el régimen jurídico de las cooperativas de solidaridad social de Portugal 279
- Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid 283
- Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura 293
- Ley 6/1998, de 13 de mayo, de Regulación del Funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Cooperativas. 363

Nº 10 – 1999

COMENTARIOS
- Los recursos propios en las Cooperativas de Crédito, por Conrado Balaguer Escrig 9
- Algunos comentarios sobre la relación entre el Drecho de defensa de la competencia y el Derecho de Cooperativas, por José María Paz Arias 25
- Propiedad horizontal en régimen cooperativo, por Iván Jesús Trujillo Díez 37
- La reforma de la legislación cooperativa estatal, por Gemma Fajardo García 45
- Jornadas. Mutualidades de Previsión Social (23 de noviembre de 1998) 79

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Julio 1997 - Enero 1999 111
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (junio 1997 - diciembre 1998) 195

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Decreto Legislativo 1/1998, de 23 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 211

- Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia 257
- Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón 319
- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 359
- Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales. 393
- Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas. 399

LEGISLACIÓN EXTRANJERA
- Lei 51/1996, de 7 de septiembre. Código Cooperativo Portugués. 455

Nº 11 – 2000

COMENTARIOS
- Análisis de la reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio de cooperativas de Euskadi (Ley 1/2000, de 29 de junio), por Santiago Merino Hernández. 9
- Grupos paritarios de cooperativas de crédito y prácticas restrictivas de la competencia. A propósito del Grupo Caja Rural, por Francisco González Castilla 25
- Las cooperativas de segundo grado en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, por Ángeles Cuenca García. 69
- Xornadas de Estudio sobre a Lei de Cooperativas de Galicia, por Alfredo Romero Gallardo 119
- El orden jurídico-constitucional del cooperativismo portugués, por Rui Namorado 135

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Enero 1999-Abril 2000 151
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (enero 1999 - abril 2000) 183

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 197
- Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid 273
- Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos y requisitos relativos a las sociedades cooperativas de utilidad pública 339
- Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las Cooperativas de Iniciativa Social 345
- Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía. 347
- Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia 389
- Ley 7/2000, de 29 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad Valenciana 415
- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 425

Nº 12 – 2001

COMENTARIOS
- La cooperativa mixta: un tipo societario, por Juan Grima Ferrada 9
- Análisis de la naturaleza y del régimen jurídico de organización y funcionamiento del Consejo Gallego de Cooperativas, por Julio costas Comesaña 21
- La prescripción de las obligaciones entre la cooperativa y sus socios y la naturaleza no mercantil de su relación, por Gemma Fajardo García 37
- Tratamiento fiscal de las cooperativas de crédito, por Mª Pilar Alguacil Marí 51
- La sociedad cooperativa de pequeño tamaño: ¿es una verdadera forma simplificada de sociedad cooperativa?, por Renato Dabormida 85

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre entidades de Economía Social. Marzo 1994 – Diciembre 2000 109
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Socia. Mayo 2000 – diciembre 2000 127
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (abril 2000 - diciembre 2000) 193

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi 211
- Ley 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad Autónoma de Madrid 221
- Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de Junio, de Cajas de Ahorro 237
- Ley 4/2000, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las Cajas de Ahorros en Aragón 269
- Real Decreto-Ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte 277
- Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, por el que se adaptan determinadas disposiciones de Seguridad Social para su aplicación a las sociedades cooperativas 279
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 283
- Decreto 245/2000, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación Cooperativos de Extremadura 291

Nº 13 – 2002

COMENTARIOS
- El futuro de la legislación cooperativa, por Francisco Vicent Chuliá 9
- Beneficios fiscales aplicables a las cooperativas en el impuesto sobre Sociedades, por Marta Montero Simó 49
- Los procesos de concentración y de integración cooperativa y su tributación: especial referencia a las fusiones y a la creación de grupos cooperativos. Por Purificación Peris García 69
- El órgano de administración en las sociedades laborales, por Josefina Boquera Matarredona 111
- Reforma del derecho societario y fines cooperativistas, por Emanuele Cusa 125

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre entidades de Economía Social 141
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Enero 2001 – marzo 2002 151
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (enero 2001 - marzo 2002) 243

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja 263
- Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León 323
- Ley 18/2002, de 5 de julio, de Cooperativas de la Cataluña 385
- Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo 441
- Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas 461
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 475
- Ley 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones de Cataluña 493
- Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y león 507

Nº 14 – 2003

COMENTARIOS
- Reflexiones en torno a la nueva Ley de Cooperativas de Cataluña, por Cristina R. Grau López 9
- Novedades de la Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, por Mª José Senent Vidal 31
- La Sociedad Cooperativa Europea, por Francisco Vicent Chuliá 51
- El arbitraje cooperativo. El caso valenciano, por Jaime Martí Miravalls 83
- Tratamiento fiscal de las cooperativas a la luz del régimen europeo de Ayudas de Estado, por Mª Pilar Alguacil Marí 131

- Ley Orgánica del Derecho de Asociación: Aspectos sociales y económicos, por José Luis Argudo Périz 183

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre entidades de Economía Social. Enero 2002 – Enero 2003 205
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Abril 2002 – Julio 2003 209
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (abril 2002 - marzo 2003) 323

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha 339
- Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas 407
- Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Illes Balears 413
- Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 473
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 535
- Decreto 129/2002, de 24 de septiembre, que regula el funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 555
- Reglamento (CE) 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) 565
- Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta la implicación de los trabajadores 593

Nº 15 – 2004

COMENTARIOS
- Insolvencia de empresas de Economía Social y del Tercer Sector: Soluciones extraordinarias de convenio concursal, por Juan Ignacio Font Galán, Luis Mª Miranda Serrano, Javier Pagador López, Pedro José Vela Torres. 9
- Denominación, domicilio, impugnación de acuerdos y derecho de suscripción preferente en las sociedades laborales, por Josefina Boquera Matarredona. 29
- Transmisión de acciones y participaciones en las sociedades laborales, por Daniel Rodríguez Ruiz de Villa 57
- Las cooperativas como empresas de inserción social, por Mª José Senent Vidal 109
- La Sociedad Cooperativa Europea y su adecuación a los principios de la ACI, por Pablo Rodríguez Abelenda. 129
- Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico, por Emanuele Cusa 171

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Julio 2003 – Mayo 2004 191
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (abril 2003 - mayo 2004) 247

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 263
- Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros 275
- Ley 7/2003, de 26 de marzo, de Inserción Sociolaboral de La Rioja 283
- Ley 10/2003, de 13 de junio, de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña 293
- Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas catalanas 315
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Fomento de las Cooperativas en Europa 319

Nº 16 – 2005

COMENTARIOS
- La masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas, por Gemma Fajardo García 9
- La representación de las sociedades cooperativas en la Ley Andaluza, por Manuel Paniagua Zurera 55
- El reglamento de régimen interno de la cooperativa: “instrucciones de uso”, por Mª José Senent Vidal 69
- Convenio arbitral y conflictos cooperativos. Por Jaime Martí Miravalls 81
- El principio de educación, formación e información como pilar básico del concepto de cooperativa, por José M. Corberá Martinez 101
- Apuntes sobre la pertinencia o necesidad de un derecho solidario, por Dante Cracogna 131

COMENTARIOS Y NOTAS DE JURISPRUDENCIA
- Externalización productiva, cooperativas de trabajo asociado y fraude de ley. (STS 12-9-2004). Por Frederic López i Mora 227
- Establecimiento en Reglamento de Régimen interior de Cooperativa como causa de baja obligatoria de los socios de la no prestación de los servicios debidos, (STS 1-6-2004). Por Mª José Senent Vidal 234

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Junio 2004 – diciembre 2004. Por Jesús Olavarria, Gemma Fajardo, Rocio Martí, Frederic López y Mª José Senent.. 149
Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social (junio 2004 - julio 2005), por Gemma Fajardo 241

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Decreto 104/2004, de 23 de septiembre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo de Castilla y León 269
- Decreto 125/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de Castilla y León 275
- Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi . . 281
- Decreto 248/2004, de 14 de octubre, de Galicia por el que se regulan los procedimientos de conciliación y arbitraje cooperativa 313
- Decreto 83/2005, de 22 abril, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan las Cooperativas de Crédito de la Comunidad Valenciana. 321
- Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia 331
- Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorro de La Rioja 355

Nº 17 – 2006

COMENTARIOS
- El encuadramiento jurídico de la economía social - introducción al caso portugués. Por Rui Namorado 9
- La fusión de cooperativas en la legislación española. Por I. Gemma Fajardo García. 35
- Marco jurídico de la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España. Por Ana Lambea Rueda 85
- Algunos problemas de nulidad y eficacia del convenio arbitral cooperativo. Por José Luis Argudo Périz 113
- Régimen jurídico de los nuevos tipos “cooperativos” de Venezuela. Por Alberto García Müller 131

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre entidades de Economía Social. Enero 2005 - enero 2006. Por Isabel Rodríguez Martínez 143

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Enero 2005 - diciembre 2005. Por Jesús Olavarría, Gemma Fajardo Rocío Martí y Consuelo Alcover. 163

COMENTARIOS Y NOTAS DE JURISPRUDENCIA
- Tratamiento tributario de las Cajas de Ahorro y principio de igualdad tributaria. Por María Pilar Alguacil Marí. 227
- El arbitraje en las sociedades cooperativas. Por Santiago Merino Hernández. 230
- Sector público, descentralización productiva y cooperativas de trabajo asociado como empresas "pantalla". Por Frederic López i Mora. 234

Reseña de legislación sobre entidades de Economía Social. Por Gemma Fajardo. 239

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley Foral 5/2006, de 11 de abril, de modificación de la Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra, para la adición de la regulación de las cooperativas de iniciativa social 279
- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal 283
- Decreto 72/2006, de 30 de mayo, por el que se establecen los procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación, en el ámbito de la Economía Social de Castilla-La Mancha. 307
- Decreto 50/2006, de 23 de marzo, de modificación del Decreto 261/2002, de 30 de julio, por el que se aprueban las normas reguladoras de las cofradías de pescadores y sus federaciones en Galicia 317

Nº 18 – 2007

COMENTARIOS
- La responsabilidad del órgano de administración de las sociedades cooperativas y su necesaria incardinación en el moderno derecho de sociedades. Por Carmen Pastor Sempere 9
- La aplicación del apartado quinto del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a las Sociedades Cooperativas. Por Manuel José Vázquez Pena. 37
- El Derecho de la Economía Social: entre la Constitución y el mercado, la equidad y la eficiencia. Por Alfonso Cano López. 53
- La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Por María Burzaco Samper. 73
- Responsabilidad por no promoción de la disolución de los miembros del consejo rector. Por Jorge Moya Ballester 107
- Retos y oportunidades de la globalización para las cooperativas y el marco legal cooperativo. Por Hagen Henrÿ 123

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Enero 2006 - junio 2005. Por Jesús Olavarría 139

Reseña de legislación sobre entidades de Economía Social. Por Gemma Fajardo 163

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS PUBLICADAS
- Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas 179
- Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia 205
- Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra. 273
- Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi 307
- Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura 311
- Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana 319
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo 327

Nº 19 – 2008

COMENTARIOS
- Marco jurídico de las empresas de economía social: dificultades y alternativas en la configuración de un estatuto jurídico para las entidades de economía social. Por Luis Ángel Sánchez Pachón 9
- Bases jurídicas de las políticas públicas sobre cooperativas. Por Alberto García Müller 39
- Algunas consideraciones sobre las cooperativas de iniciativa social en el marco del fomento de empleo y la inserción laboral. Una perspectiva jurídico-económica. Por Amalia Rodríguez González y Ana Ortega Álvarez 55
- Incentivos fiscales a cooperativas y entidades sin fines lucrativos. ¿Paradigma de las políticas de promoción de la responsabilidad social de las organizaciones? Por Mercedes Ruiz Garijo 79
- Métodos de resolución extrajudicial de conflictos en las sociedades cooperativas de Galicia. Por Pablo Fernández Carballo-Calero y Christian Herrera Petrus 99

SIMPOSIO CONFESAL: PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE 1997 DE SOCIEDADES LABORALES
- Presentación. Por Gemma Fajardo García 125
- Texto integrado de la Ley vigente con las reformas propuestas 127

Aspectos societarios
- Aspectos societarios de la reforma de la Ley de Sociedades Laborales. Por Gemma Fajardo García 141
- Algunas reflexiones tópicas al hilo de una singular y necesaria propuesta de reforma. Por Alfonso Cano López. 159
- Algunos aspectos societarios de la propuesta de reforma de la Ley de Sociedades Laborales presentada por CONFESAL. Por Jesús Olavarría Iglesia. 173
- Propuesta de reforma de la Ley de 1997 de Sociedades Laborales – CONFESAL. Problemas societarios. Por Juan Carlos Sáenz García De Albizu 179

Aspectos tributarios
- Reforma de la tributación de las sociedades laborales. Por Mª Pilar Alguacil Marí. 189
- La reforma de los preceptos tributarios de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales. Por Iñigo Barberena Belzunce 217
- Algunas reflexiones a la propuesta de reforma de la Ley de Sociedades Laborales 4/1997, en materia fiscal. Por Por José Manuel de Luis Esteban. 223
- Sociedades laborales: problemas actuales y justificación científica de una fiscalidad adecuada. Por Rafael Calvo Ortega 237

Aspectos laborales y de la Seguridad Social
- Las sociedades laborales desde el derecho del trabajo. Cuestiones centrales y propuestas de reforma. Por Juan Lopez Gandía 251
- Sobre la reforma de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales. Por Frederic López i Mora 263
- Exposición y análisis sobre la propuesta de reforma de la ley en los aspectos laborales y de encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social. Por José Luis Goñi Sein 291
- Aspectos laborales de la propuesta de reforma de la Ley de Sociedades Laborales de CONFESAL. Por Maravillas Espín Sáez 309

NOTAS Y COMENTARIOS A LA JURISPRUDENCIA
- Impugnación de asamblea general de cooperativa por defectos en su convocatoria (STS 12 de marzo de 2007). Por Mª José Senent Vidal 334
- Impugnación de acuerdos de asamblea general y Derecho de información del cooperativista (STS 28 de marzo de 2007). Por Mª José Senent Vidal 340
- El IVA de las subvenciones del FEOGA a las cooperativas forrajeras (STS 12 de junio de 2007). Por María Pilar Bonet Sánchez 344

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Julio 2006 - junio 2007. Por Jesús Olavarría Iglesia, Gemma Fajardo García, Rocío Martí Lacalle y Consuelo Alcover 315

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Por Gemma Fajardo 365

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS
- Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. (Extracto) Disposición adicional cuarta 391
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (Extracto) Disposición Adicional Sexta y Séptima 393
- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción (BOE 299, 14 de diciembre) 395
- Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi 409

Nº 20 – 2009

COMENTARIOS
- La legislación española sobre cooperativas y sociedades laborales: ¿una respuesta adecuada a las necesidades del sector? Por Rosalía Alfonso Sánchez 9
- La progresiva diversificación del objeto social de las cooperativas de viviendas. Por Manuel Botana Agra 43
- La estructura orgánica de la sociedad cooperativa y el reto de la modernidad corporativa. Por Carlos Vargas Vasserot 59
- Notas en torno al régimen jurídico de responsabilidad civil de los administradores de cooperativas. Por Luis Pedro Gallego Sevilla 83
- Las mutualidades de previsión social como fórmula alternativa dentro del IRPF a los planes de pensiones de los sistemas asociado e individual. Por Juan Calvo Vérgez 115
- Razones que justifican una fiscalidad específica de las Mutualidades de Previsión Social. Por M.ª Consuelo Fuster Asencio 149
- Nueva versión de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina. Por Dante Cracogna 183
- Los principios cooperativos en la legislación chilena. Por Jaime Alcalde Silva 201

Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. Julio 2007 - junio 2008. Por Gemma Fajardo García, Jesús Olavarría Iglesia, Rocío Martí Lacalle y Consuelo Alcover 293

NOTAS Y COMENTARIOS A LA JURISPRUDENCIA
- El pago único de la prestación por desempleo para la participación en sociedades laborales y cooperativas. Por Vanessa Martí Moya y Luis Millán Alventosa 307
- La no deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de las dotaciones efectuadas a fondos internos, como forma que instrumentaliza compromisos por pensiones. Por M.ª Consuelo Fuster Asencio 349

Reseña de legislación sobre entidades de Economía Social (Mayo 2008 - Junio 2009). Por Gemma Fajardo 361

DISPOSICIONES DE MAYOR INTERÉS
- Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana 397
- Ley 9/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de modificación de la Ley 98/1998, de 9 de diciembre de 1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 417

DOCUMENTACIÓN
- Informe sobre Economía Social (Informe Toia). Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (26-1-2009) 435
- Decisión de la Comisión Europea relativa a las medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible (n° C 22/2001) 449
- Anexos al Informe para la elaboración de una Ley de Fomento de la Economía Social. Por José Luís Monzón (Coordinador), Rafael Calvo Ortega, Rafael Chaves Ávila, Isabel Gemma Fajardo García, Fernando Valdés Dal-Re 485
- MERCOSUR. Estatuto de las cooperativas 509

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La revista ***CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*** es una revista jurídica de periodicidad anual, cuyo campo de estudio es el formado por las empresas y entidades que tienen como finalidad el servicio del interés general o social, más concretamente la economía social, integrada, principalmente, por las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones y asociaciones.

La Dirección de la revista ***CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*** examinará todos los artículos relacionados con el mencionado objeto de estudio que le sean remitidos. Los trabajos deberán ser inéditos y no estar presentados para su publicación en ningún otro medio. Se supone que todos los autores han dado su aprobación para que el manuscrito se presente a la revista.

Los originales serán sometidos al criterio de evaluadores externos anónimos (doble referee). Serán criterios de selección el nivel científico y la contribución de los mismos al intercambio de información entre el ámbito investigador y el de los profesionales de las empresas de la economía social. Los trabajos podrán ser aceptados, sujetos a revisiones menores o mayores, o rechazados. La decisión editorial será comunicada a los autores, indicando las razones para la aceptacion, revisión o rechazo del manuscrito. Los autores de los manuscritos aprobados para su publicación deberán ceder el copyright de la versión española del artículo y autorizar a la Revista para publicar el artículo en su página web y a incluirlo en diversas bases de datos científicas, conforme a la legalidad vigente.

Un ejemplar del artículo deberá ser remitido a:

CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa.

Campus Els Tarongers. Facultad de Economía, despacho 2P21, 46022 Valencia,y en formato electrónico a la dirección ana.m.martinez@uv.es

Normas de edición:

1. Los artículos estarán redactados en lengua española.

2. Su primera página deberá incluir:

- Título del artículo. Si el título es largo deberá contener un título principal que no excederá de los 40 caracteres y un título secundario.
- El/los nombre/s, dirección/es e institución a las que pertenecen el/los autor/es, y el máximo rango académico alcanzado por cada autor hasta la fecha, señalando, asimismo, la dirección a la que habrá de remitirse la respuesta del consejo de redacción.
- Un resumen de 100 a 150 palabras, en castellano, francés e inglés.
- Entre cuatro y ocho palabras clave o descriptivas.
- Entre tres y seis claves-descriptores alfanuméricos conforme al sistema de clasificación de Econlit http://www.econlit.org/subject_descriptors.html. Al menos una de ellas debe ser propia o próxima a la Economía Social.
- Sumario

3. El artículo, redactado con letra a tamaño 12 y en interlineado simple, tendrá una extensión de entre 15 y 30 páginas, incluidos textos, tablas y elementos gráficos, bibliografía y anexos. El autor entregará una copia en soporte informático (Microsoft Office o formato RTF).

4. La bibliografía del estudio, tanto a pie de página como al final del artículo se citará de la siguiente manera:

Monografía: Autor (Autores): *Título de la obra*, Editorial, Lugar, Año, página.

Ejemplo: Martín Bernal, J.M.: *Asociaciones y Fundaciones*, Civitas, Madrid, 2005, p. 46.

Artículo: Autor (Autores): "Nombre del Artículo", *Nombre de la revista o publicación*, Editorial, Lugar (en su caso), Número, Año, página.

Ejemplo: Fajardo García, I.G: "La masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas", *Ciriec. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa (o RJCiriec)*, nº 16, Noviembre, 2005, pp. 9-11.

La cita a pie de página podrá sustituirse por la indicación en el texto y entre paréntesis del autor, el año de su publicación (distinguiendo a, b, c,... si hay varias publicaciones del mismo autor) y eventualmente las páginas. Por ejemplo: (Botana, 2004:87).

EVALUADORES

El Consejo de Dirección de CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, desea agradecer la colaboración de los siguientes evaluadores:

ALFONSO SÁNCHEZ, Rosalía
ALGUACIL MARÍ, Pilar
ARGUDO PERIZ, José Luis
AVALOS MUÑOZ, Luis Miguel
BATALLER GRAU, Juan
BLASCO PELLICER, Carmen
BONET SÁNCHEZ, Pilar
CRACOGNA, Dante
CRUZ PADIAL, Ignacio
CUENCA GARCÍA, M. Ángeles
GADEA SOLER, Enrique
GUTIÉRREZ NIETO, Begoña
LAMBEA RUEDA, Ana
MARTÍ MIRAVALL, Jaume
MARTÍNEZ CHARTERINA, Alejandro
MERINO HERNÁNDEZ, Santiago
MILLÁN CALENTÍ, Rafael
MONTERO SIMÓ, Marta
MORENO RUIZ, Rafael
PANIAGUA ZURERA, Manuel
PASTOR SEMPERE, Carmen
PÉREZ DE URALDE, Chema
PERIS GARCÍA, Purificación
RODRIGO RUIZ, Marco Antonio
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Amalia
ROMERO CIVERA, Agustín
RUIZ GARIJO, Mercedes
SÁNCHEZ PACHÓN, Luis Ángel
SENENT VIDAL, Pepa
VALOR MARTÍNEZ, Carmen
VAÑÓ VAÑÓ, María José
VARGAS VASSEROT, Carlos

CIDEC

El **CIDEC** es el Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, Social y Cooperativa, de la Facultat d'Economia de la Universitat de València y de la asociación científica CIRIEC-España.

Desde 1989 ofrece información y asesoramiento a investigadores, estudiantes y otras personas interesadas en temas de Economía Social, en especial cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrarias, otras cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y asociacionismo, y en temas de empleo, servicios sociales y turismo rural. El CIDEC edita la revista de información *Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa* y colabora en todas las publicaciones de CIRIEC-España.

El CIDEC procesa, almacena e indexa en su BASE DE DATOS los artículos contenidos en las revistas, tanto nacionales como internacionales, que versan sobre Economía Social y Cooperativa y sobre Economía Pública existentes en su centro de documentación. Dispone de un *Servicio de Alerta* por correo electrónico.

Los investigadores pueden acceder a los contenidos de la base de datos contactando directamente con el CIDEC:

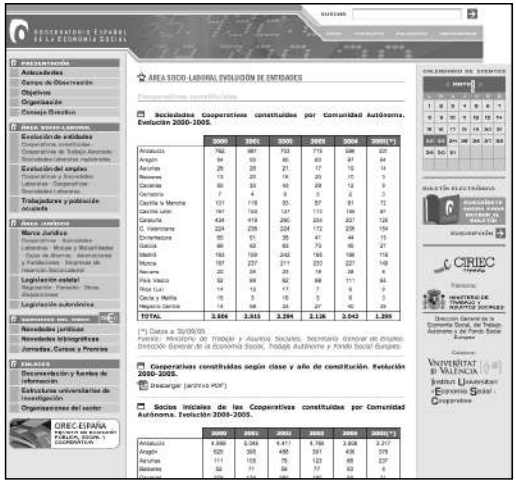
CIDEC
Campus Tarongers
Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Maians
46022 – VALENCIA (ESPAÑA)
Web site: http://www.uv.es/cidec
E-mail: cidec@uv.es
Telf. 96 382 87 44

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA SOCIAL

www.observatorioeconomiasocial.es

- Estadísticas de la economía social en España
- Área socio-laboral
- Área jurídica
- Noticias de actualidad
- Boletín informativo por e-mail
- Agenda de eventos
- Novedades legislativas
- Novedades bibliográficas
- Jornadas, cursos y premios





www.ciriec-revistajuridica.es